

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
IZTAPALAPA**

*El discurso político de las organizaciones empresariales.  
La transición mexicana desde la teoría de los sistemas.*

*Rafael Montesinos*

México, D. F., a 5 de marzo de 2007

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I. UN MODELO TEÓRICO-CONCEPTUAL PARA ANALIZAR LA TRANSICIÓN MEXICANA. UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA.....</b>	<b>23</b>
<b>1.1 Un modelo energético para tratar la política desde la teoría de los sistemas.....</b>	<b>25</b>
1.1.1 El análisis sistémico en Deutsch e Easton.....	30
1.1.2 La propuesta de Luhmann.....	42
1.1.3 La peculiaridad energética en el enfoque de Adams.....	50
1.1.4 Una síntesis sobre la discusión sistémica-energética.....	60
<b>1.2 La comunicación como elemento reproductor del poder.....</b>	<b>63</b>
1.2.1 El espacio público y la modernidad mediática.....	65
1.2.2 Comunicación política, ideología y discurso.....	68
1.2.3 La comunicación política y sus implicaciones.....	70
1.2.4 El discurso como vehículo de la ideología.....	74
1.2.5 La cultura política y la identidad de los actores sociales.....	79
1.2.6 La comunicación política desde la teoría de los sistemas.....	87
<b>1.3 Una interpretación energética de la transición.....</b>	<b>95</b>
1.3.1 La transición.....	95
1.3.2 Modernidad, transición y viceversa.....	105
1.3.3 El carácter energético de la transición.....	112
1.3.4 Cambios socio-históricos que permiten reconocer a la transición.....	122

**CAPÍTULO II. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EN LA GÉNESIS DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO..... 127**

<b>2.1</b>	<b>La revolución mexicana. Crisis y fuga de la energía social.....</b>	<b>128</b>
2.1.1	La política como generación de una energía regenerativa.....	140
2.1.2	La recomposición energética y el nuevo sistema político.....	148
2.1.3	Las estructuras equilibrantes de un sistema en consolidación.....	170
<b>2.2</b>	<b>La sinergia del sistema político mexicano.....</b>	<b>173</b>
2.2.1	La política como generación de una energía regenerativa.....	184
2.2.2	El reflujo del poder: la víspera de una nueva relación empresarios-estado.....	212

**CAPÍTULO III. EL PODER EMPRESARIAL Y EL PROCESO ENERGÉTICO DE LA TRANSICIÓN MEXICANA..... 219**

<b>3.1</b>	<b>El agotamiento del modelo asistencialista y la resistencia empresarial.....</b>	<b>223</b>
3.1.1.	El conflicto empresariado-Estado: El principio del fin.....	224
3.1.2.	La profundización de la crisis ¿último aliento del nacionalismo revolucionario? .....	243
<b>3.2</b>	<b>El nuevo orden estatal: viraje estructural y modernización nacionalismo revolucionario .....</b>	<b>256</b>
<b>3.2.1</b>	<b>El ascenso de la tecnocracia y la nueva racionalidad de Estado.....</b>	<b>258</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Del neoliberalismo al liberalismo social.....</b>	<b>276</b>
<b>3.2.3</b>	<b>La crisis del neoliberalismo: 1994, el año de la violencia.....</b>	<b>285</b>
<b>3.2.4</b>	<b>El último aliento de un gobierno “posrevolucionario”.....</b>	<b>290</b>
<b>3.3</b>	<b>Fox al poder.... Los empresarios también.....</b>	<b>299</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Los símbolos de la transición.....</b>	<b>300</b>
<b>3.3.2</b>	<b>Del conservadurismo al pragmatismo ideológico empresarial.....</b>	<b>304</b>
<b>3.3.3</b>	<b>Los retrocesos del cambio.....</b>	<b>309</b>
<b>3.3.4</b>	<b>Eficacia gubernamental o vocación por el poder.....</b>	<b>311</b>

<b>CAPÍTULO IV. EL DISCURSO POLÍTICO EMPRESARIAL: ORGANIZACIONES, LÍDERES Y EMPRESARIOS COMUNES.....</b>	<b>323</b>
<b>4.0 El sentido de la transición y su relación con el discurso.....</b>	<b>326</b>
<b>4.1 El discurso de las organizaciones empresariales.....</b>	<b>330</b>
4.1.1 El discurso empresarial, 1985.....	334
4.1.2 La reconstrucción del discurso de 1985.....	345
4.1.3 El discurso empresarial, 1993.....	364
4.1.4 El discurso empresarial, 1994.....	373
4.1.5 El discurso empresarial, 1995.....	383
4.1.6 El discurso empresarial, 1996.....	389
4.1.7 El discurso empresarial, 1997.....	399
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>413</b>
<b>ANEXO. Los otros discursos empresariales.....</b>	<b>425</b>
<b>1. El discurso de los líderes empresariales.....</b>	<b>425</b>
1.1 Juan Sánchez Navarro: el ideólogo empresarial.....	426
1.2 Manuel Espinosa Iglesias: un empresario de viejo cuño.....	442
1.3 Carlos Slim: el gran empresario.....	452
1.4 Jorge Ocejo, expresidente de COPARMEX.....	457
1.5 El Ingeniero Picard, presidente de CANACINTRA.....	468
<b>2. El discurso del propietario de medianas y pequeñas empresas.....</b>	<b>476</b>
2.1 Ramón: construyendo caminos para enfrentar la crisis.....	476
2.2 Yolanda: la alquimia y la vida.....	482
2.3 Aquiles: la historia de un guerrero.....	489
2.4 Armando: sobreviviendo a la ola globalizadora.....	494
2.5 Luis: tejiendo con los hilos del arte, la ciencia y los negocios.....	498
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>505</b>

*Para María Elena Carrera...  
La madre de todas mis batallas.*

## AGRADECIMIENTOS

Un trabajo como el que aquí se presenta, inevitablemente, obtuvo el apoyo de muchas personas que me nutrieron intelectual, afectiva o institucionalmente. Se trata de una larga lista de personas quienes en muchas ocasiones, sin saberlo, fueron sustanciales para imprimirme el ánimo requerido para superar las adversidades que enfrenta todo proyecto de investigación. Éste ocupó una parte considerable de mis últimos cinco años como profesor-investigador en las licenciaturas de ciencias políticas y sociología.

Valga reconocer, primero, la crítica y los esfuerzos tutorales de Roberto Varela (primer director del proyecto), Jorge Alonso (segundo director del proyecto) y Juan Castaingts (lector de la tesis de maestría), quienes generosamente se encargaron de guiar este proyecto en los primeros años de mis estudios en el Doctorado en Ciencias Antropológicas que ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Doblemente a Jorge Alonso quien desde que le conocí me alentó a desarrollar este proyecto de investigación, orientándome intelectualmente y brindándome su apoyo moral para recuperarme emocionalmente de algunas emboscadas que la vida me tendió en este periodo. El trabajo aquí presentado, finalmente, terminó con una estructura que él había vislumbrado desde el año 2002, desgraciadamente las concepciones ortodoxas de las ciencias antropológicas y la lentitud del monstruo burocrático retardaron la conclusión de este proyecto. Vaya mi reconocimiento a Jorge Alonso por su calidad humana y su humildad profesional con que ha formado a tantos antropólogos.

A mi último director de tesis doctoral, Carlos Alba Vega, investigador del Colegio de México, A.C., quien aceptó el reto de empujar este proyecto aún cuando estaba muy lejos de tener la forma con la que ahora se presenta. Toda mi consideración al profesionalismo y modestia con que este especialista en estudios sobre las empresas y los empresarios mexicanos, corrigió y enriqueció este material.

A los colegas del Posgrado en Ciencias Antropológicas quienes bajo la coordinación de Raúl Nieto, Ana María del Portal y Luis Reygadas, mantuvieron la puerta abierta para que este proyecto llegara a su etapa actual. Su apoyo fue definitivo para mantenerlo vivo ante los embates de recelosos guardianes del grial antropológico.

A Miguel Ángel Casillas, Alejandro Espinosa y Víctor Alarcón quienes además de su valiosa amistad me retroalimentaron intelectualmente. A los empresarios que generosamente me brindaron sus testimonios que ocupan una parte importante de la estructura de este libro. A mis colegas que con su entrega al quehacer académico sirvieron de ejemplo y aliento para no claudicar; lo mismo que a mis alumnos quienes con sus inquietudes me obligaron a afinar muchas de las ideas aquí vertidas.

A Luis H. Méndez Berrueta y a los compañeros de la revista *El Cotidiano* de la Unidad Azcapotzalco de nuestra universidad, proyecto editorial que me ha retado durante tantos años y difundido mis trabajos entre la comunidad académica de nuestro país y el mundo.

A Larissa Adler-Lomnitz quien con su amistad y sin pretenderlo, sirvió de aliento para llegar a esta etapa de mi proyecto de investigación. Su obra en general, y su libro *Simbolismo y ritual en la política mexicana*, en particular, me permitió recuperar la confianza sobre la pertinencia antropológica de este trabajo.

A mi mujer, Griselda Martínez, mis hijos Atonatiuh y Ricardo, a quienes debo todo mi agradecimiento por su paciencia y reiterado cariño que me alimentó emocionalmente todo el tiempo. Sin su presencia difícilmente hubiera superado los obstáculos naturales que enfrenta el quehacer académico... para ellos todo mi amor.

Por último, mi amplio reconocimiento al apoyo brindado por el Rector de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Óscar Monroy Hermosillo, quien sin regateo alguno hizo posible la expedita publicación de este libro.

*Rafael Montesinos*

Marzo, 2007.

## INTRODUCCIÓN

La “cultura” se crea a partir de nuestro constante esfuerzo por asociar, por relacionar esos modelos mentales con nuestra experiencia del mundo energético. Debemos recordar que esos significados, esas imágenes son información en el sistema nervioso....  
La “expansión” de la cultura no se produce a través de un “incremento” de los modelos mentales o de la información, sino mediante la incorporación de éstos en el proceso social energético....  
La cultura no reside en la separación de lo humano respecto de lo no humano, sino en la separación y recombinación de lo mental y lo energético en estructuras simbólicas unificadas.  
Esta unificación arbitraria es esencial para el funcionamiento de la cultura, y es en la debilidad de esa unificación donde residen el potencial y la dinámica del constante cambio cultural  
(Adams, 2001: 190-191).

El objetivo de esta tesis es construir un modelo de análisis que permita comprender cuál ha sido el papel político de las principales organizaciones empresariales en el periodo que se conoce como *transición mexicana*. El modelo que se ha elegido para ello gira en torno al planteamiento de la *teoría energética* que han manejado antropólogos como Richard N. Adams (1978, 1983, 2001), y que coincide la mayor parte de las veces con los planteamientos explícitos de la *teoría de los sistemas* que en un inicio creó Bertalanffy (1976), y desde la ciencia política han desarrollado Deutsch (1976, 1985) e Easton (1982,1989), así como Parsons (1988) y Luhmann (1991,1992) desde la sociología.

Se trata, entonces, de interpretar el sistema político desde la perspectiva energético/sistémica lo cual nos obligará a *definir la relación existente entre el sistema de toma de decisiones y las demandas de la sociedad mexicana*, específicamente, *las demandas que plantea al gobierno la representación formal de la clase empresarial* (sus organizaciones sectoriales) a partir de los discursos políticos que aparecen en los medios impresos con cobertura nacional, acción que constituye en esta investigación el objeto de

estudio, mismos que probarán la pertinencia interpretativa del modelo de análisis propuesto. Estas relaciones de intercambio entre las autoridades gubernamentales y la ciudadanía (*sistema-entorno*), serán captadas a través de la lógica de *entradas-salidas* que sustenta un *modelo de análisis energético*, y que desde la relación política que se pretende estudiar, explicará la capacidad del sistema político mexicano para generar *consensos* o provocar *disensos*, por lo tanto, de generar legitimidad o provocar un abierto proceso de deslegitimación. De tal forma que se destacará la lucha por el poder a la que se incorpora el sector empresarial, así como el deterioro de la credibilidad en la *burocracia política* que se incrustó en las estructuras de poder desde el inicio del periodo posrevolucionario.

En ese sentido, el *discurso político de las organizaciones empresariales* en el periodo de la transición mexicana, proyecta la construcción de nuevos escenarios políticos donde se pone en tela de juicio la hegemonía de la burocracia política. Los cambios de las estructuras del poder a los que alude el término transición, aparecen como nuevos escenarios (Balandier, 1994) en los que se observan los *rituales de la política moderna*, y que necesariamente adquieren forma, si y solo si, cuando *los medios de difusión masiva se han desarrollado tanto que están en condiciones de crear un nuevo espacio público* (Adler-Lomnitz, Salazar, Adler, 2004; Lardellier, 2003; Llobera, 1999; Augé, 1998).

Los principales ejes de análisis que motivan esta investigación son las siguientes:

- 1ª. El *discurso político de los actores político-sociales* permite reconocer su identidad, su posición ideológica, y por tanto, su relación en torno a las estructuras del poder. Sin discurso no hay política, pues precisamente éste constituye el único vehículo posible de comunicación de las ideologías. Por lo cual nos permite ubicar la transformación de uno de los aspectos más importantes de la *cultura política* del empresariado mexicano: *la forma de su participación en el espacio público*.
- 2ª. La *reproducción de los rituales de la política moderna* es prácticamente imposible sin los discursos de los diferentes actores políticos que aparecen en los medios de difusión masiva. En los rituales se evocan *símbolos* que una sociedad comparte, desde una perspectiva histórica donde se engarzan pasado-presente-futuro.
- 3ª. Los escenarios sobre los cuales se reproducen los *rituales modernos del poder* sólo son posibles a partir de la *redefinición que hacen los medios de difusión masiva del espacio*

*público*. De tal forma que el discurso con un real *significado político* es el que los actores logran colocar en los medios: televisión, prensa, radio o internet.

4ª. *El discurso político de las organizaciones empresariales* juega un papel fundamental en el proceso de la transición, ya sea, primero, *deslegitimando* la posición hegemónica de la burocracia política, segundo, *legitimando* el ascenso de la tecnocracia al poder.

En esta investigación entendemos por *ritual* la puesta en escena, relación espacio-tiempo, de un conjunto de símbolos cuyo sentido explica que los individuos de una comunidad compartan los mismos fines. Lo cual implica relaciones de poder, la reproducción y legitimación de un orden político en un trayecto temporal pasado-presente-futuro (Augé, 1994; Cohen, 1979; Balandier, 1969). Y a partir de ello, consideramos la reproducción de la política moderna requiere de los discursos e imágenes que dan forma al nuevo espacio público del cual se nutre el imaginario colectivo.

Entenderemos por *cultura*: el conjunto de representaciones, costumbres, valores, ideas, prácticas y expectativas que imprimen coherencia a los símbolos compartidos por una comunidad. De tal manera que los modelos mentales de los miembros de ésta operen de conformidad con un patrón más general respecto de una ideología dominante, de cuya participación individual deriva la conformación de una identidad que presupone el control de las relaciones internas y externas a la comunidad (Adams, 2001). Evidentemente, todos aquellos aspectos considerados anteriormente son determinantes para definir las características de un sistema político en concreto, así como cultura política que de ello emana.

*El papel político de los empresarios, como campo de estudio.*

Aunque todavía existan muy pocos trabajos de investigación sobre el tema de los empresarios mexicanos, actualmente se advierte una amplia gama de enfoques sobre este importante sector de la sociedad mexicana. Tal situación obedece, en parte, a que en ocasiones no se distingue claramente si el objeto de estudio que se proponen especialistas de diferentes disciplinas, corresponde a las empresas o a los empresarios. Esto es, si se trata de analizar la figura de la entidad reproductora del capital o si el interés radica en el propietario del capital como sujeto histórico; si el objeto de estudio lo constituye una

estructura administrativa que se fija un objetivo económico, o se trata del papel político, económico, y/o cultural, de un actor social.

De tal manera que si de antemano *definimos a la política como el elemento distintivo de los empresarios como objeto de estudio*, estaremos en condiciones de discriminar aspectos y particularidades de interés en esa aparente diversidad del tema. De ser ello posible, estaríamos despojándonos del peso que representan el tipo de trabajos provenientes de las ciencias de la gestión o administrativas, y de una parte significativa de los trabajos de investigación atribuibles a la economía, la sociología urbana, y las ciencias del desarrollo industrial, en la medida que destaca la problemática que impone el desarrollo económico regional, a su nivel internacional o local. Por su parte, trabajos provenientes de la antropología y la sociología del trabajo, abordan temas de la cultura empresarial, dimensionando su interpretación a partir de las imágenes etnográficas que permiten introducirnos en el mundo simbólico de los actores internos, o de aquellos que al considerar lo externo, ponen interés en el papel que juegan los trabajadores como actores políticos y en el cambio de las estructuras del poder.

A partir de un escenario mucho más definido en el terreno de la temática política, habrían de considerarse los trabajos que desde la economía trabajan el tema de los empresarios como actores sociales o agentes económicos, que inevitablemente tienen que ponderar el papel que desempeñan tanto en el ámbito económico como en el político; y desde luego, las investigaciones provenientes de la sociología y la ciencia política, que se plantean como objetivo central el estudio del papel político que juegan los empresarios en México, y que inevitablemente traspasa las fronteras sistémicas de la economía y la cultura.

Visto desde el punto de vista temático y con el interés de delimitar lo mejor posible *el papel que juegan los empresarios en la reproducción del sistema político mexicano*, habremos de implementar otro criterio más, que evite confundirnos ante la posible ambigüedad que provoca referirnos a la cuestión política, exclusiva materia de interés en el que se inserta nuestro objeto de estudio, a partir de la referencia de *estructuras de poder*. Cuando aludimos a ese término se coloca en el punto de interés a las *estructuras del poder político*, el que se dirime en el *espacio público*, lo cual permite diferenciar los trabajos que colocan como objetivo el estudio del empresario como actor político, como sujeto de un sistema político moderno, y no como agente “general” del poder. De modo que interesa una

expresión específica de la forma cómo los empresarios ejercen el poder, aquellas prácticas de su *cultura política* que reflejan la capacidad para competir por el poder político, su decisión de luchar por el poder formal e institucional, su objetivo de apropiarse de la máxima posición en la estructura jerárquica del poder. Por ello, se destacan las acciones políticas de los empresarios las cuales determinan su relación con el Estado y su relación con otros actores sociopolíticos.

Tal visión podría permitir el distanciamiento de los trabajos de investigación que ofrece la historia, particularmente los provenientes de aquellos enfoques descriptivos, donde las interpretaciones consideran cualquier forma de poder sin distinguir si se trata del propietario de alguna forma de capital, que no necesariamente corresponda a una etapa del desarrollo industrial del país. Razón por lo cual, en muchas ocasiones desde la historia nos llegan descripciones de la realidad social mexicana, que giran en torno a los hacendados, más vinculados con la actividad agrícola o agroindustrial, y por tanto, en el mejor de los casos, abre una sugerente perspectiva sobre la formación y el desarrollo del capitalismo en México. En ese sentido cursan los trabajos de Mario Cerutti, quien abundó en ese campo, el conocimiento requerido para comprender el desarrollo de las empresas y los empresarios más importantes de Monterrey. O el caso de trabajos que trataron el tema de los propietarios del capital, cuando en la ciencia social en México predominaba el concepto de oligarquía o burguesía. Como es el caso de los trabajos de Jorge Carrión y Alonso Aguilar (1972) *La burguesía, la oligarquía y el estado*; el de Juan Felipe Leal (1972) *La burguesía y el estado mexicano*; y posteriormente el de Alonso Aguilar (1983) *Estado, capitalismo y clase en el poder en México*.

Sin embargo, en la misma línea histórica, existen al menos dos trabajos que permiten contemplar dos aspectos de los procesos políticos y el papel que juega el empresariado en la reproducción del poder. Uno es el trabajo clásico de Nora Hamilton al cual se remiten prácticamente todos los especialistas en estudios sobre el papel político de los empresarios en México, particularmente por el grupo de investigadores que se organizó alrededor al *Consejo Mexicano de Ciencias Sociales* (Comecsos) especializado en *Empresarios y Empresas*. Se trata del libro publicado en 1983, *México: los límites de la autonomía del estado*, donde se hace evidente la vinculación entre la elite política y la clase económicamente poderosa, a partir del concepto gramsciano de *bloque en el poder o bloque*

*dominante*, por lo cual en la discusión que abre sobre el tema, particularmente Poulantzas, se alude al concepto de *autonomía relativa del Estado capitalista respecto de la fracción económicamente dominante*. Y que en el caso de México tuvo bastante aceptación para analizar el proceso de transición que inicia en los años sesenta, en el periodo de agotamiento del *modelo de sustitución de importaciones*, y por tanto de la transformación de las estructuras económicas, políticas y socioculturales.

De la misma manera, existe un libro de corte histórico que trata el tema de los empresarios desde el punto de vista político, el de María del Carmen Collado (1996) *Empresarios y políticos, entre la restauración y la revolución 1920-1924*, que a pesar de tratar un periodo tan breve, deja muy clara la forma en que se este sector social se va incorporando al sistema político que se define a partir de 1929. De hecho, la perspectiva histórica que aquí se ofrece, permite a los especialistas interesados en el papel político que juegan los empresarios en el periodo de la transición, ubicar cuál es el papel que contempla la clase gobernante del periodo posrevolucionario para este actor político en concreto. Lo cual, aunque se trate de un periodo un tanto lejano al periodo de la transición, hace posible distinguir *cómo se va definiendo la cultura política del empresariado* que caracterizó a este sector social.

Por otra parte, tenemos los *libros de autor o en co-autoría* que tratan en específico el tema del empresariado mexicano, en este caso tenemos el libro pionero de Marco Antonio Alcázar (1970) *Las agrupaciones patronales en México*, que abre el flanco de análisis sobre la participación política de ese sector social, a través de la estructura corporativa que deja a la deriva al empresariado en el sistema de partidos hegemónico. También se cuenta con el libro de Flavia Derossi (1971) *El empresario mexicano*, donde se abonan más elementos que arrojan más luz sobre el papel político de los empresarios, su desarrollo económico, así como desencuentros y acuerdos entre el sector privado y el público. En esa misma línea se ubica el trabajo de Elvira Concheiro, Juan Manuel Fragoso y Antonio Gutiérrez (1979) *El poder de la gran burguesía*, trabajo en el cual se analiza el papel político que juegan los empresarios al inicio de la transición mexicana, a través de las principales organizaciones empresariales. Después se publica un libro que tuvo mucha más difusión que el anterior, el de Salvador Cordero, Rafael Santín y Ricardo Tirado (1983) *El poder empresarial en México*, cuya característica fue relacionar lo político y lo económico;

peculiaridad que nos permite comprender cómo las nuevas formas de organización económica y financiera de los grupos empresariales más importantes, permiten a este sector social posicionarse en el escenario político nacional y hacer sentir su poder a la elite política.

En este mismo periodo (1979-1983), habrá de destacarse un peculiar libro que la *Coparmex* publicó en 1979, *Coparmex. Su origen y desarrollo. Hacia los próximos 50 años*, donde hace una lectura de un largísimo periodo de la historia contemporánea de México, destacando el papel que esta organización ha jugado en el desarrollo del sistema político y el que estaba dispuesto a desempeñar hacia el futuro. Aquí no se deja lugar a la especulación respecto de su ideología, sus posiciones políticas sobre eventos específicos de la historia y sus aspiraciones como actor social protagónico en el futuro de la nación, puesto que se parte de una versión propia de esta corporación empresarial.

Posteriormente, Benito Rey Romay (1984) con su libro *La ofensiva empresarial contra la intervención del estado*, nos ofrece una perspectiva a partir de la cual se comprenden las contradicciones existentes entre las elites gobernantes y las económicas, la confrontación entre el sector privado y el sector público. Esta interpretación se apoya en información financiera que deja claro el papel que jugó el Estado mexicano en la promoción del proceso de industrialización y los beneficios que obtuvo el empresariado. No obstante que la participación directa del Estado en la economía provoque, sobre todo después de los años cincuenta, el encono del sector empresarial, y por tanto, constituya la referencia obligada del conflicto Estado-empresarios que caracterizó la primera etapa de la transición mexicana, 1960-1982.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A partir de los cambios estructurales que supone la transición mexicana, existe entre la comunidad un acuerdo implícito respecto a que en el periodo 1960-1982, se trató de un cambio sobre todo político y cultural, que explica solamente la nueva relación entre el estado y la sociedad. Lo que supone mantiene intacto el presidencialismo, la presencia de un partido hegemónico, su expresión corporativo-clientelista, el manejo de un discurso nacionalista-revolucionario. Mientras en el terreno económico se da cuenta del agotamiento del modelo de desarrollo denominado “sustitución de importaciones”, basado en una economía protegida, una intervención directa del Estado en la economía y la definición de una política asistencialista. En el siguiente periodo, 1982-2006, se observa nítidamente cambios tanto en lo político como en lo económico, se genera un proceso de equilibrio entre los poderes, emerge una oposición “real” en sustitución de la formal, surgen nuevos movimientos sociales y de ONG’s, el Estado abandona el discurso nacional-revolucionario lo que refleja el rompimiento con el manejo populista de la política. Mientras en el ámbito económico se da un giro de 180 grados: apertura económica, privatización de la economía, adelgazamiento del Estado, política salarial y abandono de la política asistencialista.

También se ha estudiado a los empresarios de diversas regiones de México. Para el caso de Jalisco existe el trabajo de Fernando González y Carlos de Alba (1989) *Cúpulas empresariales y poderes regionales en Jalisco*, en el que se presenta la articulación social, ideológica, cultural y política de los empresarios tapatíos y su relación con el poder público. El libro de Carlos Alba y Dirk Kruijt (coordinadores) publicado en 1988: *Los empresarios y la industria de Guadalajara* donde se examina la formación y la trayectoria de ocho grupos empresariales. Y en el caso el libro de Luis Alfonso Ramírez (1989) *Los empresarios de la península de Yucatán*, en el que también se da cuenta del desarrollo agroindustrial y la relación entre el poder político y el económico.

Al poco tiempo, tuvimos a la mano un libro que fue un tanto olvidado por los especialistas en los estudios sobre el papel político de los empresarios mexicanos, y que sobre todo a partir de 1988, adquiere vital importancia para la comunidad especializada en empresarios y sistemas electorales. Es el caso del libro de Abraham Nuncio (1986) *El PAN. Alternativa de poder o instrumento de la oligarquía empresarial*, en el cual se plantea un panorama acerca de la participación de los empresarios del norte del país, en la promoción y desarrollo del *Partido Acción Nacional*. Uno de los aspectos que descubre este trabajo es la relación entre ese partido y las organizaciones empresariales, particularmente el papel que juega en ese proceso la *Coparmex*. Evidentemente, hoy, un libro de obligada referencia para aquellos interesados en analizar la trayectoria del empresariado mexicano en el sistema de partidos existente en México, y para comprender algunas de las causas más importantes del porqué y el cómo llegó ese partido al poder en las elecciones del año 2000. Dos años más tarde se publicó el libro de Carlos Arriola (1988): *Los empresarios y el estado 1970-1982*, trabajo que pareció eclipsar la presencia de otros trabajos sobre el tema, pues la mayoría de los especialistas inevitablemente hacían referencia a este trabajo que nos presenta la clara trayectoria de los conflictos entre el Estado y los empresarios mexicanos a lo largo de dos periodos sexenales, los de la debacle de la hegemonía de la clase gobernante y el paulatino ascenso político de las elites económicas. Este escenario se vio complementado por el trabajo de Rogelio Hernández (1988): *Empresarios, Banca y Estado. El conflicto durante el gobierno de José López Portillo, 1976-1982*, el cual hizo más evidente la fractura del bloque dominante, a partir del conflicto que generó la decisión de ese presidente por nacionalizar la banca. Esta es una inevitable referencia para

comprender el ascenso político de los empresarios mexicanos, y particularmente la emergencia del *neo-panismo*.

En ese mismo año, se publica el libro de René Millán (1988) *Los empresarios ante el estado y la sociedad*, donde ya se avanza en lo que puede ser considerado como el segundo periodo de la transición (1982-2006) lo cual permite comprender el devenir del cambio en la relación entre el Estado y los empresarios mexicanos, al dejar ver un nuevo escenario político caracterizado por la posibilidad de superar el conflicto político entre estos dos actores políticos, y pasar a una nueva relación fundada en la alianza, y por tanto, la cohesión del bloque en el poder. Este es uno de los primeros trabajos donde se hace patente el interés del autor por utilizar una metodología sobre la cual plantear una posible interpretación sobre los empresarios y la transición mexicana.

Luego, dentro de ese mismo bloque de *autores y coautores* sobre el tema de los empresarios, tenemos el libro de Dale Story (1990) *Industria, estado y política en México. Los empresarios y el poder*, quien nos ofrece un rico panorama sobre el modelo de desarrollo económico y el papel político de los empresarios, particularmente el relacionado con el surgimiento de la *Canacintra*, y por tanto, de la posibilidad de comprender la heterogeneidad del sector empresarial, lo cual nos obliga a distinguir diferentes ideologías, formas de insertarse en las estructuras políticas y formas de establecer relación con el Estado. Esta interpretación nos permite comprender cómo, al menos el sector empresarial representado por la *Canacintra*, incorpora el *nacionalismo* como signo de identidad, mismo que explica su proximidad con la clase gobernante. Condición que se pone en juego al calor de proceso de la transición y con decisiones tan importantes como la incorporación de México al GATT.

En ese mismo año se publica el libro de Roderic A. Camp (1990) *Los empresarios y la política en México: una visión contemporánea*, en el cuál se ofrece una interpretación más actualizada de la posición política e ideológica de los empresarios mexicanos, donde se incluyen los testimonios de los líderes de las principales organizaciones empresariales, de propietarios de importantes firmas y de empresarios que no necesariamente están involucrados formalmente en alguna estructura del sistema político.

Más tarde (1992) Matilde Luna publica el libro, *Los empresarios y el cambio político. México 1970-1987*, la autora aquí nos ofrece una peculiar interpretación sobre el

papel político que juega ese sector en el proceso de la transición, pues éste se articula en la lógica de un sistema de toma de decisiones, de definición de políticas públicas, y por tanto, desde la gestión gubernamental que da forma a un plan sexenal donde, evidentemente se considera el papel económico y social que juega el sector empresarial. Como Luna sugiere en el título de su libro, el periodo que cubre alcanza a cubrir, también, un brevísimo periodo en el cual ya se pueden observar algunas señales de superación de los conflictos entre el gobierno y los empresarios mexicanos. Posteriormente, el libro de Elvira Concheiro (1996) *El gran acuerdo. Gobierno y empresarios en la modernización salinista*, no deja la menor duda de que ese proceso de conciliación entre las elites políticas y las económicas se ha estabilizado a partir del proyecto de nación promovido por la *tecnocracia* que llegó al poder a partir de 1982, y que en el gobierno salinista se encargó enfáticamente de consolidar. Aquí *se hace claramente evidente la alianza entre políticos y empresarios*, quienes comparten una visión semejante de lo que ha de ser el futuro del país y la ideología que impera en las altas esferas del poder.

En esa misma línea, pero con un planteamiento más ambicioso por cuanto al periodo que analiza (porfiriato-salinismo) tenemos el libro de Francisco Valdés (1997) *Autonomía y legitimidad. Los empresarios, la política y el estado*, donde el autor esgrime un marco de referencia teórico que le permite ensayar una interpretación que contempla tanto el proceso de industrialización como seguir el papel que juegan los empresarios mexicanos en la definición y transformación del sistema político mexicano. Valdés coloca al empresariado como un sujeto social que toma parte activa en el desarrollo del capitalismo en nuestro país, lo cual permite comprender este complejo proceso a partir de la relación clase gobernante-sector empresarial, donde se otorga prioridad al papel que juega la ideología de este actor social a lo largo del periodo posrevolucionario hasta 1988, concluido el primer gobierno tecnocrático.

Avanzando en el periodo de la transición mexicana, con una perspectiva, también histórica, que abarca un amplio periodo del siglo XX, se encuentra el libro de Rocío Guadarrama (2001): *Los empresarios norteños en la sociedad y la política del México moderno. Sonora (1929-1988)*, donde además, se incorpora una visión regional respecto a la conformación del sistema político mexicano, que permite observar el papel particular que juegan los empresarios de Sonora en la definición del proyecto de nación, lo que supone

incursionar en el desarrollo de los grupos económicos de la región, así como el análisis del papel que juegan las organizaciones empresariales en su dimensión nacional-regional.

Una nueva perspectiva que se abre en la línea de libros de autor sobre la temática del papel político de los empresarios mexicanos, es el libro de Cristina Puga (2004) *Los empresarios organizados y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, que en su esencia coloca la discusión en la lógica de la globalización y, dentro de ella, la nueva gobernanza y coordinación económica entre el sector público y privado. A nivel de antecedentes ofrece un rapidísimo recorrido por el papel que los empresarios tienen como actores políticos, a partir del papel que juegan las principales organizaciones sectoriales, para de lleno introducirnos en el complejo proceso de la firma del TLCAN. Aquí sale a relucir el carácter ideológico del empresariado mexicano, y la firma del acuerdo como expresión de la proximidad ideológico-político de la tecnocracia y los empresarios mexicanos.

Vale también destacar dos libros que emulan desde su título el tema de nuestro interés, a través de un enfoque de tipo periodístico, el de Manuel Buendía (1986) *Los empresarios*; y el de Gabriel Zaid (1995) *Hacen falta empresarios creadores de empresarios*. El primero refleja la forma en que los hombres del dinero se insertan en los diferentes juegos del poder; el segundo, abre un panorama más próximo a cuestiones de índole de la cultura empresarial, a aspectos más relacionados con la ética de la gestión empresarial, que con la política.

Por último, en lo referente a los *libros de autor o coautor*, tenemos los trabajos relativos a las biografías o autobiografías que se han dibujado en torno a figuras empresariales más destacadas en el panorama económico o aquellos que han incursionado exitosamente en la política. En ese plano tenemos libros como el que ofrecen Alicia Ortiz Rivera (1997) *Juan Sánchez Navarro. Biografía de un testigo del México del siglo XX*; Enrique Nanti (1998) *El Maquío Clouthier*; Manuel Espinosa Iglesias (2000) *Bancomer. Logro y destrucción de un ideal*; Claudia Fernández y Andrew Paxman (2000) *El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa*; José Martínez (2002) *Carlos Slim. Retrato inédito*, entre otros. E inevitablemente están los textos que giran en torno a la figura del primer presidente de la República de la oposición, Vicente Fox. Es el caso de su propio libro: Vicente Fox (1999) *A Los Pinos. Recuento autobiográfico y político*; Miguel Ángel

Granados Chapa (2000) *Fox & Co. Biografía no autorizada*; Guillermo H. Cantú (2001) *Asalto a palacio. Las entrañas de una guerra*; Francisco Ortiz (2002) *Comprender a la gente. Por qué ganó Fox*; y el de Katia D'Artigues (2002) *El gabinetazo*.

Por otra parte, tenemos el caso de los *libros colectivos monotemáticos* que tratan la temática empresarial, desde el desarrollo histórico del empresariado mexicano, el análisis del papel político de las organizaciones sectoriales, la formación de grupos económicos, así como su relación con las elites gobernantes. Se trata de trabajos que reúnen una amplia gama temática y por tanto, se presentan generalmente como trabajos multidisciplinarios. En esta vertiente tenemos el libro compilado por Julio Labastida (1986) *Grupos económicos y organizaciones empresariales en México*, producto de uno de tantos seminarios que en su gran diversidad temática comenzaba a descubrir el importante papel político, económico y cultural que jugaban los empresarios, tanto en el desarrollo del capitalismo como en la definición del sistema político mexicano. Así como el libro coordinado por Carlos Alba (1987) *Historia y desarrollo industrial*, que ofrece un panorama sobre el progreso, formación y desarrollo de empresarios y empresas de diversas regiones de México.

En una perspectiva de la *política comparada* tenemos el esfuerzo de CLACSO, por establecer las proximidades económicas, políticas y culturales en la definición de los proyectos políticos emergentes después de las dictaduras que predominaron el escenario de América Latina. Por lo tanto, destacando el papel político de los empresarios en la definición del rumbo de cada uno de esos países. Es el caso del libro colectivo coordinado por Celso Garrido (1988) *Empresarios y estado en América Latina*.

Existe también un libro colectivo *sui generis* compilado por Carlos Arriola (1991) *Los empresarios y la modernización económica de México*, donde se presentan las perspectivas que los empresarios tenían de su función económica en el proceso de modernización industrial durante el salinismo. Se trata de una interpretación de lo que acontece en un periodo de la transición mexicana desde el punto de vista del actor mismo, no de quien lo interpreta. Lo cual explica lo interesante de un trabajo de este tipo que lo mismo reúne a líderes empresariales que a importantes empresarios, quienes desde su experiencia personal y campo de desarrollo, hacen una interpretación de los desafíos que desde su perspectiva enfrenta el país.

En ese mismo bloque de trabajos colectivos monotemáticos, están dos libros que son producto de eventos realizados por *Comesco*, uno, el coordinado por Cristina Puga y Ricardo Tirado (1992) *Los empresarios mexicanos, ayer y hoy*, y otro coordinado por Ricardo Pozas y Matilde Luna (1989) *Las empresas y los empresarios en el México contemporáneo*. En ellos también se da cuenta de la complejidad del tema que inevitablemente fluye entre la cuestión de los empresarios como sujetos sociales, y las empresas como entidades productivas.

Por otra parte, están los *libros colectivos* con una amplia gama temática que plantea como objetivo el análisis de la coyuntura, al relacionar a la política, la economía y la cultura. Los trabajos más completos de esa índole, invariablemente contienen, al menos, un artículo sobre el papel político de los empresarios mexicanos. Es el caso de libro donde participan Ricardo Cinta, Julio Labastida, *et.,al.*, *El perfil de México en 1980. Sociología, política y cultura, Vol. 3*; el coordinado por Jorge Alonso (1980) *El estado mexicano*; el de Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime Tamayo (1992) *El nuevo estado mexicano. III. Estado, actores y movimientos sociales*; el de Jorge Alonso y Alberto Aziz Nassif (2005) *El Estado Mexicano. Herencias y cambios*; varios autores (1981) *Lecturas de política mexicana*; el de Pablo González Casanova y Héctor Aguilar Camín (1985) *México ante la crisis*; en el que participan Cristina Puga, Ricardo Tirado y otros autores (1986) *Evolución del estado mexicano. Consolidación, 1940-1983*; el coordinado por Abraham Nuncio (1987) *La sucesión presidencial en 1988*. Dos libros colectivos que recobran una perspectiva histórica que recoge la diversidad política a través de un *panorama multitemático*, y con el objetivo de tratar una coyuntura desde el análisis retrospectivo. El primero, de muy largo alcance, pretende recobrar el análisis de los principales actores políticos y su forma de interactuar con el sistema político, desde el porfiriato hasta el primer gobierno tecnocrático, el coordinado por Octavio Rodríguez Araujo (1988) *México: estabilidad y luchas por la democracia. 1900-1982*. El segundo, el coordinado por Rafael Loyola (1990) *Entre la Guerra y la estabilidad política. El México de los 40*, que ofrece una aproximación detallada de la coyuntura, al concentrarse en un periodo más acotado de la historia contemporánea de México, donde uno de los casos que se tocan es el del papel político de los empresarios.

Y nuevamente trabajos colectivos multitemáticos que presentan análisis de coyuntura más recientes como el coordinado por Arturo Anguiano (1990) *La modernización de México*; el compilado por Carlos Bazdresch, Nisso Bucay, Nora Lustig y Soledad Loaeza (1992) *México, auge, crisis y ajuste*; el coordinado por Héctor Tejera Gaona (1996) *Antropología política. Enfoques Contemporáneos*; el coordinado por Rocío Guadarrama -coordinadora- (1998) *Cultura y trabajo en México. Estereotipos, prácticas y representaciones*; y el coordinado por Raúl Corral y Alfredo Rojas Díaz-Durán (2002) *México en la aldea global*; el coordinado por Ilián Bizberg y Lorenzo Meyer (2003) *Una historia contemporánea de México. Transformaciones y permanencias*, Tomo I y II, entre otros.

También es obligado hacer un reconocimiento a revistas especializadas que a lo largo de su existencia han entregado en algunos de sus números, significativos artículos sobre los empresarios y las empresas, es el caso de *El Cotidiano* y *Sociológica* de la Universidad Autónoma Metropolitana; *Revista Mexicana de Sociología y Estudios Políticos* de la Universidad Nacional Autónoma de México; *Estudios Sociológicos* y *Foro Internacional* de El Colegio de México, entre muchas otras.

Por último, hacemos nuestro reconocimiento a la valía de tres libros que abrieron la discusión sobre la lucha política en el contexto del *proceso de transición*, y que sin necesidad de sugerirlo en el título de los mismos, abren capítulos al interior de esos trabajos para tratar el caso de los empresarios, significativos actores políticos que reflejan el conflicto que provocó la erosión de las estructuras del poder que explica el inicio de un proceso de deslegitimación de la clase gobernante. Los títulos de los libros son por sí solos elocuentes, se trata del trabajo de Américo Saldívar (1980) *Ideología y política del estado mexicano (1970-1976)*; el de Rolando Cordera y Carlos Tello (1981) *México, la disputa por la nación*; y el de Miguel Basáñez (1981) *La lucha por la hegemonía en México, 1968-1980*. Así como su versión revisada y aumentada del anterior (1990) *El pulso de los sexenios. 20 años de crisis en México*. Estos trabajos, sin duda, permitieron colocar la discusión sobre los conflictos y alianzas del bloque de poder, permitiéndonos comprender la dinámica política del complejo proceso de la transición mexicana.

Las principales conclusiones de estos estudios y su relación con el tema de la presente investigación son las siguientes: 1) Dan cuenta del proceso de formación y

desarrollo del capitalismo en México; 2) del desarrollo de la clase capitalista desde los diferentes sectores de la economía; 3) hacen evidente el papel que juega el sector público y el privado en la expansión del mercado nacional y el tipo de vinculación que mantiene con el exterior; 4) permite comprender el papel que juegan los grupos económicos en la dinámica económica desarrollada en las diferentes regiones del país; 5) advertir los beneficios que los grupos empresariales y los empresarios obtuvieron en el siglo XX, sobre todo en el periodo posrevolucionario hasta 1982, y en el periodo siguiente hasta nuestros días; 6) comprender el papel que juega el empresariado nacional en la formación del sistema político mexicano, sobre todo el correspondiente al lugar que ocupan las principales organizaciones empresariales; 7) que la clase empresarial no tiene una composición monolítica, y que por tanto es posible distinguir diferentes posiciones ideológicas ante el gobierno; 8) la participación de los empresarios en los partidos y, por tanto, su participación formal en el sistema político; 9) la vinculación entre el poder político y el poder económico, y por ello, los posibles conflictos y alianzas que acontecieron a lo largo del siglo XX; 10) que conforme el capitalismo se desarrolló en nuestro país el sector empresarial acumuló el suficiente poder para competir por el poder con la clase política; 11) la importancia que tiene el pensamiento empresarial en la formación, desarrollo e impulso de la ideología de derecha; 12) el papel sustancial que los empresarios jugaron en la definición y puesta en marcha del proyecto neoliberal que se puso en marcha desde 1982; 13) así como comprender las causas que motivaron que los empresarios accedieran al poder en el año 2000.

Se trata, entonces, de un conjunto de trabajos que ofrecen la posibilidad de comprender el desarrollo de la historia contemporánea de México, a partir del papel que los empresarios juegan política, económica y culturalmente. Un eje expositor que sin duda permite comprender los principales cambios en los últimos ochenta años.

#### *Aportes y limitaciones de la esta investigación:*

En esta investigación se contemplan dos ámbitos del trabajo interpretativo: el esbozo de un modelo para analizar la transición desde un punto de vista predominantemente antropológico, y la exploración *sobre el discurso político de las*

*organizaciones empresariales* que aparece como el elemento que permitirá probar la pertinencia del modelo interpretativo. A continuación se sugieren algunas aportes y limitaciones de este proyecto:

*Los posibles aportes:*

- a. Se trata de una investigación que propone un modelo de análisis que hace posible la comprensión del complejo proceso de transición que vive el país desde los años sesenta. Dicho *modelo teórico-conceptual* pretende demostrar su pertinencia interpretativa con la puesta en juego del *discurso de las organizaciones empresariales* como parámetro empírico del intercambio entre el sistema político y su relación con un sector fundamental de la sociedad mexicana.
- b. Incorpora un amplio trabajo de investigación empírica sobre el *discurso de las organizaciones empresariales*, que junto a las comunicaciones políticas de otros actores sociales, recrean el *nuevo espacio público* caracterizado por el papel que juegan los medios de difusión masiva. De tal forma que con esa perspectiva se hace evidente un importante aspecto de la *cultura política del sector empresarial*, así como permite observar el papel que juega la *comunicación política en la reproducción del sistema político mexicano*.
- c. El análisis del *discurso de las organizaciones empresariales* bajo la óptica energética que se estudiará más adelante, posibilita la comprensión del *papel político que tienen los símbolos y los rituales de la política moderna mexicana*. Así como el papel que juega como referente de los aspectos de la cultura política que legitima o deslegitima a un régimen.
- d. Se trata de una propuesta metodológica que en esencia permite comprender el funcionamiento general de un sistema político, donde inevitablemente se concede particular importancia al papel que juega la *comunicación política en la reproducción del poder*. De tal manera que, independientemente que aquí se considere el discurso político de las organizaciones empresariales, se puede ensayar el discurso de cualquier actor político, sin menoscabo del propósito del modelo de análisis propuesto.

*Las limitaciones:*

La *primera limitante* de esta investigación proviene de la pretensión de construir un modelo de análisis, el *modelo energético* con su correlato en la *teoría de los sistemas*, que en su fundamento plantea una amplia gama de conceptos que pueden explicar la interacción de las partes de un *sistema y su vinculación con su entorno*, por tanto, de los actores que se sitúan en las diferentes estructuras económicas, políticas o culturales. Sin embargo, la aplicación de este modelo parte de una realidad (la transición mexicana) que ha sido comúnmente explicada a partir de múltiples enfoques teóricos y conceptuales, lo que complica la aceptación de una interpretación visiblemente diferente a las que está acostumbrada la comunidad académica.

La *segunda limitante*, radica en que por sus propios principios la *teoría de los sistemas* aspira a interpretar una realidad muy compleja, que obliga a considerar una gran diversidad de conceptos que abren muchísimos flancos de discusión desde el punto de vista teórico o conceptual. De tal manera que los conceptos que se eligen para explicar alguno de los fenómenos considerados en el modelo energético, como son, por ejemplo, los conceptos de sistema político, cultura política, comunicación política, transición, clase empresarial, organización empresarial, etc., pueden cuestionarse desde la posición de los especialistas de cada uno de estos temas.

La *tercera limitante* deriva de que aunque es posible que se haya elegido la parte más significativa de la propuesta energética-sistémica (el modelo de análisis sustentado en los intercambios del sistema y su ambiente, el desarrollo del sistema político mexicano, el papel que juega la comunicación política en la conformación del nuevo espacio público); se trata de una investigación que busca probar la pertinencia del modelo de análisis propuesto, y que toma como eje expositor *la acción política del empresariado a partir del discurso de las organizaciones empresariales*, la cual solo adquiere significado a través de considerarlo dentro de un contexto socio-histórico: el de la *transición mexicana*.

La *cuarta limitante* radica en la resistencia que se antepone, desde la academia, a las interpretaciones del análisis sistémico-energético, sobre todo de algunas vertientes del pensamiento antropológico que “valida” los objetos propios de su disciplina a partir del estudio de comunidades “no complejas” y distantes de la modernidad; así como una

concepción ortodoxa del uso etnográfico lo cual desconoce al *nuevo espacio público* –el construido a partir de los medios de comunicación masiva- como un espacio recreado a partir de símbolos, y por tanto, de las formas modernas de reproducción del poder.

### *La estructura y exposición del trabajo.*

La estructura de esta investigación está organizada a partir de exponer: las características del modelo análisis propuesto, el papel que juega el empresariado mexicano en la conformación del sistema político mexicano, la lucha por el poder que entabla a partir de los años setenta hasta alcanzar la presidencia de la República, y dar un esbozo general del material empírico que aporta esta investigación, que son tres formas de expresión del discurso empresarial.

La pregunta que guiará la exposición del primer capítulo es *¿qué tipo de interpretación se ofrece en esta investigación?*; por lo cual en esta parte se expondrán los principales elementos del modelo energético y sus conceptos más importantes para analizar la transición mexicana. Aquí se destacará el carácter energético de la teoría de los sistemas a partir de *una interpretación simbólica del discurso político de las organizaciones empresariales*. Por esa razón, en el primer apartado se presentará un planteamiento teórico-conceptual que explique el funcionamiento del modelo de análisis, una síntesis desde su origen hasta el enfoque antropológico. Después, se desarrollará otro apartado en el cual se discutirá el papel de la comunicación política en la reproducción de los símbolos, y por tanto, en la reproducción de las estructuras del poder. Y por último, se hará una interpretación conceptual sobre la transición desde un punto de vista lo más apegado posible a las perspectivas de la antropología moderna y, por tanto, *destacando el carácter energético de la reproducción social*.

Se trata, en síntesis, explicar la relación entre el modelo de análisis propuesto, el contexto socio-histórico en el que se ensayará, y el estudio de caso del que se hace uso para probar la pertinencia interpretativa del modelo energético.

El siguiente capítulo tratará sobre el papel que jugaron las organizaciones empresariales en la génesis del sistema político mexicano. En esta parte se planteará el

surgimiento del sistema político mexicano destacando los aspectos simbólicos de cada uno de sus rasgos, de los cuales se pondrá particular énfasis en la cuestión del presidencialismo, el partido hegemónico y su carácter corporativo-clientelar de las relaciones de poder. Esta exposición perseguirá dos cuestiones fundamentales: la peculiaridad del papel corporativo de las organizaciones empresariales y la ausencia de un *espacio público* que solo se explica por el predominio de la *burocracia política* y la anulación de la capacidad crítica de la sociedad mexicana a las prácticas gubernamentales de los diferentes sexenios.

Se trata de construir una reinterpretación de la historia contemporánea de México, lo más apegada posible a la perspectiva antropológica, por tanto, se busca delinear la *cultura política* que impone un sistema político “paternalista”. Además se intentará destacar las contradicciones entre los propietarios del capital y su participación política a partir de sus organizaciones de clase, y la *burocracia política*, en el contexto de un modelo capitalista de desarrollo “hacia adentro” que va delineándose desde los años treinta hasta 1982, para luego orientarse “hacia afuera”.

Este capítulo será el referente del periodo socio-histórico que se considera como contexto en el cual se probará el modelo de análisis propuesto, la transición, por lo cual se intentará sugerir que en el periodo posrevolucionario que corre de los veinte a los sesenta, se genera una *sinergia* que propicia el equilibrio del sistema político. Esta condición obedece al carácter hegemónico del partido en el poder, pues al advertirse el agotamiento del modelo de desarrollo económico durante los años sesenta, se inicia un proceso de transformación de las estructuras económicas, políticas y socioculturales que explican la instauración de un nuevo modelo de desarrollo. Lo que confirma el agotamiento del modelo de desarrollo posrevolucionario.

Otra línea de análisis que se considera de importancia en este capítulo, es analizar dentro de la lógica del sistema político mexicano, el papel que juegan los símbolos, y por tanto, el papel fundamental del *nacionalismo* en el proceso de legitimación de los gobiernos posrevolucionarios y en la construcción de las identidades políticas, lo que nos permitirá ir dibujando la forma que adquiere un importante aspecto de la *cultura política nacional*.

Dicho de otra forma, si uno de los principales objetivos de esta investigación, es ofrecer una interpretación pertinente sobre la transición, es fundamental identificar cuáles son las características del sistema político antes de la transición.

En el tercer capítulo *La lucha por el poder. La emergencia de la clase empresarial como nuevo actor político*, la pregunta que guiará la exposición en esta parte de la investigación es *¿qué papel juegan las organizaciones empresariales en la definición de la transición mexicana?* Se analizarán los aspectos del sistema político mexicano que acompañaron la etapa del agotamiento del modelo de desarrollo posrevolucionario, lo cual, desde la perspectiva energética, representa la pérdida de energía, y por ello un desequilibrio del sistema social, que en la lógica de la sociología política, la ciencia política y la economía, explicaría un proceso de gestación de la crisis social que caracteriza al proceso de transición.

Evidentemente, la coyuntura que genera el agotamiento del modelo de desarrollo sobre el que descansaba la legitimidad de la “familia revolucionaria” en el poder, explicará los porqués del surgimiento de nuevos actores sociales, que en su conjunto reflejan la transformación de las relaciones estado-sociedad mexicana o el surgimiento de la *sociedad civil* que, en todo caso, fue el origen de la erosión del partido dominante, del surgimiento de una *oposición real*, y del mismo triunfo de la oposición. La crisis aparecerá, entonces, desde la lógica energética, como un desequilibrio en las estructuras de poder, y por tanto, del conjunto de la estructura social que se representaría a partir de una considerable fuga de energía que determinaría el desequilibrio entre el *sistema y su entorno*.

Como en esta interpretación se procura privilegiar una interpretación preponderantemente política, se destacarán las condiciones que explican la resistencia al cambio de una relación de paternalista del poder, a una de carácter claramente democrática. Lo que en la lógica de la transición mexicana aparecerá como la posibilidad de generar un nuevo equilibrio en las estructuras de poder o en el intercambio entre los actores sociales. Condición que en el caso de esta investigación privilegiará la relación entre las elites políticas y las elites económicas, particularmente, la relación entre el sistema político mexicano y el papel político que juegan en él las principales organizaciones empresariales.

De hecho, en la propia lógica del modelo de interpretación energética, se observará cómo la coyuntura que genera el agotamiento del modelo de desarrollo posrevolucionario y la crisis del sistema político paternalista, hace pausable la creación del *nuevo espacio público* que en esencia supone el surgimiento de nuevos actores políticos –empresarios, clases medias, la Iglesia, organizaciones de la sociedad civil-, y por ende, de una *nueva*

*cultura política* la cual gira alrededor del papel que juegan los medios de difusión masiva, particularmente el de la prensa. Se trata de observar cómo se va perdiendo el equilibrio adquirido por un sistema político basado en la figura del partido dominante. Se hará evidente desde nuestra interpretación, cómo una característica o conducta de la *burocracia política* que en el pasado jugó un papel fundamental como elemento de equilibrio o estabilidad política, en ese momento de la transición provocaba lo contrario.

De tal manera que la coyuntura que permite la emergencia de nuevos actores políticos se define por la crisis política que supone una crisis de credibilidad, de legitimidad, y por tanto, de la ideología dominante. Esto se expresa de manera muy sintética a partir de la relación sociedad civil-Estado, que en la lógica del modelo energético supone la ruptura con el paternalismo de la burocracia política y el surgimiento, entonces, de una masa crítica que solo se hace posible con el acceso a los medios de difusión o con la posibilidad que la sociedad rompa el monopolio que el gobierno ejerce sobre los medios de difusión masiva. Y por ello, que esto sea la única pauta posible para combatir a la ideología dominante, a partir de la comunicación política que adquiere forma a partir del discurso político de los nuevos actores sociales.

Así, la crisis política y la erosión del modelo de desarrollo posrevolucionario explicarán tanto la crisis sistémica como el desequilibrio entre el sistema político y su entorno, lo que abrirá la posibilidad para la instauración de un nuevo modelo de desarrollo volcado al exterior que en lo sucesivo compartirán tanto la burocracia política como las organizaciones empresariales.

Por último, la pregunta que guiará la exposición del cuarto capítulo: *El discurso político empresarial: organizaciones, líderes y empresarios comunes*, es ¿Cuál es la estructura de la ideología empresarial que permite su arribo al poder en el año 2000?; por lo cual en esta parte se analizará el periodo que corre desde 1985 hasta el 1997, en el cual se instaura un nuevo modelo de desarrollo que rompe con la *cultura política posrevolucionaria*, y por ello supone la emergencia de una nueva ideología, la renuncia o resignificación de símbolos tan importantes como el del nacionalismo, así como el surgimiento de una nueva racionalidad del Estado. Este proceso de transformación de las estructuras económicas, políticas y culturales bajo los preceptos neoliberales, supone el intento de la nueva clase política, la *tecnocracia*, de resolver la crisis social, de restablecer

el equilibrio entre las diferentes estructuras sociales, de legitimar un modelo de desarrollo que renuncia a la *cultura política posrevolucionaria*, pues el giro que imprime a los proyectos de gobierno evocan principios y valores que se contraponen a la ideología revolucionaria.

Esta nueva condición sociopolítica explica la irrupción de una nueva ideología que será legitimada por la sociedad o un sector importante de ella. En el caso de este periodo en particular, se observa cómo la racionalidad de la *tecnocracia* que arribó al poder a partir de 1982, es legitimada a partir de la ideología empresarial emergente en el *nuevo espacio público* a partir del *discurso político de las principales organizaciones empresariales* expresado a través de la prensa. *Se trata de explicar cómo los significados del discurso de esas organizaciones van dando forma a la agenda política nacional*, y cómo en ese mismo sentido, reflejan una madurez política del empresariado mexicano que poco a poco se va posicionando en el *nuevo escenario público*, y que por lo tanto, permite a este sector social proyectarse como un líder de la opinión pública. Se intentará en la mayor parte de las veces identificar el proceso de cambio en la identidad política de las elites políticas y económicas, así como captar la *transformación simbólica de la cultura política del sistema político predominante*.

En este capítulo es fundamental una interpretación antropológica que destaque el papel que juega el discurso político de las organizaciones empresariales para legitimar al proyecto neoliberal, tanto en su versión priísta como en la panista, por lo cual en el último apartado de este capítulo se ofrecerá un amplio espectro del discurso político de las organizaciones empresariales, de los hombres de negocios más importantes del país, así como una breve etnografía que nos permita conocer la *cultura política de empresarios* comunes que no cuentan con una posición de liderazgo en las estructuras de poder.

Planteada la estructura general de esta investigación, pasaremos a desarrollar el primer capítulo: el esbozo del modelo de análisis propuesto, sus partes y los conceptos que permiten articularlas en la lógica sistémico-energética.

## **CAPÍTULO I. UN MODELO TEÓRICO-CONCEPTUAL PARA ANALIZAR LA TRANSICIÓN MEXICANA. UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA.**

*Para cualquier intento de teoría resultan fundamentales modelos conceptuales que, en forma simplificada y por tanto comprensible, intenten representar algunos aspectos de la realidad.... Son bien conocidas las ventajas y los peligros de los modelos. La ventaja está en que es el camino para crear una teoría, es decir, el modelo permite deducciones a partir de premisas, explicación y predicción que a menudo resultan inesperados. El peligro es la simplificación.... si al proceder así no habremos amputado partes vitales de la anatomía (Bertalanffy, 1976: 210).*

El propósito de este primer capítulo es proponer un modelo de análisis que nos permita interpretar desde un enfoque antropológico, este complejo proceso que, en su sentido social más amplio, inició desde los años sesenta y hasta el año 2000 vio uno de sus principales frutos en el campo de la política.

En el apartado 1.1, de este capítulo, se realiza una interpretación sobre las partes esenciales del esquema analítico que, destacando la práctica política, ofrece la teoría de los sistemas. El tratamiento que aquí se hace pretende reflejar el alto grado de resolución para desentrañar una realidad social que cada vez se presenta más compleja. De tal manera que desde un enfoque antropológico, la teoría de los sistemas aparece como una solución metodológica que permite comprender la articulación de la política, la economía y la cultura. En la lógica política se pone particular énfasis en la toma de decisiones, los consensos y posibles conflictos que enfrenta el sistema societal, es decir, que esta propuesta pretende generar un referente que permita captar la lógica y las formas que adoptan las relaciones de poder y los símbolos a los que aluden los principales actores del bloque dominante.

Se analizan los principales aspectos de la teoría de los sistemas, así como los conceptos que de ella derivan, a partir de una apretada selección de dos politólogos, Deutsch e Easton, de un prestigiado sociólogo, Luhmann, y un novedoso antropólogo Adams, quienes hacen su particular interpretación sobre esta teoría. Con ello se pretende ofrecer una serie de conceptos como el de las relaciones sistémicas, la condición energética de los sistemas, y el poder, entre otros conceptos más, cuyo uso no se observa en las interpretaciones más visibles sobre la transición mexicana.

En la segunda parte de este capítulo, apartado 1.2, se analiza *el papel energético que juega la comunicación en la reproducción de un sistema político*. Se trata de establecer la relación entre la *cultura política* y su mejor forma de expresión moderna, *el discurso político*, que es proyectado como el principal elemento para reproducir el *nuevo espacio público*. Este planteamiento teórico-conceptual pretende aclarar cómo la *comunicación política* se constituye en el referente obligado para comprender el complejo proceso de la transición, sus avances y retrocesos a partir de la retroalimentación que establece el gobierno con la sociedad a la que representa. Se busca sugerir que sin la *comunicación política* no es posible pensar en la existencia de la legitimidad, la dominación ideológica, ni los consensos requeridos para la construcción de una sociedad democrática.

En la tercera parte de este capítulo, apartado 1.3, se presenta una interpretación sobre el proceso de transición desde el punto de vista energético. De esa forma se pretende hacer más evidente la función del cambio estructural, así como la relación entre los tres principales sistemas sociales: la política, la economía y la cultura.

Inevitablemente, se recurre al concepto de la crisis con el objetivo de abonar referentes interpretativos sobre las formas concretas que va a adquirir la transición mexicana. Pero sobre todo, se intenta refrendar la pertinencia de un modelo cifrado en la teoría de los sistemas, y por ende en los procesos energéticos. Se ofrece una perspectiva antropológica que destaca formas y situaciones a partir de las cuales se reproduce el poder, refleje los significados implícitos en la emergencia de nuevos actores políticos que sintetizan una parte importante de los conflictos provocados por la propia dinámica de un proceso de transición.

## **1.1 Un modelo energético para tratar la política desde la teoría de los sistemas.**

En la actualidad las interpretaciones sobre las crisis sociales adquieren en sus diversos enfoques teóricos mayor predominio del tratamiento político, pues los principales conflictos que denotan son traducidos por la experiencia pragmática a partir del problema de la democracia, enarbolada como bandera de la política moderna. Se trata, entonces, de una perspectiva reduccionista donde las contradicciones políticas, económicas y culturales se restringen a la discusión de la democracia. Y aunque en algunos casos, como los de las sociedades latinoamericanas, la gravedad de la condición social obliga a reconocer la estrecha vinculación de la crisis política con la económica, esto es, el reconocer el origen material de la crisis, muchas veces ni los especialistas (politólogos, sociólogos y antropólogos), mucho menos los tomadores de decisiones, se dan a la tarea de explicar la transformación de las contradicciones económicas en conflictos políticos (Hirschman, 1986). Y desde luego, en la mayor parte de las ocasiones la cultura queda marginada como una variable de los fenómenos que definen las tendencias de la sociedad actual.

Así, los escenarios con los que se pretende presentar una radiografía social nos presentan a una sociedad fracturada, a un sistema conformado exclusivamente por dos partes: la política y la economía. En ese contexto la teoría de los sistemas representa, cuando menos, una “expansión” del sistema que adecue mejor el modelo analítico a la complejidad de la realidad social; estableciendo el mínimo de partes que conforman al sistema (política, economía y cultura), la interacción entre ellas, así como los niveles de intercambio del sistema: *intrasocietal* y *extrasocietal*.

La política, independientemente que a consideración del investigador sea tratada como el eje explicativo de la realidad social, habrá de considerarse en su perspectiva más integral, de tal manera que, primero, se reconozca como un término con el cual se alude a las cuestiones del Estado, haciendo implícito el interés general de la sociedad. Esto obligará a considerar en la discusión de la política, a la economía y la cultura. Segundo, como señala Bobbio, al entender la política como una actividad humana estrechamente vinculada con el poder, requerimos considerar, al menos, tres tipos del mismo: 1) *el poder económico*, el cual refleja la utilidad de poseer ciertos bienes necesarios en una situación de escasez, para inducir a aquellos que no los poseen a tener cierta conducta en lo que corresponde a la

ejecución de ciertos trabajos; 2) *el poder ideológico*, el cual se basa en la influencia de las ideas de las personas investidas de autoridad, quienes bajo ciertos procedimientos y circunstancias, ejercen su influencia sobre la conducta de los miembros de una organización social; y 3) *el poder político*, cuyo origen se basa en la posesión de los instrumentos mediante los cuales se ejerce la fuerza física, y que confiere la capacidad de coacción (Bobbio, 1988: 1240-1252). Por lo tanto, como bien resume este autor, el poder aparece en los tres principales subsistemas sociales: lo económico, lo cultural y lo político.

Vista a partir de esa interpretación del poder, la teoría de los sistemas aparece como uno de los mejores instrumentos analíticos para dar cuenta de la complejidad de la realidad social, en la medida que obliga a considerar la articulación e intercambio entre los tres principales subsistemas mediante los cuales se capta la condición global de un objeto sistémico.

Desde otra perspectiva sobre la complejidad social, Bell presenta una interpretación sobre el proceso de cambio cultural, dejando en claro, primero, que la economía, la política y la cultura son parte integral del devenir histórico, pero que, segundo, la economía y la política tienen una dinámica visiblemente diferente al de la cultura. Lo que nos permite reconocer, en todo caso, que el proceso social no supone una dinámica simétrica del conjunto de sus estructuras, pues una de ellas puede detonar el proceso de cambio al influir en las otras, hasta hacer posible la transformación global de la sociedad (Bell, 1987).

En los años cuarenta la *Teoría General de los Sistemas* al que dio forma Bertalanffy, se convirtió rápidamente en el nuevo paradigma cuya cualidad permitió comprender lo que predominantemente acontecía en el campo de la ciencia, y que de manera muy resumida podremos plantear como una suerte de objeto multidisciplinario generado por la física, la biología, la psicología y las ciencias sociales. Y quizás una de sus mejores expresiones en el campo de las ciencias sociales, sea, precisamente, la influencia que tuvo esta teoría en el *estructuralismo francés*, como en el caso de Lévi-Strauss y Piaget, por solo mencionar a dos de los autores más destacados en los campos de la antropología y la psicología.

De hecho, este fenómeno refleja la negación de la interpretación mecanicista, y por tanto, del predominio las ciencias exactas, y la convicción y compromiso científico con destacar el carácter humanista en el tratamiento de objetos de estudio que plantean como

esencia cualquier tipo de relación social, de interés para comprender las características de las relaciones entre los hombres. Por ello las *estructuras mentales*, y sus *formas simbólicas y lingüísticas (discursivas)* que son las que dan forma a las culturas, relocalaron en el primer plano de los objetivos que se planteó la teoría general de los sistemas.

Sin embargo, dada la misma retroalimentación que supone el hecho que ciencias y disciplinas compartan un paradigma, como es el caso de la Teoría General de los Sistemas, cabe destacar la influencia que ejercieron tanto la ingeniería energética como la cibernética, mismas que destacaban la importancia que jugaba la creación de energía, su generación y agotamiento. Lo cual permite adelantar que es precisamente la cualidad energética del modelo sistémico, la que nos permitirá construir un *modelo de interpretación sobre el proceso de la transición*, sobre un proceso social, humano, determinando como eje de exposición *la reproducción del poder, la transformación de sus símbolos, la forma que adquiere a partir de los discursos que dan forma al espacio público de la modernidad de fin y principio de siglo.*

Para Bertalanffy el primer reto que enfrenta una interpretación desde la teoría de los sistemas es si ésta, o cualquier otra, tienen la capacidad de responder a la complejidad de la realidad social, así como de la totalidad de sus campos o formas de expresión. De esa forma, es la perspectiva sistémica la que emerge con una clara capacidad para observar y comprender la complejidad y dinámica de los sistemas socioculturales, propiciando la superación de interpretaciones parciales que reducen sus objetos de estudios, sus sistemas socioculturales a sistemas aislados, cerrados a las influencias de su entorno. No obstante, dada la misma naturaleza de la teoría de los sistemas y la gran diversidad de los objetos de estudio que ofrece la realidad social, la aplicación de los modelos interpretativos deberán de ser contruidos: “... *de acuerdo con la naturaleza del caso y con criterios operacionales*” (Bertalanffy, 1976: 27). Esto es, con un conocimiento mínimo del objeto de estudio que permita aplicar el modelo interpretativo de la manera más pertinente.

Entonces, la primera cuestión que es ineludible para comprender el alcance de un *modelo sistémico-energético*, es la propia idea de lo que es un *sistema*, y nuestro autor nos ofrece una primera definición, aparentemente simple: “...*conjuntos de elementos en interacción*” (Bertalanffy, 1976: 38). Lo cual nos permite asumir ya sea la totalidad o privilegiar los elementos más significativos que resumiendo su intercambio, nos den cuenta

de la complejidad del proceso sociocultural. Esto nos permite reordenar a una realidad que se nos presenta en forma de caos, ininteligible, ordenándola, y por tanto, haciéndola comprensible. Por ello es importante considerar que todo modelo aparece, en una primera instancia, como una reducción de la complejidad social, misma situación que se resuelve a partir de la pertinencia del propio modelo que necesariamente se sustentará teórica y conceptualmente. Sin ello, la complejidad de la realidad siempre aparecerá en forma de caos, incomprensible al sentido común.

La segunda cuestión fundamental es la de la *entropía*, que es la energía generada por cualquier *sistema abierto*, y que le permite mantenerse en equilibrio. Tal idea es sugerente por lo que supone de antemano; si la entropía la relacionamos con la reproducción y el ejercicio del poder dentro de un sistema sociocultural, de tal forma que la generación de mayor poder o la disminución del mismo, explique bien el desequilibrio de un sistema o la crisis del mismo, según sea el caso. De ahí deriva el hecho que en la aplicación humanista de la teoría sistémica se considere el fenómeno de la *entropía negativa*, pues evidentemente la generación de la energía no se reduce a la lógica de sistemas abiertos, biológicos, que en todo caso cumplen un ciclo de vida, y que por tanto fenecen, sino comprende también sistemas sociales que persisten en el tiempo, sometidos a cambios que suponen una generación mayor de energía, misma que les permite desarrollarse como tales.

El tercer aspecto central de la teoría sistémica es el papel que juega la *comunicación* (Bertalanffy, 1976: 43), que en todo caso, abre la posibilidad de la *retroalimentación* entre las partes del sistema y entre el sistema y su entorno. Esta característica nos permite, según los propósitos planteados, otorgar la importancia requerida en la reproducción de la política moderna, al papel que juegan los discursos políticos, sean que éstos se esgriman desde el poder o que sean dirigidos desde la base hasta la cúspide de un sistema jerárquico. Así, la misma comunicación, los *flujos de comunicación* que permiten la reproducción de cualquier sistema sociocultural, y por ende de los políticos, son los que hacen posible comprender los símbolos que se recrean en los *rituales de la política moderna*.

Por otra parte, es pertinente señalar que, sin duda, en el campo de las ciencias sociales Parsons constituye la referencia obligada en el estudio de la teoría de los sistemas. A este autor debemos los primeros bosquejos sobre dicho enfoque en el tratamiento de la

realidad social, pues hace patente, sobre todo en su sugerente libro *El sistema social*, la articulación de los principales *subsistemas societales* que permiten comprender la vinculación entre política, economía y cultura, descubriendo su permanente e inevitable intercambio.

El enfoque de Parsons sobre la teoría de los sistemas, el análisis sistémico, refleja, no solo la articulación de los subsistemas sociales para explicar la realidad, sino también la clara influencia de la psicología que desde Freud hace considerar el papel de las entidades microsociales: al individuo. Lo cual permite, entonces, considerar los posibles intercambios sociales desde lo individual a lo colectivo y viceversa. De ahí la importancia que adquiere la personalidad, pero sobre todo, la forma en que el individuo introyecta el rol social que le ha sido asignado. En ese sentido, un elemento de capital importancia en el análisis social en general, y que permanentemente aparece en los planteamientos de Parsons, es el papel que juegan las expectativas construidas por los propios individuos, sea en el plano individual o colectivo. Como él lo señala, la teoría de los sistemas se construye sobre la acción e interacción social, lo que plantea como objetivo general el establecimiento de los vínculos relacionales entre los individuos y los diversos grupos sociales, entre el individuo y la colectividad, entre la personalidad (la individualidad) y la cultura, etcétera.

Parsons presenta al análisis sistémico como un esquema relacional. Dicha interpretación habrá de leerse a dos niveles, el primero, considerando la relación (intercambio) entre los principales sistemas societales: la economía, la política y la cultura. Segundo, considerando la relación entre los miembros de la sociedad, individuales o colectivos. Desde luego, existen planteamientos de la teoría de los sistemas más acabados y actuales que ponen énfasis en el papel que juegan los individuos como unidades microsociales en la explicación de los sistemas y su ambiente, como es el caso de utilizar el enfoque sistémico para desentrañar, por ejemplo, el papel que juegan los individuos en los objetivos que persiguen las organizaciones (Crozier y Friedberg, 1990). Todas las posibilidades que la complejidad social ofrece para ensayar una interpretación sobre ella, explica el por que Parsons considera a los sistemas sociales como una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí, motivados para obtener el máximo de gratificación material o simbólica (Parsons, 1988: 17).

No obstante, sería arriesgado sostener que en la interpretación sistémica de Parsons se define nítidamente un esquema analítico sustentado en la teoría de los sistemas. Como se puede apreciar en la ausencia teórica y conceptual para establecer, por ejemplo, la relación entre el *sistema* y el *ambiente*, los límites entre los *subsistemas*, sus intercambios, etc. En ese sentido, si bien es necesario reconocer el valor del aporte a las ciencias sociales que inicialmente hace Parsons, también es pertinente señalar que son otros autores quienes ofrecen una versión muy refinada de esta teoría, lo cual permite dar forma a un esquema analítico que haga más comprensible la realidad social que vivimos.

Esa es la razón por lo que esta exposición se centra en autores como Deutsch, Easton, Luhmann y Adams, en un intento por presentar una interpretación política de la teoría de los sistemas. Los dos primeros, claramente situados en la lógica de la ciencia política, es decir, destacando el sistema de toma de decisiones; mientras los segundos, en enfoques que hacen evidente cómo la teoría de los sistemas facilita al investigador el articular la política, la economía y la cultura, definiendo, indistintamente, como eje explicativo cualquiera de esos ámbitos.

Por último cabe aclarar que Luhmann es incluido, además de su solvente “esquema” de teoría de los sistemas, por el peculiar manejo teórico y conceptual que hace del poder en la lógica sistémica. En el caso de Adams, porque, sin que él mismo se adscriba a lo que aparece como una suerte de “escuela” de la teoría de los sistemas, sugiere con su modelo energético, que la transformación de energía da cuenta de la transformación del poder y, por tanto, de los intercambios (flujos) entre economía, política y cultura. En ese sentido se dirigen los siguientes apartados.

### *1.1.1 El análisis sistémico en Deutsch e Easton.*

La primera idea a destacar en estos autores, Deutsch e Easton, es que reconocen los límites de la teoría de sistemas en la medida que representa una simplificación de la realidad social. En el caso de Deutsch, se aprecia la crítica al conocimiento que en ocasiones no es lo suficientemente objetivo para dar cuenta de la realidad social (Deutsch, 1985: 37); mientras Easton siempre está llamando la atención sobre la profunda complejidad que representa el tratamiento de los objetos sociales (Easton, 1969: 60). De tales reflexiones se advierte la

dificultad para aprehender la realidad más allá de la diversidad social, ya que la sociedad como objeto de estudio se encuentra en constante transformación. Entonces, la comprensión de los sistemas políticos dependerá de la capacidad metodológica de la ciencia, en este caso de la antropología, para captar, prever y resolver los momentos caracterizados por una determinada tensión social. El carácter de dicho fenómeno es el que, en última instancia, determinará si el tipo de presión pone en peligro la *permanencia* de un sistema en general, y del sistema político en particular.

Por esa razón, para Deutsch los modelos analíticos han de cumplir con las siguientes funciones: la *organizativa* que se encarga de ordenar y relacionar los datos, imprimiendo coherencia a la realidad específica que pretendemos comprender; la *heurística* que es la capacidad inventiva del sistema para resolver las contingencias que enfrenta su desarrollo; la *predictiva* que supone la experiencia (memoria) del sistema para resolver situaciones de tensión, y la *medición* que permite cuantificar las variables que influyen en los diversos fenómenos, producto de la propia reproducción del sistema. A partir de estos puntos, de la coherencia y articulación de estas funciones, es como el modelo analítico adquirirá pertinencia. En todo caso, estos aspectos son los que propician la *certidumbre* sobre las tendencias del sistema.

Es evidente que la intención específica de Deutsch e Easton es desentrañar la “naturaleza” general de los sistemas políticos, de tal forma que el modelo analítico que ellos proponen centra su atención en el ejercicio del poder y, más específicamente, en el proceso de toma de decisiones.

En ese sentido, lo más relevante en este tipo de enfoques es la identificación de lo que conformará el sistema, la definición de sus límites para diferenciarlo del ambiente, así como su consistencia para resistir las presiones generadas en su interior o provenientes del exterior. Es decir, se trata de un modelo analítico que considera al sistema social a partir de la relación sistema-ambiente, estableciendo así el carácter dinámico al que debe responder el modelo. La teoría de los juegos y otras teorías que se asocian a la teoría de los sistemas, coadyuvan al entendimiento del análisis sistémico en la medida que analizan a la realidad social desde la lógica de un modelo estático. Sin embargo, la interpretación sistémica posibilita superar dicha limitación a partir de una interpretación analítica, integral y dinámica (Deutsch, 1985: 91)

a. *Los elementos del análisis sistémico.*

En el caso de Deutsch, la influencia de los sistemas cibernéticos y de las ciencias de la comunicación propicia que en su aporte a la construcción del modelo de análisis sistémico se advierta la influencia de fenómenos físicos, que al hacer la lectura de lo social sugiere conceptos explicativos tales como los de *autocontrol* y *autoconducción*. Tales factores captan la especificidad de las funciones sistémicas encaminadas a mantener la comunicación, la organización y el control, marcando el intercambio del sistema con el exterior (Deutsch, 1985: 105). Como se puede apreciar, estas funciones coinciden con los principios a cumplir por todo modelo analítico que pretenda poseer un sustento científico: el de la *organización*, la *heurística*, la *predictiva* y la *medición*. Así, desde la propuesta de Deutsch la atención del análisis sistémico se centra en los procesos de comunicación que sustentan la *toma de decisiones*. De tal manera que, a diferencia de Easton, la rigurosidad para diferenciar al sistema del ambiente, se logre a partir del concepto de *retroalimentación*, la cual, en última instancia, responde a la percepción que el sistema tiene acerca del ambiente, es decir, el identificar a la *información* como algo fundamental en este enfoque.<sup>1</sup>

En el caso de Easton, *el objetivo que persigue el análisis sistémico es revelar cómo un sistema político puede persistir en un mundo de cambio*. La base de su planteamiento se circunscribe a la influencia de las ciencias de sistemas o de la comunicación, pero en general, según este autor, se trata de un enfoque interdisciplinario que permite un análisis integral al relacionar el sistema con el ambiente (Easton, 1969). El problema, entonces, es que no existe una forma única de conceptualizar toda la diversidad y complejidad de la conducta política.<sup>2</sup> En ese sentido, el *análisis sistémico* representa un espectro amplio que al menos posibilita una visión global de los elementos centrales de un modelo analítico de estas características, como son: el *sistema*, el *ambiente*, la *respuesta* y la *retroalimentación*.

---

<sup>1</sup> De hecho es pertinente adelantar que en *Los nervios del gobierno*, la interpretación de Deutsch sobre el papel que juega la información entre los intercambios del sistema con el ambiente, equivale a la interpretación que Luhmann hace más tarde, sobre la teoría de los sistemas, en su *Sociología del riesgo*.

<sup>2</sup> Para Easton la conducta política ha de ser evaluada a partir de: regularidades, verificación, técnicas, cuantificación, sistematización, ciencia pura e integración. Pág. 27.

Como lo plantea Deutsch, el propósito del análisis sistémico es entender cómo un sistema político persiste ante tensiones que el ambiente ejerce sobre él.

El primer problema para dar forma al modelo analítico es, precisamente, que el término *sistema* proviene de las formas de funcionamiento de los “sistemas” naturales. De manera que, primero, tengamos presente la *búsqueda de acciones sociales interdependientes* que den cuenta de lo político. Estas relaciones habrán de manifestarse a partir de su interconexión, así como también hacer evidente su pertenencia al sistema seleccionado. Se trata de determinar si el conjunto de actividades que nosotros consideramos como sistema, representa aspectos relevantes y, al mismo tiempo, nos ayuda a comprender algunos planteamientos teóricos referidos a lo político (Easton, 1969).<sup>3</sup>

En Easton también existe el reconocimiento acerca de la profunda complejidad de la realidad social, así que la sugerencia inmediata para solventar la simplicidad del modelo del análisis sistémico, sea que el sistema político a estudiar corresponda a un objeto de estudio que el investigador conozca previamente. Es entonces cuando ese conocimiento nos permite “complejizar” el modelo analítico propuesto. De la misma forma, ello permitirá al investigador establecer las fronteras entre el *sistema* y su *ambiente* (Easton, 1969: 60).

Un aspecto fundamental tanto en el planteamiento de Deutsch como en el de Easton, en la medida que su modelo analítico pretende captar la “naturaleza” de un sistema político, es que el *sistema* va quedando de antemano definido a partir de reconocer, y por tanto de aislar, el tipo de interacciones entre los individuos o grupos sociales referentes a la práctica del poder. Este proceso de aislamiento es el principal instrumento para simplificar la realidad, sobre todo si se tiene la conciencia de que es prácticamente imposible abarcar todos los aspectos que describen la conducta humana.

Un concepto fundamental en todo tipo de análisis político es el del poder. En ese sentido será importante, más que tener una definición de éste, definir cómo se le identificará en el contexto del análisis sistémico. Al respecto, Deutsch señala que el poder significa: la capacidad de un individuo y una organización para imponer extrapolaciones o proyecciones de su estructura interna sobre su ambiente (Deutsch, 1985: 140).

---

<sup>3</sup> Para Easton: Si delimitamos el sistema observado o escogemos una serie particular de elementos políticos de entre todas las combinaciones que podrían formar un sistema, es porque fundándonos en varias razones teóricas creemos que algunas variables tienen mayor significación que otras para la comprensión de este punto. Pág. 57.

Como se puede observar en esta aproximación del concepto de poder, en un sentido estricto del análisis sistémico, se hace necesario crear el instrumental analítico necesario para comprender cómo una forma de organización controla el ambiente. La *información* aparece en este autor, como el sustento de la *toma de decisiones*, y por tanto, del poder mismo. De tal forma que la falta de conocimiento del ambiente (que se adquiere a través de la capacidad para procesar la información) provoca la erosión de las estructuras de poder, amenazando la estabilidad del sistema, lo que habrá de resolverse mediante su capacidad de transformación para *prevalecer*.

Así, el poder es visto por Deutsch como un elemento contradictorio que puede volverse en contra del propio sistema, puesto que una deformación del poder lo puede conducir a subestimar las transformaciones del ambiente: *En lenguaje más sencillo, tener poder quiere decir no tener que ceder, y obligar al ambiente o a la otra persona a que lo hagan. Poder, en sentido restringido, es la prioridad de la salida sobre la entrada* (Deutsch, 1985: 140). Esto es, la decisión que toma quien o quienes poseen el poder, sobre la demanda que la sociedad (vía discurso o movimiento social) plantea en el espacio público, a las autoridades gubernamentales.

Por otra parte, para delimitar al *sistema político* es importante comprender que la unidad social más incluyente es la sociedad. Dicha entidad constituye un *suprasistema* en el que se recrea lo político, lo económico y lo cultural, por lo cual al diferenciar *lo político*, inmediatamente lo aislamos del resto de las interacciones sociales, destacamos su relevancia para comprender las relaciones más significativas que permiten reconocer la vinculación de las partes del sistema. En primera instancia, las interacciones que quedan fuera del sistema político se ubican en el *ambiente* en el que éste se reproduce. Esta diferencia adquiere forma al reflejar con nitidez los *intercambios o transacciones* que tienen lugar entre el *sistema* y el *ambiente* (Deutsch, 1985: 76).

Como el *sistema* queda definido a partir de la diferenciación de un determinado tipo de interacciones sociales, en este caso de carácter político, la ubicación de sus límites tomará en consideración el tipo de acciones individuales o colectivas encaminadas hacia la *asignación autoritaria de valores para una sociedad* (Easton, 1969: 79). De tal forma que el segundo problema a sortear para *delimitar el sistema* depende de *una situación relacional con el ambiente desde el cual se vierte la entrada de energía al sistema*. Ello

determina la *cualidad energética de la teoría de los sistemas*. En el caso de Deutsch, este proceso aparece como la imagen del *ambiente* que el *sistema*, la estructura gubernamental, procesa y transforma en *información* que a la vez constituye la base para *dar respuesta a las señales externas*. Esto apunta a reconocer y especificar otro aspecto de la política moderna, donde las *entradas al sistema* (en nuestro caso, político) están determinadas por las demandas que la sociedad plantea a su gobierno.

*b. La importancia del ambiente.*

Uno de los aspectos fundamentales del *análisis sistémico-energético* para probar la consistencia del modelo analítico es, precisamente, el papel que juega el *ambiente*. Este elemento impone al analista político la necesidad de reconocer la profunda complejidad de la realidad social. Más aún, si consideramos la interdependencia de los ámbitos político, económico y sociocultural, la selección de una de estas líneas de análisis sobre el desarrollo de la sociedad no nos libera de un tratamiento riguroso del efecto que en el ámbito político, provoca lo económico y sociocultural. En términos estrictos, el analizar las partes del sistema político así como el carácter de las funciones que cada una cumple, propicia, necesariamente, el considerar o mantener latente la vinculación entre *sistema* y *ambiente*. La importancia de establecer fronteras entre uno y otro, nos hace reconocer que no es posible pensar la existencia de un sistema político aislado de su entorno social. Esto es, que no existe sistema sin ambiente. La cuestión es considerar que la elección de una estructura o aspecto de la realidad social (económica, política y sociocultural), obedece a la elección arbitraria del investigador, dejando al resto, al contexto donde se reproduce e intercambia energía el sistema, en calidad de *ambiente* o *entorno*)

En todo caso, el mismo *ambiente* es el factor social que impone al modelo analítico el carácter dinámico que en principio todo objeto de estudio referido a lo social tiene en sí mismo. La interacción con el exterior, las condiciones que se mantienen, los cambios que se registran, son factores determinantes que marcan el grado de consistencia del sistema. Es decir, la capacidad que éste tenga para persistir. De hecho, la relación o intercambio entre el *sistema* y el *ambiente* nos señala el tipo de influencia que el exterior ejerce sobre él, por lo

tanto, la interacción entre uno y otro nos sugiere la consistencia de las estructuras del poder que adquieren forma en un sistema social determinado.

En principio, el solo hecho de definir que el análisis sistémico tiene como objeto de estudio al sistema político hace que lo económico y lo cultural queden ubicados en el ambiente. En ese sentido, la delimitación del sistema nos permite observar la interacción entre los miembros de la sociedad, entre uno y otros subsistemas. Así como lo sugiere Deutsch, se pueden comprender las demandas específicas que la sociedad hace al *sistema* político. De tal forma que el *apoyo a los gobernantes justifica la legitimidad de las decisiones tomadas. Hay un intercambio de apoyo específico por decisiones específicas y confiables, sensibles a las demandas específicas, procesos que, en el plano económico recuerdan al trueque económico* (Deutsch, 1985: 147).

Por otra parte, Easton considera que la relación entre la sociedad, las demandas que los diversos sectores sociales, actores políticos o individuos/ciudadanos hacen al sistema político, representan la expectativa que esperan de las autoridades decisiones que favorezcan sus intereses concretos. Como se sabe, no existe algún sistema político con capacidad para satisfacer todas las demandas provenientes de la sociedad a la que formalmente representan, por lo que habrá de esperar que ciertas demandas se atiendan mientras otras quedan excluidas.

De esta forma, la respuesta que el sistema político tiene respecto a las demandas de la sociedad determina el surgimiento o eliminación de tensiones sociales que presionan a las autoridades. De tal manera, como lo sugiere Deutsch, la *red de aprendizaje*, la *consistencia de la información* con que cuenta el gobierno, ha de determinar la magnitud de la amenaza real que representa el hecho de atender cierto tipo de demandas, como por ejemplo, cuestiones sobre vivienda, salud, educación, empleo, democracia, etcétera. El *control que el sistema tiene sobre el ambiente* lo conduce a evaluar el peso político real de cada actor que presenta demandas concretas para satisfacer sus intereses específicos. En esta perspectiva, el sistema aparece como la parte que posee la capacidad para influir en las condiciones del *ambiente*, aunque en la interpretación de Easton al considerar la *totalidad sistémica*, la dinámica del *ambiente* puede rebasar la capacidad del *sistema*, y por tanto, lo podría someter a tal presión que no deje otra opción a éste, que optar por la transformación de sus prácticas y/o estructuras.

El reconocer la importancia que el *ambiente* adquiere en el *análisis sistémico* nos sitúa en una lógica que conduce a plantear cómo el objeto de estudio, al ser analizado en su *interacción con su entorno*, está permanentemente expuesto a los cambios del *ambiente*. Al respecto, Easton señala: “...una concepción explícita de los límites nos ayudará inmensamente a simplificar, interpretar y comprender cómo los cambios en el ambiente se comunican a un sistema político, y cómo el sistema intenta hacer frente a estas influencias” (Easton, 1969: 93)

Como se puede observar, la ausencia del ambiente nos remitiría a un ámbito obviamente restringido de la realidad social, en este caso al espacio reducido del sistema político, obligándonos a trabajar en la lógica de un modelo prácticamente cerrado. Se hace claro que no se trata de reducir a la realidad circunscribiendo el análisis a la estructura interna del sistema, situación necesaria para observar el funcionamiento de sus partes y comprender las causas de tensiones que emergen de él mismo. Pero al mismo tiempo la comprensión del sistema adquiere integridad cuando se analiza su funcionamiento en interacción con el exterior

En ese sentido, el analizar al sistema desde la óptica de un modelo analítico cerrado nos impediría reconocer que su misma reproducción, *su permanencia en el tiempo*, depende de la *retroalimentación proveniente del ambiente*. De ahí la importancia de tener presente que el sistema político ha de analizarse a la luz de un modelo analítico abierto (Easton, 1969: 94), y por tanto, que reconoce los intercambios con su *entorno*.

La influencia de las ciencias de la comunicación, aunque menos que los sistemas biológicos, promueve la explicación del análisis sistémico a partir de una relación insumo-producto. Esto sugiere, en términos de comunicación, el tipo de relación existente entre el sistema y el ambiente a partir de entradas y salidas. De tal manera que las demandas, formas de comunicación política, representan las entradas al sistema, y las salidas, decisiones de las autoridades gubernamentales. Los apoyos o críticas a tales decisiones, es lo que en todo caso determinará la legitimidad o deslegitimidad de una política. El equilibrio o crisis de un sistema político.

Nuevamente, adquiere relevancia el definir las características de los límites que hacen posible diferenciar nítidamente al *sistema* y al *ambiente*. Como es obvio, en el caso de Deutsch, la identificación es mucho más fácil ya que las prácticas políticas se

circunscriben a la relación de la sociedad y los *nervios del gobierno*, esto es, la estructura burocrática en su función de administradora pública de justicia, así como del control de la violencia legítima. De hecho, como lo señala Easton, la mejor manera para comprender el *análisis sistémico* es mediante el conocimiento de un objeto de estudio que se circunscriba en el ámbito de la vida política de una sociedad. Por esa razón, la diferencia *sistema-ambiente* y, por tanto, la identificación del límite entre ellos se hace más comprensible.

No obstante, desde otra perspectiva del *análisis sistémico*, otro de los requisitos que ha de cumplir el modelo es contemplar dos tipos de intercambio que registra un sistema social: el *intrasocietal* y el *extrasocietal*. La explicación tiene que ver con la complejidad y variedad de intercambios que tiene un sistema político circunscrito en el marco de un Estado moderno. Por ello, Easton propone considerar un ámbito *intrasocietal* que se refiere a los intercambios entre las estructuras políticas, económicas y socioculturales de una sociedad. De manera más precisa, a los intercambios entre su sistema político, su economía y su cultura, donde el primero queda definido como “sistema” y la economía y la cultura como el “ambiente”. Y el ámbito *extrasocietal* definido por el tipo de intercambios que una nación tiene con su entorno internacional, tanto en los ámbitos político, económico y cultural.

Tal ejemplo sirve para considerar la posibilidad de que el *ambiente* tenga una *doble composición*, la inmediata, en el caso del ejemplo, la nacional, y la posterior, que contempla los intercambios con el sistema mundial del que provienen influencias políticas, económicas y culturales (Easton, 1969: 105).

La importancia de este enfoque del *análisis sistémico*, fundamentalmente en Easton, es que se distingue a las relaciones del sistema con la sociedad a la que pertenece o a las relaciones con el sistema internacional. Esta diferencia nos permite evaluar el grado de susceptibilidad de un sistema político, así como de su sociedad, ante los cambios económicos, políticos y socioculturales que se registran en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, se puede estimar la consistencia de un sistema político al mantener relaciones específicamente económicas, así como de carácter cultural.

En esta misma línea de reflexión se hace factible comprender la importancia que en el modelo analítico de Deutsch adquiere el manejo de la información. Para él, conforme la comunicación es el aspecto central para establecer el *análisis sistémico*, la información que

procesa el sistema político es el elemento fundamental para consolidar la *red de aprendizaje* (memoria) que permitirá dar la consistencia requerida por el modelo analítico. *La información, entonces, constituye el factor energético del sistema político y, en esa medida, el poder concentrado en la estructura burocrática se refleja en la eficacia con que se toman las decisiones gubernamentales.* Por lo tanto, la *capacidad de aprendizaje* que el sistema político tenga respecto de su sociedad (el *ambiente*) determinará, en todo caso, la posibilidad de su *persistencia* (legitimidad). Al mismo tiempo, la información constituye el tipo de influencia que el *ambiente* tiene sobre el *sistema*, más aún, en el caso del análisis de Deutsch, las señales que el *ambiente* emite y que aparecen en el seno del poder en forma de información, son *la razón de ser* de las estructuras de gobierno manifiestas a partir de decisiones que intentan responder a las señales recibidas (entradas-demandas) del *ambiente*. La *retroalimentación*, captada en forma de información, determina la capacidad del sistema para detectar los problemas sociales más urgentes, y en la medida que éstos sean atendidos definir la capacidad de *autoconservación* del *sistema*. Esto es, que la *red de aprendizaje* ha de tener tal capacidad para detectar los conflictos potenciales que exigen la atención gubernamental, que la respuesta a éstos constituye la capacidad de las estructuras de poder para prever situaciones de tensión social que amenacen en el futuro inmediato al sistema (Deutsch, 1985: 122).

c. *El problema de la persistencia.*

Es pertinente recordar que los sistemas biológicos cumplen un ciclo vital que finalmente los conduce a la extinción. Es decir, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Evidentemente la influencia biologicista en el *análisis sistémico* tiene que ser modificada según las características del objeto de estudio, esto es, tener siempre presente que el objetivo de los sistemas sociales es la *persistencia*. En ese sentido, la influencia de los sistemas cibernéticos en los que se apoya Deutsch, permiten asimilar más fácilmente la cuestión de la *persistencia* del sistema, ya que el modelo analítico parte de un hecho central: *todo sistema social es un sistema abierto y, por tanto, susceptible a los cambios del ambiente.* Otra característica de los sistemas, según lo señala Easton, es que los sistemas políticos “...no están necesariamente indefensos frente a las perturbaciones que

*los pueden afectar. Sus procesos y estructuras no reciben impunemente los caprichosos embates del azar”* (Easton, 1969: 113).

Por eso el papel de la información adquiere vital relevancia en el modelo analítico propuesto por Deutsch, ya que a partir de ésta se puede mantener el control y, por tanto, prever los cambios o posibles amenazas que se gestan en el ambiente. Considerando, entonces, que el análisis sistémico no se puede fundar en un modelo de análisis cerrado, es fácil reconocer que su principal objetivo es estudiar cómo persiste el sistema (Easton, 1969: 128). Esto presupone identificar que un sistema no se mantiene de igual forma, en una condición permanente o constante en un periodo significativo de su historia, ya sea que se transforme o se agote totalmente. En esa misma lógica, Deutsch nos diría que el peligro de la *no-persistencia* depende de la capacidad de los miembros del sistema para procesar la información proveniente del ambiente, y actuar en consecuencia. En todo caso, la pertinencia de la toma de decisiones dependerá de la eficacia para procesar la información y para generar la respuesta adecuada para la solución de posibles conflictos sociales, situación que coadyuvará a garantizar su *persistencia*.

Cabe destacar que la capacidad del sistema político para *automantenerse*, no permite afirmar mecánicamente que el sistema siempre contará con recursos para solventar situaciones de tensión. La capacidad *homeostática*<sup>4</sup>, entonces, se ve cuestionada cuando se ha afectado una parte vital del sistema. En esa situación habrá de esperarse un proceso de transformación o cambio, promovido ya sea desde el interior del sistema o por nuevas formas de intercambio con el ambiente.

Para Deutsch el que un sistema tenga capacidad para mantener su integridad así como *autoconducirse*, requiere de un flujo completo de *información acerca del mundo exterior, del pasado, sobre sí mismo y sobre sus partes*. Este proceso de permanente aprendizaje le retribuye al sistema la capacidad para producir reordenamientos internos que posibiliten la readecuación de su comportamiento con el ambiente (Deutsch, 1985: 158). De hecho la integridad y, por tanto, la *permanencia del sistema depende de su capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones que va adquiriendo el entorno*. Nuevamente aparece la información como elemento sustancial del ejercicio del poder. La *autoconservación* del

---

<sup>4</sup> La homeóstasis al control que ejerce el sistema para regular la retroalimentación requerida para mantenerse en equilibrio, esta es una de las principales características de todo sistema abierto, como lo sugiere Bertalanffy, Deutsch, Easton, Luhmann y Adams, en las obras que en esta investigación se citan.

sistema depende, entonces, de la flexibilidad de sus canales de comunicación, aunque en mayor medida de su capacidad de respuesta a las presiones del ambiente.

La relación *insumo-producto* es la que nos permite simplificar la relación entre el *sistema* y el *ambiente*, aunque en lo inmediato refleja la *retroalimentación* entre el sistema político, el económico y el cultural; entre el gobierno y la sociedad. Por lo tanto, las *demandas* que hacen los diferentes sectores sociales o el *apoyo* que éstos manifiestan ante una situación favorable al sistema, es una forma de expresión del circuito *insumo-producto*. Este tipo de intercambio, por ejemplo la credibilidad que una sociedad tiene respecto de sus gobernantes, se manifiesta en términos de *consenso* y, por tanto, de legitimidad. En cambio las *demandas* o *críticas al sistema* que necesariamente han de ser captadas del espacio público, por su propia naturaleza, invariablemente generaran presión sobre el sistema. Si éstas son resueltas, el insumo se puede traducir en consenso, mientras que si se trata de una demanda que el gobierno no puede resolver, el producto (una no-respuesta) se expresa a partir de repudio y, por tanto, de tensión sobre el sistema.

En todo caso el insumo se traduce en un reto para el sistema en la medida que éste requiere dar respuesta a la señal proveniente del exterior. Como ya apuntamos, la falta de capacidad del sistema para responder, por ejemplo, a una demanda social, provoca el *fracaso del producto*, esto es que no hubo respuesta o que ésta no significó el alivio a una situación de tensión. Por esa razón es importante considerar que ningún sistema puede dar respuesta satisfactoria a todas las demandas y, por ello, de antemano es de esperarse que el malestar de un sector social provoque presión sobre el sistema político. Al definir Easton a las demandas como *proposiciones articuladas que se formulan a las autoridades para que lleven a cabo alguna clase de asignación autoritaria* (Easton, 1969: 166), estaremos en condiciones de comprender mejor que la satisfacción de demandas, necesariamente, generará *apoyos* o *presiones*.<sup>5</sup> Los primeros por los sectores sociales beneficiados y, las segundas, por las demandas ignoradas. Bajo tal circunstancia es conveniente considerar que *el procesamiento de la información propicia que el sistema mantenga una actitud*

---

<sup>5</sup> Es pertinente recordar que para Easton el sistema político es un sistema de toma de decisiones en el cual, en la lógica del modelo sistémico, no se discute necesariamente la legitimidad de las decisiones. Cualquier intento por introducir el parámetro de la democracia será decisión del investigador que así lo juzgue conveniente para tratar su objeto de estudio. De tal forma que las decisiones de las autoridades gubernamentales son consideradas, en primera instancia, como *asignación autoritaria de valores*.

*vigilante* para mediatizar la presión sobre el sistema. Por esa razón, el sistema ha de buscar el respaldo de miembros más influyentes para “orientar” a la opinión pública.

### 1.1.2 *La propuesta de Luhmann.*

El *análisis sistémico* de Luhmann es una de las propuestas teórico-metodológicas más destacadas dentro de las ciencias sociales. En realidad, *Sistemas Sociales. Lineamientos para una Teoría General*, representa un planteamiento sorprendentemente profundo sobre la relación de los sistemas sociales y su entorno. Luhmann reflexiona a partir de la complejidad inherente a la relación sistema-ambiente, a diferencia de Deutsch e Easton, quienes intentan una formulación del modelo analítico desde la perspectiva política tendiente a esquematizar la realidad social.

En ese trabajo de Luhmann, la política se expresa como medio a partir del cual el sistema construye su *autoreferencia*, el Estado es la entidad que refleja las formas en que se ejerce el poder. Al respecto el autor señala que:

*“...se puede decir que el Estado es la autodescripción del sistema político. Es un artefacto semántico mediante el cual es posible concentrar la autorreferencia del sistema político y convertirla, como en el caso del dinero, en la referencia significativa paralela de todas las operaciones que deben fungir como elementos del sistema político....En cualquier caso, la orientación al Estado hace posible la condición cerrada de autorreferencia, ya asegurada en el sistema económico por medio del dinero, y la acopla al mismo tiempo a intereses de decisión, intereses y cambios estructurales en el entorno del sistema político (Luhmann, 1991:459).*

Vale la pena insistir en que a pesar de que en sus *Lineamientos para una Teoría General*, el autor no toma como eje explicativo a la política, y por tanto al poder, el equilibrio reflejado al analizar los intercambios de los principales subsistemas (político, económico y cultural) evita reducir la problemática social a lo político.

De hecho, una de las principales causas por las cuales se incluye a este autor es, precisamente, que no centra su propuesta en el sistema político, lo cual permite, por ejemplo, captar la complejidad del proceso de transición social o el fenómeno de la crisis, equilibrando la importancia que en su momento adquiere lo económico, lo político y lo cultural. Así se da forma a un modelo interpretativo de la realidad social que si bien toma

como eje de análisis al sistema político, también permitan incorporar el análisis de los demás ámbitos sociales, con la misma fuerza con que se considera lo que se ha seleccionado como sistema. Es decir, la propuesta de Luhmann es más flexible, de tal manera que abre la posibilidad de destacar la peculiaridad de cada uno de los ámbitos sociales que, en términos de prioridades, se ubica en el análisis como *subsistemas* y, por tanto, manteniendo su propia lógica, así como una influencia determinada sobre la totalidad sistémica (Luhmann, 1991: 30).

La perspectiva del *análisis sistémico* nos invita a diferenciar cada uno de los ámbitos de la realidad, reconociendo que ésta emerge como un todo, complejo, entrelazado a partir de la vinculación entre sus partes, *los subsistemas*, así como cada uno de ellos con el ambiente. Por ello, insistimos, la propuesta de Luhmann nos obliga a reconocer la complejidad de la realidad social contemporánea, evitando así que predomine la simplicidad a la que podría conducir el esquema sistémico.<sup>6</sup> De esa forma, la pretensión de construir un modelo de esta naturaleza exige cifrar la atención en el tipo de intercambio existente, no sólo en la relación sistema-ambiente, sino el que acontece, también, entre los *subsistemas*. En esa perspectiva el análisis sistémico permite atender los *subsistemas* que no han sido seleccionados para articular la interpretación de la realidad social, otorgándoles relevancia en la medida que nos permiten comprender las características que distinguen a cada estructura específica, la “naturaleza” de la estructura general. Así, cuando tratemos el problema de las estructuras de poder habrá que dejar claro cómo una contradicción detectada, por ejemplo, en el subsistema cultural, se transforma en un conflicto de carácter político, o cómo se constituye en una contingencia para la transformación de las relaciones económicas. Será, entonces, el momento en que el diferenciar un *subsistema* de otro, refleje la importancia de complejizar las posibilidades interpretativas del esquema que supone la teoría de los sistemas.

---

<sup>6</sup> Esto no quiere decir que el propiciar la simplificación de la realidad sea inadecuado para el tratamiento teórico-metodológico, como lo sugiere Luhmann: *Este desarrollo de la teoría sistémica se puede interpretar y extrapolar como tendencia, en la medida que transcurre con ciertas coincidencias,...Esto conduce a la siguiente tesis general: los sistemas sirven para la reducción de la complejidad, a través de la estabilización de una diferencia interna/externa. Todo aquello que ha sido dicho sobre los sistemas -diferenciación en partes, jerarquización, conservación de los límites, diferenciación de estructuras y proceso, esquemas selectivos del medio ambiente, etcétera- se puede analizar de modo funcional como reducción de la complejidad...* Niklas Luhmann (1986) “La teoría moderna de sistemas como forma de análisis social complejo”, revista *Sociológica*, núm. 1, primavera. Pág. 106.

El enfoque de Luhmann concede, para fines analíticos, cierta independencia a cada *subsistema* que conforma la *totalidad societal*, así como también enfatiza la *independencia relativa* y la complejidad del entorno. En esa medida cambia la interpretación de la relación entre éstos, de un proceso de *inputs-outputs* por un fenómeno exclusivo de intercambio. De esa forma se evita un “determinismo” político que puede corresponder al objetivo central de las ciencias políticas, abriendo paso a interpretaciones donde lo político es parte de la totalidad sistémica. Se evita así, situar lo económico y cultural como un primer nivel del entorno que en la interpretación de Easton aparece como ámbito *intrasocietal*.

En este contexto se hace comprensible cómo el *análisis sistémico* permite al investigador destacar un aspecto de la realidad. Esto presupone un proceso de selección en el cual se privilegia, con base a las características sociohistóricas del objeto de estudio, un ámbito en el que se desenvuelve. Sin embargo, como en el caso de la transición mexicana, habrá momentos en que sea prácticamente imposible aislar lo económico, lo político o cultural. Los límites entre los *subsistemas* o entre el *sistema* y el *ambiente*, emergen más como una convención tendiente a favorecer el análisis de un *subsistema* o un momento específico del proceso social, que a algo concreto que limita el intercambio entre las partes de la totalidad sistémica (Luhmann, 1991: 39).

Una interpretación sistémica como la propuesta de Luhmann exige conceder a cada *subsistema* una proporción en la composición de la realidad, en un momento específico del proceso social. Esto quiere decir que difícilmente podremos atribuir a un solo *subsistema* el cien por ciento del sentido impreso al proceso social. En todo caso, uno de ellos, el económico, político o cultural, predominará en una etapa de la transición dependiendo del aspecto que de ésta se destaque.<sup>7</sup>

La amplia diversidad de la realidad social exige al *análisis sistémico* reconocer la estructura que dé cuenta de su complejidad, de tal forma que ésta quede organizada como una complejidad estructurada, esto es, como una totalidad en la cual sus partes se articulan coherentemente. Ese es el principal reto al construir un modelo interpretativo que pretenda captar la complejidad de la realidad social, el *intercambio entre los subsistemas* y el

---

<sup>7</sup> Al respecto Luhmann señala: *La primera forma de descomposición es proseguida por la teoría de la diferenciación de los sistemas. La otra desemboca en la teoría de la complejidad de los sistemas. Sólo mediante esta distinción adquiere sentido, para no decirlo de una manera tautológica, el que la complejidad del sistema aumente al aumentar la diferenciación o el cambio de forma de la diferencia* (Luhmann, 1991: 43)

*entorno*, además que al tratar el problema, por ejemplo, de una transición, el objeto de estudio se torna mucho más complejo conforme a su carácter cambiante. De hecho, el análisis sistémico resulta un *excelente recurso teórico-metodológico para aislar los diferentes componentes del objeto de estudio, es decir, para seleccionar un aspecto de la realidad, explicarla a partir de su condición sistémica y resolver por partes la estructura de la transición*. Así, al paralizar el proceso social en el análisis, se determina la lógica de su cambio, el sentido que imprime la recomposición de uno de los subsistemas o su conjunto. La integridad del ambiente, su unidad, sugiere, por un lado, que la complejidad también determina la diversidad de formas de intercambio con el ambiente. Y por otro, siguiendo la propuesta sistémica de Luhmann, que al pasar a un segundo término la interpretación del intercambio entre *sistema y ambiente* a partir de *inputs-outputs*, posibilita una interpretación en la cual puede existir mayor influencia del ambiente hacia el sistema. Lo anterior apunta, pensando por ejemplo, a la sociedad mexicana como sistema, a reconocer la complejidad de intercambios con el ambiente que se expresa en lo económico, político-militar, ideológico, cultural, ecológico y tecnológico.

El problema de la complejidad de la realidad social exige al *análisis sistémico* definir los elementos que determinan la reproducción del sistema, su permanencia en el tiempo. De tal manera que la cualidad sistémica de la *adaptabilidad* que requiere el sistema para reproducirse, destaca la vinculación sistema-ambiente. Así la adaptabilidad responderá a dos cuestiones fundamentales: a su propia complejidad, esto es, a sus insuficiencias y contradicciones internas; y a la capacidad del sistema para adaptarse al ambiente. Evidentemente, el sistema pone a prueba la permanencia de las estructuras que le dan forma, cuando su relación *intrasocietal* o con el ambiente demandan de éste probar su capacidad de adaptación. Tal situación supone cambios en la dinámica interna o externa del sistema.

Este nivel de *análisis sistémico* perdería consistencia si no incorporara otro recurso conceptual como es *el tiempo*, entendido como un lapso histórico en que perdura un conjunto de estructuras que dan forma a la realidad social. Esto sugiere que los elementos del sistema, sus partes, tienen una persistencia cronológica que al llegar a un punto de crisis pueden amenazar la estabilidad de la totalidad sistémica. Quiere decir que la complejidad se temporaliza haciendo posible en el análisis, detectar la erosión de un subsistema, presente o

futuro, que provocará inestabilidad en el sistema. O bien su conjunto ha llegado o llegará a un momento de crisis y, por tanto, de cambio. Con un matiz de esta naturaleza estaríamos en condiciones de comprender que la *interconexión* de las partes del sistema define una suerte de relación causa-efecto. Esto reflejará las características y condiciones del sistema para definir su capacidad de adaptación a los cambios.

Por ejemplo, en el caso de un proceso social de transición, esta perspectiva de análisis permitirá articular los diferentes momentos, sus contradicciones y conflictos que desencadenan en un *presente* caótico donde la crisis económica, política y cultural, se combinan y ponen a prueba los recursos del sistema para persistir. Entonces, veremos cómo las crisis societales se provocan predominantemente por la erosión del sistema económico, otras, por las crisis políticas, y por último, por una crisis global que exige cambio en el conjunto de las estructuras sociales. En esa misma lógica, el *análisis sistémico* nos permitirá comprender el sentido que cada ámbito imprime al proceso social que se aprecia mejor a partir de las tendencias de la realidad social. Ello permite comprender las causas que promueven el cambio del sistema social, por ejemplo, de una condición tradicional a una moderna, de una situación autoritaria a una democrática, del populismo al neoliberalismo, etcétera.

La incorporación del *tiempo* como recurso metodológico-conceptual en el *análisis sistémico* define, así, la temporalidad de una condición específica del sistema. Lo cual propicia la superación mecánica de un modelo analítico que erróneamente pudiera pensarse como un modelo estático, idea reforzada por la imagen del esquema con el cual se simplifica el modelo sistémico.<sup>8</sup> Por ello el *recurso del tiempo* define la permanencia de características específicas del sistema, sus partes, y de la misma totalidad. En todo caso, resulta un excelente referente para comprobar el carácter dinámico de la realidad social. Sin embargo, conforme la dinámica sugiere una realidad en permanente cambio, vale considerar que el tiempo establece, cronológicamente, la reproducción de la sociedad sobre

---

<sup>8</sup> Al respecto Luhmann señala: *Al atribuir la previsión de la capacidad de enlace a cada una de las operaciones vinculadas con el sentido, parece que da buen resultado realizar una esquematización fuerte de las opciones en cada una de las dimensiones. En todo caso, la investigación empírica ha descubierto una serie de esquematismos que facilitan tales coordinaciones o su transformación. En la dimensión objetiva, la diferencia entre atribución interna y externa actúa como esquematismo principal, al poner en claro si el enlace de más operaciones deberá partir de causas internas o externas... Aquí se observa claramente cómo el esquematismo reduce complejidad, elimina las remisiones y posibilita enlaces. Se preserva el fungir simultáneo de ambos horizontes, interno y externo, así como la posibilidad de cambio en la atribución* (Luhmann, 1991: 102)

estructuras que permanecen cuando menos un mínimo de tiempo, suficiente para identificarlas. Permite, entonces, advertir el cambio de condiciones estructurales del sistema, de sus partes, de la totalidad, fijando así las diferencias entre pasado y presente. De esa forma podremos establecer el momento en que se gestaron los cambios sistémicos y, por tanto, el contexto social que demuestre la capacidad del sistema para adaptarse a los cambios internos o externos (Luhmann, 1991: 97)

Así, el tiempo establece diferencias en el proceso social, diferencias necesariamente vinculadas que permiten comprender la transformación sistémica. *Sin embargo, más que las virtudes del modelo analítico será el conocimiento del objeto de estudio lo que posibilite reconocer la especificidad del cambio sistémico.* El tiempo, entonces, lo sitúa en un periodo determinado que funge como enlace entre pasado y futuro.

Otro aspecto que adquiere relevancia en la interpenetración sistémica de Luhmann, como elemento de diferenciación de los componentes de la totalidad social, es la relación sistema-ambiente. El cambio de la condición sistémica se expresa, entonces, gestando nuevos rasgos que definen la constitución de los sistemas. Es importante advertir que la complejidad de la realidad social no radica exclusivamente en las múltiples manifestaciones de los componentes del sistema, sino inclusive, de la complejidad del entorno. Aquí la diferenciación emerge como forma de identidad sistémica, sin que esto haga aparecer al ambiente como un sistema, sino como uno de los principales elementos sistémicos que coadyuvaría a definir la identidad del sistema, y así constituir su unidad, por tanto, su diferencia en cuanto al resto del modelo sistémico. Como ya se había mencionado al revisar la propuesta de Easton, el sistema-ambiente es un binomio inseparable en cuanto a la realidad social, aunque aislable para fines analíticos. Esto es lo que posibilita comprender la complejidad implícita en cada parte sistémica, sistema o entorno.

Esto sugiere que hasta el mismo entorno puede ser objeto de selección y reconocido como parte importante del objeto de estudio, por tanto, en su momento, que resulte vital desentrañar su complejidad para comprender sus conexiones con el sistema. De tal forma, tratándose de cualquier parte sistémica, su primera interpretación aparece, también, como una simplificación de la complejidad social tendiente a identificar su articulación con la totalidad del modelo analítico. Se trata de un proceso analítico mediante el cual la

complejidad, correspondiente básicamente a una parte sistémica, queda expresada a partir del significado del aspecto analizado.

La relación sistema-ambiente, su vinculación, queda explicada fundamentalmente a partir del concepto de interpenetración. Entonces, habrá de insistirse que en realidad los subsistemas a los que se hace referencia pueden ser sintetizados a partir de los principales sistemas que conforman al sistema social: el político, el económico y el cultural. En ese sentido, cada sistema tiene un entorno distinto, primero, porque el seleccionar a uno de ellos, por ejemplo, el cultural, deja en el nivel intrasocietal, que podría considerarse como un primer nivel del entorno, a lo político y económico. La selección de otro ámbito social como sistema, automáticamente nos conducirá a definir un espacio intrasocietal diferente al primero. Segundo, porque aun pensando en el ambiente, a lo que Easton denominó como extrasocietal, también es de esperarse un entorno diferente pues la forma de comunicación entre cada uno de los subsistemas sociales, resignifica la condición extrasocietal, por lo tanto, se cumple con la hipótesis de que cada sistema tiene un entorno diferente.

Es precisamente en la parte del modelo sistémico que nos ofrece Luhmann, donde trata el papel del entorno, cuando quizás salte un cuestionamiento a su propuesta, ya que para él: *“El entorno es sólo un correlato del sistema, no lo puede manejar, ni puede influir sobre él. Por eso se puede decir que una referencia indeterminada al entorno permite al sistema totalizarse a sí mismo. El entorno es simplemente todo lo demás.”* (Luhmann, 1991). Sin embargo, más adelante el autor menciona que el ambiente es mucho más complejo que el sistema mismo.

Al respecto, consideramos que afirmar que el entorno no influye sobre el sistema es cuestionable, pues todo depende de la situación del objeto de estudio seleccionado como sistema. Por ejemplo, si la intención fuera analizar cómo se distribuyen las elites el poder en México, el objetivo de la investigación obliga a definir como sistema al ámbito político, por tanto, el resto del sistema societal, el sistema económico y el cultural, representará al ámbito intrasocietal, y lo internacional, lo extrasocietal. Los límites intrasistémicos estarán definidos, entonces, por la relación nacional/internacional. Establecida como una convención y siguiendo la afirmación de Luhmann, tendría que mantenerse como premisa que el ambiente no influye sobre el sistema, y esto en el caso de la sociedad mexicana, no tendría muchas posibilidades de corroborarse, pues al tratarse de una sociedad dependiente

nos conduce a concluir que se trata de un sistema vulnerable al cambio registrado en el ambiente. Esto no niega, evidentemente, la complejidad de uno y otro lado, la apertura y la conexión entre ellos; pero el ejemplo de una realidad histórica concreta como es el caso de la realidad social mexicana, y muchos otros más, cuestiona esta interpretación de Luhmann sobre la teoría de los sistemas.

El exceso al que nos puede conducir el análisis sistémico de este autor existe porque se transfieren, casi mecánicamente, las funciones de los sistemas físicos y biológicos a objetos de estudio sociales. De ahí que a las partes del sistema se les confiera una especie de funcionamiento autónomo. Los componentes parecen poseer una capacidad de decisión que no requiere la presencia de individuos o actores sociales.<sup>9</sup> Por esa razón no resulta pertinente sugerir, siquiera teóricamente, que cualquier parte de la totalidad sistémica tiene la capacidad por sí sola, como sistema, de inferir sentido al proceso social. Luhmann concede a las partes sistémicas la capacidad que realmente le corresponde al papel que desempeña la sociedad, a los actores políticos, económicos y culturales. Pero en todo caso, a sugerencia del mismo Luhmann, quien no creo que pretenda que su propuesta sea tomada como verdad absoluta, la corroboración de su planteamiento teórico tendría que confrontarse con un objeto de estudio concreto para replantear su propuesta analítica.

Fuera de este aspecto, no me cabe duda que la propuesta de Luhmann sobre la teoría de los sistemas nos evita caer en la tentación de considerar al análisis sistémico como un esquema extremadamente simplista con relación a la complejidad del proceso social. Los niveles de análisis de la totalidad sistémica que él nos ofrece muestran el carácter complejo de los sistemas sociales reflejando, en todo caso, que el tratamiento de ese objeto de estudio se parece más a descifrar un laberinto que a describir un esquema.

Por último, es pertinente destacar que si bien este autor equilibra en el tratamiento sistémico la relación entre la economía, la política y la cultura, los procesos o conflictos generados fuera del sistema político tienden a *politizarse*. Al respecto dice:

*“Por razones estructurales y semánticas, el sistema político hoy en día está empujando a politizar los riesgos, vengan de donde vengan: puede tratarse de*

---

<sup>9</sup> En ese sentido, se coincide con la crítica que hace Luis E. Gómez. *Luhmann o el sistema (im) posible. Cinco objeciones*, Revista Sociológica, núm. 20, septiembre-diciembre, 1992. Este autor anota: *A través de esta autorreferencia sistémica, Luhmann afirma que la crisis de planeación no significa que la racionalidad no sea ya posible, sino que debe ser pensada de otra manera. Lo que interesa preguntar según Luhmann es si, dentro de un concepto de planeación sistémica, un sistema social puede planearse a sí mismo, y cuáles son los problemas con los que hay que contar al intentarlo.* Pág. 119.

*emisiones de las empresas industriales, del SIDA, de personas que corren a toda velocidad en las calles, de conductores agotados en transportes de pasajeros o de carga, de formas de vida tecnológicamente variadas y divulgables,...”* (Luhmann, 1992: 209).

Como se puede observar, independientemente del equilibrio logrado en su propuesta entre economía, política y cultura, los sucesos adquieren mayor significación analítica en la perspectiva de lo político, del ejercicio del poder y sus efectos.

### 1.1.3 *La peculiaridad energética en el enfoque de Adams.*

El primer aspecto a destacar es que el *enfoque energético* de Adams parte, también, de una relación *sistema-ambiente*. Esto constituye un enfoque formalmente antropológico ya que sugiere la relación, primero, hombre-naturaleza, esto es, sociedad-medio ambiente, a partir de lo cual es factible deducir la relación energética. Así, la definición de *poder* va estrechamente relacionada con la capacidad del hombre (*sistema*) para controlar su *ambiente*. Supone, entonces, siguiendo la primera y segunda leyes de la termodinámica, que la *energía* introducida al *sistema* no se puede destruir, pero cambia de forma; y que al cambiar, la *energía* transforma, inevitablemente, a una organización superior en una inferior o viceversa.<sup>10</sup>

También Adams concibe al poder como *omnipresente* y *omnipotente*, por lo cual se encuentra en todas las relaciones sociales que se han manifestado a lo largo de la historia, en el desarrollo de la humanidad. En ese sentido, la evolución social presume la expansión territorial y organizacional de la sociedad lo que hace de la realidad, un objeto de estudio que se torna cada vez más complejo. De ahí que lo importante para el análisis de las sociedades complejas sea identificar al objeto de estudio como una *unidad de operación*. Por ejemplo, si pensamos en la práctica política de la elite gobernante, la clase empresarial y la clase trabajadora, la definición del proyecto de nación, será posible determinar cuál es

---

<sup>10</sup> En cuanto a la aplicación de una interpretación energética de la realidad social, Adams considera que: *Una de las razones por las que la segunda ley de la termodinámica fue un instrumento de trabajo atractivo para los científicos sociales es que ofrecía la posibilidad de ser directamente aplicable a los fenómenos sociales. Afirmar que el hombre crea entropía en el proceso de vida y muerte no es una metáfora; es describir un proceso en términos que tienen aplicación directa en el campo de lo social... A partir del campo de la termodinámica la física desarrolló un área teórica que promete ser directamente aplicable al análisis de la vida social* (Adams, 1978: 36)

la cuota de poder que le corresponde y, por tanto, el grado de influencia que tiene cada actor político sobre el ambiente. En ese sentido va la definición de unidad de operación que ofrece Adams:

*Un conjunto de actores que comparte un patrón de adaptación común con respecto a alguna porción del ambiente. El patrón implica la acción colectiva o coordinada y alguna ideología común que exprese metas o justificaciones. Un actor es un ser humano y (o) una unidad de operación (Adams, 1983: 71).*

El reto para tratar al objeto de estudio desde la perspectiva del análisis sistémico y considerando a la energía como el elemento que intercambia el sistema y el ambiente, radica, precisamente, en definir el tipo de poder (energía) que posee el actor social sometido a estudio. En la lógica de Adams, habrá de manejarse a esa entidad como unidad de operación, de tal forma que se capte su participación societal más allá de lo estrictamente político. En el caso de la clase empresarial, por ejemplo, se trata de un grupo social del cual se aprecia perfectamente su presencia en el ámbito político y económico, sin negar su importante presencia en el ámbito cultural. Por esa razón, reconociendo el carácter general del poder, el definir a las organizaciones empresariales como unidades de operación para observar exclusivamente su papel económico, limitaría su interpretación en el contexto de la transición, si se pasa por alto que ese concepto permite seguir a los actores en su tránsito de un ámbito societal a otro. Por lo tanto, supone que al transformarse las estructuras económicas adquieren inevitablemente un carácter político o cultural y viceversa. Al excluir al sistema cultural se trabajaría con base a un enfoque parcial y, por tanto, contrario a la razón de ser del análisis sistémico y la interpretación energética. Sin embargo, la dualidad del actor social en el caso de la clase empresarial, es decir, su clara presencia en el ámbito económico y el político, desde luego también en el ideológico, favorece la identificación de la transformación energética de poder.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> En principio, es conveniente comprender la validación de la realidad a través de una concepción energética, en ese sentido Adams, estima: *...asumimos que aunque existan razones que impidan que las conozcamos "plenamente", estas realidades externas son susceptibles de ser conocidas, es decir, podemos construir modelos y teorías relativamente efectivos que expliquen y suministren un cierto grado de preconocimiento de su comportamiento. Una suposición importante al respecto es que todo lo que tratamos tiene calidad de energía. Es decir, se rige por la primera y la segunda leyes de la termodinámica. Ya sea que tratemos con madera como combustible, o con sonidos del habla, o con la conversión nutritiva de los alimentos, o con tocados de plumas, símbolo de fuerza ritual, todos los elementos involucrados se conforman a estas leyes.* (Adams, 1978: 36)

Así, es fundamental definir el tipo de relación (límites y flujo de energía) existente entre el sistema y el ambiente.<sup>12</sup> En ese sentido, Adams sugiere que:

*Un flujo de energía es un proceso de conversión de energía de una forma o estado a otro. Al examinar el poder social no nos interesa tanto la tasa de flujo o de conversión como el control que un actor, una parte, o unidad de operación, ejerce sobre algún conjunto de formas de energía y, más específicamente, sobre algún conjunto de formas o flujos de energía que forme parte del ambiente significativo de otro actor (Adams, 1978: 29).*

De esa forma, si se pretende identificar la influencia que ejerce cualquier actor social, como podría ser el caso del poder de la clase empresarial en los procesos de transición. Tal condición permitirá *definir el tipo de control que ejercen sobre el sistema, así como identificar las fuentes de su poder* (Adams, 1983: 43). En esa óptica se puede partir del hecho que los empresarios ejercen el control del ámbito económico, a partir de lo cual pueden boicotear o apoyar el proyecto de desarrollo que plantea la elite política, en su vertiente burocrática tradicional o tecnocrática.<sup>13</sup>

En ese sentido, es fundamental considerar la diversidad de formas de ejercer el poder ya que al aplicar el modelo interpretativo sistémico-energético en el contexto de una sociedad compleja, el papel desempeñado por el Estado como mejor expresión del poder nos obliga a reconocer la cuota de poder que ejercen otros actores políticos que representan la forma en que la sociedad participa en el sistema de toma de decisiones. Así, Adams propone considerar el *poder independiente* como aquel que retiene la toma de decisiones y el control del medio ambiente o de los elementos que son de interés simbólico o de una necesidad vital para garantizar la reproducción material de la sociedad. De esa manera, parece posible considerar en la lógica de un sistema político sustentado en los principios de la democracia, que la elite de poder que ocupa las funciones de gobierno no necesariamente poseen un *poder independiente*, sino *uno dependiente* de los designios de la sociedad a la cual representan. Por otra parte, el derecho que las elites gobernantes poseen para ejercer el poder está ubicado en el espacio de la

---

<sup>12</sup> Para Adams: *El término ambiente se refiere al aspecto material, físico, o de forma y flujo de energía del habitáculo social y físico del hombre* (Adams, 1983: 29).

<sup>13</sup> Respecto a un planteamiento general, y por tanto ilustrativo del poder, Adams considera que: *En todo sistema complejo, la identificación de los aspectos pertinentes del ambiente es una parte necesaria de nuestro entendimiento del funcionamiento de la estructura del poder, porque el ejercicio de los controles y del poder se intercambia a menudo, o se alterna dentro del sistema. Por esa razón, cuando usemos en adelante el término estructura de poder con respecto a un caso específico incluirá las relaciones de poder y de control.* (Adams, 1983: 43).

política, mientras el control de la economía lo detentan los propietarios del capital. Y en todo caso, la legitimidad de un gobierno depende de la voluntad del pueblo. De tal manera que la legitimidad a partir de la cual las elites gobernantes ejercen temporalmente el poder, depende de la *concesión* que la sociedad les otorga en cada proceso electoral. En esa lógica, como lo sugiere Adams, el tipo de poder que ejerce legítimamente la elite gobernante es el *poder asignado*, conforme se trata de un receptor de ese poder y de varios otorgantes -actores sociales, colectivos o individuales- (Adams, 1989: 56-61).

Por otra parte, en esa misma línea de interpretación, la conversión de la energía tendrá que ser analizada a partir de la interacción entre lo económico y lo político, estableciendo que, por ejemplo, lo económico forma parte de la totalidad societal, el ambiente en el nivel intrasocietal, de lo cual sus cambios hacen suponer cierta influencia en el sistema (político), ya sea positiva o negativa. En ese sentido, es un desafío para el modelo analítico la interdependencia de lo político, económico y cultural. De su identificación depende el establecimiento relativo de los límites, y por tanto, de los “cinturones de comunicación” entre uno y otro, que permiten comprender la transformación de la energía que supone una presencia múltiple del actor social elegido para estudio en todos los ámbitos sociales. Tal perspectiva, por ejemplo, permitirá reflexionar sobre la forma en que una demanda económica empresarial influye en la definición o adopción por parte de las autoridades gubernamentales, de una política pública específica que beneficia a todos o una parte de la sociedad: empresarios, trabajadores, campesinos, clases medias, etcétera. De igual forma, permite explicar el apoyo político que el sector social beneficiado, captado analíticamente a través del concepto de unidad de operación, brinda al gobierno en turno, y que se expresa, por tanto, a partir de una fuente de generación de legitimidad.

En este contexto, vale considerar la precisión de Adams acerca del poder, ya que si bien acepta su interpretación como la participación en la toma de decisiones y como asignación de valores (recuérdese la definición de Easton), llama la atención sobre la necesidad de *reconocer que con ello se buscan beneficios materiales o simbólicos* (Adams, 1991: 36).

Aquí surge el problema de especificar la caracterización de la *unidad de operación*, puesto que en el caso de la clase empresarial, evidentemente, al ejercer el control sobre el ámbito económico, en su relación patrón-trabajador, productor-consumidor, se hace evidente

que este tipo de relaciones sociales refleja la esencia de la estructura de poder y, por tanto, su ejercicio. Pero el procesamiento de esa energía, en un primer momento, no tiene su cauce directo al sistema político, donde el ejercicio del poder se traduce en la influencia en la toma de decisiones, por ejemplo, en la definición del proyecto de nación. Se trata, entonces, de reconocer que un tratamiento metodológico de este tipo tiene el propósito de circunscribir a la *unidad de operación* en el ámbito público, en la competencia social que enfrentan las clases o los grupos por el poder global que afecta el destino de toda la sociedad. Así, la estructura de poder en la que ubiquemos a nuestra *unidad de operación*, esto es, al actor social que elegido en la investigación, intentará definir su papel dentro del sistema político mexicano. Esto no excluye el análisis del papel que juega en otros ámbitos societales diferentes al político, como ya vimos en la misma propuesta de Deutsch, Easton y Luhmann, y que queda confirmado con el concepto de *unidad de operación* lo importante es reconocer la vinculación entre los diferentes subsistemas, entre ellos y el ambiente, etcétera, es decir, la *interrelación de la totalidad sistémica*. La selección de un ámbito de la realidad social sirve para profundizar en una parte de la vida sociocultural. Al respecto Adams sugiere que: “*La combinación relativa de las formas y fuentes energéticas disponibles dentro de cualquier contexto particular determinará en gran medida la cantidad y la concentración de poder social que probablemente encontremos allí.*” (Adams, 1983: 327).

Nuevamente, considerando que Adams está planteando un esquema analítico que establece la *relación energética sistema-ambiente*, en un contexto general aplicable a cualquier forma de organización social, es indispensable, sobre todo en el caso de las sociedades complejas, considerar los *niveles de articulación* y los *niveles de integración de las unidades de operación*. La expansión humana, entonces, presume la multiplicación de *unidades de operación*, el desarrollo de las estructuras de poder en las cuales su complejidad está marcada por un incremento de los niveles de articulación e integración. Así, el papel que juega una *unidad de operación* en lo político, económico y cultural, da cuenta de la profunda complejidad de la realidad social. Además, que la perspectiva de los niveles refleja el desplazamiento de la *unidad de operación*, y por tanto, de la transformación de energía y su flujo que establece la relación sistema-ambiente (Adams, 1983: 100).

En ese sentido, la caracterización de las unidades de operación y los niveles de articulación e integración en los que se desenvuelve, reflejan las estructuras del poder. De tal

forma que, por ejemplo, si pensamos que una organización empresarial y un sindicato, éstos constituirían las unidades de operación que se reproducen y mueven en los mismos ámbitos, cuando menos el económico y el político; así comprenderíamos más fácilmente el poder que a cada una de ellas le corresponde. Además, conforme la persistencia de una unidad de operación depende de su relación con el ambiente, de su poder para influir en él, más fácil será comprender por qué la unidad de operación empresarial (representada por sus organizaciones cúpula) adquiere más poder, y por tanto, influye más en el rumbo de la transición política que la unidad de operación obrera y campesina (representada por sus sindicatos y organizaciones). Por lo tanto, en el caso mexicano, habría de considerarse la estructura corporativa del sistema político, donde formalmente las organizaciones empresariales han adquirido mayor presencia política que las organizaciones de la clase trabajadora. Esta situación, sin duda, ha de expresarse en la mayor parte de los casos, así se trate de sociedades del primer mundo.

De hecho, Adams considera que en una relación de *poder* siempre existen, cuando menos, *dos caras o unidades de operación que participan en la toma de decisiones*. Esto sugiere que, independientemente de que la distribución del *poder* sea desigual, existe reciprocidad entre las partes. *Así, el poder aparece como una de las principales fuerzas de la dinámica social, y en todo caso, refleja la capacidad de un actor o unidad de operación para controlar el ambiente*. También el poder se ha de traducir en la capacidad del sistema para luchar contra las fuerzas del *ambiente* que amenazan con el desorden (Adams, 1983: 45).

El *carácter energético del modelo analítico* obliga a identificar las *unidades operativas* que se sitúan en los dos extremos verticales del sistema, esto es, entre los extremos jerárquicos de las estructuras del poder. De tal forma que, por ejemplo, al reconocer el poder empresarial, necesariamente, en una concepción de suma-cero<sup>14</sup>, nos referiremos intrínsecamente a la marginación del poder de las clases trabajadoras. Ya que así como los empresarios van a aparecer controlando la energía del ambiente, los trabajadores aparecerán como una unidad desplazada de cualquier forma de influencia real en la toma de decisiones del gobierno. De esa forma se aclara la sugerencia de Adams cuando señala que: *“Sin identificar el extremo superior, resulta imposible contar con un marco para localizar a los grandes controladores y poderosos del sistema. Y sin identificar el extremo inferior, resulta igualmente imposible la*

---

<sup>14</sup> La idea de considerar una relación suma-cero, alude a que la proporción de poder que pierde uno de los que lo disputan, automáticamente lo gana el otro, y viceversa, la que uno gana es en detrimento del otro.

*descripción de las consecuencias de las actividades que caracterizan al sistema”* (Adams, 1983: 46).

Otro gran reto al utilizarse el enfoque de Adams, será explicar qué *unidad de operación* es la que realmente toma las decisiones que definen el rumbo de la nación, el proyecto económico, la agenda política y los programas sociales, considerando: 1) que la elite política (burocrática) también constituye una *unidad de operación* que tiene una relación estrecha con el ambiente, y por tanto, que maneja cargas de energía; 2) que los miembros de la *unidad de operación empresarial* también forman parte de la elite burocrática, y por supuesto, del bloque en el poder, y 3) que en última instancia, habría que definir la jerarquía de cada una de ellas en el bloque dominante. Por tanto: *a.* el poder político real que cada una tiene, *b.* su participación concreta en la toma de decisiones, y *c.* el control específico sobre el ambiente.

Esas tres líneas de análisis exigen rastrear los conductos que permiten reconocer las formas de interconexión entre las partes del sistema social, su vinculación con el ambiente, etcétera. Este enfoque nos inducirá a reconocer integralmente el papel que juega el objeto de estudio seleccionado, de tal forma que en el caso de la acción empresarial se intenta captar en el contexto socio-histórico en el que se reproduce, un contexto basto y complejo como todo tejido social contemporáneo. De ser así, el tratamiento, por ejemplo, del empresariado, los sindicatos, los nuevos movimientos sociales o los intelectuales, como objetos de estudio a partir del concepto de *unidad de operación*, nos permitirá seguir a nuestro actor a través de su paso por toda la red humana. Ubicarlo en cada uno de los sistemas (económico, político y cultural) permitirá definir la especificidad de su papel social, su interacción con *los otros*, el sustento del control que ejerce sobre el ambiente. Así, seguir la acción del actor político elegido a partir de la *unidad de operación* reflejará el carácter y las formas de interconexión entre los sistemas haciendo posible reconocer la estructura sobre la que subyace su poder. Se trata de un análisis donde la distinción del poder como habilidad de un grupo o actor social supone identificar el cómo y porqué se accede a él.

La idea de la *expansión de la red humana* alude a un proceso de evolución mediante el cual las formas de organización social “primitivas” se constituyen en sociedades complejas. Tal transformación dificulta identificar las estructuras de poder, y por tanto, los componentes que le otorgan su forma. Es así como la *unidad de operación*, además de reflejar la

complejidad de la red humana contemporánea, nos guía por los laberintos del poder que explican la articulación de lo político, económico y cultural.

Si bien es cierto que metodológicamente es muy complicado establecer los límites entre los subsistemas sociales, esto es, diferenciar las partes del sistema social, también es cierto que la diferenciación supone un proceso de selección mediante el cual se privilegia a un ámbito de la compleja realidad social. En ese sentido, el *desplazamiento de la unidad de operación* permite identificar la especificidad de cada sistema social, *su relación interna como su interconexión con el ambiente*. En esa lógica, el actor social captado en la esencia de este concepto, permite captar la complejidad social que se expresa a través de la multiplicidad de formas que adquieren las relaciones sociales.

El *control* que los empresarios ejercen sobre el sistema económico se transforma en la capacidad para ejercer el poder de influir en la toma de decisiones que definen el rumbo de la nación. Evidentemente, si pensamos en una situación donde la interpretación exige relacionar los tres sistemas fundamentales, el análisis se hará mucho más difícil. La misma complejidad de un momento específico del proceso social determinará la asociación de los sistemas o la exclusión de uno de ellos. Baste pensar que en las mismas tendencias de la expansión de la red humana, sobre todo en el contexto de las sociedades complejas, el poder se ejerce evitando utilizar la fuerza, por lo cual es factible afirmar categóricamente que las relaciones políticas exigen en la actualidad la legitimidad del poder. Es en esa óptica que el sistema cultural adquiere virtual relevancia en el análisis, pues sin tal elemento sería prácticamente imposible comprender cómo un actor social afectado por la situación económica imperante, considera legítima la política económica adoptada por su gobierno (Adams, 1983: 41)

Estamos ante una situación que demuestra la complejidad del sistema social, pues sugiere una forma de interacción entre los ámbitos de la realidad social. Como en el caso de ese ejemplo, es posible interpretar que la energía va fluyendo por los diferentes *niveles de articulación* hasta llegar al nivel donde se toman las decisiones. Se trata del efecto de las relaciones económicas sobre las relaciones políticas. Así, el seguimiento de la *unidad de operación* a partir de la cual se capta la práctica social de un actor, de su desplazamiento en los diferentes ámbitos sociales, dejará su huella en el proceso de constitución del poder, del proceso energético implícito en la reproducción de una sociedad. Viceversa, si en el análisis de la toma de decisiones, partimos de los objetivos sociales que persigue, de los efectos concretos

de la acción gubernamental, terminaremos por situar el análisis, quizás, en una relación micro-social definida a partir del intercambio entre el empresario y el trabajador. Nos ubicaremos, entonces, en un *nivel de articulación* en el cual se advierte claramente que lo predominante en el origen del poder es la relación social de carácter económico, esto es, el control del ambiente o de un aspecto de éste.

Como se observa, el problema se sitúa en la forma que define el ejercicio del poder, en si lo ejerce directamente un actor social o si transfiere su “derecho” a ejercerlo. De cualquier forma, el problema no radica, entonces, en definir cómo participa en el poder cierto actor político, pues establecer una dimensión estática de su participación nos ataría de manos para tratar una realidad social profundamente compleja, sobre todo si se trata de una situación tan dinámicamente cambiante como es el caso de una transición o una crisis. Así, las referencias con que se trate la forma de participación social, de la *unidad de operación* con la cual se capte, tendrán que ser tan flexibles como lo exija la particularidad del momento en el cual se encuentre el proceso social. De tal manera que destaque en el análisis la influencia concreta que en cada momento particular del proceso social tengan los diversos actores para participar en el ejercicio del poder. Todo dependerá del peso que tenga en ese momento el control que ellos ejerzan sobre algún campo del ambiente, esto es, del bien o valor material o simbólico que controlen y que sea de interés para los otros. Esta distinción nos permitirá reconocer el flujo de energía entre la totalidad sistémica, pues de esa forma veremos la transformación de cuestiones económicas en cuestiones de carácter visiblemente político.

Se trata, como lo sugiere Roberto Varela, de pensar que lo político no se reduce exclusivamente a la competencia por el poder, puesto que en una perspectiva de ese tipo, excluyente del resto de las relaciones de poder establecidas fuera del sistema político, se perderían de vista las formas que adquiere el ejercicio del poder fuera de la competencia política. Sin embargo, como ese autor lo estima, los conflictos políticos nos permitirán comprender no sólo el tipo de *alianzas, dilemas y contradicciones de que está hecha la aparente armonía de la sociedad, sino también por que estos conflictos ocupan gran parte de la actividad política* (Varela, 1984: 22). Es decir, situando la relevancia de identificar las diferentes formas de ejercer el poder, es posible advertir, a partir de la interpretación energética, el proceso constitutivo del poder, la relación control-poder que posibilita a un actor a participar activamente en la toma de decisiones que definen el rumbo de la nación. De tal

forma que se defina la influencia que la *unidad de operación con poder* tiene para imprimirle sentido al sistema.

Como se puede observar, es el concepto de *unidad de operación* el que nos permite superar la “independencia social” que la interpretación sistémica adquiriría a partir de la propuesta de Luhmann. Es el sentido de tal concepto lo que permite darle un carácter social al análisis sistémico, de hecho, si lo importante es captar los elementos constituyentes del poder, no cabe la menor duda que el concepto de *unidad de operación* conduce a identificar sus fuentes, es decir, el control concreto que un actor, grupo o clase social, ejerce sobre el ambiente o de una parte de éste. Dicho fenómeno refleja las relaciones intrasociales, además que su desplazamiento en el sistema permite centrar la atención en el ámbito que más convenga al análisis. Estas propiedades que confiere la interpretación de Adams, exige permanentemente establecer, esto es comprender, la relación multidimensional que a partir de un sujeto social se adquiere de la realidad social, es decir, de su relación con otros sujetos sociales, su papel que desempeña en cada ámbito del sistema. En ese sentido, además de reconocer cierta lógica en su desempeño social (económico, político o cultural), se advierte una suerte de continuidad procesual en la cual queda implícito que la acción de un sujeto social en cualquier ámbito del sistema, tiene, necesariamente, una determinada repercusión en los otros ámbitos. Este fenómeno es sugerente para constatar la complejidad e integridad de los sistemas sociales.

Vista así, la transformación de energía en la interpretación sistémica, además de reflejar las interconexiones del sistema en cualquiera de sus expresiones, intrasocietal o extrasociales, señala la vinculación entre el control y el poder. La transformación del control en poder también sugiere el tipo de relación entre las diferentes *unidades de operación*, de los sujetos sociales. Así, la energía que se desprende de su relación define las formas del ejercicio de poder, con las implicaciones simbólicas que esto conlleva (Adams, 1978: 90)

En todo caso, se trata de advertir que independientemente del tipo de conflicto entre los actores sociales o políticos, de la situación en la que queden respecto a su relación con el poder, no se da un rompimiento social que provoque la disolución del sistema, sino que éste adquiere el sentido que los intereses del actor con poder imponen al salir triunfante en una confrontación con sus antagónicos. Se trata de reconocer que existe un *proceso de integración* a partir del cual, como lo sugiere Varela, los contendientes reconocen la victoria del ganador,

en la medida que esto no niega la posibilidad o el derecho de los perdedores para continuar compitiendo para ganar el reconocimiento de sus contrarios. Esto significa que:

*El intercambio social, por tanto, originaría procesos competitivos entre iguales y procesos de integración entre superiores e inferiores. Los primeros supondrían un intercambio balanceado en obligaciones; los segundos, un intercambio desigual. Pero como los primeros son procesos competitivos, las relaciones emergentes serían más inestables y tenderían a convertirse en los segundos. Los primeros originarían las relaciones estrictas de intercambio social; los segundos, las relaciones de poder (Varela, 1984: 24).*

Esta idea redondea el tipo de relaciones existentes entre las tres *unidades de operación* que estarán implicadas en un análisis mínimo sobre el poder en cualquier sociedad compleja: empresarios, trabajadores y gobierno. La triangulación de las relaciones sociales entre estos actores sociales y las formas que ellas adquieran a lo largo de una transición, permitirá identificar el rumbo que adquieren los diferentes conflictos políticos, sus causas, así como sus posibles soluciones que, en última instancia, se expresan en alianzas políticas que legitiman el carácter del proyecto de nación, o si así se quiere, el sentido que se le imprime al proceso social.

#### *1.1.4 Una síntesis sobre la discusión sistémica-energética.*

El punto en común entre Deutsch, Easton, Luhmann y Adams, es que comparten la perspectiva de una *interpretación energética*, de *intercambio entre el sistema y su ambiente*, de transformación del poder. Evidentemente, el hecho que Deutsch, Easton y Luhmann trabajen formalmente desde la teoría de los sistemas, hace más evidente los elementos comunes que comparten. Aunque la ausencia de una adscripción explícita de Adams a dicha teoría no lo aleja demasiado de ellos, pues al tratar tan detalladamente la cuestión del poder hace que su trabajo engrane perfectamente en el modelo de la *teoría de los sistemas*. En todo caso, pareciera que Luhmann se diferencia de Deutsch, Easton y Adams al no tomar como eje expositivo lo político, sino construyendo su enfoque a partir de una interacción equilibrada entre la economía, la cultura y la política.

Por otra parte, comparativamente hablando, la aparente austeridad conceptual de Deutsch y Easton (a diferencia de la riqueza y variedad de Luhmann y Adams) obedece más a la intención de los primeros por esbozar los rasgos concretos del modelo analítico,

así como a la decisión de los segundos por complejizar conceptualmente las implicaciones de los intercambios entre el *sistema y su entorno*. Además, y esto es muy importante, los trabajos de unos y otros tienen una distancia temporal de cuando menos dos décadas, como mínimo, por lo cual resulta obvio que Luhmann y Adams se vieron beneficiados con los aportes de Deutsch y Easton, entre otros.

La primera conclusión que emerge de la teoría de los sistemas es que se trata de un planteamiento que coincide con la crisis de los paradigmas que las ciencias sociales vivieron a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, y por tanto, con las propuestas interdisciplinarias que surgieron desde ese momento. Esto implica no solo conocer formalmente la lógica que mueve al modelo sistémico, sino la selección de conceptos que justifiquen el sometimiento de un objeto de estudio a este tipo de tratamiento metodológico.

En el tratamiento de la política, la teoría de los sistemas permite establecer claramente la vinculación con la economía y la cultura. De hecho, permite comprender el proceso mediante el cual fenómenos de esa naturaleza se transforman en fenómenos políticos. Ahí radica la calidad energética de esa propuesta analítica. Esto coadyuva a entender la complejidad, y sobre todo, la causalidad de las crisis globales que adquieren mayor nitidez a la luz de esta teoría. Así, se manifiestan las cualidades heurísticas que difícilmente brindan otras teorías en el intento por desentrañar la “naturaleza” de cada ámbito societal, así como el del intercambio entre las partes del sistema.

En la medida que la *interpretación energética de los sistemas* no se proyecta como la verdad absoluta, sino como una teoría que nos permite reducir y esquematizar la realidad, admite la incorporación de conceptos provenientes de otras teorías que matizan y amplían la comprensión de partes específicas del esquema. Y esto refleja la exigencia para el investigador, en cuanto a su obligación de enriquecer la capacidad explicativa del modelo sistémico mediante el tratamiento conceptual de su objeto de estudio.

En ese sentido, y quizás la conclusión más importante, es que los objetos de estudio sometidos a la *perspectiva energética de las relaciones de poder* constituyen el mejor canal para el investigador en su intención de aportar un granito de arena en el avance de esta teoría. Como reconocen -sobre todo Deutsch, Easton, Luhmann y Adams- esta teoría no tiene la pretensión de presentarse en forma acabada, sino que su aplicación a diversos

objetos de estudio la mantendrá en una permanente redefinición-reconstrucción. Lo que induce ha reconocer que se trata de una teoría dinámica y lo suficientemente flexible para adaptarse a los objetos de estudio seleccionados y al tratamiento multidisciplinario de los mismos. Por tal razón consideramos a la teoría de los sistemas como *un modelo de análisis para construir y replantearse continuamente*, donde la materia prima con que se construye una interpretación deriva del objeto de estudio sobre el cual el investigador ha ensayado previamente otros recursos teórico-conceptuales, pues la repetición puntual de esta teoría pierde sentido si no se reconoce que adquiere realmente su valor analítico al explicarla a partir de la sistematización y tratamiento de objetos sociales concretos.

Ahora falta abonar sobre un aspecto fundamental de la interpretación energética de los sistemas: el papel que juega la comunicación como elemento que comprueba el intercambio existente entre el sistema y el ambiente. *Destacar la importancia de la comunicación, particularmente la política, en la reproducción del poder* y, por tanto, en la perspectiva que intentamos imprimir, del carácter energético de la interacción entre diferentes actores sociales. Ese es el propósito del siguiente apartado.

## 1.2 La comunicación como elemento reproductor del poder.

Si la especificación de lo político obliga a reconocer, principalmente, que la esencia de las relaciones sociales está inmersa en relaciones de poder. La comunicación en general, y particularmente la comunicación política, constituye una acción concreta de la sociedad para definir las reglas del juego de un sistema político, y por tanto, la forma cómo se legitima la posesión, control y ejercicio del poder. En ese sentido, la importancia que adquiere la comunicación política en el análisis de la Modernidad, nos permite reconstruir analíticamente los escenarios políticos a partir de la perspectiva energética del modelo sistémico al que nos hemos referido con anterioridad. Con tal planteamiento, quedarán fácilmente al descubierto los principales actores políticos que van y vienen, según los dilemas planteados por cada coyuntura, los valores implícitos a la cultura política en la que se insertan, las aspiraciones colectivas más urgentes, y desde luego, las *fantasías y mitos que prevalecen como referentes simbólicos en los imaginarios colectivos*.

Por nuestra parte, es muy importante ubicar dos aspectos: el primero, que en el modelo de análisis aquí elegido, energético-sistémico, la información constituye la mejor expresión del flujo energético, del intercambio intra-sistémico y extra-sistémico, de tal forma que la comunicación en general, y la comunicación política en particular, representan la forma más precisa de la información, explican una de las principales maneras de reproducción del poder. El segundo, que la característica principal de la Modernidad, de la era moderna, es el papel que juega la información en la reconfiguración de las sociedades, la redefinición de los sistemas políticos, y los nuevos intercambios económicos en el mercado internacional (Wolton, 2005; Beck, 2002; Castells, 1999, 2001; Luhmann, 1992). Esto habrá de atraer la atención sobre lo que acontece en el espacio público, y por ende, en el papel que juegan los discursos políticos, vertidos, entonces, en los medios de difusión masiva, sean televisión, radio, periódico, internet, o cualquier otro medio que cumpla con el alcance de los antes descritos y que por tanto, quede expuesto a los ojos de la *opinión pública*.

Esto es así, porque la comunicación emerge como elemento articulador de la sociedad, representando la única posibilidad a partir de la cual, tanto la sociedad como los diferentes actores sociales, dan forma a los escenarios políticos: De hecho, si no existiera la

posibilidad que los discursos políticos fluyeran en el espacio público, cualquier posibilidad de construir una sociedad realmente democrática sería fácilmente cuestionable (Hirschman, 1990). Sin la comunicación política no existiría la discusión pública que requiere la generación de consensos, independientemente que ello mismo provoque periodos donde predominan los disensos. Tal condición sólo es concebible en un escenario político donde fluyen libremente las comunicaciones políticas de los principales actores sociales, aún si esto contraviene al discurso gubernamental. Solo así es posible garantizar que los actores políticos más representativos de la sociedad planteen sus demandas y críticas al sistema político en el que se desenvuelven.

La importancia que aquí adquiere la comunicación política radica en que a partir de ella es posible captar no sólo su expresión teórica-conceptual, sino la práctica política que los diferentes actores dejan entrever al participar en el *nuevo espacio público*, mismo que es fundamental para comprender la lógica de los escenarios políticos. Por esa razón, es fundamental considerar una suerte de síntesis sobre el tema de la comunicación, a partir de los modelos analíticos más usuales. Estas ideas son: 1) el efecto de los medios de comunicación como referente de la construcción de la personalidad; 2) la relación de lo colectivo y lo individual a partir de la difusión de la cultura y, por tanto, recreación de los imaginarios colectivos; 3) *la asignación de una identidad política, a partir de las expresiones ideológicas de los principales actores sociales*, así como la cuota de poder que les corresponde en los escenarios políticos (De Fleur y Ball-Rokeach, 1999; Castells 2001, 2000<sup>a</sup>; Balandier, 1988).

Por lo que a nosotros corresponde, en la medida que se intenta dar mayor visibilidad a la cualidad energética del modelo sistémico, consideraremos la tercera vertiente, donde se contempla el papel que juega el discurso político, desde el cual se trasluce la ideología que confiere de una identidad política a cada uno de los principales actores sociales. En ese sentido, se propone una perspectiva de análisis que destaque cómo el discurso de los actores políticos expresa una posición ideológica respecto al *status quo*, legitimando o confrontando mediante la comunicación política, la forma cómo se ejerce el poder, social e históricamente, en un sistema político determinado. Ello hace necesaria una reflexión teórica-conceptual mínima que nos permita comprender que la reproducción del poder, sobre todo, en la lógica liberal, sólo es posible a través de la expansión del *moderno*

*espacio público*, misma que solo acontece por la función de la comunicación política, sea que legitime el proceso político, lo censure o critique. Se trata, entonces, de reconocer la importancia energética que la comunicación política tiene para comprender los intercambios de un sistema político con su ambiente económico y socio-cultural.

### 1.2.1. *El espacio público y la modernidad mediática.*

Un rasgo de la sociedad moderna, la sociedad capitalista, es que desde su génesis se dividió en dos espacios sociales, uno, el privado, y otro, el público. El *privado* estuvo designado para la reproducción de la vida cotidiana, quedando como el espacio “natural” para la reproducción de la familia y lo personal; mientras el *público* se asignó como el espacio donde la sociedad trataría los asuntos de interés colectivo. De tal manera que el *espacio público* en el cual se recreó la política moderna, aquella cifrada en los principios de la democracia, corresponde a la herencia cultural del derecho romano: el de la tribuna pública.

Sin embargo, el dilema que enfrentó la sociedad moderna, precisamente, tiene que ver con las figuras políticas emergentes y las nuevas formas de ejercicio del poder democrático, que en lo sucesivo tendrían que distanciarse del ejercicio despótico del poder que emulaba los regímenes absolutistas. La figura del *Estado* y la del *ciudadano* fueron adquiriendo forma, de manera simultánea como se hacían los esfuerzos por erradicar la violencia que dejó, como en el caso de la Revolución Francesa, la destrucción del sistema monárquico. Los principios de la Ilustración: libertad, igualdad, justicia y solidaridad, constituyeron referentes que fueron moldeando una práctica política distanciada de la violencia (Bobbio, 1987). El problema fue que en la lógica democrática, desde su ideal, todos tendrían derecho a discutir las cuestiones del interés colectivo. Esta práctica política comenzó a darse en la calle, la nueva tribuna-plaza pública, donde se dio la revuelta que puso fin al sistema monárquico, que en lo sucesivo fue el espacio social en donde se debatieron las cuestiones de interés público. La calle dio cabida a la nueva forma de

reproducir la política, y por tanto, el espacio social que dio cabida a la progresiva participación de una creciente ciudadanía, poco a poco fue haciéndose insuficiente.<sup>15</sup>

El debate de lo público fue desplazándose a espacios más pertinentes para hacer posible la discusión de las cuestiones del interés colectivo, y en la medida que el Estado de Derecho impulsó la construcción de un sistema político democrático, la discusión política se fue restringiendo a los espacios contruidos *ex profeso*, los espacios del poder legislativo donde se ubicaron los representantes del pueblo (Fernández Santillán, 2001). Aunque, precisamente, la designación de un lugar donde se asentara el poder legislativo como el espacio donde se discutiría lo público, poco a poco, fue restando importancia a lo que sucedía en la calle. Esta fue la primera transformación del espacio público, que en poco tiempo colocó en la mesa de discusión el distanciamiento entre la ciudadanía y sus gobernantes. De hecho, podríamos abreviar este proceso tan complejo a partir de la experiencia histórica del Siglo XX, lapso que sirvió para hacer conciencia sobre las limitaciones de la democracia representativa. La misma crisis de los partidos, sobre todo a finales de ese siglo, la concentración del poder en las clases gobernantes, y en general la pérdida de la solidaridad social, así como el cuestionamiento a la justicia y a la libertad, constituyeron fuertes acicates a los ideales de la Modernidad.

Sin embargo, la misma modernidad creaba nuevas formas de participación política que superaron las limitaciones materiales del espacio público. El papel de la tecnología como promotor de una comunicación cada vez más eficiente, nos permitió observar cómo *los medios de difusión masiva coadyuvaron a crear un nuevo espacio público* que diera cabida a una mayor participación política, a un ejercicio de la política más inclusiva, pero sobre todo, que poco a poco fuera dando solución a las limitaciones de la democracia representativa. El nuevo espacio público adquirió forma a partir de un *espacio virtual* que en lo sucesivo posibilitaría el debate de las cuestiones de interés público (Castells, 2000b; Wolton, 1999; Gellner, 1996, Balandier, 1988). A lo largo del Siglo XX, con el papel que jugaba primero el periódico, luego el radio para dar paso a la televisión, comenzó a transformarse la política. Los medios de difusión masiva se constituyeron en los mejores

---

<sup>15</sup> De entrada, esto constituye un excelente ejemplo para observar una relación energética entre un espacio material, la calle, que sucumbió ante un incremento “natural” de la ciudadanía, como un espacio que hacía posible la discusión pública. Se trata de un incremento de energía que refleja el efecto que un desequilibrio en el intercambio sistema-ambiente, puede tener sobre una *forma energética*.

parámetros para estimar la contienda política, la forma en que los gobernantes se dirigían a la ciudadanía, al tiempo que ésta reflejaba el ejercicio moderno de la política: el surgimiento de la opinión pública.

Conforme se expandían las estructuras sociales y se hacía más necesaria una comunicación de largo alcance, más eficiente, la reproducción de la sociedad, así como de sus sistemas políticos, dependió del papel que jugaban los medios de difusión. Poco a poco, se hizo más evidente la dependencia de la política con los medios de difusión que daban forma al nuevo espacio público. El poder requirió un oficioso manejo de los medios de difusión para garantizar su legitimidad, para combatir a la oposición, para informar a la sociedad, etc. Y cada vez más, hizo patente que para ejercer la política moderna, los políticos, así como todos los posibles actores sociales que deseaban hacer valer sus demandas ante las instancias gubernamentales, requerían ocupar un lugar en el nuevo espacio público (Sartori, 1997; Adams, 1978, 2001).

En ese mismo sentido, es factible considerar que toda ideología debe adquirir materialidad a partir de un discurso que en la lógica de una modernidad mediática, habrá de ganar lugar en el nuevo espacio público, pues sin una presencia de los actores políticos en los medios será prácticamente imposible que demuestren capacidad para manejarse de una manera políticamente correcta, a partir de un discurso que pueda incidir en la *opinión pública*. Por ello, es posible afirmar tajantemente que el nuevo espacio público, el cumplimiento de sus reglas por parte de los diferentes actores políticos, es la pauta para generar la legitimidad que todo régimen requiere, propiciar los consensos y disensos que recrean la esencia democrática.

En muchos sentidos, esta complejidad del nuevo espacio público está caracterizada, en principio, porque los *discursos que dan forma al espacio donde se escenifica la contienda política*, muchas veces aparecen a partir de mensajes contradictorios o hasta incoherentes, que dificultan la comprensión tanto de la peculiaridad del espacio como de la misma política. De tal forma que *la relación entre la comunicación política y el espacio público es indisoluble*, como bien lo sugiere Wolton: *...la comunicación política es ese motor invisible del espacio público donde se organiza la relación entre puntos de vista contradictorios de los actores políticos, de los medios y de la opinión pública* (Wolton, 2005: 113).

Así, las principales características de la política moderna, y por tanto del nuevo espacio público, es que adquieren forma a partir de la presencia de discursos que debaten las cuestiones de carácter público, que confieren identidad a los diferentes actores que luchan por el poder, que expresa su manera particular de visualizar el mundo, de promover su proyecto de nación ante la sociedad que está necesariamente expectante de lo que ocurre en un espacio que adquiere forma a partir de la comunicación que hacen posible los medios. De esa forma, la comunicación política moderna se hizo indispensable para el poder, sin ella no es posible convencer, por tanto, dominar, ésta es una realidad inevitable de la modernidad mediática como de la política moderna. Ello explica cómo en la actualidad todos los actores políticos luchan por una posición en el nuevo espacio público, pues si no se tiene presencia en los medios el posible impacto para construir consensos o corrientes de opinión favorables al mismo, son prácticamente nulos. En sentido estricto la política moderna solo es posible en la medida que considera las transformaciones de la sociedad que se ven reflejados invariablemente en el nuevo espacio público.

En el caso del modelo sistémico al que se piensa dar forma aquí, se hace evidente que uno de los cambios que van a permitir distinguir el pasado del presente es, precisamente, la *ausencia de un espacio público* en el cual se debatan las cuestiones del interés público para la sociedad mexicana. Se trata de un complejo proceso social, en el cual se observará cómo la elite burocrática irá perdiendo su capacidad para mantenerse como una elite hegemónica, al mismo tiempo que emergerán nuevos actores políticos que darán forma al nuevo espacio público que caracteriza a las sociedades democráticas.

### *1.2.2 Comunicación política, ideología y discurso*

Una de las características distintivas de este fin y principio de siglo, es el papel que juega la comunicación y la incertidumbre sobre el futuro inmediato. Sin embargo, es fundamental identificar a la comunicación como un acto social que se inscribe en el propio origen de la humanidad y que, en todo caso, adquiere diferentes matices conforme se van incorporando los avances tecnológicos que hacen más eficientes los canales de la comunicación, ampliando considerablemente las opciones de establecerla y generando nuevas pautas en la reproducción de la vida cotidiana, así como en las propias relaciones del sistema político y

del mercado nacional e internacional. En ese sentido va dirigido el ambicioso trabajo de Castells sobre *la era de la información* (Castells, 2000, 1999).

De esa manera se puede pensar en la comunicación como un eje expositor que permita comprender la compleja naturaleza del proceso social, sus tendencias y sus conflictos (Ricci y Zani, 1990). Evidentemente, la etapa más reciente de la comunicación tiene una clara repercusión en las formas como se ejerce la política, de modo que en este apartado se pondrá particular énfasis en el papel que desempeña la comunicación política en la conformación de los sistemas políticos modernos. Esperando que el análisis de la comunicación política permita comprender los procesos más significativos en la construcción de las identidades de los principales actores políticos, descubrir la intencionalidad de los actores sociales más representativos de una sociedad, así como comprender el carácter legitimador-deslegitimador de la comunicación en la reproducción de los estructuras del poder.

En ese sentido, es pertinente explicar lo que entendemos por *comunicación*, en virtud que ha prevalecido la noción sociolingüística cuyo sentido destaca la capacidad de emitir y captar mensajes entre los miembros de una comunidad lingüística y social (Ricci y Zani, 1990: 19). Esto es, que la comunicación habrá de considerarse desde el punto de vista de la cultura, pues la pertenencia a dicha comunidad supone el compartir un proceso de aprendizaje en el cual los miembros han generado un cúmulo de principios, valores, tradiciones, prácticas sociales y expectativas, que, como señala Parsons (1982), *se aprenden, se comparten, y se transmiten*, en el tiempo y en el espacio social. Visto de esta forma, la cultura emerge como el código que hace posible la comunicación entre los miembros de una sociedad. Por lo tanto, la historia de una comunidad, pueblo o nación, también constituye un referente sustancial en los procesos de comunicación que definen los intercambios entre individuos y colectividades.

Este planteamiento coincide con la idea semiótica de Eco sobre la comunicación:

*La hipótesis más radical suele circular en sus dos formas más extremas, a saber: “la cultura es sólo comunicación” y “la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructuradas”. Esas dos fórmulas son sospechosas de idealismo y deberían reformularse así: “la cultura por entero debería estudiarse como un fenómeno de comunicación basado en sistemas de significación (Eco, 1978: 58).*

En ese mismo sentido va la afirmación tan tajante de Luhmann respecto a que la comunicación es el elemento fundamental para restar subjetividad a las interacciones sociales, pues en todo caso ella posibilita reconocer la existencia de dichos intercambios (Luhmann, 1998). Es decir, que no pueden existir intercambios entre los miembros de una sociedad sin hacer uso de la comunicación. Esta interpretación es refrendada por Ricci y Zani, para quienes *el acto de comunicación es la unidad más pequeña susceptible de formar parte en un intercambio comunicativo y que una persona puede emitir con una única y precisa intención* (Ricci y Zani, 1990, 25). Sin embargo, es fundamental distinguir entre el tipo de comunicación que establecen los individuos en el espacio privado, pues difiere en sentido, práctica y contenido, a la comunicación que se reproduce en el espacio público, lugar en el cual se resuelven las cuestiones del interés colectivo, y por tanto, donde se debate lo político. En ese caso, concebir a la comunicación como la unidad más pequeña nos sirve para identificar el carácter esencial que juega en la interacción social, y que en todo caso existe una intencionalidad al establecer contacto con los otros.

Interesa así, identificar *cómo la comunicación que entablan los actores políticos refleja su intencionalidad, es decir, sus intereses, comunes o antagónicos*. De tal forma que analizar y comprender la *comunicación política* de una sociedad, permita entender la forma cómo se ejerce el poder, de la etapa que recorre una sociedad en la construcción de un sistema político preferentemente democrático, así como la condición sutil de la comunicación para ejercer la *persuasión* (De Fleur y Ball-Rokeach, 1999: 263). Pues también, es obvio, que la comunicación abierta es un fundamento de la sociedad contemporánea que lucha contra toda forma de autoritarismos, privilegiando el diálogo, la negociación política y los consensos.

### 1.2.3 *La comunicación política y sus implicaciones.*

De manera muy sencilla digamos junto con Wolton que *La comunicación política evoca todo aquello que se vincula con la producción y el intercambio de los discursos políticos que exponen los distintos actores y que los medios reflejan* (Wolton, 1998: 28). Visto así, habremos de considerar, primero, el contenido de los discursos con el objeto de diferenciarlos y establecer relaciones a partir del carácter aliado-adversario entre los

actores, pero sobre todo, los contenidos temáticos que adquieren los discursos en la medida que son expresión coyuntural de una sociedad determinada, y después, el medio por el cual los actores hacen llegar su comunicación política al espacio correspondiente, específicamente el espacio público donde se generan las corrientes de opinión.

A pesar que la comunicación política existe desde el momento en que la humanidad estuvo en condiciones de hacer política, la comunicación política como tal, esto es, como expresión de la Modernidad y como objeto particular de una ciencia social, apareció cuando se analizaba la comunicación que los gobiernos dirigían al electorado; y más tarde, cuando se estudiaron los discursos intercambiados entre los políticos en el poder y la oposición. Se trata entonces, de un objeto de estudio circunscrito a un momento muy específico del proceso político: las campañas electorales. Sin embargo, hoy la comunicación política apunta su atención hacia a todo aquello que es de interés para la vida política de una nación o la comunidad internacional. Se preocupa por los sondeos de opinión para detectar la forma como las elites gubernamentales y, en general, los decisores políticos, consideran a sus adversarios o, simplemente, cómo tratan las demandas más urgentes de la sociedad, dando forma, por ejemplo, a la agenda política nacional. También existe una constante preocupación por diferenciar la fragmentación del espectro político y el tipo de marketing que se ha de usar para proyectar la imagen de un líder, partido, institución, o gobierno en especial.

Se trata, fundamentalmente, de ver a la política moderna desde la perspectiva de la comunicación política y los medios por los cuales los diferentes actores pretenden alcanzar al mayor número posible de público, con un claro objeto de influirlo en sus preferencias políticas así como en la construcción de su perspectiva del mundo. De hecho la connotación “política” de la comunicación abarca todo acto social que tiene por objeto la política, y por ende, el ejercicio del poder formal que legitima al sistema. De esa forma la *comunicación política destaca los aspectos de la comunicación que permiten identificar los puntos de conflicto, la capacidad o intencionalidad de los actores de imponer sus intereses a los otros*. No obstante, parece más importante la convergencia en el espacio público de los diversos discursos políticos de los cuáles, junto con los principales eventos económicos, políticos y sociales, nutre a la opinión pública y sugieren la conformación de preferencias políticas que definirán a la elite política que ascenderá legítima y periódicamente al poder.

Así, lo más importante que la comunicación política nos ofrece es la posibilidad de conocer cómo se legitima y/o deslegitima un orden político establecido. En ese sentido va dirigida la definición que Wolton nos ofrece sobre *comunicación política*: “... como el espacio en que intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos” (Wolton, 1998: 31).

De aceptar esta definición, habremos de reconocer que el espacio público, espacio social en el cual se reproduce lo político, es un espacio determinado por la *comunicación política* que da forma a un espacio restringido en el cual se limita la cantidad de actores que legítimamente permanecen o irrumpen en el escenario político. Lo que permite, entonces, sortear la reducción temporal a la que sometía la perspectiva inicial de una comunicación política cifrada en las coyunturas electorales. Como sugiere Castells:

*El espacio es el soporte material de las prácticas sociales que comparten el tiempo....Los flujos no son sólo un elemento de la organización social: son la expresión de los procesos que dominan nuestra vida económica, política y simbólica.....El espacio de los flujos es la organización material de las prácticas sociales en tiempo compartido que funcionan a través de los flujos. Por flujo entiendo las secuencias de intercambio e interacción determinadas, repetitivas y programables entre las posiciones físicamente inconexas que mantienen los actores sociales en las estructuras económicas, políticas y simbólicas de la sociedad (Castells, 1999: 445).*

Ello sugiere que un cambio en ese sentido, exige mantener un seguimiento permanente sobre las transformaciones de los escenarios políticos, ya sea que presenten continuidad o ruptura, en cuanto a la vinculación pasado-presente. Esto es, respecto de los cambios generados en los escenarios por la relevancia que unos actores pierden y que otros ganan. La comunicación política, el análisis del que nos dota, permite comprender lo político como un complejo proceso de interacción donde los actores ganan jerarquía en los escenarios políticos que se reproducen en el tiempo. Lo que no sólo dota de identidad a los actores políticos, sino hace posible la comprensión de la constitución y desaparición de sujetos que legítimamente van y vienen a los escenarios. De la misma manera, se observan, a partir de las ideologías que entran en escena, las posibles alianzas y conflictos que se tejen a lo largo del tiempo, permitiendo dar forma a una interpretación causal de la política entre pasado-presente-futuro.

Para Dominique Wolton existen cinco aspectos relevantes de la comunicación política que son de particular interés para la antropología, la sociología y la ciencia política: 1) en la medida que implica intercambios entre los actores, *permite dotar de identidad a los actores, distinguiéndolos de sus adversarios*; 2) que supone cierta *jerarquía de los actores*, y que ésta se encuentra en la *presencia pública de sus discursos*; 3) muestra la autonomía de la política, la información y la comunicación; 4) sugiere el carácter dinámico de la política; y 5) *se revela como factor organizativo de la irracionalidad política en un marco comunicacional* (Wolton, 1997: 4043).

Sin embargo, estos cruces donde el espacio político aparece como un espacio de intercambio entre los principales agentes de la comunicación, puede distorsionar la “naturaleza” del escenario dado el interés de investigación, en la medida que ese interés normalmente constituido en un objeto de estudio sólo capta uno o algunos aspectos de una entidad tan compleja como el de la comunicación política. Es por ello que algunas definiciones de comunicación política van dirigidas a captar el aspecto más significativo de la comunicación, que nos permita reconstruir una realidad social en toda su cabalidad. Y como en todo caso la comunicación alude a uno de los objetos de estudio más complejos para las ciencias sociales, es conveniente delimitar o definir lo más posible el aspecto concreto de la comunicación que es de nuestro interés. Al respecto, Luhmann nos proporciona una idea inicial para distinguir la particularidad de la comunicación política: *cualquier comunicación que se dirige a los órganos estatales, justamente por eso, ya es comunicación política* (Luhmann, 1992: 210).

Desde luego, se trata de situar un punto de referencia sobre el que giren los flujos de la comunicación política y que se expresarán, en esta lógica, a través de *apoyos-consensos y críticas o posiciones opuestas a la gestión gubernamental*. Evidentemente, las demandas provenientes de la sociedad, independientemente que se trate de actores políticos, serán consideradas como una parte sustancial de la comunicación política; pues aluden directamente a la *toma de decisiones* en manos de las elites gubernamentales. Por tal razón, la definición que considera Panebianco se plantea así:

*La comunicación política puede definirse, en una primera instancia, como el tipo particular de mensajes –informaciones- que circulan dentro del sistema político y que son indispensables para su funcionamiento, ya que condicionan toda su actividad, desde la formación de demandas hasta los procesos de conversión, y las respuestas del mismo sistema* (Panebianco, 1988: 326).

Así, se hace evidente la necesidad de identificar de la manera más precisa el tipo de flujo informacional que nos aclare, un tanto, la complejidad y el sentido que adquieren los sistemas políticos. En este caso, es a partir de los discursos, como instrumentos de la comunicación política, que es viable identificar el tipo de demandas que los actores políticos más representativos vierten a las elites gubernamentales, a la vez que se refleja, también, la inclusión o exclusión de intereses de las clases o grupos sociales en el proyecto de la nación. Como señala Zemelman: *Lo político es definido entonces como la articulación dinámica de los sujetos, prácticas sociales y proyectos, cuyo contenido específico es la lucha por dar una dirección a la realidad en el marco de opciones viables* (Zemelman, 1989:13). Esta idea se complementa con el concepto de poder en Castells: *“El poder es la relación entre los sujetos humanos que, basándose en la producción y la experiencia, impone el deseo de algunos sujetos sobre otros mediante el uso potencial o real de la violencia, física o simbólica”* (Castells, 1999: 41).

Ello alude al aspecto subjetivo que toda *comunicación política* supone, lo que exige procesar sus expresiones mediante una metodología que nos permita levantar interpretaciones lo más apegadas a lo que hacen explícito los *discursos políticos*, permitiendo identificar la relación de las ideologías que se reproducen en los escenarios políticos, y que solo tienen explicación como expresión de un proceso histórico particular, de una concreción cultural que hace de cada sistema político, un caso único e irrepetible.

#### 1.2.4 *El discurso como vehículo de la ideología.*

Uno de los retos más importantes para la antropología, la sociología y la ciencia política, es identificar, primero, los rasgos de la ideología dominante, así como a los principales actores sociales que luchan por el poder, pues sin ello difícilmente se podría establecer la forma que adquiere la contienda política. La presencia de los actores políticos permite deslindar a la elite que está luchando constantemente por el poder, precisar cuáles son sus instrumentos de lucha, su discurso, precisando el tipo de ideología que lo distingue de otros actores y las posibilidades que realmente tiene para alcanzar lo que está en juego: el poder.

La ideología plasmada en un discurso constituye el referente más preciso y efectivo para identificar a los actores sociales, pero sobre todo, para identificar el proyecto de nación por el que luchan. Se trata de reconocer, *grosso modo*, la influencia de los actores políticos en la definición del futuro de un sistema social, que, por ejemplo, en el caso de México, aparece como una transición gradual marcada por la crisis, es decir, por situaciones económicas, políticas y sociales cuya presencia representa un conflicto en la reproducción del sistema social.

La ideología es fundamental pues todo cambio va guiado por una confluencia de discursos dirigidos a plantear el rumbo que ha de seguir la transformación de las estructuras sociales, hacia donde se ha de encauzar el rumbo de una nación, los esfuerzos de un partido político, la acción de un actor social. De hecho podríamos considerar dos ángulos de análisis: *uno, cuya dirección capte la imposibilidad de darle continuidad a las estructuras del pasado, y dos, la crisis de las ideas dominantes que las justificaba y las nuevas ideologías que intentan predominar en el escenario político*. En ese sentido, es pertinente considerar que un fenómeno que afecta la estabilidad de un sistema político, marca el mejor momento para observar la confrontación ideológica que solo puede expresarse a partir del discurso. Ello denota, seguramente, la legitimidad de una ideología dominante así como las ideologías emergentes proyectadas por la oposición y que aparecen en el escenario público como ofertas políticas alternativas.

Visto así, habría de considerarse que todo orden está acompañado por una ideología dominante, un conjunto de pensamientos y creencias que lo justifican, denotando que las ideologías encubren los intereses de la clase dominante en el proyecto de nación que supone la defensa e incorporación del conjunto de los intereses de la sociedad. Por tal razón, Thompson sugiere que:

*...estudiar la ideología es estudiar las maneras en las que el significado sirve para establecer y sostener las relaciones de dominación. Los fenómenos ideológicos son fenómenos simbólicos significativos en la medida que sirven, en circunstancias socio-históricas particulares, para establecer y sostener relaciones de dominación* (Thompson, 1998: 95).

Se trata de definir a la ideología no sólo como una caracterización de los actores políticos, sino como forma de un instrumento de confrontación entre las clases sociales, pues en todo caso, es lo que permite determinar el grado de dominio de un grupo o clase

social. Nuevamente, vuelve a aparecer la importancia de lo simbólico que inevitablemente está inmerso en la comunicación, y por tanto, en una ideología-discurso que permite conocer un aspecto de la realidad tanto social como política (Godelier, 1990). Tal especificidad permitirá aplicar los diferentes conceptos sobre ideología, así como probar su pertinencia a partir de casos concretos que en su especificidad histórica mostrarán el carácter simbólico de la comunicación.

Por otra parte, es pertinente advertir que el discurso juega a manera de vehículo de la ideología, y como expresión explícita de la comunicación política, condición que hace indispensable identificar los sentidos, propósitos e intereses concretos. Esta es la clave para observar cómo la ideología, proyectada a partir de un discurso, propicia que la sociedad adquiera alternativas a la ideología dominante.

La ideología vista como conjunto de enunciados "sistematizados" es lo que le confiere al discurso de los actores políticos la posibilidad de proyectar ante la sociedad, mensajes consistentes y aparentemente coherentes que puedan ser considerados como proyectos de nación que los distinguen de sus contrarios. Quiere decir que todo grupo o clase social encausada en el escenario político para competir por el poder, necesariamente habrá de contar con un discurso mediante el cual establezca contacto con la ciudadanía que, en última instancia, decidirá a cual opción dar su voto de confianza en los procesos electorales, donde se resuelven formalmente las contiendas políticas.

La coherencia del discurso deberá de ser tal que haga aparecer al proyecto de nación, al cual da forma, como un proyecto incluyente del conjunto de los intereses de la sociedad, ocultando los intereses del grupo o clase social que lo promueve. Así, la ideología no deberá ser analizada a la luz de juicios de valor relativos a la veracidad de los postulados ideológicos refrendados coherentemente con alguna teoría específica, sino a partir de las articulaciones entre cada una de sus partes, pero sobre todo, de las alternativas y críticas al proyecto de nación prevaleciente o a la ideología dominante que lo resguarda. Es en ese contexto que adquieren relevancia los ámbitos económico y social (Villoro, 1985).

La ideología aparece, entonces, a través de un discurso que se expresa mediante un conjunto de enunciados articulados, como un gran cuerpo de ideas y creencias sobre la realidad social, sobre el pasado, el presente y, sobre todo, un futuro alentador que promete la solución a las crisis actuales.

La contienda entre los adversarios se debate a partir de discursos políticos que fluyen en los medios de comunicación masiva, cuyo sentido intenta generar un consenso progresivo dirigido a combatir a la ideología predominante que justifica la permanencia en el poder de un grupo o elite política. Para comprender el papel que juega el discurso de los actores políticos que se reproducen en los medios masivos de comunicación, consideramos lo que a ese respecto Thompson plantea:

*Los medios de comunicación masiva no son simplemente uno de los distintos mecanismos que sirve para inculcar una ideología dominante; más bien, estos medios constituyen en parte el foro mismo en que ocurren las actividades políticas en las sociedades modernas, foro en el cual, y en cierta medida en relación con el cual, los individuos actúan y reaccionan al ejercer el poder y responder al ejercicio del poder por parte de otros.* (Thompson, 1998: 143).

Por ello es imposible pensar en la política moderna sin considerar a los medios masivos de comunicación que garantizan el flujo de la comunicación política de los principales actores políticos, y desde luego, sin ellos ningún sistema político podría legitimarse o deslegitimarse. De esa forma es fácil deducir cómo la pérdida de consenso se rebela a partir de la decisión de las clases sociales de optar por otra alternativa política, diferente a la predominante. El ascenso o consenso que generan los discursos de la oposición, representa un proceso de desmitificación-mistificación, pues representa la crisis de la ideología dominante y el fortalecimiento político de la ideología emergente. Se trata de un proceso simbólico mediante el cual el *imaginario colectivo*<sup>16</sup> desecha poco a poco, todas y cada uno de los mensajes ideológicos transmitidos por la elite burocrática, dando credibilidad a lo que plantea un nuevo proyecto de nación alternativo al que ha entrado en crisis (Laplantine, 1995, 1974).

La oposición ascendente que accede poco a poco al poder, crea una nueva ilusión en el *imaginario colectivo* en el cual proyecta la idea de un futuro alentador, un futuro en el cual se regenera la certidumbre sobre el rumbo de la nación. Y es aquí, precisamente, donde se recrea la disyuntiva de la ideología, entre el carácter injustificado del conjunto o partes de sus creencias, en la medida que constituye una alternativa falsa (creación en el

---

<sup>16</sup> Para Castoriadis (1983) “Lo imaginario del que hablo no es imagen de... Es creación incesante y esencialmente indeterminada (social-histórico y psíquico) de figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de “alguna cosa”. Lo que llamamos “realidad” y “racionalidad” son obras de ello.” Pág. 10. Más adelante dice: “Hablamos de imaginario cuando queremos hablar de algo “inventado” o de un deslizamiento, de un desplazamiento de sentido, en el que unos símbolos ya disponibles están investidos con otras significaciones que las suyas “normales o canónicas”. Pág. 219.

imaginario de una situación "ideal") a la situación actual, y la posibilidad de materializar la ideología en un proyecto concreto, político, económico y/o social (Bartra, 1996).

Los actores políticos que se enfrentan en el escenario nacional representan para los individuos la posibilidad de sentirse parte de una clase social, conforme creen que sus pensamientos o ideas son compatibles con lo que observan y escuchan en el espacio público. *Los individuos hacen suya la ideología que fluye en los medios de difusión masiva y que, lógicamente, están monopolizados por las elites políticas.* Así, el discurso de los diferentes actores políticos dota a los individuos de una personalidad política al momento en que toman partido de lado de una u otra ideología. Dota de identidad no sólo a quien emite el discurso, sino a quien lo recibe, ya sea que lo rechace o lo comparta. Es en ese sentido que Villoro sostiene:

*Al adherirse a ellos, todos los individuos acaban aceptando el punto de vista de la clase y, dirigiendo su conducta por sus valores, se someten mentalmente a las creencias que favorecen y expresan los intereses de esa clase... El individuo cree obedecer en su comportamiento a ideas universalmente válidas y en verdad obedece, sin saberlo, al orden de dominio de una clase (Villoro, 1985: 65).*

Ello permite reconocer el carácter social de la ideología pues no se trata de una construcción individual, sino de un proceso histórico, y por tanto social, el cual da origen a diferentes formas del pensamiento colectivo, a la ideología dominante, que en última instancia, representa al orden establecido. La diversidad de ideologías en un sistema político cuya cobertura política normalmente no es muy diversa, son atemperadas en relación a la ideología dominante que invariablemente privilegiará los intereses de las clases económicamente dominantes sobre una amplia fragmentación de intereses que subyacen al conjunto de la sociedad.

Estas ideas son fundamentales, sobre todo en aquellos casos donde los sistemas políticos transitan por la ruta de la democracia, y donde la propia madurez de la sociedad se observa a partir de una clara diversidad de actores que confluyen y coexisten en una lucha institucional por el poder. La pluralidad, precisamente, se expresa a través de discursos políticos presentes en la reproducción del imaginario colectivo a través del papel que juegan los medios de difusión masiva, cuya función fundamental es la generación de corrientes de opinión pública que dirimen su sentido y su fuerza (en la socialización de las ideologías) entorno a la ideología dominante.

### 1.2.5 *La cultura política y la identidad de los actores sociales.*

Hacer referencia al aspecto de la cultura como una forma de manifestación social, implica dirigir la atención a la complejidad organizacional que define a la sociedad que se pretende interpretar. De tal manera, que el perfil cultural de los actores políticos ha de estar lo suficientemente definido para distinguir su identidad de las demás. La conducta colectiva de una sociedad supone referirse a un espectro cultural que permite comprender todas y cada una de las manifestaciones sociales a partir de las cuales se identifica una cultura en específico: costumbres, idiosincrasia, organización económica, sistema político, el arte, la educación formal, los medios de comunicación, la historia, el papel de la familia, etc. Como lo señalan Alonso y Rodríguez: "*La cultura, en términos muy generales, se refiere a creaciones sociales, al complejo de actividades y de productos intelectuales y manuales del hombre en sociedad, al modo de concebir el mundo y la vida; la cultura como resultado de una sociedad que integra la organización social, la controla y asegura su cohesión contradictoria*" (Alonso y Rodríguez, 1990:342).

Es decir, que se apunta al conjunto de las relaciones sociales en sus niveles tanto estructurales como superestructurales, alcanzando todos los niveles de interacción de los individuos desde el ámbito privado hasta el público. La cultura de una sociedad refleja su capacidad para formar, mejorar y perfeccionar al hombre. Implica que el hombre, en sociedad, ha de conocerse a sí mismo para alcanzar su realización como tal. En general, se trata del conjunto de conocimientos, modos de vida creados y aprendidos, que una generación transmite o hereda a las nuevas generaciones; lo cual permite a una sociedad determinada históricamente da cuenta de su presente y aspira a un futuro definido por ella misma (Abbagnano, 1961:276). De aquí que la característica central de la cultura sea su función como elemento cohesionador del conjunto de la sociedad, a partir del cual todos los individuos encuentran *símbolos de identificación colectiva*, y en los que, sin lugar a dudas, el nacionalismo representa el símbolo cultural más relevante (Gellner, 1998, 1988).

El principal problema en el tratamiento de la cultura es precisamente el aspecto general del concepto, problemático porque independientemente del estadio social que se trate, obliga a reconocer la heterogeneidad social que presenta toda formación social. En

ese sentido, se tiene que contemplar que la sociedad, su cultura, se compone por un conjunto de *subculturas* (subsistemas) que dan cuenta de cada uno de los fragmentos sociales que la integran, así como de sus formas específicas de expresión. De tal manera que reconociendo diversas formas de expresión cultural (económicas, político-ideológicas y sociales), es como se hace comprensible la presencia de identidades específicas de cada actor social, por antagónicas que sean sus posiciones o sus propuestas en el escenario nacional (García Canclini, 1999, 1989).

Por otra parte, sobre todo en la perspectiva antropológica, lo esencial en la cultura es la *producción de símbolos*, de representaciones que una colectividad comparte y que le confiere, por tanto, *identidad*. Es a partir del papel que juegan los símbolos que, entonces, los individuos y los grupos sociales desarrollan un *sentido de pertenencia*, una *percepción que les concede certidumbre por el solo hecho de ser parte de un grupo, clase, raza o género* (Turner, 1980; Leach, 1985). Por ello es inevitable que la práctica social se defina a partir de los símbolos que una cultura crea a lo largo de su historia, en la reproducción de la vida cotidiana, en el intercambio entre los individuos y los grupos sociales. Respecto a la importancia que tiene *la cultura como productora de símbolos*, tenemos la siguiente idea de Bertalanffy:

*Salvo por la satisfacción inmediata de necesidades biológicas, el hombre vive en un mundo no de cosas, sino de símbolos...Podrá dudarse con razón de que el hombre sea un animal racional, pero de fijo es, de pies a cabeza, un ser creador de símbolos y dominado por los símbolos* (Bertalanffy, 1976: 226).

Y más adelante:

*La distinción entre valores biológicos y específicamente humanos está en que los primeros atañen a la conservación del individuo y la supervivencia de la especie, y los últimos siempre aluden a un universo simbólico* (Bertalanffy, 1976: 227).

De hecho, la *cultura como productora de símbolos*, es la que garantiza la cohesión de los miembros de la sociedad, pues la ideología dominante que de ello se desprende define el orden social que, en principio, todos aceptan, pues es el contexto que los hombres entienden su ambiente a partir del papel que juega la cultura mediante su cualidad comunicativa, permitiendo vincular el pasado, el presente y el futuro. Así, la información implícita en los procesos de civilización, es, en todo caso, lo que permite señalar que *la*

*cultura se aprende, se comparte y se transmite.* Por tal motivo, en ella es evidente que los procesos humanos son procesos energéticos, incluyendo lo biológico o lo sociocultural. Adams lo señala de la siguiente manera: *Si la información consigue estimular, encender, movilizar y, en general, detonar la actividad energética, es porque –y solo porque- ella misma es actividad energética* (Adams, 2001: 176). En ese sentido, habrá de destacarse que la principal forma que adquiere el término información, ineludiblemente pasa por el significado que culturalmente tiene la comunicación, pues sin ésta es imposible hablar de lo humano, de lo social. Entonces, la calidad energética de la información-comunicación es lo que hace posible la reproducción de los sistemas, en la medida que éstos dependen totalmente del mundo simbólico que produce toda cultura a partir de su experiencia socio-histórica. Solo de esa forma es posible comprender la importancia que tiene el papel que juegan los medios de comunicación masiva en la reproducción de los sistemas políticos, pues en todo caso ellos fungen como instrumentos fundamentales en la transmisión de la cultura (Lardellier, 2003).

En ese sentido es necesario insistir en el proceso energético implícito en la cultura y las formas específicas que adquiere a partir de generación y reproducción de la comunicación, que permite *la unidad implícita* cuando empleamos el término *identidad*. *Vista así, en la medida que la cultura confiere coherencia y unidad a una sociedad, en la medida que produce símbolos que, prácticamente, serán aceptados por sus miembros.* Adams, lo plantea de la siguiente manera:

*El entendimiento humano tiende a imponer cierta unidad a los significados, a la información y a los vehículos de los que ambos forman parte. Esto es lo que hemos dado en llamar “cultura”, y se consigue imprimiendo coherencia a los significados, de modo tal que los modelos mentales de diferentes individuos operen de conformidad con un patrón más general respecto de algunas formas o procesos energéticos.... La importancia del factor energético para la comunicación se esclarece cuando nos percatamos de que la información concierne, siempre, absoluta y singularmente a la forma energética en la que se localiza, esto es, al receptor* (Adams, 2001: 179-180).

En ese sentido, ello nos sugiere que la comunicación (la proyección de los símbolos en el imaginario colectivo), adquiere su significado real en el contexto de una cultura donde el posible significado de un discurso, pues al no ser así se podría reducir a lo estrictamente

lingüístico. Esa posibilidad nos exige considerar la importancia del contexto socio-histórico, donde no solo cuenta el compartir los significados de una historia, sino del momento coyuntural en el que se inscriba el discurso.

Una idea útil respecto a la identidad política, es la definición que Pasquino hace para los grupos de presión:

*"Entendemos por grupo de presión la actividad del conjunto de individuos que unidos por motivaciones comunes tratan de influir, a través del uso o de la amenaza del uso de sanciones, en las decisiones que toma el poder político, ya sea a fin de cambiar la distribución prevaleciente de bienes, servicios, cargas y oportunidades, ya sea a fin de conservarla ante las amenazas de intervención de otros grupos o del poder político mismo". (Pasquino, 1981:751).*

Sin embargo, valga reconocer la heterogeneidad social que caracteriza a toda cultura política y la amplitud a que hace referencia ese concepto; por ello, para facilitar el análisis antropológico, es necesario delimitar un ámbito concreto de ese complejo contexto al que hacemos referencia. Esto es, situar al grupo social que se pretenda identificar a partir del concepto *grupo de presión*, en el contexto de un sistema político en específico.

Para el objetivo que persigue esta investigación habrá de señalarse la especificidad del concepto de cultura política, a partir de dos aspectos: el primero, alude a la estructura social, y el segundo, al campo específico de lo político. Respecto a la cuestión de la estructura social ha de considerarse la composición de la sociedad a partir de sus clases sociales, donde lo político tiene explicación a partir de las diferentes conductas políticas que éstas adoptan al interactuar dentro de la lógica del sistema político de la sociedad en la que coexisten. Como lo señalan Alonso y Rodríguez:

*"El término cultura política ha sido utilizado como el conjunto de valores, orientaciones, actitudes, expectativas (sobre todo), normas, conductas y prácticas acerca del sistema político. La subordinación, la adhesión, la confianza, la justificación, la ilusión, la participación, la apatía, la resistencia, la contestación, la impugnación y lucha alrededor de las actividades públicas son enmarcadas en este amplio catálogo de lo que se denomina cultura política. Esta cultura tiene que ver con las tradiciones, hábitos y costumbres políticas de grupos que originan identidades y dan sentido a su actividad. Todo poder político se sustenta en cierta cultura política y al mismo tiempo la moldea y adapta a sus exigencias." (Alonso y Rodríguez, 1990:344).*

Considerando tal definición, resulta conveniente tener presente que la heterogeneidad social sugiere la presencia de una diversidad de intereses de los sectores o clases sociales que integran una sociedad, mismos que anteponen en sus prácticas políticas dirigidas a ejercer el poder; alcanzar o apoderarse del Estado para garantizar la defensa de sus intereses específicos de clase. De tal manera que la misma heterogeneidad social refleje la existencia de *subculturas* que coexisten en una misma sociedad, a la vez que éstas puedan estar en constante contradicción, como es el caso en el ejercicio de la política. Mientras un actor puede aparecer ejerciendo su práctica política a partir de referentes del pasado, habrá otros que adopten nuevas prácticas políticas con un claro objetivo de transformar las tendencias de su realidad social.

No obstante, la clara ubicación del espacio social o la definición de la relación a la que se alude cuando se utiliza el concepto de cultura política, hace necesario reconocer su obvia relación con el concepto cultura. Sobre todo porque en los últimos años ha estado muy en boga el uso del término cultura política. El primer comentario al respecto, es que toda expresión de las relaciones sociales es expresión de la Cultura (con mayúsculas), ya sea lo referido a la economía, la política o lo “social”. Y como se advierte en el enfoque sistémico, la interacción de esos ámbitos es una expresión que da cuenta de la complejidad de la realidad social, pero sobre todo permite hacer referencia a la especificidad implícita del conjunto o parte de las prácticas de una sociedad a partir del término cultura. Y en todo caso, con el afán de abreviar, vale considerar la interpretación de Geertz, cuando descubriendo los excesos de la abstracción antropológica, llama nuestra atención respecto a la *interpretación densa de la cultura*, cuando él mismo sugiere como *metodológicamente más válido: “reducir” el concepto de cultura a sus verdaderas dimensiones* (Geertz, 1995:12). De tal forma que se hace necesario definir tanto la o las dimensiones de la cultura, para situar concretamente el aspecto de la realidad que pretendemos interpretar.

En ese sentido, especificar que se utilizará el enfoque de la cultura política, supone distinguir claramente que las significaciones que pretendemos captar son aquellas relacionadas con la reproducción del poder. En nuestro caso, interesa descubrir cuáles son las prácticas políticas de los empresarios que nos permiten comprender algunos aspectos relevantes de la cultura política de un actor en específico, y de una sociedad en general. Es decir, que del sentido general donde Geertz asume la influencia weberiana mediante la cual

destaca que el *hombre es un animal inserto en tramas de significaciones que él mismo ha tejido, y que por ello, la cultura habrá de destacar esas significaciones* (Geertz, 1995: 20), se pasa a la búsqueda, reconocimiento y comprensión de los aspectos del intercambio político de un grupo o sociedad, más significativos para comprender las formas y sentidos de la práctica política. Desde luego, habrán de reconocerse los símbolos que representan al poder y la posición que los individuos, grupos e instituciones guardan al respecto; la ideología y el discurso a partir del cual el poder adquiere objetivación, es fundamental para descifrar la cultura de cualquier sistema político. Sobre todo si estamos inmersos en la lógica de la política moderna, donde una de las principales acciones de la misma, se expresa a través de los discursos políticos que configuran el espacio público, donde se debaten los problemas de interés colectivo.

De esa forma, la cultura política se refiere al reconocimiento de comunicaciones que conciernen a la reproducción del poder. Así como todo lo político es cultura, pues ésta simboliza las relaciones del poder, también es indispensable considerar que el binomio cultura-comunicación es indisoluble. Por lo cual, los discursos constituyen la esencia de la cultura, y si lo que interesa es el campo político, entonces, el discurso político ha de ser el referente esencial de ese conjunto de costumbres y prácticas mediante las cuales, las partes que contienden por el poder, expresan sus posiciones de dominio o subordinación, su perspectiva del mundo que pretende prevalecer en el imaginario colectivo, sus demandas o decisiones, según se trate de los tomadores de decisiones o de los gobernados, etc. (Lardellier, 2003).

Evidentemente, sin discurso no existe comunicación, y por ende, reproducción de la cultura. Si se trata de política, entonces, ésta no puede expresarse, bajo la lógica de lo moderno, si no es a través de los discursos de los actores y las instituciones. Si nuestra interpretación demuestra capacidad de descubrir lo *realmente significativo*, estaremos en vías de lograr una descripción densa como la propone Geertz. En todo caso, como sugiere este autor: *la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos estos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa* (Geertz, 1995: 27). La clave, en nuestra opinión, es darle coherencia a una realidad que se nos presenta desordenada, contradictoria, condición cuya razón se encuentra en el carácter, en muchas ocasiones incomprensible, de la ideología, de su expresión mediante discursos que expresan la interpretación de un

individuo o grupo sobre la realidad social, privilegiando más sus propios intereses que una mínima objetividad cuya consistencia muestre la importancia de los intereses de los demás.

Ante la necesidad de los actores políticos por hacer que su perspectiva del mundo prevalezca en el imaginario colectivo, el discurso político ofrece a los adversarios una versión de la realidad que vive su sociedad, que por definición tendrán que rechazar, criticar o combatir. Y la sociedad que aparece como espectador-receptor en el espacio público, donde la mayor parte de las veces, ante el caos provocado por la gran diversidad de discursos políticos (considérese las coyunturas electorales), desde el poder o desde las posiciones que compiten por él, parece escuchar interpretaciones de una realidad que no está en condiciones de comprender por sí misma (Riviére, 2005; Balandier, 1994a). Desde luego, es parte del uso del discurso que requieren todos aquellos que se dedican a la política, pues en ocasiones lo que se requiere es mantener un ambiente de confusión, lo que colinda con el carácter contradictorio de la propia ideología.

Esto constituye un reto para la descripción etnográfica, que según Geertz, tiene tres características: .... 1) *es interpretativa, lo que interpreta es el flujo del discurso social, y la interpretación consiste en 2) tratar de rescatar “lo dicho” en ese discurso de sus ocasiones percederas, y 3) fijarlo en términos susceptibles de consulta* (Geertz, 1995: 32).<sup>17</sup>

Como se puede observar, al discurso se le concede la capacidad de portar las *significaciones*, por ello se hace necesario rescatarlo (procesarlo), interpretarlo con sus mejores conjeturas, dice Geertz (darle coherencia relacionándolo con los hechos y el resto de discursos de su ambiente, que le confiere su carácter social) y presentarlo de manera comprensible. La densidad de la interpretación responde a la complejidad de la realidad social y a las necesidades cognitivas.

También vale la pena considerar la crítica que hace Tejera a muchos autores, principalmente politólogos, cuando explican el concepto de cultura política, como un aspecto “independiente” de la cultura, y no como una expresión de la misma. Por ello se refieren a las cuestiones significativas del poder, su reproducción, como expresiones de la cultura política (Tejera, 2003). Más interesante es la argumentación de este autor para sugerir una aplicación pertinente del concepto de cultura política, para lo cual recurre al término *objetivación* aludiendo a las transformaciones en la relación entre cultura y

---

<sup>17</sup> La numeración y el subrayado son nuestros.

política, donde la segunda no sólo aparece como expresión de la primera, sino que refiere a relaciones sociales específicas cuya reproducción se da en un espacio determinado. Esto es, que la política adquiere forma y se expresa, conforme representa una dimensión de la cultura. Al respecto Tejera señala:

*Se define como objetivación al proceso mediante el cual un individuo o grupo social construye un discurso que enfatiza, exagera o inventa ciertos aspectos de su identidad, vida cotidiana, entorno social, convicciones y creencias, interpretaciones sobre la historia nacional, entre otros, con el propósito de influir en la esfera política. Debido a que responde a situaciones coyunturales, la objetivación constantemente se renueva, y puede modificar las percepciones sobre la sociedad, la política y el gobierno (Tejera, 2003: 26).*

El aspecto relevante de esta idea es observar cómo el discurso de los individuos o grupos sociales representa una de las principales posibilidades para materializar la cultura, pues su construcción y uso representan una práctica social. Y en la medida que esas comunicaciones pretenden mantener, regular, obtener o acceder al poder (en general transformando las estructuras del poder) se inscriben en la dimensión de lo político, de lo que el común denominador de los politólogos denomina cultura política. En el siguiente párrafo Tejera aclara:

*En otras palabras, la objetivación se refiere al proceso de selección, resignificación e invención de contenidos culturales, los cuales son utilizados para sancionar posiciones y estrategias en la esfera de las relaciones políticas. Sus contenidos se expresan tanto en los discursos políticos, como en cuanto la forma en que se estructuran ciertas prácticas en el ámbito de las relaciones políticas con base a dichos contenidos (Tejera, 2003: 26).<sup>18</sup>*

Así, en la dimensión política de la cultura, el discurso representa la acción de individuos y grupos que diluyen el carácter abstracto de una definición de cultura, refleja las formas que adquiere el poder y la posición de los subordinados respecto a él, como también la forma de las prácticas políticas de una sociedad. Solo se requiere insistir en la necesidad de considerar que el binomio cultura-comunicación es indisoluble, y por ello la presencia del discurso resulta un elemento indispensable para comprenderla, tanto como para explicarla. A través del discurso se advierte la objetivación de la cultura, pero de manera muy particular en la dimensión política ¿cómo reconoceríamos una negociación,

---

<sup>18</sup> El subrayado es mío.

adhesión, demanda, propuesta, etc.? Si no es mediante *el análisis del discurso, instrumento fundamental de la comunicación, y por ende, de la comunicación política.*

#### 1.2.6 *La comunicación política desde la teoría de los sistemas.*

Independientemente de los modelos explicativos usados para analizar el papel que juega la comunicación en los diferentes sistemas políticos, la teoría de los sistemas parece ser el referente metodológico más solvente y, por tanto, al que se recurre más para situar de manera muy clara el papel que juega la comunicación en la reproducción social, y por tanto, en la reproducción del poder. Del mismo modo, es prácticamente imposible demostrar la pertinencia de la teoría de los sistemas sin recurrir al *papel energético que desempeña la comunicación*, y tratándose particularmente del ejercicio del poder, el que desempeña, entonces, la comunicación política.

Por ejemplo, si partimos del esquema básico de la comunicación, donde existe un *emisor, un mensaje, un canal de comunicación, el receptor, y la retroalimentación* que puede sugerir un proceso inagotable donde el receptor se vuelve emisor, y viceversa. El intercambio generado a partir de este proceso puede ser perfectamente captado a partir del modelo sistémico, donde la comunicación y el flujo de información implícito, define la dinámica energética de intercambio entre el sistema y su ambiente (Varela, 2005). De hecho, el análisis sistémico nos obliga a reconocer la complejidad de la realidad social al sopesar todos y cada uno de los elementos económicos, políticos y culturales que juegan y se relacionan entre sí, para adoptar la forma sistémica que nos permite comprender los diversos aspectos sociales.

En un sentido estrictamente político, y desde la *perspectiva energética-sistémica, la comunicación política juega un papel central, tanto en la reproducción del sistema político como en su relación-intercambio con los otros subsistemas: el económico y el socio-cultural.* Por ejemplo, el hecho que Easton plantee la relación entre el *sistema* y el *ambiente* a partir de *entradas y salidas*, intermediadas por una *caja oscura* donde deja de tener importancia las razones que los decisores políticos consideraron para adoptar una u otra decisión, política o económica, nos obliga a fijar la atención en el tipo de proyectos y demandas que los diferentes actores políticos esgrimen en el espacio público (Easton,

1989). En ese sentido, la comunicación política que adquiere forma a través de los discursos de cada actor o institución política, aparecen en la perspectiva del poder como *demandas* que la burocracia debe considerar. Evidentemente, esto acontece en el marco de un esquema sistémico donde se hubiese elegido al espacio gubernamental como el sistema y donde el ambiente esté determinado por el campo social, desde donde se proyecta todo tipo de demandas a las elites burocráticas, los consensos y disensos. En ese sentido vale recordar que para Easton: *lo que distingue las interacciones políticas de todas las otras interacciones sociales es que se orientan predominantemente hacia la asignación autoritaria de valores* (Easton, 1989:79). Lo que nos apremia a distinguir, en todo caso, cuáles son los actores políticos a los que se permite tener acceso a los *valores asignados* (que bien pueden ser decisiones tomadas a favor o en contra) y a cuáles se les margina de tal beneficio.

Así que el discurso como recurso de la comunicación política, representa el vehículo mediante el cual los diferentes actores políticos establecen un diálogo con las elites gubernamentales. Por esa razón, en esta propuesta analítica de la comunicación política hace aparecer a los discursos, primero, como los vehículos comunicativos de los sujetos sociales mediante los cuales plantean demandas/entradas al sistema; segundo, y en el caso en que las demandas sean satisfechas, una segunda etapa, en la cual se expresen los apoyos políticos y, por tanto, los consensos requeridos para dotar a los sistemas políticos de la suficiente legitimidad que evite, lo más posible, el uso de la violencia monopolizada por el Estado.

Es precisamente, el diálogo que hace posible la comunicación política, el recurso mediante el cual la sociedad en su conjunto inicia y consolida un *proceso de aprendizaje* que le permitirá avanzar en el camino de la democracia. De esa forma es como una sociedad se torna cada vez más reflexiva, o más conciente en la perspectiva marxista, respecto al rumbo que adopta el ejercicio del poder. En esa lógica, la falta de un desarrollo y consolidación de una creciente comunicación política, del espacio público, donde los diferentes actores tengan la oportunidad de *interpelar* a sus adversarios, de replantear sus demandas y propuestas políticas, así como de utilizar los diferentes medios de comunicación masiva para ganar el apoyo de otros sectores sociales, limitará la politización de la sociedad. Y de la misma forma, los ciudadanos que en la lógica de la comunicación

política emergen como espectadores y consumidores de ofertas políticas, también van aprendiendo a relacionar el discurso con la práctica política de los líderes y partidos políticos.

Por tal razón, habrá de considerarse al discurso como el elemento fundamental de la comunicación política, de tal manera que *la convergencia de los discursos políticos en un mismo tiempo y espacio público, representen el tipo de intercambio que los diferentes agentes de la comunicación van adquiriendo con el tiempo*. Por ello es sustancial advertir que la comunicación, en la lógica sistémica, constituye la base fundamental del *aprendizaje social de la política*, sin el cual es prácticamente imposible que las sociedades avancen hacia la Modernidad. Y al tiempo que el discurso confiere a los principales actores políticos cierta consistencia, también dota a los espectadores de la arena política, de los elementos mínimos para que los ciudadanos distingan las diferencias entre las diversas ofertas políticas. Sin tal perspectiva a que obliga la teoría de los sistemas, la comunicación política tendría una proyección muy restringida, pues los discursos y el flujo de la información en general, reflejan el intercambio entre adversarios o entre sistema y ambiente. Por lo cual es mejor considerar a la comunicación política como la única práctica social que permite generar un proceso de retroalimentación donde todos los miembros del sistema político aprenden a participar, atendiendo las reglas y los códigos utilizados en ese espacio social.

En el caso de Deutsch, el hecho que destaque el papel de la comunicación en el ejercicio del poder, nos permite identificar cómo la relación sistémica impone la condición de diferenciar a lo que se ha elegido como el *sistema* y el *entorno*. Relación que nos permite enfatizar en la parte del proceso dinámico de intercambio (intercambio comunicacional) donde la toma de decisiones depende del cambio que registra el flujo entre una y otra parte. En ese sentido, habría de definirse cuáles son las formas que adopta la comunicación política tanto en el sistema como en el entorno. Sobre todo si consideramos que el referente de Deutsch en la construcción de su modelo sistémico, tiene como objetivo arrojar luz sobre las relaciones entre un gobierno y la sociedad a la que se debe, y por ende, sobre los aspectos político-sociales sobre los que descansa la legitimidad de los sistemas políticos. De hecho, sobre esa relación en particular, es donde se puede construir una interpretación basada en la perspectiva sobre el riesgo, que posteriormente nos ofreció la elaborada propuesta de Luhmann (1992).

En ese sentido, cabe señalar que si bien la teoría de los sistemas nos abre un abanico de posibilidades en cuanto al tipo de comunicaciones políticas que las instituciones y sujetos, individuales y colectivos, entablan en el espacio del escenario político correspondiente, habrá de ensayarse empíricamente sobre las expresiones comunicacionales concretas que, en todo caso, nos permitirá probar la aproximación o distancia existente entre aliados y adversarios políticos. Pero nuevamente, aparece la cuestión de la comunicación como el elemento indispensable para observar la lógica de un proceso de retroalimentación entre las partes, un proceso dinámico que elimina cualquier posibilidad de validar una perspectiva analítica estática, y que apunta a reconocer cómo la comunicación, en general, y la comunicación política, en particular, propician un proceso de aprendizaje social que puede enriquecer el ejercicio del poder en la medida que lo legitima, y por tanto, el avance en el ejercicio de la democracia.

Sin embargo, en la medida que Deutsch centra su interés sobre la política y ésta se explica a través de las formas como se ejerce el poder, la lógica de vinculación entre el sistema y entorno, radica en la capacidad selectiva de lo que se ha designado sistema. Pues sólo de esa manera, la respuesta que el sistema recibe del entorno tiene la posibilidad de expresarse como una resistencia que intenta evadir el sentido que se le pretende imponer. Es aquí donde se hace evidente una relación dialéctica entre la voluntad de los actores que ejercen el poder y los que habrán de aceptar o rechazar sus medidas, por ejemplo, económico-políticas. Las elites gubernamentales luchan porque sus comunicaciones dirigidas al campo de la política, al espacio público, sean aceptadas, y por tanto, generen consenso y en ese sentido legitimen su gestión. Mientras que los actores políticos más representativos están al alba respecto a los beneficios o costos, mediatos o futuros, que las decisiones gubernamentales tengan para ellos y sus representados, dado que en su momento generarán una comunicación política tendiente a legitimar o a repudiar las decisiones o medidas gubernamentales.

Esta *retroalimentación* habría de constituir la base de un *proceso de aprendizaje cifrado en la comunicación*, que desde el poder desarrolle la capacidad para prever los problemas políticos, sociales y económicos que amenacen la legitimidad de una gestión. De tal manera que el *aprendizaje político* dependerá, en la lógica de la interpretación sistémica de Deutsch, de la capacidad de los gobiernos para procesar la información a partir de los

intercambios generados entre el sistema y el ambiente, de la capacidad para procesar la comunicación política que emiten los diferentes actores sociales. Se trata de un proceso del que depende la *sobrevivencia* del sistema, la cual persiste a partir de una rutina de procesamiento de la información que permita generar, primero, *una memoria*, segundo, un *conocimiento*, tercero, una *experiencia* que deja, finalmente, un *proceso de aprendizaje de lo político* que demuestra una capacidad mínima de resolución política que evite lo más posible los riesgos. Es por ello que Deutsch señala:

*Además de buscar objetivos, los gobiernos o las organizaciones políticas pueden tratar de mantener cierto estado de cosas que estiman deseable, tal como la prosperidad en la economía o la tranquilidad en la política. Al hacerlo así, deben recibir información concerniente a la magnitud y el ritmo de los desórdenes, para poder orientar la dimensión y velocidad de las contramedidas (Deutsch, 1985: 206).*

Esta idea es importante porque alude al principio sistémico de *equilibrio entre el sistema y el entorno*, sin embargo, a pesar de la presencia del proceso de *retroalimentación* generada mediante la comunicación entre las partes, la iniciativa le corresponde al *sistema*. Es decir, que, en la dinámica de un sistema político, corresponde a la voluntad de las elites gubernamentales la iniciativa de restablecer el equilibrio que puede provocar la transformación del entorno. De tal forma que el dinámico cambio de la realidad social sea procesado empíricamente por los decisores políticos, en información que permita definir las estrategias a seguir para salvaguardar la estabilidad del sistema. En un plano estrictamente político, el entorno genera comunicaciones políticas que espera sean recibida por los decisores políticos, y éstos generan sus propios mensajes (discurso gubernamental que toma posiciones políticas, que justifica decisiones, o que simplemente comunica acciones que toman las autoridades en los diferentes ámbitos de la vida social) que, finalmente, son respuestas a la lectura que tienen de su ambiente. El discurso, entonces, permite identificar plenamente el tipo de intercambio entre sistema y ambiente, seguir el flujo de información que permite explicar la relación entrada-salida. Por lo cual la comunicación política, en todo caso, contempla la participación de las partes, el conjunto de los actores o la relación entre elites gobernantes y los diferentes actores sociales, facilitando reconocer su identidad política, pues sus posiciones se hacen evidentes a partir de sus discursos que proyectan en el espacio público.

En el caso del tratamiento de la teoría de los sistemas por parte de Luhmann, se observa, inevitablemente, la presencia de la comunicación como elemento relacional entre el sistema y el entorno. Sin embargo, y esto es fundamental en el planteamiento de este autor, *la comunicación representa un proceso de diferenciación entre sistema y entorno*, lo que sugiere la complejidad de la realidad social (Luhmann, 1991:157). En ese sentido, la lógica sistémica impone, a través de la comunicación, un tipo de intercambio que en el plano político se ha de traducir en aceptación o rechazo, respecto a la comunicación política de una de las partes. Lo que nos permite retomar el importante aspecto de los consensos y disensos. Se trata de un proceso de construcción de un sistema político cifrado en los valores de la democracia, donde necesariamente se generan las condiciones mínimas para el diálogo que supone la diversidad política. Esta relación es lo que da forma a una relación sistémica donde los decisores políticos intentan generar una comunicación política tendiente a la *persuasión*, es decir, a establecer o imponer una idea que sea aceptada, en general, por la sociedad en que se insertan. Así como también los ciudadanos intentan hacer llegar sus demandas a los decisores políticos para que éstos las consideren en la definición sus políticas, presentes y futuras. Ello sugiere precisamente, el carácter energético de la comunicación, pues determina la situación del poder, sobre todo, en cuanto refleja su reproducción, su mantenimiento o la erosión de sus estructuras.

Cabe señalar que en Luhmann, una aplicación de su interpretación de la teoría de los sistemas se observa nítidamente en su *sociología del riesgo*, donde aparecen nuevas formas de relación entre sistema y entorno, y la comunicación política no necesariamente se expresa a través de un discurso, sino de actos simbólicos como resulta ser la protesta social, y que en todo caso, constituye una expresión más de la comunicación política. En ese sentido, el primer aspecto a destacar es la cuestión que las expectativas juegan en la relación sistema-entorno, incorporando el elemento del tiempo, cuya presencia en el trabajo analítico impone la necesidad de reconocer el carácter cambiante de una realidad social. Se trata de un aspecto fundamental en el cual la comunicación política, esto es, todas aquellas expresiones implícitas y explícitas que dan forma a los sistemas políticos en cada sociedad, adquieren matices tan complejos que no basta el análisis de los objetos de estudio ubicados en un espacio temporal, pasado y presente, sino en la medida que se articulan a una realidad probable que pueda adquirir materialidad en el futuro.

En esta perspectiva sistémica las expectativas tienen un papel fundamental en el juego político, de tal manera que la comunicación política se dirija, en gran medida, hacia la proyección de un futuro más alentador que las vivencias del presente. La comunicación política emitida por las elites pretende convencer a la sociedad de que el proyecto de nación que ellas representan es viable en un futuro próximo. Y las respuestas provenientes del entorno, aparecen en el escenario político a partir de consenso o rechazo de las ofertas políticas. La complejidad que representa la comunicación política en la construcción del futuro, sugiere el tipo de perspectivas que han de considerar los decisores políticos en el procesamiento de la información, reflejando relaciones intrasistémicas y extrasistémicas que han de ser consideradas para enfrentar los escenarios futuros marcados por la incertidumbre. Tal capacidad depende, insistimos, de un proceso de aprendizaje donde el actor intenta que sus demandas, opiniones o posiciones políticas, sean consideradas en la definición de las decisiones gubernamentales, considerando la variable del riesgo. Sólo de esa forma, el sistema o el actor político puede adelantarse a los cambios que va generando el ambiente, y en ese sentido, las expectativas representan formas de comunicación e intercambio entre sistema y entorno, que suponen una retroalimentación que se traduce en aprendizaje. Por ello, la comunicación política emerge como el elemento fundamental para prever las resistencias u oposición que presenta el ambiente (Luhmann, 1992: 159)

Así, los *movimientos de protesta* emergen en el escenario político como comunicaciones que dirigen a las elites gubernamentales para manifestar su insatisfacción ante la situación social prevaleciente. De manera que lo significativo de su expresión se ubica más bien en lo simbólico que en lo discursivamente explícito, jugando en el margen de lo formalmente aceptado y lo que puede llegar al límite de lo legalmente establecido. Los movimientos de protesta, entonces, proyectan la disposición de algunos grupos o sectores sociales, a transgredir los límites del sistema político en el que irrumpen, haciendo clara su inconformidad contra la forma en que las elites ejercen el poder y definen el rumbo de la nación a la que pertenecen. Lo interesante de esta forma de comunicación política es que al carecer de un discurso, complejo y diversificado, que delinea la posición de este agente respecto a la mayor parte de los ámbitos fundamentales para la gestión gubernamental, tienen un significado sustancial para la política y el ejercicio del poder. Ese es el reto que imponen los movimientos sociales a los tomadores de decisiones, pues el

sistema deberá demostrar entonces que su proceso de aprendizaje político ha madurado lo suficiente cómo para sacar el máximo provecho de tales comunicaciones políticas que *iluminan las tendencias del sentido del futuro inmediato*. Este tipo de señales derivadas de observar metódicamente el ambiente podrían resultar más subjetivas, a diferencia del papel que juegan los discursos de los principales líderes e instituciones políticas, y por tanto, más difíciles de procesar para dejarlas en calidad de información estratégica para uso de la elite gubernamental.

Se trata de focos rojos que el ambiente emite en el intercambio establecido con el sistema. Pero en todo caso, será cuestión que el nivel de madurez política alcanzado por el sistema determine la capacidad de los decisores políticos para utilizar estas señales, como alertas que llaman la atención sobre *probables riesgos* que los gobiernos en turno enfrentan permanentemente. De ello surge la posibilidad que *el sistema se adelante a los cambios del entorno, que adopte medidas tendientes a disminuir los riesgos*, a solventar previamente costos políticos que coloquen en una situación incómoda al sistema. Y si como señala Luhmann, las decisiones adoptadas definen el sentido que va cobrando el futuro, las decisiones fundamentadas son las únicas posibles de reducir los riesgos que acechan a la estabilidad y el equilibrio sistema-entorno (Luhmann, 1992). Y sólo a partir de ellas, es que, en todo caso, el sistema puede influir sobre los rumbos futuros de la sociedad. En ese sentido, el reconocer la presencia de demandas en las diferentes formas de comunicación política es fundamental para la persistencia del sistema, pues *la capacidad de las elites para restablecer su equilibrio, depende de la solidez de su propio proceso de aprendizaje de lo político, de su capacidad para legitimar ante la ciudadanía, su permanencia en el poder*.

Por último, vale reiterar que esta explicación acerca del *papel que juega la comunicación en la reproducción de la cultura*, pretende avanzar en la lógica de un modelo interpretativo basado en los procesos energéticos implícitos en todas las relaciones sociales, y por ende, en la reproducción del poder. De ahí que en el siguiente apartado sea necesario plasmar los últimos trazos teórico-conceptuales para hacer más nítida la lógica energética-sistémica, en el tratamiento a que se someterá el proceso social que hemos denominado transición.

### 1.3 Una interpretación energética de la transición.

Nosotros entendemos como *transición*: el periodo en el es posible observar como una sociedad va transformando sus estructuras políticas, económicas y culturales (Sonntag, 1988). En ese mismo sentido, el carácter energético de la transición al que haremos referencia, contempla cómo el proceso de cambio alude a los intercambios del sistema y su ambiente, así como el flujo de información que bosqueja los intercambios internos entre sus subsistemas y el procesamiento simbólico que supone el equilibrio o la ruptura en el *continuum histórico* al que se somete una sociedad.

#### 1.3.1 La transición.

Una interpretación energética de cualquier transición es un reto que, sin duda, pondrá a prueba los instrumentos analíticos del investigador así como a la consistencia de su esquema metodológico. Como todo cambio social, supone un objeto de estudio profundamente complejo y, por tanto, de difícil comprensión. En ese sentido, quizás, la forma más “práctica” de resolver un problema de este tipo, sea elegir algún aspecto de la realidad social para que funja como eje expositor de un objeto de estudio que es captado en el periodo que definimos como transición. Salta ya el primer punto a aclarar puesto que se supone a la realidad social como un objeto analítico en constante cambio. Pero ¿cómo distinguir entre la esencia cambiante de la sociedad y un proceso societal al que denominamos transición? *Esto es, un cambio diferente al que ocurre permanentemente en el proceso social.*

Además, la pretensión de un análisis energético de la realidad social exige establecer las relaciones existentes entre los ámbitos sociales más importantes, el político, el económico y el sociocultural. De tal manera que el referente más ilustrativo para ubicar las implicaciones de un enfoque de esta naturaleza sea la idea de Lévi-Strauss, en cuanto al *conjunto de estructuras estructurantes* que dan cuenta del orden social, pues al suponer la transformación de una de éstas es obligado esperar cierta influencia, cuando menos, en alguna otra. El encadenamiento de un proceso de cambio como éste, es decir, mediante el cual las estructuras de la sociedad se transforman, alude, según nuestra interpretación, a

distinguir el periodo en el que se registra el cambio global de la sociedad. A ese periodo en el cual cambian las estructuras lo definimos de antemano como transición, sin embargo, es conveniente reconocer el tiempo también es un elemento a considerar en la comparación de lo que cambia y lo que perdura. Se trata, entonces, de un lapso histórico en el cual se advierte que la sociedad adopta estructuras económicas, políticas y culturales, diferentes a las del pasado.

Evidentemente, como sugiere Bell (1987) la dinámica del cambio no se da de manera simultánea, la transformación del sistema difícilmente se observa como un proceso generalizado, pero sí como un proceso asimétrico provocado por una *perturbación* en un punto de la estructura económica, política o cultural; lo cual tiene su impacto en la estructura en que surge, y posteriormente en todo el sistema al que pertenece. Esto exige identificar, primero, a la estructura social donde inicia la transformación, y por tanto, segundo, la que predomina en el cambio global de la sociedad.

Visto de esta forma, los retos de una interpretación energética de la transición, nos obliga a distinguir las estructuras más relevantes para la reproducción de la sociedad contemporánea: la política, la económica y la cultura. También es conveniente considerar que, en todo caso, si bien es cierto que el cambio social al que nos referimos con el término transición, no corresponde a la dinámica “natural” de lo social, al movimiento de la realidad social, sino a un cambio que se presenta después de un periodo en el cual una sociedad mantuvo una situación de equilibrio sistémico, equilibrio en el intercambio estructural.

Se trata de distinguir el momento en que una sociedad inicia un proceso de transición, reconocer el punto de su historia en el cual una de sus estructuras genera un cambio progresivo de su propio espacio y que termina por tener una repercusión en el conjunto social. Esto es, el momento cuando una sociedad comienza a dejar atrás una situación de equilibrio, y el cambio identificado, ya sea en la política, la economía o la cultura, se traduce en una suerte de desorden sistémico, en la desestabilización del orden que una estructura social mostró en el pasado. De ser así, habremos de analizar la especificidad de la nueva circunstancia histórica, el tiempo socialmente nuevo que da cuenta de un proceso de transición, pues la causa de este dinámico cambio al que hacemos referencia es la que nos permite ubicar lo que provocó la perturbación del equilibrio, el desajuste estructural que conduce al desorden que ahora caracteriza al sistema.

Por lo que toca a la pretensión de dar forma a una interpretación energética de la transición, será pertinente establecer algunas implicaciones básicas respecto al papel que jugará la energía dentro del modelo analítico. Pues el situarnos en el contexto social sin percatarnos que tomamos como instrumento analítico un término que normalmente se usaba para describir los procesos físicos (naturales), diluiría la pertinencia de servirnos de esta analogía para interpretar la realidad social. La característica del modelo energético es, básicamente, el intercambio entre el sistema y el ambiente, la relación energética entre uno y otro. Tal intercambio se explica a través de la *segunda ley de la termodinámica* la cual hace referencia a la *transformación de la energía*, y que por tanto hace posible intercambios *intra-sociales o extra-sociales*. Esto quiere decir que todos los aspectos de las relaciones sociales, sus productos materiales y simbólicos, pueden ser considerados como energía (Adams, 1978).

En ese sentido, utilizaremos el *concepto de energía*, fundamentalmente, como una analogía respecto al papel que juega el poder en las relaciones sociales, dicho tratamiento facilita explicar y comprender el intercambio “natural” existente entre la política, la economía y la cultura. Dicha vinculación refleja el proceso de transformación de la energía, lo cual nos permite identificar, por ejemplo, cómo una expresión política de contradicciones económicas alude a la vinculación energética del sistema. De esa forma, siguiendo lo expuesto en apartados anteriores, tendríamos que todo es cuestión de identificar al ámbito societal que se ha elegido coyunturalmente como sistema, dejando al resto del sistema social como parte del ambiente. Lo cual deja claro que hacemos referencia a una relación energética en particular a partir del interés de destacar cierto aspecto de la realidad social, el que arbitrariamente hemos escogido como objeto de estudio.

En todo caso, el problema radica en descubrir las fuentes de esa energía, así como captar el proceso de transformación que corren del origen de las fuentes hasta manifestarse, así sólo sea simbólicamente, como poder. Pues desde la misma lectura de Adams, el concepto de poder va íntimamente ligado al del control, por lo cual será fundamental identificar el papel que juegan los diferentes actores en puntos específicos de las estructuras, en cuanto al control que ejerzan sobre el flujo de la energía. Más aún, el mismo Adams señala que la información representa tanto a la energía, así como el camino que sigue el proceso de su transformación:

*“Lo que se olvida en ocasiones es que, en el sistema cultural humano, los flujos de energía siempre transportan información.... En sentido técnico, el flujo de información (es decir, la comunicación)... no es diferente de ningún otro flujo energético. Sin embargo, ocurre que esta transferencia de información ha sido confundida con la transferencia de significado” (Adams, 1983: 133).*

Esto llama la atención respecto al papel que juega la comunicación como expresión del proceso energético en la reproducción de las culturas, pues ese elemento es determinante para que la cultura se herede, vía cualquier forma de información, haciendo posible que una nueva generación aproveche el cúmulo de conocimientos generados en el pasado; o simplemente a partir del papel que juega la comunicación en los procesos de socialización y aprendizaje del mundo simbólico en el que se desenvuelven los individuos (Geertz, 1995).

En ese mismo sentido apuntan las interpretaciones que hacen sobre la relación entre el poder y la información, autores de la calidad analítica de Balandier y Luhmann. Además, que en general, el manejo moderno de la información establece claramente uno de los principales indicadores de la evolución humana, en cuanto a la complejidad progresiva de sus estructuras. Pero evidentemente, la información constituye una parte fundamental en la construcción del análisis sistémico que guía al espíritu metodológico de esta investigación. Para Balandier, por ejemplo:

*“El objetivo de todo poder es el de no mantenerse ni gracias a la dominación brutal ni basándose en la sola justificación racional. Para ello, no existe ni se conserva sino por la transposición, por la producción de imágenes, por la manipulación de símbolos y su ordenamiento en un cuadro ceremonial. Estas operaciones se llevan a cabo de acuerdo con modelos variables y combinados de presentación de la sociedad y de legitimación de las posiciones gobernantes” (Balandier, 1994:19).*

Evidentemente, la proyección de las imágenes acontece por conducto de los medios de comunicación que en el contexto de la sociedad contemporánea refleja la complejidad de la misma. En ese sentido, el ejercicio del poder queda supeditado al manejo de la información, instrumento que se disputan los actores sociales que compiten por el poder. La manipulación de los símbolos sólo es posible mediante el discurso vertido en los medios de difusión en forma de información, como también lo ha señalado Castells (2000) al referirse al rasgo esencial de la Modernidad. De hecho se puede afirmar tajantemente que los actores

sociales excluidos del poder, representan a sectores que se han quedado sin discurso, y por tanto, sin una interpretación de la realidad social en la que se desenvuelven. Aunque también la incapacidad o el deterioro del poder de las elites gobernantes se oculta en discursos que proyectan en el espacio público proponiendo soluciones a los diferentes aspectos de la crisis que caracteriza a sociedades como la nuestra. Entonces, el manejo de la información es lo que permite a los gobernantes exaltar valores históricos compartidos por la nación, para ganar el compromiso y la unidad en situaciones de crisis económica o política que ponen en entredicho la legitimidad del régimen.

Por su parte, Luhmann considera a la comunicación como el factor esencial en la reproducción de los sistemas sociales. En virtud de la información se observan las reacciones sociales, las estrategias políticas de los diferentes actores sociales, se expresan sus programas políticos, es decir, toma forma el escenario político. Por ejemplo, refiriéndose a la cuestión de la escritura, que representa una de las principales formas de la comunicación, le adscribe el mérito de ser el instrumento básico para generar las redes de poder burocrático (Luhmann, 1995: 11). La comunicación tiene la capacidad de simplificar, y por tanto también de manipular, a la “realidad”. Es precisamente a partir de la información, del discurso, que se proyecta un futuro alentador ante un escenario presente marcado por la desesperanza y la falta de credibilidad. La información vertida desde el poder, intenta controlar los embates del ambiente en la subjetividad de los miembros del sistema. A partir de ella, con el discurso, las elites intentan hacer predominar su interpretación respecto al cambio social, haciendo explícita su capacidad para enfrentar las crisis o futuros contingentes que se presenten en cualquiera de los principales ámbitos de la vida social. Se trata de mantener con una ofensiva informática la confianza en las elites para garantizar la reproducción del orden establecido.

Como se viene señalando, la transición de una sociedad se juega dentro de los márgenes del cambio social, pero sobre todo, como se explicó, dentro del objetivo de la persistencia del sistema. De ahí que los intercambios intra y extrasociales adquieran relevancia en la interpretación energética, pues en la lógica de un proceso de transformación de la energía en el cual advertimos el efecto de la economía sobre la política, de ésta sobre la cultura (viceversa), etcétera, el intercambio entre las partes del sistema, entre éste y su ambiente, marcan el cambio permanente que caracteriza a la

realidad social, lo cual explica cómo dicho proceso representa los niveles de evolución de la humanidad que plantea como proyecto universal la persistencia (a diferencia de los sistemas biológicos). Al respecto, Adams menciona: *La estructura disipativa es, por tanto, una estructura organizada, que contiene en sí misma los elementos necesarios para mantenerse durante cierto período de tiempo* (Adams, 1978: 41).

Estamos ante una interpretación acerca del proceso social en el cual además de confirmar la importancia de la *persistencia del sistema* en cierto periodo, reconocemos su dinámica “natural” de cambio. Por otra parte, lo referente a la estructura organizada sugiere una condición social que da cuenta de un orden establecido, del intercambio entre sus estructuras que guardan el equilibrio necesario para persistir en el tiempo. La proximidad con el concepto de formación social de las interpretaciones marxistas se debe a que una forma de organización de las estructuras permite, precisamente, reconocer en el tiempo la permanencia de las estructuras que hacen posible la formación social o el modo de producción que se reproduce nítidamente en un lapso de la historia.

Visto así, metodológicamente hablando, el primer paso en la estrategia analítica será, entonces, *identificar las características de las estructuras sociales del pasado, anteriores rasgos del proceso social previos al contexto socio-histórico de nuestro interés (la transición), y distinguir lo más precisamente posible, las nuevos rasgos que caracterizan al tiempo socialmente nuevo*. Sin ello sería imposible reconocer qué está cambiando. Tal distinción permitirá ubicar, entonces, los tiempos en que situamos el proceso de transición como cambio general de la sociedad, a la vez que los intercambios entre las estructuras que la conforman. Se trata de captar el carácter homeostático del proceso societal, como lo señala Adams: *En el transcurso de su existencia, las estructuras disipativas manifestarán alguna condición homeostática, o sea un estado constante. Este puede variar en cuanto a su duración, pero en los sistemas vivos tiene que durar, desde luego, el tiempo necesario para su reproducción* (Adams, 1978: 43). Así queda confirmada la necesidad de identificar los elementos materiales y simbólicos que permiten afirmar que unas estructuras han permanecido en cierto período, lo mismo que reconocer que una transición no supone un proceso de creación de estructuras que borre toda huella de lo anterior, sino como lo sugiere Touraine (1994), reconocerla como un proceso de avance y retroceso mediante el cual lo viejo aparezca recompuesto como parte de un conjunto de

elementos novedosos que dan cuenta de la transformación social. En ese mismo sentido, Balandier sostiene que:

*El orden y el desorden de la sociedad son, como el anverso y el reverso de una moneda, indisociables. Dos aspectos ligados, de los que al sentido común uno se le antoja la figura inversa del otro. Pero la inversión del orden no es su derrocamiento, sino que los constituye, y puede ser empleada para reforzarlo. La inversión hace orden del desorden, de igual forma que el sacrificio hace vida de la muerte y la 'ley' a partir de la misma violencia que la operación simbólica viene a aplacar (Balandier, 1994:77).*

Este planteamiento hace referencia a otras imágenes del carácter disipativo de las estructuras, puesto que la condición de su reproducción radica en una suerte de tendencia dialéctica, cuya esencia contradictoria explica la posibilidad de perder y reorganizar el punto de equilibrio que permite su reproducción en una situación de estabilidad. Esta misma relación dialéctica es la que aparece captada a través de un modelo de análisis energético a la Adams, o sistémico, como revisamos en el caso de Deutsh, Easton y Luhmann, por señalar a algunos de los principales teóricos de los sistemas. Las estructuras anteriores a la transición aparecen como lo viejo que ha prevalecido en el tiempo, y por tanto, como prácticas sociales que dan forma al orden establecido, mientras las estructuras emergentes constituyen lo nuevo, lo moderno, que en su consolidación aparecen como un escenario catártico hasta entrar en un periodo de equilibrio, y por tanto, de orden. El carácter de la *homeóstasis* garantiza, entonces, la permanencia del proceso societal.

La interpretación energética de los sistemas sociales nos hace atender los insumos que garantizaran la reproducción permanente del sistema, el *proceso homeostático* mediante el cual se regulan los intercambios con su ambiente. Por esa razón, es pertinente comprender que un orden determinado, esto es, una forma de articulación de las estructuras, requiere de cierto volumen de energía para permanecer en el tiempo, misma que se *autorregula* por el carácter homeostático del sistema. De tal manera que el registro de un incremento superior de energía, al necesario para permanecer en condiciones de equilibrio, provocará que una estructura, o el conjunto de ellas, avance hacia una nueva forma espacio-temporal, de destrucción de los límites existentes para permitir que se tracen otros nuevos (Adams, 1978: 54). Por ejemplo, es el caso de una actividad económica que se ve favorecida por flujos inter o extrasociales, que permiten a esa sociedad avanzar a una

etapa superior del desarrollo; viceversa, una crisis económica, también puede significar un retroceso en el desarrollo económico. Los efectos político-culturales que de ello se desprendan, sin duda generarán nuevas prácticas políticas que anteriormente no se presentaban. La asimetría del cambio social y sus expresiones particulares en el contexto de la transición se presentan, entonces, como una transformación desigual de las estructuras de una sociedad. Mientras, en nuestro ejemplo, las estructuras económicas entran en un retroceso al verse afectadas temporalmente, las estructuras político-culturales registran un avance al abrir nuevas opciones a la participación política de la sociedad. Esto se puede apreciar, principalmente, en sociedades como las nuestras, que ven truncado su desarrollo económico y que inevitablemente registran una politización progresiva de los sectores más afectados por la crisis.

Se trata de un proceso de dinámico cambio el cual crea condiciones materiales y simbólicas de ruptura del equilibrio, de los límites que nos permitieron identificar claramente las características de las estructuras, de la coherencia guardada entre ellas, y por tanto, prácticas sociales que se desprendían de ellas, de reglas del juego político del pasado. El incremento de la energía que fluye en el sistema, en todo caso, impone condiciones cada vez más complejas de la realidad social. En esta situación se pone a prueba la capacidad del sistema para adaptarse a las nuevas condiciones intra-sociales o extra-sociales; la capacidad para controlar los incrementos del insumo y guiar el proceso hacia una etapa de evolución mayor, a partir de la *persistencia del conjunto de las estructuras*. De darse así, el proceso se advertirá como parte de la evolución regular de la organización social que avanza a una etapa superior de desarrollo, más que como un proceso conflictivo en el que se ponen a prueba las capacidades energéticas del sistema. En un contexto de incremento de la energía, del aumento de los insumos que toma el sistema, se pone a prueba su capacidad homeostática, pues ahí tendrá que demostrar cómo una sociedad puede adaptarse a nuevas condiciones de su ambiente, de la misma manera que un hombre lo hace con su entorno natural y social. Para lo cual tendrá que dar paso a la creación de nuevas estructuras que permitan la captación de mayor energía, potenciando así su evolución, sin evitarla ni retardarla. Es la característica de las *estructuras disipativas* que bajo una amenaza siempre pueden ser redefinidas, con el objeto de restablecer o buscar un nuevo punto de equilibrio. Como explica Adams, la transformación “natural” a que se sujetan las estructuras de un

sistema siempre pone en riesgo el equilibrio con su entorno, de tal manera que en dicho proceso surgen nuevas estructuras (disipativas) que en principio reflejan el cambio de una etapa a otra. Estas estructuras no necesariamente representan una condición sistémica definitiva, sino que, simplemente, refleja el inicio de una transformación tendiente a restablecer el equilibrio en los flujos de intercambio entre el sistema y el ambiente. Las estructuras disipativas son, pues, producto de la pérdida de equilibrio sistémico (Adams, 2001, 1983, 1878).

Por ejemplo, si esta situación de ruptura la intentáramos ubicar junto a la idea de Roger Benjamin sobre la crisis política de las sociedades post-industriales, donde su causa obedece a la incapacidad de esas sociedades para adaptarse a las nuevas exigencias y prácticas políticas de los actores sociales (Benjamin, 1991), habríamos de destacar la incapacidad institucional, sobre todo gubernamental, para responder a la nueva realidad social. Este fenómeno de contradicción entre el gobierno y la sociedad bien puede servir para explicar uno de los aspectos sistémicos de la homeostasis, pues la falta de respuesta de los gobernantes representa incapacidad del sistema para equilibrar el incremento de entradas-insumos. Así, se observa cómo la crisis política representa la pérdida del equilibrio sistémico, pues fluye una cantidad de energía mayor a la que el sistema podía controlar. No obstante, la tendencia a la supervivencia de los sistemas, su capacidad homeostática, lo conduce nuevamente a un punto de equilibrio estructural.

El caso de la transición política en América Latina, y de la mexicana en particular, ya no nos remite a escenarios abstractos, sino a escenarios materializados por la práctica política de sus elites gobernantes que se ven incapacitadas para controlar las transformaciones del ambiente. Para Adams:

*“Este proceso básico se manifiesta en una variedad de mecanismos, cada uno de los cuales por sí mismo, y todos ellos colectivamente, sirven para trasladar los modos de concentración de poder a los niveles superiores. Esto se logra sobre todo mediante el trabajo de intermediarios, la explotación de los centros de control en los niveles inferiores y la expropiación efectiva de dichos controles, trasladándolos a dominios que se encuentran más directamente bajo el poder de los detentadores de poder en los niveles superiores” (Adams, 1978: 137).*

La condición del *proceso energético* que permite reproducir una situación de estabilidad estructural durante un período, independientemente a la naturaleza cambiante de la realidad social, es posible gracias a que las estructuras de poder tienen la capacidad de

controlar los intercambios con el ambiente. En ese sentido, la transición habrá de ser entendida como un proceso relativamente conflictivo, primero, porque existe la posibilidad que el sistema tome del ambiente mayor cantidad de la energía requerida para recuperar su equilibrio, y avanzar a una etapa superior a la actual; o, segundo, cuando el sistema no pueda procesar la energía, faltante o sobrante, para superar una situación de ruptura estructural, de superar una crisis que impida momentáneamente la reproducción del sistema.

Se trata de reconocer que tanto los posibles equilibrios o desequilibrios del proceso de la transición dependerán del control que las elites del poder tengan sobre las estructuras. De ahí que la crítica planteada a la propuesta sistémica de Luhmann respecto a que la propia naturaleza sistémica restablezca el equilibrio, y por tanto, garantice la persistencia de su lógica estructural, tendrá que ser planteada en términos del papel que juegan los actores sociales, que de manera más precisa van a ser captados a través del concepto de *unidad de operación*. Tal perspectiva reconoce la voluntad y los intereses de los actores políticos, de tal manera que este concepto permitirá dar seguimiento a las diferentes interacciones que los actores sociales desempeñan en el universo sistémico, ya sea en la política, la economía o la cultura. Su paso en el contexto social reflejará nítidamente el proceso energético mediante el cual la energía se va transformando hasta llegar el momento en que el poder se manifieste a partir de la capacidad de un actor o grupo social, para influir en el sentido y forma que toman las estructuras o la trayectoria de la transición. La *permanencia* de las elites del poder dependerá, entonces, de la capacidad que tengan para adaptarse a las nuevas condiciones del ambiente. La crisis, entendida como el una situación en el cual la sociedad no puede reproducirse como en el pasado al verse incapacitada para restablecer su equilibrio, enfrenta escenarios en los cuales, en ocasiones sus estructuras lejos de mantener un mínimo de coherencia, llegan a contradecirse (Habermas, 1986). Ello explica que se trata de un periodo socio-histórico conflictivo para el poder, pues esa sociedad en crisis enfrenta problemas que momentáneamente no puede resolver; representará la incapacidad del sistema para controlar la expresión desordenada de la evolución social, que aun permitiendo la permanencia de ciertas estructuras o prácticas sociales proyecta un escenario caótico en relación al orden que prevaleció en el periodo anterior. Aquí es muy importante, advertir que la voluntad y el interés de los diferentes actores que se alían o confrontan a la

elite del poder, determinan ya sea la capacidad adaptativa del sistema o bien la incapacidad para restablecer el equilibrio que resolverá una situación de crisis.<sup>19</sup>

En ese sentido, la propia dinámica de la realidad social y el cambio a que se somete una sociedad en un periodo de transición, en síntesis, se expresa a partir del proceso de la civilización, de una visible evolución de la humanidad que en su proceso lógico de expansión, va desarrollando estructuras cada vez más complejas, al mismo tiempo que las redes humanas y las formas que adquieren las relaciones sociales, reflejan la gran diversidad de posibilidades de reproducción social. Ello explica cómo la complejidad, sobre todo de las sociedades modernas, se manifiesta verticalmente, con *la adición de niveles superiores de concentración de poder, a niveles superiores de integración* (Adams, 1978:153). En ese contexto el poder, en todo caso, significa *la capacidad que poseen las elites para controlar el ambiente, para determinar cómo se ha de transformar la energía para refrendar su capacidad de adaptación, y garantizar la reproducción del sistema y, de ser posible, mantenerse en el poder.*

La complejidad del proceso societal al que nos referimos cuando hacemos referencia al concepto de transición, ha sido discutida a la luz de un sin fin de perspectivas analíticas en el amplio campo de las ciencias sociales, y al parecer, para referirnos a sociedades como la mexicana, el hacerlo a través de una aproximación a la Modernidad ha sido de peculiar provecho pues, ello permite tratar dos aspectos de fin y principio de siglo, de alto interés para el proceso civilizatorio: el proceso de democratización y la modernización económica. Como es fácil interpretar, se trata de dos temas fundamentales para discutir la transición mexicana. En ese sentido van dirigidas las siguientes líneas.

### *1.3.2 Modernidad, transición y viceversa.*

El primer aspecto a tratar es establecer algunas diferencias y semejanzas entre la Modernidad y la transición de sociedades como la mexicana. En ese sentido, es preciso establecer que la primera representa, quizás, el primer proyecto universal que intentó guiar a la humanidad en la construcción de formas de organización social que tomaran como

---

<sup>19</sup> Otra forma de interpretar a la *unidad operacional*, es: *La noción de unidad operante se refiere a un agregado de seres humanos que comparte la preocupación adaptativa común con respecto al medio ambiente.* (Adams, 1978: 100).

emblemas los principios heredados por la Ilustración: libertad, igualdad, justicia y solidaridad (Touraine, 1994:24). Por lo tanto, la Modernidad constituye un paradigma a seguir por toda aquella sociedad que se jacte de “moderna”. La lucha que retoman esos principios resume los esfuerzos de la humanidad para eliminar las deformaciones de sistemas esencialmente autoritarios que adolecían de instrumentos sociales que progresivamente erradicaran las injusticias del *ancien regimen* (Elias, 1987). Por esa causa, hoy se eleva una consigna que cuestiona el avance real de la modernidad, en cuanto a saber si el avance de este proyecto ha beneficiado a la humanidad o si habremos de reconocer que la modernidad queda hoy representada por una diversidad de niveles de desarrollo de los sistemas sociales que conforman a la comunidad internacional. Cómo resolver el hecho que la razón aparezca en forma de estupidez (Glucksmann, 1988) cuando confirmamos que, en efecto, como lo señalaba Hobbes, *el hombre para el hombre, es lobo*. Es más fácil advertir los peligros que ha constituido la razón como expresión del conocimiento que se vuelca, cada vez más, en contra de la integridad de la humanidad, que como un conocimiento que resguarde y eleve la condición humana (Beck, 2002).

Sin embargo, no cabe duda, la idea de progreso como ideal de la Modernidad se ha expresado a través de las formas materiales y simbólicas de desarrollo de las sociedades que hoy llamamos del primer mundo. Ahí tenemos algunos ejemplos de cómo la razón puede ser utilizada para beneficio de la comunidad, a veces en lo económico, político o sociocultural. Ya sea al evaluar los beneficios que promueve la actividad económica, los beneficios que la institucionalidad deja para los intereses de la sociedad, o las garantías existentes para garantizar la reproducción de expresiones culturales. Pero aun así, tendremos que reconocer que la Modernidad como un ideal universal se ha fracturado, como lo sugiere Touraine, y que por ello se encuentra en una etapa procesual inconclusa.<sup>20</sup> La crisis de las sociedades occidentales se hace cada vez más evidentes y los riesgos de los cambios incesantes de fin y principio de siglo, constituyen los principales desafíos para las elites gobernantes.

---

<sup>20</sup> El avance de la modernidad se puede seguir a partir de la discusión entre *modernidad* y *posmodernidad*. Un ejemplo de ello es el conocido artículo de Jürgen Habermas: “La modernidad: un proyecto inacabado” en *Ensayos políticos*. Idea general que comparten, también, autores de la talla de Elias, Héller y Beck, entre otros.

La Modernidad que adquiere expresión en las últimas cinco décadas emerge como un catalizador que permite evaluar el avance de las sociedades contemporáneas, en el sentido que supone la razón que nos heredó la Ilustración. En el caso de los países desarrollados el desafío que enfrentan sus sistemas políticos es, además de resolver las necesidades objetivas de la sociedad, asegurar que sus intereses sean permanentemente considerados en las decisiones que afectan el rumbo del mundo. Ese tipo de críticas está presente en los estudiosos de la *posmodernidad* y la etapa *posindustrial o programada* (Bell, 1987; Balandier, 1988; Luhmann, 1992; Benjamin, 1991). Los primeros trabajan, grosso modo, cómo la crisis de ese proyecto social que exalta la libertad y la solidaridad, provoca el desencanto de la modernidad, pues cada vez más, las sociedades avanzadas van advirtiendo las falacias de la democracia y la desigualdad en las oportunidades de reproducción material. Los segundos han dirigido sus análisis, más a desentrañar las tendencias del desarrollo y la institucionalidad que también sugieren el fracaso de los intentos por instaurar un sistema social apegado a la herencia de la Ilustración.<sup>21</sup> Se trata, en los dos casos, de un esfuerzo por comprender cómo el *continuum histórico*, la materialización del proceso societal, están marcados por una severa crisis que viene complicando el ascenso a una modernidad real, más que ideal (Glucksmann, 2004).

En ese sentido, se puede sostener que conforme la Modernidad representa el paradigma de la humanidad, se pueden establecer comparaciones entre los elementos que impiden el avance o retroceso de países como los nuestros o los del primer mundo. De hecho establecer la comparación en términos de “desarrollo” o “subdesarrollo”, en una perspectiva integral, supone reconocer que los países desarrollados se aproximan más al ideal de la modernidad, por ello constituyen modelos a seguir para sociedades como las nuestras. Dicho de esta forma, cabría establecer una relación entre Modernidad y transición, la primera encuentra en la segunda su expresión, independientemente que la materialización del proceso societal, esto es, que la expresión histórica de las relaciones sociales de una sociedad determinada, reproduzcan las prácticas sociales que la Modernidad supone

---

<sup>21</sup> Una interpretación sencilla acerca de esta corriente del pensamiento universal es reconocerla como: *Un modo de sintetizar el pensamiento de la Ilustración sería diciendo que ella consiste en la creencia en el carácter idéntico de la modernidad de la tecnología y la modernidad de la liberación.* Immanuel Wallerstein, *op. cit.* Pág. 16.

erradicar, por ejemplo el autoritarismo, o se acerque progresivamente a los ideales de ésta, sea por ejemplo, el compromiso con la democracia y la solidaridad.

Lo importante del paradigma de la Modernidad es que ofrece, en el marco del desencanto, tanto a los países industrializados como a los semi-industrializados, *la idea de un futuro mejor, de un futuro que promete certidumbre y que, por tanto, combate el desencanto colectivo e individual*. Esta relación entre el imaginario de una sociedad en proceso de cambio social y la instrumentación de decisiones que modifiquen las tendencias manifiestas hasta el presente, es lo que se aproxima a una de las caracterizaciones que Touraine hace sobre la Modernidad cuando se refiere a *la esperanza* como una de sus mejores expresiones en el campo de la subjetividad, y como también lo sugieren Heller y Fehér (2000).

Así, la Modernidad aparece como el enlace entre pasado-presente-futuro. Las crisis sociales o los límites económicos y políticos de un sistema social son tierra fértil para los actores políticos que ven en el futuro un escenario propicio para dar forma a sus ofertas políticas, esperando generar los consensos requeridos para fortalecer su posición frente al poder o para mantenerse en el poder, si así fuera el caso. Evidentemente, la relación convencional entre Tradición-Modernidad, donde el presente aparece como un tiempo socialmente nuevo, un tiempo renovado distinto del pasado, se hace más difícil cuando intentamos establecer la relación temporal entre presente y futuro. En la medida que se trata de procesos de cambio que enfrentan escenarios de crisis, el presente se expresa simbólicamente como una *modernidad atrofiada*, mientras el futuro promete una nueva posibilidad histórica de reencuentro, de rectificación de un rumbo que no conduce a etapas estructuradas por una razón que garantizará la libertad, la igualdad, la justicia y la fraternidad. Las elites políticas, las que se encuentran en el poder como las que compiten por el, presentan al futuro como un tiempo que evoca la esperanza, que puede traer la certidumbre perdida con la profundización de la crisis social.

En ese sentido, la afirmación de Touraine acerca de la Modernidad como un proceso en el que se advierten avances y retrocesos apunta a reconocer relaciones sociales: económicas, políticas y culturales, que aparecen renovadas en el presente o imaginadas de manera diferente para el futuro. La articulación temporal que representa la Modernidad, expresa con otras imágenes la idea que aquí se ha manejado sobre el carácter energético de

los sistemas sociales, pues los diferentes fenómenos sociales que hacen posible la restauración de la estabilidad del pasado, y que ocasionalmente provocan una crisis, evocan a la posibilidad de pasar del orden al caos, y viceversa. En sus palabras Touraine lo plantea de la siguiente manera:

*La modernización exige rupturas, pero también continuidad. Si la discontinuidad es total significa que la modernización proviene enteramente desde afuera, por la conquista, y entonces es mejor hablar de colonización o de dependencia y no de modernidad. En cambio, si la continuidad es completa, lo mismo no se convierte en lo otro, sino que queda inmóvil y se adapta cada vez peor a un ambiente cambiante (Touraine, 1994: 310).*

Aquí tenemos una interpretación que sin proponérselo ni circunscribirse en el marco del análisis sistémico, nos remite al carácter homeostático de los sistemas que alude a la toma de energía del ambiente y la procesa para restablecer el equilibrio perdido. Se trata del proceso energético mediante el cual los sistemas recomponen sus estructuras, sus subsistemas, para recuperar o adquirir un nuevo punto de equilibrio. Así, se mantienen estructuras del pasado o se crean nuevas, permitiendo a la sociedad resolver las posibles crisis que limiten la reproducción sistémica. Si la modernización se traduce en ruptura, es porque la voluntad de los actores políticos por transformar las estructuras y avanzar en una lógica de desarrollo, de crear nuevas estructuras y formas de intercambio sistémico, suponen la puesta en marcha de una estrategia de cambio que, en principio, provoca la disipación de la estabilidad sistémica del pasado inmediato.

Por otra parte, si se tratase de un cambio obligado por una contingencia política, económica o cultural, dicha crisis supone la desestabilización societal ante la cual las elites del poder han de plantear las posibles soluciones para restablecer el equilibrio perdido. O en su caso, se trataría de soluciones que propone la oposición a partir de un discurso político que proyecta en el imaginario colectivo la promesa de un futuro alentador, de una posibilidad de resolver la crisis que impide el desarrollo social.

Se trata de establecer la proximidad entre el término Modernidad y transición, pues hace referencia a una relación, como lo sugiere Godelier (1989) al analizar las estructuras materiales y simbólicas, entre lo ideal y lo concreto. La imagen coincide, quizás, con la concreción de la Modernidad a partir del proceso de racionalidad que permite, por ejemplo, la reproducción material de las sociedades. Al conocimiento acumulado por la humanidad

que le garantiza su reproducción material. Esto es, el beneficio que obtiene la humanidad al apropiarse “racionalmente” de la naturaleza y, por tanto, garantizar su reproducción.<sup>22</sup> De tal manera, que la Modernidad se constituye en el principal emblema del imaginario colectivo, idea que invariablemente va asociada a los procesos de cambio o en los procesos de transición. Como señalaba Godelier, toda parte material propicia una parte ideal, o dicho de otra forma, los procesos sociales provocan la idealización de esos fenómenos. Así, la Tradición tiene una forma de manifestación simbólica, y la Modernidad también, de tal manera que ésta aparecería como algo incomprensible si no es reflexionada a partir de las experiencias históricas que la sociedad contemporánea ha vivido en los últimos doscientos años, de un esfuerzo de la sociedad por aproximarse al *deber ser* con el cual se reflexiona un ideal a alcanzar.

Para el caso específico de la transición latinoamericana, y en particular el de la transición mexicana, es necesario destacar que pesan sobre éstas los esfuerzos de muchos teóricos, como es el caso de O’Donnell, Schmitter, y Whitehead, quienes, por ejemplo, consideran a la transición como un periodo en el que se observa el cambio de un régimen por otro, definición que por el sentido que se otorga, privilegia lo político sobre lo económico y socio-cultural. Tal interpretación está confirmada en su clásico trabajo sobre *la transición desde los estados autoritarios*, tanto de la Europa Meridional como de América Latina (O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988). Visto así, la transición latinoamericana es considerada como un proceso social en el cual las fuerzas políticas emergentes en los sistemas autoritarios, que prevalecieron de manera generalizada, sobre todo en América Latina, hasta los años ochenta, intentan instaurar sistemas políticos democráticos. Sin embargo, valdría la pena preguntar si la superación de los sistemas políticos autoritarios significa el reencuentro con la democracia o si, en su defecto, se trata de un proceso que abortó por la irrupción de los militares en los escenarios políticos de cada sistema. Evidentemente, los casos son tan variados que sería prácticamente imposible cosechar beneficios en la comprensión de cada caso en particular; sobre todo en el caso mexicano que no comparte con el resto de los países, la presencia de los militares en los

---

<sup>22</sup> Al entrecomillar “racionalmente” se intenta llamar la atención acerca de fenómenos de apropiación que independientemente de hacer uso de algún aspecto de la *razón*, atentan contra la estabilidad del medio ambiente que es, en última instancia, atentar contra la integridad de la humanidad. La sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación de los alimentos y los espacios urbanos, la proliferación poblacional, etcétera, apuntan en ese sentido.

escenarios políticos, a pesar que la tecnocracia instalada en el poder desde 1982, hubiese concentrado tanto poder como cualquiera dictadura militare del resto de Latinoamérica. De hecho, el proceso de democratización está presente en interpretaciones más recientes aunque inexplicablemente más limitadas en lo correspondiente a la profundización del tema, como es el caso del trabajo de Calderón y dos Santos, quienes cifran su interpretación sobre la transición latinoamericana, a partir de analizar el avance de los procesos de democratización y modernización.<sup>23</sup> Sin embargo, será pertinente señalar algunos puntos en común con el tratamiento que hace Touraine sobre la Modernidad, y que de ese modo permite justificar la relación que aquí se propone entre ésta y la transición.<sup>24</sup>

Por una parte, la referencia al proceso de modernización económica que se manifiesta globalmente en el mundo, en el cual la razón o el proceso de racionalización representa la esencia de la sociedad contemporánea; y por otra, la constitución de sujetos sociales que materializan el proceso de racionalidad imponiendo fuerzas antisistémicas a un orden establecido que traiciona el espíritu de la Modernidad. *Grosso modo*, aprovechando las vertientes propuestas por Touraine sobre el tema, Calderón y dos Santos ofrecen una definición de utilidad para comprender qué significa el término *transición*:

*“El concepto de patrón societal, se refiere a un conjunto de relaciones integradas al ciclo histórico estatal y estatista, y particularmente a la trama de relaciones políticas que organiza el estilo de desarrollo económico y la autocomprensión cultural de la época y de sus potencialidades sociales de cambio. Por consiguiente, dicho patrón societal hace referencia al orden social en sentido amplio, es decir, no correspondiente sólo al régimen político sino a la peculiar articulación entre las dimensiones económicas, sociales y culturales.*

*El concepto de crisis se refiere a las dificultades de reproducir o conservar el patrón estatal integracionista anterior.....Si bien los patrones societales no están exentos de una permanente conflictividad, este sentido de la crisis es específico*

---

<sup>23</sup> Fernando Calderón y Mario R. Dos Santos. *Sociedades sin atajos. Cultura, política y reestructuración económica en América Latina*, Paidós, Argentina, 1995. Además de la sorpresa que causa este trabajo por el pobre avance en el manejo del tema (considerando las expectativas que abrió el libro de los mismos autores: *Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Veinte tesis sociopolíticas y un corolario*, Clacso-FCE, Santiago de Chile, 1991) y la endeble interpretación que hacen de Touraine, lo más lamentable son descripciones que, por ejemplo, hicieron para el caso mexicano, donde lejos de aportar algo modesto pero novedoso, cometen una serie de errores que hacen poner en duda su autoridad como especialistas sobre el tema (ver pág. 66)

<sup>24</sup> Calderón y dos Santos. *op. cit.* En este trabajo los autores reconocen una deuda intelectual con autores como Gino Germani, Medina Echavarría, Cardoso y Falleto, así como con Touraine. Quizás, entonces, los parámetros que exijan mayor calidad en el desarrollo de su nueva interpretación sobre América Latina, lo constituyan, a nuestro juicio, Germani por su propuesta integral, sistémica, que contempla la permanente articulación entre lo económico, político y sociocultural; y Touraine quien presenta una interpretación más sólida sobre los sujetos sociales en su entrega de la *Crítica a la modernidad*.

*para las sociedades latinoamericanas, por el alto grado de conflictividad social, inestabilidad política y de desarrollos económicos truncos...*" (Calderón y dos Santos, 1995:34).

Aquí tenemos resumidos los principales aspectos a los que nos hemos referido en este capítulo dedicado a la transición, el primero, la relación entre la política, la economía y la cultura, aunque en la anterior definición se privilegia lo político en la medida que constituye el centro de la perspectiva que los autores ofrecen. Segundo, cuando se define a la *crisis* como las dificultades del patrón histórico-societal para conservar las estructuras anteriores, alude así al *proceso de cambio social* que venimos trabajando a partir del término *transición*. Es decir, que se hace necesario reconocer las características de las estructuras que comienzan a cambiar, como identificar los cambios que se van registrando en cada una de éstas. Además, arroja luz distinguiendo la peculiaridad de una transformación estructural en países desarrollados y sociedades como la nuestra, marcadas por una *modernidad en ciernes* cuyas características socio-históricas proyectan escenarios político-sociales, cada vez más caóticos.

Es en este contexto donde se comprenden las dificultades que enfrenta la transición mexicana, pues tanto el proceso de modernización como el de democratización aparecen fragmentados, para utilizar los términos de Touraine, y desarticulados entre ellos. Las resistencias de las elites a compartir el poder, la definición de políticas económicas que no rompen con las dependencias del pasado, la ausencia de una cultura democrática, emergen como los principales fenómenos que dificultan el avance de la transición, y por tanto, impiden el ascenso a la modernidad.

### *1.3.3 El carácter energético de la transición.*

Un concepto importante de la teoría sistémica-energética, es el de la entropía, pues a partir de este concepto es que se pone particular atención al papel que juega la *generación y control de la energía*, en nuestro caso, del poder que requiere generar un sistema sociocultural para reproducirse en términos deseables de equilibrio. De ahí que el concepto de *equifinalidad* que nos ofrece Bertalanffy, sea profundamente sugerente para interpretar un proceso de transición. Primero, por que en la lógica de un *sistema cerrado*, sus

características están determinadas por su condición inicial; segundo, porque las alteraciones de esas condiciones o del proceso, invariablemente modificarán el estado inicial (Bertalanffy, 1976: 40). Ello refleja la esencia de la transición, pues tomando como eje explicativo lo político, se han de considerar, primero, los rasgos del sistema político con que inició el proceso de desarrollo sociocultural, y el reconocimiento de los aspectos que van modificando en el lapso de tiempo que nosotros denominamos transición. Por otra parte habrá de pensarse en las características propias de la transición, como representación de un cambio gradual que mejora visiblemente las condiciones de reproducción social del pasado. Sin embargo, se trata de un proceso contradictorio que a veces parece retroceder en el tiempo, más que avanzar a una etapa de mayor desarrollo. Bertalanffy plantea esa idea de la siguiente manera: *El sistema en cuestión puede alcanzar asintóticamente un estado estacionario con el correr del tiempo, puede no alcanzar jamás tal estado, o puede haber oscilaciones periódicas* (Bertalanffy, 1976: 77).

Vale considerar que para el caso particular de la transición mexicana, parece que se trata de un proceso caracterizado por cambios periódicos, que combinan transformaciones en las estructuras políticas, económicas y culturales. Lo cual nos obliga a pensar la vigencia de la transición, conforme dicho fenómeno no ha alcanzado una condición estable del conjunto estructural. Ello obliga a pensar que la propia perspectiva sistémica-energética, nos evita caer en el error de considerar que un cambio en una de las partes de alguna de las estructuras, por significativa que fuera, nos permita concluir que el proceso se ha estabilizado. Perspectiva cuya implicación nos obligaría a considerar que ha finalizado aquel periodo que denominamos transición. Esta posible interpretación parecería olvidar la totalidad y complejidad de la realidad social, porque en todo caso el cambio social que supone la transición, se diluye en la misma naturaleza de lo social, del incesante cambio al que se someten las sociedades en las últimas décadas.

Otra cuestión que se considera de importancia en la interpretación de un proceso de transición, es que este fenómeno provoca que los principales actores del sistema político del que se trata, planteen en sus discursos una imagen del puerto de llegada o fin de dicho proceso, una meta ideal que pueda convencer a los demás de la pertinencia de sus propuestas de solución para la crisis. En el caso de la transición mexicana, marcada por la inestabilidad política y económica, se pone en entredicho la pertinencia del rumbo

económico y político que han definido los gobiernos de las dos últimas décadas. De esa forma, una *condición estructural de equilibrio o estacionaria*, como lo sugiere la perspectiva sistémica de Bertalanffy, representaría un estado futuro, próximo o lejano, del proceso de cambio al que nos referimos.

Otro aspecto de la relación entre la teoría general de los sistemas y la transición, es precisamente la *intencionalidad de los procesos energéticos*, de los procesos de intercambio, pues precisamente el riesgo que podría representar algunas interpretaciones de esta teoría, es que pareciera que los sistemas son autónomos del aspecto social, y por tanto, independientes del factor humano. De tal manera que incorporar esto como una condición a considerar en la perspectiva sistémica, nos permite comprender el papel que juega el poder en las relaciones entre las estructuras pues éstas no actúan por sí solas, *si no por la finalidad que le imprimen los intereses de quienes detentan o compiten por el poder*. Así tenemos que por *intencionalidad*, según Bertalanffy, entenderemos que:

*.....el comportamiento actual está determinado por una previsión de la meta. Presupone que la meta futura está ya presente en el pensamiento y que dirige la acción presente. La verdadera intencionalidad es característica del comportamiento humano y está vinculada a la evolución del simbolismo del lenguaje y los conceptos* (Bertalanffy, 1976: 81)

La relación entre un modelo energético, por esencia sustentado en la *teoría de los sistemas*, y un proceso de transición, es que la relación entre *sistema y ambiente supone una dinámica de intercambio permanente*, y la *transición presupone de antemano el cambio*. Más aún, si consideramos que la reproducción del poder corresponde a la analogía con el *proceso energético*, su transformación, su generación, así como su ejercicio, nos permitirá observar claramente los cambios a que se somete una sociedad en un *proceso de transición*. Para Adams, esta idea aparece de la siguiente manera:

*La ventaja de la aplicación de un análisis del poder, desde el punto de vista de la termodinámica, a la evolución de la cultura consiste en que suministra los instrumentos analíticos que permiten comprender los procesos de cambio, adaptación y expansión, a la vez que permitiría el análisis de casos históricos particulares* (Adams, 1978: 157).

Evidentemente, un proceso de transición, si bien presupone el cambio de las estructuras sociales, tales transformaciones obedecen a su propia capacidad de autoreproducción-autoregulación, o a la interacción del sistema y su ambiente. Esto es, que

los intercambios producidos por la relación permanente entre uno y otro, que explican gráficamente la lógica de un sistema abierto, y por ende, expuesto a dos procesos, uno, de carácter interno y que obedece a la autoreproducción, otro, de carácter externo que en todo caso explica la vulnerabilidad o fortaleza del sistema en relación al entorno en el que se recrea.

Los ejemplos que podríamos contemplar para observar la pertinencia de estos conceptos que apuntan a desentrañar la complejidad social, son la propia interacción de los principales sistemas sociales: la política, la economía y la cultura, para referirnos a cuestiones internas que por sí mismas van generándose o transformándose a la luz del proceso de interacción de las partes (relaciones intrasociales) y las que obedecen a la influencia del ambiente, ya sea de la transformación de éste o que impone una influencia superior o menor a la ejercida anteriormente. Entonces, ya sea que se trate de un cambio interno o externo al sistema, lo importante es considerar que bajo la lógica de cambio permanente implícita en la realidad social, y explícita cuando hacemos referencia a un proceso de transición, la condición del sistema y su ambiente podrá ser diferenciado del punto temporal a partir del cual reconocemos el inicio del cambio. De esa forma, desde la perspectiva de un modelo energético, la transición contempla las etapas del proceso general del cambio, permitiendo distinguir entre una etapa que recorre la transición, y las etapas anteriores. Entre una etapa de la *transición* y el estado estable que perduró hasta antes del cambio. Sin embargo, como sugiere Bertalanffy para la teoría de los sistemas: “*En sistemas abiertos pueden darse fenómenos de exceso y de arranque en falso, en los que el sistema empieza por proceder en dirección opuesta a la que a fin de cuentas conducirá al estado uniforme*” (Bertalanffy, 1976: 147). Esta característica contradictoria es la que explica la naturaleza real de un proceso social de cambio.

No obstante, tanto la esencia de la teoría de los sistemas y el proceso energético que supone una transición, como una condición temporal ineludible, explica la concatenación del pasado, el presente y el futuro. Esto nos permite comprender que muchos de los cambios que parecerían significativos para avanzar en el cambio, alejándose cada vez más de la condición a partir de la cual inicio el proceso de transición, son en lo esencial ficticios, y que por ello en ocasiones parece que la transición, por ejemplo democrática, es una falacia. Ya que en ocasiones parece que se retorna al pasado o que no se avanza a una

etapa de cambio que nos aleje del pasado. Así, los políticos construyen una ilusión de un futuro deseable, pero conforme avanza el proceso político, muchas veces esa idea se desmorona, evidenciando lo ficticio del *deber ser* que impone la ideología y que va adquiriendo forma a través de los discursos de los actores más importantes del escenario político nacional.

En otra perspectiva, la importancia de la interpretación energética radica considerar que *todo poder requiere legitimarse*, y en el caso muy particular de la transición mexicana, la crisis política de la elite gobernante posrevolucionaria se tradujo en una crisis de credibilidad, en un debilitamiento de la ideología revolucionaria, nacionalista, lo cual abrió la posibilidad de arribo a las ideologías de la oposición. *La relación energética la planteamos como una relación de poder entre los actores que histórica o coyunturalmente luchan institucionalmente por el poder, guiados por el respeto a las reglas de un sistema político caracterizado por el paternalismo que desde finales de los años treinta ejerció la elite política beneficiada con el triunfo de la revolución mexicana.* El hecho que en la práctica la oposición tuviera una condición estrictamente formal, permite pensar que la elite gobernante que se mantuvo en el poder durante 70 años, concentraba el poder. Lo cual anulaba cualquier posibilidad de triunfo para la oposición. Sin embargo, con el agotamiento del modelo de desarrollo posrevolucionario, la elite gobernante fue perdiendo la credibilidad, y con ello su poder se fue menguando, situación que se advertía conforme la oposición se colocaba en los diferentes niveles de gobierno.

Precisamente, lo que resulta fácil graficar dentro de un modelo analítico que se interese por observar el proceso político que supone una transición, son los resultados electorales que permiten observar el ascenso de la oposición. Lo que resulta complicado, en todo caso, es hurgar entre las causas que provocaron la transformación del imaginario colectivo, identificar y comprender cómo la *crisis de legitimidad* en la cual cayó la elite gobernante representa la erosión de una ideología, el desgaste de un discurso político que fue perdiendo credibilidad, y por tanto, el inicio de un *proceso de transferencia de poder, de flujo de la energía que anteriormente concentraba la burocracia política a nuevos actores que se inscribieron en los partidos de oposición para luchar formalmente por el poder.* Por ello, es fundamental considerar los significados culturales y los modelos mentales (Glukman, 1964) que solo se pueden expresar a partir de los discursos. En el caso

del discurso político de las organizaciones empresariales como contrapartida del discurso oficial, se observa el asenso de un nuevo actor que lucha por ganar un lugar en el espacio público, y por ende, incidir en la formación de la opinión pública.

De esa forma, la puesta en marcha de un modelo sistémico-energético requiere identificar que tanto el modelo como lo que venimos llamando energía es utilizado como una analogía, pues la asociamos al papel que juega la comunicación en la reproducción de cualquier cultura. Si lo consideramos desde el punto de vista de lo sistémico, la comunicación representa las entradas y salidas del sistema, que en nuestro caso, al referirse al sistema político mexicano, expresa las demandas que la sociedad plantea a su gobierno, y particularmente, las que el sector empresarial plantea a partir del discurso de sus principales organizaciones gremiales; así como las decisiones que toman los gobernantes al respecto. La cualidad energética, entonces, alude al poder implícito en la relación sociedad-gobierno, y se manifiesta a partir de los discursos que fluyen en el nuevo espacio público, el espacio de los medios de comunicación.

Respecto a cómo se podría interpretar la *energía*, Adams señala: *... la calidad de la forma se puede medir en términos energéticos, tanto desde la perspectiva de su continuidad como desde el punto de vista de su relación con el contexto del que forma parte.... mi argumentación postula que también los seres humanos y su comportamiento, los grupos sociales y los conjuntos de interacciones humanas son formas energéticas* (Adams, 2001: 53). Esta idea es central, pues el análisis del discurso que aquí se propone cumple con la cuestión de la continuidad y solo adquirirá significado, solo si se interpreta con relación a su contexto socio-histórico, como expresión del modelo mental de uno de los actores más relevantes en el rumbo que se le imprimió a la transición mexicana: el discurso político de las principales organizaciones empresariales. Desde la relevancia contextual de esa forma energética, la comunicación que adquiere forma a través del discurso, su forma y el lugar donde se reproduce, habla mucho de la identidad cultural, de la cultura política del actor que se utiliza para ensayar una interpretación basada en un modelo energético.

Otro aspecto relevante en el tratamiento de la transición mexicana, es observar las estructuras sociales, pues su dinámica despunta ese proceso de cambio. En ese sentido, sería pertinente preguntar ¿Qué relación guarda el sistema con su ambiente antes de iniciar ese proceso? Creemos que solo es posible pensar en dos posibilidades: una, el agotamiento

de un pacto político o modelo de desarrollo, por lo tanto de un desequilibrio estructural que requiera la urgente búsqueda de la estabilidad del pasado; dos, una situación estructural que requiera la reorientación del pacto político o del modelo económico. Sin embargo, en los dos casos se requiere generar nuevas condiciones que garanticen el equilibrio entre el sistema y su ambiente. En el primero se puede asociar a una situación de crisis, en la cual el desequilibrio aparece como una incapacidad estructural del sistema social para reproducirse bajo la lógica política, económica y cultural del pasado inmediato. Eso obliga a las elites políticas a buscar y proponer una estrategia para restablecer el equilibrio que, en todo caso, pueda traducirse en lo inmediato, en la resolución de la crisis. En el segundo, podría pensarse en la definición de una estrategia política y económica que conduzca el proceso social hacia una nueva etapa, a un nuevo punto de equilibrio. De tal forma que al poner en marcha la estrategia, invariablemente se desequilibrarán las condiciones del pasado, las que daban equilibrio estructural, aunque la intención sea avanzar a un punto de equilibrio de una etapa superior en el desarrollo de esa sociedad.

De cualquier forma, salta a la vista que reconocer una situación de equilibrio o desequilibrio, ofrece la posibilidad de observar un proceso de cambio; ello reconoce la cualidad energética de las estructuras económicas, políticas y socio-culturales, dado el movimiento estructural, material y simbólico, de la cultura que en concreto se trate. En ese sentido, Adams dirige la siguiente idea: *El equilibrio debe entenderse en este caso como la relación entre una estructura y su ambiente. Una forma energética se encuentra en equilibrio (con su ambiente) cuando no existe presión sobre ella para que cambie* (Adams, 2001: 57)

De esa forma el concepto de equilibrio nos obliga a pensar, en el proceso social, en general, y particularmente en los procesos de transición, a partir de condiciones de cambio propiciadas por la política, la economía o la cultura. Se trate de un subsistema social que impacta a los otros, o de un proceso generalizado donde el conjunto de las estructuras entran en un claro proceso de transformación. No obstante, es preciso señalar que un cambio proveniente del campo de lo económico o cultural, invariablemente aparecen de manera “politizada”, ejemplo de la relación energética de las estructuras sociales, tanto las materiales como las simbólicas. De hecho, esa “politización” de cuestiones en principio “no

políticas”, arrojan luz sobre el proceso energético de toda realidad social, partiendo del hecho que todas las relaciones sociales son relaciones de poder.

Por otra parte, vale recordar que en la lógica sistémica, el cambio en una de las estructuras irremediamente tiene efecto en el conjunto del sistema, de tal forma que es más prudente plantear que todo proceso de transformación de la realidad social, inicia en una parte específica del sistema y su consecuente impacto en conjunto sistémico. En ese sentido, el lugar de origen del cambio estructural es el que, en última instancia, propicia el desequilibrio ya sea porque provoca la pérdida de energía, como es el caso muy gráfico de una crisis económica, o la absorción de mayor energía, como es el caso, también como ejemplo, de una mayor afluencia ciudadana en un proceso electoral. Pero siempre, en la medida que hablamos de lo social, existe una tendencia a recuperar el equilibrio, un punto en el que el sistema determina el sentido del flujo de energía, ascendente o descendente, para garantizar el equilibrio entre el sistema y su ambiente. Adams, lo señala de manera contundente:

*Una forma energética dada puede abandonar un estado de equilibrio relativo sólo para llegar a otro. Puede pasar por etapas en las que el ambiente le sea favorable, pero en el transcurso de cada transformación experimentará pérdida de energía y de orden. La forma puede seguir este proceso de transformación progresiva hasta que -teóricamente- pierda toda capacidad de realizar trabajo adicional, y desaparezca (Adams, 2001: 59).*

En el caso particular de nuestro interés, la transición representa lo que Adams entiende por esa forma energética que dejado de estar en un estado de equilibrio, la condición pasada del proceso social va perdiendo, y por tanto, comienza a predominar el desequilibrio, interno o en su relación con el ambiente. De esa forma, si lo que identificamos como sistema es el sistema político, los sistemas económico y sociocultural aparecen como el ambiente inmediato, y la política internacional, el nuevo sistema económico mundial y sus megatendencias culturales, constituyen el macro-ambiente. O desde el punto de vista sistémico, sobre todo en la perspectiva de Easton, los primeros corresponderían a las relaciones intra-sistémicas (considerando al sistema político como la parte central del análisis); las segundas, a las relaciones extra-sistémicas.

Bajo la misma lógica, desde la transición mexicana, este proceso constituye una situación de desequilibrio respecto del orden que caracterizó al pasado, y ese desequilibrio entre los intercambios entre la política, la economía y la cultura, se tradujo en una pérdida

de energía y, por tanto del orden, que es perfectamente captado a través del concepto de crisis. Y en contraparte, la solución a la crisis supondría la recuperación de la energía perdida y el restablecimiento del orden, de un nuevo orden definido por un intercambio equilibrado entre las estructuras políticas, económicas y socio-culturales. De esa misma forma, un incremento de la energía captada por el sistema, una cuota mayor a la requerida anteriormente para garantizar la reproducción de la sociedad mexicana, permitiría avanzar en cada una de las etapas contempladas en la idealización de la transición.

En todo caso, habrá de considerarse que los sistemas siempre se benefician de los ambientes favorables, y que sus posibilidades de adaptación demostrarán su capacidad para sobrevivir en ambientes desfavorables, puesto que los cambios ambientales son los principales retos para los sistemas. Una sociedad que no demuestra su capacidad de aprendizaje, su experiencia para resolver las condiciones que impone el ambiente, es un sistema que invariablemente irá perdiendo energía, la posibilidad de restablecer el equilibrio en los flujos de intercambio estructural.

En ese sentido, los escenarios de sociedades como la mexicana, marcadas por crisis cada vez más profundas, por cambios positivos efímeros, reflejan sistemas sociales que malgastan sus energías demostrando un endeble avance en la construcción de un pacto realmente democrático, el deterioro de los niveles de vida de la mayor parte de la población, el desempleo, la erosión de los valores ciudadanos, la falta de credibilidad del Estado, la ineficiencia gubernamental, etc.

De hecho, una analogía pertinente en la propuesta de Adams, radica precisamente en el *significado de la crisis y su posible descripción (explicación) a partir del significado de lo que entiende por desequilibrio, y del orden como expresión de la estabilidad* (términos utilizados comúnmente, primero, en los enfoques económicos y sociológicos, después por la ciencia política y la psicología). *Equilibrio es orden en la medida que se percibe cierta coherencia en los intercambios estructurales*, esta condición se ve afectada por una *perturbación* que, en todo caso, es la causa del *desequilibrio*, del desorden que dificulta el flujo de energía que reproduce “armoniosamente” al sistema. Cuando Adams lo plantea de otra manera, señala:

*.... Un mecanismo detonador es una perturbación que produce información, la cual afecta a su vez el estatus de equilibrio de algún otro sistema o forma energética. En teoría, la acción detonadora combina los dos rasgos propios de todo proceso de*

*disipación de energía; por el otro, la energía liberada –esto es, la disipación-simultáneamente realiza trabajo y produce perturbaciones que pueden afectar, a su vez, a otros flujos energéticos. De modo que un mecanismo detonador tiene siempre un costo energético y un resultado energético. Todos los sistemas energéticos están compuestos de tales dispositivos (Adams, 2001: 98).*

Si el término *sistema* es aceptado prácticamente en todas las disciplinas de las ciencias sociales, y éstos pueden ser tratados conceptualmente como formas energéticas, habremos de considerar que la naturaleza de su reproducción sistémica, provoca inevitablemente un costo energético (Adams, 2001). Por ejemplo, una decisión política puede tener un alto costo económico, un cambio económico puede afectar la reproducción del espacio privado, los medios de comunicación pueden transformar los símbolos culturales, etc. De tal forma que en la perspectiva de la transición, el desequilibrio de su proceso socio-histórico está determinado por un cambio en el intercambio entre la política, la economía y la cultura.

Tal enfoque concuerda perfectamente con la perspectiva sistémica de Deutsch e Easton, mismas que desde el análisis político permiten advertir que *toda decisión gubernamental tiene un costo político*, el cual tendría que ser previamente calculado por los decisores políticos y las autoridades gubernamentales, considerando, entonces, el *costo o beneficio político que obtendrá el sistema*, y de manera muy concreta las elites que lo conducen. Se trata de identificar que *la* interacción de los subsistemas o de las estructuras sociales, el flujo de energía entre ellas, nos permite dar cuenta de la complejidad de lo social, y por tanto, nos obliga a reconocer que la vinculación sistémica de sus estructuras necesariamente alude a un *proceso de conversión* en el cual todo aquella relación que aparentemente no constituya lo estrictamente político, termine por serlo, a partir del constante intercambio entre la economía, la política y la cultura. Esto explica la lógica de un constante *proceso de conversión de la energía*, donde un cambio en alguna parte sistémica afecta al resto del conjunto, aunque sea en un grado mínimo y de forma heterogénea.

Visto así, sería posible pensar que el concepto de *autoorganización* al que alude Adams (2001, 1983, 1978), nos permite considerar la capacidad de cada una de las partes del sistema para buscar su equilibrio, esperando la recuperación de una condición de estabilidad e influyendo en el resto del sistema para encontrar, en conjunto, el equilibrio

que permita su reproducción y persistencia en el tiempo. Sin embargo, valdrá la pena advertir en la práctica socio-histórica, particularmente en el caso de la transición mexicana, que soluciones aisladas para resolver el desequilibrio en cada estructura, espacio social o forma energética, no han tenido muchas posibilidades de éxito y han demostrado su incapacidad, o al menos sus evidentes limitaciones, para propiciar un cambio sistémico que resuelva el problema de la crisis social que se vive después de los años sesenta.

De la misma forma, se ha de advertir que en la reproducción de la *forma energética* que adquiere la sociedad, en general y en lo específico, el *flujo de la energía puede tener un efecto positivo o negativo*, por lo cual las elites políticas y las autoridades gubernamentales *tendrán que determinar si toman alguna decisión para bloquear o facilitar el intercambio con el ambiente*. De ello depende que se resguarde el *equilibrio sistémico*, que una posible *perturbación* se constituya en un problema complejo, o que simplemente se aproveche el intercambio con el *ambiente* para impulsar el proceso social. Así, la sola posibilidad de que se presente una *perturbación, propicia la autoorganización del sistema*, y esa reacción es la que dibuja claramente uno de los aspectos del *proceso energético*.

#### 1.3.4 Cambios socio-históricos que permiten reconocer a la transición.

Si ha quedado claro que el conjunto de la sociedad, de sus principales sistemas (económico, político y cultural), pueden considerarse como una forma energética, y que la energía fungirá como analogía para identificar el proceso de reproducción del poder. Ahora será necesario puntualizar, lo más posible, los cambios sociales que permitan *comprender la diferencia entre el pasado y el presente*, entre un *tiempo socialmente definido* y un tiempo socialmente nuevo, el cual captamos a partir del concepto de transición.

Cabe aclarar que cuando nos referimos a un tiempo nuevo o renovado, no quiere decir que esa forma energética que se manifiesta en ese periodo cuente con características claramente definidas, pues como se ha visto anteriormente, se trata de un proceso particularmente complejo a partir del cual se consolidan las estructuras económicas, políticas y culturales, y que ha retardado el cambio social, que algunas veces parece avanzar muy rápido, y en otras, retroceder en el tiempo. No obstante tal peculiaridad, lo que

nos dará certeza sobre la realidad del cambio social que supone una transición, son las características que una sociedad mostró de manera constante en un periodo significativo, históricamente hablando. De tal forma que los cambios registrados en la estructura del poder, de la economía y la cultura, nos permiten afirmar, al menos, que la sociedad del pasado comenzó a cambiar.

Por tal razón, en el caso mexicano habremos de considerar que después del periodo revolucionario que inicio en 1910, se creó un nuevo sistema político que fue adquiriendo forma a partir de la presencia de un *partido hegemónico*, con una *organización corporativa* mediante la cual se garantizó la legitimidad del régimen (Cordera y Tello, 1981; Basáñez, 1981; Saldívar, 1980). Esta figura política fue el resultado del pacto político entre los líderes regionales que provocó la concentración del poder en la persona del presidente de la república, fenómeno que se conoce con el término de *presidencialismo* (Carpizo, 1992). Por otra parte, la emergencia de un Estado moderno en el periodo posrevolucionario, propició la concentración de poder en el binomio Estado-partido dominante, presidente-elite partidista, y los retos de la reconstrucción de la nación favoreció que las elites burocráticas ejercieran el poder exaltando discursivamente los valores de un *nacionalismo revolucionario*, principio heredado de la Revolución mexicana que prácticamente legitimó las decisiones gubernamentales.

En el campo de la economía, los nuevos gobiernos pos-revolucionarios se encargaron de promover el desarrollo a partir de una *política proteccionista* que evitó el incremento de la inversión extranjera, a partir de una estrategia arancelaria y leyes explícitas que contuvieron el flujo económico de otros países. Esto permitió la definición de un modelo de *economía cerrada* que garantizó el desarrollo de la industria y la expansión del mercado nacional que rápidamente se fortaleció mediante la *intervención económica del Estado* (Guillén, 1984). Esta condición estructural hizo posible la elevación del nivel de vida de las clases trabajadoras, a partir de una *política asistencialista*, cuya aplicación coadyuvó a que el *Estado social-autoritario* mexicano se aproximara a la figura del Estado benefactor que emergió en los países desarrollados a partir de la crisis de 1929-1930 (De la Garza Toledo, 1988).

Así, los rasgos que identifican al pasado histórico de la *transición*, como son: en política (1) *presidencialismo*, (2) *partido dominante*, (3) *corporativismo*; ideológicamente

(4) *nacionalismo revolucionario*; económicamente (5) *economía cerrada*, (6) *estado intervencionista*, y (7) *política asistencialista*. De estas características del sistema político mexicano que emergió en el periodo posrevolucionario, se desprenden fenómenos sociopolíticos que explican la complejidad de la cultura política mexicana, como es: a) reproducción de un sistema paternalista, b) *ausencia de un espacio público* que garantice la participación ciudadana c) ausencia de una oposición real, d) la exaltación del pasado histórico para legitimar las decisiones gubernamentales, e) *relaciones corporativas y clientelares* con las clases trabajadoras, f) inhibición de la competitividad empresarial, g) fuerte dependencia respecto a la participación económica del Estado, h) ineficiencia administrativa del gobierno.

Este conjunto de elementos permitirá dar cuenta de los significados y prácticas de la cultura política de los principales actores sociales, y sobre todo, *ensayar una interpretación energética* que nos permita comprender la complejidad de un proceso de reorganización social que tiene su periodo de desarrollo (estabilidad), auge (el milagro mexicano), debacle (crisis) e intento de rescate (transición hacia la democracia).

En otras palabras el modelo de análisis que aquí se propone para analizar fundamentalmente el proceso de transición, 1960-2006, presume la capacidad de explicar mediante los elementos sistémico-energéticos, el complejo proceso social que resuelve el impacto de la revolución mexicana, la construcción de un sistema político que hizo posible la estabilidad social y económica, su crisis como modelo de desarrollo y sistema de toma de decisiones, así como la instauración de un nuevo modelo que supone la superación de las contradicciones del pasado.

De esa manera consideramos que en el periodo posrevolucionario, desde los años veinte hasta los ochenta, se generan las condiciones políticas, económicas y culturales que permiten reconstruir las estructuras sociales a partir del manejo simbólico que la elite política hace de la herencia revolucionaria, y que en la lógica populista del sistema político mexicano, permite legitimar las decisiones que se toman en el seno del Estado. En ese mismo sentido, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones a partir de la década de los noventa, representa también el agotamiento y la legitimidad de los símbolos que predominaron a lo largo del siglo XX; situación que dio pauta para la instauración de un modelo de desarrollo sustentado en una nueva racionalidad del Estado guiada por los

símbolos de una nueva “Modernidad” que renegaba del pasado. En ese contexto es que esta investigación intenta dar cuenta del papel político que juegan los empresarios mexicanos en la consolidación de un sistema político que generó la estabilidad requerida después del caos generado por la revolución, así como el promover la renovación de las estructuras sociales que permitió dar forma a un sistema político donde el poder económico fue determinante para definir el futuro del país.

El modelo analítico aquí propuesto aspira a explicar los flujos de poder implícitos en ese complejo proceso social, donde la reconstrucción presupone la restauración del equilibrio entre la política, la economía y la cultura; así como las propias contradicciones entre esos subsistemas explica el poder que los empresarios fueron acumulando a lo largo del siglo XX, hasta acceder a la máxima posición de poder: la presidencia de la República.

En los siguientes dos capítulos II y III, fundamentalmente, se describirá como va adquiriendo forma el sistema político que privó por tres décadas, y como fueron aconteciendo los cambios que la sociedad mexicana vivió desde los años setenta.

## **CAPÍTULO II. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EN LA GÉNESIS DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO.**

El objetivo de este capítulo es comprender cómo se dio forma al sistema político mexicano en el periodo posrevolucionario, cuál fue la lógica de su desarrollo económico, y por tanto, cuáles fueron las posiciones que jugaron los diferentes actores sociales, fundamentalmente, el papel político-ideológico desempeñado por los empresarios mexicanos. Esto es, que aquí se toma eje de exposición las relaciones entre los diferentes gobiernos y los empresarios, sobre todo a partir del papel que juega las principales organizaciones empresariales como es el caso de la CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX, CANACINTRA y el CCE, en la reproducción del poder concentrado en la “familia revolucionaria”. Así podremos observar cómo en el periodo que corre de 1929 a 1982, la elite política se escuda con los símbolos heredados por la revolución mexicana mientras los empresarios mexicanos van dando forma a una ideología de derecha, de una estructura simbólica que no acepta el nacionalismo revolucionario como fuente de legitimación.

De esa manera, se observará el tipo de cultura política que define el sistema político mexicano instaurado “formalmente” a partir de 1929, cuando se crea el partido oficial. El margen de los empresarios para actuar políticamente a través de sus principales organizaciones empresariales (*unidades de operación* como lo plantea Adams, o como *grupos de presión* como se sugiere desde la sociología y la ciencia política) y por lo tanto, cómo la presencia de su discurso en los medios de difusión masiva de esos tiempos,

marcaron el inicio de la formación de un espacio público que hasta los años ochenta comenzó a adquirir las características de los países realmente representativos de la Modernidad.

Utilizando el modelo de análisis propuesto en esta investigación, sistémico-energético, se podrá observar cómo a través de la vinculación entre política, economía y cultura, se procesa la energía social requerida para crear un sistema político que generara la estabilidad que propició el desarrollo económico que permitió al país superar las condiciones precapitalistas que todavía pesaron al país hasta los años veinte.

Se trata, entonces, de observar como el desarrollo sociopolítico del siglo XX está caracterizado, fundamentalmente, por el caos provocado por la revolución, el restablecimiento del equilibrio entre el intercambio al interior del país y sus relaciones con el exterior, una larga estabilidad económica y política, y el agotamiento del modelo posrevolucionario. Cuestiones que constituyen el objetivo de este segundo capítulo donde pondremos a prueba las hipótesis implícitas de nuestro modelo de análisis propuesto y que nos permitirá identificar los rasgos que adquiere un sistema sociopolítico, y en ese sentido, hacer posible la comprensión del proceso de transición al que se somete a partir de los años sesenta.

### ***2. 1. La revolución mexicana. Crisis y fuga de la energía social.***

El largo periodo de la historia que corre desde la época de la independencia hasta la irrupción de la revolución mexicana, bien podría ser caracterizado como un periodo donde la violencia aparece como la constante política en la confrontación de los diferentes grupos políticos que, en su momento, luchan por imponer el concepto de nación al que intentan incorporar sus intereses.

Desde luego, como en el caso de los diferentes procesos políticos latinoamericanos, la constitución de un estado contemporáneo supone, primero, la intención de romper los lazos de dependencia política con la metrópoli y, segundo, el impulsar las negociaciones y alianzas indispensables para dar forma a un proyecto de nación sustentado en un deseable marco jurídico que defina el papel del Estado y la sociedad a quien representa, y de esa

forma cerrar el capítulo de violencia que representa el pasado (Kaplan, 1968).

Considerando el proceso de formación del estado moderno, las necesidades políticas de resolver las diferencias regionales, y desde el punto de vista de un enfoque sistémico-energético, estamos obligados a reconocer que el prolongado gobierno de Porfirio Díaz (1876-1910, con un breve periodo de intermedio) representa un momento histórico en el que *nuestro sistema social acumula la suficiente energía para expandirse material y simbólicamente*. La pacificación que supone el ascenso de Díaz al máximo estrado de poder en nuestro sistema político representa la posibilidad de expandir las estructuras políticas, económicas y sociales. En ese sentido Díaz ofrece, simbólicamente, la posibilidad de evitar la pérdida de recursos humanos y materiales que venía sufriendo nuestro país. Una *fuga de energía* que se expresaba tanto económica como socialmente, y que constantemente amenazaba con provocar un mayor debilitamiento ante las influencias externas. Se trataba de un momento crítico en el cual era evidente una fuerte crisis interna y una relación con el exterior que constituía un riesgo cada vez más palpable (Katz, 1982)

La pacificación era indispensable para mostrar una mínima unidad nacional y eludir los intentos intervencionistas de los países que, hasta ese entonces, habían acumulado intereses en nuestro territorio. El consenso político entre las elites dominantes de esa época representa el fortalecimiento político que exige cualquier sistema para reorganizar a la nación. Y esta figura adquiriría materialidad, por ejemplo, a partir de la construcción de un mercado nacional que, desde esos momentos, va tomando forma a través de articular la economía local y generar las estructuras necesarias para vincularse a la economía-mundo. Condición que solo fue posible por la construcción de una red ferroviaria que articulara el mercado nacional y los puntos de intercambio con la economía-mundo.

Sin embargo, tales condiciones podrían sugerir un relativo auge económico en la medida que promovió una suerte de modernización económica del país, pues las causas de la revolución mexicana si bien pueden buscarse en la exclusión y explotación de las clases trabajadoras, podrían también, considerarse como expresión de los desacuerdos y conflictos que, finalmente, propiciaron el auge y el cambio (Aguilar Camín y Meyer, 1989: 13).

Por tal razón, los beneficios alcanzados en el terreno político llegaron rápidamente a su límite, dado que los resultados de la pacificación y la evidente expansión de las estructuras sociales, no fueron suficientes para distribuir en todo el sistema los recursos

requeridos por los diferentes sectores de una sociedad que, de manera dinámica, se incorporaba al capitalismo. Se hacía cada vez más imperiosa la necesidad de incorporar política y económicamente a las clases sociales nacientes (la burguesía local) y a las fuerzas trabajadoras que desde siempre veían empeorar sus condiciones de vida. Como lo señala Leal:

*Tres son los acontecimientos más sobresalientes, en lo concerniente a las relaciones de poder, que se presentaron durante los años del Estado liberal: la emergencia de una burguesía industrial -con el consecuente desarrollo de un proletariado industrial-; la transformación de las estructuras agrarias que condujo a la aparición de una burguesía agro-exportadora, y, finalmente, el establecimiento de los enclaves imperialistas, producto de los nuevos patrones y modalidades de la dependencia. Los tres elementos que harían sentir su peso en las ulteriores contiendas por la distribución del poder, dentro del bloque de las clases dominantes (Leal, 1972: 105).*

Esto nos sugiere un momento de reconstrucción de un *sistema social* que demuestra su problemática interna, así como sus insoslayables vínculos con el exterior. La necesidad de resolver la crisis interna y su necesidad de garantizar su intercambio con intereses del capital extranjero. Desde entonces se hace evidente *la influencia del ambiente sobre el sistema*, la relación del mercado internacional, el peso de los intereses del gran capital extranjero en las decisiones que el sistema toma respecto a la definición de la política económica, así como en muchas ocasiones, la forma como se dirimen los conflictos internos.

La *unidad política* que precariamente se alcanzó en la etapa porfirista dejó ver las profundas contradicciones de un sistema político que se fundó en el desplazamiento de viejos caciques liberales y grupos económicos vinculados al poder, sustituidos por nuevos grupos económicos incondicionales a Díaz, y por cuadros emergentes excluidos por los regímenes herederos de la influencia juarista. Sin embargo, el ascenso de una nueva clase política no representó para el país la posibilidad de construir un sistema político que abriera paso a la democracia, implícitamente se instrumentarían unas reglas del juego político que garantizarían la permanencia en el poder de una elite cercana a las nuevas estructuras gubernamentales. Entonces la oligarquía mexicana alcanzó su esplendor, cifrada en un ejercicio dictatorial del poder. Por una parte, en varias regiones del país se sometió a los campesinos a un sistema de explotación basado en una suerte de esclavitud por

endeudamiento (encasillamiento) que hizo insoportable la carga económica. Además, en las de las zonas de agricultura capitalista más modernizadas como fue en el estado de Morelos la expansión de las haciendas despojó de sus tierras a los pueblos indígenas, recursos que fueron puestos a disposición de la explotación de los cañaverales (Warman, 1980). Por otra parte, la historia del movimiento obrero muestra cómo los extremos en la relación capital-trabajo llegaron a su punto culminante en las huelgas de Cananea y Río Blanco, situaciones que de hecho representan para las clases trabajadoras el prelude del movimiento revolucionario que daría fin a una dictadura de 32 años. Además, la instauración de un régimen poliárquico representó para el resto de la clase dominante, particularmente para la naciente burguesía nacional, la imposibilidad de ascender al poder, y de participar de sus beneficios.

En ese sentido, la revolución significó el agotamiento de un concepto de nación elitista y excluyente, que no daba posibilidades de participación a las fuerzas políticas emergentes en los aparatos de estado y en la economía. Se trata de la incapacidad de un sistema, sustentado en la centralización del poder, para adaptarse a los cambios del ambiente donde el intercambio intra-sistémico entre lo político, económico y sociocultural, adquiere tal ebullición que genera una *energía* diferente a la que requieren las tendencias que sigue un sistema urgido por reproducirse y, por tanto, de *persistir* de manera estable en el tiempo. Es la representación de un sistema y un ambiente en el cual la capacidad de influencia de uno a otro refleja un claro *desequilibrio*, pues el sistema político es determinante para definir la reproducción de la economía. De tal manera que la exclusión política aparece a través de la marginación económica, como una ausencia de oportunidades para que sectores cada vez mayores de la sociedad participen en el reparto de la riqueza. *Y que la energía generada por el sistema fluya equilibradamente en el conjunto de las estructuras socioculturales y económicas.* Tal contradicción se expresa a partir de que Díaz adolece de la capacidad de movilización política y militar, para contener la creciente inconformidad de las diferentes fuerzas sociales, lo que presenta a la sociedad como la entidad con mayor energía para imponer su voluntad al otro. El intercambio entre sistema y ambiente se da necesariamente, a pesar de la resistencia de una de las partes, poniendo en evidencia, sobre todo en lo que respecta a la política, la importancia del hecho que un sistema se adapte eficientemente a las nuevas condiciones que le impone el

ambiente. Por ello, la consolidación del régimen porfirista enfrentó un complejo proceso en el cual su consolidación no quedó exenta de conflictos políticos que, poco a poco, madurarían hasta provocar la revolución. Así, el ejercicio autoritario del poder constituye una posible ruta que permitirá reconocer la gran diversidad causal de un movimiento armado que se levanta contra la elite política que encabeza Díaz. De otra forma, como lo señalan muchos historiadores, se debe reconocer el *carácter multclasista de la revolución mexicana* que refleja cómo la crisis de ese gobierno obedece a efectos políticos, económicos y socioculturales, que se producen en los diferentes sectores de la sociedad de esos tiempos implicando, por tanto, al conjunto de las estructuras sociales (Garcíadiego, 1991).

Sin embargo, a pesar de la diversidad de los sectores que participaron tanto en la arena política como en la rebelión armada, es importante advertir cómo dos fuerzas antagónicas convergen en varios movimientos sociales que pondrían fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Una burguesía naciente y el campesinado que sufre la expansión territorial de las haciendas cuyo efecto lo despoja de la tierra, sobre todo a partir de las leyes de Reforma. Esto obliga a reconocer cuando menos dos aspectos: uno, el hecho que la clase dominante se fractura por el ejercicio dictatorial de Díaz, lo que provoca una distribución desigual de oportunidades entre los propietarios del capital, y dos, que a las clases trabajadoras, particularmente los campesinos, no les queda otra opción que las armas como único camino para transformar la condición de opresión que los asfixia, de recuperar su antiguo orden agrario, de vulnerar las estructuras políticas, económicas y socioculturales, que muestran una abierta decisión para mantenerlos marginados del ejercicio del poder y de los beneficios que de ello emanan (Warman, 1980). En ese sentido van las ideas de Womack, en su libro sobre Zapata y la revolución: “Esta es la historia de campesinos que no querían cambiar y que por eso mismo hicieron una revolución.

Para Garcíadiego los brotes revolucionarios estuvieron tan focalizados que es imposible afirmar que en todos los estados de la república había expresiones *antiporfirista*, de tal manera que la manifestación de dichos fenómenos en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos y Guerrero, entre los años 1910-1911, aunque de manera menos significativa en Veracruz, Puebla, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y la propia capital de la república, demuestran cómo la dictadura porfirista beneficiaba a unos

en detrimento de otros (Garcíadiego, 1991: 23).

En ese sentido es conveniente considerar que, en el caso de los propietarios de los medios de producción, esa fractura en la *clase dominante* debe interpretarse a partir del conjunto de intereses contrapuestos que se generan, no solamente por diferencias ideológicas respecto a cómo debe usarse el poder, sino a intereses diferenciados a partir de la ubicación de su actividad económica en el mercado nacional, su articulación a la economía-mundo, y el tipo de apoyo que se les brinda desde las estructuras del poder gubernamental. De hecho, el origen de clase del que proviene el principal propulsor del movimiento revolucionario, Francisco I. Madero, sugiere cómo las clases hacendadas y la naciente burguesía del norte de nuestro país, se ven afectadas por un sistema político que impide la ampliación de las vías de participación, ya que el gobierno dictatorial de Díaz garantiza el beneficio de los intereses de los grupos económicos cercanos a él y, en general, a las familias y grupos sociales cercanos al poder.

De hecho, la presencia de Madero como líder del movimiento revolucionario adquiere mayor importancia si se considera que son precisamente los grupos de incipientes empresarios del norte del país los que están constantemente en pugna con el centro. En una posible interpretación, se trata, entonces, de la lucha de una fracción de la naciente burguesía nacional contra una añeja oligarquía que se consolidó en el régimen de Díaz (Guadarrama, 2001).

Por lo tanto, en esta interpretación se pone particular énfasis al papel que juegan los sectores medios y algunos empresarios, como una de las principales fuerzas de la revolución mexicana, la cual termina por expresar *el debilitamiento del sistema, su crisis y su renovación*. Esto no supone el negar la importancia al papel desempeñado por los trabajadores del agro mexicano, pues la principal fuerza social que se encuentra en el campo de batalla es precisamente el campesinado. En realidad, de las diversas fuerzas que participaron en la revolución había que distinguir dos grandes tendencias: la que buscaba fundamentalmente un cambio político para acceder al poder, y la que pretendía una transformación profunda de la estructura social, que en ese momento se refería a la estructura agraria.

Esto parece un proceso social generalizado en los movimientos sociales, sobre todo aquellos que optan por la vía armada y, que por tanto, ponen realmente el riesgo al orden

establecido. En ese sentido, se dirige la siguiente idea:

*Toda esta agitación, todos estos movimientos, aunque inconexos, que ora aquí, ora allá, conmueven al país, tienen entre sí sin embargo un trazo común de evolución. La presión revolucionaria comienza en las capas de abajo, inmediatas de la clase dominante. De ahí se generaliza por toda la masa, descendiendo sucesivamente de una a otra capa inferior. Esto provoca una contramarcha de las propias clases iniciadoras del movimiento, las cuales, de revolucionarias, bajo la presión que las arrastra por donde no quiere ir, pasan a reaccionarias, o por lo menos abandonan el movimiento. Dejan así a su suerte a los últimos que entraron en la lucha, quienes de esta manera debilitados, son aplastados por la reacción del poder central (Cueva, 1990: 52).*

La figura socio-histórica que sugiere esta cita, refleja un conflicto finalmente resuelto a partir de una fractura de las diferentes fuerzas revolucionarias, de las cuales las que representan a las clases que realmente pelean el poder político, llegan a él o se colocan del lado del "nuevo régimen" en turno que, invariablemente, echará a andar la maquinaria militar estatal para restablecer el orden. Sin embargo, el fin de la revolución mexicana no permite afirmar que de inmediato surja un nuevo sistema político que supla al *antiguo régimen*. La *energía perdida* por la guerra revolucionaria, tiene que recuperarse a partir de *crear nuevas estructuras que permitan fluir nuevamente la energía requerida socialmente*.

Por otra parte, cabe destacar la dificultad para distinguir a precisión los diferentes intereses entre los propietarios del capital, pues precisamente la formación social mexicana de la primera década del siglo XX, ofrece una amplia gama de fracciones de las clases económicamente predominantes, donde coexisten actividades que van desde el tipo de producción que distinguió a los sistemas económicos latinoamericanos en los que la actividad agrícola y extractiva eran las predominantes, la actividad comercial así como las nuevas actividades industriales que, sobre todo, familias poderosas del norte del país desarrollaban desde finales del siglo XIX. Y evidentemente, tenemos la presencia de capital extranjero: el estadounidense concentrado en la construcción del ferrocarril y la minería, y en menor medida el británico a los servicios públicos y la deuda pública, y el francés con una presencia en las actividades industriales y extractivas. Esto es, en las ramas más dinámicas de la economía mexicana. Así que la fortaleza del gobierno de Díaz invariablemente se vio legitimado por el intercambio entre las decisiones gubernamentales y la presencia económica de los propietarios del capital, nacionales y extranjeros. Lo cual

*hace evidente el intercambio innegable entre el sistema y su ambiente.*

En ese contexto es pertinente destacar que la presencia de propietarios nacionales refleja la inserción de nuestro país al capitalismo internacional (por ejemplo, el sistema de producción henequenera de Yucatán, orientada a la modernización agrícola de Estados Unidos), pues aunque en la actividad económica de la clase dominante predominaba la producción agrícola, los diferentes tipos de comercio sobre todo en los que destaca la especulación; así como la actividad propiamente capitalista, la actividad industrial, comienza a adquirir importancia. Estos son los orígenes de la burguesía nacional, y en ésta destacan los empresarios de Monterrey, la cual también evidencia la inserción paulatina de nuestra economía al sistema capitalista (Cerutti, 1986).

Es en este contexto que resulta imprescindible observar cómo en el periodo revolucionario que inicia desde 1910 hasta finales de los veinte, los diferentes agentes del capital, hacendados, incipientes industriales locales, propietarios y financieros extranjeros constituían una compleja gama de intereses contradictorios que jugaron del lado de las fuerzas revolucionarias o del lado de Díaz y las fuerzas conservadoras que se reorganizaron a partir de 1911. Es indiscutible cómo la economía mexicana estaba marcada por un claro predominio de los capitalistas extranjeros, quienes controlaban el 80% de las principales empresas de México, manejaban los ferrocarriles, los empréstitos, la extracción de minerales, la producción agropecuaria y la petrolera, lo que hacía a la burguesía extranjera la *fracción hegemónica de la clase dominante* (Leal, 1972: 197). Por lo que, también, la red de relaciones político-económicas entre lo local y lo externo, fungió muchas veces como fiel de la balanza para coadyuvar a que el predominio de uno u otro grupo (fuerzas antigubernamentales-gobernantes) se impusiera en los diferentes momentos de ese proceso tan complejo que fue la revolución mexicana. Tal relación es el mejor ejemplo para ensayar diferentes interpretaciones respecto a la relación entre el poder político y el económico. En ese sentido, es de utilidad para el análisis de dicho proceso, considerar el papel que desempeñó el recurso ideológico, pues independientemente que refleja intereses económicos en pugna, descubre la presencia de posiciones polarizadas y hasta antagónicas al interior de la clase dominante. La falta de unidad en la clase política y/o económicamente dominante tuvo que ser dirimida por medio de una confrontación político-militar, lo cual permitió la consolidación de un sistema político, económico y social que adquirió forma a

partir de los años veinte.

La primera fase del movimiento antiporfirista si bien proyecta el carácter legal que Madero intenta imprimirle en el inicio (funda el Partido Anti-reeleccionista), también sugiere cómo las fracciones de las clases dominantes excluidas del sistema político y, por tanto, del proceso de toma de decisiones dentro del cual se dirimía el futuro de la nación, ven en el proceso electoral la única fórmula para acceder al poder. Es la cerrazón del régimen porfirista la que determina cómo un proyecto político encuadrado dentro de la legalidad adquiere el giro violento que le daría forma al movimiento revolucionario. La cerrazón de este régimen representa la contradicción que genera una estructura cuando se cierra e impide el flujo de energía que, en todo caso, representa la posibilidad de revitalizarse, el recobrar la capacidad para adaptarse a la influencia del ambiente.

En su momento, los Tratados de Ciudad Juárez, en mayo de 1911, que representaron la negociación entre las fuerzas de Díaz y los rebeldes, demuestran en los hechos cómo el movimiento revolucionario, independientemente de su raíz rural, favoreció la recomposición y posicionamiento de la clase dominante en las estructuras del poder. Como lo señala Garciadiego:

*La razón de la aceptación masiva de los mencionados tratados puede ser el número de concesiones dadas a los revolucionarios norteros. Estas fueron, principalmente, la remoción de los gobernadores antipopulares, el retiro del ejército federal, la posibilidad de elegir gobierno locales democráticos, lo que redundaría a favor de la comunidad en cuestión de impuestos, asignación de agua, etc. Y la creación de nuevas fuerzas de seguridad con exmaderistas. Estos cambios hacían a los revolucionarios el nuevo factor principal de poder en la región (Garciadiego, 1991: 43).*

Este es uno más de los aspectos que reflejan cómo las condiciones y los beneficios obtenidos por el movimiento revolucionario no se expresaron de la misma manera a lo largo y ancho en el país. Pues en contraparte, los efectos en el sur de la república, sobre todo en los estados de Guerrero y Morelos, no tuvieron un efecto inmediato dejando prácticamente intacta la estructura agraria. En ese sentido es pertinente considerar que en la misma medida que el ascenso al poder de Madero no satisfizo al conjunto de la clase dominante, las fracciones ahora excluidas retomarían posiciones contra el gobierno de Porfirio Díaz, del lado que en ese momento conviniere a sus intereses. La vinculación entre el poder político y el predominio económico se volvían a hacer patentes. A pesar que

no se veía la posibilidad de que Madero atentara contra la clase dominante, ya que no respetó la reforma agraria plasmada en el Plan de San Luis Potosí, las precarias condiciones político-sociales que arrojaba el movimiento revolucionario abrió una nueva coyuntura en la cual las fuerzas conservadoras y diversos sectores económicos, tanto nacionales como extranjeros, tomarían partido con las fuerzas que asegurara sus intereses. Sobre todo las fuerzas militares más leales al régimen porfirista y sus fracciones conservadoras que persistieron después del derrocamiento de ese gobierno.

Este mismo contexto es el escenario donde se recrean los intereses de las poderosas empresas extranjeras, sobre todo las norteamericanas que ya se habían apropiado de las ramas más dinámicas de la economía nacional. La explotación del petróleo, la construcción de los ferrocarriles, el abasto de la energía eléctrica, el sistema financiero, etcétera. Este fenómeno explica porqué los intereses de hacendados e incipientes empresarios nacionales coinciden en varias ocasiones de la historia con los intereses extranjeros, propiciando una posición de unidad política frente a gobiernos que amenazan con tomar un rumbo diferente a sus intereses sectoriales. Los casos son muy diversos a lo largo de nuestra historia pero, quizás, el más significativo de ese momento sea el cese al fuego del 18 de febrero de 1913 pactado entre Victoriano Huerta y Félix Díaz en presencia del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Y en su momento, el consenso generado entre sectores empresariales mexicanos y las empresas norteamericanas para contrarrestar los planteamientos legales a que daba paso a la constitución del 1917 (Katz, 1982).

Por otra parte, uno de los elementos que se sumaban como fuentes de presión a los gobiernos posteriores al de Díaz era, precisamente, las estructuras de poder que prevalecieron a pesar del triunfo de la revolución. Esto es, las estructuras de parentesco que consolidaban a las estructuras de poder. Es el caso, por sólo señalar alguno, de los vínculos familiares creados entre las elites financieras que relacionaban a extranjeros y nacionales con el círculo estrecho del poder. Así lo sugiere Collado Herrera, al referirse a la desconfianza que privó en los gobiernos revolucionarios, respecto a los banqueros más poderosos:

*....muchos de ellos fueron colaboradores cercanos de Porfirio Díaz: Enrique Creel, Olegario Molina, Pablo Escandón,, Roberto Nuñez o Gabriel Mancera; los descendientes de Joaquín D. Casassús emparentaron incluso con su familia; otros, como los Scherer o los Braniff, cultivaron relaciones de amistad muy cercanas con el dictador. El maridaje entre la clase dominante y Díaz era tan intenso que*

*incluso durante su exilio algunas de estas familias continuaron frecuentándolo socialmente. Por si esto fuera poco, algunos de ellos colaboraron con el gobierno del cuartelazo, persuadidos de que traería la restauración cabal de la elite, y se exiliaron cuando las tropas constitucionalistas amenazaban con entrar a la ciudad de México en agosto de 1914 (Collado, 1996: 33).*

Después de la muerte de Madero, el ascenso de Victoriano Huerta al poder no solamente fue respaldado por las fuerzas militares de carácter marcadamente conservador, y por tanto identificadas con el antiguo régimen y con la representación de los Estados Unidos, sino también por los grupos de terratenientes, hacendados, incipientes industriales y principales comerciantes quienes ayudaron al financiamiento del nuevo gobierno. A lo cual se sumó el respaldo diplomático que brindaron los gobiernos de Gran Bretaña, Alemania y Japón.

Los intereses económicos jugaron un papel preponderante al definir el grupo político que quedaba al frente del Estado, lo mismo aconteció con Porfirio Díaz, con los efímeros gobiernos de Madero y Victoriano Huerta, así como el de Carranza que independientemente de su respaldo constitucional, se vio sujeto a diversas presiones provenientes de todos los grupos económicos que conducían la economía nacional, y que en su momento se agruparon entorno a la CONCANACO y la CONCAMIN.

Independientemente de los conflictos particulares con cada fracción del capital, los problemas con un sector financiero que muchas veces operaba en el gobierno porfirista con capitales ficticios o que carecían de liquidez y garantía para sus inversiones y préstamos, sucumbieron rápidamente ante las obvias consecuencias de la crisis revolucionaria. En tal condición, desde la víspera del ascenso de Carranza al poder, en septiembre de 1913, este anunció su intención de reformar el sistema bancario, con el fin de combatir los monopolios en este sector y retirar la concesión de la emisión del papel moneda que se concentraba, en ese entonces, en 24 bancos. De hecho la medida apuntaba, por un lado, a solventar la grave crisis de liquidez que arrojó el movimiento armado y a garantizar las condiciones para que los diferentes actores financieros reconocieran la moneda del nuevo gobierno (Aguilar, 1983).

Sin embargo, esto no quiere decir que Carranza atentara contra los intereses de la oligarquía, sino la constatación de una visión de un estadista que tiene claro cuál es el principal nudo que habría de desatarse. De tal manera que a partir de tal decisión promueve

la concertación de intereses entre el nuevo gobierno constitucionalista y los diferentes grupos económicos, nacionales y extranjeros, pues los propietarios del capital estaban decididos a ejercer todo tipo de presiones para que el nuevo gobierno no aplicara al pie de la letra los postulados de una constitución que recogía los principios sociales que heredaba de una revolución popular, al tiempo que exaltaba valores nacionalistas que ponían en peligro los intereses de las empresas extranjeras así como de las grandes propiedades. El poder económico jugaba en los vaivenes del poder como el elemento que decantaba la crisis de un gobierno o legitimaba el ascenso de un líder o grupo político.

En el caso de la segunda década del siglo XX, el proceso político que se dirimía entre un régimen dictatorial y la instauración de un estado cifrado en el derecho, se vio siempre sujeto a las negociaciones y alianzas entre el poder político y el económico. Simplemente habría de pensarse en el papel que jugaron los empréstitos externos, préstamos que determinaron la reactivación del aparato gubernamental. O de otro modo, los recursos económicos que permitían a los diferentes frentes políticos mantener una posición militar sólida. En ese sentido, se advierte cómo la crisis social que provoca este tipo de procesos determina un intercambio inmediato a partir del cual toda sociedad requerirá un proceso de reconstrucción que generen una nueva relación entre el sistema y su ambiente, la vinculación entre los subsistemas político, económico y social, así como las vinculaciones entre lo societal y lo extrasocietal.

Una situación marcada por una crisis como la implícita en un movimiento revolucionario, si bien promueve el fin de un sistema político que no ha tenido la capacidad de evolucionar y adaptarse a los cambios y demandas cada vez más ampliadas de la sociedad, también deja una situación en la que todos los elementos que dan cohesión a un estado se ponen a prueba, desde la fortaleza de un ejército que imponga el orden mínimo para las funciones de gobierno, la legitimidad mediante la cual el grupo político en turno llega al poder, la aceptación del nuevo gobierno por la mayor parte de la sociedad, así como el respaldo del elemento externo que se traduce, normalmente, mediante el respaldo diplomático, los empréstitos y la presencia económica de los países de procedencia, así como el apoyo militar que en muchas ocasiones define el lado al que se inclina el fiel de la balanza.

En el caso de la historia contemporánea de México es indiscutible que los Estados

Unidos han jugado un papel preponderante en el desarrollo nacional, condición que se refuerza por la convergencia de intereses entre los propietarios locales del capital y las empresas norteamericanas que desde entonces tuvieron intereses muy concretos en nuestro país (Katz, 1982).

### 2.1.1. *La política como generación de una energía regenerativa.*

Igual que en los mismos tiempos de Díaz, el principal reto para el gobierno de Carranza era la forma en que resolvía las demandas de los diferentes sectores sociales. En ese sentido, colapsada una estructura de poder en la cual se atendían exclusivamente los intereses de los grupos económicos más próximos a la elite política dominante, el reto para el gobierno constitucionalista era, precisamente, darle forma a un *sistema político que sorteara de manera solvente la resolución de las demandas de los sectores sociales más importantes para el poder*, y contuviera dentro del nuevo orden que se pretendía establecer, las demandas que ponían en mayor riesgo las negociaciones al interior del *bloque dominante*. Evidentemente, los diferentes sectores de capitalistas buscaban la vía de acceso hacia ese gobierno para hacer llegar sus posiciones ante los diferentes problemas de la nación, fundamentalmente los que influían en la actividad económica, así como definir las soluciones gubernamentales que afectaban la vida de la sociedad mexicana de esos tiempos.

Es en este contexto que las organizaciones empresariales constituyen el instrumento ideal para los propietarios del capital, tanto nacionales como extranjeros, para hacer llegar formalmente a los *tomadores de decisiones*, todos los matices de sus demandas, de sus propuestas y, en general, la información necesaria para que sus inquietudes sean tomadas en cuenta al definir el rumbo de la nación, sobre todo en lo correspondiente a la política económica.

No cabe duda que el breve periodo que corre entre 1914 y 1917 impuso al gobierno de Carranza el reto de evaluar cuales eran las medidas más urgentes para enfriar la explosiva situación que dejó el movimiento revolucionario. Fue evidente cómo se reflejaron las demandas de los sectores sociales representados tanto por Villa como por Zapata, intereses marginados desde el ascenso de Madero al poder. Sin embargo, era claro que las

demandas de las clases dominantes tendrían que ser resueltas en lo inmediato. Es por ello que a pesar que ya existía la primera organización empresarial, la *Cámara de Comercio de la Ciudad de México*, fundada en 1874, era imprescindible generar un órgano institucional que garantizara la vinculación entre el nuevo gobierno constitucionalista y las clases económicamente predominantes (Tirado, 1986).

Los problemas eran muy variados e iban desde aquellos de un matiz claramente políticos hasta otros de carácter estrictamente organizacional. Primero, se trataba de generar los vínculos que dotaran al gobierno constitucional de la legitimidad que le confiere el respaldo de la "sociedad", y por otro lado, de definir las estrategias económicas que permitieran articular las actividades e intereses estrictamente económicos de fracciones de la clase dominante que mantenían diferencias productivas muy evidentes. Es el caso del rezago tecnológico entre la oligarquía terrateniente, los incipientes empresarios nacionales y el capital extranjero. La necesidad de reconstruir la economía a partir de una planificación nacional, hacía de los encargados del gobierno de Carranza la clave para tejer las alianzas mínimas requeridas para echar a andar el país.

Los conflictos con los sectores económicos más poderosos hacían apremiante la instrumentación de soluciones pactadas, pues las diferencias entre las elites dejaban siempre abierta la posibilidad del resurgimiento de fuerzas reaccionarias que atentaran contra el precario avance que arrojaba la revolución. Es el caso, en septiembre de 1916, cuando Carranza concretaba su intención de reordenar el sistema bancario a partir de intervenir los bancos que estaban fuera de las estipulaciones financieras, así fuera por la vía de la fuerza pública, como en algunas ocasiones fue necesario. Tal situación produjo fuertes reacciones por parte de importantes banqueros, al grado de provocar breves encarcelamientos de los representantes del Banco Nacional de México, Agustín Legorreta, y el del Banco de Londres y México, William B. Mitchell (Krauze, 1987b).

En un contexto de incertidumbre provocada por la destrucción y falta de unidad que generaba el movimiento revolucionario de la segunda década del siglo, tanto el gobierno carrancista como los empresarios nacionales estaban interesados en tender los puentes de comunicación entre las partes. La pacificación, la reordenación y la cooperación eran condiciones urgentes para la nación. En ese sentido, la iniciativa que promovieron los líderes del Centro Industrial Mexicano de Puebla (CIMP) en septiembre de 1917,

representaba para una parte importante del empresariado nacional la posibilidad de resolver el conflicto que provocó el movimiento armado. Sin embargo, tal perspectiva no era privativa de la posición empresarial, sino que constituía un reto inmediato y urgente para el gobierno de Carranza. Es por esa razón que tal campaña del CIMP fue claramente acogida por el titular de la Secretaría de Industria y Comercio, Alberto J. Pani, quien se dio a la tarea de organizar el Primer Congreso Nacional de Industriales. Cómo lo señala Ramírez Rancaño:

*...lo original en todo ello es que el CIMP no sólo trataría de lograr el acercamiento de la burguesía textil con el nuevo gobierno, sino que buscaría que todos los sectores de la burguesía, tanto imperialista como nacional, se acercaran a Carranza: la burguesía petrolera, la minera, la manufacturera, la textil, etc. (Ramírez Rancaño, 1986: 83).*

Sin embargo, es importante destacar la inquietud que los inversionistas sentían con algunos preceptos constitucionales que abrían la posibilidad de que cualquiera de los próximos gobiernos afectara sus intereses, sobre todo los relativos a ciertas formas de propiedad sobre la tierra y los derechos de la explotación del subsuelo, donde se encuentran principalmente la minería y el petróleo. Entonces, es en el marco de las disposiciones constitucionales que las dos partes buscaban la recomposición del bloque dominante, situación de interés tanto para el gobierno constitucionalista como para los inversionistas. La conciliación de intereses y una nueva alianza entre las fracciones del bloque dominante aparecían como lo más urgente a resolver en un escenario nacional donde el movimiento armado era una amenaza real y latente. Para Carranza era más fácil proteger a la incipiente burguesía, independientemente que muchos de sus miembros se hubieran aliado a las fuerzas conservadoras, que cobrarles la factura política por su posicionamiento en el proceso revolucionario. El reto era conciliar la integridad de los intereses de la burguesía nacional y extranjera, con la imagen progresista y nacionalista del gobierno constitucional (Ramírez Rancaño, 1986: 84).

En el Primer Congreso de Industriales que duró del 17 de noviembre al 26 de diciembre de 1917, asistieron representantes de la industria petrolera, textil, así como representantes de pequeños industriales, provenientes de 24 estados de la República. Con la ausencia de líderes de los estados de Chiapas, Morelos, Nayarit, Oaxaca, y Quintana Roo.

El encuentro se caracterizó por un intercambio entre las partes que paso del trato diplomático al planteamiento de posiciones definidas por las partes respecto al proyecto económico. Por su parte, Pani, vocero del gobierno de Carranza, manifestó la intención gubernamental de implementar una política económica librecambista que los líderes empresariales cuestionaban. Las diferencias fueron hábilmente aprovechadas por los inversionistas extranjeros quienes esgrimieron sus posiciones en contra de la Constitución expedida recientemente. Además, un industrial nacional, Joaquín Ibáñez, en su calidad de secretario del congreso aprovecha también la coyuntura para criticar a la nueva Constitución, señalando que dicho legado jurídico era perfectible y que, sobretodo, debía adaptarse. La convicción de los empresarios nacionales y extranjeros respecto a que el propósito del congreso era el recoger las demandas de ese sector social para modificar la Constitución Política, rápidamente tomaba forma en su transcurso. En realidad se trataba, como señala Ramírez Rancaño, de *una emboscada que la burguesía petrolera y minera extranjeras le tendían al gobierno de Carranza* (Aguilar, 1983).

Entre otras cosas que importaban a los inversionistas nacionales y extranjeros, estaba la posible tendencia que se podía tomar en materia laboral. Particularmente, a la burguesía textil le preocupaba el que Carranza interviniera esa industria con el pretexto de hacer valer el legado constitucional en materia laboral, pues la política librecambista que provocaba una desigual competencia con los inversionistas extranjeros, solo podía resolverse a través de un cuerpo asalariado que adecuara sus demandas a las circunstancias. Por otra parte, el empresariado nacional destacaba la importancia de contar con la inversión extranjera, a la que habría de garantizarle todo tipo de condiciones para que su presencia fuera paulatinamente en aumento. Se trataba también de otra situación contradictoria que enfrentaban los empresarios mexicanos: por un lado, se manifestaban en contra de una política librecambista que permitía el libre flujo de los productos extranjeros, pero, por otra parte, requerían la presencia de la inversión foránea para dinamizar la economía nacional.

De manera muy concreta el CIMP se encargó de desatar una fuerte crítica contra el artículo 123 constitucional, utilizando los servicios del abogado patronal Joaquín Ibañez a quien ya habían colocado como secretario del congreso de industriales. A partir de este vocero, el sector industrial nacional expresó en el congreso, que tenía la virtud de recoger y hacer llegar las demandas y críticas hacia la política económica del gobierno

constitucionalista, que:

1. No habría de aceptarse una jornada máxima de 8 horas diarias pues no correspondía a la resistencia del obrero mexicano.
2. Tampoco se habría de aceptar una jornada máxima de 7 horas para el turno nocturno.
3. Tampoco que la jornada máxima para jóvenes de entre 12 y 16 años fuera de seis horas.
4. Se aceptaba un día de descanso por cada seis de trabajo, pero que al no laborarse no tendría porque ser retribuido.
5. Era absurdo que durante los tres meses anteriores al parto de las mujeres, se les tuviera que asignar trabajos ligeros.
6. Se rehusaban a pagar un salario mínimo que garantizara la sobrevivencia del obrero y su familia.
7. Rechazaban la obligación patronal de pagar al trabajador su participación en las utilidades de las empresas.
8. Repudiaban la intención de pagar el trabajo extra a más del 100% del pago normal.
9. Aceptaban el derecho de obreros y patronos a agruparse para la defensa de sus intereses de clase.
10. Aceptaban que los conflictos surgidos por las relaciones laborales se dirimieran en Juntas de Conciliación y Arbitraje.
11. Aceptaban la eliminación de los pagos en especie, obligándose a hacer los pagos con moneda de curso legal.

Así se hacía patente las intenciones del empresariado nacional para modificar los preceptos constitucionales (Ramírez Rancaño, 1986: 104). Tales manifestaciones por parte de los inversionistas locales hicieron pensar en las posiciones que los empresarios extranjeros tomarían, sabiendo de antemano que coincidirían con los nacionales. Sin embargo el gobierno carranzista no estuvo dispuesto a aceptar tales propuestas que bien simulaban la causalidad de una rebelión contra los constitucionalistas, por lo cual Carranza envió a Pani para conciliar intereses con los industriales reunidos en el congreso. El 25 de noviembre de 1917, el vocero gubernamental les hacía saber que *los Delegados del Congreso gozaban de las garantías necesarias para la libre expresión de sus ideas, con el fin de proceder al estudio inmediato de ciertas reformas a la Constitución Política Federal, que pudieran servir como base y punto de partida de los trabajos ulteriores del Congreso*

(Ramírez Rancaño, 1986: 106).

Como se puede observar, este momento es crucial para definir el papel que jugarían las organizaciones empresariales en el sistema político pos-revolucionario, a partir del cual quedarían reconocidas *como órganos de consulta para el estado*, pues en los siguientes años y conforme dichas organizaciones adquirieran mayor presencia en los juegos de poder, normalmente serían considerados por los diferentes gobiernos para presentarles las iniciativas en materia de política económica.

En ese contexto de disputas por las implicaciones de los postulados de la Constitución Política de 1917, el gobierno de Carranza se encargó de hacerles saber que en el artículo 135 estaba contemplada la posibilidad de hacer enmiendas o adiciones a ese legado jurídico. Sin embargo, se dejaba claro que eso no correspondía al congreso de industriales sino al Congreso de la Unión donde habría de contarse con el apoyo de las dos terceras partes para lograr algún cambio. Lo que de antemano marcaría las posibilidades reales de cualquier intento político de tal envergadura, proveniente de fuerzas ajenas a las redes de las estructuras gubernamentales. Situación que se fortalecería, todavía más, con la fundación del partido oficial que permanecería sin una *oposición real* hasta finales de los ochenta. A pesar de ello, como señala Ramírez Rancaño:

*El gobierno esperaba que el regaño fuera suficiente, que diera resultados positivos y que en los días siguientes el rumbo del Congreso cambiara. Pero ni la burguesía imperialista ni la nacional estaban dispuestas a corregir el rumbo. Habían calculado perfectamente que a Carranza le era vital reconstruir el bloque dominante antes que provocar mayores escisiones. En los días siguientes el capital imperialista minero, petrolero e incluso la burguesía nacional textil arrearían sus ataques sobre los artículos 27 y 123. Podría decirse que la burguesía imperialista también entraría de lleno en los terrenos de la franca subversión en contra del orden establecido. Pero la historia aún no ha desentrañado totalmente los motivos que orillaron a Carranza a quedar callado. Tampoco se sabe por qué caudillos de la talla de Pablo González, Cándido Aguilar, Heriberto Jara o Alvaro Obregón también permanecieron mudos. Postura que sería compartida por el naciente y organizado movimiento obrero posrevolucionario. Nadie se atrevió a dar una respuesta ejemplar a la insolencia de la burguesía (Ramírez Rancaño, 1986: 108).*

Lo que importaba a la burguesía industrial era dejar claro que cualquier iniciativa de expropiación por parte del Estado o la pretensión de incautar fábricas o cualquier tipo de establecimiento privado, encontraría una radical respuesta por la parte empresarial, nacional

y extranjera. No se trataba tanto de enmendar los postulados constitucionales que afectaban el orden establecido en la dictadura de Díaz, sino generar una suerte de compromiso por parte del gobierno constitucionalista para no actuar en contra de los intereses ni las propiedades del gran capital. Obviamente, el artículo 27 que especificaba el derecho del Estado a modificar la propiedad del subsuelo, fue en lo subsecuente la constante preocupación de los industriales mineros y petroleros, por ende del capital estadounidense. Entonces, la amenaza del bloque de la burguesía era la alternativa progresista/nacionalista que el Estado mexicano podría tomar en un arrebato legalista que igual podría afectar intereses privados nacionales o extranjeros. Este es el punto que en lo sucesivo va a permitir que las diferentes partes del capital, vean en una alianza empresarial la posibilidad de garantizar la defensa de intereses comunes, explicando así la causa de su unidad en otras coyunturas políticas donde el Estado mexicano toma iniciativas en contra de los intereses privados.

Es a partir de ese conflicto que abrió la especificidad de artículos como el 27 y el 123 que los sectores empresariales comenzaron a difundir la idea que el estado mexicano tenía tendencias socializantes que ponían en riesgo todo tipo de propiedad privada.

Más tarde, el 10 de octubre de 1917 se formó la *Cámara Americana de Comercio* (CAMCO) con el firme propósito de constituir una organización empresarial que aglutinara a los inversionistas estadounidenses, quienes ante la coyuntura que abría la Constitución Mexicana que entraba en vigor ese mismo año, tomaron la decisión de darle forma a una unidad política que les permitiera establecer los canales de comunicación para negociar con el gobierno. Así que el papel que jugaba la embajada de los Estados Unidos en México se vio reforzada por esta organización empresarial como instrumento de representación de los intereses de esos inversionistas. Como lo señala Ortega:

*La inversión extranjera en su conjunto se sintió amenazada por la actitud nacionalista de los gobiernos mexicanos posrevolucionarios. Desde los años de la lucha armada, los empresarios extranjeros reaccionaron ante las condenas hacia su posición económica dominante, plasmadas en la mayor parte de los planes políticos y manifiestos de las diferentes facciones contendientes.*

*Los empresarios extranjeros emprenden entonces un esfuerzo organizativo que habría de cristalizar en la formación de nueve cámaras de comercio regionales ubicadas en las ciudades más importantes del país, cuya función era la de representar los intereses del capital extranjero en las negociaciones con los grupos revolucionarios locales (Ortega, 1986: 315).*

La fundación de esta organización muestra de manera fehaciente cómo los inversionistas estadounidenses ven la posibilidad de que el gobierno en el poder modifique el papel que en ese entonces jugaban los empresarios extranjeros en el escenario político-económico nacional. La necesidad de influir en la reconstrucción de la economía se hacía patente a partir de este instrumento que, en lo sucesivo, intentaría tener presencia a la hora de la definición de las decisiones de carácter fundamentalmente económicos. Y como quedó claro en ese año, la CAMCO representó un excelente canal de comunicación entre los inversionistas estadounidenses<sup>1</sup> y los voceros gubernamentales, o también, los representantes de los diferentes sectores económicos nacionales, con quienes mantenían diversos intercambios comerciales. De tal forma que esta instancia venía a llenar el vacío en la estructura de un sistema político que comenzaba a tomar forma, reflejando cómo los intercambios económicos, sobre todo, generaron una figura política que expresaba la contradicción entre el poder político y el económico. Esa fuerza que representaban los intereses económicos de los empresarios nacionales y extranjeros, habría de ser procesadas en una forma energética que permitiera la fundación del estado moderno.

Fuera del carácter de interés tan obvio como lo representa cualquier organización empresarial, nacional o extranjera, para el propio gobierno carrancista esa estructura organizativa del sector empresarial le resultaba, también, de una abierta y clara utilidad para promover los objetivos gubernamentales. Situación que se explica a través de las declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Trabajo, Alberto J. Pani, quien anteriormente se había dado a la tarea de promover la creación de dos de las más importantes organizaciones empresariales mexicanas: la CONCANACO y la CONCAMIN. En esa oportunidad, febrero de 1918, el oficioso ministro de Carranza plantea la importancia que tiene para el país la fundación de la CAMCO, pues reconoce la necesidad de establecer sólidos vínculos entre los diversos grupos económicos nacionales que se articulan a la compleja red de relaciones comerciales de las empresas estadounidenses fincadas en el país (Ortega, 1986: 319). Sin embargo, como elemento que se articula a una estructura de poder, también se trata de una organización empresarial que se activa políticamente en las coyunturas. Es decir, que su consistencia no es estática pues se sujeta a

---

<sup>1</sup> Como lo aclara Ortega, en cada comité directivo de la CAMCO siempre ha existido un representante de la embajada de Estados Unidos, desde su fundación hasta nuestros días. (Ortega, 1986: 317)

las fluctuaciones de la inversión estadounidense, según el tipo de gobierno que promueva el presidente en turno. Es por ello que en ocasiones se da una disminución o aumento del número de miembros, según las condiciones económicas y/o políticas. No obstante, la figura corporativa a partir de la cual se crean las organizaciones empresariales, nacionales y extranjeras, representa, en todo caso, *la capacidad del sistema naciente para adaptarse a las condiciones que le impone el ambiente, la capacidad para adaptarse a las circunstancias del momento.*

### 2.1.2 *La recomposición energética y el nuevo sistema político.*

Uno de los elementos más importantes en el análisis del estado contemporáneo después de la creación de la constitución de 1917 fue, precisamente, los conflictos desprendidos por las implicaciones de ese legado jurídico, sobre todo en lo referente a la *propiedad de la nación*. Evidentemente los intereses del capital extranjero representaron en los años veinte el principal problema a resolver por los gobiernos posrevolucionarios: la negociación con las compañías que explotaban los recursos del subsuelo mexicano constituían la posibilidad de dinamizar el proceso de reconstrucción y desarrollo de la economía nacional. La participación de esos capitales en unión a los nacionales y a las posibles intervenciones directas del Estado mexicano significarían una recuperación energética integral de una sociedad que comenzaba a recuperarse del costo político y económico que heredaba la revolución.

En este complejo proceso de organización y desarrollo, el Estado mexicano definió nuevas condiciones para propiciar la formación de las clases capitalistas, impulsadas no solamente a partir de la convocatoria gubernamental de cooperación entre las diferentes fracciones del capital, sino a partir de una participación concreta de las elites revolucionarias en la actividad económica (Hamilton, 1986: 127). *Se trata de un sistema social que comienza a ampliarse, creando y expandiendo los espacios sociales, sobre todo el político y el económico, para dar cabida a los miembros de la elite que no tenían participación en los niveles más altos de las nuevas estructuras de poder. De esa manera, se creó un código no escrito que permitía comprender las nuevas reglas del juego político*

*a partir de las cuales la elite en el poder tenía la posibilidad de transferir a sus miembros a la esfera económica, en "calidad" de nuevos inversionistas o empresarios que iniciarían actividades económicas con todas las prerrogativas del gobierno mexicano.* Cómo lo señala Francisco Valdés, los revolucionarios mexicanos crearon los canales de participación económica en los cuáles ellos mismos podían resultar directamente beneficiados (Valdés, 1988). O bien, también se pueden reconocer los antecedentes empresariales de muchos líderes revolucionarios, como es el caso de Francisco I. Madero, José María Maytorena, Aarón Saénz y Venustiano Carranza, entre otros. Lo cual exige observar la importancia política del empresariado en la construcción del Estado contemporáneo mexicano.

Sin embargo, los mismos problemas financieros que se extendieron a partir del movimiento armado dejaban al primer gobierno sonoreense en el dilema de reproducir el conflicto con los banqueros extranjeros, provenientes desde el largo mandato porfirista, o crear nuevos canales de comunicación que propiciaran las condiciones necesarias para hacer funcionar un sistema financiero mínimo que impulsara el desarrollo económico, destraba las ataduras del aparato gubernamental y creará las condiciones generales para la participación económica de todas las clases sociales.

Fue en este contexto conflictivo políticamente, e inestable económicamente, que De la Huerta tomó la decisión, primero, de autorizar el regreso de todos los desterrados, principalmente, los identificados como enemigos del carrancismo, segundo, formar un comisión integrada por el empresario del calzado y senador Carlos B. Zetina y los diputados Juan Zubarán y Antonio Manero, quienes se encargarían de establecer los criterios para restablecer el funcionamiento de los bancos. Sin embargo, las diferencias con el Secretario de Hacienda, Salvador Alvarado, impidieron la consumación del proyecto delahuertista, culminando solamente en la elaboración de un proyecto de banco de emisión que posteriormente daría origen al Banco de México. Sin embargo, antes de consumarse dicho proceso Enrique Creel, principal accionista del Banco Minero de Chihuahua, impulsó en agosto de 1920 que se concediera al Banco Nacional de México la concesión única de emisión (Krauze, 1987). Dicha situación permitió una mínima estabilidad para que el gobierno interino de De la Huerta negociara con cierto margen la deuda externa, sobre todo la creada con los bancos estadounidenses, y así crear una banca central que permitiera

establecer un control directo sobre la emisión del papel moneda.

De la Huerta encargó las negociaciones más importantes con los bancos de Nueva York, al sonoreense Roberto Pesqueira, al joven chihuahuense Manuel Gómez Morín y a su Secretario de Hacienda, Salvador Alvarado. Otro personaje que se incorporó a las negociaciones financieras fue Agustín Legorreta, quien en su papel de director del Banco Nacional de México, se encargaba de establecer el enlace con el Comité Internacional de Banqueros con Intereses en México, fundado desde 1919.

En ese sentido, se hace comprensible por qué los banqueros mexicanos recibieron un trato privilegiado por parte del gobierno, a diferencia de otro tipo de inversionistas. Como lo señala Collado:

*El caos económico y el desorden de las finanzas estatales -inevitablemente resultado de la revolución-, sumados a la incautación carrancista de los fondos metálicos de los bancos produjeron el encarecimiento del crédito, una circulación inadecuada y desconfianza en el papel moneda emitido por los diferentes gobiernos revolucionarios. Tal era el panorama económico que privaba, pese a las medidas tomadas por Carranza, cuando Obregón tomó protesta como presidente constitucional, el 1º. De diciembre de 1920. De ahí que sus primeras acciones buscaran un nuevo acuerdo con los banqueros que diera solidez a la economía y dotara al país de un sistema financiero sano y eficiente(Collado, 1996: 30).*

Sin duda, la llegada al poder de Álvaro Obregón gozó de un buen margen de credibilidad, sobre todo por parte de los empresarios mexicanos que habían generado positivas expectativas con el gobierno interino de Adolfo de la Huerta a quien le atribuían una administración eficiente y benévola con los empresarios adversos a la revolución y sus secuelas políticas, económicas y sociales.

Por otra parte es importante destacar que independientemente de los conflictos que el gobierno de Obregón enfrentaba en el terreno financiero, también pesaba la presión que Washington ejercía al pretender no reconocer al nuevo gobierno. Esta situación propició, aún más, el acercamiento de Obregón tanto con los banqueros extranjeros como con los mexicanos. El distanciamiento diplomático con los Estados Unidos generó otro tipo de presión a ese gobierno: el de buscar nuevas opciones y alianzas financieras. De tal manera que los privilegios extendidos al Banco Nacional de México, en menoscabo de los intereses de bancos menores, explica la importancia que en esos momentos tenía el respaldo de un banco local a las políticas promovidas por Obregón. De hecho, Agustín Legorreta,

propietario de dicho banco, fungió como una suerte de asesor financiero para negociar con los bancos estadounidenses y europeos.

Los bancos interesados en emitir los billetes era el Banco de Londres y México, el Banco Nacional de México y el Banco de Comercio e Industria, sin embargo, el 25 de febrero de 1921, la iniciativa de la Ley de Instituciones de Crédito estableció una división en las funciones bancarias, donde se definió que correspondería a un solo banco la emisión de papel moneda (Meyer, J., Krauze, y Reyes, 1977). Desde ese momento surgió el Banco de México cuyo papel fundamental era la emisión de la moneda y la regulación general del sistema bancario en México, era la condición necesaria para que desde entonces el Estado mexicano tuviera el control directo de una de las funciones bancarias más importantes que le permitiría dar coherencia a las políticas de desarrollo generadas subsecuentemente (Carrión y Aguilar, 1972).

Empero, las diferencias entre la propia elite de poder y las elites financieras nacionales guardaban esperanzas de participar protagónicamente en el proceso de modernización bancaria, presionando a partir de críticas y nuevas propuestas sobre las decisiones a tomar sobre qué bancos serían los encargados, y por tanto beneficiarios, de las demás funciones que requerían el gobierno y, en general, el sistema financiero. Por ejemplo, la rivalidad entre Alberto J. Pani y Adolfo de la Huerta se dirimía en el campo de las negociaciones sobre el sistema bancario (Castro, 1998). Y la propuesta que emergió como la más viable en ese momento fue la de De la Huerta, quien había tomado como secretario particular a Manuel Gómez Morín, personaje al cual Krauze atribuye la redacción del decreto presentado por el ministro. De hecho, es evidente que De la Huerta toma como asistente a Gómez Morín y se apoya en él, particularmente, para la elaboración de este proyecto, por la experiencia que éste desarrolló como uno de los negociadores financieros que en su momento envió el propio De la Huerta ante los bancos neoyorkinos en su mandato interino (Krauze, 1997).

No obstante, las iniciativas de Obregón en el terreno del sistema bancario, los principales problemas con los bancos extranjeros le impedían impulsar un programa económico de desarrollo que vinculara a las actividades económicas más dinámicas y al sector bancario. No se trataba solamente de la emisión del papel moneda sino de resolver el problema de la deuda externa que estaba en poder de los bancos europeos, cuya

participación alcanzaba el 80% del total. Las alternativas que se esgrimían apuntaban en esos momentos a pagar la deuda a partir de elevar los impuestos al petróleo, lo que estaba en contra de los intereses de las compañías petroleras estadounidenses y holandeses.

Los problemas capital-trabajo fueron desplazándose hacia el ámbito laboral. De hecho, consideramos que en la lucha empresarial contra las relaciones laborales que se hacían más evidentes al formalizar por la vinculación corporativa del sector obrero a la elite gubernamental, explica la sentida demanda de proteger a la empresa mexicana, principalmente a la del sector industrial. Pues, según ellos, cualquier avance registrado a favor de los intereses obreros se traducían en una disminución de las utilidades de las empresas (Aguilar Camín y Meyer, 1989).

Los conflictos laborales surgidos en esos años, confirmaban la complejidad que suponía la aplicación del artículo 123 de la renovada Constitución. Por una parte, el que los sindicatos lograran constituirse en el instrumento interlocutor para negociar con la parte patronal, y por otra, el que los trabajadores no sindicalizados fueran respaldados por los empresarios para desobedecer el llamado a las huelgas. Los patrones apoyaban a los "trabajadores libres" en la medida que su presencia en el espacio laboral presionaba a los sindicalistas a volver a sus labores. Por ello, según Collado:

*En lo relativo a la libertad de trabajo, patentizaron que el derecho de huelga debía respetarse, aunque también el derecho individual a trabajar. Exigieron que el gobierno garantizara los derechos de todos los trabajadores: libres y sindicalizados, y tacharon de "nuevos reaccionarios" a un grupo de diputados que criticó a Rafael Zubarán Capmany, secretario de Industria, Comercio y Trabajo, por su defensa a la libertad laboral (Collado, 1996: 241).*

De esa forma se hace comprensible, en el marco de la huelga ferrocarrilera a finales de febrero de 1921, la gran aceptación que tuvo la declaración presidencial en el que se hacía manifiesto el apoyo gubernamental al derecho inalienable a la libertad del trabajo y a la huelga. Por ello el beneplácito del presidente de la CONCAMIN, Carlos Robles, quien señaló que la defensa exclusiva de los trabajadores sindicalizados creaba privilegios inadmisibles.

La huelga tranviaria en junio de 1922, en la capital de la República, nuevamente pone en entredicho la dicotomía entre el derecho a la huelga y la libertad de trabajo, nada

más que ahora bajo la lupa de un nuevo elemento: el espíritu de los servicios públicos. Pues si bien se reconocía el derecho de los trabajadores a usar sus derechos para defender sus intereses de clase, se anteponía un nuevo elemento "moral", que era el compromiso de prestar un servicio a la ciudadanía. En esa ocasión los empresarios mexicanos reclamaron al gobierno su falta de compromiso para garantizar la seguridad de los trabajadores "libres" que, en todo caso, permitirían cumplir con el compromiso de un servicio social, al tiempo que los patronos disponían de sus bienes en el periodo de huelga (Collado, 1996: 243).

Así, era imposible que los empresarios mexicanos ignoraran los acontecimientos internacionales, particularmente el del triunfo de la Revolución rusa, y sus efectos ideológicos en el país. De tal manera que el radicalismo y las prácticas bolcheviques fueron traducidas inmediatamente a las prácticas sindicales que se vivían en México. Esto es fundamental pues las tendencias sindicales como muchas de las políticas gubernamentales de los años veinte, permitían al empresariado justificar su ideología, tendiente a combatir y desacreditar cualquier tendencia política-ideológica que compartiera el fin último de la justicia social, que en la reinterpretación "populista" atentaba contra los intereses de la clase empresarial. Entonces, más que enfatizar la demanda de contener al movimiento sindicalista, la demanda se enmascaraba con el objetivo del interés nacional por combatir al comunismo. Ello explica que los empresarios mexicanos veían en el artículo 123 los orígenes y las causas de los conflictos obrero-patronales, así como descubrían el carácter socializante de la Constitución de 1917, y de los gobiernos en turno que privilegiaran su compromiso constitucional (Carpizo, 2002; Katz, 1982; Aguilar Camín y Meyer, 1989; Hamilton, 1986).

No fueron gratuitos los artículos tanto en los periódicos como en los órganos informativos de las organizaciones empresariales, donde se criticaba el activismo sindical y sus tendencias "comunistoides". Así, evidentemente, se intentaba construir una opinión pública guiada por el sector empresarial, que demandara al gobierno mexicano contener la influencia extranjera en las nuevas posiciones políticas de la clase obrera. Por ello, el empresariado mexicano aparece exaltando un patriotismo que pretendía constituirse en la fuerza ideológica repelente ante toda expresión política que sugiriera una semejanza con el proyecto socialista. Se asociaban los intereses de la nación con los intereses de la propiedad privada, las libertades de la libre empresa con la libertad de los individuos, llevado al

extremo de esgrimir tal argumento para contrarrestar los avances y aceptación de la jornada de 8 horas.

Para los empresarios era tan importante difundir su idea sobre la forma que debían adoptar las relaciones obrero-patronales, que durante mayo, junio, julio y agosto de 1922, organizaron un ciclo de conferencias que tuvieron por objetivo discutir lo que a su juicio debía regir los problemas entre el capital y el trabajo. Se invitó como conferencistas a lo más representativo, ideológicamente hablando, del empresariado nacional, intelectuales y profesionistas que compartían su visión. Tal es el caso de Carlos Díaz Dufóo, Henry Crozat, José I. Cossío, y como señala Collado:

*Mención aparte merece la conferencia del sacerdote jesuita Alfredo Méndez Medina, director del Secretariado Social, tanto por posición ideológica que representaba, como por manifestar con su presencia la importancia sociopolítica que el empresariado otorgaba a la Iglesia. El movimiento obrero católico había cobrado importancia relevante para aquellos años y, probablemente, con el objeto de ganar su apoyo fue invitado uno de los principales promotores del sindicalismo católico. En abril de 1922 se fundó la central obrera inspirada en la encíclica Rerum Novarum: la Confederación Nacional Católica del Trabajo (Collado, 1996: 268).*

Este hecho demuestra cómo la ideología empresarial convergía en la concepción de la Iglesia Católica, en su perspectiva de lo que debían ser los roles sociales de cada actor político. La invitación empresarial a este sacerdote, sugería el tipo de sindicalismo que ese sector estaba dispuesto a aceptar: *el proveniente de la labor social eclesiástica.*

Un contexto de presión sindical y una respuesta populista del gobierno mexicano, condujo a los empresarios nacionales a buscar los orígenes ideológicos que les confiriera una identidad propicia para construir la unidad política requerida en un momento de definición del proyecto de nación. Para ellos era vital abandonar el individualismo y constituir un instrumento de defensa de los intereses generales y comunes de la clase empresarial. En ese sentido trabajaba la CONCAMIN, que intentaba fortalecer todos aquellos vínculos que apuntalaran las actividades gremiales. El reto más importante, dadas las nuevas circunstancias económico-políticas, era indudablemente el problema del código laboral, y por tanto, su demanda de federalizar las leyes *laborales.*

Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles ante la embestida de la acción sindical obrera que poco a poco fue ganando espacios en el escenario político, por lo cual los

empresarios tuvieron que aceptar, más tarde, la jornada de 8 horas, el descanso dominical y las limitaciones al trabajo femenino e infantil. No obstante el avance del gobierno mexicano en la aplicación de los mandatos constitucionales, los empresarios se mantuvieron herméticos a la posibilidad de implementar el reparto de utilidades, pues no solamente implicaba un descalabro a las utilidades de la empresa sino a la posible fiscalización de la contabilidad de las entidades económicas (Collado, 1996: 284).

Como se puede observar, las condiciones sociopolíticas de principios de los años veinte, generaron una evidente incertidumbre en el sector empresarial que se sumó a las diversas causas que provocaban una actitud ofensiva ante el gobierno mexicano. El ascenso de la presencia obrera en las decisiones gubernamentales iba dejando cada vez más claro al sector empresarial, que era el momento para construir una unidad política que garantizara la defensa de los intereses comunes, como es la propiedad privada, la cuestión de la ley laboral y la política tributaria. Esos objetivos constituyeron el espíritu de la *Alianza Nacional de la Propiedad, la Industria y el Comercio*, creada en 1922, y que cada vez adquiría una mejor justificación en su razón de ser. De hecho los acuerdos de la Convención de Ligas y la Unión de Propietarios en junio de 1923, comprobó la necesidad de crear un frente único que garantizara, primero, los embates reformistas del gobierno mexicano<sup>2</sup> y los progresos políticos de la naciente clase obrera, expresada en pujantes huelgas cada vez más demandantes (Rodríguez Araujo, 1988).

La efervescencia política de esos años refleja un proceso social mediante el cual se daría forma a un nuevo escenario político nacional que prevalecería hasta los años setenta. Un sistema caracterizado por relaciones corporativas que legitimarían la permanencia en el poder de la "familia revolucionaria" a lo largo del siglo XX. Así las prácticas de los diferentes actores sociales darían forma a una relación peculiar con la elite gubernamental, por su parte, los empresarios nacionales intentaban consolidar su posición en el escenario nacional a través de expresar su ideología en los medios de difusión masiva, en ese entonces, a partir de la prensa.

Por otra parte, cabe destacar las diferencias al interior de las clases empresariales, pues desde entonces es posible advertir, al menos, dos posiciones ante el estado mexicano.

---

<sup>2</sup> Una de las muchas expresiones de la tendencia reformista del gobierno mexicano en esos años, es, por ejemplo, la Ley de Reparto de Utilidades que generó un considerable conflicto con el empresariado mexicano, en 1921. Este tipo de medidas es la que más tarde daría forma al populismo "mexicano".

Una *beligerante* que no está dispuesta a ceder ningún tipo de concesión en las negociaciones, y otra proclive a la negociación. Esto es importante pues nos permitirá reconocer en diferentes conflictos político-económicos, que en ocasiones se generan situaciones en las cuales no todos los empresarios se manifiestan en contra de las decisiones gubernamentales. Pues dependerá de las coyunturas específicas y de las redes creadas con el sector empresarial, para generar posiciones de respaldo a la política del gobierno. Obvio, se trata de un escenario en el cual habría de esperarse *apoyo* de los empresarios beneficiados por sus nexos con el gobierno mexicano, y *censura o crítica* por parte de los empresarios afectados. Lo que estaría sugiriendo otro aspecto del *flujo energético* que invariablemente alude a las contradicciones entre los diferentes actores políticos que contienden por el poder.

De hecho una de las posiciones empresariales que se requiere destacar por el papel político que jugará desde entonces en las diferentes coyunturas, es el del empresariado regiomontano, cuyo sector siempre tuvo una gran autonomía, pues su aislamiento geográfico y su potencial económico le han permitido defender su autonomía respecto al poder central. Como señala Collado: *Por ello siempre fueron reacios a dejar el control en el centro, como la Concanaco y la Concamin* (Collado, 1996: 151). Y eso ayuda también a explicar por qué la COPARMEX, el sindicato patronal, nació en Monterrey (Derossi, 1971) Esta posición confirma la diversidad de la clase empresarial proyectando desde entonces posiciones en ese sector que varían según los intereses particulares de cada empresario o fracción.

De esa misma forma se entiende las diferentes posiciones de los empresarios en situaciones como las del paro empresarial ante la Huelga de Orizaba de junio de 1923, o la de la amenaza de paro que la Confederación de Cámaras de Comercio esgrimió para que el gobierno derogaba el impuesto sobre la renta que pretendía instrumentar (Guadarrama, 2001; Rodríguez Araujo, 1988).

Este tipo de dilemas políticos refleja desde entonces la forma cómo los sectores empresariales ejercen presión sobre las diferentes instancias gubernamentales para que adopten los criterios que ellos juzgan pertinentes para beneficio de sus propios intereses sectoriales. Es importante observar cómo las organizaciones empresariales utilizan sobre todo a la prensa, aunque también a sus propios órganos de difusión, para fortalecer las

posiciones que éstas creen "convenientes para el país". Esto se advierte en la controversia que reproduce Collado Herrera sobre el conflicto bancario de 1923, donde las organizaciones empresariales utilizaron al periódico *El Universal* y *Excélsior* para legitimar ante la opinión pública la validez de sus propuestas.

Por otra parte, es importante observar que los propios medios de difusión, en este caso particular la prensa, constituyen también la representación de un sector empresarial que se puede sumar a la opinión sectorial predominante en el escenario político nacional o generar su propia opinión, según sus intereses concretos del momento. Es el caso, por ejemplo, de la opinión manejada por la editorial del *Excélsior* en septiembre de 1923, en el marco de las negociaciones De la Huerta-Lamont, donde:

*...se observa con cierto tono nacionalista, que tal vez buscaba preparar a la opinión pública, que si se optaba por cumplir con los compromisos internacionales sobre los internos, la Revolución traicionaría su promesa de "acabar de una vez por todas con la preferencia de la dictadura por los extranjeros". Y es que, aunque el periódico no lo recordara en este editorial, la administración tenía adeudos pendientes no sólo con la burocracia, sino con los empresarios mexicanos. Se hablaba de que debía a los comerciantes ocho millones de pesos, de suerte que este moderado nacionalismo era forma de presionar para que los adeudos internos fueran la prioridad de Obregón (Collado, 1996: 88).*

Este tipo de situaciones donde los medios de difusión comienzan a jugar una parte importante en el juego político, refleja como se van constituyendo en una parte activa del sistema que se va fraguando desde principios de los veinte. A partir de lo cual los medios de difusión masiva van formando parte fundamental en las estrategias políticas, ya sea para generar consensos, difundir proyectos o posiciones, pero sobre todo para combatir a los contrincantes o presionar a las diferentes instancias donde se toman las decisiones más importantes del país.<sup>3</sup> Quizás sin pensarlo, los principales actores de esa época comenzaban a considerar que en la política la opinión de la ciudadanía podría representar la posibilidad

---

<sup>3</sup> Un ejemplo de este fenómeno lo constituyen los primeros intentos empresariales por generar una organización que los unificara, sin los vínculos corporativos con el estado, como lo demuestra una nota de un artículo publicado en la revista *El Comercio*: "La transformación mundial, que se ha operado apenas en el transcurso de unos cuantos años y cuyo resultado ha sido la sustitución en gran parte de la acción individual por la cooperación general y el esfuerzo colectivo, en forma de gremios o corporaciones, ha impuesto a las clases (...) la necesidad de constituirse en agrupaciones firmes y coherentes, necesarias como organismos de progreso y de defensa. (...) En la actualidad difícilmente el individuo podrá enfrentarse con buen éxito a la defensa de sus derechos contra el estado, contra los particulares y contra las corporaciones. Por eso la tendencia actual es la organización en gremios, sociedades, sindicatos y corporaciones de diversas clases, para defender los intereses colectivos del grupo y de los particulares que lo integran". (Collado, 1996: 136).

de consolidar alguna tendencia o de revertir procesos que no resultaran benéficos a algunos miembros de las elites económicas y políticas.

Otro ejemplo de este tipo lo constituye el conflicto generado entre De la Huerta y Obregón, ante la pretensión del primero de constituirse en un candidato independiente, cuando en la editorial del periódico *Excélsior* se expresa el apoyo que importantes sectores empresariales le confieren a De la Huerta, simpatías que sin comprometer un apoyo militar sí generan una posición de presión para el gobierno de Obregón. Como lo señala Collado, el triunfo de Obregón se debe fundamentalmente a que ya contaba con el reconocimiento diplomático de los Estados Unidos, problema que no había impedido garantizar la estabilidad económica y política requerida para iniciar el desarrollo económico que resolviera el desgaste social heredado del movimiento armado de 1910 y sus respectivas secuelas (Garcíadiego, 1991). De hecho, el curso que tomó el conflicto De la Huerta-Obregón reflejaba la consolidación político-militar del estado mexicano, pero también la debilidad económica que provocó el acercamiento del gobierno obregonista al empresariado nacional. La cooperación entre el sector público y privado se hacía inevitable para arrancar un proceso de reconstrucción económica que llevara a la nación a etapas industriales que lo sacaran de la condición precapitalista que le había caracterizado hasta entonces.

El año de 1923 fue fundamental para que el gobierno de Obregón resolviera los problemas más apremiantes a su gestión presidencial. Además de las trabas financieras que intentaba resolver, enfrentaba la presión constante de las compañías petroleras. Todas las diferencias no resueltas con los intereses estadounidenses a partir de la formalización de la Constitución de 1917, esto es, las amenazas jurídicas que sus postulados significaban para las propiedades norteamericanas, representaron buena parte de los oficios diplomáticos que en el terreno de las negociaciones desempeñaron los gobiernos posrevolucionarios, sobre todo en el gobierno interino de De la Huerta y el de Obregón, quien finalmente firmó en 1923 los *Acuerdos de Bucareli*, donde prácticamente el gobierno mexicano se comprometía a respetar los intereses estadounidenses a pesar de las especificaciones constitucionales en cuanto al ámbito de la propiedad del subsuelo (Aguilar, 1983).

En un escenario de fuerte conflicto financiero con la parte extranjera, los empresarios nacionales definieron sus propias estrategias de presión contra el gobierno

mexicano, para que éste jerarquizara sus compromisos económicos con los “intereses nacionales”. Un ejemplo de tal situación son los conflictos derivados de la política fiscal del gobierno mexicano que intentaba restablecer la situación financiera del Estado. Como es de esperar, siempre que la política no afectara la condición económica empresarial habría de esperar una *actitud moderada* ante el gobierno, o una *actitud beligerante* en sentido contrario. Esto sucedió en 1924 cuando se creó el impuesto sobre la renta que gravaba a quienes tenían mayores ingresos, y por tanto, mayores ganancias; tal medida encontró una actitud beligerante que no cesó hasta no ver modificada la decisión (Collado, 1996: 161).

Este contexto permitió consolidar la posición política de los empresarios mexicanos quienes se habían esforzado, desde que se generó el proyecto constitucional, para ser considerados por el Estado mexicano como corporaciones consultoras en materia de legislación, fundamentalmente, económica. Eso no exime al actor político empresarial como un fiel de la balanza en conflictos de la índole que se vivían en los años veinte. Así lo demostraba el papel que jugaron los sectores bancarios y financieros convocados por Pani para apoyar al gobierno de Obregón. De hecho, la clausura de la Convención Bancaria el 29 de febrero de 1924, representó para el gobierno en turno, la posibilidad de confrontar en el terreno de las negociaciones a los sectores empresariales, comerciantes e industriales, que se oponían al impuesto denominado *Income Tax* (Collado, 1996: 99). Tal situación nos ubica en otro tipo de relaciones entre las elites de poder, sobre todo en el papel que juega el estado en relación al bloque dominante, donde en algunas ocasiones los *tomadores de decisiones* adoptan una medida que no necesariamente favorecía al conjunto de la burguesía (Poulantzas, 1984). Como en esta ocasión, las coyunturas nos pueden mostrar también diferencias importantes entre las fracciones del capital, de lo cual es posible esperar que el conjunto de la burguesía confronte alguna iniciativa o medida gubernamental, fundamentalmente en el plano económico, o que alguna fracción del mismo le proporcione la cobertura al gobierno para legitimar una decisión que aparentemente y en el corto plazo, afecte al resto del bloque dominante. En todo caso, la importancia del margen del que gozan todos los gobiernos, es lo que determina *el reequilibrio de la fuerza política que permite al estado posrevolucionario mantener el control de la conducción nacional*. La hegemonía ejercida desde entonces por la *burocracia política* se nutre de diversas fuentes que el Estado pone en juego para legitimar su gestión. Sin embargo, no se trataba de un

escenario que amenazara con pasar de una confrontación política entre algunas fracciones del capital y el gobierno y una fracción aliada, a una confrontación abierta que pudiera dirimirse a partir de las armas.

También es pertinente considerar que el predominio de una u otra fracción del capital, responde a una etapa particular del desarrollo económico nacional a partir de la cual se hace necesario reconocer las divergencias que se dan al interior del bloque dominante. De hecho, en los años veinte, es fácil reconocer el por qué del predominio de cierta fracción, pues tan sólo en esa época la producción petrolera significaba un mayor aporte al PIB, seguido por los servicios, mientras que la producción manufacturera representaba un total del 8,7% entre 1923-24. Esto explica la importancia política de la CAMCO, las Convenciones Bancarias, a diferencia de la CONCANACO o la CONCAMIN, creadas a mediados de la década anterior.

Estas mismas diferencias entre los sectores empresariales, expresadas en las posiciones de sus respectivas cámaras, reflejan también estructuras de intereses que se contraponen en las diferentes coyunturas. Como es el caso del apoyo que el sector comercial le brindó a Obregón en el conflicto diplomático con los Estados Unidos, mientras que las posiciones de los industriales nacionales convergían con muchas de las críticas y presiones que las empresas norteamericanas hacían al gobierno mexicano, al considerarse afectados, también, por el artículo 123.

La primera Convención Bancaria de 1924, generó el compromiso de las partes, gobierno y sector bancario-financiero, para reunirse anualmente y resolver los problemas más urgentes para esa actividad. En ese marco Pani había presentado tres propuestas que fueron aceptadas tanto por los representantes gubernamentales como por los banqueros: *1) que se realizaran reuniones anuales de banqueros para promover el desarrollo de esta actividad y evitar conflictos con la Secretaría de Hacienda; 2) que se nombrara una comisión permanente encargada de enlazar las actividades de la primera con la segunda Convención Bancaria, y 3) que los miembros de esta comisión se dedicaran al estudio de la constitución y funcionamiento del banco único de emisión* (Váldez, 1997).

El compromiso generó por parte de los banqueros un beneplácito que hacían público a partir de declaraciones de uno de los principales banqueros nacionales, Enrique Creel (yerno de Luis Terraza, empresario y hacendado más importante de Chihuahua, y uno de

los más importantes de México), quien manifestó que con esa medida los empresarios recobraban la confianza en el gobierno al *abrir las puertas de una nueva era que deseamos sea de progreso, de trabajo y de bienestar en la República Mexicana*. Lo que coincidía con lo dicho por Jaime Gurza, representante de industriales y banqueros, quien refrendó su opinión respecto a las vías para resolver la crisis económica enfatizando que la solución se encontraba en *adoptar una política económica nacional que fomente la riqueza, estimule la producción e intensifique las transacciones comerciales; que haga renacer el crédito privado aumentando la productividad en los negocios para que pueda haber ahorro* (Collado, 1996: 101). Tales expresiones son fundamentales para analizar el tipo peculiar que en lo sucesivo jugaran los empresarios nacionales en el escenario político. Es pertinente destacar es que este suceso confirma el papel de órganos de consulta que las organizaciones empresariales jugarían, desde entonces, para el gobierno mexicano, sin limitar la relación al sector bancario que en este momento se encontraba muy próximo, y estableciendo las bases de la participación política que los empresarios nacionales tendrían formalmente. Segundo, el predominio económico de las demandas dirigidas a las autoridades gubernamentales donde invariablemente se estaría exhortando al Estado mexicano a promover el fomento a la riqueza, sin menoscabo a la empresa privada. Y tercero, la ausencia permanente de una de las partes de la producción: el trabajador, quien siempre brilla por su ausencia en el discurso empresarial, sobre todo en aquellos tiempos.

El primer punto refleja la articulación corporativa del sector empresarial al gobierno mexicano, por tanto, da cuenta de la institucionalización de un canal de comunicación entre las elites de poder. El segundo, la especificidad económica del discurso empresarial y, por tanto, de las demandas más importantes provenientes de este actor político, lo que no anularía la posibilidad de incursionar en otros aspectos de la realidad social, sobre todo a partir del proceso de transición que se viviría a partir de los años sesenta. Y el tercero, que el interés relevante para el empresariado nacional es el de la acumulación de la riqueza, dejando en un plano secundario los compromisos sociales que el estado debiera atender, independientemente que el discurso de sus organizaciones retome, en algunas ocasiones, otros aspectos de la problemática nacional. Independientemente de cual de los tres puntos se trate, normalmente la prensa reproduce en sus notas o en sus editoriales, los planteamientos de las organizaciones empresariales. Esto permitirá, en lo sucesivo, contar

con un elemento que funja como parámetro de los niveles de participación política de este sector social, el definir sus posiciones ante el gobierno, así como la diversidad que en su momento adquiriera el discurso empresarial. En ese sentido es fácil identificar que algunos periódicos comparten la posición empresarial en el escenario nacional, lo que muchas veces permite definir a algunos medios a partir de la ideología empresarial, normalmente aceptada como el *pensamiento de la derecha*.

Las secuelas de la segunda guerra mundial en la crisis económica que el país demostraron la importancia que ya había adquirido el papel de la prensa como forjadora de opinión pública. Una situación donde el gobierno de Obregón se veía imposibilitado para cumplir con los Convenios De la Huerta-Lamont, con el peso de una devaluación del 100%, una fuga de oro, una resistencia del sector bancario para hacer un préstamo al gobierno federal con el objeto de cumplir con sus compromisos externos, y las dificultades que encontraba Pani, en su calidad de Secretario de Hacienda, para obtener un préstamo del Comité de París, provocaron la conformación de una emergente opinión pública que criticaba los manejos del gobierno en materia económica.

*El Universal* se encargaba de difundir la opinión de que eran más importantes los compromisos adquiridos con los prestamistas nacionales que con los extranjeros. Evidentemente, una respuesta positiva del gobierno a las demandas de "la opinión pública" garantizaría los intereses inmediatos de los grandes capitalistas que habían hecho préstamos al gobierno. *Los medios de difusión, en este caso específico la prensa nacional, emergían como un instrumento de presión y difusión de invaluable valor político tanto para las elites como para todos aquellos interesados en ser considerados en el escenario político nacional.* Así lo apunta Pedro Castro, sobre el periodo 1924-1924, en el cual se aprecia el uso progresivo de los medios de difusión, particularmente el de la prensa, como inmejorable instrumento para adquirir presencia en el escenario político nacional, y por tanto, para ganar la atención de la opinión pública. Tal práctica política se observa tanto en los políticos apoderados de los aparatos del estado, como de los empresarios, quienes buscaban el apoyo de su posición ante el gobierno mexicano (Castro, 1988).

Es en estas coyunturas cuando los empresarios mexicanos, desde entonces, hacían andar su maquinaria de presión política, donde el recurso más inmediato era el de la prensa, es el caso de los artículos en el diario *Excélsior* de Carlos Díaz Dufóo, ideólogo

empresarial, quién criticaba constantemente los problemas fiscales, destacando la irracionalidad burocrática que ponía en peligro la reproducción de las empresas nacionales. Además las críticas eran reforzadas en un marco explicativo donde Díaz Dufóo destacaba la calidad populista y socializante del estado mexicano:

*Hace más de un cuarto de siglo que se viene operando una modificación esencial en el concepto del impuesto.... los partidos socialistas se han apoderado de esta tendencia, haciendo del impuesto una arma destinada a remediar las desigualdades económicas en la distribución de la riqueza, concepto que todavía está a debate, pero que en la práctica ha servido de bandera a los gobiernos de origen democrático para apoyarse en la fuerza política del número... Justamente una de las inculpaciones más serias que se arrojan sobre los impuestos directos a las utilidades del capital se hace consistir en que mata el ahorro, y por tanto, es un estorbo a esa formación de capitales futuros, deteniendo la marcha de los países que adoptan ese sistema de tributación (Collado, 1996: 188).*

Esta idea refleja cómo iba adquiriendo forma una ideología empresarial claramente distanciada y, hasta cierto, punto, antagónica, al espíritu de nación que intentaba construir el gobierno mexicano. La política gubernamental reivindicativa de los postulados sociales expresados en la Constitución de 1917, provocó en los empresarios mexicanos, junto con los extranjeros, una actitud de constante lucha para desactivar las tendencias hacia la construcción de una sociedad más justa. Por esa razón, los empresarios mexicanos arremeten contra el gobierno cada vez que se instrumenta una política que fortalezca la condición financiera del aparato burocrático o cuando la decisión favorece a las clases trabajadoras, que ya activadas políticamente constituyeron desde entonces uno de los referentes legitimadores más importantes para la *familia revolucionaria*. La posición ideológica del empresariado mexicano intentaba proyectar la imagen de un gobierno diferente a aquel Estado comprometido con la redistribución del ingreso, que era lo que perseguía, supuestamente, la instrumentación de la política fiscal. Es por ello que constantemente las organizaciones empresariales aparecían demandando reformas o abrogaciones a las leyes establecidas. Sin embargo, es pertinente señalar que *normalmente existió algún sector empresarial que aceptaba, sin protestar, las políticas gubernamentales, y con ello se sumaba al ritual de la legitimación de las decisiones de la burocracia política.*

Las presiones por parte de todos los sectores del gran capital se hacían sentir. Por su parte, en 1924, los capitalistas estadounidenses apostaban contra el gobierno mexicano

por todos los medios, aunque de manera muy particular mediante el uso político dado a las diversas organizaciones empresariales que fungían como parámetro del reflujo en el juego del poder. Por ejemplo, es el caso de la posición de la CAMCO que refleja la difícil situación enfrentada por el sistema político mexicano en esa década, haciendo patente la importancia económica que tenía la inversión estadounidense en el desarrollo económico nacional (Ortega, 1986: 320). El peso de esa posición se veía reflejada en los flujos de ese capital según el tipo de relación con el gobierno en turno. No es gratuito que para 1924 la inversión estadounidense hubiese pasado de 341 a 241 millones de dólares, mientras que en 1925, a la entrada de Calles como presidente de la nación, dicha inversión se hubiese incrementado hasta 700 mdd. Tal situación refleja tanto la vinculación de la política y la economía, así como la vinculación del sistema y su ambiente, que por otro lado, explica con mucho, los lazos de dependencia económica que guarda México respecto al exterior, particularmente con los Estados Unidos

Por otra parte, la problemática política era mucho más compleja para el gobierno obregonista pues comenzaba a tomar forma una nueva fuerza política que progresivamente demandaba prebendas para satisfacer sus crecientes necesidades materiales. De hecho, el fenómeno que inquietaba a los sectores empresariales nacionales era la atención que el gobierno mexicano ponía a las demandas obreras, lo que planteaba la disyuntiva de crear un nuevo organismo empresarial más independiente, perteneciente plenamente a los empresarios, y no como el caso de la CONCANACO y la CONCAMIN de carácter más corporativizado a la estructura del poder del Estado. La resistencia de algunos de los miembros de la elite económica era muy simple: una práctica cotidiana para los empresarios nacionales quienes estaban acostumbrados a tratar sus problemas de manera individual y directa, con los funcionarios responsables de las decisiones correspondientes, a las diversas políticas gubernamentales.

La necesidad de crear un organismo más vinculado a los aparatos del gobierno propició que las organizaciones empresariales, como la *Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México*, primera cámara patronal creada a finales del siglo XIX, comenzara a difundir una opinión a favor de generar una relación corporativista que garantizara la salvaguarda de sus intereses sectoriales y de clase. Hacia ese sentido apuntaba un artículo publicado por la revista *El Comercio*, donde se afirmaba:

*En la actualidad difícilmente el individuo podrá enfrentarse con buen éxito a la defensa de sus derechos contra el estado, contra los particulares y contra las corporaciones. Por eso la tendencia actual es la organización en gremios, sociedades, sindicatos y corporaciones de diversas clases, para defender los intereses colectivos del grupo y de los particulares que lo integran.*<sup>4</sup>

No obstante los esfuerzos que hizo Obregón para fundar un banco de emisión única, la influencia negativa del levantamiento delahuertista y sus secuelas económicas y políticas, provocaron que la fundación del Banco de México se realizara hasta el 7 de enero de 1925. De tal manera que el suceso se le atribuyó a Calles, y no a sus promotores originales, De la Huerta y Pani. La redacción final de la ley del Banco de México se le atribuye al propio Pani, a Manuel Gómez Morín, en su calidad de abogado de la Comisión Monetaria, y a Fernando de la Fuente, jefe del departamento de crédito de la Secretaría de Hacienda. A tal comisión se les unían esporádicamente otros colaboradores, entre ellos, Agustín Legorreta, quien poco a poco sanaba diferencias con el *gobierno posrevolucionario*. Sin embargo, las diferencias con el sector empresarial mexicano seguían presentes, como lo señala Collado:

*La poca presencia del capital privado en el Banco de México manifiesta la oposición de los grandes banqueros a participar como socios supeditados al control del Estado. Los grandes bancos de emisión y, en particular, el Banco Nacional de México, perdieron cuando se erigió la banca central bajo este proyecto, porque ésta les privó de funciones económicas muy redituables, desempeñadas durante el porfirismo, y de las que gozó con altibajos hasta 1925 (Collado, 1996: 117).*

Del mismo modo que las relaciones laborales estaban tornándose conflictivas con el empresariado mexicano, también las compañías extranjeras, particularmente las estadounidenses, se mostraban reacias a aceptar los compromisos del Estado con los preceptos constitucionales. Por ello, como señala Valdés:

*En 1927 apareció la Association of Industrial and Comercial Enterprises, principalmente de mineros con un solo miembro petrolero: El Aguila. Esta organización surgió al calor de la disputa en torno a la Ley Federal del Trabajo que por entonces se discutía y que dio también lugar a la formación de una organización de empresarios nacionales: la Coparmex (Valdés, 1996: 192).*

Como es obvio, las empresas extranjeras en México se oponían a las tendencias legalistas que argumentaban las elites burocráticas para implementar las políticas requeridas en la construcción de un sistema social soberano. Dado que la soberanía

---

<sup>4</sup> "La importancia de las Cámaras de Comercio", en *El Comercio*, año 1, enero, 1923. (Collado, 1996: 136).

nacional preconcebida en la Constitución establecía el derecho de propiedad del subsuelo, hacía esperar el desplazamiento de las empresas extranjeras dedicadas a la explotación petrolera y minera. Es decir, la exclusión de las empresas mexicanas en las actividades más productivas de la economía nacional. En ese sentido, propiciar el Estado de Derecho, el hacer valer la Constitución de 1917, implicaba afectar los intereses de los inversionistas extranjeros. Esta posición coincidía, de manera general, con la defensa que en el empresariado nacional anteponía a toda acción gubernamental que atentara contra la propiedad privada, sin importar si estaba en manos de propietarios nacionales o extranjeros. El objetivo de esta dupla apuntaba a generar una ideología anticomunista que en sus excesos y críticas exhibía al Estado mexicano como un gobierno de posiciones antagónicas a la de las empresas (Aguilar Camín y Meyer, 1989).

Por otra parte, para aligerar la política del gobierno mexicano y resguardar sus intereses económicos, la acción de los inversionistas norteamericanos era, en principio, demandar el arbitraje de la representación del gobierno estadounidense e incitar a los grupos nacionales para que se levantaran contra su propio gobierno. *Desde luego, la posición fue respaldada en muchas ocasiones por los empresarios mexicanos más acaudalados, lo que nuevamente permitía definir un mapa político donde el gobierno se ubicaba a la izquierda y las clases empresariales a la derecha.* Y si la burocracia política promovía un *proyecto nacionalista*, secundado por las clases trabajadoras, los empresarios nacionales, muchas de las veces daban forma a posiciones *antinacionalistas*. Como señala Valdés:

*Las sanciones y las amenazas por parte del gobierno norteamericano fueron costumbre al uso para neutralizar o contrarrestar disposiciones gubernamentales contrarias al capital extranjero. En algunos casos, el sabotaje a las acciones del gobierno incluía las negativas a financiar gastos del gobierno mediante el adelanto de impuestos o la suspensión de actividades. Finalmente, la violencia era un procedimiento extremo, si bien poco frecuente, que obedecía a un doble patrón: la incitación al gobierno norteamericano para intervenir militarmente y la incitación a grupos nacionales para levantarse contra el régimen político y favorecer una política distinta hacia el capital extranjero. Esta táctica que había sido usada profusamente durante el periodo armado de la revolución, fue utilizada también posteriormente (Valdés, 1988: 195).*

Como lo sugiere la anterior cita, el gobierno mexicano campeaba entre el fuego de aliados comunes, donde la diferencia era el origen de sus capitales y la capacidad para presionar

políticamente. Sin embargo, los empresarios mexicanos sabían que contaban, prácticamente, con los mismos apoyos que sus pares norteamericanos. En la lógica empresarial, no se trataba de una posición *antinacionalista*, sino contrariamente, de una posición que presumía el deber patriótico en la medida que sus intereses de clase representaban, según su propia interpretación, los intereses de la nación. En todo caso, quienes traicionaban al país eran los trabajadores sindicalizados que se dejaban influenciar por las ideas exóticas bolcheviques y los generales revolucionarios que tenían claras tendencias socializantes.

Una de las características fundamentales del desarrollo que impulsaron los gobiernos posrevolucionarios en los años treinta, fue una clara colaboración entre los grupos económicos nacionales, cuya vinculación y fusión dio origen a nuevas empresas que se recrearon en el marco de un modelo económico proteccionista. Esto se refleja, por ejemplo, en el tipo de testimonios como el que esgrimió en esos momentos Manuel Gómez Morín al expresarse sorprendido por las nuevas formas de colaboración empresarial (Hamilton, 1986). Tal proceso de fusión de capitales era lo que dio origen desde los veinte, al nuevo sistema bancario y a las compañías de seguros que comenzaron a surgir desde entonces.

Los saldos en el periodo posrevolucionario de los años veinte comprueban cómo lo que estuvo en juego en el conflicto armado de 1910, no era precisamente la creación de una nueva estructura de poder que permitiera el flujo entre las elites, tampoco se trató del cambio de una elite por otra, sino como dice Valdés, *de un proceso de fusión entre las elites* (Valdés, 1988: 199). Se trata de un nuevo pacto económico, político y militar en el cual se fijan nuevas reglas del juego de poder, desde donde la riqueza adquiere una forma circular en la cual todos ganan, ya sea asociados en una empresa, por medio de concesiones del gobierno hacia los empresarios, o por las redes de parentesco que fortalecen las redes del poder y garantiza una redistribución de la riqueza en el círculo de las elites.

La corrupción entre la clase política y los empresarios próximos al poder refleja, en los años veinte, para las dos partes, la vía más efectiva para el rápido enriquecimiento. Como señala Valdés:

*El sistema estatal de intervención en la economía imaginado por Gómez Morín y otros como la forma más adecuada de civilizar a la Revolución encauzándola por el buen camino de una patria capaz de cobijar decorosamente a sus hijos, se vuelve un*

*semillero de nuevos pactos económicos, políticos y familiares, cuyo eje central no pudo jamás dejar de ser la empresa y el capital extranjero* (Valdés, 1988: 199).

El poder sentó sus bases, desde entonces, en una peculiar relación entre la política y la economía, ya que los empresarios quedaban, aparentemente, *fuera de la política formal* del sistema político que comenzó a adquirir forma a principios de los años veinte.

En esa coyuntura de imbricación de los intereses de la clase política y los capitalistas nacionales y extranjeros, la CROM, bajo el liderazgo de Morones, crea el *Partido Laborista Mexicano*, con una clara intención de influir en el escenario político. Iniciativa que no tiene el éxito esperado pues el gobierno mexicano anula la posibilidad al provocar una coyuntura favorable a las posiciones políticas más conservadoras de las fuerzas revolucionarias. Es el momento del asesinato de Obregón y el ascenso de un civil a la presidencia, evento que significa el predominio de Calles, quien inicia un periodo de gran influencia política conocido como el *maximato* (Leal, 1972; Casar, 1988).

Esto no quiere decir que las clases trabajadoras quedaran excluidas del juego político, ya que los líderes revolucionarios en el poder buscaron siempre la forma de legitimar su posición a través de la clase naciente: la clase obrera, y en general de las clases trabajadoras. Dicha razón explica las iniciativas del gobierno mexicano para incorporar institucionalmente los derechos de los trabajadores. Es el caso de la promoción del art. 123 de la Constitución mexicana que pronto vería sus frutos en la *nueva Ley Federal del Trabajo*, cuyo objetivo fundamental era anteponer la defensa de los intereses de los trabajadores, ante las embestidas heredadas del *porfiriato* en contra del movimiento sindical.

La iniciativa para crear la *Ley Federal del Trabajo* (LFT) provocó malestar y preocupación en el sector empresarial, cuya actitud quedó reflejada en la asamblea nacional que la CONCAMIN celebró en 1929, y estuvo en el origen de la creación de la *Confederación Patronal de la República Mexicana* (COPARMEX) como respuesta a la promoción política y laboral de los sectores trabajadores y a iniciativa de los empresarios de Monterrey, encabezados por Luis G. Sada. Dicha organización se planteaba como objetivo: *agrupar a los patrones, independientemente de su calidad de industriales o comerciantes, con objeto de actuar en forma conjunta como "patrones sindicalizados", y encontrarse en mejores condiciones para enfrentarse a las organizaciones obreras*

(Arriola, 1981: 327). De ahí el carácter beligerante que confirió identidad política a esta organización empresarial y que, por su propio sentido independiente, le otorgó desde entonces un lugar muy especial en la definición de las posturas políticas de ese sector social.

La constitución de la COPARMEX representa la incorporación de un nuevo instrumento político de la clase empresarial, la emergencia de organizaciones de *afiliación voluntaria* que representaba una alternativa a la afiliación de *obligatoriedad legal*. Situación que, en principio, resuelve la crítica que algunos empresarios esgrimían en contra del "servilismo" de las organizaciones empresariales existentes, principalmente, CONCANACO y CONCAMIN, entidades con una representación muy restringida de los intereses de la clase empresarial. Así concretaban el esfuerzo político de crear un organismo de representación desvinculada de las relaciones corporativas que las otras tenían con el gobierno, se trataba de una organización independiente de la influencia gubernamental que garantizaría la defensa irrestricta de sus intereses de clase. En la interpretación de COPARMEX, la LFT estaba completamente a favor de los trabajadores, lo que exigía una lucha política intensa que generara la conciencia en los políticos mexicanos para que los proyectos nacionales garantizaran los intereses de *todas las clases*.

Durante el *maximato* los conflictos con la burguesía y los restos de la oligarquía fueron cada vez más profundos, así lo sugiere el asesinato de Obregón en 1928. De hecho, una de las estrategias de las elites políticas para generar la unidad política requerida fue la creación del *Partido Nacional Revolucionario* (PNR) que agrupó a los principales líderes regionales (Meyer, J., 1997). En la perspectiva de la consolidación del Estado-nación, este suceso representa la convergencia política que requiere la *unidad nacional* y, por tanto, la posibilidad de fortalecer la posición del estado ante cualquier fuerza política, nacional o extranjera. La fundación del *partido oficial* sugiere la superación de un largo periodo de negociaciones al interior de los grupos revolucionarios, de las elites gobernantes con las clases dominantes, nacionales y extranjeras, de la cooptación de las clases subalternas como fuerza social legitimadora y de su integración como ente actuante en el nuevo sistema político mexicano.

Es importante destacar que si los gobiernos de De la Huerta, Obregón y Calles no lograron construir una *unidad política* que garantizara el impulso de un *gobierno soberano*,

también es cierto que hicieron su mejor esfuerzo para desarrollar una estrategia limitativa de la influencia de las grandes empresas extranjeras. Al mismo tiempo que impulsaban el desarrollo económico bajo el control del Estado, propiciando así la formación interna del capital, y por tanto, el desarrollo de la burguesía nacional (Valdés, 1988: 189).

Un indicador sugerente en cuanto a las relaciones del Estado y los empresarios estadounidenses fue la llegada al poder de Plutarco Elías Calles en 1929, pues a diferencia de la carga conflictiva con los gobiernos posrevolucionarios desde Carranza, privilegiaron el desarrollo y, por tanto, la relación con el capital privado, nacional o extranjero. Esto implicó la contención de las demandas salariales de los trabajadores. De hecho, un fenómeno significativo para este nuevo equilibrio entre las fuerzas sociales de nuestro país fue la creación del partido institucional en ese mismo año: el *Partido Nacional de la Revolución Mexicana* (PNRM). Esta institución reflejó la unidad política de los principales líderes regionales, así como el compromiso irrestricto de los sectores trabajadores hacia los intereses generales de la nación. Paradójicamente a lo que podría esperarse, el mismo proyecto de desarrollo del modelo de sustitución de importaciones propició una redefinición de las relaciones entre el Estado y el capital (Córdova, 1972)

### 2.1.3 *Las estructuras equilibrantes de un sistema en consolidación.*

Si bien el movimiento revolucionario había representado la *fuga energética* que dejó a México hundido en el caos, también es cierto que las elites que tomaron el poder hicieron su mejor esfuerzo para estabilizar al sistema político emanado de dicha crisis. Es importante considerar que la reconstrucción de una sociedad implica la construcción de *nuevas estructuras políticas que garanticen la consolidación de un nuevo orden social*. En este caso, los gobiernos posrevolucionarios dieron los primeros pasos para consolidar lo que propiamente podría denominarse como un *Estado-nación*, sobre todo si ello significa alcanzar la *unidad política* que el momento exigía para alejar el riesgo de caer nuevamente en la violencia. Del autoritarismo que caracterizó al largo *régimen porfirista*, habría que crear nuevas formas de ejercer el poder que incipientemente se encontraba en manos de las elites que cosecharon el triunfo de la revolución. De esa manera, los gobiernos de Carranza, De la Huerta, Obregón y el mismo Calles, representan un proceso político que giró entorno

a la decisión de quien en turno ejercía formalmente el poder, de *generar un nuevo pacto político*, que no se tradujera en una acción gubernamental que limitara el ascenso político y económico de los propietarios del capital, ni que hiciera patente su decisión de contener los progresivos embates de las clases trabajadoras que, ya organizadas a través de sindicatos y partidos, reclamaban mayores beneficios por la disciplina mostrada en la forma que se insertaban en las estructura del poder, manteniéndose “respetuosas” de los líderes en turno.

Se trata de un breve periodo en el cual los líderes revolucionarios, los caudillos regionales, enfrentaron los retos de un ambiente radicalmente distinto al que México vivió en momentos pasados. El desafío era demostrar la capacidad del incipiente sistema de poder para adaptarse a un ambiente desconocido en el cual actuaban fuerzas políticas que anteriormente no existían, como era el caso de las organizaciones empresariales y empresariales, una representación diplomática extranjera mucho más decidida que en el pasado para garantizar los intereses de sus inversionistas, una elite política compuesta por personajes que sentían el derecho de participar en niveles cada vez más altos de las estructuras del poder, y el uso cada vez más agresivo de la prensa como instrumento de presión y de manipulación de la opinión pública, como recurso para legitimar sus demandas o posiciones ideológico-políticas (Castro, 1998).

La gran diversidad de fuerzas fluía en un escenario político sometido a la presión que representaba la amenaza de la rebelión, del caos que implica el uso de la violencia, y por tanto que la sociedad como sistema económico, político y social, perdiera el camino andado. En ese sentido, la ideología revolucionaria y los principios constitucionales fueron el origen del *nacionalismo* que más tarde, sobre todo a partir de los años treinta, daría sus frutos y haría posible *la unidad política que requiere un Estado-nación* (Córdova, 1973), lo mismo que las organizaciones corporativas, tanto empresariales como de trabajadores y campesinos, sobre todo estas últimas, fueron el origen de un rasgo más del sistema político en ciernes: el *corporativismo* (Krauze, 1987c; Córdova, 1972; Aguilar Camín y Meyer, 1989; Rodríguez Araujo, 1988). Y el mismo liderazgo político que en caso de la historia contemporánea de México y cuestiones objetivas que tuvieron su efecto desde el preludio de la dictadura porfirista, se conoce como *caudillismo*. Eso explicaría posteriormente la relación del *caudillismo*, *maximato* y *presidencialismo*, y que en la lógica del sistema político mexicano que adquirió forma a partir de los años veinte, explicaría el peculiar

autoritarismo que, en el último de los casos se tradujo en un desequilibrio entre los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial (Carpizo, 2002; Krauze, 1997; Meyer, J., Krauze y Reyes, 1977).

Es decir, se trataba de las primeras estructuras del poder que en mucho explicarían las formas de hacer política en México, pues estos rasgos antes descritos representaban las reglas del juego que todos los actores políticos habrían de respetar, resguardando el ritual de la política que el México “moderno” reprodujo hasta el fin del siglo XX. Como lo sugiere la idea de Balandier respecto a la representación de la teatralidad de la política, del ritual que significa la puesta en escena de una forma aceptada por una sociedad de cómo se representa y se ejerce el poder, la escena política queda perfectamente delineada (Balandier, 1994), y ello explicará, a partir de los significados que una cultura comparte, porque un régimen perdura en el tiempo, porque es estable ante los embates del tiempo y de ambientes constantemente cambiantes.

La *unidad política* que representó la fundación del PNRM, significa la génesis de un mito que se nutría de la herencia revolucionaria, del inicio del mito más significativo de la historia contemporánea de nuestro país, de una ideología que exalta el compromiso del gobierno con su pueblo, al que debe el compromiso de encausar a una nación comprometida con las clases trabajadoras, principales beneficiarias de los frutos de la revolución (Florescano, 2001; Bartra, 1987, 1994; Paz, 1981; Monsiváis, 1994). En ese sentido del mito, la revolución representa la energía que hace posible que una sociedad en crisis como la que atravesó México en la etapa revolucionaria, y en el primer periodo posrevolucionario, de una estabilidad de evidente fragilidad, genere las estructuras que en adelante sí representarán una estabilidad real, a prueba de intereses regionales. Una estructura impone la imagen del Estado-nación, y que en boca del máximo nivel de autoridad de la burocracia política evoca al pasado revolucionario comprometiendo a todos los sectores sociales al nuevo orden nacionalista. Este discurso poco a poco irá dando forma a una de las prácticas políticas del Estado mexicano que caracterizó las siete últimas décadas del Siglo XX. Sin un *discurso nacionalista* hubiera sido imposible construir la imagen que se le atribuía a la figura presidencial, no hubiera sido posible establecer la vinculación entre el Estado y el pueblo de México, y por ende, el populismo derivado de ello tampoco constituiría un emblema de sistema político mexicano que prevaleció en el

siglo pasado. La historia aparece como un recurso para que los sectores de la sociedad se “disciplinen” ante los máximos símbolos de la nación, y como un referente obligado para legitimar la estancia de la elite revolucionaria en el poder (Florescano, 1980; Monsiváis, 1980; Córdoba, 1980).

Sin embargo, si bien estaban definidos los principales rasgos del sistema político mexicano, si este complejo proceso de reconstrucción de la nación constituyó la expansión de nuevas estructuras de poder que permitieron el flujo de energía que hacía falta, los años treinta representaron un periodo muy importante en el cual, al reproducirse los rituales de la nueva política mexicana, se crearon las estructuras objetivas que permitieron tanto la expansión de las redes sociales, como lo sugiere Adams (1978), como la creación de instituciones y redes de comunicación que permitieron generar la energía necesaria para reproducir materialmente a la sociedad mexicana. Entonces, la definición de una política económica, de un modelo de desarrollo nacionalista, permitió sentar las bases para el despegue de la economía mexicana sobre una lógica propiamente capitalista. En ese periodo se observa cómo toda la energía generada en el proceso de industrialización del país representó la causa por la cual el estado mexicano se fortalece al grado de propiciar que la *burocracia política*, se constituya en la fracción hegemónica del bloque dominante que se instaló en el poder a partir del triunfo de la revolución mexicana.

El gobierno se fortaleció porque, simple y llanamente, controlaba las estructuras creadas por el nuevo régimen de gobierno, tanto las políticas como las económicas, que hacían posible la generación de la energía que el desarrollo capitalista requería para despegar y estabilizarse por largo tiempo.

## **2.2 *La sinergia del sistema político mexicano.***

El desarrollo económico del periodo posrevolucionario se sustentó en la voluntad del gobierno mexicano para generar los elementos mínimos de apoyo a este sector. Tratándose, fundamentalmente, de la política crediticia que tuvo particular importancia en los años treinta, debido a la expansión de las instituciones de crédito público dentro de las cuales destaca Nacional Financiera fundada en 1934 (Aguilar Camín y Meyer, 1989).

Este tipo de sucesos son fundamentales para comprender cuál fue el papel que jugó la *burocracia política* en el desarrollo industrial del país, en un momento en que los industriales mexicanos no tenían la capacidad económica requerida para impulsar dicho proceso. Evidentemente, dicha posición política le concedió al gobierno mexicano la legitimidad que permitió a los líderes políticos posrevolucionarios posicionarse en el lugar hegemónico del bloque dominante. Tal situación se consolidaría en la medida que, como más tarde se vería, el gobierno diversificara y ampliara su política de desarrollo industrial a partir de una estrategia política de exención fiscal, una notable participación directa en la economía y la protección arancelaria que coadyuvó a la formación del mercado nacional.

Cárdenas (1935-1940) creó las condiciones para el desarrollo industrial del México actual, la creación de instituciones financieras fueron fundamentales para el desarrollo y la diversificación de ese sector. Con esos objetivos se fundaron las siguientes instituciones financieras: Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, así como Nacional Financiera en 1934; Banco Nacional de Comercio Exterior en ese mismo año, Banco de Crédito Ejidal en 1935, y Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial en 1937 (Story, 1990: 65). La creación de estas instituciones financieras representó la posibilidad de concretizar las políticas gubernamentales, de donde todos los sectores de la sociedad mexicana salían beneficiadas y, principalmente, la clase empresarial, la cual tendría acceso a los créditos. Visto así, no se puede negar el papel del gobierno mexicano en el desarrollo y la consolidación de las principales clases sociales que dan forma a una sociedad capitalista: los propietarios del capital y las clases trabajadoras (Hamilton, 1983).

En 1936 se expidió la *Ley de Cámaras* y la *Ley de Expropiación* cuyo objetivo central era fortalecer las estructuras corporativas del estado mexicano. La primera pretendía establecer un control institucional sobre las cámaras de *afiliación obligatoria*, mientras la segunda, refrendar el carácter constitucional de las decisiones gubernamentales expropiatorias. Como se puede observar, dos estrategias que afectaban directamente los intereses de la clase empresarial, tanto nacional como extranjera. Pero es visible que la ley de expropiación constituyó una clave fundamental para que en lo sucesivo el Estado mexicano jugara un papel tan importante como el que desempeñó en el terreno económico desde finales de los años cuarenta. Mientras que la *Ley de Cámaras* se perfilaba como un intento del gobierno por aglutinar en una sola cámara empresarial a todos los sectores de

esa clase social, lo que permitiría mayor facilidad para manejarla como "*órgano de consulta para el estado*" (Váldez, 1997).

Esas razones fueron más que suficientes para provocar una reacción unánime por parte del sector empresarial, de tal manera que las protestas no se hicieron esperar por parte de la CONCANACO, la COPARMEX, la CONCAMIN, Asociación de Banqueros de México, la Unión de Propietarios de la Ciudad de México, la Asociación de Empresas Industriales y Comerciales, la Barra de Abogados, y la Asociación Nacional de Almacenistas de Víveres y Similares, entre otros, quienes no esperaron para manifestarse a través de la prensa nacional y de comunicaciones dirigidas a la Cámara de Diputados, a la que presentaron formalmente sus protestas (Juárez, 1984: 55). Pues no solo se trató de la promulgación de leyes que quedaran en calidad de letra muerta, sino de elementos que permitieron la puesta en práctica de un proyecto de nación donde el lugar hegemónico del Estado mexicano posibilitara en los hechos, avanzar a etapas más desarrolladas en el proceso de industrialización. En ese sentido, a partir de la nueva ley de expropiación, Cárdenas pudo llevar a cabo "*...la nacionalización de las primeras industrias en las ramas de ferrocarriles y de petróleo, y también creó importantes empresas públicas, tales como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)*" (Story, 1990: 66).

Paralelamente iba tomando forma el "liberalismo empresarial" que en su expresión más llana representaba la defensa irrestricta de la propiedad privada y la anulación de las demandas de las clases trabajadoras. No era gratuito que los principales problemas con el gobierno de Cárdenas tuvieran como punto de conflicto las reformas laborales, la agraria, la educativa y, fundamentalmente, la intervención directa del Estado en la economía, en la medida que dicha "práctica desleal" atentaba en contra de la iniciativa privada, elemento fundamental del libre mercado.

Evidentemente la reforma agraria en los tiempos de Cárdenas tuvo una importancia vital para estabilizar el sistema político creado a finales de los años veinte, pues los significativos repartos de tierras que su gobierno adjudicó a los pueblos indígenas fueron el antecedente de la incorporación de este sector social a las estructuras corporativas del partido oficial. Tales medidas gubernamentales del gobierno de Cárdenas provocó el encono del empresariado mexicano que, particularmente tuvo un sexenio de fuertes confrontaciones ideológicas contra ese gobierno (Aguilar Camín y Meyer, 1989).

Las posiciones ideológicas entre el Estado mexicano y la clase empresarial mexicana, impidieron a este último sector social reconocer que si bien se incorporaban los intereses básicos de las clases populares, la *burocracia política* garantizaba el avance del capitalismo con un claro intento de transformar el modelo de acumulación, que viraba de un predominio de la producción agrícola al predominio de la producción industrial. Dicho proceso no hubiera tenido efecto sin la participación estatal en la economía ni la precaria participación de las clases trabajadoras en el nuevo patrón de distribución de la riqueza. La polarización de las posiciones ideológicas del empresariado mexicano provocó una confrontación política que tuvo uno de sus puntos más álgidos con Cárdenas. Se olvidaban que las estructuras corporativas mediante las cuales se incorporaba políticamente a los trabajadores, representaban el mejor instrumento de control y manipulación que, en última instancia, favorecía el desarrollo del capitalismo en México y, particularmente, al sistema político que predominaría hasta finales del siglo.

En esa época, la CAMCO enfrentó uno de sus más serios problemas, pues en los dos años anteriores la membresía de esa cámara empresarial disminuyó significativamente, al grado que se planteó su disolución. Tal situación provocó que sus dirigentes aceptaran el ingreso de empresarios mexicanos quienes no tenían derecho a voto ni representación en los cuadros directivos de la organización. Sin embargo, a pesar que en la década de los treinta el principal problema en las relaciones Estado-empresariales fue el de la nacionalización del petróleo en 1938, la CAMCO no participó tan activamente en este conflicto en virtud que no afiliaba a ninguna empresa petrolera, las cuales contaban con su propia organización sectorial: la *Asociación Nacional de Productores del Petróleo*, creada desde 1918 (Ortega, 1986: 325).

Sin embargo, como lo señala Ortega, el conflicto petrolero propició que los diferentes sectores del capital estadounidense asentados en el territorio nacional, intentarían acudir a la CAMCO para tomar una iniciativa general de defensa de los intereses comunes. Esta coyuntura le permite fortalecer su posición en el escenario nacional lo cual se refleja en el incremento de sus miembros, que para el periodo 1939-40 alcanza el doble de lo que tenía al principio de la década, llegando a 430 socios. Esta condición se consolida a partir del escenario internacional que abre la Segunda Guerra Mundial, pues promueve el incremento de las exportaciones de los bienes producidos en la economía nacional.

Evidentemente se trata de productos manufacturados y las materias primas y alimentos requeridos en el exterior, por la economía de guerra que viven los países participantes, pero de productos ajenos a los bienes de capital. Objetivo central que el modelo de sustitución de importaciones no podía romper en ese tiempo, y que el país no termina de resolver en la actualidad.

Uno de los retos que tiene la CAMCO después del conflicto de la nacionalización del petróleo en 1938, es el restituir la imagen de México como una economía pujante que cobija cordialmente a la inversión extranjera. El juego que realiza esta organización estaba, entonces, bajo fuegos cruzados. Por un lado, la defensa de los intereses de la inversión estadounidense y, por tanto, su oposición a las iniciativas gubernamentales que afectaban sus intereses sectoriales; y por otro, a pesar de un escenario conflictivo que atenta directamente con intereses colaterales de sus agremiados, el tener que abrir una campaña favorable para que el capital estadounidense siga fluyendo hacia tierras mexicanas. De este modo, el oficio político que le corresponde a la CAMCO y los intereses que debe hacer coincidir, es lo que determinará, según la coyuntura, la cuota de poder que le corresponde. Su primer reto después de la nacionalización petrolera fue el tender los puentes entre el Estado mexicano y el capital norteamericano. En ese sentido, Ortega señala:

*...en este periodo la CAMCO empieza a asumir el papel de canal de expresión y negociación de la inversión extranjera frente al estado y considera que su primera misión es contribuir a la restauración de las relaciones cordiales entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, bajo el supuesto de que era indispensable la reinaguración de las relaciones cordiales entre ambas naciones para poder atraer capitales (Ortega, 1986: 326).*

Se trata de un escenario histórico-político muy particular, pues las dificultades para darle forma a un proyecto de nación en el que se recuperaron los compromisos contraídos con las clases trabajadoras desde la constitución de 1917, provocó conflictos tanto en la relación gobierno y capital extranjero, como gobierno con capital nacional. De hecho es muy significativo la asociación existente entre la inversión extranjera y los empresarios mexicanos a partir de alianzas políticas para presionar al gobierno en las diferentes coyunturas, donde la burocracia política buscó los contrapesos necesarios para legitimar, en general, tanto sus estrategias de desarrollo como sus políticas sociales.

Por otra parte, las posiciones empresariales respecto a la forma de conducción que

tomaba el liderazgo de la burocracia política, generaba en uno u otro rubro, puntos de desencuentro entre las fracciones de la clase dominante que se reprodujo conforme avanzaba el proceso de desarrollo del modelo industrial. *Los empresarios mexicanos iban instrumentando diferentes estrategias para hacer valer sus protestas y garantizar sus intereses sectoriales, estableciendo todo tipo de alianzas con sectores que compartían su posición política-ideológica, y recurriendo invariablemente a la prensa nacional para influenciar a la opinión pública y legitimar su posición ante el gobierno mexicano.*

En ese contexto es cuando se crea el *Partido Acción Nacional* (PAN), fundado en 1939 en la sede del Banco de Londres y México, cuyo liderazgo lo asumía Manuel Gómez Morín (uno de los *siete sabios*) a quien se le atribuía la participación en varios consejos de administración del sector bancario, lo que permite asociarlo fácilmente al poderoso Grupo Monterrey que a pesar de tratarse de un consorcio industrial ya había extendido su acción económica hasta la actividad financiera. Además de la clara participación empresarial en ese partido de oposición, se veía al PAN como una coalición de fuerzas de corte empresarial y católico, que se oponía a la política de Cárdenas al carácter reformista de su gobierno y al sesgo populista que así permitía caracterizar al Estado mexicano en la década de los cuarenta (Nuncio, 1986: 32).

Las fuerzas conservadoras de la sociedad mexicana daban cuerpo a la *ideología de la derecha*, lo que permitía definir al sistema político mexicano a partir de la presencia de polos opuestos ideológicos, la *derecha* y la *izquierda*. La formación del PAN era expresión de: 1) La corriente católica vinculada a las capas medias y altas de la sociedad, aglutinadas, fundamentalmente, en los grupos *Acción Católica de la Juventud Mexicana* y la *Unión Nacional de Estudiantes Católicos* cuya lucha contra el anticlericalismo de la época lideraba Gómez Morín; 2) La corriente laica que agrupaba a intelectuales y exfuncionarios públicos ligados a Gómez Morín quien como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresó políticamente sus diferencias con el gobierno posrevolucionario en turno; 3) La corriente de dirigentes empresariales y financieros que buscaron mejores instrumentos políticos para defensa de sus intereses particulares de clase.

Nuevamente, se puede observar la generación de una estructura política que, por un lado, representa la convergencia de fuerzas políticas que difieren del sentido que toma la nación, de la forma de ejercer el poder de la *familia revolucionaria*. Este nuevo elemento

nos ofrece un excelente flanco de interpretación respecto de la calidad centrífuga en el *procesamiento de la energía*, pues el poder concentrado en los gobiernos posrevolucionarios se expresa a partir del *control* de una situación social en la que poco a poco se diluye el peligro de la violencia. Se han definido prácticamente las reglas del juego político. Los contendientes que luchan por el poder formal, saben que se incorporan al aparato gubernamental, se vinculan al partido oficial o a cualquiera de sus estructuras corporativas. La oposición deberá de hacer uso de las *organizaciones empresariales* o del partido naciente (PAN) que, en menor o mayor grado, la representa formalmente en las estructuras del poder que dan forma al sistema político posrevolucionario.

La *energía* que requiere todo sistema político está determinada por la disposición de las diferentes fuerzas políticas para aceptar las nuevas reglas definidas hasta el momento. La *legitimidad* adquirida determina la *estabilidad* que le confirió al sistema político la presencia de una elite lo suficientemente poderosa para promover el símbolo del Estado-nación que la misma oposición tuvo que aceptar a regañadientes.

Sin embargo, a pesar del claro espectro social en la composición del PAN, es preciso reconocer que los sectores sociales desplazados por la política estatal que promovía el desarrollo industrial, había sido muy afectado en sus intereses económicos: las clases terratenientes que sufrieron los efectos de los repartos agrarios, el reformismo y la propia ideología populista. Es por ello que su participación se observa al interior de la corriente católica de clase medias y, aunque en menor medida, clases altas. Pero también es cierto que, en general, en las clases altas también predominaba el catolicismo.

Además, es fundamental recordar que los burócratas arribistas eran más privilegiados por el régimen que los empresarios tradicionales, a quienes normalmente, la *burocracia política* veía como enemigos ideológicos, pues no aceptaban el concepto de nación que se impulsaba en esos años. De hecho, como lo señala Nuncio, el PAN debe ser visto como la culminación de un proceso social de las fuerzas conservadoras que cristalizan su movilización en la década de los años treinta a partir de la creación de dicho partido político. La propia composición del Comité Ejecutivo Nacional y su Consejo Nacional reflejan la importancia de los sectores: grupo de Profesionales e Intelectuales (55.1% en el Comité y 76 y en el Consejo; Banqueros, empresarios, rentistas y Ganaderos (41.4% en el comité y 13% en el consejo); empleados (0% en el Comité y 3.9% en el consejo). Se trata

de un partido en el que las clases medias son mayorías, pero se trata de un sector de profesionistas vinculado y orientado por su vínculo con el capital comercial, industrial y financiero. Es el caso de Gómez Morín quien además, para ese entonces, era propietario de varias acciones bancarias, y de Efraín González Luna, asesor de empresarios del norte del país y uno de los ideólogos más importantes de *Acción Nacional* (Krauze, 1999; Loeza, 1999).

La vinculación entre los empresarios y el PAN adquiere su mejor expresión en el terreno electoral que venía caldeándose progresivamente, cuando la burguesía regiomontana y el Partido Acción Nacional, apoyaron la candidatura del general y empresario Juan Andrew Almazán, tensión que disminuyó al momento en que el PRM postuló como candidato a la presidencia a Manuel Ávila Camacho, quien emulaba las aspiraciones políticas de las fuerzas conservadoras del aparato burocrático al levantarse sobre fuerzas más radicales que promovían al General Francisco Mújica. Sin embargo, en la medida que Almazán acumulaba más fuerzas de las que de su campaña se esperaba, los empresarios regiomontanos retomaron su alianza con la *burocracia política* lo que les redituó, en su momento, un trato más condescendiente por parte de la figura presidencial desde la campaña de Ávila Camacho, quien tomó como base de su posición política la interlocución con el empresariado mexicano. Como se puede observar en uno de los discursos pronunciados en julio de 1939: *...me hago responsable, si mi candidatura triunfa, de que la conducta y los propósitos de las organizaciones sindicales serán un factor de confianza para todas las fuerzas creadoras de la nación* (Contreras, 1980: 153).

Este giro representó la posibilidad que la clase empresarial apreciara los esfuerzos de los gobiernos mexicanos para controlar los diversos problemas que emergían al promover el proceso de industrialización tan deseado por las fracciones más importantes del empresariado nacional. En palabras de Gómez Morín: *...siempre pensamos y sostuvimos que se gobierna desde el gobierno o desde enfrente del gobierno también, si se logra crear una fuerza política suficiente*. Esto comprueba cómo las fuerzas conservadoras de nuestro país veían en la creación de una fuerza opositora, el mejor instrumento para imponer reglas del juego que la *burocracia política* considerara pertinentes para garantizar los intereses económicos de la burguesía nacional (Valdés, 1988: 209).

La articulación de estos instrumentos de presión empresarial (sus cámaras

sectoriales, el PAN y organizaciones sociales de corte conservador) constituyó desde entonces, la mejor ofensiva ideológica de los empresarios en contra de la *burocracia política*. El conflicto del gobierno de Cárdenas con los empresarios regiomontanos que generó la movilización sindical, fue resuelta a partir de las posiciones lógicas del escenario político nacional: *el discurso empresarial y el discurso del gobierno mexicano, particularmente el del presidente de la república*.

A partir de tales recursos salían a relucir las contradicciones del bloque dominante, por su lado, en la voz del propio Cárdenas, se hacía patente la censura del gobierno respecto a los intentos de los empresarios de Nuevo León por formar sindicatos blancos, así como la intención de ese sector social de que el gobierno reprimiera la actividad sindical, demanda muy sentida de los empresarios de esa región. Por su parte, Gómez Morín reiteraba, públicamente, desde su posición de líder del PAN, que lo que pervertía a las organizaciones obreras era una doble cuestión: la penetración del régimen en el seno de esas organizaciones y la de los propios dirigentes sindicales en el régimen, es decir, la estructura y práctica corporativa que daba forma al binomio gobierno-partido (Nuncio, 1986: 55).

Estas disputas por la constitucionalidad de las relaciones que produjo el proceso de industrialización, estuvo acompañado por el conflicto que desató la nacionalización del petróleo en marzo de 1938, y que dejó como secuela la activación política del capital extranjero que se sumaba a la triada PAN-organizaciones empresariales-organizaciones católicas, dando forma a una fuerza ideológica con capacidad para confrontar al gobierno. Situación que maduró hasta generar un contexto propicio para la candidatura de Almazán, quien además de provenir de las propias filas de la burocracia política, ya se había insertado en la actividad empresarial acaparando contratos públicos e invirtiendo en bienes inmuebles urbanos.

Como lo señala Ramírez Rancaño, la revolución también arroja personajes de sus estructuras gubernamentales que pasan de la actividad pública a la empresarial, formando parte, por lo tanto, de la derecha mexicana, es el caso de: 1) *los caudillos que se orientan a las actividades industriales de base moderna (Abelardo L. Rodríguez, Aarón Sáenz)*; 2) *los empresarios agrícolas que de preferencia explotan la tierra bajo normas capitalistas (Gonzalo N. Santos, Aarón Sáenz, Calles, Obregón)*; 3) *los caudillos volcados hacia las actividades de la revolución, que publican y acaparan los contratos públicos (Almazán)*; 4)

los empresarios de los servicios tales como los hoteles y en ciertos casos, en forma bastante liberal y abusiva, del juego, los casinos y la consiguiente explotación de la prostitución (Pani, Juan R. Platt, Abelardo L. Rodríguez, Almazán); 5) los caudillos que se convierten en empresarios madereros par aprovechar las riquezas forestales del país (Melchor Ortega, Abelardo L. Rodríguez); 6) los empresarios que tienen su base de acción y de acumulación de capitales en los bienes urbanos. En forma genérica fraccionamientos, compra y venta de casas, renta de inmuebles, etcétera (Morones, Almazán, Pani); 7) caudillos convertidos en impulsores de la naciente industria cinematográfica (Abelardo L. Rodríguez, Pani, Aarón Sáenz); 8) caudillos que invaden el mundo de las finanzas (Abelardo L. Rodríguez, Pani, Juan R, Platt) (Ramírez Rancaño, 1982: 283).

Los problemas más significativos entre los empresarios y el gobierno mexicano fueron, en la época de Cárdenas, aquellos que de alguna manera transgredían los intereses del capital, por ello la reforma agraria y la expropiación petrolera de 1938 fueron tomados como bandera de la lucha política de los empresarios. Sin embargo, es importante reconocer que el tono *socializante* del gobierno de Cárdenas, así como la progresiva incorporación de los trabajadores a las estructuras del partido de estado provocaba, de forma general, una actitud de protesta empresarial que invariablemente registraba la prensa nacional, a través de inserciones pagadas o de notas periodísticas. Entonces sí, se diferenciaron de manera muy nítida la *ideología nacionalista del Estado mexicano*, por un lado, y *una ideología conservadora, y en muchas ocasiones antigubernamental, por otro*. La ideología de *izquierda* y de *derecha* daba forma a un escenario político visiblemente polarizado.

Esta característica del sistema político mexicano reflejaba la profunda vinculación entre política y economía, sobre todo de los beneficios económicos que deja la participación política, cuando se resulta vencedor de la contienda. No obstante, la conversión de políticos a empresarios representó la posibilidad de presentar un frente empresarial más heterogéneo, y por tanto, con menor consistencia política para oponer resistencia a las directrices definidas por la *burocracia política*. Evidentemente, la corrupción provocada por la vinculación y los “nuevos empresarios” coadyuvó más tarde, a la promoción de inversiones conjuntas, de capital estatal y el capital privado nacional.

La presencia de los “nuevos empresarios” se sumaba a la contracorriente que servía

para procesar la *energía* requerida para impulsar el proceso de industrialización, y más tarde permitiría consolidar un sector empresarial de carácter “nacionalista”. De tal manera que no todo el sector empresarial aparecía ante la opinión pública como antagónico del gobierno. De hecho, adquirió forma un sector empresarial que en la medida que se beneficiaba abiertamente del proyecto impulsado por el gobierno mexicano, legitimaba una parte importante de las acciones gubernamentales, que siempre obtenían el respaldo de las clases trabajadoras organizadas corporativamente entorno al *partido oficial*.

Los empresarios nacionales definían sus posiciones políticas a partir de dos facciones: la de los "norteños" o "duros", y la de los "centrales" o "moderados", los primeros representados fundamentalmente por la calidad beligerante de la COPARMEX y, los segundos, por las posiciones nacionalistas que en esos tiempos caracterizaron a la CNIT y que después se transformó en CANACINTRA. Sin embargo, es importante señalar que las fuerzas reaccionarias actuaban en contra del sistema resistiendo en todas las trincheras: auspiciando grupos de choque, paros y manifestaciones contra el sindicalismo oficial, y fomentando la formación de grupos y organizaciones políticas, como fue el caso de la creación del Partido Acción Nacional, cuyo objetivo, según su principal líder Gómez Morín, era generar elementos de presión contra un gobierno paternalista que podría desviarse en la construcción de una sociedad democrática. De tal manera que para los años cuarenta, el empresariado mexicano ya contaba con importantes organizaciones sectoriales que le dan presencia en el escenario político mexicano, así como su participación en el PAN, lo que amplía su espectro de influencia en la formación de la opinión pública que utilizará en beneficio de sus posiciones político-ideológicas (Tirado, 1990: 197).

Esta situación explica la lógica de un escenario político que en 1940, ante la víspera de las elecciones presidenciales, registra el discurso de Gómez Morín, quien utilizando su liderazgo dentro del PAN, hacía eco a las críticas que los empresarios esgrimían a partir de las declaraciones de sus principales organizaciones sectoriales en los medios de difusión masiva, censurando las prácticas del gobierno cardenista. La *derecha* actuaba de una manera tan coordinada en el sentido del discurso y el interlocutor al que iban dirigidos los mensajes, que simplemente su presencia adquiriría una posición más cohesionada, empresarios, sus organizaciones y un partido de un fuerte sesgo empresarial era lo que le daba la cobertura política a Almazán, quien emergió como una alternativa que parecía

adquirir relevancia en la coyuntura electoral, dado el apoyo indirecto que representaban las críticas que las fuerzas conservadoras del país presentaban en la prensa: era el caso del problema de la nacionalización del petróleo y la “política socializante” de Cárdenas.

### 2.2.1 *El reflujó del poder: la víspera de una nueva relación empresarios-Estado.*

En los años cuarenta se sentaron en realidad las bases para la expansión de un mercado nacional que fortaleciera el proceso de acumulación basado en la sustitución de importaciones. Se habían desarrollado los sectores urbanos que exige la industrialización, se incremento sensiblemente la educación básica y la inversión social necesaria para garantizar la expansión de los servicios públicos de salud, contexto que se vio favorecido por los efectos económicos que arrojó la Segunda Guerra Mundial.

El proceso de industrialización atraviesa dos grandes periodos que se caracterizan, el primero, 1940-1955, por un alto crecimiento con inflación; el segundo, 1955-1970, por un alto crecimiento industrial sin inflación y con estabilidad cambiaria, lo que facilitó los términos del comercio con los Estados Unidos, principalmente. Sin embargo, dichos esfuerzos no generaron las condiciones necesarias para independizarse de los lazos económicos con el exterior, pues terminada la guerra y de manera simultánea al proceso de industrialización, se incrementó notablemente la inversión norteamericana (Guillen Romo, 1984). Visto así, los grandes ejes que promovieron dicho proceso de acumulación se basaron en la participación directa del estado como inversionista en el sector industrial, el fortalecimiento de grupos industriales nacionales, la creciente inversión extranjera, fundamentalmente norteamericana, y el desarrollo de la mediana, pequeña y micro empresa. Aunque no se puede olvidar que el papel económico del Estado mexicano era fundamental, para generar una nueva óptica de los criterios de redistribución de la riqueza, que fueron dando forma al *Estado benefactor “a la mexicana”*, o que de manera más precisa a la realidad socio-histórica se denominaba como *estado social autoritario* (De la Garza, 1984, 1988) . *Entre 1940 y 1945, la inversión pública en la industria se duplicó, y en los siguientes cinco años se quintuplicó. Del total de la inversión federal, la industria alcanzó en 1955, 39.4%, y en 1965, 41.3% (Cordero, 1983: 27-28).*

Por otra parte se observa el papel que juega el Estado en la periferia de la producción, al utilizar, por ejemplo, los instrumentos necesarios para favorecer el desarrollo de la economía. Es el caso de Nacional Financiera, creada en 1934, que en los años del despegue industrial fomentó a la inversión industrial. Este recurso si bien fue utilizado en muchas ocasiones para garantizar el mantenimiento de la planta de mano de obra, no es menos cierto que jugó a favor de empresariado mexicano, quien al demostrar incapacidad para competir en un mercado cerrado, recurría a dicho instrumento para no arriesgar su capital invertido (Rey Romay, 1984).

De hecho, Nacional Financiera apoyaba sustancialmente la inversión que capitalistas mexicanos hacían con la sociedad de capital extranjero, donde tal apoyo representaba el puntal para tales asociaciones, por lo cual el Estado mexicano quedaba prácticamente como aval, garantizan la presencia mayoritaria de las acciones nacionales sobre las extranjeras. El papel que jugó el estado mexicano como promotor del mercado nacional, particularmente del desarrollo industrial, representaba la energía política, económica y sociocultural que requería la dinámica capitalista (Casar y Péres, 1988). La unidad política que ya supone el Estado mexicano era fundamental para imponer su legitimidad a las fuerzas políticas que cuestionaban a las estructuras del poder. El control que socialmente ejercía la “familia revolucionaria” era la mejor forma de ejercer la política de cara a la sociedad. La fortaleza del estado mexicano pendió del control objetivo de la economía, conforme el gobierno aparecía como propietario de cualquiera de las formas del capital, sumándose a una visión acerca del futuro del país que permitía generar la legitimidad requerida para que la *burocracia política* se mantuviera en el poder, haciéndose cargo de la *posición hegemónica al interior del bloque dominante* (Hamilton, 1983). Las fuerzas opositoras no tenían el poder suficiente para contrarrestar la *energía* pujante de la unidad nacional representada por el binomio estado-partido hegemónico. El símbolo del partido oficial como emblema del consenso nacional, fue determinante para concentrar el poder en la burocracia política, de controlar la energía requerida para impulsar una visión de estado que en la práctica, habría de ser aceptada por toda la sociedad mexicana.

Finalmente, las clases trabajadoras, corporativizadas o no, se veían beneficiadas en su nivel de vida, de la misma forma que los empresarios mexicanos se vieron beneficiados por una política económica de subsidios, que colocaba como objetivo elemental de la

nación a la expansión y diversificación del mercado nacional. Y por ende, el fortalecimiento como clase, tanto de trabajadores como empresarios, a pesar de sus protestas en contra del paternalismo estatal.

Las elecciones presidenciales de 1940 fueron las más disputadas en el periodo posrevolucionario. La figura de Juan Andrew Almazán al frente del *Partido Revolucionario de Unificación Nacional*, representaba una trinchera de indudable fortaleza en contra de la política nacionalista de Cárdenas, cuyas iniciativas venían afectando los intereses del capital extranjero, pero no necesariamente a los intereses del capital nacional. La fuerza fundamental de Almazán radicaba en un contexto político marcado por el conflicto al interior del *bloque dominante* (*burocracia política, partido oficial, empresarios* y el partido naciente, el PAN) así como las presiones de los Estados Unidos por la nacionalización del petróleo en 1938. La postulación de Almazán permitió aglutinar a las principales fuerzas políticas de evidente corte conservador, donde además de los empresarios, se ubicaban notablemente las amorfas clases medias católicas.

El ejercicio “consensual” del poder que caracterizó a Ávila Camacho le valió el sobrenombre de *presidente caballero*. Uno de los fenómenos que propició la disminución del autoritarismo del sistema político mexicano, fue el ascenso del PAN, cuya génesis se explica en los tiempos del rectorado de Gómez Morín en la Universidad Nacional Autónoma de México a finales de los años veinte. Creado en 1939, no fue sino hasta 1943 cuando el PAN participó con cincuenta candidatos a diputados en las elecciones legislativas, cantidad que se elevó para 1946 a ciento diez candidatos (Loeza, 1999).

La propia política conciliadora de ese gobierno favoreció los intereses de los empresarios mexicanos, entre ellos Manuel Suárez, compadre de Ávila Camacho, y Aarón Sáenz, presidente de la *Asociación de Banqueros de México* (ABM), o hasta el propio Almazán propietario del Hotel Papagayo, cerca del aeropuerto de Acapulco. El turismo, la industria editorial, la radio y el cine, fueron actividades que entraron en auge, apadrinados por el entonces secretario de gobernación, Miguel Alemán, quien vio en estas actividades económicas minas de oro para el desarrollo del país y para beneficio propio (Aguilar Camín y Meyer, 1989). Así, cada vez más, la intervención directa del Estado en la economía le permitía aparecer en el mercado como patrón y consumidor, y por tanto, como una de las fuerzas motoras del desarrollo que posibilitó el enriquecimiento legal e ilícito de muchos

personajes tanto de la política como de la iniciativa privada.

A pesar del efecto de las reñidas elecciones a partir de las cuales Ávila Camacho llegaba al poder, su voluntad para impulsar el desarrollo industrial en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, permitieron a su gobierno iniciar un proceso de legitimación. El 23 de mayo de 1942, México entró a la guerra con el pretexto del ataque que los Aliados del Eje hicieron a dos buques petroleros. Sin embargo, como señala Krauze: *La razón de fondo era la consistencia y realismo: continuar la sensata trayectoria nacional del país de los años treinta y apoyar a los Estados Unidos* (Krauze, 1997: 48).

En este contexto, el gobierno de Ávila Camacho convocaba a todas las fuerzas políticas del país para construir la *unidad nacional* que salvaguardara la *estabilidad del sistema*. Después de dar muestras de una actitud conciliadora con las fuerzas conservadoras, al declararse *católico...pero ser católico no es ser clerical, ni fanático*, y congratularse con el clero; así como el acercamiento que su gobierno hizo con uno de los principales líderes del sinarquismo, Salvador Abascal, para apaciguar los rencores heredados del levantamiento cristero. Por otra parte, el 15 de septiembre de 1942 convocó a los principales líderes de la *familia revolucionaria* entre los que destacaron Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, para evocar el compromiso de la *unidad nacional*. Poco a poco se consolidaba uno de los principales símbolos del estado contemporáneo, el ritual de la política moderna del México industrial del siglo XX, adquiriría forma a través de su proyección en los medios de difusión masiva, en aquel tiempo, fundamentalmente, en la radio y la prensa con cobertura nacional. La imagen de la *unidad nacional* impactaba al imaginario colectivo, el cual servía también para explotar políticamente a la figura de la identidad nacional (Bartra, 1994; Semo, 1994; Monsiváis, 1994). Así, todo tipo de actos en los que aparecía la figura del poder ejecutivo, bien se tratara de difundir una política económica, plan o proyecto que apuntalara el modelo de desarrollo económico o el encuentro con organizaciones de trabajadores, evocaban a la *energía política* concentrada en el símbolo que representaba al estado. Y que mejor que la proyección de las posiciones nacionalistas, no solo aquellas que evidenciaban el compromiso de los gobiernos posrevolucionarios con las masas y todo tipo de sector social, sino aquellos actos que colocaban en el escenario político, alentado por los medios de difusión, los intereses nacionales y los del extranjero. Por tal razón, el *nacionalismo* y el *populismo* implícito en

ese manejo ideológico que hace el poder, constituyen unos de los principales rasgos del sistema político mexicano que emergió en el periodo posrevolucionario. El *nacionalismo revolucionario*, sumado al *presidencialismo*, al *partido hegemónico* o de estado, al *corporativismo* y su consabido *populismo*, son la base de la superestructura del sistema político mexicano.

Otra de las estrategias que el gobierno mexicano instrumentó para proteger al mercado interno fue el Decreto de Emergencia del 27 de junio de 1944, el cual exigía un permiso de Relaciones Exteriores para los inversionistas extranjeros que pretendían adquirir empresas nacionales o, simplemente, participar en la creación de nuevas empresas con carácter mixto: capital nacional y capital extranjero. Esta regulación de la inversión extranjera tenía por objetivo salvaguardar los intereses del capital nacional, pero también, el potenciar renglones específicos de la economía. Por tal razón, se crearon grandes empresas con carácter mixto, donde la inversión pública constituyó uno de los eslabones más fuertes del desarrollo. De tal manera que se privilegiaron aquellas actividades económicas de particular importancia para el país, lo que obligó a privilegiar a la inversión nacional como parte mayoritaria en las asociaciones con el capital extranjero.

El papel económico del Estado fue, entonces, el de garantizar la supremacía de la inversión nacional sobre la inversión extranjera, de tal manera que si no existía un inversionista mexicano interesado en participar con inversionistas extranjeros, tendría que ser el Estado el encargado de garantizar: primero, que tuviera efecto la inversión, y segundo, que predominara el capital mexicano, ya fuera privado o público. Como aconteció en el caso de las radiofusas, la industria fílmica, las líneas aéreas, el transporte urbano y carretero, las compañías pesqueras y las empresas de aguas envasadas y de publicidad (Story, 1990: 80).

El Estado benefactor a la mexicana avanzaba a partir de dos claras rutas, la consolidación del modelo de industrialización que en la siguiente década propiciaría el *milagro mexicano*; y una ambiciosa política social que al final del sexenio ya contaba con dos clínicas del IMSS, el Hospital Infantil creado en 1942, el Instituto de Cardiología fundado en 1944, y el Instituto Nacional de Nutrición en 1946, mismos que daban una mejor definición al nuevo sistema de salud y asistencia social (Krauze, 1997: 55)

En virtud del debilitamiento político con el que llegaba Ávila Camacho a la

presidencia de la República (1940-1946), la primera estrategia que se instrumentó para ganar legitimidad fue impulsar la formación de una *Comisión Nacional Tripartita* en la cual participa el gobierno, los empresarios y las clases trabajadoras, para consensar las decisiones más importantes en materia económica. Se trataba, como lo señala Tirado, de promover la hegemonía de la burocracia política en el desarrollo industrial de esos años. El reto de ese gobierno se movía entre la relativa fuerza adquirida por la izquierda mexicana en el sexenio anterior, y la imagen unitaria de la derecha empresarial que respaldó la candidatura de oposición de Almazán (Tirado, 1990: 198). El efecto de tal operación política era vital, primero, para contener la movilización de las clases trabajadoras que ponía en riesgo la alianza con los empresarios, y segundo, fortalecer el proceso de industrialización que no podría madurar sin la participación decidida de ese importante sector de la clase dominante. De tal forma que no sólo se trataba de restar presencia política a la derecha empresarial sino de convencerlos a colaborar coordinadamente con el gobierno mexicano.

La iniciativa gubernamental para formar la comisión tripartita no fue aceptada por los empresarios familiarizados con los "duros", pues desde su interpretación se trataba de una artimaña que los operadores políticos del régimen instrumentaban para disminuir la presencia política de los empresarios, sobre todo porque el nuevo proyecto de la Ley de Cámaras, pretendía la conformación de una nueva cámara afín a los intereses políticos de la burocracia política. De hecho la CNIT que posteriormente se convertiría en CANACINTRA (la cual alcanzaría para 1945, la cobertura de cinco mil miembros, la mitad de los agremiados que correspondían a la CONCAMIN), representó la cobertura de una parte del sector empresarial que confería legitimidad al proyecto de nación de la elite gubernamental, desde el apoyo brindado por un espectro social más amplio que el restringido a las clases trabajadoras.

Si bien el Estado mexicano dio prueba de rectificar el rumbo "socialista" de su proyecto revolucionario, el gobierno de Ávila Camacho también proyectó señales para comprender las necesidades existentes desde el poder, de centralizar las decisiones que si bien se compartían con el sector empresarial, habrían de responder a la perspectiva nacional que supone toda presidencia. Así, sin exponerse a la duda, al tiempo que el gobierno mantenía disciplinadas a las clases trabajadoras, también tomaba cartas sobre el asunto

respecto a su relación interdependiente con las clases empresariales (Aguilar Camín y Meyer, 1989). En 1941, el presidente dio a conocer dos proyectos de Ley: la *Nueva Ley de Cámaras* y la *Ley de la Industria de Transformación*. La primera apuntaba a dividir nuevamente a la industria y al comercio, que fueron fusionadas por iniciativa de Cárdenas; y la segunda, separaba a la industria tradicional de la industria de la transformación, lo que dio origen a la *Confederación Nacional de la Industria de la Transformación* (CNIT), antecedente histórico de CANACINTRA. El espectro adquirió una forma más plural donde, por un lado, se fortalecía el papel de las organizaciones empresariales como *órganos de consulta* para el estado, por otro, se contemplaba la calidad independiente de COPARMEX, al tiempo que se creaba una nueva instancia corporativa que daba voz al espectro de nuevos industriales que surgieron como expresión del proceso de industrialización iniciado en 1940. Este es el origen de los *empresarios nacionalistas* que mantuvieron un nuevo tipo de relación con el Estado mexicano, subsanando muchos de los diferentes conflictos generados por el carácter populista de las decisiones gubernamentales en materia laboral y estrictamente económica, de los gobiernos posrevolucionarios que antecedieron al de Ávila Camacho (Tirado, 1990).

No obstante, la reconstitución de las relaciones gobierno-empresarios, las iniciativas de las clases trabajadoras no dejaron de tensar los vínculos del poder. Es el caso de la propuesta de la CTM en 1942, donde demandaban la conformación de una comisión tripartita que velara por la compensación de los sacrificios obreros, lo que propició como respuesta por la parte empresarial, la creación del *Consejo Nacional Patronal* en ese mismo año, organismo presidido por Arón Sáenz, presidente de la *Asociación de Banqueros de México*. A pesar de ello, la nueva estructura corporativa que daba cuenta de la organización empresarial ofreció en ese momento sus frutos, la CNIT se ofreció a firmar un pacto obrero-industrial con la CTM para proteger a la industria nacional de la avanzada extranjera. Dicha iniciativa se atribuye a Lombardo Toledano que en esa coyuntura pretendía fortalecer el papel político del movimiento obrero, refrendando su carácter nacionalista y por ello, reivindicando su posición anti-empresarial en contra de aquellos sectores que no asumían su compromiso con la nación. La triada nacionalista estaba conformada, el Estado-nación se consolidaba al paso del desarrollo del capitalismo.

En este contexto se reflejaban las contradicciones al interior del empresariado

mexicano, pues así como la CONCAMIN y COPARMEX atacaban a la CNIT por la cobertura que hacía la firma de aquel convenio al movimiento obrero, esa cámara patronal se manifestaba a favor de reconocer el derecho a huelga y la incorporación de los trabajadores al reparto de la riqueza. Mientras que la COPARMEX, organización empresarial más radical contra el gobierno mexicano, pretendía a toda costa restringir los derechos laborales de los trabajadores, así como exigir el reconocimiento de su derecho a participar en los procesos electorales. Se hacía evidente que el papel ideológico-político de la CNIT representaba para el Estado la posibilidad de fortalecer su posición ante el empresariado tradicional, que muchas veces intentó deslegitimar alguna decisión gubernamental. Esto sugiere la recomposición de las fuerzas entre el gobierno mexicano y el empresariado nacional (Valdés, 1988: 217). La oposición empresarial quedaba fracturada a partir de un empresariado dividido políticamente, el papel hegemónico de la *burocracia política* era incuestionable.

Por otra parte, el gobierno de Ávila Camacho realizó sus mejores esfuerzos para establecer una relación más armoniosa con los Estados Unidos, política que permitió restablecer la cooperación económica reeditando a México la obtención de nuevos créditos y una evidente mejoría en la balanza de pagos. Tal situación se vio rápidamente reflejada en el desarrollo industrial del modelo de sustitución de importaciones, con la expansión y crecimiento de importantes empresas tanto privadas como públicas: Altos Hornos de México, Hojalata y Lámina (del Grupo Monterrey), Celulosa y Derivados (también del mismo grupo económico), Industria Eléctrica de México, Sosa de Texcoco, Acros, Guanos y Fertilizantes, Cementos Anáhuac, la Planta Celulosa de Loreto y Peña Pobre, entre otras (Tirado, 1990; Rey Romay, 1984). Este auge económico propició una nueva correlación de fuerzas entre la *burocracia política* y las elites empresariales, que vieron un desplazamiento hacia la derecha de todos los espacios ideológico-culturales. El contexto de la Segunda Guerra Mundial resultó muy favorable para la inversión extranjera que se sumaba promoviendo las ramas más dinámicas de la industrialización, lo que no en pocas ocasiones provocó la quiebra de medianos y pequeños empresarios que no pudieron competir en igualdad de circunstancias con el capital extranjero.

La burocracia política enfrentaba un dilema, el propósito de generar las condiciones internas para garantizar la independencia económica ante el exterior, y la necesidad de abrir

las puertas del sector industrial a la inversión extranjera. Lo primero le exigía una rígida política proteccionista, con efectos contradictorios para el propio desarrollo industrial, y lo segundo, arriesgar el proceso de sustitución de importaciones que sería "resuelto" mediante la presencia del capital extranjero que, finalmente, transferiría las ganancias a su lugar de origen. Por ello, el gobierno mexicano fue abriendo el país, poco a poco, a la inversión extranjera a mediados de los años cuarenta, sobre todo en aquellas áreas que no eran de interés para el capital privado nacional. Esto derivó en una discrecionalidad por parte del gobierno que permitió inversiones extranjeras del 100%, cuando la ley establecía un máximo del 49% con el claro objetivo de garantizar la mayoría del capital nacional, sea privado o público (Guillén Romo, 1984)

Por ello es importante identificar lo que acontecía en el terreno de las estructuras corporativas, desde donde la propia burocracia política también impulsaba su política de articulación al mismo sector empresarial, lo cual generó, obviamente, conflicto en las relaciones entre las elites políticas y las económicas. En ese sentido, es que la creación de la CANACINTRA ha sido interpretada como una decisión estratégica de la *burocracia política* para fraccionar la posición política del empresariado nacional, ya que ha partir de esta organización empresarial se construyen las instancias necesarias para que sectores importantes del capital industrial expresen su respaldo hacia los proyectos de desarrollo impulsados por el Estado, al mismo tiempo que muchas de las empresas que formaron parte de la CANACINTRA se vieron beneficiadas de la nueva relación gobierno-empresarios. Como señala Story:

*“La mayoría de las nuevas empresas ha exagerado el papel que el Estado desempeñó en los años formativos de la Canacintra, pero lo cierto es que las 93 empresas que integraban originalmente la Cámara fueron apoyadas y resultaron beneficiadas por el nuevo compromiso del Estado de promover la sustitución de importaciones”* (Story, 1990: 121).

Esta situación provoca, precisamente, que los sectores empresariales que presentaban una actitud crítica ante el gobierno mexicano, vieran a los empresarios organizados entorno a la CANACINTRA como un sector aliado a la causa de la *burocracia política*. Condición que podía refrendar las opiniones de las organizaciones empresariales, pues CANACINTRA expresaba, desde sus principios, *una actitud y posición política empresarial de evidente carácter nacionalista*. Eso mismo permitió reconocer que la

burguesía nacional estaba fraccionada dadas las concepciones diferenciadas sobre el proyecto de nación impulsado por la burocracia política, e intereses concretos que unos veían concretarse en la política de desarrollo industrial.

En ese mismo año de 1941, la primera delegación norteamericana que llega al país para promover relaciones comerciales a partir de los excedentes de las exportaciones mexicanas, toma contacto con la CAMCO demandándole su asesoría en la elaboración y negociación del tratado. De esa forma, esa organización se va tornando rápidamente en un intermediario obligado para el capital estadounidense interesado en invertir en México, o viceversa, para los empresarios mexicanos interesados en exportar a los Estados Unidos. Esto le daba un nuevo giro a la presencia de la CAMCO, pues a partir de la función que comienza a desempeñar particularmente desde los cuarenta, es que estamos en condiciones de explicar el tipo de vinculación económico-política del capital estadounidense y ciertos sectores del capital nacional, fundamentalmente el de los grandes empresarios mexicanos.

Por otra parte, es importante destacar cómo a partir de las nuevas relaciones entre México y Estados Unidos, la presencia e influencia de los intereses estadounidenses comienzan a tomar un espectro mucho más amplio, por ejemplo, la inauguración en 1942 de la *Biblioteca Benjamín Franklin* que la CAMCO promovió con el financiamiento de Nelson Rockefeller o la creación con su propio patrocinio, del *Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales*. Esto refleja no solamente la presencia formal de capital estadounidense, sino la intención de diversificarla llevándola a los ámbitos ideológico-culturales que se favorecen con las relaciones bilaterales (Ortega, 1986).

La suerte estaba echada y las posiciones empresariales, hasta cierto punto antagónicas, tuvieron en este escenario el mejor caldo de cultivo para definir las posiciones de las principales organizaciones empresariales: es el caso de la CONCAMIN, que en 1943 presidía un expresidente de la CANACINTRA, la cual vio la pertinencia de destacar su posición *nacionalista y antimperialista* explicada a partir de la presencia del capital extranjero que ya había generado estragos, y por tanto ponía en riesgo a la inversión de mediano y pequeño calibre de los empresarios nacionales. No es gratuito que en 1945, con efecto de la celebración de la *Conferencia Panamericana de Chapultepec*, el nuevo grupo de empresarios que ahora dirigía la CANACINTRA y la CONCAMIN se manifestará en contra del *Plan Clayton* contenido en la propuesta original de la *Carta Económica de las*

Américas, presentadas por los inversionistas estadounidense. En esa ocasión, con el liderazgo de la industria nacional la *Canacintra* se declaró entonces ruidosamente en contra del liberalismo, contra la operación de los trusts expansionistas y a favor del derecho de los países atrasados a luchar por su industrialización poniendo las barreras proteccionistas que fuesen necesarias.<sup>5</sup> Actitud avalada por el sector obrero, a través de Vicente Lombardo Toledano, quien encabezaba a la CTM y a la Conferencia de Trabajadores de América Latina. Esta situación reflejaba la iniciativa gubernamental para encausar la alianza entre las clases trabajadoras y aquella fracción de la burguesía nacionalista. Dicho pacto se cristalizaría en abril de 1945 con la firma del *Pacto Obrero Industrial* entre aquel líder obrero, y el líder empresarial, José Domingo Lavín, presidente de la CONCAMIN. En ese documento se exaltaba el compromiso patriótico de ese sector de industriales progresistas y los obreros mexicanos, quienes aliados se dispusieron a promover la defensa de la soberanía nacional. Estas nuevas condiciones del sistema político mexicano dejaban muy claro que los principales actores sociales tenían que hacer uso de los medios de difusión masiva, pues sin ellos carecerían de una posición sólida para influir en la *opinión pública*. Cada vez se hacía más evidente que la reproducción de la política moderna requería de la capacidad difusora de los medios de comunicación.

Al finalizar el sexenio de Ávila Camacho en 1946, el partido oficial estrenaba membrete, dejaba de nombrarse PRM y en lo sucesivo se denomina *Partido Revolucionario Institucional* (PRI), señal política que además, reflejaba un giro en la forma en que venía adquiriendo la *familia revolucionaria*, dejando atrás la herencia militar que necesariamente colocaba en el máximo nivel político a un personaje de ese sector, abriendo así las puertas del poder a los civiles.

Las condiciones políticas y sociales que dejaba el sexenio de Ávila Camacho permitieron un tranquilo arribo al poder de Miguel Alemán (1946-1952), personaje de la *familia revolucionaria* que se educó en la universidad al fragor del complejo proceso posrevolucionario de los años veinte, bajo la tutela de Gómez Morín, Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Alberto Vázquez del Mercado y Daniel Cosío Villegas, entre otros; y que sin embargo no lo comprometió con un manejo ético del poder, sino que su peculiar pragmatismo le valió el mote de *presidente empresario* (Krauze, 1997, 1999).

---

<sup>5</sup> Excélsior, 22 de febrero de 1945 (Tirado, 1990: 208).

Quizás lo más significativo de su personalidad y la forma en que ejerció el poder favoreciendo a sus amistades con los negocios que abría la inversión estatal y la política general de desarrollo industrial, esté marcado por el tipo de negocios que él y sus amigos hicieron al calor del sexenio de Ávila Camacho. Todas las influencias heredadas en su carácter de miembro de la “familia revolucionaria” le valieron importantes decisiones desde el poder, que le permitieron acceder fácilmente a importantes propiedades en las principales zonas urbanas de consagrado abolengo, como son las propiedades que obtuvo en las inmediaciones del Castillo de Chapultepec y lo que hoy es Ciudad Satélite, que atinadamente eligió a partir de su actividad profesional de abogado. Esta cobertura económica es la que después le permitió dedicarse por completo a la política.

El pragmatismo de Alemán lo condujo en primer instancia, a favorecer su círculo más cercano, posicionando a sus allegados en funciones públicas y los negocios cercanos al poder. Como señala Krauze:

*Les tocó la colación completa. Los sonorenses y Cárdenas habían compuesto sus gabinetes con una proporción alta de personas de clase humilde. Con Alemán la gente de clase media y alta desplazó por entero a la clase baja. El reclutamiento de sus amigos y maestros fue, en verdad, impresionante: al menos once de los viejos compañeros de Alemán llegaron a tener altos puestos públicos. Otros amigos no tuvieron puestos sino contratos oficiales y toda suerte de oportunidades, lícitas e ilícitas, para prosperar económicamente... La “amificación” que Andrés Molina Enríquez había ponderado tanto en Porfirio Díaz, reapareció modernizada en el sexenio de Alemán (Krauze, 1997:97).*

El carácter “empresarial” del Estado mexicano que cubría la economía mixta permitió darle nuevos bríos al desarrollo industrial de nuestro país. La inversión total bruta en el campo subió en el sexenio de Alemán un 40% en relación al sexenio de Ávila Camacho. Lo cual posibilitó la modernización de la agricultura, pues se invirtió en los sistemas de riego y se importaron 30 000 tractores con el apoyo de la Fundación Rockefeller; se distribuyeron semillas mejoradas, se profesionalizó el manejo del *Banco de Crédito Agrícola* y se creó en 1947, la compañía estatal de *Guanos y Fertilizantes*, al tiempo que se creaban las comisiones para el desarrollo de la Cuenca del Río Papaloapan y la de Tepalcatepec.

Sin embargo, para ser fiel al pragmatismo empresarial del gobierno de Alemán, se manejó discrecionalmente la Reforma Agraria, lo que permitió a muchos políticos, con sus

propios nombres o prestanombres, acaparar importantes porciones de tierras que se vieron beneficiadas con créditos e infraestructura en los que el gobierno invertía.

Además, en el terreno de la infraestructura, Alemán fortaleció a la industria eléctrica, energética, de comunicaciones y transportes. El gobierno desarrolló una política de apoyo a las empresas a partir de leyes impositivas, impuestos a la importación, fondos de inversión promovidos desde *Nacional Financiera*, asociación del Estado con empresarios que no contaban con los suficientes recursos económicos para consolidarse en una rama económica, principalmente la industrial, y particularmente la siderúrgica. Entonces, la industria creció en un 7.2% anual. Como señala Krause:

*La política de sustitución de importaciones tomó carta de naturalización ¡hasta surgió la fábrica de refrescos Jarritos para competir con la Coca-Cola! Muchas de las empresas importantes del país se fundaron entonces: Condumex (Conductores eléctricos), ICA (la mayor constructora del país), Telesistema Mexicano, Industrias Ruiz Galindo, Industrias Resistol, Industrias Nacobre. La inversión extranjera (norteamericana sobre todo) fluyó hacia diversas áreas: se abrieron fábricas textiles, huleras, químicas. Aunque la industrialización alemanista privilegiaba a la provincia. Se crearon empresas como TAMSA en Veracruz (fabricantes de tubos de acero), Sosa de Texcoco, Celulosa de Chihuahua (Krauze, 1997: 101).*

También la industria de la construcción tuvo su auge, lo mismo que las comunicaciones, donde destacaron la construcción de carreteras que permitieron el desarrollo turístico lo mismo que el fortalecimiento del mercado nacional. Desde luego, la misma fisonomía de la capital se transformó, haciendo más representativa la entrada de México a la modernidad.

El pragmatismo empresarial que caracterizó a la gestión de Miguel Alemán consolidó la forma del circuito de poder que permitía a las elites pasar de la política a los negocios, y viceversa. Las leyes no escritas del sistema político mexicano cubrían a los presidentes salientes de sus excesos de autoridad y de la impunidad que les garantizaba el haber designado al *elegido* que por un sexenio se posicionaría en la cumbre del poder omnipotente. Al grado que, prácticamente, cualquiera de los altos funcionarios que terminaban el periodo de gestión correspondiente, accedía a las prebendas necesarias para garantizar su futuro, *bien como político retirado, bien como nuevo empresario*. Como fue el caso de Obregón y Calles, quienes se volvieron hacendados y empresarios agrícolas. De igual forma, los empresarios allegados al poder jugaban en los dos espacios. En calidad de

propietarios de empresas beneficiadas por las políticas gubernamentales que, en no pocas ocasiones, brindaron discrecionalmente jugosos contratos a empresas que a partir de ahí iniciaban una ruta de prosperidad. O el caso de aquellos empresarios que envueltos en las redes del poder se incorporaban como funcionarios en los gobiernos de cada sexenio (Valdés, 1988, 1997). Como ya se señalaba, el gobierno de Miguel Alemán fue ejemplar en ese sentido, en relación a lo mostrado hasta entonces en el periodo posrevolucionario.

A pesar de que Alemán representó una afrenta que el sistema político mexicano hacía a los sectores militares, por propia mano de uno de ellos mismos, el primer presidente civil posrevolucionario también ejerció una estrategia de reconocimiento y atracción sobre este importante sector. En 1947 creó el *Banco del Ejército y la Armada*, al tiempo que mantenía una férrea política sobre los principales movimientos sindicales, como fue el caso de la requisita en contra de los trabajadores petroleros un año atrás. La presión en contra del partido oficial provocó el distanciamiento del sindicato de telefonistas, petroleros, telegráficos, mineros, tranviarios, electricistas, ferrocarrileros y obreros del cemento (Casar, 1988; De la Garza, 1989).

La propia estrategia política de Alemán, en el sentido de evidente acercamiento al sector empresarial sobre el que fundamentó el desarrollo industrial en su sexenio, así como la disciplina a la que sometió al movimiento sindical, propició que los propios empresarios se cuestionaran respecto a la posición radical que importantes grupos de ese sector social guardaban contra el Estado mexicano. Como lo señala Krauze:

*... los empresarios del alemanismo sabían que su gran cliente, a veces su único cliente, era el gobierno ¿Qué sentido tenía hacer política de oposición contra el régimen que había llevado la Revolución a las empresas, o mejor aún, que había hecho de la Revolución una gigantesca empresa de promoción industrial y control político? Ningún sentido (Krauze, 1997: 144).*

El fin de la guerra planteó nuevas condiciones políticas, donde la misma relación con los Estados Unidos propició un nuevo escenario político en el que desde el poder empresarial, sobre todo el representativo del gran capital articulado a la inversión norteamericana, favoreció la *exaltación del lenguaje anticomunista*. Esto coadyuvó al fortalecimiento ideológico de las fuerzas conservadoras del país que recriminaron permanentemente toda inclinación del gobierno mexicano a recurrir ideológica o pragmáticamente al populismo que caracterizó al sistema político posrevolucionario. Esta

situación legitimó la represión de todo tipo de movimiento social que demandara mayores prebendas para la causa de las clases trabajadoras. La Doctrina Truman adquirió materialidad en un contienda ideológica que combatía en todas las posiciones cualquier posibilidad que se abría a la "amenaza roja", y dio origen a los *Tratados de Asistencia Recíproca* y a la propia constitución de la *Organización de los Estados Americanos* en 1947.

Las contradicciones no se hicieron esperar entre un modelo de desarrollo protegido que pretendía, según el ideal posrevolucionario, revertir la condición de dependencia económica del país, y la presión desde el exterior para que el mercado nacional se abriera totalmente a la competencia del mercado. De tal manera que las presiones contra las barreras proteccionistas se vertieron desde las posiciones estratégicas del capital financiero internacional, hasta los grandes capitales extranjeros y nacionales que ya habían sembrado sus intereses en el país.

El panorama era claro también dentro del sistema político, pues la presencia del PAN, le concedía una mejor cobertura de acción a los empresarios mexicanos que no convergían con el proyecto de nación al que iba dando forma el gobierno mexicano. Como lo señala Nuncio:

*Acción Nacional, en manos de Manuel Gómez Morín, se convirtió en un partido que recogía ciertos presupuestos de la doctrina social de la Iglesia, pero actuaba en la práctica con la lógica de una burguesía combativa en la defensa de sus intereses y conformable si -y sólo si- percibía su satisfacción.*

*Como Lombardo Toledano, su oponente, Gómez Morín era un hombre de Estado. Los partidos que ambos dirigieron (de igual caudillesca manera y con los mismos títulos personales de Sabio y Maestro), desde la izquierda uno y el otro desde la derecha, jamás, en su condición de opositores, transgredieron la racionalidad del régimen vigente, la táctica de ambos fue la presión y el método de la negociación. Su vocación, el centralismo (Nuncio, 1986: 42).*

La decidida participación de la CANACINTRA en el escenario político nacional a través del discurso que insertaba en la prensa, provocó por parte de COPARMEX y CONCANACO, organizaciones empresariales donde predominaban los capitalistas del norte del país, la recriminación tajante del papel que había desempeñado Lavín, en la maniobra política que favorecía la posición gubernamental. Por tal razón fue acusado de *procomunista*, ingenuo e impostor, en esa ocasión esas organizaciones aprovecharon la

ocasión para reiterar el carácter liberal del sector empresarial y, en consecuencia, su repudio hacia el socialismo, la lucha de clases, la ideología marxista de los líderes obreros, el derecho a la huelga, etcétera.

De hecho, los conflictos entre las posiciones de *los empresarios del norte* y *los empresarios nacionalistas*, fueron recreados al interior de la CONCAMIN, pues ante el intento de los dirigentes de la CANACINTRA para apoderarse de la dirigencia de la CONCAMIN, tanto los empresarios de Nuevo León, principalmente, como la COPARMEX y CONCANACO, interfirieron políticamente en la decisión al hacer público su repudio contra los empresarios progresistas encabezados por Lavín. De hecho quien llegó a la presidencia de la CONCAMIN fue Pablo A. Chapa, empresario regiomontano quien representaba a la corriente opositora en la CANACINTRA. Y para 1948, llegaba a liderar a la CONCAMIN el representante de la Cervecería Cuahutémoc (principal empresa del Grupo Garza Sada), Guillermo Guajardo Davis, lo que confirmaba la anulación de cualquier posibilidad de influencia de los empresarios "nacionalistas" en las filas de la CONCAMIN.<sup>6</sup> Por otra parte, es fundamental reconocer que los grandes empresarios son quienes han determinado cuáles son los dirigentes en turno de las principales organizaciones sectoriales que representan sus intereses, lo cual permite suponer que dentro de sus programas generales se encuentren contemplados tanto las posiciones política-ideológicas como los intereses económicos del gran capital nacional.

En opinión de Tirado, esto obedecía a que la fracción del capital nacional arraigado en el norte del país, ya se encontraba en una situación económica consolidada, lo que le permitía romper las ligas de dependencia con el poder gubernamental (Tirado, 1990: 212). De tal manera que la capacidad combativa de la fracción norteña a mediados de los años cuarenta no se reducía ya a su posición económica, sino a su presencia y vinculación a intereses políticos muy definidos, como es el caso de la estrecha relación guardada con el PAN, situación reflejada en la candidatura a diputado federal por ese partido, del dirigente empresarial y banquero regiomontano Antonio L. Rodríguez, uno de los primeros cuatro diputados federales con que contó dicho partido. Además de la militancia del gerente de

---

<sup>6</sup> "Y en 1950, a tono con los nuevos tiempos, llega a la presidencia de la CONCAMIN Edmundo J. Phelan, antiguo empleado de la llantera norteamericana B.F. Goodrich Company y desde 1933 alto ejecutivo de la compañía Hulera Euzkadi. Esta era a su vez, producto de la fusión de un empresa nacional y la subsidiaria de Goodrich en México, vinculada también a través de coinversiones con el consorcio Garza Sada y en la que el grupo estadounidense tenía una participación muy importante". (Tirado, 1990: 216).

COPARMEX, Isaac Guzmán Valdivia, miembro fundador de la Unión Nacional Sinarquista. Tirado agrega:

*El mismo tipo de vínculo se mostró en el apoyo que empresarios de Guanajuato, Nuevo León y la dirigencia de la CONCANACO prestaron a los que designó como "mártires de León", a raíz de actos en que perdieron la vida más de treinta sinarquistas en esa ciudad del Bajío en enero de 1946, a resultas de lo cual acabó cayendo un gobernador. Asimismo, en Monterrey en febrero de 1946 era señalada la Liga de Contribuyentes y Usuarios de Servicios Públicos de Nuevo León que alentaban a los empresarios locales encabezados por el grupo Garza Sada quienes pretendían obtener el manejo político de la entidad (Tirado, 1990: 213).*

Este era el panorama que heredaría el gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952), quien al llegar como primer gobierno civil desde el gobierno de Madero, representó el arribo al poder de abogados y connotados empresarios, obstinados en la continuidad del proceso industrialización que ante las evidencias empíricas desarrollaba el mercado vinculado a la economía estadounidense. No es gratuito que desde el inicio de ese gobierno, se observara la inclinación de Alemán a *disminuir el papel económico del estado mexicano*, una *mayor participación extranjera* y una *limitación de las demandas de los trabajadores*, fundamentalmente las referentes a las demandas salariales. Lo que representó una evidente amenaza al populismo de los gobiernos anteriores, al tiempo que se hacía evidente la articulación de la política gubernamental con los intereses empresariales.

En ese mismo sentido es conveniente destacar que como expresión de la nueva racionalidad "liberal" del gobierno mexicano y la "armonía" empresarial que prevalecía en el entorno, se observó cómo, al menos la CONCAMIN estuvo presidida por empresarios vinculados a las industrias de participación estadounidense e inversiones del consorcio Garza Sada. Esta situación que confirma el desarrollo de mayores instrumentos de participación política a disposición del gran capital nacional, en ese caso, principalmente, de los grandes empresarios regiomontanos quienes más tarde cuestionarían la hegemonía ejercida por la burocracia política.

De esa forma, los grandes empresarios mexicanos mantenían una rígida actitud en contra de las políticas gubernamentales referentes al intervencionismo estatal y el incremento de la prebendas de los trabajadores en materia laboral y salarial. Esto se hizo patente en 1948 cuando la CONCAMIN formuló la *Declaración de Principios de Acción Social de la Confederación de Cámaras Industriales*, donde destacaba: *"El respeto de los*

*derechos de la persona humana, la garantía de la libertad individual, la fuerza creadora de la iniciativa privada y la bondad de la libre empresa, son...esencia del pensamiento de los industriales mexicanos" (Tirado, 1990: 217).*

Esto ya apuntaba claramente a una posición liberal que toma como centro de su ideología, el valor de los derechos de la *iniciativa privada*, anteponiéndose a la ideología nacionalista que legitimó en años anteriores las decisiones de nacionalizar empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales. La CONCAMIN trataba de deslindarse de las posiciones nacionalistas gubernamentales, retractándose de cuando firmó el Pacto Obrero Industrial en 1945, aprovechando el apoyo que requería el consorcio regiomontano de los Garza Sada, que enfrentaba nuevamente un conflicto con el movimiento sindical corporativo, lo que sirvió como pretexto para refrendar su cuestionamiento a las revisiones salariales.

Por su parte, el gobierno de Miguel Alemán avanzaba en una nueva lógica que pretendía hacer girar al sector empresarial como la principal fuerza del modelo de desarrollo industrial, pero sobre todo, de reivindicar los derechos de la iniciativa privada, lo que explica la causa del freno que se puso a los repartos agrarios, con el supuesto afán de fortalecer la capacidad exportadora del sector agrícola.

En efecto, el *gobierno alemanista* se caracterizó por un marcado antipopulismo (anticomunismo) que sugiere la influencia geopolítica de los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Sin embargo, no se trataba tan sólo de un cambio discursivo por parte de ese gobierno sino de una práctica política de acercamiento con los sectores empresariales, a partir de la cual Alemán cultivó una mejor relación gobierno-empresarios. Es el caso por ejemplo, de la participación directa de empresarios en los órganos de gobierno:

*Las medidas anteriores se acompañaron además del ingreso de un nutrido grupo de empresarios, representantes en general del ala moderada de la facción central, al gabinete presidencial y otras agencias gubernamentales. Fueron ellos, los industriales Antonio Ruiz Galindo, Agustín García López y Antonio Días Lombardo, personeros de la CONCAMIN, que ocuparon las secretarías de Economía, Comunicaciones y Obras Públicas y la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social; el agricultor Nazario Ortiz Garza, que pasó a desempeñarse como secretario de Agricultura, y los banqueros Manuel Gual Vidal y Carlos Novoa, este último incluso, exfundador del PAN, que fungieron como secretario de Educación Pública y director del Banco de México, respectivamente (Tirado, 1990: 219).*

A finales de los años cuarenta, las diferencias entre los empresarios "nacionalistas" y los empresarios del norte se hicieron más evidentes en función de la nueva directriz gubernamental que favorecía al gran capital nacional y estadounidense. La CANACINTRA quedó como reducto de los primeros, mientras que el resto de las principales organizaciones empresariales (COPARMEX, CONCANACO, CONCAMIN y ABM) comenzaron a ejercer su predominio en el escenario político, lo que fructificó la iniciativa de CONCAMIN y ABM, al crear en 1951 el *Comité Mexicano Norteamericano de Hombres de Negocios*.

De hecho las nuevas relaciones entre el estado mexicano y las elites empresariales propiciaron que en las elecciones de 1952, los grandes propietarios del capital se inclinaron por la oferta priísta sobre la oferta panista, que ahora proponía a Gómez Luna como su candidato a la presidencia. Las razones de la decisión empresarial eran muy claras: el régimen había marchado con ese sector social como el elemento más importante del proceso de industrialización; mientras el PAN, que no necesariamente contaba con posibilidades de triunfo, representaba a las corrientes católicas más que a la corriente empresarial de ese partido.

Al inicio del gobierno de Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958) el rasgo fundamental del escenario político era la incertidumbre que provocaba la situación internacional en los inversionistas, aunado a la iniciativa presidencial para reformar el artículo 28 de la Constitución, referente a sancionar el acaparamiento y el monopolio, que se sumó al precedente de sancionar la corrupción del gobierno lo que preocupó todavía más a aquellos inversionistas cuyos negocios estaban relacionados con el sector público. Dicho contexto provocó que los inversionistas enviaran capitales al exterior y mantuvieran su inversión en 1953, al mismo nivel que el año anterior (Aguilar Camín y Meyer, 1989).

El abuso de poder del que en general se acusaba al gobierno *alemanista*, hizo posible que los discursos de Ruiz Cortínez tomaran como blanco permanente en el inicio de su gobierno, a la corrupción y el manejo discrecional de la gestión gubernamental que precedió su mandato. Es por eso que Krause apunta:

*Señalando repetida y admonitoriamente a Alemán con el dedo, empleó palabras graves: "no permitiré que se quebranten los principios revolucionarios ni las leyes que nos rigen... seré inflexible con los servidores públicos que se aparten de la*

*honradez y de la decencia". Algunos testimonios coinciden en que Alemán "odió" desde ese momento "al viejo" (Krauze, 1997: 175).*

Tan exacerbada había sido la discrecionalidad en el sexenio anterior, que Ruiz Cortínez no se permitió el lujo de incorporar a sus amigos al gobierno federal. Pero además abandonó el discurso vanaglorioso de su antecesor, reconociendo en muchas ocasiones que México era un país pobre, donde el 42% de la población era analfabeta, 19 millones de campesinos vivían en la marginación y el 60% de la población recibía apenas la quinta parte del ingreso nacional bruto (Krauze, 1997: 177).

El giro que representaba la gestión de Ruiz Cortínez, en cuanto al combate a la corrupción, sobre todo aquel que disminuyó la cuota de poder de los políticos de viejo cuño y el círculo cercano al presidente, el orden impuesto en las finanzas públicas, así como el control impuesto al movimiento sindical, propició que los empresarios guardaran una actitud de respeto y apoyo hacia el gobierno. Sin embargo, no quiere decir que todos los empresarios mantuvieran la misma posición, como siempre, aquellos que mantenían su posición beligerante encontraban en el PAN el receptáculo desde donde enviar sus críticas, pero sobre todo, el poder económico que les permitía el acceso a la prensa nacional, donde daban proyección a sus posiciones político-ideológicas..

Para 1956, el hecho que Alfonso Ituarte, antiguo miembro de la *Asociación Católica de la Juventud Mexicana*, ocupara la presidencia del PAN que había dejado Gómez Morín, provocó una incapacidad temporal del partido para mantener el apoyo empresarial, dado el marcado rumbo tomado hacia la derecha con un claro tinte católico. No obstante, algunos sectores empresariales se mantuvieron en el PAN para ejercer su posición política hacia el régimen, como es el caso de Luis H. Álvarez, empresario textil que había dirigido la *Cámara de Comercio y Asociación Cívica de Cd. Juárez*, quien lanzó su candidatura en ese año para la gubernatura del Estado de Chihuahua. La sorpresa electoral que aconteció con la alta afluencia a favor de Álvarez y el consabido fraude que instrumentó el sistema, provocó que el candidato empresarial panista organizara una caravana de protesta hacia la ciudad de México, misma que serviría como campaña presidencial, pues en 1957 se lanzaría como candidato del PAN. En aquellas elecciones ese partido obtendría seis diputaciones a nivel federal (Martínez Assad, 1992).

No obstante, el suceso no repercutió negativamente en la imagen austera y eficiente de la gestión de Ruiz Cortínez, lo cual, en todo caso, se sumaba a las buenas jugadas políticas que lo hicieron famoso. De tal manera que, ya elegido su sucesor, el único problema que ensombreció su mandato fue la represión que ejerció sobre el movimiento magisterial de 1958, lo que en última instancia, trajo mayores apoyos del sector empresarial y los sectores conservadores de la sociedad mexicana de esos años.

Al finalizar el sexenio de Ruíz Cortínez el sistema político mexicano se había consolidado como un régimen autoritario que, finalmente, privilegió los intereses de la alta *burocracia política*, el gran capital nacional y extranjero. Avanzado el modelo de industrialización con un mercado protegido por férreas políticas arancelarias, la economía mexicana vivió sus mejores glorias. Era el apogeo del llamado “desarrollo estabilizador”, caracterizado por altos índices de crecimiento con baja inflación: expansión económica y articulación del mercado nacional con el consabido desarrollo de una banca que igual apoyaba a la actividad que comenzaba a predominar, la industrial, y a la actividad que dejaba de ser preponderante, la agricultura, proceso que emergía como un símbolo de la modernidad y que apuntaba a la superación del México rural. Al término de su mandato la deuda externa alcanzaba 64 millones de dólares (Guillén Romo, 1984).

Ni la inflación, el déficit fiscal, el desequilibrio externo y la devaluación, eran problemas económicos suficientes para impedir un crecimiento pujante, en el sexenio de Ruíz Cortines el peso se devaluó de \$ 8.50 por dólar a \$12.50. El “milagro mexicano” tomaba forma, sobre todo al finalizar la segunda Guerra Mundial, y se proyectaba como una de las economías más vigorosas de América Latina. Se dibujaba un futuro prometedor en el terreno económico, aunque también reflejaba la necesidad de la potencia del norte por mantener una política férrea contra el comunismo y, por ende, todos aquellos movimientos sociales que por su propia naturaleza pudiesen enarbolar las banderas de la justicia social y la democracia (De la Garza, 1988).

Es en ese contexto que se recrean los movimientos ferrocarrileros, magisterial, telegrafistas y aviadores, quienes presionaban al sistema autoritario que excluía de la toma de decisiones a las clases trabajadoras. Y que de hecho representan las primeras fracturas de la estructura corporativa del sistema. El ambiente de contienda política entre los principales sectores de una sociedad ya propiamente capitalista, desplegaban sus fuerzas

por ganar a la opinión pública del momento. Mientras el movimiento sindical ejercía su presión del lado de las causas de la izquierda, donde el nacionalismo emergía como la principal bandera, la *burocracia política* utilizaba todas sus herramientas para mantener el orden y disciplinar a las clases trabajadoras. Por su parte, la clase empresarial no escatimaba esfuerzos ni dejaba pasar oportunidad alguna para hacer pública su posición político-ideológica. Como señala Valdés:

*A fines de enero de 1959, apareció un desplegado en los periódicos nacionales firmados por Concanaco, Concamin y Coparmex que exigía la restauración de la "paz social", a la que concebían como la "coordinación entre el capital y el trabajo", acusaba también a los movimientos de crear problemas en el momento en que el país vivía una etapa difícil para su desarrollo económico y apelaba al gobierno para someter al orden a los ferrocarrileros. La Concanaco, por otra parte, calificó de "agitadores comunistas" a los líderes ferrocarrileros y señaló que su acción se debía en parte a la "excesiva tolerancia" del gobierno en materia sindical y le exigía el restablecimiento del orden aun mediante la fuerza. La Concamin, por su parte, señaló que los conflictos se habían convertido en una fuente de "desconfianza" para la inversión y aplaudía la acción del gobierno para "reprimir los actos delictuosos cometidos por los dirigentes obreros del gremio ferrocarrilero".*

*Una vez que el conflicto en ferrocarriles fue sofocado mediante la intervención del ejército, la Asociación de Banqueros de México y la Coparmex manifestaron en un telegrama dirigido al presidente su "absoluta solidaridad con el espíritu de justicia y la finalidad patriótica con que se ha procedido (Valdés, 1988: 224).*

Como lo sugiere esta imagen, las decisiones autoritarias dirigidas a controlar cualquier movimiento de las clases trabajadoras eran públicamente respaldadas por la clase empresarial. La legitimidad de tales medidas (legales o ilegales) dependía en mucho de la difusión de la posición empresarial respecto a cualquier aspecto de la vida política, económica y cultural. Esta acción política expresan la "unidad" contra las influencias. Así que toda acción gubernamental dirigida a contener las demandas y protestas de las clases trabajadoras, adquirirían su legitimación por el apoyo empresarial mostrado en los desplegados de sus principales organizaciones de clase. Para ello era fundamental, entonces, presentar en los medios de difusión masiva la posición consensada de las principales organizaciones empresariales y el gobierno. Así, el discurso político de las clases dominantes se hacía indispensable para moldear a la opinión pública, lo cual permitía la legitimación de las decisiones tomadas en la definición del rumbo del país.

El buen desempeño del gobierno de Ruiz Cortínez y el excelente papel que hizo Adolfo López Mateos al frente de la Secretaría del Trabajo, generó un apoyo casi irrestricto para la candidatura presidencial que resguardaría al régimen en el sexenio 1958-1964. Día con día, después de su postulación, López Mateos recibió la adhesión de todos los sectores de la sociedad mexicana, primero, las diferentes representaciones sindicales, y después de la CONCANACO, CONCAMIN y COPARMEX felicitaron al candidato oficial por su postulación (Krauze, 1997: 219).

Independientemente del clima generalizado de estabilidad política, la lucha sindical desplazada hacia la izquierda ya había alterado al sistema. La huelga ferrocarrilera declarada en 1959 bajo el liderazgo de Vallejo, provocó la reacción del gobierno mexicano que, sin muchos miramientos, optó por la represión del movimiento a nivel nacional. El cese de 10 000 ferrocarrileros provocó que ese sindicato se movilizara tanto que no solamente amenazaba con desbordar el servicio ferroviario, sino sumar la fuerza de los otros sindicatos que ya habían optado por una forma de participación ajena a la fórmula corporativa. De tal manera que las autoridades gubernamentales optaron por encontrar la solución mediante la sofocación del movimiento. El encarcelamiento de 800 ferrocarrileros, entre los que se encontraban los principales líderes sindicales, de los cuales 170 eran identificados, según las autoridades policiales, como agentes comunistas. Esta fue la salida a la crisis del sindicalismo corporativo.

La medida rápidamente encontró el respaldo de los sectores más afectados, por el fortalecimiento político de la izquierda mexicana. Como lo señala Krauze:

*A partir de ese momento, los sindicatos rebeldes que quisieran “calar” al gobierno, sabían a que atenerse. A cada acción o amago de insurgencia correspondería una reacción mayor por parte de las autoridades. El sistema político en coro apoyaba las acciones del gobierno. En la cámara, los diputados repudiaron a los “elementos extranjeros que la dirección sindical mantuvo con ánimo de fortalecer el injusto movimiento que auspiciaba”. El poder judicial guardaba un circunspecto silencio. Los empresarios aprobaban con entusiasmo la medida. La iglesia no abría la boca, pero respiraba con el golpe dado a los enemigos del cristianismo (Krauze, 1997: 235).*

La mano dura empeñada contra los ferrocarrileros no representó una salida coyuntural para controlar al movimiento sindical que se mostraba renuente a las prácticas corporativas. Después siguió el despido masivo de telegrafistas y la represión al

movimiento magisterial en 1960, cuando se dispersó una manifestación del Movimiento Revolucionario del Magisterio, con el uso de la policía montada, granaderos y judiciales.

No obstante, la cara autoritaria del gobierno de López Mateos, su imagen populachera que le redituaba su personalidad sencilla y cercana a las tradiciones del pueblo, su afición por el box y su famosa participación ritual en el día de los voceadores, hicieron de su gestión un sexenio apegado a la herencia revolucionaria. Además de continuar con la instauración del Estado Benefactor, lo cual permitió seguir articulado a la mejora de la calidad de vida de las clases desprotegidas, como por ejemplo, la creación del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, creado en 1959, así como la consolidación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) en 1961, el apoyo a la producción henequenera con la creación de CORDEMEX, así como el amplio reparto de tierras y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, en la conmemoración del 50 aniversario de la Revolución mexicana (Peschard, Tirado y Puga, 1986).

Por otra parte, la efervescencia política que dejaba en el continente el triunfo de la Revolución cubana, tenía claras repercusiones en el escenario político nacional. Los intentos de las fuerzas militares de los Estados Unidos para invadir Playa Girón en 1961, provocó una significativa movilización en nuestro país. No sólo importaba el hecho que Cárdenas, como líder moral de la Revolución mexicana, hubiese intentado viajar a Cuba para participar en la defensa de ese país hermano, sino de la presencia que tuvo en un momento de evidente efervescencia cuando se exaltó el nacionalismo y el espíritu latinoamericano.

No es gratuito que en ese mismo año se hubiese fundado el *Movimiento de Liberación Nacional* (auspiciado por Cárdenas) liderado por Octavio Paz, Heberto Castillo y Alonso Aguilar, quienes guiaron importantes vertientes del pensamiento político crítico. Como contraparte a ese movimiento sociopolítico tenemos la fundación del *Consejo Mexicano de Hombres de Negocios* (CMHN) en ese mismo año, lo cual refleja que la reactivación política a principios de los años sesenta no sólo fue sensible para la izquierda y las fuerzas progresistas del país, sino también para las fuerzas reaccionarias, donde desde siempre, los empresarios han ejercido el liderazgo de dicha corriente (Saldívar, 1980).

El CMHN, es sin duda la organización empresarial más importante, en la medida que aglutina a los empresarios más poderosos del país. Uno de los principales ideólogos de

esta organización fue Juan Sánchez Navarro, quien junto con los empresarios que le siguieron en este esfuerzo, más tarde conformaron también el *Consejo Nacional de la Publicidad*, organismo que reunían a los empresarios de los medios más importantes del país. No obstante, vale la pena recordar que en los propios principios del ideario del CMHN, el organismo asume que no tendrá una función importante en los medios de difusión, papel que dejarán al resto de las organizaciones empresariales como son: CONCAMIN, CONCANACO, CANACINTRA, COPARMEX Y CCE, que se formará hasta 1975 (Ortiz Rivera, 2005).

López Mateos fue un presidente difícil de definir en el terreno de una geografía política que recorre los extremos de izquierda y derecha, pues si bien exaltó los valores de la Revolución mexicana y en ello justificaba la consolidación del *Estado benefactor* “*a la mexicana*”, lo mismo que expropiaba el sector industrial eléctrico, cabe destacar, primero, que las compañías belgas, propietarias de dichas empresas, querían vender sus propiedades (Krauze, 1997: 262), y que además, la política de golpeo al *sindicalismo no corporativo* lo señalaba como un gobernante de mano dura que anteponía el orden predefinido por los gobiernos antecedentes a la libertad de expresión y protesta de las clases trabajadoras. Ello es reflejo del *autoritarismo paternalista* que emergió como un rasgo distintivo del sistema político que se instauró a lo largo del periodo posrevolucionario.

De hecho, sus desplantes hacia la izquierda, necesariamente, provocaban los reclamos y críticas de la *derecha mexicana, que tenía como su mejor vocero a las principales organizaciones empresariales*. Las respuestas en contra de las expropiaciones, el apoyo a la Revolución cubana, las expropiaciones y las recurrencias sobre el compromiso del gobierno con las clases trabajadoras, tuvieron una presencia expedita en los medios de comunicación masiva, fundamentalmente en la prensa nacional. Como es el caso de aquella frase célebre de López Mateos quien definía a su gobierno “*de extrema izquierda dentro de la constitución*”, lo que obligó la intervención del presidente del PRI, el general Alfonso Corona del Rosal, y al Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, quien declaró con el afán de contener las críticas de la iniciativa privada: *se habla de izquierda en cuanto a estar atentos a las necesidades y a los afanes de las grandes mayorías, pues esa era y había sido la esencia de la Revolución mexicana* (Krauze, 1997: 268).

En 1958, el gobierno mexicano nacionalizó los servicios telefónicos, lo cual

permitió que la importante empresa Teléfonos de México, pasara a manos del erario público. En el terreno económico se salvaguardaban las actividades más indispensables para el desarrollo industrial y urbano, pero también, producto de la diversificación económica del Estado, se consolidaron las bases políticas que le permitieron a la “familia revolucionaria” mantenerse en el poder por muchos años. Su relación con importantes sectores de las clases trabajadoras permitió el manejo corporativo de sus principales organizaciones sindicales. Lo mismo en la producción industrial, la agrícola y la de los servicios, la hegemonía de la “familia revolucionaria” era incuestionable, pues simplemente, ya sea de *izquierda* o de *derecha*, con la capacidad política y los recursos económicos necesarios para controlar las fuentes del desarrollo económico, político y cultural, se aseguraba la legitimidad para que una elite perdurara en el poder por largo tiempo.

Por su parte, la iglesia reaccionaba en contra del discurso izquierdista de López Mateos. Su primera gran batalla fue en contra de la introducción del libro único, obligatorio y gratuito a la enseñanza básica a partir de la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito en 1959. Luego en 1961 desató una campaña para difundir los *valores cristianos* en el contexto del intento de invasión a Playa Girón. En mayo de ese año, se reunieron 50 000 personas en la Basílica de Guadalupe donde se manejaba el lema lapidario de “*Cristianismo sí, comunismo no*”. En ese mismo contexto, en el mes de julio, en la ciudad de Puebla, mientras se daban las marchas de apoyo a la Revolución cubana, en las ventanas de las casas aparecían calcomanías con el mismo lema, en un abierto repudio al *ateísmo rojo* (Aguilar Camín y Meyer, 1989).

Más tarde, en el gobierno de Adolfo López Mateos, los conflictos con los empresarios nacionales volvieron a retomar un tono de contienda política-ideológica. La permisibilidad al movimiento obrero, la proximidad del gobierno mexicano y su solidaridad con la revolución cubana así como el discurso "socializante" de ese presidente, provocó temor e incertidumbre en el empresariado mexicano. La COPARMEX, la CONCANACO y la CONCAMIN no guardaban sus respuestas a las coyunturas que permanentemente se abrían en ese sexenio, por ejemplo, cuando López Mateos declaró que *su gobierno era de izquierda dentro de la constitución*, provocando una inmediata reacción por parte de esas organizaciones empresariales, las cuales a nombre del sector social correspondiente

exigieron, a partir de desplegados en la prensa nacional, aclaraciones inmediatas a tal postura presidencial. O también está el caso, cuando en septiembre de 1960, el gobierno mexicano compró las empresas eléctricas, respecto de lo cual la CANACINTRA se manifestaba a favor de la decisión, mientras la CONCAMIN esgrimió sus críticas, pues en su opinión, en lugar de promover la participación de la inversión privada, se fortalecía el carácter "monopólico del gobierno". Dicha medida explica el extrañamiento público que el sector empresarial hacía a las decisiones de ese gobierno, con el famoso desplegado denominado *¿Por cuál camino, señor Presidente?* Donde se planteaba la preocupación del sector por la evidente violación constitucional en la que incurría el gobierno mexicano. Dicho desplegado fue firmado, entre otros prestigiados empresarios, por Juan Sánchez Navarro (Ortiz Rivera, 1997).

El reclamo era muy claro por parte de la COPARMEX, la CONCANACO y la CONCAMIN, organizaciones empresariales que criticaban la nacionalización de la industria eléctrica, la política económica y el gasto público del gobierno, difundían en los medios de comunicación, que el gobierno mexicano avanzaba hacia el socialismo. En esencia se trataba de una crítica dirigida hacia el nacionalismo pregonado por la *burocracia política* y hacia el intervencionismo estatal, que en su lectura dibujaba una práctica desleal por parte del Estado mexicano (Nuncio, 1996: 105). En realidad se trataba de una continuidad en la actitud de las dos partes, después de un relativo acuerdo entre el gobierno y las elites empresariales, se volvía a los momentos de conflicto político-ideológico donde unos asumían una actitud coherente con el compromiso revolucionario del Estado, y los otros censuraban todas las decisiones y acciones tendientes a afectar los intereses del gran capital. Es decir, las iniciativas que afectaban a la propiedad privada y todas las prebendas que se les concedían a las clases trabajadoras.

Por otra parte, es pertinente destacar que en los primeros años del sexenio lopezmateísta la economía mexicana presentó signos de estancamiento, lo que todavía provocó mayores suspicacias sobre las perspectivas del nuevo gobierno. Las políticas gubernamentales fueron interpretadas como signos de decisiones desatinadas que provocarían la crisis de una economía pujante en los últimos quince años. La incertidumbre que provocaba la posición presidencial francamente populista, el contexto de la Guerra Fría y el estancamiento económico, fueron los referentes que explican la iniciativa empresarial

para crear formalmente, el 13 septiembre de 1962, el *Consejo Mexicano de Hombres de Negocios* (CMHN), organización que reúne a los 36 empresarios más importantes del país. Ese mismo día apareció en la prensa nacional un desplegado del *Comité Coordinador de la Iniciativa Privada*, que más tarde se convertiría en el *Consejo Coordinador Empresarial* (CCE).

Independientemente de los desencuentros entre la *burocracia política* y las *elites empresariales*, el hecho que el desarrollo industrial, finalmente, beneficiara a toda la economía mexicana y, particularmente, al gran capital industrial y financiero, la burguesía se retrajo de la práctica política lo que disminuyó el perfil del PAN entre 1949 y 1964 (Nuncio, 1986: 24).

Sin embargo, para 1964, los beneficios de una política económica que en la práctica concreta garantizaba los intereses del capital, al controlar corporativamente a las clases trabajadoras acalladas por la presencia de *la versión mexicana del estado benefactor* que velaba por las mejoras en la calidad de vida de las mayorías, dejaron ver sus frutos a partir del acercamiento de las *elites empresariales* y *la burocracia política*. La proximidad de las elecciones de ese año y la designación del candidato a la presidencia por parte del partido oficial, Gustavo Díaz Ordaz, generó rápidamente confianza y certidumbre en el sector empresarial. Visión que se confirmaría al momento de actuar contra la guerrilla en los estados de Morelos, Chihuahua y Guerrero, el movimiento médico de 1965 y el movimiento estudiantil de 1968. La mano dura en contra de los movimientos sociales que reivindicaban las causas de una izquierda que avanzaba en el contexto internacional, pero sobre todo en América Latina, cristalizó los deseos autoritarios del sector empresarial que no cejó de lanzar públicamente manifiestos de apoyo a las decisiones del gobierno de Díaz Ordaz.

Las nuevas relaciones entre el gobierno y las elites empresariales obedecieron no solo a la postura gubernamental respecto a los movimientos sociales, sino también a la falta de correspondencia entre el poder económico del sector empresarial y su poder político, lo que permitió cierto grado de flexibilidad de las posiciones político-ideológicas de los empresarios ante el Estado mexicano. Como señala Valdés:

*...desde el punto de vista de las relaciones de fuerza, la clase dominante no alcanzaba todavía un grado de unidad y homogeneidad en correspondencia con su fuerza económica que le permitiera una acción concertada a mediano y largo plazo*

*entre sus principales componentes. Por el contrario, el grupo gobernante se había manejado en un esquema de relaciones con el poder económico basado en la satisfacción de sus intereses generales dentro del marco institucional del sistema político en el que las cámaras empresariales representaban los medios idóneos para los procesos de consulta de las decisiones de política económica (Valdés, 1988: 227).*

Esta relación relativamente armoniosa, comenzó a ensombrecerse por la presencia más patente de una crisis económica característica de sociedades como la mexicana: crisis del sector agrícola, disminución en el crecimiento industrial, desequilibrios en los términos de intercambio con el exterior y el eminente déficit presupuestario. Es decir, que la eficiencia del *milagro mexicano* basado en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, estaba llegando a su fin. Esta situación se apreciaba, por ejemplo, en el hecho que las principales empresas tendían a tener una mayor participación del capital extranjero o estatal, y por tanto, menor participación de la inversión privada nacional (Aguilar Camín, 1988). Otra de las tendencias que se hicieron evidentes desde mediados de la década de los sesenta, fue, primero, el predominio de la inversión extranjera por asociarse con el gran capital nacional, y la evidente concentración de la riqueza ya que 131 grupos económicos poseían las 1158 empresas industriales, bancarias y comerciales, más importantes. De hecho, los 20 grupos económicos más grandes disponían de bancos, aseguradoras y financieras propias, lo que expresa que el desarrollo del capitalismo en esos años ya estaba caracterizado por la fusión de capital bancario e industrial, la presencia del capital financiero como la fracción dominante de la clase empresarial (Cordero, Santín y Tirado, 1983).

### *2.2.2 El ocaso de una energía estatal bogante.*

La mano dura que caracterizó a Díaz Ordaz proyectó una imagen que la posición político-ideológica de los empresarios acogió con buen ánimo. Sobre todo, después que el presidente se declaró públicamente como *anticomunista*, y la estrategia elegida para combatir a las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La forma cómo se manejó al movimiento de los médicos y su concepto del orden parecía presentar a una clase dominante sin conflictos significativos, independientemente del papel que desempeñaba el

PAN, el cual, por cierto, alcanza objetivos históricamente relevantes en el terreno electoral. Como los señala Krauze:

*Las elecciones arrojaron resultados ambiguos. Por un lado, hubo “pan” para el PAN: 11.2 % de la votación, 19 diputados de partido y triunfos en 8 municipios (todos en Sonora); por primera vez en la historia se concedía un triunfo en la capital de un estado, Hermosillo, y meses después, otra en Mérida (Krauze, 1997: 305).*

Para 1966, el desarrollo económico impulsado por el gobierno de Díaz Ordaz se guiaba a partir de los siguientes objetivos: 1) alcanzar un crecimiento de 6% anual; 2) apoyar al sector agropecuario; 3) consolidar el proceso de industrialización; 4) atenuar los desequilibrios regionales; 5) distribuir equitativamente la riqueza; 6) mejorar la educación y los servicios asistenciales; 7) mantener el tipo de cambio, y 8) combatir la inflación.

Los méritos se reflejaron en una inflación promedio de 2.6%, un tipo de cambio de 12.5 que se mantuvo desde 1954, eliminación de los desequilibrios en la balanza de pagos, un crecimiento del PIB de 7% anual, y un producto *per cápita* que pasó de 300 dólares en 1958 a 700 en 1970.

La estabilidad económica y su decisión para garantizar el orden, sobre todo a partir de la represión estudiantil de 1968, trajo a Díaz Ordaz el reconocimiento y respaldo de *la derecha mexicana, principalmente de los empresarios nacionales y la Iglesia católica*. La clase dominante parecía lograr una estabilidad política que impedía a la izquierda consolidar una ideología antisistémica que mermara la legitimidad del régimen. Como señala Krauze:

*La prensa era un coro casi unánime de elogios al presidente. La Iglesia agradecida con un sistema que la dejaba prosperar en las áreas pastorales, educativas y de asistencia social, declaraba por primera vez desde 1910, de manera abierta y no tácita, su apoyo y reconocimiento a la Revolución mexicana. Subidos en el mismo barco del sistema, los empresarios invertían con confianza, guiados por un timonel que había tenido el valor de declararse anticomunista... El PPS era ya, claramente, un partido palero del PRI. El PAN se consumía en el desánimo viviendo de las migajas que le concedía el ejecutivo... Aquello era la subordinación universal. Solo quedaban fuera las clases medias no integradas directamente al presupuesto y sus hijos, los estudiantes universitarios, así como los comunistas (Krauze, 1997: 360).*

De hecho, la década de los sesenta representa un punto de ruptura en la historia contemporánea de nuestro país, si consideramos que la tradición política se caracterizó por

la concentración del poder en la “familia revolucionaria”, por un paternalismo estatal que mantuvo al margen de las decisiones que definían el rumbo de la nación, a una sociedad industrial que poco a poco se fue consolidando al paso del dinámico proceso de industrialización que despegó a partir de los años treinta. Esa característica fue la esencia de un sistema político que perduró a lo largo de siete décadas, y que desde su génesis, al final de los años veinte, enfrentó coyunturas que puso a prueba la capacidad de la *elite* política para legitimar su larga permanencia en el poder. De tal forma que la solución al caos revolucionario que provocó el desgaste de las estructuras políticas y económicas, estuvo determinada por la fuerza energética que generó un sistema político caracterizado, por: 1) *un presidencialismo* que sucedió al caudillismo revolucionario, 2) *un partido hegemónico* que anulaba a la oposición, 3) *un corporativismo* que garantizaba el control social y resguardaba la continuidad de la “familia revolucionaria en el poder, 4) *un nacionalismo* que exhortaba permanentemente a la unidad política, 5) *una política económica proteccionista* que limitaba al capital extranjero, promoviendo el desarrollo y la consolidación de un mercado nacional, 6) *un intervencionismo estatal* que garantizaba la ocupación de la fuerza de trabajo, 7) *Una política social* que coadyuva a elevar la calidad de vida de las masas.

Como se puede observar, este conjunto de características del sistema instaurado en los años veinte, representa el conjunto de elementos que definieron la forma del ejercicio de la política, las reglas implícitas de un juego político que solo tenía como referente formal el legado constitucional y las leyes que de ello se desprendían. Se trata de un sistema cuya dinámica articula evidentemente lo político y económico, aunque también define los símbolos que explican la emergencia de una *nueva cultura política* que en lo sucesivo se reproducirá entorno a las nuevas reglas establecidas. De un sistema político que al representar la *unidad nacional*, expresa la complejidad de una sociedad que rápidamente se perfila bajo una lógica capitalista que, en su esencia liberal, requiere proyectar la decisión de las elites del poder de impulsar un sistema político legitimado a través de la representatividad de los diferentes sectores sociales, por contradictorios que fuesen sus intereses de clase. Es el caso del proletariado y el empresariado nacional, dos clases emergentes al calor del proceso de industrialización, que fueron adquiriendo vigor conforme se consolidaba el estado posrevolucionario, un estado que hacía sus mejores

esfuerzos y que, por tanto, creaba la esperanza de poseer la suficiente energía para representar lo mejor posible a la sociedad mexicana.

De hecho, la fortaleza de un estado lo suficientemente capaz para alentar y dirigir la industrialización de una economía que apenas unos cuantos años atrás, tenía un claro dejo precapitalista, *representa la complejidad de un proceso social generador de la energía social requerida para garantizar la unidad nacional*. Un símbolo al cual el sistema evoca constantemente a partir de un *discurso presidencial* dirigido a las masas y de un *partido hegemónico* que representaba formalmente a las clases trabajadoras, y que, por tanto, se constituye en el vehículo “natural” para que ese sector social exprese sus demandas al estado mexicano, que personificado por la figura presidencial simboliza la máxima expresión del poder en detrimento del poder legislativo y el judicial. *La solidez del sistema político mexicano es la principal fuente desde la cual fluye la energía que requiere la construcción de una economía lo suficientemente estable para garantizar la expansión y diversificación de la actividad productiva*. La capacidad energética del Estado mexicano no se reduce sólo a definir un modelo de desarrollo económico, sino que interviene directamente en la economía, garantizando todavía más, la expansión y diversificación económica, sobre todo en aquellas áreas en las que el capital privado, nacional o extranjero, no tiene interés para invertir ni convicción para arriesgar.

Los símbolos más representativos de la fundación del estado moderno, se reproducen a través de un *discurso populista* que impulsa una *cultura política* cada vez más cifrada en la exaltación de los retos más urgentes de la nación, evocando los compromisos que todos los mexicanos y sus diferentes los sectores sociales tienen en la construcción de la *modernidad mexicana*.

Las acciones económicas del estado son legitimadas a través de un *discurso nacionalista* que en la lógica del *ritual de la política moderna*, se proyecta a través de los medios de comunicación masiva. En ese sentido, la política deja de reducirse a la presencia de los actores sociales en el espacio público, el espacio urbano, de la calle, desde donde lanza, si así lo permiten los medios de comunicación, sus demandas a los *tomadores de decisiones*. *El espacio público aparece como la idealización democrática de la plaza pública*, lugar indispensable para discutir los asuntos del interés de la nación, pero limitado materialmente para albergar la discusión social que garantice la participación de toda la

sociedad mexicana. *La imagen de la nación emulada en el discurso populista que cotidianamente busca el compromiso de las masas*, el respaldo a las decisiones gubernamentales que política e ideológicamente es esgrimida en contra de aquellas fuerzas antagónicas al sentido que la *elite política* le imprime al rumbo de la nación. Las soluciones planteadas para dirimir los conflictos entre los intereses de la nación y los intereses privados, sobre todo extranjeros, son normalmente presentadas en el escenario nacional para que la *opinión pública* conozca y tome partido de los asuntos en disputa. Se alude discursivamente a la *identidad nacional*. El empresariado mexicano ocupa un lugar ajeno y contradictorio al *nacionalismo* pregonado por el señor presidente de la república, quien junto a los demás voceros gubernamentales, se esforzaron en construir el mito revolucionario que proyecta al pueblo en el poder.

En ese sentido, una de las prácticas que definen la *nueva cultura política* mexicana que se desarrolla en el periodo posrevolucionario es, sin duda, *el recurso de la comunicación política*, de los mensajes colocados en el *nuevo espacio público*, de *posicionarse en los medios de comunicación y desde ahí, y solo ahí, influir en la opinión pública*. Pues no basta, entonces, que las demandas de la sociedad se planteen en manifestaciones públicas, ya que la presencia de los actores políticos en la plaza pública, en la calle, no es suficiente para que la opinión pública conozca de ellos, de proyectos alternos que cotidianamente proyecta el poder. La política depende cada vez más de los medios, y por ello *la burocracia política* ejerce cierto monopolio sobre este recurso político-ideológico, que solo el poder económico de los empresarios nacionales y extranjeros puede romper. Y es precisamente la consolidación de los *grupos de presión*, precisamente el papel ideológico-político que desempeñan las organizaciones empresariales y el “su” Consejo Nacional para la Publicidad, lo que permite colocar *otro discurso en los medios*, lo que refleja el cambio de las estructuras del poder. Las decisiones de las elites comienzan a ser frecuentes y cada vez más abiertamente cuestionadas. El poder comienza a perder legitimidad y la crisis política emerge como el primer fenómeno político y cultural que avisa del inicio del proceso de transición. Es por ello que los años sesenta representan el momento en que la sociedad mexicana se rebela al sometimiento de un sistema de democracia restringida que todavía posibilita el monopolio del poder. La sociedad incorpora una expectativa del futuro e idealiza a la democracia como único objetivo que

persigue su politización.

Así, la década de los sesenta representa una ruptura en términos de una tradición política que perduró durante siete décadas, dado que el perfil de la sociedad mexicana se transformó en estos 10 años. Ya sea que se trate del movimiento sindical cuestionando al corporativismo, la fundación del *Consejo Mexicano de los Hombres de Negocios* (CMHN) cuestionando el autoritarismo de la *burocracia política*, o de la represión del movimiento estudiantil en 1968; la principal característica de la génesis de la transición, es sin duda alguna, la politización de la sociedad mexicana, del surgimiento del movimiento sindical independiente y, sobre todo, de la rebelión del empresariado mexicano que a través del discurso político de sus organizaciones sectoriales, ataca y poco a poco va erosionando las estructuras del poder.

Si bien, la represión estudiantil aproximó a las fracciones de la clase dominante, al ganar el apoyo de la *derecha mexicana* (empresarios mexicanos y la Iglesia católica), también evidenció el inicio del fin de la subordinación de las clases medias intelectualizadas y las clases trabajadoras que dejaban de aceptar el liderazgo corporativo que imponía el partido oficial.

Los sesentas representa el fin de un complejo proceso que generó la *energía social* requerida para garantizar la estabilidad de un sistema que colocaba a una elite política, la “familia revolucionaria”, en el poder. Esta década demuestra el *costo energético* que pagó el sistema por concentrar el poder en la figura presidencial y el partido hegemónico, dando pruebas del desgaste de las estructuras tanto políticas como económicas. De esa manera, en el periodo que se abre en esta década habremos de observar cambios graduales en las estructuras objetivas y simbólicas que mantuvieron incólume a un sistema cobijado en la herencia de la revolución mexicana. Aquí observaremos el efecto que los embates del cambio provocan en un sistema que, sin necesidad de ser militar, impuso la dictadura de una elite. De esa forma, el proceso de transición, entendido como *el periodo en el cual una sociedad sufre la alteración de sus estructuras políticas, económicas y culturales* (Sonntag, 1988), será el escenario en el cual observaremos un proceso de cambio, a veces radical, de las características del sistema social que adquirió forma a partir de los años veinte: *presidencialismo, partido hegemónico, corporativismo, nacionalismo revolucionario, política económica proteccionista, intervencionismo estatal y política social con*

*pretensiones universalistas..*

Se trata de un proceso en el cual la interacción de la política, la economía y la cultura, se hará visiblemente evidente; de un escenario en el cual emergerán nuevos actores sociales, desplazando a los que en otros tiempos fueron relevantes para el sistema; la consolidación del *nuevo espacio público*, y por tanto de *la subordinación de la política hacia los medios masivos de comunicación*. A partir de esos cambios *se pondrá a prueba la capacidad de adaptación del sistema* y el papel que juegan en este complejo proceso de transición las principales organizaciones empresariales, que como instrumento del poder económico tendrán un lugar preponderante para servir como eje expositor del proceso de la transición, y por lo tanto, para comprender la causa del sentido que se le imprime al rumbo de la nación.

### **CAPÍTULO III. EL PODER EMPRESARIAL Y EL PROCESO ENERGÉTICO DE LA TRANSICIÓN MEXICANA.**

El objetivo de este capítulo es presentar a grandes rasgos los aspectos que permiten comprender el complejo proceso de transición que México vive desde los años sesenta. De tal forma que el modelo analítico propuesto en el primer capítulo, coadyuve, ahora, a destacar el papel político que jugaron los empresarios mexicanos, particularmente sus organizaciones más significativas en los medios impresos de cobertura nacional, en la crisis del modelo posrevolucionario y los símbolos que lo legitimaron, así como en la construcción de un nuevo proyecto de nación que comprueba el proceso de la transición mexicana.

De hecho, este capítulo constituye uno de los objetivos centrales de esta investigación, pues es en este marco socio-histórico la perspectiva sistémica del modelo propuesto. Del mismo modo, y con la necesidad de probar la pertinencia del carácter energético del modelo, el discurso político de las principales organizaciones empresariales permitirá observar claramente la forma en que el sistema político recibe, rechaza o incorpora, con el objeto de generar los consensos requeridos para legitimar la permanencia del sistema y su respectivo régimen económico.

En ese sentido, se pretende destacar una interpretación antropológica en la medida que el seguimiento de la transición, de la posición de los gobiernos en turno, y el análisis del discurso de alguno de los actores políticos más significativos de este periodo, conduce a destacar la importancia de los símbolos en la construcción de los discursos políticos, ya sea del Estado, los

partidos y los principales actores políticos. Por tal razón adquiere relevancia destacar el discurso de las organizaciones empresariales con mayor presencia ante la opinión pública, pues es en el ámbito del nuevo espacio público que se observa el deterioro simbólico de la clase gobernante y la lucha ideológica que explica, perfectamente, el agotamiento del periodo posrevolucionario y la instauración de un nuevo modelo económico a partir de 1982.

Los principales retos para comprender cualquier proceso de transición, son, primero, reconocer la discontinuidad de una forma social, y por tanto, la emergencia de un tiempo socialmente nuevo; lo que presupone; segundo, reconocer las características que una formación social mantuvo constantes a lo largo de un periodo; tercero, el surgimientos de fenómenos socioculturales que provocan la transformación de las estructuras que le daban forma. No obstante, la dificultad para comprender la transición de una sociedad, su paso de una etapa de desarrollo a otra, su paso de una forma social a otra, no se solventa con el solo hecho de considerar estos aspectos. Para ello es necesario precisar lo más posible, tanto la estructura en la que se registra el cambio, como el momento preciso en el que éste acontece. Evidentemente, la misma complejidad de la realidad social complica la posibilidad de establecer el punto histórico en el que inicia una transición, pues falta identificar y justificar por qué un determinado fenómeno puede representar la causa o el detonador de dicho proceso. De hecho, el surgimiento de un nuevo acontecimiento económico, político o cultural no representa, necesariamente, un cambio en la esencia de una formación social, pues su posible procedencia de una estructura en concreto, no justifica un impacto global del sistema social, o como lo señala Adams (2001), no puede ser considerado como el *detonante* que provoca la *transformación de energía*, o el cambio estructural que conduce al *cambio sistémico*.

Se trata, entonces, de identificar aquellos fenómenos o sucesos, *detonantes energéticos*, que conduzcan al cambio global del sistema, los cuales reconocíamos a partir de un conjunto de características estructurales que perduraron en un periodo de la historia, de aceptar el reto de identificar, por complicado que ello sea, la causa que desencadenó un proceso de cambio, esto es, la causa de un cambio global que inicia y se desarrolla poco a poco. Por ello es necesario considerar la diferencia entre el término cambio, que alude a un proceso consumado, y el término transición que hace referencia al proceso mismo de cambio. De tal manera, que evitemos encontrar una explicación uni-causal, esto es, que encontremos como causa de una transición a los cambios provenientes exclusivamente del sistema económico, político o cultural; puesto que

se trata de una transformación del conjunto estructural derivado de un *intercambio sistémico*, donde un cambio en cualquiera de sus partes, impacta de una u otra medida al conjunto. En ese sentido, la propia complejidad social sometida a un *proceso de transición* se expresa a partir de una suma de cambios estructurales, como lo sugiere Bell (1987), de transformaciones asimétricas cuya evidencia permite apreciar que el cambio va aconteciendo en la lógica de una *transformación gradual de las estructuras sociales*, donde quizás en una ocasión sea más evidente la dinámica de la economía, en otras la de la política o la cultura.

Bajo esta misma lógica, el tratamiento de la *transición mexicana* exige sortear los mismos problemas: distinguir el pasado de un *tiempo socialmente renovado*, identificar los primeros cambios que permitan reconocer que el proceso ha iniciado, etc. Por ello habremos de considerar las características del sistema político mexicano que se creó a finales de los años veinte, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, partido oficial desde entonces hasta el año 2000, en el que ascendió al poder la oposición.

De esa forma habremos de considerar, como lo sugerimos al finalizar el capítulo anterior, las características que permitieron reconocer el desarrollo y consolidación del sistema político que caracterizó al periodo posrevolucionario. De una *cultura política* que se ciñe a un conjunto de valores y símbolos que definen las reglas de la competencia y el ejercicio del poder, y que al *perdurar en el tiempo* nos permiten distinguir claramente un periodo donde el *sistema se mantiene estable*; lo mismo que reconocer la transformación de las estructuras, las prácticas políticas y de las mismas formas del sistema político que sugieren el inicio del proceso de *transición*. Por lo tanto en este capítulo procuraremos destacar los cambios más visibles del sistema político, los aspectos de índole político, económico y cultural, que alteraron la toma de decisiones, y por lo tanto, los cambios correspondientes a la *cultura política*, sobre todo los referentes a las actitudes y acciones de los empresarios en sus intentos de influir en los rumbos que toma el país.

Se trata de tener muy presente que los rasgos señalados del sistema político del periodo posrevolucionario: *presidencialismo, partido dominante, corporativismo, ideología nacionalista-revolucionaria, intervencionismo económico del Estado y política asistencialista*, los cuales representan el conjunto de prácticas políticas que de manera sintética sugieren una visible concentración del poder en la burocracia política (Aziz Nassif y Alonso Sánchez, 2005; Aguilar Camín y Meyer, 1989; Carpizo, 2002; Córdoba, 2006, 1973, 1972; De la Peña, 1992; González

Casanova, 1981; Krauze, 1997). De tal manera, que en nuestro caso, el hilo conductor que nos permitirá exponer una interpretación sobre el complejo proceso de la transición a que se somete la sociedad mexicana desde los años sesenta, sea la emergencia de un nuevo actor político: el empresariado mexicano, que a partir de sus organizaciones empresariales lucha por participar en las estructuras del poder.

Sin embargo, independientemente que la transición analizada desde la perspectiva de este preponderante actor político, parezca ofrecer un claro flanco político y económico, existe una suerte de acuerdo, dada la complejidad de dicho proceso, que la transición mexicana inició en los años sesenta (Aguilar Camín y Meyer, 1989; Alonso, 2005, 1996; Aziz Nassif, 1992; Castañeda, 1999; De la Peña, 1992), sobre todo por el cambio político registrado a partir de los sucesos de la represión estudiantil en 1968. No obstante, se reconocen otros cambios significativos que explican la naturaleza multi-causal de la transición mexicana que permiten reconocer la complejidad del proceso que corresponde al intercambio energético entre las estructuras de nuestra sociedad. Es el caso de la estructura poblacional que a partir de los años sesenta comienza a ser predominantemente urbana, dando cuenta del proceso de industrialización impulsado por los gobiernos posrevolucionarios, y por ende, del desplazamiento del campo a la ciudad. Se había consolidado el proyecto de industrialización sobre las estructuras agrarias que prevalecieron hasta los años cincuenta (Aguilar Camín, 1988).

En el terreno económico en esta época se muestran signos de agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones con protección del exterior. El modelo había iniciado desde la crisis mundial de 1929-1932, pero hasta la II Guerra Mundial la sustitución estaba encuadrada en un proceso no intencionado, sino implícito por las circunstancias. Fue hasta después de la segunda guerra mundial cuando el modelo blanco de una política deliberada. Su mejor momento ocurrió de 1954 a 1970, cuando se lograron los índices de crecimiento con baja inflación. Sin embargo, puede considerarse que ya desde los años sesenta habían aflorado limitaciones claras del modelo en el sector agrícola, el cual había entrado en crisis.

Dicho de esa forma, si era factible reconocer el cambio de las estructuras económicas, también es factible reconocer que las estructuras del poder habían comenzado a cimbrarse desde los años cincuenta, aunque en los sesenta alcanzaron su mejor expresión. *Grosso modo*, había comenzado a transformarse la relación del Estado mexicano y la sociedad a la que representó desde el triunfo de la Revolución. La sociedad comenzaba a rebelarse contra el *paternalismo* de

la *familia revolucionaria*, ya sea la fracción económicamente dominante, el empresariado mexicano que emergía propiamente como una clase consolidada, lo mismo que las clases trabajadoras. Los primeros, con la conformación del *Consejo Mexicano de Hombres de Negocios* (CMHN) al inicio de los sesenta, y los segundos, con la secuencia de un movimiento sindical que demostraba su resistencia en contra de las estructuras corporativas del sistema (ferrocarrileros, maestros, telegrafistas, tranviarios, a finales de los cincuenta; y médicos a principios de los sesentas) y que encontraban su punto justo de expresión política con la movilización y represión estudiantil de 1968 (Krauze, 1997; Alonso, 1992; Aguilar Camín y Meyer, 1989; Basañez, 1981; Cordera y Tello, 1981; Saldívar, 1980).

La propia inercia impuesta por la expansión de las estructuras económicas, políticas y sociales que promovieron el proceso de industrialización que inició en los años treinta, y el cambio de la relación entre el Estado y la sociedad mexicana a principios de la década de los sesenta, demostró el inicio de nuestra transición. El actor político que inevitablemente habría de enfrentar el dilema entre restablecer la estabilidad posrevolucionaria o conducir el cambio, fue la burocracia política. Se trataba de un escenario en el que el gobierno entrante habría de demostrar la fortaleza necesaria para mantener el orden, como es el caso del 68, o tendría que encontrar una nueva forma de negociación con la clase económicamente dominante y con las clases trabajadoras. Ese es el ambiente social que prevalece a la llegada de Luis Echeverría al poder, 1970-1976 (Meyer, 2003).

### **3.1 El agotamiento del modelo asistencialista y la resistencia empresarial.**

La estabilidad que demostró el sistema político mexicano en el periodo posrevolucionario, sobre todo a partir de 1929, puede ser representada por una forma energética que se reprodujo de manera estable durante las tres décadas siguientes, procesando la energía que requiere todo sistema para garantizar su permanencia en el tiempo. Su desarrollo demuestra la capacidad de la elite que conduce el proceso social, para expandir las estructuras sociales, para canalizar energía de un sector a otro, de crear las condiciones para generar nueva energía y promover el desarrollo económico, político y sociocultural (Adams, 2001, 1983, 1978). Sin embargo, con el paso del

tiempo se hace evidente que la continuidad de ese sistema, fue provocando, también, la fuga de energía, esto es, el costo del desarrollo estructural que finalmente marca su desgaste, y hasta su propio agotamiento. Como bien podría interpretarse desde el punto de vista sistémico, que el desarrollo de una sociedad industrial y el fortalecimiento político y cultural de las clases fundantes del sistema capitalista, empresarios y trabajadores, tiene un costo económico, que en el caso mexicano apuntaba hacia el déficit presupuestario y el endeudamiento exterior, es decir, hacia la crisis del modelo de desarrollo que se había iniciado desde la gran depresión mundial de 1919-32, y que la *burocracia política* impulsó a partir de la II Guerra Mundial.

Esto abre un nuevo escenario a partir del cual es posible observar tanto el costo político que pagaría la elite que ocupó el lugar hegemónico de ese proceso, así como las nuevas aspiraciones de unas clases sociales, empresarios y trabajadores, que ahora se sentían con la suficiente fuerza política y el derecho de luchar por imponer sus intereses particulares en el proyecto del Estado. Evidentemente, el avance de un actor corre en detrimento de la cuota de poder de los otros, si los empresarios o trabajadores adquieren más poder del que se les atribuía, iría en contra de papel hegemónico de la burocracia política. Si el modelo de desarrollo llegaba a su fin, el símbolo de la *unidad nacional* implícita en la estabilidad de la estructura de poder posrevolucionaria, también llegaba a su fin (Krotz, 1993, 1991). La lucha por el poder era un hecho, la sociedad mexicana asumía su mayoría de edad y se rebelaba en contra del *paternalismo gubernamental* (Basañez, 1981; Cordera y Tello, 1981; Saldívar, 1980).

### *3.1.1 El conflicto empresarios-Estado: el principio del fin.*

Por las propias características del sistema político mexicano, el fin de un sexenio genera muchas expectativas en el escenario político nacional, sea al interior del *bloque dominante* o en el conjunto de la sociedad mexicana, sobre todo si consideramos la naturaleza de los acontecimientos de los años sesenta, como fue la movilización sindical en contra del orden corporativo a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, la expropiación de las compañías eléctricas al inicio de esa década o la represión estudiantil de 1968. En ese sentido, la “mano dura” que representaba Luis Echeverría Álvarez se proyectaba como una promesa que colmaba las inquietudes del sector empresarial y de la *derecha* en general, mientras las preocupaciones económicas no eran tan contundentes como para definir un perfil del futuro

presidente, a partir de criterios *tecnocráticos* que privilegiarán lo económico sobre lo político. La necesidad de garantizar la legitimidad de la clase gobernante era lo fundamental (Aguilar Camín, 1988; Meyer, 2003; Krauze, 1997).

Así, la designación de Echeverría como presidente de la nación, 1970-1976, coincidió con el claro agotamiento de un modelo de desarrollo posrevolucionario (sustitución de importaciones-desarrollo estabilizador). En este proceso de industrialización el Estado mexicano había jugado un papel central como agente activo del mercado, por lo cual la intervención directa del Estado en la economía, la capacidad gestora y de inversión de la burocracia política hizo de la administración pública el ingrediente fundamental de una buena parte de las ramas de la economía. Lo mismo en la agricultura que en la actividad industrial, la creación, financiamiento y administración de la infraestructura y el transporte, la actividad financiera, etc., permitió la reproducción y expansión del mercado, garantizando el apoyo económico requerido para desarrollar la actividad empresarial. De hecho, es la participación económica del Estado lo que permite al gobierno mexicano conducir el proceso de desarrollo económico que aspira a terminar con la dependencia hacia el exterior, impulsando la diversificación de los productos manufacturados de consumo inmediato, duradero y bienes de capital, sustituyendo así los productos provenientes del exterior por productos nacionales (Casar y Péres, 1988; Rey Romay, 1984).

La crisis manifiesta desde principios de los 70's, marca el momento en que el *Estado social autoritario*, característico de este período, pierde la capacidad política para mantenerse como símbolo del desarrollo económico de un país pujante (De la Garza, 1984). En particular, el déficit presupuestario reflejó, al menos, dos cuestiones fundamentales en la etapa final de este período: una, que el objeto de la empresa paraestatal tiene un carácter social y no lucrativo, por lo que la inversión requerida para garantizar su participación directa en la economía no podría ser recuperada, situación que si bien atendía las necesidades más urgentes de importantes sectores de las clases trabajadoras, también favoreció los intereses del capital privado nacional y extranjero. La figura del Estado benefactor que se materializó a través de nuestro *Estado social autoritario* garantizó un mínimo consumo de las capas medias y populares, condición que se consideró indispensable para impulsar con gasto público no sustentado en mayor captación fiscal, la expansión del mercado nacional (Rivera Ríos, 1986). Otra, que la política económica del Estado mexicano no antepuso su estabilidad financiera sobre la importancia de acelerar el desarrollo

económico, pues al perseguir ese objetivo –se pensaba– dispensaría la captación fiscal, ya que se podría optar por el endeudamiento externo y la emisión monetaria, aún a costa de la inflación, puesto que había un excedente mundial de petróleo que necesitaban reinsertar en el sistema financiero, privilegiando, nuevamente, la acumulación en manos del capital privado local y foráneo (Gollás, 2003). Contrario a lo que la burocracia política esperaba del modelo económico que adquirió forma desde los años treinta, el desenfrenado endeudamiento externo que inicia en el gobierno de Echeverría, es el suceso que estrechará, aun más, los lazos de dependencia hacia el exterior. Esto va a definir un elemento de presión a partir del cual los acreedores externos, por mediación de instituciones financieras internacionales, comenzaban a presionar para que México incorpora un proyecto de corte neoliberal (liberación de la economía, privatización, adelgazamiento del aparato gubernamental, tope salarial) que facilitará, en las nuevas condiciones del mercado internacional, la articulación de nuestra economía con el exterior. Situación que se dibujaba con las *cartas de intención* de las principales instituciones financieras internacionales (Villarreal, 1986).

La crisis económica, la falta de credibilidad en la burocracia política, la dificultad para mantener una política de gasto social y la necesidad de generar consensos, es el contexto en el que la elite política intenta reformular la estrategia económica para enfrentar de manera exitosa la crisis (fundamentalmente a partir de una fallida reforma fiscal, la regulación de la inversión extranjera de 1973, etc.). De hecho, el punto central de la política económica de Echeverría giraba en torno al fortalecimiento del papel económico del Estado; se planteaba darle continuidad al intervencionismo estatal, en un intento por reactivar el anterior modelo de acumulación que ya se agotaba. El objetivo era fortalecer la posición estatal a partir de limitar la participación del capital extranjero, elevar el control fiscal para favorecer la capacidad financiera del Estado, fortalecer el incremento de su intervención directa en la economía, consolidar su rectoría en el proceso de desarrollo y elevar el nivel de vida de las clases medias y trabajadoras, buscando refrendar la legitimidad que había permitido a la *burocracia política* mantenerse en el poder después del movimiento revolucionario (Krauze, 1997; Bartra, 1994; Alonso, 1992; Guillén, 1984). Sin embargo, el agotamiento del proyecto posrevolucionario tiene la característica de evidenciar la relación entre la política y la economía, y particularmente, la intención de las elites para explotar el pasado histórico, aludiendo a los símbolos heredados por la revolución, para legitimar el presente y construir expectativas sobre el futuro (Florescano, 2001; Córdoba, 1973; ).

De tal forma que apuntar a una crisis económica, supone casi mecánicamente, esperar una crisis política. Así, la crisis no solo supone el agotamiento de las estructuras productivas sino la erosión de las reglas del juego político. Ello explica la emergencia de una sociedad que expresaba su rechazo a las prácticas autoritarias del Estado mexicano, es por ello que los empresarios no dejaban pasar oportunidad alguna para plantear su descontento ante la burocracia política, su crítica a la política económica que intentaba instrumentar el gobierno de Echeverría, refrendando las posiciones que guardaban tanto la iniciativa privada como la inversión gubernamental. Pero, sobre todo, rechazando la posición hegemónica que la burocracia política tuvo a partir del triunfo de la revolución mexicana. Se trataba de una coyuntura en la cual, ante la crisis del modelo económico desarrollista, tanto los sectores sociales vinculados a la *izquierda*, como los sectores conservadores, reclamaban al Estado mexicano su derecho a la participación en la redefinición del rumbo del país. La movilización sindical que estaba claramente asociada a la *izquierda mexicana* y los empresarios representando a la *derecha*, emergían como nuevos actores políticos que reclamaban sus derechos a la participación política en las decisiones tomadas por el gobierno. La sociedad civil emergía exigiendo sus derechos al Estado (Cordera y Tello, 1981).

Por otra parte, en febrero de 1972, José Ángel Conchello llegaba a la presidencia del PAN después de un conflicto interno en ese partido. Se trataba de un reconocido publicista, empleado de la CONCAMIN, que estaba vinculado a grandes empresarios regiomontanos. Esto representó la marginación de las corrientes católicas y la subordinación política de ese partido a los intereses del gran capital regiomontano, pero también la expansión de los campos de influencia del poder empresarial (Nuncio, 1986). No obstante, que por la propia característica del sistema político mexicano, *la presencia de un partido dominante*, presume la ausencia de un partido de oposición que no representaba la suficiente presión para un gobierno que se legitimaba, fundamentalmente, por la presencia económica tanto en la expansión y diversificación del mercado, como por su papel promotor del desarrollo de las principales clases sociales.

La confianza despertada por Echeverría dentro de los espacios empresariales por ser identificado como expresión de la “mano dura” que requería una sociedad que comenzaba a desbordarse, se vio cuestionada por el tipo de estrategia económica definida para resolver la inédita situación que vivía el país. Echeverría planteó fortalecer el papel económico que venía jugando el Estado, a partir de limitar más la participación de la inversión extranjera, así como fortalecer la capacidad financiera del erario mediante una reforma fiscal que pretendería corregir

un aspecto importante de la cultura empresarial: *la evasión fiscal* (Guillén, 1997, 1984). Al mismo tiempo que reiteraba, apoyado en el *nacionalismo revolucionario*, la necesidad de mantener un gasto público dirigido a atender las necesidades inmediatas de las clases trabajadoras: educación, salud, recreación, así como fortalecer un conjunto de medidas dirigidas a respaldar la canasta básica (Basáñez, 1981; Saldívar, 1980).

Otro de los aspectos que provocaba el malestar empresarial fue la política exterior tercermundista del gobierno de Echeverría, que en una definida posición antiimperialista estrecha relaciones diplomáticas con países como China, URSS, Yugoslavia, Cuba y Chile. Particularmente, la invitación al presidente chileno, Salvador Allende en 1972, y el discurso de éste en Guadalajara, provocó una virulenta respuesta de las organizaciones empresariales del norte del país, particularmente en el estado de Nuevo León. En su declaración a los medios de difusión, empresarios del norte del país reconocían "*el mérito del pueblo chileno que se defendía de la imposición del socialismo comunizante*", y exhortaban al presidente Salvador Allende para "*seguir luchando contra el estatismo marxista que hacía perder a los pueblos la dignidad, la alegría de vivir y la libertad*". A tal grado llegó el radicalismo empresarial que la COPARMEX, la CONCANACO y la CONCAMIN tuvieron que mediatizar la posición empresarial declarando, el 1o. de diciembre de ese año, que si bien no coincidían con la ideología del Dr. Allende, reconocían "*la dignidad, limpieza y coherencia de su trayectoria política y humana*" (Arriola, 1988:94).

Los empresarios mexicanos manifestaban a través de sus principales organizaciones empresariales su reconocimiento a la lucha democrática de Allende, pero aprovecharon la ocasión para denunciar la influencia del comunismo en la definición de la política gubernamental de ese país. Así de paso, reiteraban sus críticas al intervencionismo estatal del gobierno mexicano, haciendo patente su posición liberal que exalta el libre juego del mercado, y se definían, en la lógica de la Guerra Fría, como enemigo a la URSS y sus aliados (Valdés, 1997; Millán, 1988).

La posición que sugería la propuesta de Echeverría contraponía la perspectiva liberal del sector empresarial, en la medida que las fracciones más importantes del capital veían muchas posibilidades de desarrollo a partir del papel que en la etapa ya industrializada podría jugar la inversión extranjera. De hecho, el *Grupo Monterrey*, el grupo económico nacional más importante en las primeras ocho décadas del siglo XX, guardaba una estrecha relación económica con el mercado estadounidense. Así que la iniciativa de limitar a la inversión extranjera y,

además, fortalecer el papel económico del Estado, provocaba un evidente malestar en el sector empresarial, que desde el momento de la definición formal del sistema político posrevolucionario, expresó sus posiciones a través de las principales organizaciones empresariales como CONCAMIN, CONCANACO, CANACINTRA, y sobre todo COPARMEX (Bazáñez, 1990).

De esa manera se iban definiendo las posiciones desde un antagonismo que políticamente se centraba, en el caso concreto del escenario mexicano, en la *participación directa del estado en la economía*, así como la *praxis populista* que recurrentemente usaba el gobierno mexicano para legitimar sus decisiones. De hecho, el avance de la democracia que tímidamente se observaba a través de la permisividad que concedía el gobierno de Echeverría al movimiento sindical independiente, constituía la punta de lanza en la avanzada de los trabajadores en contra de los intereses empresariales. La *burocracia política* aprovechaba a la estructura corporativa de la clase trabajadora para contener la beligerancia creciente del sector empresarial que claramente se resistía a aceptar las iniciativas gubernamentales (De la Garza, 1993).

En los tres primeros años del gobierno de Echeverría, los empresarios mexicanos, sobre todo los del norte del país, consideran que sus organizaciones sectoriales no representan debidamente sus intereses de clase dado el papel “secundario” que les corresponde en la *toma de decisiones*. Desde el inicio del gobierno de Echeverría, los empresarios comienzan a presionar para que sean definidas las reglas del juego en la resolución de lo que ellos consideraban como “incierto situación económica”. Las primeras propuestas empresariales para solucionar la crisis son manifestadas por la CONCANACO, la CONCAMIN, la COPARMEX y la AMIS, organizaciones que se declaran a favor de la eficiencia en la recaudación fiscal, más no por el incremento de los impuestos. Lo que representa tan solo una forma elegante de contraponerse al proyecto echeverrista, que mediante una reforma fiscal pretendía revertir los efectos de un déficit presupuestario que restaba capacidad financiera al gobierno mexicano (Arriola, 1981). La oposición de los empresarios comienza a organizarse a partir de las explícitas intenciones gubernamentales por reformular la estrategia económica del Estado. En 1972, cuando el gobierno anuncia el proyecto de ley que reglamentará la inversión extranjera, la *Cámara Americana de Comercio* (CAMCO) convoca a los empresarios mexicanos para presentar un frente común de defensa. En el *IV Seminario de Publicidad y Medios de Comunicación* celebrado en Monterrey, el representante de esa cámara propone la creación de un consejo empresarial que aglutine a las

principales organizaciones empresariales, con el objeto de propiciar el intercambio de opiniones a partir de un vínculo empresarial real para resolver los problemas que enfrenta el país. La propuesta apunta a romper con la sectorización de las organizaciones empresariales y dar mayor representatividad a una organización general que se encargara de negociar con la burocracia política. Dicha organización, al contar con la representación de los principales sectores empresariales, tendría mayor capacidad para hacer escuchar las posiciones, intereses y demandas, del empresariado nacional. La idea inicial de la CAMCO se vería materializada más tarde, cuando por iniciativa del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, se crea en 1975 el *Consejo Coordinador Empresarial*, momento en que abiertamente se reconocerá el enfrentamiento con el Estado (Valdés, 1997, 1988).

Fue la reiterada persistencia de ese gobierno para frenar la inversión extranjera y fortalecer la posición económica del Estado, el llamado “intervencionismo”, lo que provocó la respuesta más consistente del sector empresarial a lo largo del siglo XX, pues la propuesta implícita del *Memorandum Powell* promovido por la CAMCO (Cámara Americana de Comercio), generó la cohesión del sector empresarial mexicano. Los largos años de confrontación política se hacían patentes a partir de diferentes proyectos de nación que contraponían a las dos fracciones más importantes de la clase dominante: la burocracia política y la clase empresarial. La propuesta de este documento reflejaba la vinculación de intereses entre los empresarios norteamericanos y los grandes empresarios nacionales, como bien lo señala Millán:

*El Memorando es importante porque de éste se desprende todo un proyecto de penetración social bajo una lógica extremadamente derechista y reaccionaria; pero también por que, al parecer, en su difusión la Camco contó con el apoyo del Grupo Monterrey (Millán, 1988: 31).*

El *Memorandum Powell* definía una estrategia política que posicionaría a los propietarios del capital en el escenario nacional. Se trataba de generar las condiciones para revertir la posición hegemónica que la “familia revolucionaria” jugó a lo largo del periodo posrevolucionario. El primer punto era convocar a la unidad político-ideológico del sector empresarial; segundo, posicionar a la ideología empresarial en los medios de comunicación masiva con el objetivo de generar corrientes de opinión favorable a sus intereses y propuestas; tercero, esto último sólo será posible si se encuentra a intelectuales y líderes de opinión más influyentes que defiendan las posiciones empresariales y combatan las gubernamentales, además, cuarto, de influir en la

formación ideológica de los cuadros profesionistas que se formaban en las universidades privadas. Este proyecto político-ideológico daría, más tarde, origen al *Consejo Coordinador Empresarial* en 1975 (Millán, 1988: 32-33).

De hecho, la crisis económica y política que el gobierno de Echeverría vivió al final de su sexenio, tuvo necesariamente que ver con el papel que jugaron las *organizaciones empresariales* en la radicalización del sector, dado que su acción se encaminó a erosionar la credibilidad que la sociedad mexicana tenía en los gobiernos posrevolucionarios: fue el caso de los desplegados publicados constantemente en la prensa, como es el caso de la crítica a la visita de Salvador Allende y, en general, las críticas en contra de las políticas gubernamentales que las organizaciones empresariales hacían públicas; el alentar los rumores en los espacios propios de las empresas, como es el caso del rumor sobre el golpe de estado, que en resumen constituyen el *preámbulo de una de las acciones político-ideológicas más radicales de los empresarios mexicanos en contra del Estado*: el manejo de sus recursos financieros para presionar al gobierno mexicano, lo cual explica el papel que jugó la famosa *fuga de capitales* que desde entonces constituye uno de los flancos más débiles de nuestra economía (Valenzuela, 1984; Guillén, 1984; Rivera Ríos, 1986).

Tanto el despliegue de la ideología empresarial en los medios de difusión impresa, como la fuga de capitales, obedece a una estrategia de más largo alcance que en esa coyuntura ayudó a presionar al gobierno de Echeverría, en virtud de sus intentos por refrendar el intervencionismo gubernamental en la economía y su pretensión de legitimar dicha estrategia económica, a partir de un ejercicio populista del poder. En dicha coyuntura se hace evidente la lucha simbólica al interior de la clase dominante, por una parte la burocracia política que lucha por mantenerse en el poder, y por otra, los empresarios mexicanos que censuran abiertamente la gestión autoritaria del gobierno de Echeverría. Unos recurriendo al símbolo del nacionalismo revolucionario y otros anteponiendo como recurso los derechos de la iniciativa privada.

Otro aspecto del conflicto político empresarios-gobierno, tiene que ver con el "populismo" de Echeverría. En torno a ello, el Estado mexicano pretendía recuperar el consenso perdido con la represión del movimiento estudiantil de 1968. El discurso gubernamental retomó los principios de la revolución mexicana y permitió, como señala Méndez Barrueta y Quiroz Trejo (1994), el fortalecimiento del sindicalismo independiente (dentro del cual destaca el sindicalismo universitario, el Sindicato Único de los Trabajadores del Instituto Nuclear, SUTIN,

y el Sindicato Mexicano de los Electricistas, SME, entre muchos otros) y conforme se fueron recrudesciendo las relaciones con los empresarios, utilizó a funcionarios del gobierno, a la burocracia del PRI y a la representación formal del movimiento obrero (CTM), para recriminar la falta de compromiso de los empresarios mexicanos (Córdoba, 1973). El *nacionalismo revolucionario* entraba en una etapa cúspide, pues no existía un símbolo más contundente para evocar a la *unidad nacional* que la “estatolatría” utilizada por el gobierno echeverrista, pues dados los conflictos entre la burocracia política y las elites empresariales, representaba la mejor expresión de un Estado comprometido con su pueblo y con los retos que le imponía el tiempo y las nuevas condiciones nacionales e internacionales (Bartra, 1994, 1982; Krotz, 1991; Monsiváis, 1994, 1982).

Las relaciones entre el empresariado y el gobierno de Echeverría se encontraban en una verdadera crisis. El 17 de septiembre de 1973, día en que se firmaría el acuerdo salarial con los sindicatos de importantes empresas de Nuevo León, Eugenio Garza Sada, el miembro más prominente del Grupo Monterrey, fue asesinado por la Liga 23 de septiembre, en un intento de secuestro. En su funeral, Ricardo Margáin, importante ejecutivo de ese grupo económico, hizo un discurso en el que acusaba al gobierno de Echeverría de propiciar la violencia. Tal acto provocó por parte del presidente de la nación, la iniciativa de integrar la *alianza popular nacional* para enfrentar a los “empresarios antipatrióticos”. Los sectores populares comenzaron a manifestar su apoyo al presidente hasta que en octubre de ese año la familia Garza Sada reprobó el discurso de Margáin (Arriola, 1988, 1981; Basáñez, 1990, 1981). Aun así, el enfrentamiento político entre el Estado y los empresarios mexicanos era ya muy evidente. Se abrieron las puertas de un profundo conflicto, pues no sólo se trataba de declaratorias en un sentido y otro, sino que en esos mismos momentos, el gobierno de Echeverría instrumentaba una medida más para proyectar su “populismo económico” que pretendería ganar el respaldo de las clases trabajadoras, acción que le daba a la burocracia política, la oportunidad para reivindicar la hegemonía del Estado ante la oposición empresarial. El manejo de una política exterior antiimperialista que estrechaba vínculos diplomáticos con gobiernos que profesaban sistemas sociales antagónicos a los principios ideológicos, políticos y económicos de la clase empresarial, así como su intención de reiterar los derechos de las clases trabajadoras, definía su posición política de claro antagonismo con la ideología empresarial (Valdés, 1997; Hernández, 1988; Saldívar, 1989).

El gobierno de Echeverría intentaba compensar los *flujos de energía* provenientes de un claro cambio en el sistema político: la movilización de la sociedad mexicana. Este fenómeno intrasocietal, obligaba a centrar la atención en uno de los principales rasgos del sistema político, pues la contraparte de un *estado social autoritario* era una sociedad sometida ideológicamente al poder hegemónico de la burocracia política. Tal movilización representaba para un *sistema estable*, la *pérdida de energía* que, por primera vez, ponía en entredicho la legitimidad de la burocracia política. El reto para la estructura del poder era demostrar su capacidad de adaptación a las nuevas condiciones imperantes en el sistema. La cuestión giraba en torno a la interacción sistémica entre la política y la economía, de tal manera que el gobierno tendría que recuperar su posición en los dos campos: restableciendo la certidumbre económica y recuperando la credibilidad perdida. Condiciones insoslayables no solo para sobreponerse a la crisis, sino para retomar su posición hegemónica y renovar la capacidad de conducción del sistema social.

Si bien el conflicto de los empresarios y el Estado se va dando conforme avanza la intención reformista del gobierno de Echeverría, para el año de 1975 el sector empresarial ha logrado consolidar una unidad política en torno a una nueva organización que tendrá por objetivo contener las iniciativas estatales. Se trata de la constitución del *Consejo Coordinador Empresarial* (CCE) que se funda en ese año y que aglutina a las principales organizaciones empresariales: COPARMEX, CONCAMIN, CONCANACO, Asociación de Banqueros de México (que después de la nacionalización de la banca fue sustituida por la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (organización que en esos momentos agrupaba a los 36 capitalistas nacionales más poderosos del país) y el Consejo Nacional Agropecuario. Esta *organización de organizaciones* funge como punta de lanza en la oposición ante el Estado, en un momento que la crisis económica ya ha dejado ver sus efectos más negativos para la nación. La confrontación ideológica entre esos dos actores sociales se habían recrudecido, el primer documento del CCE se titulaba "*Proyecto para crear una imagen adecuada y fidedigna de los empresarios*", en éste se establecía una estrategia de trabajo basada en los siguientes puntos: a) la necesidad de incidir en la opinión pública, b) en el campo de los intelectuales que a su vez tenían influencia en las universidades y c) en el ámbito de empleados y trabajadores de las empresas privadas (Arriola, 1988:78). En estos puntos se advierte claramente la propuesta inicial de la CAMCO, a partir de su iniciativa lanzada en 1972 (Millán, 1988), sin embargo, no queda la menor duda que la

CAMCO influyó de una manera muy importante en la creación del CCE (Millán, 1988). Sin embargo, habrá de reconocerse que el *Consejo Mexicano de Hombres de Negocios* fue la instancia que se encargó de concretar la propuesta y dar forma a la nueva organización empresarial, con el obvio apoyo de la ABM, COPARMEX, CONCAMIN, CONCANACO (Ortiz Rivera, 2005).

A partir de la puesta en marcha de la estrategia política empresarial, se observa un viraje en la *cultura política del empresariado mexicano*. Además, su evolución refleja cómo la clase empresarial va adquiriendo rasgos de un *sujeto político*, esto es, de un actor social protagónico que se revela ante el paternalismo estatal, y que en lo subsecuente asumiría un rol activo en la definición de la historia, por tanto, claramente dispuesto a la contienda política en la defensa de sus intereses de clase (Valdés, 1997, 1988; Hernández, 1988).

La situación económica y la relación de los empresarios y el Estado se van complicando conforme se acerca el final del sexenio. En los dos últimos años del gobierno de Echeverría se hizo más evidente la oposición de los empresarios a la política económica del Estado, como es el caso del endeudamiento externo que, poco a poco, fue desbordando las posibilidades de recuperación de la economía nacional. Por otra parte, las presiones de la economía internacional como es el caso del conflicto petrolero que generó las posiciones de la OPEP, así como la fuga de capitales obligaron al gobierno a devaluar el peso (Farias Hernández, 1997). Esto duplicó inmediatamente el costo del dólar que se había mantenido estable desde 1954, con un tipo de cambio de 12.50 pesos por dólar, pasando a un precio de 25 pesos por dólar, lo cual afectó negativamente a la economía nacional en sus relaciones de intercambio comercial con el exterior. Esta situación empeoró cuando los empresarios nacionales comenzaron a utilizar la *fuga de capitales* como instrumento de presión política y económica contra el Estado. Esta acción empresarial coadyuvó a acrecentar la crisis de un modelo de acumulación que ya había dado señas de su agotamiento desde el principio de este régimen (Rivera Ríos, 1986).

Como se puede observar en otro tipo de acciones provenientes de los principales actores políticos del escenario nacional, la fuga de capitales representaba una *pérdida energética* que *desestabilizó al sistema*. Esto es, una acción ubicada claramente en la dimensión económica, que tiene un impacto negativo para el modelo económico, donde es obvia la fuerte presión que el empresariado ejerce sobre la burocracia política con toda la intención de restringir su margen de acción. Por otra parte, la decisión empresarial de recurrir a la fuga de capitales va dando forma a

una estrategia política-económica puesta en marcha desde los conflictos con el gobierno de Echeverría, que dibuja uno de los aspectos de la *nueva cultura política empresarial*. No obstante vale considerar que también expresa el pragmatismo empresarial que ve en la especulación financiera que en todo caso persigue la fuga de capitales, una forma de proteger sus inversiones y ampliar su cuota de ganancia (Farias Hernández, 1997). Lo cual refleja, también, un cambio en la práctica política de este actor que pretende transformar las estructuras de poder, la posición que él mismo guarda respecto a quienes toman las decisiones más importantes para definir el rumbo del país.

En este acto observamos claramente la relación entre el poder político y el poder económico, con lo cual afecta la imagen que proyecta la *burocracia política* como máxima autoridad en las estructuras del poder. La calidad hegemónica del Estado mexicano comienza a erosionarse, pues diversos sectores de la sociedad mexicana, los más importantes, comienzan a adoptar nuevas conductas en su interacción con quienes detentan el poder, marcando sus intereses de clase como límite a las aspiraciones de la *burocracia política* (Cordera y Tello, 1981).

A tal grado llegaba ya el conflicto entre el Estado y los empresarios, que éstos, conscientes de que al expresar sus simpatías por algún candidato prácticamente anularían la posibilidad de su postulación, optaron por no manifestarse políticamente. Fue a mediados de 1975 cuando se dio a conocer la postulación priísta de López Portillo, a quien CONCANACO, COPARMEX, CONCAMIN, ABM y AMIS manifestaron su beneplácito que se traduce en el escenario nacional como un claro apoyo político al “candidato oficial”, como una de las adhesiones más importantes de la sociedad mexicana. Por otra parte, es importante recordar que en esa coyuntura electoral, la oposición no presentó candidato a la presidencia en razón de la crisis interna del Partido Acción Nacional, por lo cual el nuevo candidato del partido oficial aparecía como una suerte de *candidato de unidad*, contaba con el apoyo de la representación formal de las clases trabajadoras, y la representación formal de los propietarios del capital. Es decir, el consenso que genera la interacción entre las estructuras gubernamentales y las estructuras corporativas, corazón del sistema político mexicano de esos tiempos (González Casanova, 1981).

La creación del CCE reflejó la *evolución de la cultura política del empresariado mexicano*, la madurez ideológica que le permite a esa clase social actuar de una manera homogénea, desde una posición de *unidad política* que le retribuye mayor presencia en las decisiones gubernamentales, tanto para censurar sus posibles efectos como para legitimar la

validez social de su causa. Las nuevas características de la cultura política empresarial que reflejan la capacidad de influencia de este sector social, son: 1) el manejo de los medios de comunicación masiva, 2) la presión económica que desde entonces se expresa a partir de las fugas de capital, y 3) los recursos destinados formalmente e informalmente a las campañas electorales (Valdés, 1997; Luna, 1992; Tirado, 1990; Millán, 1988; Hernández; 1988). Evidentemente, el discurso político de los empresarios constituyó el principal instrumento de presión en contra del gobierno mexicano, pues la presencia de las comunicaciones de las principales organizaciones empresariales en los medios de comunicación masiva, representaba una de las principales causas del proceso de deslegitimación de las estructuras de poder. A partir de entonces, la hegemonía resguardada por la burocracia política, fue mermando conforme el gobierno mexicano perdía credibilidad (Cordera y Tello, 1981; Basáñez, 1981; Saldívar, 1980).

Obviamente, el nuevo espacio público que daba forma a la Modernidad de los 70's, carece de cuestiones elementales que hacen más dinámica la construcción de un sistema político realmente democrático, como es el caso de la apertura de los medios, y por tanto, la conformación de la opinión pública que no puede emerger como un rasgo contundente de esa incipiente democracia, dado el control del Estado sobre los medios de comunicación. De tal manera que sólo el poder económico de los empresarios mexicanos representa la posibilidad de superar el control sobre los medios, así como la única posibilidad de utilizarlos a favor de un agente diferente a la burocracia política.

Sin embargo, cabe destacar que las elites empresariales de México fueron aprovechando al máximo la endeble condición del espacio público en el que se debaten las cuestiones fundamentales para la nación, de la región o de la localidad. Poco a poco, la presencia empresarial en los medios de comunicación, a partir del discurso de sus organizaciones, fue consolidándose al grado que esa forma de ejercer la política, además de conferirle la identidad política, fue ampliándose hasta definir un proyecto de nación que ofrecería al conjunto de la sociedad mexicana. A ello se sumaría el *Consejo Nacional de la Publicidad*, figura mediante la cual el sector empresarial proyectaba ante la opinión pública, su visión acerca de los aspectos más relevantes respecto a la cultura del consumo y los significados del *deber ser* de la iniciativa privada (Tirado, 1994, 1990; Luna, 1990). Esta perspectiva sugiere la naturaleza de la *calidad energética del sistema social* a partir de la cual se advierte la *interdependencia de lo económico, lo político y lo socio-cultural*; el papel que juega la comunicación como *flujo de la información*,

como vehículo que hace posible la *retroalimentación* a partir de los discursos políticos y los mensajes mercadotécnicos.

De hecho, en los fuertes conflictos con el gobierno de Echeverría, los empresarios recurrieron más a sus principales organizaciones sectoriales que al PAN, pues era evidente que la debilidad política de dicho partido hacía de éste un instrumento incapaz de encabezar la contienda político-ideológica contra la burocracia política de esa época. Sin embargo, era evidente que la participación directa en la política tendría que darse a partir del partido representativo de la *derecha mexicana*, por lo que desde ese momento las coyunturas electorales fueron los mejores reflectores para promover el proyecto de nación que los empresarios mexicanos comenzaban a construir, lo que supone un proceso de apropiación de esa instancia política. Y por ello la diversificación de los instrumentos de presión de los que disponía el sector empresarial (Loaeza, 1999; Nuncio, 1986). Por ello adquiere relevancia la interpretación de González Morfín, dirigente del PAN en ese momento, quien en noviembre de 1975, declaraba:

*Debo denunciar y reprobador ante ustedes la creación y mantenimiento, incluso mantenimiento financiero, de otro partido Acción Nacional, con ideología, organización, jerarquía, lealtades y comunicaciones al margen y en contra del Partido Acción Nacional (Nuncio, 1986: 20).*

Como se puede observar, los líderes tradicionales del PAN criticaban la marcada presencia del sector empresarial en ese partido, lo que en todo caso significó el desplazamiento de los panistas tradicionales y el acceso de los empresarios en esa institución política. Lo cual con el tiempo, explica el giro ideológico-pragmático que adecua a ese partido a los intereses empresariales en las coyunturas subsecuentes. Se trata de una suerte de renovación de los cuadros políticos de PAN, en la cual comienzan a destacar líderes de un claro perfil empresarial. Lo que explica cómo, poco a poco, ese partido comenzó a representar los intereses de clase del empresariado mexicano. De tal posición eran señalados como responsables más visibles, José Ángel Conchello y Pablo Emilio Madero, quienes habían sido infiltrados por grupos económico poderosos con el objeto de apropiarse de ese partido, según ideas de Mauricio Gómez Morín.

*Son los cambios que ha sufrido el país los que le van a permitir al PAN anudar sus orígenes con la persecución del poder por la burguesía empresarial en la coyuntura vigente. El núcleo hegemónico de esta burguesía asume su dirección desplazando a la corriente liberal que lo regía prácticamente desde su nacimiento y que tuvo en Manuel Gómez Morín, Efraín González*

Luna, Adolfo Christlieb Ibarrola y Efraín González Morfín sus exponentes más localizados (Nuncio, 1986: 19).

Ello sugiere cómo el sector empresarial comenzó a apropiarse del PAN o a “colonizarlo” en expresión de Granados Chapa, contando por tanto, con diferentes instrumentos de presión frente al Estado: desde la figura de las organizaciones empresariales que aparecían como “órganos de consulta” y los partidos que, se suponía, participaban formalmente en las decisiones del sistema político mexicano. No obstante, en esos momentos la figura del *presidencialismo* expresaba la concentración del poder en el ejecutivo en detrimento del papel del legislativo y el judicial (Carpizo, 2002).

Así, la participación política de los grandes empresarios en el escenario nacional, es decir, haciendo públicas sus posiciones por los instrumentos correspondientes (las organizaciones empresariales) y por medio de las posiciones *panistas* que, poco a poco, desplazaron a la corriente católica, vieron sus frutos en las coyunturas donde peligraban sus intereses de clase. Por otra parte, es importante destacar cómo la *derecha* va adquiriendo consistencia, poco a poco, encontrando semejanzas ideológicas entre actores políticos que tenían una clara posición contraria a los rasgos del modelo de desarrollo que la burocracia política venía imponiendo desde los años 30's (Loeza, 1999). Es el caso de la Iglesia católica, el Partido de Acción Nacional y el Consejo Coordinador Empresarial (ver cuadro de *Convergencias ideológicas de la derecha*).

### CONVERGENCIAS IDEOLÓGICAS DE LA DERECHA

Aspectos	Iglesia Católica	PAN	CCE
<i>Propiedad privada</i>	“Poseer algo como propio y personal es un derecho que dio la naturaleza al hombre. el derecho de propiedad individual de los hombres emana no de las leyes humanas, sino de la misma naturaleza...porque poseer algo propio y con exclusión de los demás es un derecho que dio la naturaleza al hombre” ( <i>Encíclica</i>	“La propiedad privada es el medio más adecuado para asegurar la producción nacional y constituye el apoyo y la garantía de la persona, y de la existencia humana fundamental, que es la familia. Debe promoverse, por tanto, la mayor formación de patrimonios familiares	“El hombre tiene un derecho natural, primario e inviolable, para satisfacer sus necesidades y alcanzar su fin, mediante la propiedad privada y el uso de los bienes materiales. Este derecho comprende igualmente los bienes de producción y los de consumo. Siendo la propiedad privada un

	<i>Rerum Novarum</i> de León XIII). “El derecho de la propiedad privada fue otorgado por la naturaleza. O sea por el mismo creador de los hombres” (Encíclica <i>Cuadragésimo Anno</i> de Pío XI).	suficientes” ( <i>Principios de Doctrina</i> ).	derecho natural y no efecto de leyes humanas, el Estado no puede abolirla, sino sólo regular su uso, inspirándose siempre en exigencias claramente impuestas por el bien común” ( <i>Declaración de Principios</i> )
<i>Concepto de libertad</i>	“La economía no es por naturaleza una institución del Estado; es, por el contrario, el producto vivo de la libre iniciativa de los individuos y de las agrupaciones libremente constituidas” (Pío XII, alocución a la Unión Internacional de Asociaciones Patronales Católicas, mayo 7 de mayo de 1949)	“Para la existencia de un orden económico justo es condición necesaria, pero no suficiente, la libertad de competencia en la libertad de los particulares, limitada de acuerdo con el bien común.” ( <i>Principios de Doctrina</i> )	“En el ámbito económico, la libertad y la dignidad del hombre son conculcadas cuando no se le permite ejercer su propia iniciativa y su acción creadora en la producción de bienes y servicios, o cuando se le impide realizar un trabajo acorde con la vocación personal.” ( <i>Declaración de Principios</i> )
<i>Iniciativa privada</i>	“Ante todo afirmamos que el mundo económico es creación de la iniciativa personal de los ciudadanos, ya en su actividad individual, ya en el seno de las diversas asociaciones para la prosecución de intereses comunes” ( <i>Encíclica Mater et Magistra</i> de Juan XXIII)	“La iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social. El estado debe promover su mejor y más ordenado desenvolvimiento y garantizarlo. En donde la iniciativa privada sea imposible o insuficiente, el Estado ha de urgir la organización de actividades sociales, sin matar, estorbar ni desplazar esa iniciativa, pues en estos casos, la acción administrativa oficial resulta agotante y destructora” ( <i>Principios de Doctrina</i> )	“En un régimen democrático, la actividad económica corresponde fundamentalmente a los particulares y son ellos quienes tienen a su cargo, de manera directa, la creación de la riqueza” ( <i>Declaración de Principios</i> )

**Fuente:** Ideario político del Consejo Coordinador Empresarial e información vertida en Abraham Nuncio (1986) *El PAN. Alternativa de poder o instrumento de la oligarquía empresarial*, Nueva Imagen, México.

Como se puede observar en el cuadro de las *convergencias ideológicas*, las posiciones de la Iglesia católica, el PAN y el CCE, coinciden en la esencia de estos principios ideológicos que son fundamentales en la política, y es a partir de ellos que se da forma a un proyecto de nación impulsado desde 1975, principalmente, por las organizaciones empresariales más importantes del

sistema corporativo. En ese sentido, la distancia respecto de la *ideología nacionalista del gobierno mexicano* es bastante clara, abriendo así un espectro político muy definido donde la *derecha* y la *izquierda* son los referentes obligados para los diferentes actores sociales (Puga, 1990)

En un contexto socio-histórico en el cual se modificaba la relación sociedad-Estado, se iba haciendo cada vez más evidente que la burocracia política comenzaba a perder su posición hegemónica. Otra fracción de la clase dominante se rebelaba ante la autoridad hegemónica que representaba el gobierno, al comenzar a influir en la conducción del PAN (oposición formal) adscrito al sistema de partidos, por organizaciones empresariales que eran reconocidas por el gobierno como “órganos de consulta” para velar por los intereses sectoriales, y por la Iglesia católica que influía en amplio espectro cultural de la sociedad mexicana. Las coordenadas cubiertas por estas entidades políticas que a su vez se nutrían de la participación de diversas organizaciones sociales de corte conservador, eran lo suficientemente considerables para ir dando forma a una *oposición partidista real*. El poder de los empresarios dejaba sentir su peso a partir del respaldo económico que iba dirigido tanto a la Iglesia católica, el PAN, y las organizaciones sociales que jugaban del lado ideológico a sus intereses de clase (Loeza, 1999; Monsiváis, 1994, 1979).

Si políticamente hablando, el sector empresarial como actor político se había fortalecido frente al Estado mexicano, en el terreno económico acontecía una situación análoga si los empresarios se habían desarrollado como una clase económica estrictamente capitalista, era porque su presencia en el mercado nacional era irrefutable y ello les redituaba en una cuota de poder que hacían valer desde su sola posición en la economía nacional. En ese sentido, los procesos de concentración de la riqueza sugerían la consolidación de regiones y grupos económicos que en los años sesenta estaban en condiciones de hacer valer su perspectiva de la nación (Cordero, Santín y Tirado, 1983). Uno de estos procesos es el de la fusión de capitales industrial y financiero. La fusión de capitales se daba en dirección bilateral, es decir grupos bancarios que adquirían empresas con riesgo de quiebra o con incapacidad de pago de deudas, o grupos industriales que en su expansión adquirían bancos, formando grandes consorcios donde los flujos de capital al interior del mismo facilitaban la acumulación de la riqueza en manos de los propietarios o principales accionistas. Esto marca una dinámica donde poco a poco el capital nacional va adquiriendo mayor importancia tanto en el terreno económico como en el político

(Rivera Ríos, 1986; Guillén, 1984; Valenzuela, 1984). Se trata de un reequilibrio entre la fuerza político-ideológica del empresariado mexicano y la burocracia política, de una recomposición al interior de la clase dominante.

*La política económica puesta en marcha observó dos periodos: el primero, de 1971 a 1973, que comenzó con la aplicación de medidas contractivas para controlar los marcados desequilibrios fiscales, de intercambio exterior y de precios. Dichas medidas consistieron en la restricción del gasto público y en una política monetaria y de crédito igualmente restrictiva...El segundo periodo (1974-1976) mostró la agudización de estas tendencias en el contexto de la crisis económica -tanto nacional como internacional- y del enfrentamiento de dos posiciones diferentes en la política económica dentro del gobierno: la de aquellos que defendieron la línea de "estabilización", y la de los que intentaron promover el "proyecto original" de Echeverría, nacionalista y reformista. Esa pugna se resolvió, finalmente, a favor de los primeros (Valdés, 1988: 236).*

La característica del período 1970-1976, en cuanto a las relaciones entre el Estado y los empresarios mexicanos, está definida por el surgimiento de un conflicto que posibilitó la unificación empresarial contra el Estado. Tal situación no fue la primera, pues ya se habían registrado conflictos de una naturaleza semejante, como aconteció en el gobierno de Cárdenas y López Mateos. Sin embargo, la diferencia es que a partir de esta coyuntura se transforma la correlación de fuerzas entre el poder político y el poder económico, pues en esta ocasión se reconocía una crisis económica y avanzaba la crisis de legitimidad de la *burocracia política*, lo cual permitía cuestionar su capacidad hegemónica para conducir a la nación (Basañez, 1981; Cordera y Tello, 1981; Saldívar, 1980).

En la década de los 70's, se hizo evidente que los esfuerzos gubernamentales para fortalecer la dinámica del proceso de industrialización iniciado desde la década de los cuarenta, desgastó la capacidad financiera del Estado mexicano; el sector empresarial se vio favorecido en su consolidación como clase, y por tanto, como figura económica en el desarrollo de la nación (Rey Romay, 1984; Villarreal, 1988). De hecho, la fortaleza económica del empresariado nacional posibilitó que este sector emergiera como un nuevo actor social políticamente importante. Su capacidad financiera le permitió, en todo caso, desplegar una estrategia de posicionamiento dentro de la estructura del poder, así fuera a partir de una posición privilegiada como "grupos de presión" con la suficiente fuerza política como para influir en las decisiones gubernamentales. La confrontación se hacía cada vez más evidente y así como los empresarios desarrollaban sus estrategias de posicionamiento, la burocracia política ponía en juego sus

instrumentos de poder a partir de las estructuras corporativas y todo tipo de artimañas que el sistema aprendió y desarrolló desde los años treinta (Aguilar Camín y Meyer, 1989).

A principios de 1976 la *Conferencia Nacional de Colonias Proletarias*, organización fantasma, denunciaba en un desplegado en el periódico *Excelsior*, el 21 de febrero, la conspiración de acaudalados empresarios encabezados por la familia Garza Sada para *desestabilizar al país mediante rumores*. El desplegado señalaba que el objetivo de esa campaña era desprestigiar la persona del presidente Echeverría y contener la *Ley de Asentamientos Humanos* (Millán, 1988:74). Una de las últimas políticas que reflejaban el paternalismo de los gobiernos posrevolucionarios fue el decreto de Echeverría para expropiar las tierras del Yaqui. Esta medida apuntaba a frenar la movilización campesina en el norte del país, que exigía una revisión de la reforma agraria, al mismo tiempo que fortalecía la posición del gobierno ante los empresarios. El alcance de la política gubernamental afectó a la fracción terrateniente que se había aliado con la fracción industrial del norte del país. Aunque no fue suficiente para obtener los objetivos planteados, puesto que si bien fue un duro golpe a los grandes propietarios, esto provocó una participación política más agresiva por parte del sector empresarial (Guadarrama, 2001).

La crisis del proyecto posrevolucionario así como del modelo de acumulación se hacía evidente, la política no podía reproducirse según la tradición de la “familia revolucionaria” y la economía no tenía posibilidades de recuperar la estabilidad que hizo posible el desarrollo industrial que permitió a México incorporarse a la Modernidad. Todos los intentos que el gobierno de Echeverría realizó para recuperar la estabilidad económica del pasado, fueron fallidos. El intervencionismo económico del Estado mexicano no fue suficiente para resolver la crisis del modelo de acumulación. Como señala Gollás:

*El déficit presupuestario se incrementó, en relación al PIB, de 2.5% en 1971, a 10% en 1975; el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos creció de 900 millones de dólares en 1971 a 4,400 millones de dólares en 1975; la deuda pública creció de 6,700 millones de dólares en 1971 a 15,700 millones de dólares en 1975, y la tasa de inflación de 3.4% en 1969, a 17% entre 1973 y 1975 (Gollás, 2003: 238).*

Tal situación se agravó con la *fuga de capitales* que orilló al gobierno de Echeverría a devaluar el peso frente al dólar en 1976, situación que confirmó el marco de una crisis económica y política sin precedentes en el periodo posrevolucionario. Sin embargo, a pesar de evidente crisis política y económica, llamada en esa coyuntura “crisis de confianza”, las estructuras que

caracterizaron al sistema político en el periodo posrevolucionario permanecieron intactas en un escenario nacional volátil y riesgoso. Ese sería el escenario sobre el cual, el próximo gobierno tendría que definir una estrategia para resolver la crisis que aquejaba a la sociedad mexicana.

### *3.1.2 La profundización de la crisis: ¿último aliento del nacionalismo revolucionario?*

Si bien era evidente el agotamiento del modelo de desarrollo instaurado a partir de los años treinta, ni la crisis política ni la económica habían provocado la transformación de las estructuras del sistema a partir del cual se reproducía la sociedad mexicana. Sin embargo, el hecho de reconocer el surgimiento de esa crisis, sugiere al menos una clara situación de emergencia respecto de la cual el sistema se ponía a prueba. Es decir, considerando la emergencia del fenómeno de la crisis, que la elite en el poder, la burocracia política, tiene que dar muestras de su capacidad para resolver la situación, de la experiencia suficiente para garantizar que el sistema pueda responder a los cambios que le impone su ambiente, de definir la estrategia que le permita encauzar el transcurso del desarrollo económico que se hizo patente en el periodo posrevolucionario y que, por tanto, permita que el sistema se adapte a las nuevas circunstancias, que ahora, como lo señala Habermas (1986), impide al sistema reproducirse como en el pasado. Se trata, entonces, de restablecer la estabilidad económica, política y cultural que había prevalecido a lo largo de cinco décadas.

No obstante, independientemente de la situación económica que se heredaba del Gobierno de Echeverría (1970-1976), no cabía la menor duda que el principal reto político para el nuevo gobierno era restablecer la confianza del sector empresarial. Se trata fundamentalmente de la credibilidad que todo sistema requiere para mantenerse estable en el tiempo, de la credibilidad que toda elite política requiere para mantenerse legítimamente en el poder. Al parecer, la mejor estrategia para enfrentar la crisis heredada, de un claro corte económico y un carácter evidentemente político, era precisamente restableciendo la unidad del clase dominante, por lo que en el caso mexicano, y en esa coyuntura en concreto, la posición hegemónica de la burocracia política exigía que se avanzara, primero, en resolver la fisura creada por el conflicto empresarios-estado. De hecho, la posibilidad de restablecer la unidad al interior del clase dominante, entre el poder político y el poder económico, sería la mejor forma de resolver la crisis política y avanzar

en la resolución de la crisis económica. *La recuperación de la credibilidad era sustancial para que la fracción hegemónica continuara simbolizando el poder, la capacidad de conducción del bloque dominante y de la sociedad en general.*

Por ello, las primeras señales enviadas por el presidente electo José López Portillo para el sexenio 1976-1982, fueron dirigidas a exaltar la importancia que la iniciativa privada representaba para el modelo de desarrollo económico. De tal manera que si el nuevo gobierno atendería las demandas de apertura política que la sociedad demandaba, parecía evidente que su interés fundamental estaba cifrado en atacar las causas de la crisis económica (déficit presupuestario, endeudamiento externo, inflación, inestabilidad del tipo de cambio), pues ello constituía la principal amenaza de asfixiar económicamente a la nación. Para solventar esta situación se hacía necesario reactivar la economía a partir de un proyecto de desarrollo lo suficientemente atractivo que "recuperara la confianza del sector empresarial", garantizando así su participación, incrementando su inversión y participación en los nuevos proyectos nacionales. El nuevo proyecto que impulsó la elite política conocido como el programa de *Alianza para la Producción*, además de incorporar las medidas acordadas con el FMI (flotación del peso, libertad cambiaria, déficit presupuestario no mayor al PIB para el año de 1977, etc.), se propuso ganar el consenso social así como conciliar los dos polos antes en conflicto: los empresarios y el gobierno mexicano (Guillen, 1984; Basáñez, 1990; Saldívar, 1980).

El objetivo de la *Alianza para la Producción* era obtener los excedentes necesarios para resolver los aspectos del desarrollo que no fueron lo suficientemente atendidos en gobiernos anteriores, es el caso de la salud, la educación, la alimentación, pero también definir las prioridades e incentivos del sector empresarial. Se trataba de dar forma a un proyecto nacional de desarrollo en lo que fueran contemplados todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo el conciliar los objetivos nacionales con los intereses particulares, lo que apuntaba políticamente a la resolución del conflicto burocracia política vs. empresarios (Hernández, 1988).

En la medida que López Portillo refrenda su disposición para conciliar el proyecto económico de su gobierno con los intereses empresariales, la actividad política de los empresarios se va desactivando paulatinamente. La unidad de ese sector social alcanzada con la formación del CCE en el año de 1975, se desarticula nuevamente. En la práctica se dan cambios en la dirigencia de las organizaciones empresariales; *la línea radical es sustituida por la moderada en la medida que el nuevo gobierno abandonaba las posiciones populistas y prioriza*

*la conciliación con los empresarios nacionales* (Arriola, 1988). Se trataba de evitar la resignificación de una crisis económica en una crisis de confianza, en esos momentos se requería fortalecer a la figura presidencial, para propiciar una conciliación que habría de traducirse en un necesario respaldo político e ideológico que en esos momentos sería brindado por los empresarios. Las respuestas no se hicieron esperar, en febrero de 1977, el representante de la Camco-Monterrey se comprometió a hacer una campaña para que retornaran al país los “capitales golondrinos” fugados al finalizar el sexenio de Echeverría. Mientras que la CANACINTRA y la COPARMEX declaraban que el retorno de los capitales sería lento y cauteloso mientras no se garantizara la protección a la propiedad privada. Aun sin que coincidieran en las posiciones ante la situación del país y el gobierno mexicano, las *organizaciones empresariales* redujeron gradualmente su actividad ideológico-política retomando su carácter de organismos sectoriales, los cuales tienen por objetivo fundamental abocarse a la observancia de la gestión económica ante el Estado (Millán, 1988).

La respuesta del empresariado en el plano económico, con la cual mostraba su disposición ante la nueva política del Estado, según declaraciones del CCE el 4 de febrero de 1977 en el periódico *Excelsior*, era fundamentalmente promover el incremento de la inversión y la productividad, propiciar el más bajo nivel de los precios, garantizar un programa de productos básicos, promover la imagen de México en el extranjero, y *promover la confianza y el optimismo en el futuro del país*. En ese sentido, si bien discursivamente el sector empresarial daba muestras de su disposición a reconsiderar los esfuerzos de gobierno de López Portillo para resarcir el daño político que provocó el conflicto del sexenio anterior, la evidencia que adquiría la crisis económica y la lenta y parcial respuesta empresarial a la demanda del Estado mexicano, sobre todo lo que toca a la repatriación de “capitales golondrinos” que se fugaron a finales del sexenio de Echeverría, se proyectaba como el contingente de mayor peso para lograr el éxito del proyecto económico (Arriola, 1988; Millán, 1988). Dicha situación era reconocida por importantes voceros del sector empresarial, como apunta Hernández:

*Sánchez Mejorada, presidente del CCE, señala que “muchos industriales no quieren darse cuenta de que en este momento debe haber ganancias y utilidades a bajos niveles. No se dan cuenta de que este no es el momento de los negocios fabulosos, sino de cooperación para sacar al país de su marasmo”. Un día después hace el llamado a reinvertir tal como en el sexenio anterior se dedicaron a difundir rumores sobre golpes de estado.*

*Los empresarios reconocían de diferentes formas que no había recursos porque no regresaban los capitales fugados: “sí hay confianza, lo que no hay es capital”. Curiosa mezcla de argumentos, pues antes habían ligado el regreso de capitales a la recuperación de la confianza. Y esta contradicción se vuelve patente incluso para ellos mismos. Con días de diferencia, Bernardo Garza Zada y Agustín Legorreta reconocen que no hay motivos para desconfiar pues los programas del gobierno son una garantía para la inversión (Hernández, 1988: 108).*

Con la intención de promover el proyecto de *alianza para la producción*, el presidente de la nación visitó el estado de Nuevo León, bastión del ala más radicalizada en contra del gobierno en el sexenio echeverrista. De hecho, el acto se llevó a cabo el 28 de marzo de 1977 en el Club de Industriales de Monterrey, y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo Bernardo Garza Sada, presidente del *Grupo Industrial Alfa*. En ese evento, el presidente de la nación; José López Portillo, hizo gala de su abierta decisión de restablecer la confianza con el sector empresarial:

*Era para mí muy importante venir a Monterrey, para acreditar ante los ojos de la nación que los empresarios regiomontanos son profundamente nacionalistas, que comparten los ideales de nuestras instituciones, que se solidarizan con el país, que están dispuestos a tomar con el país sus riesgos, que enfrentan su pecho al destino.*

Como se puede observar, la intención de López Portillo por desagrar a los empresarios regiomontanos se hace explícita al reconocer en ellos su compromiso con la nación, su *nacionalismo*, ausencia en su práctica que el gobierno anterior les reclamó, y a partir del cual Echeverría convocaba a los trabajadores organizados a dejarse guiar por los destinos de la nación y a organizarse en contra de las expresiones antinacionalistas. Se esa forma se justificaba que en su proyecto se daba peculiar importancia a los “intereses y necesidades del sector productivo” (Hernández, 1988)

La importancia que reviste para el gobierno de López Portillo incorporar a los empresarios en el desarrollo del país, se refleja en los convenios de inversión conjunta, entre el capital estatal y el privado nacional, firmados con las fracciones más radicales del sector empresarial. Evidentemente, la estrategia del nuevo régimen apuntaba a recuperar de inmediato la confianza de los empresarios nacionales.

*En la práctica, la confianza recuperada se expresaba con la celebración de convenios de inversión conjunta como el celebrado con el Grupo Monterrey y el gobierno por 100 mil millones de pesos, también los créditos concedidos al Grupo Alfa por Fonatur para el desarrollo de un conjunto turístico de gran lujo en Manzanillo, y finalmente, la concesión de la segunda etapa del conjunto siderúrgico Las Truchas al mismo Grupo Alfa. Con todo este tipo de concesiones los representantes del gran capital se han convertido en los*

*principales defensores de J.L.P. ante algunas críticas surgidas de otros sectores".*  
(Cordero,1982:102)

Evidentemente, la decisión de recuperar la confianza del sector empresarial iba más allá de lo estrictamente discursivo, se refrendaba a partir de incentivar generosamente la participación de la iniciativa privada en los proyectos de desarrollo promovidos por el gobierno mexicano. Ello constituyó la fórmula más eficiente para disuadir políticamente a la fracción de la clase económica más poderosa, económicamente hablando, y más radicalizada contra el Estado.

Por otra parte, el paulatino agotamiento del modelo de desarrollo posrevolucionario hacía patente la víspera de una crisis económica, los descubrimientos de yacimientos petroleros representaron una suerte de seguro contra la crisis, lo mismo que una garantía para los inversionistas nacionales y extranjeros. Las reservas probadas de 14 mil millones de barriles, *Informe Presidencial, 1º. Septiembre, 1977*, daban al Estado mexicano el respaldo financiero para continuar dirigiendo la economía nacional, a partir de su presencia predominante en su desarrollo. El petróleo dotaba a la *burocracia política* de capacidad negociadora ante la iniciativa privada y el capital extranjero, en la medida que recuperaba la autonomía para orientar la inversión, manteniendo así su hegemonía en la conducción de la economía. Esto se planteó a partir de dos puntos fundamentales: a) activando la producción industrial en torno a la producción petrolera, con el fin de propiciar la creación de mayor número de fuentes de trabajo; y b) fortaleciendo la situación financiera del gobierno a partir de las divisas generadas por la exportación del petróleo (Basáñez, 1981).

Sin embargo, el ofrecimiento de la alianza y las muestras concretas que probaban la voluntad de este gobierno, no fueron suficientes para garantizar que en ese “esfuerzo compartido”, las partes se obligaran a cumplir con su parte, como se comprobó al finalizar el sexenio. De hecho, los líderes corporativos mantuvieron una actitud crítica respecto del compromiso del sector empresarial, observando la desconfianza de las clases trabajadoras respecto a que el nuevo proyecto de desarrollo, *alianza para la producción*, satisficiera las necesidades y produjera beneficios concretos para *todos los sectores sociales*, pues si bien los aumentos entre 1977 y 1979 registraron aumentos de 10, 13 y 15%, el poder adquisitivo disminuyó en un 6.6 %. No obstante, la producción petrolera, la capacidad financiera que ello implica, permitió a la *burocracia política* manejar políticamente las resistencias expresadas tanto

por las clases trabajadoras corporativizadas, como por el *movimiento sindical independiente*, y conducir el proceso de recuperación económica (Rivera Ríos, 1986; Guillén, 1984).

En 1979, el gobierno presenta su *Plan de Desarrollo Industrial* (PNDI) con el cual pretende dar mayor coherencia a la *Alianza para la Producción*. Era sorprendente que primero hubiera aparecido un plan industrial y después uno de carácter global. En realidad, como señala Rogelio Hernández, se trataba de un plan donde prevalecía el optimismo de la burocracia política. Ahí se marcaban altos objetivos a partir de los cuales se esperaba el beneficio de todos los sectores sociales, como es el caso de plantear un crecimiento del empleo de 5% anual, y el PIB en 7% para ese año, hasta hacerlo llegar al 10% para 1982. Si tales objetivos pecaban de un evidente optimismo, el beneplácito del sector empresarial hacía más creíbles las posibilidades de llegar a tales metas, como lo demuestran las declaraciones de Bernardo Quintana: *Nunca antes hemos estado tan seguros como ahora de que México se encuentra, gracias a la riqueza de los hidrocarburos, en la antesala de una época de prosperidad y de crecimiento sostenido* (Hernández, 1988: 131).

Por otra parte, la nueva coyuntura internacional a partir de la cual comenzaba a tratarse la posibilidad de que México se incorporara al GATT, propició que se reconociera, a pesar de la formación del CCE cuya esencia era promover la unidad al interior del sector empresarial, la gran heterogeneidad de este sector social. Pues si anteriormente había sido pertinente reconocer diversas posiciones político-ideológicas dentro del empresariado mexicano, a partir, cuando menos, de reconocer la presencia de un sector *nacionalista* siempre dispuesto a negociar con la *burocracia política*, fundamentalmente representada por la CANACINTRA, también era posible reconocer su contrapartida: la existencia de un sector *no necesariamente nacionalista*, distante y manteniendo posiciones antagónicas ante el Estado que le valió el reclamo de gobernantes como Cárdenas, López Mateos y Echeverría (Story, 1990; Puga, 1990).

Evidentemente, la presencia en el *espacio público* de un discurso de la CANACINTRA que evocaba a la causa nacional, hizo posible legitimar la decisión del gobierno de López Portillo por no ingresar al GATT. Dado que desde 1979, ante la posibilidad de incorporarse a dicho acuerdo, los empresarios no alcanzaron a presentar una posición unificada ante tal eventualidad, por lo que el Estado manejó la negociación con relativa autonomía (Hernández, 1988; Puga 1990).

Ya para el 18 de marzo de 1980, en el discurso pronunciado por el presidente de la nación se planteaba la decisión acerca de las demandas de los empresarios: a) la creación del Sistema Alimentario Mexicano, b) mantener una explotación petrolera de 2.5 millones de barriles diarios, y c) no ingresar al GATT, (Millán, 1988). Sin embargo, tanto las destinadas decisiones gubernamentales como la apática respuesta empresarial, provocó un galopante endeudamiento externo, que en el sexenio de López Portillo alcanzó un volumen aproximado de 90 mil millones de dólares. La profundización del déficit presupuestario, la devaluación del peso y la galopante inflación al final del sexenio reflejaron lo ficticio del crecimiento económico impulsado por el auge petrolero. El primer descalabro se dio en julio de 1981 cuando el precio del petróleo en el mercado internacional bajo de 34 a 29 dólares por barril. El segundo, a principios de 1982 cuando se autorizaron los incrementos salariales. Y tercero, con la decisión del Banco de México, de retirarse del mercado cambiario, por lo que se propició aun más la especulación cambiaria y la *fuga de capitales*. Esta última situación no refleja necesariamente la intención de los empresarios mexicanos para presionar al gobierno de López Portillo, sino la intención de ese sector para hacer rendir más su capital, sin importarles las condiciones económicas del país. Lo que queda claro es que esta medida promovida por los empresarios nacionales afecta gravemente la situación financiera y representa, a la vez, el detonante que provoca nuevamente una confrontación con el Estado (Guillén, 1984; Valenzuela, 1986, Rivera Ríos, 1986).

En cuanto a las relaciones comerciales con el exterior, la balanza comercial ya registraba preocupantes déficits, ya que pasó de 1,054.7 millones de dólares en 1977, a 4,510 millones en 1981. Tales cifras resultan más significativas si se considera que el relevante papel que jugaba la exportación de petróleo, en contraste de la poca eficacia exportadora del sector empresarial y el aumento de sus importaciones, sobre todo del sector manufacturero, lo cual provocaba que el total de las importaciones de la iniciativa privada, aumentaran de 3 587.6 m.d.d. para 1977, a 15 107 m.d.d. en 1981. Lo que hace suponer que ese fenómeno se financiara con los excedentes petroleros y el lento deslizamiento del peso que tuvo un incremento de 26.22 % para 1981. Tal situación se agravaba todavía más, si se considera que la fuga de divisas pasó de 22.5 m.d.d. en 1977, a 8 372.7 m.d.d. en 1981, lo que desequilibró visiblemente la balanza comercial. Esta nueva relación con el exterior constituyó una de los principales argumentos gubernamentales para justificar el endeudamiento externo, y a su vez, una de las razones a las que la iniciativa privada

recurrió para culpar al gobierno de la crisis económica que se vive desde entonces (Quijano, 1983, 1981).

No obstante lo desalentador de los principales indicadores macroeconómicos, el sector empresarial reconocía los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano, como lo sugieren las declaraciones de Rubio del Cueto, presidente de la CONCAMIN, quien después de atribuir a cuestiones externas la causa de la inflación, reiteraba su confianza en la estrategia planteada. Lo mismo que el optimismo mostrado por otros líderes empresariales, como es el caso de Arcadio Valenzuela, presidente de la ABM, quien señalaba: “*se ve más claro el despegue de la economía*”, o José Luis Coindreau, presidente de COPARMEX, quien expresaba: “*México ofrece un panorama primoroso*”. Los augurios que hacía el sector empresarial ofrecían la mejor cobertura a las decisiones tomadas por la *burocracia política*, y desde el punto de vista del empresariado nacional, no cabía la menor duda que se había recuperado la confianza perdida en el sexenio anterior (Hernández, 1988).

Sin embargo, a pesar de que el sector empresarial mostraba en general una actitud de apoyo y confianza, también es indispensable ubicar que este actor político se encontraba en franco proceso de politización. Se trata de identificar la presencia de una vertiente empresarial caracterizada por empresarios que se vieron beneficiados por los efectos del desarrollo impulsado por el gobierno mexicano; y otra que confrontó políticamente e ideológicamente al gobierno mexicano a partir de los conflictos generados en el sexenio de Echeverría. Los primeros, más ubicados con la CANACINTRA, los segundos más con la COPARMEX. Unos representan al ala *moderada* (Story, 1990); otros a la *radical* (Nuncio, 1986). En todo caso, a la vertiente *moderada* se sumarían expresiones discursivas en las que se hace gala del optimismo respecto la pertinencia de la estrategia adoptada por el gobierno y del futuro promisorio de la economía mexicana; la vertiente *radical* mediante de una campaña que convoca al empresariado a ser consciente del papel político y social que le toca jugar. Como lo apuntan las notas de Rogelio Hernández:

... Marcelo Sada, todavía dirigente de la Coparmex, anotaba que “*resulta inadmisibles que la capacidad y el liderazgo de los hombres de empresa no se pongan también al servicio de México en la esfera política y social por considerar que ésta es mezquina y degradante*”. O como señalaba Manuel J. Clouthier, ya como presidente de esa organización: “*Los empresarios no volverán a ser, como lo fueron en años recientes, ciudadanos de segunda... Cualquiera que sea el futuro, no debemos correr el riesgo que nos sorprenda divididos, sin un programa de acción, sin un liderazgo eficiente y sin los recursos técnicos y humanos que nos permitan participar decisivamente en esa labor... el*

*futuro del país depende, cada vez más, de nuestra decisión para fundar y sostener dignamente organizaciones sociales, cívicas y profesionales”* (Hernández, 1988: 165).

Esto permite comprender el significado que tuvo la creación del CCE como instrumento que permitió al sector empresarial fortalecer una *identidad* y unidad de clase. Ya que anteriormente el empresariado nacional no se presentaba como un conjunto homogéneo a pesar de la presencia del discurso de las diferentes organizaciones empresariales en los medios de comunicación, cuyo sentido solo comprobaba un ambiente de colaboración y confianza en las decisiones gubernamentales, sin descuidar el avance y consolidación de la nueva condición política que tenía el empresariado mexicano (Arriola, 1988; Tirado y Luna 1992; Valdés, 1997).

Las mismas contradicciones que la heterogeneidad de intereses provocaba y la crisis económica que cada vez se hacía más evidente con la caída de los precios del petróleo en 1981, hicieron factible que comenzara a privar en el discurso empresarial una actitud de crítica y reclamo respecto de la economía mixta, de la perniciosa participación del estado en la economía, por lo cual diferentes líderes empresariales demandaban la participación de la iniciativa privada en la generación de hidrocarburos, particularmente en la producción y comercialización del petróleo. Tal situación se hizo más evidente conforme el *ala radical* se apropiaba de importantes organizaciones empresariales, como es el caso de Manuel J. Clouthier al frente de COPARMEX a partir de 1978 y después a la presidencia del CCE, a partir de 1981; José A. Chapa, como presidente y Emilio Goicochea como vicepresidente de la CANACO de Monterrey. Las relaciones entre la burocracia política y los empresarios mexicanos se tornaron más ríspidas. El discurso empresarial, fortalecido por los rumores, adquiría un tono más beligerante, como ya se advertía al finalizar 1980:

*Al principiar octubre, el director del CCE Francisco Calderón anuncia la puesta en marcha de una conspiración que busca subvertir el orden y la legalidad constitucional al obligar al Estado a adueñarse de “todos los medios de producción”. Tal campaña está organizada por universidades, partidos políticos, intelectuales y líderes sindicales, por ello, tras indignarse por la apatía empresarial, Calderón convoca al gremio a defender “con alma, vida y corazón” las instituciones. Por su parte, Pablo Gerber, presidente del Centro Patronal de Jalisco, agregaba: “Hoy como ayer se nos pretende llevar a un modelo de país que no encaja con nuestra idiosincrasia y nuestra historia, ayer, socialista-comunista. Hoy socialdemócrata: ambas totalitarias”.*

*Una arenga política de esta índole, al igual que los ataques de Clouthier al gobierno, eran incomprensibles en medio de un gobierno que se caracterizaba por no tocar al empresariado. La arenga, pues, era un preámbulo de algo más importante* (Hernández, 1988: 177).

Vale la pena considerar que este fenómeno va adquiriendo mayor presencia en los medios de comunicación, y por lo tanto mayor significado político, en un contexto latinoamericano en el cual se critican los proyectos económicos que privilegiaban la participación del Estado en la economía, la concentración del poder en la burocracia política y la existencia de un mercado que limita la participación de la iniciativa privada. De hecho, el ascenso de las dictaduras en América Latina, representaban el aval de los Estados Unidos para que esos países instauraran proyectos económicos que liberaran su mercado y privilegiaran la participación del empresariado tanto nacional como extranjero. De esa manera, se hacía evidente la aproximación de la política estadounidense y la ideología empresarial, lo que simbólicamente representaba una clara oposición al *discurso nacionalista* que en el pasado legitimaba el papel hegemónico que ejercían las elites políticas que se habían apropiado del Estado. El arribo de Reagan al poder a partir de 1981, representa el auge del neoliberalismo, y por tanto de una decidida avanzada en contra del intervencionismo económico del Estado, y lo que de ello deriva, mercados cerrados, falta de competitividad, débil presencia económica de la iniciativa privada, etc. (Villarreal, 1986; Foxley, 1988; Guillén, 1997). En el caso de México, la crisis iba adquiriendo un carácter sistémico, se trataba ya de una crisis económica, política y cultural.

Otro de los singulares ejemplos que reflejan la *nueva cultura política del empresariado*, a partir de una posición de fortaleza política y de una clara decisión por no subordinarse a la voluntad de la burocracia política, es el acto inédito de la iniciativa privada al auscultar el CMHN, en julio de 1981, a los candidatos a la presidencia de la República. Obviamente el acto fue filtrado por la prensa, pues como se sabe perfectamente, a pesar que esta organización empresarial es la más fuerte política y económicamente, ha optado por mantener un bajo perfil en los medios de difusión (Ortiz, 2005). Acudieron a ese proceso: Enrique Olivares Santana, Jorge de la Vega Domínguez, Pedro Ojeda Paullada, Rodolfo Moctezuma, Fernando Solana, David Ibarra y Miguel de la Madrid Hurtado. Al final del mismo, el CMHN emitió un informe en el cual las mejores opiniones se dirigieron a los dos últimos aspirantes, secretarios de Hacienda y Programación y Presupuesto. De hecho, el que haya sido elegido De la Madrid no habría de permitir interpretar que el aval empresarial determinó su postulación como candidato por parte del partido oficial, el PRI, sino simplemente que al hacer público el proceso de auscultación, se ponía a prueba al sistema y obligaba a que se reconociera al sector empresarial como parte de la estructura de poder (Hernández, 1988). Se trataba de un acto *simbólico* mediante el cual se hacía

patente que el poder *metaconstitucional* que derivaba de la figura presidencial, de la concentración del poder en el ejecutivo, comenzaba a erosionarse (Carpizo, 2002; Florescano, 2001).

Se trataba de un escenario en el cual el ambiente político creado por la confrontación del *movimiento sindical independiente* y una creciente participación del sector empresarial que no desaprovechaba la menor oportunidad para manifestar su posición ante una situación económica cada vez más insostenible. De hecho, a pesar que el discurso de los empresarios, sobre todo el del *ala moderada* hacía sus mejores esfuerzos por matizar el encono del discurso crítico y demandante del *ala radical*, prevalecía un escenario de confusión e incertidumbre que erosionaba la credibilidad en el gobierno mexicano. En ese sentido, se dirige el discurso que López Portillo ofrecía a los medios de comunicación, a principios de 1982: “*He sentido en el ambiente nacional una carga emocional espesa, fundada en rumores, en chismes, en deseo legítimo de información, en manipuleo, fundamentalmente externo, de opinión, de datos, etc., lo cual está creando un clima equivalente al de ocasiones anteriores que han precipitado la crisis*” (Hernández, 1988: 197).

El incremento de las exportaciones de petróleo en la primera parte del sexenio, había incentivado el gasto público y el déficit fiscal, éste alcanzó el 14% del PIB en 1981, cuando solo representaba el 7% en 1978. La deuda pública había pasado de 26 000 a 34 000 m.d.d. de 1978 a 1980. A mediados de 1981, la devaluación pasó de 26 a 45 pesos por dólar, los precios del petróleo habían descendido dramáticamente, lo cual provocó una *fuga masiva de capitales* que alcanzó para ese año una cifra de 11 600 m.d.d.. La certeza de la crisis económica no permitía mantener la calma, como señala Gollás:

*Los hechos económicos más importantes de 1982 fueron entonces una drástica devaluación del peso, la disminución de la actividad económica (el PIB creció 0.6%, una inflación de casi 100%, la disminución de las reservas a sólo 18 000 millones de dólares (aproximadamente lo que en promedio se importaba de mercancías en un mes) y un tremendo caos y pánico en los mercados financieros (Gollás, 2003).*

Tal crisis económica se manifestó muy nítidamente entre junio de 1981 y agosto de 1982. El segundo semestre de 1981 se caracterizó por la implementación de un programa de ajuste dada la caída de los precios del petróleo, situación considerada por todos los sectores sociales como pasajera. La segunda etapa del periodo, que corre de principios de 1982 hasta el 1º. de septiembre de ese año, cuando se expropia la banca, se caracterizó por un agravamiento de la crisis y la

puesta en marcha de una campaña de desestabilización política impulsada por el sector empresarial (Hernández, 1988).

El 5 de Agosto de 1982, el Banco de México regresó al mercado cambiario fijando tres *tipos de cambio*: El preferencial (49 pesos por dólar), el *mexdólar* (69.5 pesos por dólar) y el oficial (75 pesos por dólar), mientras que en el mercado negro se cambiaban 150 pesos por dólar (Guillén, 1984; Valenzuela, 1986). Los principales grupos empresariales de Nuevo León daban su diagnóstico acerca de la causalidad de la crisis económica: a) el excesivo déficit público, b) la multiplicación de las empresas paraestatales, c) el crecimiento del aparato burocrático, d) los subsidios a los servicios estatales y e) el control de precios. Como es posible advertir, los empresarios mexicanos cuestionaban el modelo de desarrollo económico que impulsaba la *burocracia política*, se preparaba ya la reactivación política de ese sector (Arriola, 1988; Hernández, 1988).

Los intentos de la elite política, a lo largo del período 1970-1982, para contener la crisis económica, su consecuente fracaso y el agravamiento en las relaciones con los empresarios nacionales, así como la fuga de capitales, obligó al gobierno de López Portillo a garantizar el ordenamiento de la banca nacional, a partir de la expropiación de la banca decretada el 1o. de septiembre de 1982. El gobierno mexicano prefirió afectar los intereses de la fracción financiera de la burguesía nacional,<sup>1</sup> acción que provocó la protesta diferenciada en el sector empresarial. De aquí hasta la primera mitad del siguiente sexenio, *los empresarios mexicanos, por mediación de sus organizaciones, retomaron una actitud radicalmente politizada para presionar al Estado* (Luna, 1992; Concheiro, 1996).

El rompimiento de la alianza entre los empresarios y el Estado, que prácticamente había durado todo el sexenio, se consumó con la decisión de López Portillo de expropiar la banca, detonante que provocó la reaparición del conflicto político entre esos dos actores sociales. Evidentemente, la expropiación de la banca desgastaría hasta su nivel más bajo la alianza propiciada en el inicio del sexenio, aunque la ofensiva empresarial no se dejó escuchar de manera eficaz. COPARMEX, CONCANACO y CCE, que en esos momentos expresaban el sentir del

---

<sup>1</sup> Poulantza, Nicos. "Poder político y clases sociales en el estado capitalista", S. XXI, México, 1988. En este trabajo el autor se refiere al concepto de autonomía relativa del estado, que se debe entender en dos sentidos: 1) la autonomía relativa del estado respecto a las relaciones económicas y 2) la autonomía relativa que tiene el estado en relación a la fracción hegemónica de la burguesía. Señala también que puede actuar en contra de esa fracción, si con ello garantiza los intereses del conjunto de la burguesía en el futuro. Aplicado al contexto mexicano que revisamos, la idea sirve para comprender como se afectan los intereses de la fracción financiera en favor de la nación, y por tanto, del conjunto de la burguesía nacional en el corto plazo.

"*ala radical*" empresarial, fueron las organizaciones que buscaron en los primeros días posteriores a la expropiación una respuesta de mayor peso; mientras que CONACAMIN y CANACINTRA, representativas del "*ala moderada*" empresarial, daban como un hecho consumado la nacionalización (Hernández, 1990).

Una importante acción política que comenzó a dar forma a la respuesta empresarial en torno al problema de la nacionalización de la banca, junto con la capacidad de respuesta del *ala radical*, fueron los foros regionales organizados en octubre de 1982 bajo el rubro de "*México en libertad*". Estos eventos tenían por objeto despertar la conciencia política en los sectores empresariales y, en general, en toda la ciudadanía. Sin embargo, aun con la falta de unidad en la posición empresarial ante la medida gubernamental, se marcaba la pauta para reorganizar la ofensiva contra el Estado: "*Se despliega a partir de entonces una agresiva acción empresarial en cuyo discurso apela a la sociedad civil y a las instituciones de la república, para contener el poder presidencial e implantar su proyecto*" (Tirado, 1990: 54).

Las diferencias reflejadas al momento del conflicto, se verían prácticamente subsanadas a mediados del siguiente sexenio en el que las organizaciones empresariales expresan su apoyo a un proyecto de nación acorde a sus intereses de clase, a la vez que la nueva clase política, la tecnocracia, le va dando forma al nuevo proyecto económico con características neoliberales.

Otra vez, la deteriorada situación económica presionaba a la elite política en la toma de decisiones que definirían el rumbo de la nación. Sólo que ahora, en la nueva coyuntura de cambio gubernamental, los conflictos al interior del clase dominante (entre la burguesía nacional y el Estado) y las fuertes presiones externas que demandaban el pago de los intereses de la deuda externa, exigían un candidato presidencial que en lo inmediato conciliara el conflicto con los empresarios y tuviera la habilidad para negociar la deuda externa con la banca internacional. Nuevamente, como en el cambio presidencial al finalizar el mandato de Echeverría, el desafío para el gobierno entrante dependería de la conciliación con los empresarios para enfrentar la crisis desde una posición menos deteriorada.

En lo político, el desafío del nuevo gobierno sería la reconciliación con los empresarios para hacer más viable la recuperación económica del país. Se había demostrado que mientras este sector de la sociedad no colaborara con el régimen las posibilidades para solucionar el problema de la crisis serían mucho más estrechas. Por otro lado, también se demostraba que tener en contra al empresariado aumentaría las dificultades económicas que el Estado enfrentaba. De hecho, las

situación política empeoraba dada la capacidad desarrollada por el sector empresarial para mermar la credibilidad al régimen (Arriola, 1988; Millán, 1988; Luna, Tirado y Valdés, 1991).

En gran medida esto explica el desprestigio del gobierno echeverrista y la imagen que prevaleció de López Portillo. La incidencia que tienen las organizaciones empresariales para generar corrientes de opinión, ya sea por medio de declaraciones sectoriales manifiestas en el discurso de sus organizaciones, sea por los rumores que se difunden desde los aparatos administrativos de las empresas o por las opiniones de "intelectuales" que trabajan para compañías editoriales o de prensa, propiedad de fuertes empresarios, que finalmente, cooperan para difundir una ideología acorde con sus intereses de clase.

Como se pudo observar en el sexenio de López Portillo, la conciliación que se alcanzó al principio de su mandato propició nuevamente un *flujo positivo* para la estructura de poder, pues el respaldo empresarial, su adhesión al proyecto del gobierno en turno, confirió *credibilidad* en la figura presidencial. Sin embargo, el desenlace provocado por la profundización de una crisis económica y política, revierte el *flujo positivo a favor del sistema*, de hecho, la crisis económica y la crisis política, una *objetiva* y otra *simbólica*, representa una sustancial *pérdida de energía* que provoca el *cambio radical de las estructuras*, pues la erosión de las mismas implica la necesidad de un *cambio* que favorezca la *adaptación del sistema* a las nuevas circunstancias del *ambiente*. Tal *cambio* se advierte nítidamente, tanto en las estructuras económicas, como en la *nueva racionalidad del Estado*.

### **3.2 El nuevo orden estatal: viraje estructural y modernización del nacionalismo revolucionario?**

La evidente crisis económica, política y social que heredaba el gobierno de López Portillo (1976-1982), representó el fin de un largo periodo de estabilidad que brindó el régimen posrevolucionario desde su fundación a finales de los años veinte hasta 1982. De hecho, el esfuerzo realizado por los dos últimos gobiernos para resolver la crisis, el de Echeverría y López Portillo, representó el agotamiento del modelo de desarrollo que impulsó la industrialización del país, culminando con la expropiación de la banca en 1982. Decisión gubernamental que recrudeció el conflicto entre los empresarios y la burocracia política.

La crisis no sólo representó la imposibilidad *del sistema* para reproducirse bajo la lógica del pasado, sino la *erosión del símbolo* que evocaba la *unidad nacional*, el desgaste de un sistema político que garantizaba la legitimidad que cualquier régimen requiere para mantener sus estructuras de poder durante un lapso significativo de su historia. La crisis evidenció el desgaste de un sistema de toma de decisiones que giraba en torno a la figura presidencial, que en su calidad de líder del partido dominante, obtenía la legitimidad requerida para mantenerse en el poder, por sus vínculos formales con las clases trabajadoras organizadas corporativamente. De hecho, el proceso de la transición mexicana se hace más evidente conforme la sociedad deja de aceptar las reglas del juego político que impone la Tradición. De tal manera que la resistencia de la sociedad para aceptar las decisiones de la elite política, representa el cambio de las estructuras del poder, la transformación en la correlación de fuerzas que en su expresión sistémica supone la emergencia de nuevos actores políticos, del *flujo de nueva energía* que se incorpora abruptamente al *sistema de toma de decisiones*, de la necesidad del sistema por procesar su relación con un *ambiente cambiante*, y que, en principio, pone en riesgo su capacidad para *adaptarse* a las nuevas condiciones que le impone el tiempo (Adams, 2001, 1983, 1978; Laplantine, 1995 ; Rivière, 2005).

En esa perspectiva, es fundamental observar que la nueva condición del sistema político mexicano a partir de la coyuntura de los años sesenta, se complica todavía más por la crisis económica que provoca el agotamiento del modelo de desarrollo que privó desde los años treinta y que garantizó, al menos, la disciplina de la clase trabajadora organizada corporativamente a cambio de empleo, salarios y prestaciones. El dilema que enfrentaría el gobierno entrante dependería de la decisión de la nueva elite política: intentar dar continuidad a una política cifrada en el intervencionismo económico del Estado o dar un viraje estructural que oriente a la economía nacional protegida a un mercado abierto (Castañeda, 1999; Krauze, 1997; Semo, 1989; Aguilar Camín, 1988).

Si al analizar las relaciones entre los empresarios mexicanos y la burocracia política reconocemos que las estructuras del poder se encuentran en evidente proceso de transformación, a partir de lo cual el empresariado comenzaba a ser parte del sistema de toma de decisiones, será pertinente reconocer que ello acontece por el peso que tiene este actor en las estructuras económicas. Se trata, entonces, de precisar los parámetros que permiten comprender la forma en que el proceso de transición se expresa, también, a través de los cambios registrados en las

estructuras económicas. Por ello, adquiere relevancia comprender la estrecha vinculación entre economía y política, el *intercambio sistémico entre estos dos subsistemas sociales*, la interdependencia entre dos ámbitos que nos permiten observar su *relación energética*. De tal manera que detectar el cambio en las estructuras económicas haga, en muchos casos, más evidente el cambio que supone todo proceso de transición, permitiendo comprobar con mayor certeza la transformación de las estructuras de poder, así como la vigencia simbólica de las figuras más representativas del sistema político mexicano. Es el caso del nacionalismo que legitimó la presencia de la “familia revolucionaria” en el poder y propició la unidad nacional, que durante tanto tiempo evocó el compromiso de Estado con la sociedad mexicana (Florescano 2001; De la Peña, 1992; Krotz, 1991; Alonso y Rodríguez; 1990; Bartra, 1982).

### 3. 2. 1 *El ascenso de la tecnocracia y la nueva racionalidad del Estado.*

En respuesta a la expropiación de la banca, los empresarios restablecieron su *unidad política* retomando el espíritu del CCE para superar la sectorización de sus organizaciones. Más aún, la reorganización política de los empresarios durante el gobierno de De la Madrid modificó sustancialmente el escenario político de la nación. El sector empresarial utilizó sus dos *estrategias de participación política*, a partir de las *organizaciones empresariales* y su *participación partidista*, con lo cual se impulsaría un proyecto de nación que en lo político, económico y social respondiera a sus expectativas de clase (Concheiro, 1996; Tirado, 1994; Camp, 1990; Hernández, 1988).

La nominación de De la Madrid a la presidencia de la república por parte del PRI, fue recibida con beneplácito por los empresarios mexicanos, puesto que lo consideraban como un conservador proclive a los postulados económicos demandados por ese sector social. De hecho, las primeras decisiones del nuevo gobierno refrendaron las simpatías con el sector privado y, aunque la experiencia del sexenio anterior les mandaba cautela ante la política económica adoptada al inicio del sexenio, se propició, al menos, el diálogo con los empresarios nacionales. Ello representaría la posibilidad del restablecimiento de una alianza que prometía prolongarse, cuando menos, al mediano plazo; lo cual explica el importante giro en la *conducta política* del *ala radical*, como es el caso del llamado de la COPARMEX en noviembre de 1982, presidida por Clouthier en ese momento, para suspender las reuniones de "*México en libertad*" (Story, 1990;

Luna, 1992; Valdés, 1997). Movimiento que explica el surgimiento del *neopanismo*, medianos empresarios que conformaron una fracción político-ideológica que impulsó más tarde los triunfos electorales que llevaron por primera vez a la oposición al poder, primero, a nivel municipal, luego estatal, y por último a la presidencia de la república (Loaeza 2001, 1999).

En la toma de posesión presidencial, el 1º de diciembre de 1982, De la Madrid anunció el *Programa de Recuperación Económica* (PIRE), proyecto fundamental para atraer la confianza empresarial y construir una *nueva alianza* que restituyera la consistencia del *bloque dominante*. El programa daba la pauta para atraer la participación de ese sector; en él se definía la participación empresarial como fundamental para sentar las bases del nuevo proyecto de nación que impulsaría ese gobierno. En éste destacaba la convicción gubernamental y su decidida intención de disminuir gradualmente la *intervención del Estado en la economía* a partir de la racionalización del gasto público. Posteriormente, las expectativas, en general, mejorarían con el crédito de 3 840 millones de dólares, otorgados por el FMI tras la firma de la *carta de intención* de esa institución internacional en la que se establece la revisión de las tarifas del sector público y la reducción del déficit presupuestal. Dicha aplicación en la gestión pública propiciaría el *adelgazamiento del estado*, que tanto *demandaban las organizaciones empresariales* (Guillén, 1997; Valenzuela, 1986; Villarreal, 1986).

Conforme se hacía más evidente una crisis económica que adquiría matices sin precedentes en el desarrollo económico del país, el gobierno de De la Madrid mostró desde su inicio la decisión de pactar la reconciliación de intereses con la *burguesía nacional*. Por ello, consciente de que el principal punto de conflicto con los empresarios giraba en torno a la expropiación de la banca, *inició el proceso de reprivatización bancaria*. Esta decisión fue la primera muestra de voluntad gubernamental para recuperar la confianza de los empresarios, pues indemnizó a los afectados y vendió el 34% de las acciones de los bancos expropiados, los activos no financieros. Y sobre todo, dejó en manos del capital financiero privado el manejo de las *casas de bolsa*, que rápidamente se constituirían en *banca paralela*. También construyó un Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca) para la documentación en moneda nacional a los adeudos en dólares de los grandes consorcios privados, etc. (Valdés, 1997; Concheiro, 1996; Jarquín y Cisneros, 1987).

Además, de manera muy semejante al inicio del sexenio lopezportillista, también se hizo evidente la política de incentivos económicos dirigidos a alentar la superación de los conflictos

del pasado, procurando “restablecer la confianza empresarial” mediante disposiciones financieras provenientes de los diferentes niveles de gobierno. Como bien señala Nuncio, al referirse al caso del Estado de Nuevo León, donde el gobierno mexicano había encontrado las críticas más severas:

*Si se atiende al caso de Nuevo León, las semejanzas dejan de ser fortuitas y se ofrecen como política deliberada. Los industriales de Monterrey magnificaron el impacto de la crisis en sus empresas y consiguieron inversiones y apoyo de la federación en impresionantes magnitudes. En su quinto informe de gobierno, el gobernador Alfonso Martínez Domínguez anunció en 1983 un apoyo a la industria local por más de 900 mil millones de pesos, suma que ascendía al 51.7% del total asignado por el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA) a todo el país con el objeto de atenuar el impacto producido por el derrumbe monetario y los altos intereses bancarios en la economía de las empresas industriales endeudadas en dólares (Nuncio, 1986: 79).*

Como se observa, De la Madrid aprovecha la imagen positiva que el sector empresarial tenía anteriormente de él, además de las decididas medidas económicas que resarcían los daños provocados en el sexenio anterior en contra de sus intereses de clase. En ese escenario de revertir el proceso de expropiación de la banca significaba la posibilidad de recuperar la confianza del sector empresarial. Tal decisión propició una actitud más negociadora por parte del *ala radical* de las organizaciones empresariales, lo que permitió a la clase dominante resolver las fisuras que provocó la crisis política en los dos gobiernos anteriores (Garrido, 1992; Jacobo y Quintana, 1990).

Para 1983, se podía observar que las *organizaciones empresariales* avanzaban en la unificación de las diferentes posiciones empresariales. Lo novedoso del nuevo papel político de la elite empresarial es su renovado esfuerzo por utilizar al máximo la vía partidaria, además de estrechar vínculos con otras instancias sociales, civiles y religiosas, para presionar al Estado. Evidentemente, considerando la afinidad del partido con la *ideología empresarial*, un grupo importante de empresarios del norte, *representantes del ala radical*, tomó posiciones del lado del PAN. Es el caso del empresario Adalberto Rosas, candidato de ese partido a la gubernatura del estado de Sonora; las campañas electorales de Francisco Barrio en Chihuahua, ex-vicepresidente del Centro Patronal del Norte (COPARMEX); de Carlos Anaya en Sonora, ex-vicepresidente de la COPARMEX; de Jorge Rincón en Culiacán, presidente del CCE en Sinaloa; de Canales Clariond en Nuevo León, expresidente de la CANACO de Monterrey (Millán, 1988). Por lo que

toca a la acción política de los empresarios que define como objetivo la tarea de hacer proselitismo en todos los sectores de la sociedad mexicana, tenemos que esta diversificación en el ejercicio de la política es la que reditúa en el fortalecimiento general de la *derecha mexicana*, a partir de la cual se promueve la "desobediencia civil" como forma concreta de oponerse al fraude electoral. Los empresarios fincaron sus esfuerzos en asociaciones como las siguientes: *Asociación Nacional Cívica Femenina* (Ancifem), *Desarrollo Humano Integral* y *Acción Ciudadana* (Dhiac), *Movimiento Familiar Cristiano*, *Frente Cívico de Participación Ciudadana*, *Asociación Cívica Estudiantil* y diversos comités de promoción y defensa del voto (Jarquín y Cisneros, 1987).

Sin lugar a dudas, esta estrategia del sector empresarial representa el vínculo más estrecho con los sectores más conservadores de la sociedad mexicana. En esencia, la vinculación concreta con instrumentos de acción ciudadana de la Iglesia Católica, refleja uno de los elementos centrales por los que las demandas empresariales o sus propuestas políticas, económicas y sociales, parecen presentarse como expresión del conjunto de la sociedad. Poco a poco, se va consolidando el liderazgo social que los empresarios harán valer más tarde (Tirado, 1994).

Por lo que toca a la liberación de la economía, se requiere señalar que también es el gobierno de De la Madrid, el que inicia este proceso. De manera más precisa, la liberación de la economía mexicana ha de ser entendida a partir de los rasgos que habían caracterizado el modelo de desarrollo del periodo posbélico. Se trata del proteccionismo arancelario y no arancelario (permisos previos) que limitaron la entrada de productos extranjeros, el nacionalismo económico que contenía a la inversión extranjera directa y, en sentido estricto, el control de precios que hizo viable el intervencionismo estatal. Por ello es importante ubicar que De la Madrid es quien decide (o cede a las presiones externas) incorporar a México al GATT en 1986 (Puga, 2004). Esto, en el contexto de la reconversión industrial, promovía la apertura formal de las fronteras a los productos e inversiones extranjeras, obligando a derribar el control de precios; con el propósito de hacer más eficiente a la planta industrial y sobre todo frenar la inflación, que a mediados de los años ochenta alcanzó un índice de tres dígitos (Guillén, 1997).

En mayo de 1985 el gobierno hace explícitos los cambios estructurales anunciados en la toma de posesión en diciembre de 1982, aunque en realidad la privatización comienza a concretarse a partir de 1986, cuando el recorte presupuestario y la política de tope salarial ya se habían consolidado como política gubernamental. De tal manera que la estabilidad en la relación

entre los empresarios y el Estado solo se vio empañada con el decreto de expropiación de los predios urbanos en el Distrito Federal, a causa de los sismos de septiembre de 1985 (Semo, 1989). La decisión provocó una respuesta inmediata por parte de las organizaciones empresariales, como se puede observar en los discursos que en ese año presentaban en los medios de comunicación masiva, fundamentalmente la prensa. La respuesta empresarial ante ese suceso reflejó nítidamente la voluntad política de ese sector, sustentada a través de la unidad de las diferentes facciones empresariales agrupadas en el CCE, y caracterizó su actividad política hasta que se hizo evidente la instauración del proyecto neoliberal que a mediados de ese sexenio avanzaba a grandes pasos. En todo caso, lo importante del cambio económico fue que la alianza gobierno-empresarios se encontraba afianzada, pues era evidente que el modelo económico promovido por la tecnocracia que asciende al poder en ese sexenio, respondía a las demandas empresariales que ese sector hacía públicas a través del discurso de sus principales organizaciones, además, continuaba criticando la lentitud con que se instauraban las medidas gubernamentales (Concheiro, 1996; Tirado, 1990; Luna, 1992).

Si consideramos las demandas empresariales que se expresaban a través del discurso de sus organizaciones en 1985, y las medidas adoptadas por el Estado, es decir, la política económica neoliberal, es posible interpretar que el Estado, su tecnocracia, se fue convenciendo progresivamente del proyecto de nación por el que pugnó el empresariado mexicano. A pesar que la nueva burocracia política avanzaba en el plano de la privatización, el adelgazamiento del Estado, la liberación de la economía y el mantenimiento de la política de tope salarial; el Estado continuaba siendo el blanco de las críticas de las organizaciones empresariales, según el discurso político de CCE, COPARMEX, CONCAMIN, CONCANACO y CANACINTRA, en ese año (consultar en el siguiente capítulo, cuadros el discurso empresarial en 1985).

La política recesiva internacional que se manifestaba a principios de 1986, la caída en los precios del petróleo, la rigidez del circuito financiero que agravó el problema de la deuda externa (92,408 millones de dólares, equivalente al 49% del PIB), el violento descenso en el poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras, los drásticos recortes al gasto social y los renovados esfuerzos por reactivar el sector externo fueron el preámbulo del *Programa de Aliento y Crecimiento* (PAC) firmado en ese año. Eso que representaba el avance a la siguiente etapa del proyecto económico del gobierno de De la Madrid (Guillén, 1997; Villarreal, 1988).

El escenario económico era muy desalentador a pesar de los esfuerzos que había realizado De la Madrid en el terreno de la política económica, como bien lo sugiere Gollás:

*El precio del crudo se redujo de 25 dólares el barril en 1985 a 12 dólares en 1986, cuando constituía más de 68% de las exportaciones totales. A nadie le sorprendió que el crecimiento del PIB disminuyera ese año 4% en términos reales. El gobierno continuó aplicando medidas estrictas de control del gasto con una hiperinflación.*

*Debido a la crisis inducida por la disminución de los precios del petróleo, en 1986, el país estuvo a punto de declarar la moratoria de pagos. Ante esta amenaza, los bancos internacionales, con poco entusiasmo, acordaron cooperar con el llamado Plan Brady por medio del cual se le prestó a México 6,000 millones de dólares de dinero fresco y se renegoció el 83% de su deuda (Gollás, 2003).*

La designación de Salinas de Gortari, a mediados de 1987, como candidato a la presidencia por el partido oficial produjo un *boom* en la bolsa mexicana de valores, lo que significaba la satisfacción de los capitalistas mexicanos. Esto indicaba que la certidumbre en las expectativas empresariales estaba determinada porque el candidato a la presidencia garantizaba la continuidad del nuevo proyecto económico. Fue hasta el "crack" de la bolsa de valores mexicana en octubre de 1987, cuando se desencadenó la devaluación que puso al gobierno mexicano de espaldas a la pared. La profundización económica, la protesta de los medianos y pequeños inversionistas que desató el abuso de la especulación financiera, la crisis política que significó la escisión del partido dominante y la fundación de la corriente democrática que desembocaría en el PRD, la hiperinflación, encontraron como respuesta del gobierno mexicano la implementación del *Pacto de Solidaridad Económica (PASE)* que bajo diversos nombres se mantuvo durante 10 años. Era la estrategia política que insertaba el nuevo elemento de la *concertación* entre los empresarios y los trabajadores. El pacto fue firmado por el CCE, presidido por Agustín Legorreta, la CTM, representación formal de los trabajadores, liderado por Fidel Velásquez y las organizaciones campesinas. De tal manera que el nuevo "pacto" estaría legitimado por el apoyo "generalizado" de la sociedad mexicana. La principal medida del pacto era la *política de tope salarial* que se aceptaba cuando el líder de la CTM había amenazado unos días antes con una huelga nacional que garantizara el control de precios, y por tanto que protegiera el nivel de vida de las clases trabajadoras (Basáñez, 1990:108). Por otro lado, el hecho que Agustín Legorreta presidiera el CCE, sugiere que la facción financiera había recobrado la hegemonía en la representación del empresariado nacional, que se tendría que reconocer la alianza con la elite

política al aceptar su participación en la *concertación*. Así lo mostraba el tono que tomaban las declaraciones del dirigente del CCE, en el sentido que los 300 empresarios más grandes de México decidían el rumbo de la nación. Por su parte, en el discurso gubernamental parecía aceptarse la responsabilidad por la crisis del modelo posrevolucionario, aunque también eso le permitía a la tecnocracia dar el giro en los diferentes ámbitos económicos, particularmente al de la intervención directa del Estado en la economía. Como señala Bolívar: "*El gobierno de la República no sólo había cedido a la presión empresarial, sino que aceptaba en los hechos, la concepción patronal de que la crisis por la que atravesaba el país encontraba su origen en un Estado que ineficientemente intervenía como rector de la actividad económica*" (Bolívar,1990:54)

La firma del PASE acontecía como corolario de la próxima contienda electoral donde las contradicciones políticas eran patentes en todo el escenario político. Si bien se reconocía la alianza con el empresariado nacional, el efecto de la expropiación de la banca había provocado serias fisuras entre las posiciones empresariales, al grado que sectores importantes de la facción radical del norte del país no aceptaron la invitación del gobierno delamadrista a la conciliación. De tal manera que su participación en el PAN continuaba apuntando a las elecciones de 1988. El surgimiento del *neopanismo* era la prueba del radicalismo que la participación activa de empresarios como Clouthier y Canales Clariond inyectaban a ese partido. Por otra parte, la crisis interna del partido oficial, la escisión de la *corriente democrática* dirigida por Cuahutémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que posteriormente se aliaría con las fuerzas de izquierda y los partidos satélites para conformar el *Frente Democrático Nacional* en vísperas de las elecciones de 1988, reflejó las contradicciones del presidencialismo. Y por último, el malestar de las clases medias y trabajadoras ante la política restrictiva que hacía caso omiso de los reclamos sociales. En ese sentido, es importante identificar que el magnetismo que ejerce, poco a poco, la figura de Cárdenas, se ve más fortalecida por la coincidencia temporal y espacial con movimientos sociales que ya habían aparecido en el escenario político como expresiones políticas que rechazaban el avance del proyecto neoliberal: el *Consejo Estudiantil Universitario* (CEU), el *Sindicato Mexicano de Electricistas* (SME) y la *Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación* (CNTE). Lo cual representó simbólicamente el desplazamiento de la izquierda al *movimiento partidista de carácter claramente nacionalista*, representado por Cárdenas (Krauze, 1997; Aguilar Camín y Meyer, 1989; Semo, 1989; De la Peña, 1992).

La imperiosa necesidad de recuperar la capacidad financiera del Estado mexicano obliga a la tecnocracia a implementar la reforma fiscal que responde a la misma lógica de modernización. Este es un punto en el que no existía acuerdo entre empresarios nacionales y el gobierno mexicano. La resistencia empresarial a la reforma fiscal constituía un elemento de conflicto, que sin producir un rompimiento al interior del clase dominante, sí permitía definir el "perfil" de los próximos candidatos a la presidencia de la República, independientemente del partido, abriendo o cerrando las puertas de acceso a la oposición de la que se trate, de *izquierda* o de *derecha* (Guillén, 1997; Valenzuela, 1995)

Un aspecto de la participación empresarial en el sistema político mexicano tiene una de sus mejores expresiones en la firma del *Pacto de Solidaridad Económica* en diciembre de 1987. Este pacto que es la base fundamental para el control de la inflación y la contención de las demandas de los trabajadores. La firma de este *Pacto*, junto con la conformación de la *comisión de financiamiento al partido oficial*, redondeaba la *nueva estrategia de participación política del empresariado*. De tal manera que esa acción política es fundamental, pues además de garantizar su intervención en la toma de decisiones, reiteraba su apoyo al modelo de desarrollo que instaura la tecnocracia. En lo que respecta a sus intereses concretos de clase, la firma del *Pacto de Solidaridad* representa la garantía a partir de la cual los trabajadores se comprometen a no demandar aumentos salariales, fuera de las posibilidades que impone la modernización económica (Valenzuela, 1995). Cabe destacar que el gobierno mexicano estaba muy interesado en contener los salarios, pues como gran empleador de una significativa parte del mercado de trabajo, se encontraba imposibilitado para continuar una política salarial ascendente dada la fuerte crisis presupuestaria en la que se encontraba.

Por lo que toca a la participación empresarial en el Partido Revolucionario Institucional, es necesario identificar que importantes sectores empresariales, sobre todo del centro del país (es el caso de los empresarios propietarios de Televisa), respaldaron al PRI en los momentos en que *fracciones radicales* de los empresarios del norte retomaron su participación en el PAN (Guadarrama, 2001; Concheiro, 1996; Valdés, 1997).

Pensar en el papel político de los empresarios en el año de 1988, es considerar la articulación de su práctica política al PAN, la Iglesia católica, y sobre todo, en el papel que jugaron sus organizaciones en el escenario político nacional. Implica, entonces, comprender su maduración como actor social que demandó al Estado mexicano la instauración de un proyecto

de nación que la *elite política* incorporó al seno del Estado. Afirmer tajantemente que el proyecto neoliberal se instaló, exclusivamente, por la presión de los empresarios nacionales, sería dejar de reconocer las fisuras al interior del aparato burocrático que abrieron paso a la *nueva elite política: la tecnocracia* (Hernández, 1990). Lo que resulta indiscutible es que los empresarios, como clase social, lograron que sus expectativas acerca del rumbo de la nación predominaran en la construcción del futuro colectivo. Es decir, que su concepción del presente así como la alternativa que ese sector planteó, fueron aceptadas, en términos generales, por el conjunto de la sociedad mexicana. El proyecto de nación que los empresarios mexicanos expresaban a través del *discurso de sus organizaciones empresariales*, al menos, coincidía con la parte sustancial de las políticas adoptadas por los gobiernos de De la Madrid y Salinas de Gortari (Jacobo y Quintana, 1990; Saldívar, 1992). De tal manera que la *legitimidad* que fue adquiriendo el proyecto neoliberal, se debió, en principio, al *apoyo que las organizaciones empresariales expresaron en los medios de comunicación*, fundamentalmente en la prensa. Esta situación permitió al *sistema* presentar una *opinión pública* que respaldaba las decisiones gubernamentales. Evidentemente, una estrategia de medios y la colaboración de varios intelectuales que se sumaron ideológicamente al nuevo proyecto estatal, sobre todo al de Salinas de Gortari, permitió presentar a una *opinión pública* convencida de que la política de su gobierno representaba una posibilidad real para solucionar la crisis que aquejaba al país desde finales de los años sesenta (De la Peña, 1992, Alonso, 1992; Krauze, 1992).

En vísperas de las elecciones de 1988, el aspecto más importante de la participación empresarial en el PRI comenzó a finales de 1987. Primero, con la formación de la *Comisión de Financiamiento y Fortalecimiento Patrimonial* del PRI en la que participaron importantes empresarios nacionales, que más tarde se vieron beneficiados con la venta de empresas paraestatales en la etapa de privatización que correspondió al gobierno de Salinas de Gortari (Ver cuadro de la Comisión de Financiamiento para la campaña presidencial de Salinas de Gortari). Esto reflejó cómo los empresarios vieron en la política una excelente forma de consolidar sus negocios. A partir de este suceso quedó claro que ya no se conformaban con participar en el partido de oposición para presionar al gobierno. Ahora, con su intervención directa en el PRI garantizaban su participación en la toma de decisiones.

Uno de los principales factores que pusieron fin al escepticismo de algunos sectores empresariales fueron los resultados de la campaña electoral de 1988. La sorpresa que dio la

alianza de la izquierda en el FDN, que la colocó en el segundo lugar de importancia político-electoral, propició un acercamiento más estrecho entre los empresarios y la burocracia política pues la coyuntura amenazaba el avance del proyecto instalado por la nueva elite política: "*El auge de la ideología neoliberal así como la emergencia de una tercera fuerza política representada por el movimiento cardenista, contribuyeron de manera importante a la unidad empresarial y a la reactivación de la facción liberal conservadora*" (Luna,1990:15).

Un aspecto que sin lugar a dudas refrendaba la alianza empresarios-tecnocracia, era la política de privatización que además de confirmar el carácter del nuevo modelo de desarrollo, en lo sucesivo se apoyaría económicamente en la capacidad y disposición del capital privado nacional y/o extranjero. En ese sentido, es fundamental observar que la parte sustancial del proceso de privatización ocurre en el sexenio de Salinas de Gortari, 1988-1994 (Romero y Méndez, 1990), en virtud de que en ese periodo acontece la venta cualitativa de las empresas paraestatales, como es el caso de la venta de compañías aéreas, las mineras, la telefónica y la venta de los bancos que se concluyó este año. Estas medidas representan la decisión de la tecnocracia respecto a reducir el papel económico del Estado a una acción de gestoría del mercado; pero, sobre todo, refleja el beneficio obtenido por los empresarios mexicanos, particularmente de aquellos que participaron en la *comisión de financiamiento de la campaña electoral de Salinas de Gortari* (Guillén, 1997; Gollás, 1993; Cordera, 1992).

Así que la voluntad política mostrada por el gobierno salinista, todavía demostró más su decisión de ganar al *gran empresariado*, al nombrar a Miguel Alemán Velasco, miembro del CMHN, como *Embajador extraordinario y plenipotenciario*, además lanzarlo como senador por el estado de Veracruz (más tarde llegaría a ser gobernador de ese estado); y nombrar a Claudio X. González, expresidente del CCE y miembro del CMHN, como *Asesor presidencial en Inversión Extranjera* (Concheiro, 1996; Valdés, 1997).

**Empresarios que conformaron la *Comisión de Financiamiento y Fortalecimiento Patrimonial del PRI* (Apoyo a la Campaña Presidencial de Salinas de Gortari)**

EMPRESARIO	MIEMBRO DEL CMHN	FAMILIAR DE UN MIEMBRO DEL CMHN*	EMPRESAS PARAESTATALES ADQUIRIDAS
Pablo Alvarez Treviño		*	---
Antonio Ariza Cañadilla			Participó en la adquisición de Banamex.
Angel Borja Navarrete		*	Polimar, Compañía de Manufacturas Metálicas Pesadas, concesiones para construcción de carreteras.
Pablo Brener Brener			Ingenios: El Potrero, El Modelo, San Miguelillo, Mexicana de Aviación, Aeropuesrtos y Terrenos, Datatronic, Turboreactores, Productos Pesqueros de Sinaloa, el de Matancitas y el de Topolobampo; y Pesquera del Pacífico.
José Carral Escalante			---
Juan Elek Klein			---
Augusto Elías Paullada			---
José González Bailó			---
Roberto González Barrera		*	Banco Mercantil del Norte.
Ricardo González Prieto		*	---
Antonio Gutiérrez Prieto	*		Concesión para construir y administrar el puente internacional Zaragoza-Ysleta; su hijo Juan Diego Gutiérrez participó en la compra de Banamex.
Julio Gutiérrez Trujillo		*	---
Carlos Kretschmer Smith			---
Eduardo Legorreta Chauvet		*	---
Antonio Madero Bracho	*		Tornillos Rassini , Recipientes Mexicanos y Aceros Mexicanos.
Enrique Molina Sobrino.			Compañía Azucarera, La Concepción, Ingenios Atencingo, Calipán, Plan de San Luis, Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, Distribuidora SanLorenzo, Embotelladora Garci-Crespo, Granjas Buen Agua, Inmobiliaria La Cantera, Manantiales San Lorenzo, Refrescos y Alimentos Garci-Crespo, accionista de Banamex y Banpaís.
Anuar Name Yapur.			Mexicana de Aviación, Turborreactores, Aeropuertos y Terrenos, y Datatronic.
Carlos Peralta Quintero.			Banpaís, Concesiones de Iusacell y Telecomunicaciones.
Enrique Rello Vega.		*	---
Ernesto Rubio del Cueto.			Carros de Ferrocarril de Durango.
Isaac Saba Rafuol.			---
Fernando Senderos Mestre.			---
Carlos Slim Helú.	*		Química Flúor, Minera Real de Angeles, Telmex, Alquiladora de Casas, Anuncios en Directorio, Canalizaciones Mexicanas, Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, Construcciones Telefónicas Mexicanas, Construcciones y Canalizaciones, Editorial Argos, Fuerza y Clima, Imprenta Nuevo Mundo, Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones, Industrial Afiliada, Operadora Mercantil, Radio Móvil Dipsa, Renta de Equipo, Sercotel, Servicios y Supervisiones, Teleconstructora, Teléfonos del Noroeste, Tabacos Mexicanos planta Nayarit, Manufacturera Mexicana de Partes de Autos, Indelta.
Nicolás Zapata Cárdenas.			---
Patricio Zapata Gómez.			---

FUENTE: José Ignacio Rodríguez "Nuevo empresariado: la política como inversión", Revista *Este país*, Núm. 10, enero, 1992.

Por otra parte, el papel desempeñado por las *organizaciones empresariales en los medios de comunicación masiva* coadyuvaron a conformar una *opinión pública* cada vez más convencida de avanzar en el proceso de de la "modernización" que ofrecía la tecnocracia desde 1982. De tal forma que cubierto por una "opinión pública" favorable a la política gubernamental, el discurso oficial (presidencial, gubernamental y partidista -PRI-) no cesaba de enviar mensajes a la sociedad mexicana. En ese contexto adquiere mayor relevancia el papel que jugó un importante instrumento de difusión del empresariado; se trata de los comerciales promovidos por el *Consejo Nacional de la Publicidad*. Por este conducto se difundieron ideas como: el *¡empléate a ti mismo!*; cuando la economía ni siquiera respondía a la demanda de empleos (al mismo tiempo que se manejaba la idea de que *todos somos iniciativa privada*); campañas que también manejaron la necesidad de mantener la *unidad nacional* en un contexto de desacreditación por el manejo oficial de las elecciones de 1988; o acerca de las bondades de la globalización en un momento en que es indispensable para el sistema mantener certidumbre en el futuro inmediato, etc. Esta campaña tuvo una larga cobertura en televisión y la prensa nacional, lo que representa una gran inversión financiera que solo el sector empresarial podría cubrir. Lo cual refleja el compromiso empresarial con el proyecto neoliberal y, por tanto, el importante papel jugaron las *organizaciones empresariales* como instrumentos del poder de las elites políticas y económicas, mediante los cuales se difundió una ideología afín a los intereses concretos de su clase, además de generar la legitimidad que requería el régimen. Situación que fortaleció la estrategia de legitimación que el gobierno salinista echó a andar desde el principio del sexenio (Cordera, 2006; Monsiváis, 1995).

Consolidada la confianza de las elites económicas y eliminada la posibilidad de comprobar el fraude electoral con el que Salinas llegó al poder (las boletas electorales resguardadas en la Cámara de Diputados, con vigilancia del ejército mexicano, sufrió un incendio que eliminó cualquier posibilidad de comprobar dicha sospecha), su gobierno se abocó a *desarrollar una estrategia de legitimación*. El encarcelamiento de *la Quina*, Joaquín Hernández Galicia, líder del sindicato de los petroleros; el desconocimiento de Jonguitud Barrios como líder "vitalicio" del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación); el reconocimiento de Ernesto Ruffo Appel, candidato del Partido Acción Nacional por el Estado de Baja California, en 1989; la creación del Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el decidido avance del proyecto neoliberal con la cobertura de un discurso

gubernamental que exaltó las bondades de la Modernidad, por lo que la continuidad de la privatización de empresas paraestatales, la apertura económica, la contención de las demandas salariales y la promesa de insertar exitosamente a México en el proceso de la globalización constituyeron las acciones gubernamentales que superaron los cuestionamientos del fraude electoral (Aziz Nassif y Alonso, 2005; Meyer, 2003; Carpizo, 2002; Krauze, 1997; Alonso, 1994).

Por otro lado, el complejo proceso político a partir del cual fue posible observar el *protagonismo social del empresariado mexicano*, coadyuvó al fortalecimiento de una *derecha* que igual aglutinaba al PAN (fortalecida por la emergencia del *neo-panismo*, presencia de medianos empresarios que se introdujeron abiertamente a ese partido a partir de la nacionalización de la banca en 1982), la Iglesia Católica, y Organizaciones Civiles como: *Asociación Nacional Cívica Femenina* (ANCIFEM), *Desarrollo Humano Integral, A.C.* (DHIAC), *Movimiento Familiar Cristiano*, *Frente Cívico de Participación Ciudadana* y *Asociación Cívica Estudiantil y Pro-Vida*, entre otros. Esta fuerza política logró que su esfuerzo se viera recompensado con mayores resultados, tales como la renuncia de Ramón Aguirre a su presunto triunfo en Guanajuato, que representó el “reconocimiento informal” del triunfo de Fox, candidato del PAN a la gubernatura de ese estado en 1991, y que se corrobora con la aceptación del “sistema” mediante una “concertación” para ceder la investidura a Medina Plascencia, militante del mismo partido político (Loeza, 1999).

El mismo empuje empresarial en el PAN es lo que condujo a la postulación de Clouthier (ex-presidente de la COPARMEX y el CCE) como candidato a la presidencia en 1988, al triunfo electoral en el gobierno de Baja California en 1989, al triunfo de Fox (no reconocido inicialmente) en las elecciones para gobernador en el estado de Guanajuato en 1991, y más adelante el triunfo en Jalisco y Querétaro. Y aunque la confrontación con el PAN es de mucha menor intensidad, el mismo triunfo de Barrio como candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua el 12 de julio de 1992, se debe, en gran parte, a la tarea política empresarial realizada desde mediados de los años ochenta. Lo que resulta importante contemplar, respecto a las preferencias políticas de los empresarios, es que independientemente de la semejanza entre el proyecto político del PAN y la política económica de gobierno de Salinas y Zedillo, se provocó una división en las simpatías empresariales en víspera de las elecciones para gobernador en el estado de Chihuahua. Unos apoyaron al candidato del partido oficial y otros al candidato del

PAN. De tal manera que en el momento en que se confirmó oficialmente el triunfo de Barrio, sin ninguna contemplación, el CCE de Chihuahua solicita al nuevo gobernador, a nombre de todo el sector empresarial, que en su gabinete incluyera a algunos empresarios para que quedara garantizado un gobierno chihuahuense con "*visión empresarial*" (*El Financiero*, 17 de octubre de 1991).

Esto permite comprender cómo se van vinculando las posiciones del PAN y del Partido Oficial, puesto que es la presencia empresarial en el primero, y su alianza con la tecnocracia, la que permite a Salinas de Gortari tejer un escenario de diálogo con la oposición, del cual quedó excluido el PRD. Como es el caso del triunfo de Miguel Alemán Velasco (expresidente de Televisa) como candidato al Senado por el Estado de Veracruz en las elecciones de 1991; a partir del cual se observa un cambio en el *discurso de la principales organizaciones empresariales* que, a diferencia de cierta reticencia respecto a la confianza otorgada al gobierno de De la Madrid, da un vuelco a su estructura discursiva sustituyendo la variable "crítica" por la de "apoyo", que es prácticamente total al nuevo régimen (Ver siguiente capítulo referente al *discurso empresarial*). Un ejemplo es la declaración del CCE en cuanto a que los resultados electorales de 1991, en los que el PRI resultó vencedor (con o sin fraude), con lo ratifica la confianza del sector empresarial en las acciones del gobierno (*La Jornada*, 28 de agosto de 1991).

Evidentemente, la transformación del orden estatal que posibilitó la instauración del nuevo modelo de desarrollo, estuvo respaldada por las reformas constitucionales realizadas por los dos gobiernos a la que se hace referencia. En el caso del gobierno de De la Madrid, la reforma a los artículos 25, 26, 27 y 28 (fundamentalmente), así como las especificaciones en el *Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988)*, definieron el nuevo papel del Estado mexicano así como también, sobre todo en el segundo caso, definieron la importancia que en lo sucesivo tendría la iniciativa privada. De igual manera, en una relación causa-efecto, la continuidad en este sentido se comprueba a partir de las reformas constitucionales impulsadas por Salinas de Gortari a finales de 1991. Particularmente, la reforma de los artículos 3, 27, y 130, que rebasan lo estrictamente estructural conciliando intereses de la *derecha mexicana* en materia de educación, intervencionismo económico estatal y los derechos de la Iglesia católica. Esta acción estatal consolidó la alianza entre la tecnocracia y las elites empresariales, reafirmando los nexos para legitimar en lo subsecuente el nuevo modelo de desarrollo de corte neoliberal (Meyer, 2003; Carpizo, 2002; Krauze, 1997). La consolidación del clase dominante no dejaba lugar a dudas que

el avance del *proyecto tecnocrático* representaba la consumación del proyecto de nación que los empresarios delinearon a partir del ideario político que dio origen al CCE, en 1975 (Arreola, 1988).

Cuando ya se perfilaba la contienda electoral en los estados de Michoacán y Chihuahua para julio de 1992, Nicolás Madáhuar, presidente del CCE, declaraba "*que no habría de temerse la alternancia en el poder*" (*El Financiero*, 28 de febrero de 1992). Evidentemente las expectativas políticas empresariales estaban pensando en la alternancia con el PAN, más no con el PRD. En junio de ese mismo año las simpatías empresariales ya se encontraban divididas entre el candidato de Acción Nacional y el Partido oficial (*La Jornada*, 24 de mayo y 16 de junio de 1992). De tal manera que al momento de triunfar Francisco Barrio como gobernador del estado de Chihuahua, lo único que hace la organización empresarial cúpula es ratificar, independientemente de la división empresarial en la campaña electoral, su apoyo irrestricto de todo el sector. De cualquier manera, en la medida que los dos partidos comparten el proyecto de nación de las elites empresariales, la alternancia en el poder (tendencia al bipartidismo PRI-PAN) le resulta palpablemente satisfactoria. La incursión en nuevas formas de participación política del empresariado mexicano representa la oportunidad de ir consolidando su posición en los pactos de "concertación" que en lo sucesivo podrían firmarse. Es el caso del *Acuerdo Nacional para Elevar la Productividad y la Calidad* firmado el 25 de mayo de 1992. (*La Jornada*, 26 de mayo de 1992).

Dicho acuerdo colma las *viejas demandas de los sectores empresariales más radicales*, particularmente del empresariado aglutinado en la COPARAMEX, respecto a la necesidad de reformar el Artículo 123 y la correspondiente *Ley Federal del Trabajo*. Si bien ese artículo no había sido reformado, ni lo sería en el futuro inmediato, según declaraciones del Secretario de Trabajo, Arsenio Farrell, la firma del convenio abre todas las posibilidades para que en los hechos dejaba atrás lo establecido en la *Ley Federal del Trabajo*. Este acuerdo confirma las garantías que tienen los empresarios, nacionales y extranjeros, en el proceso de *flexibilización laboral* (*El Nacional*, 23 de enero de 1992).

De hecho, la firma del *Acuerdo Nacional para Elevar la Productividad y la Competitividad* (ANEPC) es el elemento central que justifica una "modernización laboral" que en lo inmediato impacta negativamente en contra de los trabajadores, ya que el principio de *flexibilidad* manejado por los empresarios, no solo aspira a superar las resistencias de los

trabajadores, sino que pretende terminar con la *estabilidad en el trabajo*. La víspera de la firma del TLC que exige elevar la *competitividad* de los productos mexicanos, tanto en el mercado nacional como en el internacional, exige sobre todo a los trabajadores su compromiso con la nación. Se habla de la imperiosa necesidad de elevar la *productividad* y de la posibilidad que a esto corresponda, a futuro, el incremento de los salarios. Por ejemplo, el presidente del CCE expresa que para salir de la pobreza es necesario, primero, *eleva la productividad* (*La Jornada*, 12 de mayo de 1992). Lo cual contempla cómo en la óptica empresarial, para mejorar la redistribución de la riqueza, primero, será necesario demostrar que ha mejorado la generación de la misma, para lo cual los trabajadores tendrían que dejar claro su disposición para ser cada vez más productivos. Si a un futuro, evidentemente no inmediato, la *productividad del trabajo* garantizaría la permanencia e incremento de la cuota de ganancia, entonces, sería fácil deducir que los empresarios contemplaban las posibilidades del incremento salarial y la recuperación del nivel de vida de las clases trabajadoras, en la medida que su *productividad* se elevara y que las clases trabajadoras cooperaran para ello. Lo cual significaba que los trabajadores aceptarían los nuevos conceptos del discurso empresarial, y las implicaciones que de ello derivan, como es el caso de la *flexibilidad laboral* (COPARMEX, 1993).

Si bien era difícil establecer el peso preciso que tuvieron los empresarios en la definición del nuevo modelo de desarrollo que comienza a instaurarse en el sexenio de De la Madrid, si es posible afirmar tajantemente que los empresarios nacionales, sus elites, constituyen al actor político que legitimó la instauración de este proceso. En ese sentido se dirige la idea de Puga develando el importante papel que jugó el empresariado nacional en esta parte del proceso de transición:

*Esto lo hacen, en primer lugar, a través de una campaña permanente para afianzar los avances del neoliberalismo y obtener nuevos logros: aquí se insertan los aplausos a la política de privatización, entre ellas la de la banca y la de los servicios públicos (transporte, electricidad, agua potable, recolección de basura, etc.)* (Puga, 2004: 217).

Como se puede fácilmente deducir, no solamente se trata de una proximidad ideológica, sino de beneficios concretos que se traducen en mayor concentración de la riqueza en manos de las elites económicas, que hacen evidente, también, su poder económico. Esto permite comprender cómo la política del Salinas de Gortari, así como las alianzas que establece con empresarios de relativo nuevo cuño, favorece a los nuevos ricos que en casos como los de la banca, desplazan a las elites económicas tradicionales. Así lo sugiere la presencia económica que

a nivel internacional tienen los empresarios mexicanos, como se puede observar en la lista de la revista Forbes de 1994.

Evidentemente también influyeron las condiciones externas: la crisis económica mundial, así como las directrices establecidas por instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero también, independientemente de las elites empresariales, la *nueva burocracia política*, la tecnocracia, que *dejó de compartir la visión nacionalista de sus predecesores*, e incorporó un modelo de desarrollo que en lo económico dependió fundamentalmente de los flujos del capital extranjero y que coadyuvaba a exaltar los beneficios del proceso de la globalización (Alonso, 1992; Valenzuela, 1997, 1986).

En ese sentido, el acuerdo de la tecnocracia con las elites empresariales que recupera De la Madrid y que consolida Salinas de Gortari, es el elemento fundamental, sobre todo en lo político, que permite legitimar un modelo de desarrollo excluyente de grandes capas de la sociedad mexicana (Rouseeau, 1995; Basáñez, 1990).

De esa manera, partiendo de una definición elemental del Estado, en la que éste representa los intereses globales de la sociedad; lo que se hace evidente, y no se probaba lo contrario con la política asistencialista de *Solidaridad*, es que el nuevo modelo de desarrollo responde totalmente a las demandas de las elites empresariales expresadas a partir de sus organizaciones de clase. Esto se advierte a partir de la decisión gubernamental por *liberar la economía, privatizar las inversiones públicas, adelgazar el aparato estatal* y disminuir el gasto público, así como en la misma *política de tope salarial* que impide la conformación de un mercado interno solvente. La exclusión de las clases trabajadoras es más visible en lo económico que en lo político, aunque si se analizan los núcleos en los que se *toman las decisiones* que definen el rumbo de la nación, fácilmente se confirmará su exclusión política (Concheiro, 1996).

## Los grandes millonarios del *salinismo*

Nombre	Millones dls.	Empresa
Carlos Slim Helú	6.60	Telmex
Emilio Azcárraga y Fam.	5.40	Televisa
Familia Zambrano	3.10	PEMEX
Familia Peralta	2.50	Grupo Iusa
Jerónimo Arango	2.20	Cifra
Alfonso Romo Garza	2.20	La Moderna
Alberto Bailleres	1.90	Industria Peñoles
Pablo Arámburu	1.80	Grupo Modelo
Familia González N.	1.50	Comercial Mexicana
Familia Molina	1.40	Grupo México
Adrián Sada y Fam.	1.30	Vitro
Abel Losada Gómez	1.30	Grupo Gigante
Roberto Hernández R.	1.20	Banamex
Ricardo Salinas y Fam.	1.20	Electra
Bernardo Garza y Fam.	1.20	Grupo Alfa
Lorenzo Sevítje y Fam.	1.20	Grupo Bimbo
Roberto González	1.10	Industria Maseca
Jorge Larrea	1.10	Banamex-Accival
Eugenio Garza y Fam.	1.10	Grupo Visa
Moisés Cosío y Fam.	1.00	Telmex
Familia Martínez G.	1.00	Grupo SIDEK
Familia Franco	1.00	Grupo Inflan
David Peñaloza y Fam.	1.00	Grupo Tribasa
Alfredo Harp Helú	1.00	Banacci

Fuente: Revista *Forbes*, tomado de *El Financiero*, 5 de agosto de 1994

En una lógica de continuidad estatal, el proceso de *liberación de la economía* culmina con la proyección de incorporar a la economía nacional al mercado regional norteamericano. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México fue el elemento económico más importante para crear certidumbre en el futuro inmediato. Por lo tanto, la estrategia económica tiene un trasfondo político que fortalece la posición gubernamental, puesto que al satisfacer las demandas empresariales, éstos quedan comprometidos a respaldar o responder ante cualquier cambio resultante de fincar todas las expectativas en base al TLCAN (Puga, 2004). A tal grado llega esta situación, que hasta las fracciones más agresivas ante el Estado se mostraron preocupadas cuando, por cuestiones

electorales en los Estados Unidos, recordemos el fenómeno Perot, se cernía la amenaza de postergar la firma del acuerdo. Es el caso de la COPARMEX, organización empresarial que por su misma naturaleza confronta frecuentemente las iniciativas estatales, que convocó a los empresarios nacionales a iniciar una campaña para no desalentar a la sociedad civil ante la posibilidad de que no fuera firmado dicho tratado. La COPARMEX planteó: "... *la necesidad de que se inicie lo más pronto posible una campaña de concientización para evitar que una probable posición de la firma del tratado cause un 'desencanto nacional'*" (El Financiero, 13 de Marzo de 1993).

### 3.2. 2 *Del neoliberalismo al liberalismo social.*

La naturaleza social del proyecto neoliberal puede evidenciarse al reconocer que después de su instauración en México a partir de 1982, validó la estrategia de la *tecnocracia* para resolver la crisis que se vivía desde los años setenta, *haciendo predominar progresivamente a la economía los demás ámbitos de la sociedad*. Es decir, que conforme avanzó el proyecto en el terreno de la "modernización" económica e institucional (política laboral, seguridad social, educación, salud, descentralización regional, agricultura, aparato legislativo, etcétera) los actores sociales con preponderancia en la *toma de decisiones* fueron, en lo sucesivo: la *tecnocracia* y los *propietarios del capital*. De tal manera que el resto de los sectores sociales van quedando excluidos en la definición del modelo económico, en el corto y mediano plazo, "mientras se estabiliza la situación económica".

El costo social de un proyecto de esta naturaleza lleva consigo la postergación de la democracia, puesto que la definición de una nueva política económica que privilegia la estabilidad del mercado va en detrimento de los intereses concretos e inmediatos del grueso de la población (empleo, vivienda, alimentación, educación, salud, etcétera) provocando movilizaciones sociales que evidencian la crítica a la política gubernamental. En ese sentido, se genera una contradicción entre *el avance de la modernización y el autoritarismo político, que se requiere para contener las protestas contra los efectos de la nueva política económica del Estado* (Foxley, 1988; Villarreal, 1986; Guillén, 1997).

Aquí cabe mencionar, que el hecho que en México no apareciera la figura militar en el escenario político nacional, como en el resto de los casos latinoamericanos, no permite concluir

que el avance del neoliberalismo contempla la participación democrática de la sociedad. Al contrario, los mismos efectos sociales que provoca el proyecto neoliberal hacen necesaria *una mayor concentración del poder*, aun cuando la transición mexicana estaba favoreciendo una interpretación que contempló la emergencia de la *sociedad civil*, es decir, el equilibrio entre ella y un estado *paternalista*. El manejo oficial de la elección presidencial de Salinas de Gortari en 1988, las elecciones estatales de 1991 y 1992 (sobre todo los casos de Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán) reflejaron la negativa del “sistema” para democratizar el proceso de “modernización”, situación que culmina con el fortalecimiento del presidencialismo (concentración del poder en la figura presidencial y subordinación del poder Legislativo y el Judicial) reforzado por un *sistema corporativista de partido predominante que es virtualmente respaldado por la clase empresarial, en la medida que sus demandas son totalmente satisfechas por el Estado*. Según lo sugiere el discurso de las organizaciones empresariales en los años, 1985, 1993, 1994, 1995, 1996, y 1997, objeto de investigación que se presenta en el capítulo siguiente.

De cualquier manera, para comprobar la esencia del proyecto neoliberal en el sexenio de Salinas de Gortari, es pertinente atender la propia definición que hacen sus voceros. En ese sentido, las *lecciones de la reforma económica mexicana* de José Córdoba, principal asesor de Salinas de Gortari, es uno de los referentes para discutir el carácter del *nuevo proyecto del Estado mexicano* (Córdoba, 1991). En ese famoso ensayo se explica la estrategia del programa estabilizador que se viene aplicando desde el sexenio de De la Madrid (1982-1988). Córdoba aborda: 1) el significado que tiene el saneamiento de las finanzas públicas, que progresivamente elimina los subsidios (una política de recorte presupuestal que tiende a reducir el gasto público “no prioritario”); 2) cómo evitar la indización de la economía, es decir, contener y disminuir la inflación (que según el asesor presidencial se hace posible por “*la capacidad del movimiento obrero organizado para negociar la política salarial y velar, eficazmente, por el cumplimiento de los acuerdos*” (Córdoba, 1991: 34); 3) la fijación de los precios básicos y los salarios nominales (elemento clave para contener la inflación y que tienen su máxima expresión en el compromiso que trabajadores y empresarios adoptaron en el *Pacto de Solidaridad Económica*, donde según el autor: *los empresarios cooperaron reduciendo sus márgenes de utilidades* (Córdoba, 1991: 35); 4) el aspecto de la renegociación de la deuda externa, que se traduce en un importante ahorro interno; 5) el retraso de la liberación financiera en un marco de privatización bancaria; la necesidad de liberar el comercio, que garantiza el paso de una economía cerrada a una abierta,

dejando claro que este punto es sustancial para crear la confianza y la certidumbre en el proyecto de Salinas de Gortari; 7) el aspecto de la simplificación administrativa y la desregularización económica; 8) la privatización de la economía como estrategia para incrementar los ingresos públicos; 9) la creación de las condiciones necesarias para atraer a la inversión extranjera, y 10) la necesidad de mantener una política económica coherente. Córdoba señala:

*”...en México, el balance necesario en la composición del gabinete se ha mantenido sin sacrificar la homogeneidad del equipo económico. El Presidente tiene una reunión semanal de gabinete a fin de dar seguimiento directo al desempeño de la economía y asegurarse de la consistencia entre las distintas estrategias que se ponen en práctica. Para ilustrar este punto, vale la pena considerar que el Director del Banco de México y el Secretario de Trabajo y Previsión Social, dos funcionarios claves en el manejo de la política monetaria y salarial –las dos variables de impacto mayor y más directo en las expectativas de la sociedad-, han colaborado en el gobierno desde 1982, precisamente cuando dio comienzo el esfuerzo estabilizador: ambos disfrutaban de gran autoridad moral y credibilidad. Esto ha facilitado la instrumentación de las políticas económicas” (Córdoba, 1991: 48).*

La exposición de Córdoba Montoya se enmarca en la estrategia económica y los logros de los dos últimos gobiernos, que hicieron posible la estabilización de la economía mexicana. Evidentemente, “olvida” los costos sociales que ha tenido el ajuste al manejar ideológicamente la participación de los principales sectores sociales: trabajadores y empresarios. Estos núcleos aparecen negociando sus intereses concretos de clase (*grosso modo*, salarios y ganancias) bajo el compromiso con la nación. La mediación del gobierno en el *Pacto de Solidaridad Económica*, (diciembre de 1987) lo hace emerger como legítimo representante de los intereses conjuntos de la sociedad mexicana. Según Córdoba, los trabajadores tienen la suficiente capacidad para negociar sus intereses, aunque, obvio, no cuestiona la representación “legítima” del líder oficial de los trabajadores (Fidel Velásquez). La “modernización” radical del sindicalismo corporativizado (el “Quinazo” en el sindicato petrolero y la renuncia de Jongitud Barrios a la presidencia vitalicia del sindicatos de maestros –SNTE-) se consolida con lo que se conoció en esos años como *flexibilidad laboral*, que alcanza prácticamente a todos los sindicatos y que no es otra cosa que la anulación de facto de la Ley Federal del Trabajo. Se trata de vencer la resistencia “natural” de los trabajadores bajo el pretexto de elevar la productividad para enfrentar la competencia internacional en el marco del *Acuerdo de Libre Comercio*. Evidentemente, los beneficiados inmediatos son los empresarios nacionales y extranjeros; el caso de los trabajadores de la industria textil y los de la Volkswagen, en la primera mitad de los noventa, tan sólo son un

ejemplo de la embestida gubernamental y empresarial en contra de los trabajadores. De tal manera que “el prestigio y la autoridad moral” de la que gozan, según Córdoba Montoya, el Secretario de Trabajo y Previsión Social (sin duda, con buena reputación para los empresarios y terror para las organizaciones sindicales ante la alianza *tecnocracia-empresarios*) radica en los excelentes resultados de la *flexibilización de las relaciones capital-trabajo*. En ese sentido se explica la declaración de Carlos Abascal, presidente en turno de la COPARMEX, quien señalaba: *No es necesaria la reforma laboral, puesto que la flexibilidad laboral ofrece condiciones que los empresarios requieren para ser competitivos* (*La Jornada*, 5 de junio de 1992). Sin duda, un *lapsus* que reflejaba las bondades que el mediador, el gobierno, le ofrecía como prebenda al sector empresarial.

Por lo que toca al supuesto sacrificio de las ganancias empresariales, habrá de recordarse que también en este sector existen problemas de representación de clase. Es claro que los medianos, pequeños y micro-empresarios, se vieron muy afectados por el ajuste económico y por la apertura comercial, mientras que las elites empresariales vieron aumentar con creces sus ganancias. Es por ello que el proyecto de nación que promovió el gobierno mexicano desde 1982, está apoyado en el terreno político, fundamentalmente, por las elites empresariales. Esto refleja cómo *en la medida que predominan sus criterios económicos en la conducción de la nación, los empresarios se presentan como la clase preponderante para legitimar la acción gubernamental tendiente a desmontar esa suerte de Estado benefactor “a la mexicana” y dar cauce a una economía de mercado* (Tirado, 1997; Hernández, 1992; Luna, 1990).

Consecuentemente, mientras el nivel de vida de las clases subalternas caía en un profundo deterioro, el discurso gubernamental y el de las principales organizaciones empresariales manejaban la idea de la necesidad de modernizarse como única alternativa para que nuestra economía pudiera incorporarse al Primer Mundo. De tal manera que las manifestaciones de protesta de importantes sectores de la sociedad mexicana eran interpretadas progresivamente como formas de expresión que ya no correspondían a la nueva etapa de desarrollo de nuestro país, y en general, al cambio social en el mundo a fines de milenio. Las huelgas de hambre, éxodos por la democracia, marchas y plantones, fueron prácticamente ignorados desde el sexenio de De la Madrid, mientras que en el gobierno de Salinas de Gortari, eran enjuiciadas por la tecnocracia y por las elites empresariales a partir del discurso de sus principales organizaciones, con el cartabón de la modernidad y los requerimientos de competitividad que nuestro país

requería ante la evidente reconfiguración del mercado internacional. La tecnocracia de los gobiernos de De la Madrid y Salinas de Gortari criticó, junto con los grandes empresarios, los excesos de los gobiernos populistas que los precedieron. El intervencionismo del Estado fue, entonces, considerado como la principal causa de la crisis económica, la misma tecnocracia reconocía, e implícitamente censuraba, la responsabilidad de los gobiernos anteriores al mandato de De la Madrid. En el Congreso del Trabajo comenzaron a discutirse los excesos de las huelgas; y por su parte los empresarios hablaban de la generosidad de la *flexibilidad laboral*. Esta transformación de las señales del escenario político se entiende a partir de la concertación impulsada por el Estado y apoyada por la representación de las elites empresariales (CCE) y el portavoz formal de los trabajadores, el Congreso del Trabajo. Los nuevos consensos legitimaban el proceso de “modernización” instaurado progresivamente desde 1982 (Concheiro, 1996).

Se trata de una *nueva ideología objetivada en el discurso dominante*, que antepone los principios de *eficiencia y eficacia* (considérese el objetivo que persigue el manejo ideológico del *Acuerdo Nacional para Elevar la Productividad*) como los nuevos desafíos para la nación. La privatización y la apertura económica que definía el nuevo papel que en lo sucesivo jugará el capital privado son presentadas como las únicas alternativas para entrar a la Modernidad.

Es sustancial considerar que el *nuevo discurso que instrumenta la tecnocracia* refleja, primero, un *cambio en la racionalidad del estado mexicano*, pero, segundo, la *necesidad de construir un escenario que legitimara el modelo económico* por el que había optado la nueva clase política (Valdés, 1997; Guillén, 1997; Concheiro, 1996; Alonso, 1992;). Evidentemente, la coincidencia de todos los tópicos vertidos en el discurso tecnocrático, sobre todo el correspondiente al modelo económico, era claramente respaldada por el sentido que tomaba el discurso empresarial al dibujar un proyecto de nación que coincidía plenamente con el proyectado por el ejecutivo en el escenario público.

Debido a sus características económicas, el nuevo proyecto de nación es definido en los medios académicos e intelectuales, de manera generalizada, como un modelo neoliberal. Pero en la medida que éste ha demostrado, a partir de la experiencia concreta latinoamericana, su rotundo fracaso y su carácter excluyente, la tecnocracia inteligentemente buscó, del mismo modo que lo harían instituciones multilaterales como el Banco Mundial, una estrategia para recuperar el consenso que requiere la legitimación de dicho proyecto. Se trata, primero, de crear un instrumento institucional para atender de manera focalizada las necesidades básicas de las clases

marginadas (*Programa Nacional de Solidaridad*), y segundo, extender su acción a los sectores urbanos que potencialmente representaba un peligro en las coyunturas electorales. De esa forma la tecnocracia intenta restar los efectos negativos al proyecto neoliberal que encabezaba Salinas de Gortari, por ello era recurrente las formas de negar su carácter excluyente así como *restituir el sentido social del proceso de desarrollo nacional. Es decir, la tecnocracia intentó ideológicamente destacar el compromiso del Estado con las clases subalternas. Se trataba de restar el carácter autoritario del proyecto a partir de exaltar su sentido social y, por tanto, incluyente.*

Es precisamente *Solidaridad* el instrumento institucional a partir del cual la *tecnocracia intenta borrar el sentido neoliberal, excluyente en lo económico y político, del proyecto salinista*. Por esa razón, el gobierno salinista no escatimó esfuerzos ni recursos económicos para proyectar en el imaginario colectivo, que su política económica estaba claramente marcada por un liberalismo social que sugiere cómo un plan de desarrollo acorde con las condiciones contemporáneas, responde a las necesidades de “modernización” al mismo tiempo que satisface las necesidades de las clases subalternas. Con ello se intentaba dar una mejor imagen al proyecto gubernamental que pretendía modernizar la economía, y en general, las condiciones del mercado, privilegiando la salud de las empresas y comprimiendo los salarios de los trabajadores, que en la lectura de la tecnocracia, daban muestra de su conciencia sobre los escenarios que enfrentaba el país (Valenzuela, 1995).

La primera declaración oficial y concreta, que define el carácter del modelo de desarrollo “modernizador”, la hizo Salinas de Gortari el 4 de marzo de 1992, en el LXIII Aniversario del Partido Revolucionario Institucional (*El Economista*, 5 de marzo de 1992). Al respecto, es necesario tener presente dos aspectos: 1) este suceso es posterior a las elecciones de 1991, donde el Estado jugó a reafirmar formalmente su predominio en el quehacer legislativo, y 2) se esperaba del presidente de la nación y el líder oficial del partido la propuesta para modificar el membrete del partido oficial, el carácter “Revolucionario”, pues por el papel que tuvo *Solidaridad* en los resultados electorales del año anterior, se esperaba que el nuevo nombre del partido oficial hiciera alusión a la política social del Estado (Alonso y Tamayo, 1994; Martínez Assad, 1992; Aziz Nassif, 1996; Gómez Tagle, 1990). En la declaración de principios que el Ejecutivo hizo del proyecto, si bien hace evidente la negación del sentido antisocial del neoliberalismo y los excesos del Estado interventor, sorprendieron sus definiciones entorno de lo que era el *Nuevo Estado* y la

soberanía de la nación. Así, para Salinas de Gortari el papel del Estado era planteado de la siguiente manera:

*“Nuestro liberalismo social en cambio (a lo que plantea el liberalismo), promueve un Estado solidario, comprometido con la justicia social, trabajando siempre dentro del régimen de derecho, conduciendo el cambio en el marco de la ley y manteniendo la estricta vigencia y protección a los derechos humanos”.*

De tal manera que ideológicamente pretende validar el compromiso del Estado mexicano con el conjunto de la sociedad (situación que todo estado reproduce en el discurso), destacando las cuestiones de justicia, igualdad y democracia. Pero en última instancia, probar lo contradictorio del planteamiento requiere confrontar la tendencia de la acumulación en las *nuevas elites empresariales* y el deterioro en el nivel de vida de la masa social; los grados de incidencia de los primeros en la *toma de decisiones* que definen el rumbo del país, y la exclusión de los segundos, por ejemplo, en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio.

Lo más sorprendente es la conceptualización de soberanía, en ese sentido, Salinas de Gortari señalaba:

*“Para nuestro liberalismo social la soberanía es fundamental y razón de sobrevivencia y objetivo único que da sentido a las metas que perseguimos, porque queremos que sean nuestras. La posición geográfica de México es ineludible y no deja lugar a dudas. La nación debe asegurar en todo momento su fortaleza para perdurar soberana en la vecindad con la mayor potencia del mundo”.*

En la definición de este concepto se advierte todavía el “respeto” de la tecnocracia por el *tradicional nacionalismo* al que ha recurrido en diversas ocasiones el Estado para legitimar sus decisiones, fundamentalmente en el terreno de la política internacional, pues el inevitable vuelco para responder al proceso de globalización, exigía confirmar el concepto neoliberal del modelo económico que venía consolidándose desde el primer año del gobierno de Miguel de la Madrid. De esa forma, era cuestión de revisar la negociación entre los países firmantes de la Comunidad Económica Europea, donde las diferencias no eran tan profundas como en la relación de México con Estados Unidos y Canadá. Pretender que nuestro país salvaguardaba su soberanía en las negociaciones del TLCAN era realmente arriesgado, por la propia situación de dependencia económica que nuestro país tiene, particularmente con los Estados Unidos. En ese sentido, la nueva racionalidad de la *tecnocracia* estaba marcada por la contradicción; el *recurso del nacionalismo* en el discurso hace aparecer a la *tecnocracia, burocracia moderna, como los*

“*viejos reaccionarios*” que tanto criticaban, pues las referencias al *nacionalismo* por parte de los estados, por muy modernos que pretendan ser, son indispensables para apelar a la unidad y para justificar las decisiones gubernamentales.

Los efectos sociales que tuvo el cambio radical que condujo a nuestra nación a tener una de las economías más abiertas del mundo (Córdoba, 1991), evidentemente obligaron al gobierno *salinista*, dada la reprobación política que se manifestó en las elecciones de 1988, a reivindicar el compromiso gubernamental con las clases marginadas a través de una política social. Pero esta estrategia que tiene por objeto restituirle el consenso al Estado, después de ganar la “confianza del empresariado”, no niega el carácter neoliberal, es decir, el carácter excluyente del proyecto “modernizador”. Como lo señala Foxley, el neoliberalismo no está reñido con la política social, como lo demuestra la experiencia de su incorporación en América Latina, fundamentalmente en el caso de Brasil, donde los empresarios participaron directamente, desde finales de los años sesenta, en la instrumentación de la política social. Ésta, entonces, ha de ser considerada como una medida del gobierno para *mediatizar a la sociedad en su oposición a la política económica del Estado* (Foxley, 1988).

El *cambio estructural* y la *reforma estatal* (transformaciones constitucionales) dan cuenta del sentido “modernizador” del nuevo proyecto gubernamental; la nueva ideología del Estado, *su manoseada Solidaridad*, sustentada en un *liberalismo social* de extraordinaria hibridez, es la intención de la tecnocracia de *reformular ideológicamente el sentido autoritario y excluyente del neoliberalismo* (Alonso, 1992).

Se trata de distinguir entre una práctica gubernamental que consolida un proyecto de nación que claramente se distingue del pasado, proyectándose hacia el futuro como la única posibilidad de resolver la crisis económica del modelo de desarrollo anterior. El dilema que enfrenta el *neoliberalismo*, entonces, radica en el efecto devastador que representa el desmantelamiento de una política que privilegia el gasto social y la presencia de un mercado poco competitivo para sobrevivir sin la intervención del gobierno, ofreciendo las oportunidades suficientes para generar el consenso requerido por todo gobierno. El reto de la *tecnocracia* es restituir la legitimidad que anteriormente tuvo el sistema político, en un contexto económico que reduce considerablemente las posibilidades de mantener los mismos niveles de empleo, y por tanto, los niveles de consumo que en mucho explican el importante papel que juegan las estructuras corporativas para generar el consenso requerido.

El efecto negativo para la reproducción económica de medianos y pequeños empresarios, como en el caso de las clases trabajadoras, exige a la tecnocracia garantizar la legitimación de una política económica que al “modernizar” las estructuras económicas afecta los intereses de sectores sociales que se van rezagando o quedando claramente marginados de dicho proceso. En esa perspectiva, el manejo discursivo que intenta destacar el sentido social del proyecto económico salinista, pretende convencer a la opinión pública del compromiso que mantiene el Estado mexicano, al menos, con las clases trabajadoras (Meyer, 2003; Concheiro, 1996; Valdés, 1997).

Esta condición que impone una política social concreta y un manejo ideológico que pretende esconder la esencia del proyecto neoliberal, es la única posibilidad que permite comprender los marcados esfuerzos del gobierno salinista por hacer que la sociedad mexicana se convenza del carácter social de su proyecto de gobierno. Evidentemente, esta interpretación queda claramente justificada cuando se considera el tipo del discurso gubernamental que se utiliza en ese sexenio, la coyuntura en que se inscribe, y desde luego, el discurso que expresan los diferentes actores políticos que dan forma al escenario político de esos tiempos: intelectuales, partidos políticos, organizaciones representativas de las clases trabajadoras, y las organizaciones empresariales que, invariablemente, en ese sexenio se dieron a la tarea de legitimar el avance del proyecto neoliberal. En ese sentido va la idea de Puga:

*Cada vez más, el proyecto nacional se acerca a su proyecto y, sin preocuparse mucho por el efecto que la apertura comercial y las inversiones extranjeras produzcan sobre medianos industriales –que en todo caso, se lo merecen por ineficientes–, contribuyen hoy a través de sus ideólogos a enriquecer el nuevo pensamiento de la modernización (Puga, 1990: 217).*

Como se puede observar, el *proyecto de la modernización* que promovió la *tecnocracia* diluía el contenido de los preceptos del *nacionalismo* que los diferentes gobiernos posrevolucionarios esgrimían para legitimar todas las acciones del estado. Singularmente Salinas, se abocó a cubrir el nuevo modelo económico con el manto de la *modernización*, que en su propio discurso alternaba con el término *modernidad*. En ese sentido, fue muy importante el eco generado por otros actores políticos como los intelectuales que se sumaron a la fiebre de la modernización, como el de las organizaciones empresariales cuya presencia en los medios de difusión garantizaron la *legitimación del proyecto tecnocrático*. Demostrando, fehacientemente,

la compatibilidad del proyecto empresarial y el proyecto de la nueva clase política que ascendió al poder desde 1982.

### 3.2.3 *La crisis del neoliberalismo. 1994, el año de la violencia.*

Una de las principales implicaciones del modelo neoliberal en el ámbito de la política, es la transformación del escenario nacional en el cual acontece un desplazamiento de actores sociales anteriormente preponderantes para los rituales de la política. Precisamente, en una perspectiva de suma cero, la “modernización” política propició la expulsión de las clases subalternas que en el modelo populista eran el blanco del discurso oficial y de buena parte de las políticas públicas que permitieron adquirir forma al Estado social autoritario. En contraparte, vimos el ascenso progresivo de la clase empresarial como el actor social preponderante en los rituales que se recrearon desde entonces en los escenarios del poder. De esa forma, el cambio que supone una transición supone también un cambio en las estructuras simbólicas, donde el nacionalismo se asocia a una tradición que deja de tener sentido al final de un milenio marcado por una modernidad que apunta en sentido contrario a su esencia. Persiste como algo anacrónico cuyo sentido no responde a las nuevas condiciones impuestas por un proceso de globalización que define lo que tiene cabida en el presente, y lo que ya ha caducado para la Modernidad. Entonces, la ideología neoliberal es la punta de lanza con que las nuevas fracciones dominantes imponen esta ideología que reniega del pasado (Gellner, 1998, 1997, 1988; Balandier, 1994<sup>a</sup>, 1988).

Por esa razón, poco a poco, los principios de eficiencia y eficacia comenzaron a ser términos de uso común entre voceros de las principales organizaciones empresariales y del gobierno mexicano. Con esta “calificación” al modelo de desarrollo populista, se inició el proceso de privatización y desmantelamiento de la política de gasto social, pues según las conclusiones neoliberales, la causa de la crisis económica que vivimos desde los ochenta, es el “despilfarro” de una política “populista”. No se trataba de la competencia desleal que la intervención directa del Estado representaba para los empresarios mexicanos, sino en general, de una política cifrada en el dispendio, en la irracionalidad y la corrupción del gobierno. Sin embargo, a pesar de la coincidencia entre el proyecto de nación que desde los años setentas

demandó el empresariado mexicano, y el modelo de desarrollo que promovió la tecnocracia desde los ochenta, la crisis económica adquirió matices cada vez más dramáticos (Garrido, 1992).

En ese sentido es importante considerar que la participación formal de los empresarios en la política adquiere relevancia desde mediados de los ochenta, cuando la presencia del PAN comienza a reflejarse en el norte del país. Sin embargo, dentro de la política formal el hecho más importante, es la participación abierta de las elites empresariales para apoyar la campaña presidencial de Salinas de Gortari. En diciembre de 1987, se constituye la *Comisión de Financiamiento y Fortalecimiento Patrimonial del PRI*, en la cual participan importantes empresarios que consolidarían su posición económica en el siguiente sexenio, al cosechar los productos de la privatización. También se ha de destacar que se incorpora a la actividad pública Claudio X. González, presidente de la empresa *Kimberly Clark*, como asesor presidencial para la inversión extranjera. Se trata de un proceso mediante el cual los empresarios abandonan prácticas políticas del pasado para compartir los escenarios de la modernidad política. Su presencia es, por lo tanto, uno de los elementos más importantes para legitimar la continuidad de un proyecto de nación excluyente de las mayorías (Concheiro, 1996; Valdés, 1997)

Por otra parte, habremos de reconocer que además del acuerdo existente con la tecnocracia, el ejercicio político de la clase dominante del cual forman parte los empresarios nacionales, apostó a una estrategia que privilegió la construcción de una certidumbre en el futuro inmediato. Parecía que la difícil situación económica por la que atravesaba el país se aceptaba a cambio de un futuro prometedor. La *utopía tecnocrática* de un amanecer nacional en el Primer Mundo, generó tal cantidad de expectativas que el deteriorado partido oficial recuperó su predominio a la mitad del sexenio. La crisis política que se podía deducir de los principales indicadores sociales, contradictoriamente fueron ignoradas por las clases trabajadoras, obreras y campesinas, que en el resto del sexenio votaron mayoritariamente por el partido oficial y el PAN, partido que recibía progresivamente mayor voto de la población, en la que se incluyen notoriamente las clases medias (Concheiro, 1996; Valdés, 1997; Puga, 2004).

En este contexto, la cobertura que hicieron los medios de comunicación masiva, principalmente la televisión, incidieron en la formación de corrientes de opinión favorables al salinato. El consenso se generó precisamente por que la televisión fungió como una instancia más de la presidencia. Por este conducto se minimizó la presencia de la oposición, sobre todo la del PRD, al mismo tiempo que se exaltaban las virtudes de Salinas como líder indiscutible. La idea

de la tecnocracia, de modernizar a la sociedad mexicana en todos sus ámbitos, aparecía como una suerte de consigna que legitimaba el rechazo de las clases dominantes a las prácticas populistas. Aunque en los hechos, Salinas de Gortari aprendía las fórmulas más añejas del prisma al manejar una imagen de la figura presidencial cercana al pueblo, en el discurso y en la instrumentación de las políticas públicas, confirmaba su renuncia al populismo. Situación que coincidía totalmente con el repudio empresarial en contra de esas prácticas políticas (Rousseau, 1995; Monsiváis, 1995, 1994).

En esa lógica, de negar lo más posible la satisfacción de las demandas de las clases subalternas, además de fincar su política en un futuro con certidumbre, el proyecto neoliberal avanzó desmantelando al Estado social (autoritario) que garantizó los mínimos de bienestar social para al menos la mitad de la población, y que la otra quedó al margen de la protección social. De hecho, los indicadores económicos de 1993, demostraban las profundas limitaciones estructurales para impulsar el desarrollo sostenido que diera cuenta de la crisis económica. Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos a principios de ese año, provocó serias dudas acerca de la posibilidad de que los Estados Unidos firmaran con México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Más tarde, al finalizar el año, resueltas momentáneamente la sucesión presidencial y la firma del tratado comercial con los socios del norte, las expectativas políticas parecían favorecer francamente al partido oficial. Entonces, se comprobó, contradictoriamente, que a pesar del pobre desempeño económico del *salinato*, el régimen contaba con la credibilidad en el sistema, por lo tanto, se proyectaba el triunfo electoral del *salinismo* (Krauze, 1997; Castañeda, 1999, 1995).

Ya existían serias pruebas de una crisis política (en mayo de 1993 se descubrió la presencia de la guerrilla en Chiapas, la mitad de los gobiernos estatales se encontraban en carácter interino, el PAN había ganado mayores espacios, se evidenciaba la confrontación entre la *vieja clase política* y la tecnocracia al interior del PRI se reconocía ya la presencia de la *narcopolítica*, se hacían públicos los excesos de poder por parte de la familia presidencial, etcétera). 1994 aparecía como el año en el que se confirmaría la continuidad del *salinato*.

Con el brote de la guerrilla en Chiapas el 1o. de enero de 1994, día en el que daba inicio formal el TLCAN, inició uno de los años más violentos después de la Revolución con que abrió su ciclo la historia contemporánea de México. Pues si bien la presencia del EZLN representó la existencia de sectores abandonados por el Estado, *populista o tecnocrático*, el secuestro de

eminentes empresarios (como es el caso del secuestro de Harp Helú), el asesinato del candidato presidencial del partido oficial, Luis Donald Colosio, el 23 de marzo de ese año, constituían un conjunto de sucesos que enrarecieron el ambiente político y permitían pensar, en primer instancia, que el PRI, y por tanto el salinato perdía un trecho muy importante del terreno ganado, lo cual dificultaba su paso hacia las elecciones del 21 de agosto de 1994 (Córdoba, 2006).

En ese contexto, las principales organizaciones empresariales: CCE, COPARMEX, CONCANACO, CONCAMIN y CANACINTRA, orquestaron una campaña en contra del EZLN, además que se le vinculaba al PRD, partido al que continuamente se le acusaba de violento, dando virtual apoyo al gobierno de Salinas. Aunque ya desde el asesinato de Colosio, aparecieron declaraciones del CCE y COPARMEX en las que reconocían la existencia de condiciones para que la oposición gobernara, siempre y cuando existiera la convicción de continuar con el proyecto económico. Aunque es difícil probarlo, el contexto en el que acontecían estos hechos, hacía pensar que las condiciones políticas eran favorables al PRD, sobre todo si se considera que seis años antes, el sistema se vio en la necesidad de recurrir al fraude electoral (Aziz Nassif, 1996; Alonso y Tamayo, 1994; Gómez Tagle, 1990). Por su parte, ese partido parecía estar seguro de tomar el poder el 1o. de diciembre de ese año. Sin embargo, el desenlace del debate del 12 de mayo, entre los candidatos de los tres principales partidos políticos, hizo variar notablemente las preferencias electorales. La paliza política que Diego de Fernández propinó a Cuahutémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo, oponentes del PRD y PRI, concedió mecánicamente mayores simpatías hacía el *panismo*. Hasta ese momento merece destacarse que el empresariado mexicano trabajaba en dos frentes: primero, *a partir de sus organizaciones empresariales generaba corrientes de opinión favorables al salinato*, y segundo, a través de los anuncios de televisión y radio mediante los cuales el *Consejo Nacional de la Publicidad*, instancia de la *iniciativa privada*, promovía el *voto del miedo* que dio al PRI el triunfo electoral de agosto de 1994. De tal manera que los vínculos de Zedillo con el sector empresarial se dieron en un contexto donde el gobierno mexicano dependía en mayor medida del apoyo político que este sector social le concede. De hecho, después del caótico escenario político al que habría que sumar el asesinato del Cardenal Posadas y del secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, la figura presidencial quedó en calidad de rehén, pues su dependencia hacía este actor social protagónico, resultó cada vez más imprescindible (Azzis Nassif y Alonso, 2005; Meyer, 2003; Krauze, 1997, 1992; Castañeda, 1995; Alonso, 1992).

Por ejemplo, el caso de la corrupción salinista en lo que toca a la venta de las empresas paraestatales, se hace evidente que las elites empresariales fueron las favorecidas en este proceso, por lo cual es impensable que las organizaciones cúpula promovieran realmente la investigación acerca de este fenómeno. Lo mismo ocurre en los proyectos concesionados de turismo y de carreteras. El caso de Nacional Financiera donde se supo que Espinoza Villareal favoreció a grupos empresariales de la familia Salinas. Y que después, bajo la dirección de Borja Navarrete, miembro del poderoso Consejo Mexicano de Hombre de Negocios, se diera información tímidamente sobre los manejos ilegales entre empresarios y la tecnocracia. Un ejemplo es el de los banqueros quienes se vieron ampliamente beneficiados por la política neoliberal, a partir de: 1) la venta de los bancos, 2) el establecer que los ahorros del SAR quedaran en la banca, 3) Dando una protección de 5 años al sector bancario al incorporarse al *TLCAN*, y 5) sin limitar legalmente las funciones bancarias que, por ejemplo, se ven beneficiados por el diferencial entre el ahorro y los créditos, etcétera (Gollás, 2003; Guillén, 1997).

Sin embargo, aunque la tecnocracia y las elites empresariales son caras de una misma moneda, los empresarios mexicanos participan en un doble juego. Mientras le refrendan su lealtad al presidente de la nación a cambio de albergar en el seno del Estado sus intereses más inmediatos, grupos empresariales que comparten las posiciones de la COPARMEX, retoman su participación con el PAN, por lo cual mantenían una posición agresiva en contra del gobierno salinista. Se trataba de desgastarlo para favorecer el triunfo panista, partido que en esencia mantiene un perfil muy próximo a la clase empresarial, como se advierte en sus representantes en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como en los gobernadores que hasta la fecha han ganado elecciones estatales (Aziz Nassif, 2005, 2003, 1996).

Sin duda, los violentos sucesos que marcaron el año de 1994 y el resultado que de ello sacaron tanto la tecnocracia como los empresarios mexicanos, es un excelente escenario para reflexionar en torno al carácter manipulador de la política, del efecto que tiene en la sociedad un manejo ideológico que proyecta en el imaginario colectivo una percepción sobre la realidad que favorece la autoridad de quien ejerce el poder (Balandier, 1994). No es gratuito que la significación más contundente para comprender el resultado electoral de ese año sea el efecto que sobre el imaginario colectivo tuvieron los sucesos violentos que propiciaron el *voto del miedo*. Las elites del poder, en contubernio, dieron forma a un nuevo símbolo que durante muchos años estuvo ausente en el sistema político mexicano, la gobernabilidad, la representación que

subjetivamente comparte la colectividad, emergió como la única posibilidad de superar el miedo. La tecnocracia hizo valer la trayectoria de la clase política a la que pertenece, mientras, mediante el predominio político de las organizaciones empresariales y la manipulación de los medios de comunicación masiva, los empresarios apuntalaron en el gobierno, a un partido que estaba totalmente comprometido con su proyecto de nación (Woldenberg, 2006; Krauze, 1997).

Con el miedo colectivo provocado por una violencia incesante, las nuevas elites del poder invocaron a un símbolo que la ideología neoliberal tenía en el olvido: el *nacionalismo, símbolo fundante de las sociedades complejas*, y que emergió como la única posibilidad de extirpar el caos del escenario nacional. La *unidad* que evoca dicho símbolo generó que la sociedad mexicana inclinara su preferencia electoral por el partido oficial a pesar que la tecnocracia se había esforzado por mermar las estructuras de una tradición política que cifró sus cimientos en una *ideología nacionalista*. Como lo sugiere Adams: *El propósito de la ideología es crear identidad y, por esa vía, controlar la actividad energética dentro del conjunto definido de relaciones internas y externas. Estas últimas tienen un interés particular para los líderes políticos, puesto que son absolutamente indispensables para definir las fronteras energéticas efectivas del estado* (Adams, 2001: 214).

La catarsis vivida en 1994 constituía una notable *fuga de la energía del sistema político*, aunque contradictoriamente, la *tecnocracia* y los empresarios generaron de esa misma situación los recursos para fortalecer al régimen, aunque fuera momentáneamente. Se revitalizó el *símbolo* que representa el PRI, y por última vez en el siglo XX, salió nuevamente victorioso en la contienda por la presidencia de la república. El miedo había dejado sus dividendos al proyecto neoliberal.

#### 3.2.4 *El último aliento de un gobierno “posrevolucionario”.*

Uno de los principales retos políticos de Ernesto Zedillo al iniciar su sexenio, 1994-2000, independientemente del error de diciembre de 1994 (una crisis financiera derivada de un extraordinario desequilibrio comercial, a su vez provocado por la sobrevaluación del peso en relación al dólar, ya que se mantenía artificialmente la paridad cambiaria como un ancla contra la inflación. La crisis del peso provocó que el nuevo gobierno iniciara el sexenio decidiendo una significativa devaluación), era, a diferencia de su predecesor, Salinas de Gortari, la de *legitimar*

*un proceso político* a partir del cual arribó al poder. Se trata de su inesperada nominación como candidato del partido oficial después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, y toda la violencia desatada en ese año. A pesar de cumplir legalmente con un proceso electoral, no le reditúa el liderazgo que un presidente de la república requiere para conducir a la nación bajo la égida de un proyecto económico que ha favorecido la concentración de la riqueza y aumentado la proporción de la población sometida a condiciones de marginación económica y social.

En ese contexto, y considerando el apoyo del gran capital nacional, los principales retos del gobierno de Zedillo eran negociar en un marco político que ya evidenciaba su tendencia hacia el pluripartidismo, la creciente presencia de la “oposición real”, tanto del PAN como del PRD, así como los efectos perniciosos de la crisis económica sobre importantes segmentos de la sociedad mexicana, sobre todo, aquella directamente afectada. Sus posibilidades de negociación, y por tanto de liderazgo, se veían más limitadas en virtud del fortalecimiento de la *derecha*, sobre todo por su avance electoral a nivel estatal y municipal, y el despunte de la *izquierda* en ese mismo plano. Simplemente la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo, era de índole completamente diferente a la que prevaleció hasta 1988 ( Woldenberg, 2006; Aziz Nassif, 2003).

Un ejemplo de ello es la presencia cada vez más combativa de la *derecha*, como lo demuestra la movilización de *organizaciones civiles* con evidentes vínculos con los empresarios mexicanos, que poco a poco fueron ganando espacios como fuerzas políticas con la suficiente capacidad para alcanzar los objetivos planteados. Es el caso del apoyo brindado al Ayuntamiento *panista* del Puerto de Veracruz para cancelar la semana cultural lésbica-gay que se iba a realizar en esa ciudad. El desplegado fue firmado por *Asociación Nacional Cívica Femenina* (escuela de formación de las principales dirigentes del PAN), *Los Caballeros de Colón*, *Unión Social de Empresarios Mexicanos*, *Mujeres y Punto*, *Unión de Padres de Familia*, COPARMEX y CANACINTRA. (Periódico local *El Dictamen*, 9 de julio de 1995).

Por otra parte, en el plano estrictamente político, un hecho muy significativo en la práctica del empresariado mexicano es que comenzó a advertir que la severa crisis ponía en riesgo su proyecto. De tal forma que a partir de algunas organizaciones empresariales empezó a manifestar la necesidad de aprovechar las condiciones que la coyuntura política ofrecía para que gobernara la oposición. Aunque las primeras declaraciones en ese mismo sentido comenzó a manifestarlas el CCE antes de las elecciones del 21 de agosto de 1994, el resto de las organizaciones cúpulas

han hecho lo propio desde entonces. Por ejemplo, en julio de 1995, el principal ideólogo del empresariado mexicano, Juan Sánchez Navarro, especuló con el rumor de que Zedillo dejaba el poder. Más tarde, al calor del segundo triunfo electoral del PAN en Baja California, la COPARMEX reiteraba que existían las condiciones necesarias para que gobernara la oposición (*El Financiero*, 8 de agosto de 1995). Se trataba de una reiterada crítica a los gobiernos priistas, sin que ello supusiera una crítica al modelo neoliberal impuesto por la tecnocracia del partido oficial.

Lo que en 1994 comenzaba a manifestarse como una suerte de divorcio entre empresarios y el salinismo, se materializó a partir de la devaluación de diciembre de ese año. Por ello, después de la coyuntura de 1994, en un contexto de evidente crisis política, los empresarios comenzaron a presionar tanto al gobierno de Zedillo, para que se garantizaran sus intereses. El tipo de demandas dirigidas principalmente en el ámbito económico reflejan cómo este sector exige prebendas para sus intereses sin ofrecer algo a cambio. La crisis mexicana era, entonces, un excelente contexto para el chantaje político que el sector empresarial dirigía contra de la *tecnocracia* (Córdoba, 2006; Krauze, 1997).

Una de esas críticas giraba en torno de las relaciones laborales, es decir, el punto de convergencia de dos clases sociales que habían obtenido diferentes resultados al paso del nuevo modelo económico. El carácter excluyente del proyecto neoliberal reflejaba cómo las clases trabajadoras habían perdido sus espacios políticos para defender sus intereses concretos; particularmente frente a la política de tope salarial y la "modernización" (reducción de las prebendas concedidas por el sistema y alineación con el nuevo modelo económico) de las estructuras sindicales. Por tanto, la discusión sobre la Ley Federal del Trabajo constituía un tema de polarización entre empresarios y clases trabajadoras, pues su violación reflejaba la exclusión de los trabajadores del actual proyecto de nación. No obstante, el problema radica en que para enfrentar las nuevas condiciones del mercado, nacional e internacional, los empresarios requerían la participación de los trabajadores, es decir, de asumir como propios los nuevos retos que imponía la globalización. El elevar la productividad aparecía, entonces, como una necesidad de la sociedad mexicana (Cordera, 2006; Bizberg, 2003).

Las nuevas condiciones del mercado exigían a los empresarios mexicanos crear una nueva *cultura laboral* que comprometiera a los trabajadores con los nuevos requerimientos de *productividad*, de tal manera que se elevara la *competitividad* de las empresas mexicanas, tanto a

nivel nacional como el internacional. Así lo demuestra el modelo de nación que los empresarios planteaban, y que además confirmaba su posición respecto del proyecto neoliberal (COPARMEX, 1996):

1. *Gobierno sin empresas, promotor y no rector de la economía.*
2. *Sindicalismo promotor de la productividad.*
3. *Plena competencia electoral; democracia participativa.*
4. *Sólida economía formal que minimice la economía subterránea.*
5. *Legislación fiscal simple y estable, carga fiscal competitiva.*
6. *Aumento consistente y generalizado del poder adquisitivo.*
7. *Desarrollo pleno de una sólida cultura de excelencia empresarial.*

Como se puede observar en relación a la *cultura laboral*, los empresarios esperaban que los sindicatos asumieran su responsabilidad para elevar la *productividad*, al mismo tiempo que ellos se comprometían con el objetivo de *eleva la calidad*. La cuestión es que los empresarios demandaban un cambio de actitud por parte de los trabajadores, sin ofrecer un reconocimiento económico a cambio. Esto exige la “modernización” de las relaciones capital-trabajo, en primera instancia, la legislación laboral, y en segunda, la relación con el trabajador en la organización del proceso de trabajo (Mackey, 1991). No obstante es conveniente considerar que a pesar que en el discurso empresarial se manifiesta la pertinencia de elevar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, eso no se traducía en acciones concretas de los empresarios por garantizar que así fuera.

La esencia del planteamiento que los empresarios hacían, en materia laboral, gira en torno del anteproyecto que COPARMEX presentó desde 1989 para reformar la *Ley Federal del Trabajo* (COPARMEX, 1989). En este trabajo se proponen, principalmente, los siguientes puntos para elevar la productividad:

1. La *flexibilización* de la legalidad laboral para superar las restricciones que impone a la productividad el contrato colectivo de trabajo, es decir, que se requiere mantener la

negociación individual entre empresario y trabajador. Además, la instauración de una jornada flexible de trabajo.<sup>2</sup>

2. Modernizar las relaciones de trabajo y sus formas de terminación que apuntan a *flexibilizar la estabilidad en el empleo*, reformar lo relativo a indemnizaciones, retiros y salarios caídos.

3. El *incorporar, prioritariamente, los principios de calidad y productividad en las relaciones del trabajo*, donde evidentemente tendrían que eliminarse, a partir de la propia "conciencia moderna" del trabajador, los factores legales y culturales que impiden la modernización de las relaciones laborales, así como la impartición de la justicia.

En ese marco de "deseos empresariales", es posible comprender los posibles alcances de la incipiente cultura empresarial, con un enfoque, ahora, predominantemente laboral. Aunque de cualquier forma, la contienda entre junio y agosto de 1995, en materia laboral, reflejaba la estrategia instrumentada por los empresarios mexicanos, así como la participación de los otros actores: la *burocracia* y la *representación oficial* de la clase trabajadora. De tal manera que la *crítica* que las *principales organizaciones empresariales* hacían al gobierno, *planteando sus demandas formal y públicamente*, eran aprovechadas por la organización empresarial sobre la que recae la responsabilidad del sector para avanzar en materia laboral, la COPARMEX, según sus intereses de clase.

Así, la lucha clasista por una ley laboral favorable a uno u otro sector adquiría diferentes matices a lo largo de la transición. En la medida que el empresariado demandaba un conjunto de cambios políticos y económicos, y aparecía discursivamente defendiendo los intereses de la clase trabajadora, va dejando atrás el contexto de la confrontación. Entonces, la *dominante presencia de las organizaciones empresariales* en el ámbito de la *opinión pública*, hacía aparecer a los empresarios como aliados de los trabajadores y, de esa manera, parecía diluir la confrontación de intereses clasistas. Por ejemplo, la COPARMEX *demandaba* un programa emergente de largo plazo que genere empleos. Su presidente señaló: "*El riesgo de la crisis no está en lo político o en*

---

<sup>2</sup> Una definición acerca de la flexibilidad laboral la encontramos, por ejemplo, en Tomás Sánchez Baylón. "La flexibilidad de las normas y los vicios de la cultura del trabajo", en Boletín Técnico de Coparmex, núm. 19, junio, 1991. En este trabajo el autor sostiene que "...se habla de flexibilidad funcional en la organización del trabajo, que implica el rompimiento de los sistemas tradicionales de especialización y estratificación y crea la figura del obrero polivalente o de habilidades múltiples; de los horarios flexibles, de la flexibilidad en la contratación, esto es, la libre regulación de la duración de los contratos de trabajo, de las jornadas flexibles".

*lo económico sino en lo social. Es aquí donde todo se puede perder ante la desilusión y desánimo de quienes por años han tenido que pagar las ineficiencias en la administración de las riquezas"* (*El Financiero*, 3 de mayo de 1995).

De hecho, aunque a veces parecía complicarse la negociación entre los sectores interesados, el problema real era que la Ley Federal del Trabajo y por tanto los derechos de los trabajadores, se vienen violando desde principios de los años ochenta. De tal manera que dentro de una concepción neoliberal se viene haciendo costumbre ignorar las demandas de ese sector social. Por ejemplo, Juan Sánchez Navarro, de manera muy elegante, así lo confirma: "...no tiene por qué haber confrontaciones entre los sectores productivos respecto a si se reforma o no la LFT, pues en la práctica ésta ha sido modificada y sólo le faltan algunas correcciones acordes con la realidad actual del país" (*El Financiero*, 3 de mayo de 1995).

El desafío era, entonces, buscar un nuevo pacto social que, en una perspectiva integral, garantizara las condiciones de vida de la clase trabajadora, reconociendo su dignidad humana y esperando una respuesta comprometida para elevar la *productividad*. Una iniciativa de ley laboral que no reconociera los derechos económicos inmediatos y de largo plazo, de la clase trabajadora, además de afectar los intereses de éstos, también afectaría los intereses patronales, pues no encontraría la cooperación necesaria ni las condiciones de un mercado nacional en el cual reproducir su capital. Y en todo caso, el gobierno de Zedillo no tuvo la capacidad para mediar una negociación que garantizara el beneficio de las dos partes. Así, las condiciones políticas y económicas se complicaban para su gobierno, pues si bien contaba con el relativo respaldo del *gran capital* para dar continuidad al proyecto económico instaurado a partir de 1982, tendría que resolver las protestas de los sectores económicos afectados por el avance del proyecto neoliberal y los efectos de sus descalabros, como es el caso de las devaluaciones, las caídas de los precios del petróleo, los efectos perniciosos de la apertura económica, la disminución del gasto social y el desempleo (Cordera, 2006; Gollás, 2003).

Un ejemplo de ello, son los problemas que dejaron las crisis financieras y, particularmente, el caso de las carteras vencidas. Lo que alentó a *El Barzón*, un movimiento nacido en el año de 1993, y que el 3 de julio de 1996, en una visita del presidente Zedillo a la ciudad de Guadalajara, *El Barzón* ocupó 95 cruceros por los que pasaría el presidente, más de mil *barzonistas* bloquearon con decenas de vehículos los accesos al Palacio de Gobierno,

demandando la renuncia del Secretario de Gobierno por la detención de Maximiano Barbosa Llamas, uno de los principales líderes de *El Barzón* (*La Jornada*, 4 de julio de 1996).

Se trata de un movimiento que rápidamente adquiere una dimensión nacional y que, como es obvio, toma como mejor escenario para realizar sus actos de presión al gobierno mexicano a la ciudad de México, en la medida que ahí se concentran los principales poderes de la nación. La peculiaridad de este movimiento social, es que adquiere una fuerza centrífuga que se alimenta de la participación política de *sectores culturalmente disímbolos*, de sectores ideológicamente antagónicos, y que por lo tanto, encuentran su *unidad* a partir de una crisis económica que los golpea por igual. Es el caso de clases medias y micro y pequeños empresarios que se ven afectados por el incremento de las tasas de interés, que repercuten en el incremento de sus deudas bancarias: el problema de las carteras vencidas.

Ello explica la *riqueza simbólica* de este movimiento, cómo sus manifestaciones recurren a diversas *representaciones del imaginario popular*, y en el mundo de las imágenes representa las escenas de la crisis. Las manifestaciones de este movimiento recurren a los recursos propios del oficio o profesión de los actores que le dan forma, lo mismo se trata de productores agrícolas, que medianos o pequeños empresarios, o simples tarjeta-habientes, todos endeudados con la banca, y por tanto afectados por la elevación de las tasas de interés (Castaingts, 1995; Valenzuela, 1995).

Quizás, después del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) no exista otro movimiento social tan importante como *El Barzón*. Su presencia a nivel nacional, su composición interclasista, así como su gran cobertura, le han permitido incorporar a otro tipo de organizaciones sociales, o coincidir con ellos, en su protesta contra la política económica de la tecnocracia. Ello se observa en su composición orgánica de una gran variedad de grupos o segmentos sociales que se le unen, lo que le reditúa mayor representatividad y por lo tanto mayor fuerza política. Tales son los casos de la *Coordinadora Nacional de Usuarios de la Banca*, el *Frente de Defensa del Patrimonio Familiar del Sureste*, la *Asociación Nacional de Tarjetahabientes*, la *Alianza Empresarial de Jalisco* (anteriormente afiliada al PRI), la *Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca*, entre otras. Al mismo tiempo, el problema de la cartera vencida hace coincidir las posiciones contra la política bancaria, con organizaciones empresariales que están luchando por que no se empeore la situación de las empresas endeudadas, que se contenga el hostigamiento contra empresas que no pueden pagar por la

situación económica que vive el país. Es el caso de la *Cámara Regional de la Industria de la Transformación de Jalisco*, la *Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Tabasco*, *La Alianza Empresarial de Jalisco* (que agrupa a 10 mil medianos, pequeños y micro empresarios), *Coparmex* y *Concanaco*, entre otras.

En una entrevista realizada el 23 de octubre de 1996, el líder de *El Barzón* metropolitano, Ramírez Cuellar, expresó que: “*La participación de los empresarios que participan en nuestro movimiento ha sido muy importante, puesto que cada vez que convocamos a una manifestación, una toma de algún edificio público, ellos son los primeros en estar presentes. La importancia de su participación es que no solamente mantienen una posición muy combativa, sino que aportan recursos económicos al movimiento, además que su presencia ha obligado a que organizaciones empresariales importantes se incorporen a nuestro movimiento, o al menos, se manifiesten en contra de la política de los bancos*”.

En esa misma entrevista, Ramírez Cuellar planteaba “*como objetivo político del movimiento proponer a los partidos de oposición una candidatura única para garantizar el triunfo de la sociedad mexicana sobre el partido oficial*”. Esta posición se hizo pública en febrero de 1997, por conducto de los *medios de comunicación masiva*, principalmente la prensa nacional, y ante la falta de respuesta por parte del Partido de Acción Nacional y su puntual negativa pública a tal alternativa, quedó desechada la propuesta *barzonista* (*El Financiero*, 24 de febrero de 1997). Poco después, a finales del mes de marzo, el PRD dio a conocer como candidato para el Senado a Juan José Quirino Salas, líder nacional de *El Barzón*, y como candidato a diputado a Alfonso Ramírez Cuéllar, líder regional del movimiento, quien, por otro lado, ya se había desempeñado como asambleísta por parte de ese mismo partido (*La Jornada*, 27 de marzo de 1997).

La presencia de *El Barzón* es relevante para la perspectiva de la transición que aquí se trabaja, en la medida que nos permite reconocer la complejidad de la participación política empresarial, más allá de los canales formales que les ofrece el *sistema político mexicano*. Comprueba los *problemas de representatividad* que subyacen de la estructura corporativa donde se insertan las *organizaciones empresariales* (Tirado, 1997, 1990; Hernández, 1992); también sugiere la deformación momentánea de su identidad y los posibles conflictos interclasistas que surgen al paso de modelo de desarrollo que al favorecer una mayor concentración de la riqueza,

provoca un efecto negativo, no solo para las clases trabajadoras, sino para algunos segmentos de la clase empresarial.

El sexenio de Zedillo representó un periodo en el que la crisis económica se expresó desde el inicio de esa gestión, con la crisis del peso a finales de 1994, que provocó una devaluación. A pesar del auge de las exportaciones, en 1995 se observa una reducción de 6.2% en el PIB, al tiempo que disminuyen los salarios y el empleo. Para 1998, los salarios continuaban siendo 20% menores que los de 1994. La deuda pública externa se mantenía estable, 86 000 m.d.d., aproximadamente, mientras la deuda privada pasaba de 26 000 m.d.d., en 1996, a más de 50 000 m.m.d., para 1999. Y el déficit de la balanza comercial se explica por el dinámico crecimiento de las importaciones, provenientes, fundamentalmente, de las empresas extranjeras (Gollás, 2003).

Estos fenómenos económicos reunidos en un contexto en el cual se ha transformado la esencia del sistema político mexicano: la crisis del partido hegemónico, por consiguiente el fortalecimiento de la oposición, constituyen el preámbulo del ascenso de la oposición al poder: la llegada de la *derecha* a la presidencia de la república, después de haber obtenido triunfos electorales a nivel estatal y municipal. La cuestión era descifrar si el ascenso de la *derecha* representaría la posibilidad de cambiar el rumbo de la nación, de transformar la cultura política, de dar paso a la democracia o de continuar con prácticas políticas del pasado, a pesar que el presidencialismo no contara con las condiciones políticas, económicas y culturales, para continuar reproduciendo la concentración del poder en un hombre o una élite política. Se trataba de vislumbrar si el ascenso de la *derecha* significaría la continuidad de un régimen que promovía la concentración de la riqueza y su negativa a aceptar una cultura política realmente democrática.

### 3.3 Fox al poder.... Los empresarios también.

*Cada uno de nosotros viene a este mundo  
a trascender, a dejar huella, aportando  
su grano de arena para hacer de esta tierra  
un lugar para ser felices.  
Vicente Fox ,1999.*

No cabe duda que la interpretación más recurrente sobre la transición política mexicana sea la evolución de un proceso electoral cada vez más apegada a los principios formales de la democracia. Sobre todo desde el ascenso al poder de un partido de oposición a partir de las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2000.

Evidentemente, la complejidad de la política que se pretende sintetizar en la definición de un proceso electoral cada vez más competitivo, a veces, da por sentada una transición que todavía tiene un largo trecho por recorrer. El elemento que constituye un referente general en este tipo de reflexiones es la discusión sobre la democracia que parte de las limitantes, y hasta las deformaciones, de un sistema que posibilita a una elite monopolizar el poder y marginar a las mayorías en los procesos de toma de decisiones. De esa forma, se comprende la necesidad de discutir la diferencia entre la *democracia representativa* y la *democracia participativa*, lo cual obliga a reconocer la superficialidad política que se puede deducir de lo estrictamente electoral, si tal proceso es contemplado tan solo como la *persistencia* o *cambio* de las preferencias partidistas (Ulrick, 2002; Held, 1997; Bobbio, 1995; Dahl, 1993).

En última instancia, los principales partidos políticos en México, constituyen representaciones en el imaginario colectivo que suponen, entonces, diferentes concepciones de lo que es el país y del rumbo a seguir, del proyecto de nación que ha de redefinirse con base en la coyuntura económica, política y cultural, pero sobre todo, de las posibilidades que tienen los partidos para dar cuenta de una crisis que agobia al país desde 1982, y que cada vez se torna más amenazante para la “estabilidad” posrevolucionaria que parece resquebrajarse en el marco de una globalización que pretende consolidarse enarbolando la bandera de la democracia, pero reproduciendo las abismales diferencias en el desarrollo de las naciones bajo la “nueva lógica” del mercado internacional que continúa privilegiando la concentración de la riqueza en un número extremadamente limitado de naciones (Giddens, 1998; Wallerstein, 1995).

La discusión respecto de la continuidad de un proyecto de nación o del “cambio”, propone reconocer la persistencia de una filosofía y, por tanto, de una práctica de gobierno, o la

transformación del concepto de gobierno que posibilite el ejercicio realmente democrático del poder. Se trataría, entonces, de generar una crítica a las formas autoritarias de ejercer el poder, y con ello, a los rasgos prácticos de los gobierno, sin importar el origen partidista de frente a una crisis social que cada vez exige mayor compromiso y responsabilidad de los gobernantes (Gellner, 1997).

### 3.3.1 *Los símbolos de la transición.*

Uno de los principales símbolos en todo sistema político es el del estado-nación, mismo que adquiere una significación más precisa a partir de otros símbolos que de manera particular, y en conjunto, dan forma a ese *hiper-símbolo*. De esa forma, la figura presidencial en compañía del ejecutivo, la imagen de los principales partidos políticos, de las instituciones que predominan en el escenario político nacional en cada coyuntura, así como los líderes sociales más representativos de la sociedad, constituyen las representaciones más significativas en el *imaginario colectivo nacional* respecto a las *representaciones del poder* (Balandier, 1994).

En la medida que las *representaciones* son importantes en esta interpretación, recordaremos una idea de las voces más autorizadas en el manejo de lo simbólico, como es el caso de Víctor Turner, mismo que señala:

*Los símbolos instigan la acción social. En un contexto de campo podríamos incluso llamarlas 'fuerzas', en la medida que son influencias determinables que inducen a las personas y a los grupos a la acción. En ese mismo contexto de campo es además donde las propiedades que hemos descrito, a saber, la polarización de sentidos, la transferencia de cualidades afectivas, la discrepancia entre sentidos y la condensación de sentidos, resultan importantes (Turner, 1980: 40).*

Ello sugiere una paradoja, puesto que si bien el *nacionalismo* ha dejado de ser un referente en el discurso del Estado, la figura indiscutible para hacer política desde la oposición es el recurso de este símbolo. Ya que evoca las imágenes de la historia compartida por todos los miembros de la sociedad, exalta la imagen de nuestros héroes, y por ende, se proyecta como una convocatoria de la historia a que cada ciudadano cumpla con el papel histórico que le corresponde (Bartra, 1987; Florescano, 2001).

El cambio político que acontece en el año 2000 con el ascenso del candidato panista al poder, obliga a ubicar los aspectos más significativos en el proceso de la transición, pues al menos en el ámbito electoral, ese resultado sugiere el fin del predominio del “partido oficial”. Tal

fenómeno se observa a través de la trayectoria electoral 1988, 1994 y 2000, momentos de la coyuntura política que generalmente se conocen a partir de los términos del *voto de castigo*, el *voto del miedo* y el *voto "útil"* (Alonso y Aziz Nassif, 2005). Tales referencias aluden inevitablemente al efecto que el desgaste del proyecto posrevolucionario tiene en el imaginario colectivo, a ese espacio de la subjetividad social que se convirtió en el blanco de las diferentes fuerzas políticas, y sin el cual es imposible mantener, reproducir u obtener el poder (Balandier, 1988).

Se trata del indispensable ámbito de la política que permite, desde el poder, garantizar la legitimidad de quienes lo ejercen, de la forma como se plasma en las relaciones sociales, de cubrir la direccionalidad de la toma de decisiones, del proyecto de nación que se enarbola detrás de los modelos económicos que guían el desarrollo de las naciones, etc. Cuando se hace referencia al *voto de castigo*, supone la presencia de una sociedad de tal nivel de madurez política, que ya ve los procesos electorales como instrumentos para ejercer la cuota de poder que legítimamente le corresponde. Sugiere una conciencia de la sociedad mexicana que descubre los velos de las elites políticas a quienes responsabiliza de la crisis económica que aqueja a la nación desde 1982 (Castañeda, 1999).

En ese sentido, cabe acotar que si bien el binomio PRI-gobierno se asoció inevitablemente a la idea estado-nación, el desgaste sufrido por el sistema político instaurado en el periodo posrevolucionario, a lo largo casi 60 años, provoca que el máximo símbolo del poder nacional se asocie en el imaginario colectivo, con los principales males que aquejan a nuestra sociedad: los abusos del poder, la corrupción, la incertidumbre, el desempleo, la miseria, etc. De otra forma, no sería posible calificar los resultados electorales de 1988 a partir del término *voto de castigo*, el cual abrió las puertas de un sistema paternalista al paso de la *oposición real*, lo que también devela cómo la presencia de una *oposición formal* representaba tan solo un signo en la reproducción de los *rituales del poder posrevolucionario*. En ese sentido, los resultados de las elecciones federales de 1988 pueden considerarse como una síntesis de un complejo proceso de cambio estructural que nuestra sociedad comenzó a vivir desde la década de los sesenta (Alonso, 2005; Aziz Nassif, 2005; Fernández Santillán, 2003).

Entonces, la asociación en el *imaginario colectivo* del PRI-gobierno como representación de la crisis de nuestro sistema, contraria a la representación del desarrollo, el progreso y la democracia, apunta a la conformación de una *nueva cultura política* que sugiere la superación de

una condición subordinada de la sociedad, el agotamiento del autoritarismo y, por tanto, la construcción de nuevas estructuras socioculturales que permiten avanzar a nuestra sociedad sobre los caminos de la democracia (De la Peña, 1992).

Vale recordar que el “sistema” tuvo la necesidad de recurrir abiertamente al fraude por lo que, quizás, se evito desde entonces la posibilidad que un partido de oposición llegara al poder. Lo que todavía nos permite confirmar que el *voto de castigo* refleja una nueva condición de la sociedad civil respecto de las elites políticas (Aziz Nassif, 1992).

Sin embargo ¿qué significa *el voto del miedo* de 1994? Si nos referimos al *voto de castigo* como un avance en la conciencia de la sociedad mexicana, habremos de pensar que se dio un retroceso en la *nueva cultura política*. O el gobierno mexicano y las elites empresariales desarrollaron una estrategia en los medios de difusión para aprovechar la incertidumbre que provocaba la precaria situación nacional de la coyuntura de 1994. Nos referimos a la emergencia de la violencia política que prevaleció desde principio de ese año con el levantamiento indígena en los Altos de Chiapas, los secuestros de importantes empresarios y que alcanzó su punto más álgido con el secuestro de Harp Helú, así como los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, candidato oficial del PRI y del secretario general de ese partido, Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de ese año.

En nuestra opinión se trataba de un escenario en el que desde el principio sugería la posibilidad de que el partido oficial perdiera el poder. Quiere decir que entre el periodo que va de abril al 2 de agosto, cuando se celebraron las elecciones, el “sistema” desarrolló una estrategia que le permitiera mantenerse en el poder, y ésa apuntó hacia un imaginario colectivo preso de la incertidumbre que la violencia provocó en esa coyuntura. No es gratuito que la campaña que desató el *Consejo Nacional de la Publicidad* (donde evidentemente se encuentran un nutrido grupo de importantes empresarios) extrapolará las imágenes de la violencia contra los beneficios de la *unidad nacional*, notoriamente lograda por el binomio PRI-gobierno. El manejo de los medios de comunicación masiva, como televisión y radio, fundamentalmente, fueron decisivos para reproducir en el imaginario colectivo la incertidumbre necesaria para generar las suficientes dudas respecto al beneficio que tendría la nación con un posible cambio de gobierno. *El miedo sobredimensionado por las estrategias mediáticas fue la causa de un resultado electoral que permitió al partido oficial mantenerse en el poder*. Pareciera como si la incertidumbre vivida en 1994 permitiera a las elites gubernamentales recuperar las referencias simbólicas que le

confirieron la legitimidad requerida para ejercer el poder sin necesidad de recurrir al uso de la violencia; como si esa experiencia permitiera borrar del *imaginario colectivo* las asociaciones negativas que provocaron la erosión de la hegemonía de la *burocracia política*.

Entonces ¿Qué pasó con la conciencia política de la sociedad mexicana? ¿La madurez política sugerida en las elecciones de 1988 fue producto de un espejismo interpretativo más? ¿O los mismos resultados permiten seguir afirmando que la decisión electoral de la colectividad por mantener al PRI-gobierno en el poder, habla por sí sola de una madurez política que supone cierta capacidad reflexiva por parte de la sociedad mexicana? Lo que parece insoslayable desde 1994, *es el importante papel que juegan los medios de difusión masiva en la configuración de la opinión pública y las preferencias electorales*. Sin negar, desde luego, la influencia en el imaginario colectivo de las condiciones objetivas que viven las sociedades en las diferentes coyunturas por las que atraviesa su propio proceso de reproducción social.

Las elecciones del 2 de julio de 2000 son un hecho consumado en el cual se hace evidente la contundencia de los medios masivos de comunicación en la política, en el ejercicio del poder y la competencia por el mismo. El éxito de la campaña propagandística del Partido Acción Nacional, y particularmente por el equipo de campaña de Fox, *demuestra cómo las representaciones socioculturales inmersas en el imaginario colectivo, son un referente sustancial para revertir las posiciones de predominio de un partido o elite política*. En esas campañas se pudo apreciar el peso que tiene las condiciones materiales de una sociedad, en nuestro caso la profunda crisis arrastrada de años atrás, y las necesidades sociales que pudieron sintetizarse en una bandera que el equipo de campaña de Fox supo canalizar a su favor: *la necesidad del cambio, el ya basta*, que en un manejo propagandístico de los más pragmático posible, hizo blanco en las emociones y necesidades más urgentes de nuestra sociedad (Ortiz, 2002).

El equipo de campaña de Fox explotó, en beneficio propio, la asociación negativa que tenía el binomio PRI-gobierno, pues supo proyectar su propuesta de gobierno a lo que parecía un consenso de la sociedad mexicana: *sacar al PRI de Los Pinos*. En esa idea tan elemental se expresa la asociación simbólica que la sociedad mexicana tenía con el partido oficial y los aparatos de gobierno. *Sacar al PRI de Los Pinos* representaba en el imaginario colectivo la posibilidad de terminar con la corrupción y la ineficiencia gubernamental, ponerle fin a la crisis. Y en ese mismo sentido, se entiende, que *Fox simbolizó la posibilidad de generar tal cambio*. Así que referirse a los resultados electorales a partir del calificativo el *voto útil* suponía la claridad del

equipo de campaña de Fox, de hacer un llamado a un sector del electorado que mantenía sus dudas respecto a votar por *Alianza por México* (encabezada por el PRD) y *Alianza para el Cambio* (PAN-Partido Verde Ecologista de México).

Se trataba, después del debate en el que ya se advertía una disminución del PRI en las preferencias electorales, de ganar la diferencia entre el *voto duro* del PRD y el voto general de la izquierda. Evidentemente Fox ganó una parte importante de los indecisos, en detrimento de la imagen de Cárdenas, lo que sugiere la capacidad del primero para representar y, por tanto, *convertirse en símbolo del cambio*, y la incapacidad del segundo para crearse una imagen que ganara la credibilidad requerida para vencer al partido oficial.

De esa manera, el ascenso de la *oposición real* al poder expresa de manera objetiva el *flujo de energía*. Ello exige observar cómo mientras una estructura, en este caso la definida por la presencia de un partido de Estado, pierde la *energía* que le impide permanecer en el poder; otra estructura, la que adquiere forma con la presencia de la oposición, canaliza dicha pérdida a su favor. Esta nueva condición del sistema político mexicano representa una apretada síntesis del complejo procesamiento de la energía. El poder pasa a manos de una nueva elite política (el empresariado mexicano) que apropiada del PAN irrumpe en el poder, sin que ello signifique necesariamente una ruptura estructural. Más bien, la *continuidad* de un sistema instaurado a partir de 1982, que no cambia su esencia sino que supone el *resultado energético* de la confrontación de los actores políticos que luchan por el poder.

El flujo político que supone la competencia por el poder y que en el caso del sistema político mexicano permite a la “familia revolucionaria” mantenerse durante setenta años en el poder, provoca, primero, la instauración de un nuevo modelo económico que alude a una racionalidad del Estado que reniega de su pasado revolucionario; segundo, al ascenso de una oposición que garantiza la continuidad de un sistema en el que predominan los valores del mercado sobre los de la política.

### 3.3.2 *Del conservadurismo al pragmatismo ideológico empresarial.*

La ideología empresarial, sobre todo a lo largo del siglo XX y el despunte del siglo XXI, siempre ha sido definida como una posición de *derecha*. De hecho, esta vertiente es uno de los eslabones más fuertes, junto con la Iglesia católica, que da forma al espectro de la *derecha mexicana*. De

hecho, la ideología empresarial y los principios católicos muestran que éstos constituyen los principales referentes la fundación del Partido Acción Nacional. Por lo tanto, no es gratuito que desde el origen de ese partido político hubiese quedado definido como un partido conservador, un partido de derecha (Loaeza, 2001, 1999; Monsiváis, 1995). En todo caso parece fundamental considerar que la derecha va adquiriendo materialidad a través de posiciones político-ideológicas que contraponen los principios heredados por la revolución social al principio del siglo XX.

Entonces, la certeza de ubicar en el espectro político nacional a la Iglesia católica, al empresariado mexicano y al PAN, en la ala derecha obedece a una cuestión histórica. El primer caso tiene que ver con el proceso de secularización del estado mexicano en el siglo XIX, donde la resistencia de la Iglesia a la Reforma juarista que atentaba contra la concentración de su riqueza, antepuso de manera “natural” su posición a la de los gobiernos mexicanos, situación que se refrenda en la Guerra Cristera, 1926-1929 (Meyer, 1997), así como su posición de defensa en contra de gobiernos posrevolucionarios, como fue el caso de Cárdenas, López Mateos y Echeverría, etiquetados por la Iglesia Católica como comunistas o socializantes, calificativos que al menos compartía una buena parte de los empresarios mexicanos.

El caso de los empresarios mexicanos, se expresa también por su relación contestataria respecto de los gobiernos posrevolucionarios, pues a lo largo del siglo XX, invariablemente vieron en las políticas gubernamentales acciones atentatorias contra sus intereses de clase. La relación del gobierno con las clases trabajadoras a partir de las estructuras corporativas que explican la relación del binomio PRI-gobierno, situaron a los empresarios mexicanos como enemigos políticos del desarrollo y el progreso. Como bien lo demuestra las coyunturas en que se formaron organizaciones empresariales tan importantes como la COPARMEX (1929), Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (1962) y el CCE (1975), que respondían a las coyunturas de la promoción de una Ley Federal del Trabajo a finales de los veinte, la política de apoyo a la revolución cubana en el contexto de la Guerra Fría a principios de los sesenta, la intervención del Estado en la economía y su necesidad de recuperar legitimidad a través del apoyo a clases trabajadoras en la década de los setenta.

De tal manera que si el gobierno mexicano, y por tanto, el PRI, simbolizaban el desarrollo y el progreso (Meyer, 2001), las fuerzas opositoras al modelo de desarrollo propuesto por la *burocracia política*, necesariamente se habrían de ubicar como una expresión conservadora, y por tanto, de *derecha* (Loaeza, 2001; Monsiváis, 1979). Por lo que aquí interesa, los empresarios se

han definido políticamente como uno de los principales actores sociales que le dan forma a la *derecha*.

En el caso del PAN, su propia procedencia, es decir la influencia empresarial en su fundación, misma que se refleja en su ideario político respecto a importantes organizaciones empresariales como el CCE y la Iglesia Católica, lo sitúan de manera natural dentro del espectro de la derecha, y por ello, dentro de las fuerzas conservadoras de nuestra sociedad. Sin embargo, en México todavía no es del todo posible, como en otras partes del mundo, afirmar que las ofertas políticas de la *derecha* y la *izquierda* son tan semejantes que, prácticamente, deje sin sentido definir a un partido o a otro tipo de organización a partir de esos extremos políticos (Giddens, 1996).

Se trata de un proceso de transformación de las estructuras políticas donde los símbolos son sometidos por las mismas fuerzas sociales a un cambio en la lógica-ilógica de su representación. Los *símbolos* pueden, entonces, emerger en el *imaginario colectivo* como nuevas formas de interpretación del pasado, como una nueva síntesis de la relación entre el pasado y el presente, donde los nuevos herederos del poder son una expresión cultural más actualizada de una sociedad en la cual se depura la tradición en su coexistencia, o relación dialéctica de la realidad social entre dos tiempos socio-históricamente diferentes (Balandier, 1975).

En ese sentido, ni la izquierda ni la derecha pueden ser las mismas que en el pasado, por lo cual es posible que en la perspectiva histórica una y otra se encuentren o intercambien (Bobbio, 1995). De tal manera que un rasgo claramente distintivo del empresariado mexicano hasta los años ochenta, su carácter conservador, después pueda aparecer como expresión del progreso, de la Modernidad. Si anteriormente, derecha o conservadurismo se pudieron asociar con posiciones autoritarias o no claramente democráticas, después emergieron, impulsados por una campaña en los medios de difusión, como emisarios del “cambio” (Giddens, 2000, 1996; Sartori, 1997).

Esta figura aparentemente contradictoria habría de comprenderse en la lógica de la política y, por tanto, como una de las tantas adaptaciones que las elites han de enfrentar para responder de una manera más eficiente a los cambios del ambiente nacional e internacional. En la necesidad de que el sistema se adapte a su ambiente, o que simplemente, los actores políticos respondan de manera coherente a las circunstancias que le impone la coyuntura. Entonces, el dilema es ¿cómo interpretar la trayectoria histórica de actores políticos que en el pasado

representaron una posición conservadora y que hoy emergen como agentes del cambio? Tal reflexión se hace necesaria por el propio origen sociopolítico del nuevo gobierno que llegó al poder a partir del 2 de julio de 2000, y que por el carácter empresarial de este gobierno, nos permite asociarle con una posición conservadora, por tanto, opuesta a los procesos de modernización dentro de los cuales se comprende la construcción de una sociedad democrática, a prácticas políticas que transparenten los procesos de toma de decisiones, a abandonar prácticas burocráticas que cierran el paso a la participación ciudadana en las decisiones de gobierno.

Por tal razón, *es importante considerar una línea secuencial entre el conservadurismo histórico del empresariado mexicano y el pragmatismo ideológico que lo llevó al poder al despuntar el nuevo siglo*. Esto se relaciona, necesariamente, con la instauración del proyecto neoliberal en México en 1982, que refleja un proceso de derechización a nivel internacional (Foxley, 1988). Se trata del ascenso de la tecnocracia que desde entonces privilegió las condiciones del mercado, sobre lo político y social, legitimando la nueva racionalidad del gobierno mexicano que desarticuló la lógica de un *estado social autoritario* comprometido con el grueso de la población mexicana. La *apertura de la economía*, el *adelgazamiento del Estado*, la *privatización*, el *tope salarial* y la protección abierta y directa que garantizó el bienestar del mercado, representaron políticas que favorecieron al gran capital (como es el caso del Fobraproa) en demérito de los intereses de las mayorías. La cuestión es que el proyecto tecnocrático responde al programa ideológico de los empresarios mexicanos, y por lo tanto, a un proyecto de nación compatible con la ideología del PAN. No es gratuito que la legitimación de un proyecto de tal naturaleza, sobre todo a partir de las elecciones de 1988, haya quedado a cargo, fundamentalmente, de los empresarios mexicanos y de sus principales organizaciones como es el caso del CCE, la COPARMEX, la CONCANACO, la CONCAMIN, y en menor medida de la CANACINTRA (Tirado, 1994; Luna, Tirado y Valdés, 1989).

En ese sentido, es fundamental considerar, como se ha señalado en otros momentos, que el hecho de instaurar un nuevo modelo de desarrollo contrario a las pretensiones de la vieja burocracia política, a la intención de fortalecer el papel económico del gobierno mexicano, revela el carácter hegemónico que en estos últimos años tienen los empresarios mexicanos en la actual clase dominante, pero también por la presión ejercida por los acreedores internacionales, las grandes empresas extranjeras y la nueva clase política al interior del mismo partido oficial. No obstante, es pertinente contemplar que la posición hegemónica en el ejercicio del poder sugiere

tan solo una relación de predominio, una posición de poder sustentada en la imposición de una nueva ideología dominante que confiere a los empresarios una posición privilegiada respecto de las otras fracciones dominantes del pasado, como es el caso de la clase trabajadora.

Evidentemente, los empresarios fueron participando directamente en el poder conforme fortalecieron su posición en el PAN a partir de la expropiación de la banca el 1º. de septiembre de 1982, fenómeno que se expresó con la emergencia del *neopanismo* y fundamentalmente con la participación de los empresarios en las cámaras de diputados, federales y locales, así como en la de senadores, como expresión de su investidura panista (Loeza, 1999; Nuncio, 1987). Después, a partir de los triunfos en los gobiernos estatales desde 1989 en Baja California, luego en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, hasta llegar a la Presidencia de la Republica en el 2000. Esta transformación refleja un complejo proceso político que va de la presencia de una *oposición real* hasta alcanzar el máximo nivel de poder formal, y por tanto, de *transformación de fuerza conservadora de oposición a agente del cambio*. Condición que permite comprender una línea explicativa sobre el papel que juega el *pragmatismo ideológico empresarial* en este ascenso de las elites empresariales al poder, *del asalto empresarial a palacio nacional* (Cantú, 2001).

Se trata de un pragmatismo que inyecta una nueva actitud al Partido Acción Nacional y, por ende, una nueva estrategia que coloca a la presidencia como el principal blanco de su razón de ser. El pragmatismo empresarial, primero influye en las formas de hacer política dentro de ese partido político de claro corte conservador, renueva el discurso de la *derecha* que queda perfectamente retratada por la posición política del PAN, Iglesia Católica, Organizaciones Empresariales como el CCE y la COPARMEX, principalmente; después, se coloca como motor de la nueva ideología instaurada en las estructuras gubernamentales por la tecnocracia que llegó al poder a partir de 1982.

Es a partir de entonces que se observa una clara proximidad ideológica entre el discurso empresarial y el de los gobiernos tecnocráticos (De la Madrid, 1982-1988; Salinas de Gortari, 1988-1994; Ernesto Zedillo, 1994-2000; y Vicente Fox, 2000-2006), por lo cual desde la administración pública se evoca constantemente el lenguaje empresarial que hoy está en boga, como es el caso de *convocar al conjunto de la sociedad a ser cada vez más competitiva*, en atención a las condiciones que ha impuesto el proceso de la globalización, de relacionar la

necesidad de impulsar la incorporación de México a la Modernidad, confirmando los principios *de la eficacia y la eficiencia, la productividad, la competitividad y el compromiso con el cliente.*

### 3.3.3. *Los retrocesos del cambio.*

El pragmatismo gubernamental es el mismo que condujo a Fox a mantener su gabinete sin cambios a pesar de las fuertes críticas de la opinión pública respecto a, cuando menos, tres secretarios que tenían un desempeño cuestionable. Un ejemplo es el caso de Abascal, quien entró en un sainete con los medios de difusión después que provocó con su crítica el despido de la maestra de literatura de su hija de secundaria por haberle solicitado la lectura de la novela *Aura* de Carlos Fuentes (*Milenio*, 12 de abril de 2001). El secretario se expuso a los calificativos más alusivos a un *conservadurismo* recalcitrante, que la lógica política mandaba su destitución o al menos una suerte de distanciamiento entre Fox, y este miembro de su gabinete. El flanco abierto por este secretario alcanzó mayor resonancia por el propio antecedente religioso que lo colocaba en el extremo de la *ultraderecha* por el solo hecho de ser hijo de uno de los fundadores del sinarquismo en México. Esta incómoda situación en la que se encontraba el secretario del trabajo se agravó porque unos días antes había ofrecido una desafortunada declaración en el marco del día de la mujer, en la cual sugirió que la nueva ley federal del trabajo habría de contemplar la responsabilidad de la mujer como reproductora y responsable del hogar. Lo que había provocado reacciones bastante críticas de diferentes sectores de la sociedad mexicana. Además que su procedencia como presidente de la COPARMEX lo situaba como expresión del *conservadurismo* que impulsaba una propuesta claramente contraria a los intereses de las clases trabajadoras, y por lógica, más favorables a los intereses del capital. La defensa que Fox tuvo que hacer de su secretario de trabajo, no solo sugería la complacencia a posiciones que orientaban la imagen de su gobierno hacia la derecha, sino que lo proyectaba como un gobierno de cierto corte autoritario a mostrar oídos sordos a las críticas de la sociedad mexicana. No obstante, a partir del año de 2005, Abascal fue nombrado secretario de gobernación.

De hecho, por lo que toca a su apego a los principios de la Iglesia católica, el conservadurismo del gobierno foxista ha sido explícito desde que era gobernador de Guanajuato, pues siempre demostró su interés por hacer pública su fe y devota práctica católica. Lo que abiertamente quedó manifiesto cuando al tomar posesión de la presidencia de la República

mexicana una de sus hijas le entregó un crucifijo, con sus pretensiones de recibir las bendiciones papales a su matrimonio con Martha Saghún, con la recepción que oficialmente hizo al *Papa* en su última visita a México (a pesar de las críticas recibidas) y sus recientes asistencias dominicales a diferentes iglesias de la ciudad de México, en el marco de las campañas electorales en el Estado de México. De hecho, en su visita dominical del 9 de febrero hizo lo necesario para que se hiciera público que dio \$ 20,000.00 M. N., de limosna, cuando el salario mínimo mensual gira entorno a los \$ 1, 200.00 M. N. (*El Financiero*, 17 de abril de 2003).

En todo caso, lo que adquiere relevancia es que Fox y Martha Saghún, particularmente, y Carlos Abascal, miembro de su gabinete y expresidente de COPARMEX, utilizan sus creencias políticas para manipular una imagen que hace patente la relación entre política y religión. Lo cual supera la pretensión de la Modernidad de separar un ámbito del otro, y que en la práctica del nuevo gobierno lanzaba al imaginario colectivo imágenes que reforzaban una identidad político-religiosa que fortalecía su legitimidad en el poder. Por ello adquiere relevancia la idea de Lewellen, al respecto:

*El papel de la religión y de lo sobrenatural en la política se manifiesta principalmente de tres maneras: 1) el poder puede reposar directamente en la religión, como ocurre en una teocracia; 2) la religión puede utilizarse para legitimar a la elite dominante; y 3) la religión puede proporcionar las estructuras, creencias y tradiciones subyacentes que son manipuladas por cuantos aspiran al poder (Lewellen, 1985: 68).*

Como se puede observar, en el contexto al que hacemos referencia adquieren mayor significado los puntos dos y tres que sugiere Lewellen. Por otra parte, el uso de la religión para legitimar la posesión o ejercicio del poder, se asocia normalmente con las posiciones ideológicas de *conservadoras o de derecha*. Así, una forma de demostrar la fusión entre *conservadurismo* y el *pragmatismo* que caracterizó al gobierno de Fox, cabe destacar sus ideas respecto al papel que juega la iglesia y el Estado: *El postulado de las iglesias no está peleado con la labor de los gobiernos, de hecho deben ser complementarios, los dos deben trabajar por el desarrollo integral de la sociedad.....Estado e Iglesia deben buscar la coordinación de sus actividades, para aspirar a consolidar sociedades fuertes tanto en lo material como en lo espiritual (Fox, 1999: 19).*

Otro aspecto que muestra cómo el pragmatismo del gobierno foxista contraría al conservadurismo que suponen los rituales de la política y la imagen presidencial, son los exabruptos verbales del propio presidente de la República, que en todo caso más que aproximarlos

al pragmatismo empresarial lo acercan al ejercicio populista del poder que, por cierto, tanto criticaron los empresarios mexicanos en la mayor parte de los gobiernos posrevolucionarios, hasta el sexenio de López Portillo, y que muy próximo a las elecciones presidenciales que marcan su sucesión, criticó a los gobiernos perredistas en la capital de la república.

### 3.3.4 *Eficacia gubernamental o vocación por el poder.*

Uno de los recursos de defensa y por tanto, una suerte de estrategia para legitimar la larga persistencia del PRI en el poder, era, precisamente, que el monopolio sobre las estructuras de gobierno que ejerció la burocracia política desde finales de los años veinte, la dotaba de la experiencia necesaria para gobernar. De tal manera que los posibles símbolos que proyectaba el binomio PRI-Gobierno no necesariamente eran unívocos, pues los mismos excesos del poder intrínsecos en su ejercicio, generaron en el imaginario colectivo de nuestra sociedad una representación de un despotismo político que expresaba las limitaciones de la acción gubernamental para resolver la compleja realidad de nuestro país. La corrupción, la ineficiencia e irresponsabilidad de la administración pública priísta, en correlación con la ausencia de una *oposición real*, provocó la “despolitización” de nuestra sociedad que se expresaba en las contiendas electorales mediante una baja participación de los votantes (Aziz Nassif, 1998, 1996).

La emergencia de una *oposición real* y el hartazgo de la ciudadanía respecto de los gobiernos priístas, sobre todo en la vertiente tecnocrática, fueron los elementos causales que explican la emergencia una sociedad deseosa ejercer su derecho al voto. Sin embargo, si retomamos el momento de la coyuntura electoral de 1988, vale recordar que el hecho que la izquierda reorganizada en torno a la figura de Cárdenas emergiera como la segunda fuerza electoral de la nación, a pesar del fraude que llevó al poder a Salinas de Gortari, obedeció en mucho a los resultados arrojados por el proyecto que instauró la tecnocracia desde 1982. El sentido *desnacionalizador* y la marginalidad a la que se sometió a las mayorías de la sociedad mexicana, descubrieron el verdadero carácter del proyecto neoliberal que se consolidó con el salinismo. En esa perspectiva, si la tecnocracia priísta simbolizó un proyecto de nación que abandonaba el compromiso con su sociedad, la imagen de Cárdenas representaba la posibilidad de recuperar el proyecto revolucionario, y por tanto, la reivindicación del compromiso del gobierno con su sociedad.

Se trataba, entonces, de una coyuntura donde se hacía posible contener las tendencias generadas a partir de 1982, dando un giro que recuperara el sentido social de la política de los gobiernos posrevolucionarios. Sin embargo, el proyecto neoliberal se consolidó, no sin problemas, en el periodo de dos sexenios: el de Salinas y el de Zedillo. De tal manera que la nueva coyuntura del año 2000 se tradujo mediante el dilema de la *continuidad-ruptura* de un proyecto de nación que mantenía en crisis a la sociedad mexicana. Y en ese camino que condujo a los resultados del 2 de julio, quedó claro que los intentos de Cárdenas por personificar el cambio que la sociedad demandaba no lograron generar la *credibilidad* requerida para triunfar en esas elecciones. De manera contraria, el manejo de una agresiva campaña en los medios de difusión masiva, permitió que Fox se proyectara como *símbolo del cambio*, y en esa medida, que canalizara a su favor y el del PAN, los votos suficientes para alcanzar el triunfo. La cuestión era qué haría Fox para que ese cambio se expresara en acciones gubernamentales eficientes que se alejaran claramente del despotismo que caracterizó a los gobiernos priístas y se presentara con una actitud de gobierno que abriera las puertas a la democracia, y que por tanto, garantizara la transparencia en los principales procesos de toma de decisiones. Pero la pregunta esencial continuaba preocupando ¿el Gobierno de Fox representaba en realidad la continuidad de un proyecto favorable a los intereses empresariales? ¿O representaría la ruptura con el mismo, y por tanto, la posibilidad de hacer girar el proyecto de nación hacia intereses de las mayorías?

Ante ese dilema, el pragmatismo de Fox colocaba en la agenda nacional, inmediatamente después del triunfo, la necesidad de dar forma a un gabinete de transición que hiciera posible el cambio al que se había comprometido con la sociedad mexicana. Pero sobre todo, se preocupó porque su gabinete expresara el pluralismo político que ejemplificaba uno de los principales valuartes de la democracia. Inmediatamente se dio a la tarea de convocar a personajes de la izquierda entre quienes desatacaron Rosario Robles y Alejandro Encinas, incorporaciones a su gabinete que de haberse concretado hubiesen dado una mayor justificación al “*voto útil*” que supone el voto de la izquierda a favor un cambio realmente viable. No obstante, la presencia de Castañeda y Aguilar Zínser, fundamentalmente, así como de la participación de Joel Ortega, en menor medida, pretendieron dar esa cobertura político-ideológica a un gobierno que se sabía comprometido con la mayor parte de los mexicanos (Córdoba, 2006).

Con la participación de Castañeda, Aguilar Zínser y Muñoz Ledo, se tenía una buena cobertura para legitimar el “*voto útil*”, pero eso no bastaba para enviar señales a la sociedad, que

la convenciera que su decisión electoral no iba a poner en riesgo la estabilidad que requería el país. Se requería garantizar el mínimo de eficacia gubernamental que permitiría evitar el caos provocado por una nueva administración pública. Por lo tanto, la persistencia de personajes gubernamentales identificados con la burocracia política, representaba la posibilidad de generar cierta certidumbre sobre el proceso de transición gubernamental. Era el caso de Francisco Gil Díaz al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Alejandro Gertz Manero, como Secretario de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia; Rafael Marcial Macedo de la Concha, Procurador General de la República; Marco Antonio Pierrot González, Secretario de Marina; Gerardo Clemente R, Vega García; Secretario de la Defensa Nacional. Aunque también había de considerarse la experiencia de José Sarukhán Kermez, quien se desempeñó como Coordinador del Gabinete de Desarrollo Social y Humano hasta el 31 de enero de 2002, o del mismo Pedro Cerisola Weber, quien desempeño como funcionario en diferentes ámbitos de las comunicaciones y los transportes en gobiernos priístas (D' Artigues, 2002).

También podríamos agregar a esta parte del gabinete, a funcionarios que ya tuvieron experiencia como gobernantes, como es el caso de Francisco Barrio, ex-gobernador de Chihuahua por el PAN, y a Ernesto Rufo Appel, ex-gobernador de Baja California por ese mismo partido, quienes además eran los únicos panistas “de peso” que se incorporaron al nuevo gabinete. Sin embargo, estos miembros tienen otras características interesantes, como es el ser empresarios, y el estar vinculados a organizaciones empresariales en sus regiones de origen, sobre todo a la representación regional de COPARMEX. Lo que refleja su pertenencia a lo que conocemos como *neopanismo*, lo que no es suficiente para resolver el conflicto entre Fox y el partido que lo llevó a presidencia de la nación. Al contrario, confirma que Fox gobernaría sin el PAN, situación que poco a poco se fue allanando por la misma necesidad que tuvo el gobierno foxista de contar con una representación panista a su favor en las cámaras de senadores y diputados.

Otro tipo de invitados al nuevo gabinete lo compusieron miembros de corte claramente empresarial como es el caso de Javier Usabiaga, Secretario de Agricultura; Xóchitl Gálvez Mora, Titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; o altos ejecutivos como es el caso de Ernesto Martens Rebolledo, quien fue director general en la Secretaría de Energía; Leticia Navarro Ochoa, Secretaria de Turismo; Víctor Lichtinger (sustituido después por Alberto Cárdenas, exgobernador de Jalisco), Secretario de Medio Ambiente y Recursos Humanos;

Francisco Ortiz Ortiz, Coordinador General de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia de la República; Juan Hernández Senter, Titular para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

También están los académicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) como es el caso de Eduardo Sojo Garza-Adalpe, Coordinador de Asesores de Políticas Públicas, quien luego promovería a Ernesto Derbez, su exmaestro en esa misma institución; así como personajes de “corte intelectual” como es el caso de Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación; Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Desarrollo Social, Sari Bermúdez, Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y hasta la misma Martha María Sahagún Jiménez, ex-vocera de la presidencia y luego *Primera Dama* de México.

Cabe destacar el caso de Carlos Abascal, Secretario del Trabajo y Previsión Social, quien fungió como líder de la COPARMEX, organización empresarial que surgió con el único objetivo de garantizar los intereses de la clase empresarial ante el avance de los derechos de los trabajadores. Y quien desde luego, representa una garantía para los empresarios mexicanos, siempre preocupados por el cauce que tome la Nueva Ley Federal del Trabajo. Lo que se redondea con la incorporación de Fernando Canales Clariond, Secretario de Economía desde el 1º de febrero de 2003, quien como prominente empresario, neopanista, y quien representa una de las posiciones más claras para impulsar el proyecto neoliberal al que se le da continuidad en el gobierno de Fox, 2000-2006.

Vale desatacar el señalamiento de Abraham Nuncio: Con la incorporación de Fernando Canales Clariond al gabinete de Vicente Fox, la derecha regiomontana, por conducto del Grupo Monterrey, se enfila hacia la Presidencia y ya acumula cuatro posiciones: las secretarías de Energía, Educación Pública, Reforma Agraria y Economía (*La Jornada*, 7 de febrero de 2003).

Tal posibilidad, confirma que son los empresarios los que han llegado al poder, no sólo por la vía del *neopanismo*, sino por su incorporación a las estructuras de gobierno.

Es pertinente señalar que la “selección” de los diferentes funcionarios que dieron forma al gabinete de Fox, la realizaron consultoras denominadas *Head Hunters* (cazadores de talentos) como garantía de la eficiencia de los recursos humanos que dirigirían las estructuras del nuevo gobierno. Esta estrategia es, debemos suponer, una acción que en el campo de las empresas privadas permite a esas organizaciones desarrollar capacidades para adaptarse de una forma más eficiente al cambio, a los escenarios de alto riesgo, y por ende, de una respuesta efectiva a la complejidad de la realidad social, económica, política o cultural. Esta es una muestra de la

influencia empresarial en el pragmatismo de Vicente Fox que pretende ganar credibilidad en el “gobierno del cambio”. Sin embargo, los magros resultados sociales del sexenio hablan de un gabinete que reproduce la esencia del neoliberalismo, o se trata de un equipo de ineptos que adolecen de la capacidad para enfrentar los problemas más visibles que aquejan a las mayorías, o en último de los casos, estamos frente a una nueva clase política más preocupada por mantenerse en el poder que de cumplir con los compromisos que históricamente les corresponden.

Una tarea prácticamente imposible sería hacer un balance positivo del gobierno de Fox, pues los resultados políticos, económicos y sociales de lo que podría significar el cambio, no alcanzan un indicador que permita afirmar que el avance democrático que produjo el desplazamiento del PRI, después de 70 años de predominio, no se materializa en alguno de los principales indicadores socioeconómicos de nuestra sociedad. Por ejemplo, en el terreno de la resolución de uno de los principales problemas políticos, como es el caso del levantamiento indígena-zapatista que a lo largo del sexenio de Zedillo, 1994-2000, se mantuvo con diferentes puntos críticos, y en medida de su impacto nacional e internacional, llamó la atención del candidato del PAN, quien se refirió a la complejidad del problema “ninguneándolo” en una posible agenda nacional, cuando se refirió a él y prometió que lo resolvería en “15 minutos”.

El hecho que probaría esta pretensión, tuvo efecto con la caravana zapatista que llegó a la Ciudad de México en enero de 2001, con el propósito de que los líderes del movimiento indígena presentaran sus propuestas a la cámara de diputados y a la de senadores, y en el mejor de los casos, directamente al ejecutivo. En todo caso, el *subcomandante Marcos* y la comandancia indígena provocaron con su estrategia de comunicación y vinculación con la sociedad civil, un claro descrédito de la palabra presidencial, y el problema quedó tan empantanado como antes.

Lo mismo que la propuesta por parte del ejecutivo respecto a construir una opción aéreo-portuaria para la Ciudad de México, en una zona conurbada del Estado de México, a la altura de San Salvador Atenco. Dada la falta de tacto y capacidad de negociación política por parte del secretario de Gobernación como el de Comunicaciones y Transportes, hicieron evidente el menosprecio del ejecutivo respecto a los afectados por dicho proyecto de comunicación aérea, lo cual provocó, quizá, uno de los conflictos políticos más agudos de los últimos años (después de las guerrillas que proliferan desde el 1°. De enero de 1994 y el peligroso avance del narcotráfico) en la primera mitad del año 2002. La decisión salomónica de Vicente Fox, que liberó de responsabilidad tanto al secretario de comunicaciones y transportes, al mismo secretario de

gobernación, fue simplemente, suspender el proyecto que ya había comprometido al Gobernador del Estado de México (priísta) y al conjunto de empresarios participantes en el megaproyecto. Sin embargo, cabe reconocer que el pragmatismo del presidente de la República desactivó uno de los movimientos sociales más beligerantes que se manejaban al límite de la legalidad. No obstante, cabe destacar, independientemente de la falta de oficio de la nueva clase política en el poder, que el gobierno no recurrió a la represión como hubiera sido el caso de los gobiernos priístas.

De igual manera, en el conflicto de las televisoras entre diciembre de 2002 a enero de 2003, donde las autoridades correspondientes dejaron actuar impunemente a Televisión Azteca en contra de CNI Canal 40, la cual se vio afectada por el despojo de sus instalaciones por parte de la primera. Evidentemente, este fue un conflicto que puso en evidencia la ausencia de un estado de derecho, así como la ineficiente acción del gobierno federal sobre un penoso caso de abuso de poder entre propietarios de capital. La presión que generaron los propios medios de difusión al mantener el conflicto como un problema prioritario de la agenda nacional, provocó una más de tantas declaraciones del presidente Fox que expresan cómo el pragmatismo del ejecutivo raya en las más absurdas declaraciones de un estadista, y que al calor de la presión ejercida y la demanda expofesa a la intervención del presidente de la república, dijo: *¿y yo por qué?*. Mientras nuestro presidente acumulaba records en viajes al extranjero, donde también ponía en tela de juicio al gobierno mexicano por el tipo de declaraciones irresponsables que hace cotidianamente. Al final, el conflicto quedó resuelto con la decisión del poder judicial, dejando en evidencia la ineptitud del secretario de gobernación, Santiago Creel; del de comunicaciones y transportes, Pedro Cerisola, y del propio presidente de la república.

De manera semejante, en un desplante más de voluntarismo político, el presidente Fox declaró el 8 de marzo de 2003, día internacional de la mujer, que se atraería a la PGR el caso de las mujeres asesinadas de Cd. Juárez que ya sumaban más de 300 casos no resueltos (*Milenio*, 9 de marzo de 2003). Lógicamente, bajo la ineficacia manifiesta por el “gabinetazo”, por un tiempo más el caso continuó siendo considerado como facultad de las autoridades locales del Estado de Chihuahua, hasta que éste fue atraído a las facultades federales que dispusieron la creación de una Fiscalía Especial para tratar el caso. La cuestión es que una u otra, ponen en entredicho la capacidad del Estado para resguardar el orden y prestar una eficiente seguridad pública a la sociedad, lo mismo que el compromiso presidencial que como sucede comúnmente, sólo quedó en palabras.

No obstante, un balance de la gestión de gobierno que llegó al poder en el año 2000, sugiere un alto grado de ineficiencia gubernamental de todo el gabinete, lo cual, en los dos últimos años provocaba la preocupación y, en ocasiones, hasta la molestia de los empresarios por la parálisis de la administración del nuevo gobierno. Como lo demostraba desde un inicio, la crítica de Slim a las facilidades que el gobierno dio al capital extranjero para insertarse en las actividades bancarias (*La Jornada*, 7 de junio de 2001). O la advertencia de él mismo cuando urgió al gobierno para que reactivara el mercado interno (*La Jornada*, 3 de abril de 2003). Este espectro de las críticas que el propio sector empresarial plantea al gobierno foxista, refleja la persistencia de una crisis reproducida por la pasividad y falta de oficio del “gabinetazo”.

Como se puede observar, la propuesta de los *Head Hunters* que en su momento estuvieron a disposición de Fox, fallaron en su tarea de acercar “talentos” al poder ejecutivo, funcionarios con la perspectiva política necesaria y la capacidad decisoria para resolver la compleja crisis por la que atraviesa el país. Otro de los posibles ejes de análisis de la transición mexicana es el papel que juegan los medios de difusión en la instauración de la democracia (Trejo Delarbre, 2001) en un sistema político que, por su propio carácter populista-paternalista, genera prácticas autoritarias del poder. Ello determinó la marginación en la que se tuvo a la oposición, y el papel instrumental que tuvieron unos medios de difusión masiva, sobre todo los que corresponden a la información y el análisis de la situación real del país (económica, política y cultural).

De hecho, el papel que juegan los medios de difusión masiva son determinantes en la promoción de una cultura política ceñida por los principios básicos de la democracia, de tal manera que sin este agente de la cohesión social sería imposible pensar que una sociedad pueda entrar en una etapa política más evolucionada que exprese la pluralidad (diversidad política) y la transparencia del sistema político (Winkin, 2001).

Sin embargo, el manejo de los medios de difusión en los últimos 20 años, han revelado la esencia de una política moderna que guía sus esfuerzos a convencer (envolver) a los ciudadanos respecto a la calidad de las ofertas políticas que brindan las elites en turno, pero sobre todo, en la lógica mercadotécnica del equipo de campaña de Fox, nos remite al carácter maquiavélico de la política, donde la simulación y la credibilidad en una imagen de lo posible, son el flanco a cubrir para legitimar al poder. Es a partir de este instrumento que la imagen de Fox se proyectó en los escenarios nacionales haciendo blanco en el *imaginario colectivo* que le dio el triunfo electoral del 2 de julio de 2000. En todo caso, el problema radica, precisamente, en la distancia creada

entre las expectativas que construyó un ejercicio agresivo de los *medios de comunicación*, y las acciones de gobierno dirigidas a satisfacer las necesidades más urgentes de la población, como es el caso del desempleo, los niveles de vida de las mayorías, la inseguridad y, en general, la miseria.

No es gratuito que para algunos, los excesos de la comunicación de Fox y su gobierno intenten ocultar la falta de sensibilidad política, la ineficiencia gubernamental y, en general, la ignorancia respecto a la complejidad de la realidad nacional. En ese sentido va la imagen que Granados Chapa nos ofrece de las características personales de nuestro presidente:

*Se trata del fundador de la república empresarial, una persona cuya incultura política – preguntaba en 1989 qué hacía un diputado- es suplida por apelaciones frecuentes al lenguaje de la administración de los negocios, en que los ciudadanos son clientes a los que hay que proveer de productos de calidad, empaquetados en la mejor envoltura, vendidos con la más eficiente estrategia mercadotécnica (Granados Chapa, 2000: 10).*

Y como es obvio, la estrategia mercadotécnica a la que se refiere Granados Chapa solo acontece en el marco de los medios de difusión en la que se recrea la proyección de la imagen del candidato, primero, y la del presidente, después.

De hecho, el caballo de batalla de la campaña presidencial fueron los recursos económicos que se ocuparon para cubrir eficientemente la presencia del candidato en los medios de difusión. De tal manera que en abril de 2003, “los Amigos de Fox” se encontraba bajo la sospecha de uso ilegítimo de fondos públicos y lavado de dinero, para el Instituto Federal Electoral y de la Procuraduría General de la República. Los vínculos y compromisos políticos entre el gobierno de Fox y las elites empresariales se hizo más patente cuando la PGR llamó a declarar sobre los recursos de empresarios inyectados a la campaña electoral del 2000, a Carlos Slim, el cuarto empresario más importante del mundo, y a Lorenzo Zambrano, propietario de Cemex, una de las 100 empresas más importantes del país, quienes fueron llamados a declarar por el apoyo que dieron a la campaña presidencial de Fox (*La Jornada*, 29 de marzo de 2003). Y por ese mismo tiempo también se revisaban las tarifas que ofrecieron Televisa y Televisión Azteca a los partidos políticos

La presencia de los *Amigos de Fox* y su protagonismo oculto, son reflejo de que no solo los medianos y pequeños empresarios hicieron posible el fenómeno del *neopanismo*, votaron por Fox, sino que también muchos grandes empresarios votaron, pero sobre todo, apoyaron económicamente al gobierno del cambio.

### 3.3.3 Corolario.

En este capítulo se realizó un esfuerzo por destacar el papel político que jugaron los empresarios mexicanos en el periodo de la transición, tiempo durante el cual se transformó el sistema político mexicano que se definió a finales de los años veinte. Se trató de demostrar la pertinencia de una interpretación sistémico-energética sobre ese complejo proceso social, el cual se reprodujo a partir del intercambio entre los sistemas político, económico y cultural. En ese sentido, se intentó destacar las posiciones de poder de la vieja clase política, “familia revolucionaria”, así como los nuevos actores políticos que emergieron al calor del cambio que supone una transición. Y de manera muy particular, el papel político que desempeñaron los empresarios a través de sus organizaciones empresariales (fundamentalmente CCE, COPARMEX, CONCAMIN, CANACINTRA y CONCANACO), lo cual permitió reconocer la esencia de la cultura política de este importante sujeto social. Esto es, la relación existente entre las *unidades de operación* representadas fundamentalmente por las elites gubernamentales, y los empresarios a partir del papel político que jugaron sus organizaciones empresariales, actores políticos que compitieron por el poder en este periodo de la transición mexicana.

En ese sentido, la interpretación sistémico-energética sugería la relación entre el sistema político y su entorno, la relación entre el sistema de toma de decisiones y el control del sistema económico y cultural, por tanto, obligó a destacar el papel que jugaba la comunicación política, primero, de los gobiernos mexicanos, segundo, el de las organizaciones empresariales que como instrumentos de poder de los propietarios del capital, hicieron posible que su discurso político confrontara, criticara, apoyara a los diferentes gobiernos de este periodo que comenzó a perfilarse desde los años sesenta.

Se trataba de analizar cómo fue perdiendo poder la burocracia política que mantuvo la posición hegemónica de la clase dominante, desde los años treinta. Y cómo los símbolos heredados por la revolución de principios del siglo XX, se fueron desgastando en detrimento de la imagen de esa elite, conforme la crisis económica y política se hacía más evidente. Así fue posible comprender que el *símbolo del nacionalismo revolucionario* que legitimó las decisiones de los gobiernos posrevolucionarios se desgastó tanto, al grado de abrir espacio a una ideología sustentada en la modernización económica, y que por tanto, renegaba del pasado revolucionario y

el sentido social que durante tanto tiempo se impuso como referente del discurso gubernamental y como objetivo de las diferentes gestiones gubernamentales, hasta 1982.

También se intentó destacar que la nueva clase política (tecnocracia) que irrumpe en el escenario nacional, no solamente da cuenta de los cambios internos al interior del partido dominante, PRI, sino de una nueva relación entre el Estado y la sociedad mexicana, de la cual destaca el papel jugado por los empresarios y sus principales organizaciones de clase en la promoción de una ideología neoliberal que privilegiaba los valores del mercado. De tal manera que la coyuntura que supone el proceso de transición, no solo contempla la transformación de las estructuras políticas, económicas y culturales, sino la transformación misma de la cultura política del país, así como la emergencia de nuevos símbolos que expresaban los conflictos entre las fracciones de la clase dominante que luchaba por el poder. Desde ese punto de vista, la transición representa un punto de ruptura entre el pasado y un tiempo socialmente nuevo, que poco a poco va definiéndose a partir del agotamiento y renovación del modelo de desarrollo económico. Ello supone un choque ideológico, por una parte, el de la clase política tradicional que desde el poder que recurre insistentemente a los símbolos tradicionales, y otra que apela a símbolos que promueven una nueva racionalidad del Estado.

En esa lógica, la interpretación desde una perspectiva sistémica-energética obliga a considerar que junto a ese conjunto de transformaciones estructurales que vive la sociedad mexicana desde los sesenta, el sistema político va adquiriendo una nueva característica determinada no solo por una relación más equilibrada entre el Estado y la sociedad, sino por el papel que juegan los medios de difusión masiva en la conformación de un nuevo espacio público que hace posible una forma de comunicación entre los gobernantes y la sociedad a la que representan, más allá de los recursos y capacidades que ofrecen los partidos políticos. Surge la opinión pública y a partir de ella, los diferentes sectores sociales pueden plantearle sus demandas, críticas y apoyos a la elite gobernante. Ese es el contexto en el cual intentamos destacar la importancia que tiene la comunicación política que los empresarios expresan a partir del discurso de sus principales organizaciones empresariales, lo cual les permite convertirse en verdaderos instrumentos de presión que determinan tanto la deslegitimación del modelo que llegó a su fin en los años setenta, como la legitimación del modelo económico que se instaura a partir de 1982.

Esto permite explicar como la cultura política del sector empresarial, su recurrente y decidida presencia en los medios de difusión masiva, constituyen un referente fundamental para

comprender la crisis de credibilidad que viven los gobiernos posrevolucionarios de los años setenta. Este instrumento político que actuó en el terreno del imaginario nacional y que se reforzó a través de la posición económica que detenta este sector social, no actuó solamente en el espacio de la ideología, sino que iba acompañado por otro tipo de acciones como la fuga de capitales, la compra de moneda extranjera y el mismo apoyo económico que los empresarios ofrecieron a los partidos políticos. No obstante, consideramos que el papel ideológico que adquirió el discurso de las organizaciones empresariales, no solamente permitió reconocer la importancia de la comunicación política en la reproducción del poder, sino del poder que los empresarios demostraron provocando, primero, una crisis de credibilidad en la burocracia política, luego, legitimando el proyecto económico de los gobiernos tecnocráticos, ya sean los priístas (De la Madrid, 1982-1988; Salinas, 1988-1994, y Zedillo, 1994-2000) o los gobiernos panistas (Fox, 2000-2006, y Calderón, 2006-2012) que se instalan en el poder a partir del año 2000.

En el siguiente capítulo, presentaremos más detalladamente un análisis sobre la forma que adquirió el discurso político de las organizaciones empresariales, con lo cual pensamos validar la pertinencia del modelo analítico propuesto. También presentamos el discurso de algunos líderes empresariales con el objetivo de observar la vinculación entre las elites políticas y las económicas, así como también ofreceremos espacio al discurso de empresarios comunes, quienes desde su experiencia ofrecen otro tipo de información que sugiere cómo las organizaciones empresariales están al servicio de los grandes empresarios.

#### **CAPÍTULO IV. EL DISCURSO POLÍTICO DE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES.**

*Formas que adopta la omnipresencia de la comunicación,  
sus paulatinas conquistas por los espacios  
de lo simbólico y lo sagrado,  
de los poderes económicos y político.....  
Nada parece escapar a su ley, no hay  
sector de actividad en que no se inscriba,  
su influencia la hace constituirse por sí misma  
en un valor de múltiples rostros,  
tiende a ensombrecer cualquier imperativo  
a favor de uno solo: "hay que comunicar".....  
En la actualidad, la comunicación  
ya no está subordinada, sino que domina,  
y cuenta con los medios para ello;  
a veces incluso se pierde el control sobre ella.  
(Balandier, 1994: 152).*

Como se podrá observar, el solo hecho de analizar cuál es el tipo de transformación que la sociedad mexicana está experimentando desde que se instaura el modelo neoliberal, supone el reconocimiento de los aspectos más significativos del cambio estructural, tanto en lo económico como en lo político. Sin embargo, para efectos de nuestra interpretación, *el sentido de la expresión discursiva de la ideología neoliberal constituye una de las significaciones más contundentes para comprender el proceso de reproducción del poder, en la medida que ese cambio estructural representa un proceso político que se expresa a través de contradicciones simbólicas que permiten comprender la cohesión de lo político y lo económico* (Gellner, 1998, 1997, 1988; Augé, 1994; Llobera, 1990; Lewellen, 1985; Cohen, 1979; Castoriadis, 1983).

Se trata de una perspectiva interpretativa en la cual, mediante *el análisis del discurso de los actores políticos preponderantes del sistema político mexicano*, se capta su sentir respecto a una crisis ideológica que corre de la mano al agotamiento del modelo de desarrollo posrevolucionario, la recuperación de la credibilidad en los gobernantes

(tecnócratas) y sus decisiones, y en general, el proceso de legitimación de los gobiernos en turno. Desde luego, conforme *esta investigación se propone como eje explicativo analizar el papel político que los empresarios juegan en la definición del rumbo del país*, la *transición* adquiere una relevancia fundamental como contexto en el cual se reproduce el proceso de transformación de las estructuras sociales de la sociedad mexicana (Rivière, 2005; Meyer, 2003; Lardellier, 2002; Winkin, 2001; Van Dijk, 2001).

Ese complejo proceso de cambio es el marco general sobre el cual tendemos nuestro eje expositivo, de tal manera que la etapa de agotamiento del modelo de desarrollo y la emergencia de uno nuevo, se expresa a través de una crisis económica que *reduce la energía* de la burocracia política para restablecer la estabilidad, y simultáneamente *provoca una crisis política reduciendo la credibilidad en el sistema*, lo que provoca el deterioro de la imagen de la clase política en el poder. La legitimidad del régimen se erosiona a pasos agigantados, abriendo un hueco en las estructuras del poder, donde los actores que se encuentran luchando por mantenerse en el escenario político *tienen su mejor oportunidad para presentar ante la opinión pública su proyecto alternativo de nación*. De tal forma que la credibilidad ganada por cada uno de los actores que compiten por el poder, propicia la erosión de la legitimidad del régimen; la ideología dominante va perdiendo sus espacios, mientras otras ideologías, ubicadas en la zona de la oposición, van ganando posiciones en el espacio público donde se debaten los asuntos del interés de la colectividad (Adams, 2001, 1983).

Ese fenómeno de transformación del poder es lo que nos permite utilizar confiablemente el modelo interpretativo propuesto, pues ese *flujo de poder* que pierde un actor, grupo o institución, es recuperado por otro. Proceso que se capta a través de la *situación energética*, en el cual *la energía se transforma*, permitiendo la emergencia de nuevos actores políticos, con discursos que claramente confrontan a una ideología que predominó en el pasado, pero que ya ha cumplido su ciclo. La *crisis global* que la sociedad mexicana vive desde los años ochenta, *representa, grosso modo, una pérdida de energía del sistema que pone en riesgo la reproducción de las estructuras de poder*. El reto de los nuevos actores que emergen al calor del proceso de transición, es restituir el orden, *recuperar la energía perdida* y generar mejores condiciones para recuperar el rumbo que

hoy exige, en la lógica de la globalidad, el uso racional del poder institucional que equilibre los criterios de distribución de la riqueza y promueva el avance de una cultura democrática.

El deterioro de la ideología revolucionaria que el régimen mantuvo hasta 1982, es uno de los aspectos más significativos que nos permiten comprender las causas de la crisis de un modelo que privilegió una política social, la figura del “estado benefactor” y que de manera sintética representa la presión de la legitimidad (Adams, 1983). Así como también, el discurso político de la tecnocracia que ascendió al poder a partir de ese año, *representó la emergencia de una nueva ideología que la clase política en el poder usó como recurso inmediato para recuperar la credibilidad en el régimen*. De ahí que sea fundamental seguir las expresiones ideológicas de quienes detentan poder, y que sin el menor recato se sitúan públicamente en el espacio más claro de la *derecha*. Ese es el significado que tiene la ideología neoliberal en el contexto de la transición mexicana.

Evidentemente, las posibilidades del régimen para recuperar la confianza de la sociedad, dependen de la respuesta obtenida por parte de sus sectores, de los actores políticos más relevantes que puedan ser significativos en la generación de la legitimidad que todo gobierno requiere para enfrentar crisis como la que atraviesa nuestro país. En la medida que el ascenso de la tecnocracia representa la derrota de las clases trabajadoras en el escenario político nacional, la adhesión ideológica de los propietarios del capital es fundamental para recuperar la legitimidad de la clase política en el poder. Por ello resulta de vital importancia captar el sentido del discurso político de las principales organizaciones empresariales, sin cuyo análisis sería imposible comprender el rumbo que ha tomado la nación desde 1982, momento en el que los empresarios llegaron informalmente al poder.

La pertinencia de una interpretación como la que hemos presentado en esta investigación, es posible porque el concepto de *unidad de operación* permite explicar el papel que juegan los empresarios como actores políticos estratégicos en la reproducción del poder, y por ende en la reproducción del rumbo que toma la transición mexicana. En ese sentido, el papel que juegan las organizaciones empresariales se hace comprensible en la lógica sistémica-energética al considerar su actuación económica, política y cultural, a partir de una *unidad de operación empresarial*. De la misma manera que se podría considerar una unidad de operación para cada uno de los actores que participan o irrumpen por primera vez en el escenario político nacional.

#### 4. El sentido de la transición y su relación con el discurso.

Considerar, al menos, la transformación visible de una estructura de un sistema social nos exige reconocer, si es que a la vista no es objetable dicho cambio, que esa sociedad se dirige en un sentido diferente al que mantenía en el pasado. Supone la emergencia de condiciones que permiten distinguir la transformación de la sociedad, pero también, sin necesidad de comprobarlo en lo inmediato, nos permite sospechar que otros espacios del sistema se han visto afectados por las transformaciones de una estructura objetivamente reconocida (Adams, 2001, 1983, 1978). En el caso de la transición mexicana, si bien es cierto que las estructuras políticas e ideológicas comienzan a transformarse desde los años setenta, es inobjetable que la economía ha dado un viraje radical que no permite dudas sobre la transformación de esas estructuras. Evidentemente, desde la lógica sistémica con la que construimos esta *interpretación antropológica de la transición*, los intercambios entre una y otra estructura, y desde luego con el subsistema sociocultural, nos permiten confirmar que el rumbo que toma la transición corre en uno u otro sentido. Ello se confirma a partir del papel que representan las organizaciones empresariales (unidades de operación empresarial), en la medida que compartan una identidad política (como puede ser una ideología de clase) y que finquen su poder en el control de la economía o de una parte sustancial de ésta.

De esa forma, la instauración del modelo neoliberal a partir del ascenso de la tecnocracia en 1982, confirma la certeza del cambio al que evoca el término *transición*. Sin embargo, aquí se le concede mayor interés a la manera en que ese nuevo proyecto de desarrollo, en la medida que margina a la mayor parte de la sociedad, es *avalado por una nueva ideología que renuncia al carácter nacionalista y asistencialista que privó a lo largo de 50 años*. Es decir, que la lucha por el poder presupone el manejo de símbolos que contraponen proyectos de nación radicalmente disímiles. Por tal razón, el discurso mediante el cual los empresarios mexicanos adquieren presencia en el escenario político nacional emerge como un elemento fundamental en la comprensión de la nueva ideología dominante. De hecho, las resistencias que el régimen encontró para legitimar el nuevo modelo de desarrollo, encontró en los propietarios del capital la cobertura necesaria para

resolver los momentos más críticos en la reproducción de las estructuras del poder. *La legitimidad de la tecnocracia y su proyecto de nación sólo fue posible por el respaldo que esta clase política encontró en las posiciones de las organizaciones empresariales, cuya presencia en el escenario político nacional es evidente, mediante el discurso que insertan en los medios de comunicación masiva, lo cual da forma al espacio público, forja corrientes de opinión y define los aspectos más relevantes de la agenda política.* La contraparte, las clases trabajadoras, están ausentes en ese proceso de legitimación, son los grandes perdedores de la transición, de tal forma que adolecen de un discurso lo suficientemente capaz para posicionarlos en relación al poder.

Como lo sugiere Adams, el poder que pierde un actor lo gana otro, lo cual refleja la esencia del proceso energético de reproducción del poder. Puesto que el poder no es estático y por ello se expresa a través del intercambio entre las diferentes unidades de operación que se desplazan de un nivel estructural a otro.

Se trata de reconocer que la reproducción de los rituales modernos de la política solo acontece a partir de los discursos que dan forma al *nuevo espacio público*, acompañado de las imágenes correspondientes que ponen en escena la teatralidad de la modernidad. Como sugiere Balandier: *Todos los discursos, tanto los más comunes como los más doctos, se sitúan en un tiempo final, de conclusiones: fin de una época, de una civilización, de una ideología dominante –la del progreso-* (Balandier, 1988: 10). Evidentemente, si existe un actor político, aparte de la tecnocracia, que acompañe esta “modernidad” neoliberal, es sin duda, la clase empresarial a través del papel corporativo que sus organizaciones juegan dentro del sistema político mexicano. La clara proximidad del proyecto neoliberal que la tecnocracia promueve, y el proyecto de nación que los empresarios impulsan desde hace tres décadas, no solo hablan de su adhesión ideológica a la elite gobernante, sino de su poder, de su capacidad para imponer un proyecto que responde a sus intereses de clase. Así que seguir el sentido que conlleva el *discurso empresarial, se traduce en la posibilidad de comprender las representaciones que se van construyendo al paso de la transición, pero también permite descifrar los destinos de ese complejo proceso.*

El discurso empresarial que tiene una amplia presencia en los escenarios políticos, tiene un importante significado en la reproducción de las estructuras del poder, pues son los empresarios quienes le infringen mayores mermas a las fuentes del poder de la elite

gobernante (familia revolucionaria). Por ende, son los que oponen mayor resistencia a la reproducción de un sistema político que pretendía persistir en el tiempo. Esto hace evidente que *constituyen una de las principales fuerzas energéticas del sistema político, económico y social, que provoca la erosión del poder simbólico con que contaba la burocracia política*, pues la presencia del discurso de las principales organizaciones empresariales reflejan la crisis de credibilidad que los gobiernos posrevolucionarios sufrieron en los años setenta y principios de los ochenta. *Y de la misma forma, es imprescindible reconocer que la acción emprendida por los empresarios a través del discurso de sus organizaciones empresariales es fundamental para legitimar al proyecto neoliberal, desde su instauración en 1982 hasta el despunte del nuevo siglo.*

Como todo discurso político, la significación de la presencia de las *organizaciones empresariales en los medios de difusión masiva es reflejo de lo que acontece en la coyuntura*, de tal manera que ésta queda a expensas de las alusiones discursivas de los principales actores. *La opinión pública atiende los escenarios por la teatralidad de un ritual político que solo adquiere forma a través del discurso de los contendientes del poder, dado el papel que juega la comunicación en el la reproducción del nuevo espacio público.* En esa lógica, son las diferentes unidades de operación las que permiten comprender la cultura de los diferentes actores políticos, quienes irrumpen en el escenario nacional a través de su presencia en los medios de comunicación, de su discurso que así se hace público y se incorpora a la agenda nacional que adquiere forma a partir de problemas que jerárquicamente ocupan ese espacio en la toma de decisiones de las elites gubernamentales. Lo cual solo comprueba la importancia de la comunicación política en el marco de la política moderna.

Como podremos observar, el discurso de las organizaciones empresariales en 1985, y la serie, 1993-1997, dan cuenta de la cobertura que tiene el proyecto neoliberal, el cual expresa su diversidad a través de la aplicación de una política económica que va respondiendo progresivamente a las demandas empresariales. Si este es el caso, vale considerar la ampliación del discurso empresarial que desde 1993 adquiere la complejidad suficiente para legitimar al modelo neoliberal en boga. Pero sobre todo, *por lo que toca a reconocer a un sistema político como un sistema de toma de decisiones, el discurso de las organizaciones empresariales proyecta las demandas específicas que un sector social*

*presenta, en el espacio público, a los tomadores de decisiones.* Por lo cual, su consideración en el proyecto de nación legitima un modelo económico que coadyuva a una mayor concentración de la riqueza. En la lógica sistémica, el discurso político de los diferentes actores representa la *entrada*, mientras las políticas que cada gobierno adopta, representa las *salidas* del sistema de toma de decisiones. La reproducción sistémica de la naturaleza energética de todo proceso político, así como sus implicaciones simbólicas y su expresión, explican la pertinencia antropológica de tal interpretación (Adams, 2001, 1983; Luhmann, 1991; Easton, 1989; Deutsch, 1985).

Esto se contempla en la propuesta analítica que Rivière tiene sobre la política: *La política combina tres principios de actividad: 1) el debate público que ejercitan los profesionales de la política y los partidos, 2) la administración de una colectividad, y 3) la comunicación y la expresión de los medios de comunicación* (Rivière, 2005: 49).

Como se observará, el discurso empresarial se inscribe en el marco del debate público, vinculándose ideológica y políticamente a los partidos; hace referencia a las formas de gobierno, intentando hacer valer no solo sus puntos de vista, sino las demandas concretas que el sector social al que pertenece presenta al Estado, y evidentemente, es expresión de la comunicación que toda sociedad, y por tanto, todo sistema político requiere para su reproducción, expresándose forzosamente a través de los medios de difusión que dan forma al nuevo espacio público en el que adquiere forma el debate público de nuestra modernidad.

Por otra parte, consideramos el planteamiento de Tirado (1994) sobre las formas de participación política del empresariado para tratar de influir en los asuntos públicos, como es el caso de: 1) La intervención individual de los empresarios más poderosos del país, a lo que el llama el “derecho de picaporte” y que sugiere la capacidad que tienen estos empresarios para comunicarse directamente con cualquier funcionario público que tiene el poder de decisión; 2) A la intervención colectiva que los empresarios hacen a través de las principales organizaciones empresariales, considerando que este instrumento político es el único mecanismo viable para que sus demandas sean consideradas en las decisiones gubernamentales, y 3) La “intervención individual del empresario que pretende incidir, de alguna forma en la opinión pública”. Evidentemente, en esta investigación se privilegia el papel político que juegan las organizaciones empresariales, pero la misma investigación y las propias exigencias que impone la antropología nos lleva a presentar los testimonios de

poderosos y muy comunes empresarios, que también son parte de la teatralidad de la política moderna.

Así, el trazo del discurso empresarial en la década de los noventa nos permite comprobar la madurez política de un actor que asumió su papel histórico, y que al contar con una fuente sustancial del poder, el control de los recursos económicos, demostraría más tarde su capacidad para escalar las estructuras de poder hasta llegar al nivel más alto del sistema político mexicano: la presidencia de la República.

En las páginas siguientes se presentará el *discurso de algunas organizaciones empresariales* más importantes del país y en el anexo se incorpora *el discurso de distinguidos empresarios* que evidentemente detentan el poder o que han fungido como líderes formales de ese sector social, así como el *discurso de empresarios comunes* que irremediablemente aparecen como una posible expresión de la *opinión pública*. No obstante en el último caso, se trata de comprobar la gran heterogeneidad del sector empresarial, así como la gran diversidad de expresiones que obligan a reconocer las contradicciones que el proyecto neoliberal genera al interior del propio sector empresarial.

En el primer caso se utilizó el método estadístico para ordenar el discurso de las organizaciones empresariales, distinguiendo tanto la intensidad de su presencia en los medios impresos, como las variables que toma al paso de la transición. En el segundo caso que se agrega en el anexo, se recurrió, por una parte, a biografías publicadas sobre 3 grandes empresarios, y por otra, a entrevistas a profundidad realizadas a un líder y a un exlíder de organizaciones empresariales. En el mismo anexo, se recurrió al trabajo etnográfico con el afán de dar cuenta de cinco trayectorias empresariales de empresarios que no gozan de una posición de poder dentro del sistema político mexicano.

#### 4.1 *El discurso de las organizaciones empresariales.*

Como se ha observado en el apretado trazo histórico sobre el papel que juegan los empresarios en la reproducción del sistema político mexicano, su participación formal ha girado en torno al discurso que sus principales organizaciones colocan en los medios de difusión masiva, particularmente, en la prensa con cobertura nacional. Ahora nos interesa analizar las diferentes posiciones político-ideológico de las principales organizaciones

empresariales, como es el caso del CCE, la COPARMEX, la CONCAMIN, la CANACINTRA y la CONCANACO. Se trata de organizaciones empresariales que tradicionalmente, desde su fundación, han tenido una progresiva presencia en el espacio público, y por tanto, aparecen discutiendo cuestiones de interés para la actividad económica, política y cultural.<sup>1</sup> En ese sentido, la importancia de fijar la atención en el discurso de estas organizaciones empresariales radica en el significado de clase que tienen esas instancias políticas. A través de ellas se hace posible observar cómo los empresarios actúan colectivamente en la política, sin que ello excluya la negociación individual ni la participación partidaria a las que se refiere Tirado (1984); simplemente, dichas organizaciones expresan sus posiciones políticas e ideológicas ante la realidad nacional, y en el mejor de los casos, los dota de la unidad política que requiere la contienda por el poder. Esto es, el papel que juega la *unidad de operación empresarial*, según la propuesta metodológica de Adams (1983).

En el discurso de las organizaciones empresariales es posible apreciar el proyecto de nación que este sector intentaba impulsar como representante de una clase social, dentro de un sistema político en el que no existe un partido propiamente empresarial, por lo que sus *demandas* son expresadas a través de las estructuras corporativas del sistema político mexicano, donde las organizaciones sectoriales de los propietarios del capital juegan un papel preponderante como referente legitimador del poder político. Pero estas agrupaciones tienen que ser vistas como *grupos de presión* y no sólo como *grupos de interés* como lo

---

<sup>1</sup> La *Confederación Nacional de Cámaras de Comercio* (Concanaco) se fundó en el año de 1917 por iniciativa de ley. La *Confederación Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos* (Concamin) se fundó en 1918 por iniciativa de ley. La *Asociación de Banqueros de México* (ABM) se fundó en 1928 por iniciativa de ley, su afiliación es obligatoria. La *Confederación Patronal de la República Mexicana* (Coparmex) se fundó en 1929 por iniciativa de empresarios regiomontanos, su afiliación es voluntaria y se define como un sindicato patronal. La *Cámara Nacional de la Industria de la Transformación* (Canacindra) se fundó en 1941, su afiliación es obligatoria. La *Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros* (Amis) se fundó en 1946 por iniciativa de ley, la afiliación es obligatoria. El *Consejo Mexicano de Hombres de Negocios* (CMHN) se fundó en 1962 por iniciativa empresarial, este organismo aglutinó por medio de invitación, a treinta de los capitalistas más importantes del país. El *Consejo Coordinador Empresarial* (CCE) se fundó en el año de 1975 por iniciativa empresarial, este organismo cúpula de cúpulas agrupa a la Concanaco, la Concamin, la Coparmex, la ABM (que con la expropiación fue sustituida por la *Asociación Mexicana de Casas de Bolsa - AMCB-*), *Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros* (AMIS), CMHN y el *Consejo Nacional Agropecuario* (CNA). Por ejemplo, para Dale Story las organizaciones empresariales mexicanas tienden a parecerse a las europeas, en su capacidad de influencia en la toma de decisiones. Con esto se reconoce la capacidad económica y política de los empresarios nacionales. Pero independientemente del comentario de Story, el rumbo que toma la nación demuestra el poder que los empresarios han ejercido tanto en la definición del modelo de desarrollo como en la importante tarea de legitimar a la tecnocracia que se encarga de impulsarlo.

sugiere Camp.<sup>2</sup> El grupo de interés si bien es apropiado para hacer referencia a la organización empresarial, en su concepto destaca más la cuestión de aglutinar en torno de un objetivo compartido; el *grupo de presión* implica la organización en torno a un interés común que justifica la acción política para hacer predominar sus intereses de clase sobre el de otros grupos (Rivière, 2005; Lardellier, 2003; Castillo Esparcia, 2005). Por lo tanto, subyace en dicho concepto la idea de identidad, que en su expresión política confiere a un grupo o clase social, la unidad requerida para diferenciarse de los otros, reconocer a los adversarios, a sus posibles aliados y le permite dar forma a un proyecto económico, político y social que constituya su oferta política. Tal imagen corresponde, entonces, a la compleja actuación política que Adams capta a través de su concepto de *unidad de operación*, figura con la cual se hace posible captar los movimientos de los actores sociales de un nivel estructural al otro. De su posición en la economía, el espacio público en el que se recrea de manera significativa la política, pero también la cultura.

Visto así, el discurso político de cualquier actor político significativo en un escenario nacional es un elemento indispensable para dar forma al modelo sistémico con que se intente explicar la reproducción de una sociedad en un periodo determinado de su historia, sobre todo si éste corresponde a un proceso de transición. En nuestro caso muy particular, el discurso de las organizaciones empresariales es lo suficientemente solvente para dar cuenta de un lapso muy importante de proceso de transición, y que en la lógica sistémica permite reconocer un importante aspecto de los intercambios entre el sistema y su ambiente. El sistema político particularmente que está abierto a las presiones de la sociedad a la que representa, cuya diversidad e impacto en la definición y toma de decisiones por parte de la elite gobernante determina la relación de entradas y salidas. De igual forma en el aspecto energético al que se refiere Adams, en cuanto al papel que tienen los actores en la

---

<sup>2</sup> Por ejemplo, las referencias que Camp considera sobre el CCE son realmente marginales, esto no es producto del olvido ni del descuido, sino de cifrar su confianza en lo que piensan individualmente grandes empresarios al calor de una entrevista. En el trabajo de este autor se encuentran referencias como las siguientes: "La exclusión de estos grupos (las organizaciones empresariales) hace que los empresarios vean su papel de modo enteramente diferente, creyendo que sus grupos de interés desempeñan un papel no político, en comparación con el papel de los grandes sindicatos" (P.. 164) Ni siquiera se molesta en cuestionar su concepto de "grupos de interés" para tratar a las organizaciones empresariales. Existen muchas afirmaciones como éstas, como en el párrafo de la p. 167 en el que Camp confirma la superioridad de los sindicatos en relación con las organizaciones empresariales. Si de alguna forma puede ser interesante este trabajo, es evidente que el autor no consideró el cambio en el escenario político mexicano, en el que prácticamente los trabajadores están borrados del mapa.

reproducción del poder, legitimando o deslegitimando a la autoridad encargada del poder, y por tanto, de tomar las decisiones que definen el rumbo de la nación. Así, el discurso político que en su esencia conlleva la ideología de clase, o toma posición respecto de la ideología dominante, representa el referente para que los miembros de una comunidad, clase o grupo social, construyan una identidad y por tanto, la unidad que todo actor político requiere para competir por el poder en el escenario público. En ese sentido, la importancia de la comunicación política no solo permite establecer el tipo de intercambios entre el sistema y su ambiente, rebasando lógicamente el papel que juega el flujo de información, sino que destaca la intencionalidad de los actores en cuanto a la estructura de poder. Hace evidente, por tanto, las estrategias que ellos han elegido para hacer valer sus intereses de clase en el proyecto de nación que impulsan los gobiernos en turno. Por lo tanto, la repetición, reiteración de los argumentos implícitos en los discursos políticos confirman tanto la identidad como la intencionalidad de los actores. Y para ello se ha optado, como parte del modelo analítico propuesto para analizar un segmento de la transición mexicana, por el análisis estadístico de discurso de las principales organizaciones empresariales cuyas variables sugieren y explican el sentido que adquiere este complejo proceso.

No obstante, la fuerza interpretativa de discurso político en la lógica del modelo sistémico-energético aquí propuesto, está determinado por su significado histórico que solo se hace comprensible si se establece una relación causal expresada temporalmente. Esto es, en la medida que permite reconocer al presente como producto del pasado, en la medida que se capta la tendencia del proceso social y se hace posible deducir, cuando menos, el advenimiento del futuro inmediato.

Por otra parte, la comunicación política que se observa en la forma y constancia del discurso de las organizaciones empresariales da cuenta de sus estrategias políticas para relacionarse con las elites gobernantes, de su proceso de aprendizaje de lo político que le permite consolidar su posición en las altas esferas del poder, influyendo visiblemente en la definición de las políticas económicas y como referente de una opinión pública que se coloca a la derecha del mapa político. De ahí las coincidencias con la ideología del Partido Acción Nacional y la tecnocracia que llega al poder desde 1982.

#### 4. 1. 1 *El discurso empresarial en 1985.*

A continuación presentamos el análisis del discurso de las principales organizaciones empresariales en el año de 1985, con el propósito de analizarlo desde la perspectiva de la cultura política empresarial que plasma su alternativa en la coyuntura política, económica y social que vive el país en esos momentos. Se eligió el discurso de ese año, pues llamaba la atención que a pesar de los avances en la implementación del nuevo modelo económico que el gobierno de De la Madrid inició en 1982, no convencía al sector empresarial respecto a que las decisiones gubernamentales iban en pleno sentido de sus demandas sectoriales. Más aún, a mediados de esa gestión, se advertía un ambiente político de linchamiento empresarial en contra de prácticas políticas de gobiernos anteriores a De la Madrid, sin hacer énfasis en las diferencias existentes entre los gobiernos posrevolucionarios y ese gobierno tecnocrático. Simplemente los empresarios demandaban con demasiado encono el avanzar el proceso de modernización prometido por De la Madrid.

En ese contexto, se eligió al periódico *La Jornada*, del cual se extrajo y se analizó el total de declaraciones de organizaciones empresariales. De tal manera que el *discurso empresarial* fue organizado en *tablas de frecuencia* a partir de las cuales se apreciará la incidencia de las diferentes organizaciones empresariales en la prensa nacional, y por tanto, sugiere la influencia en la opinión pública.

En el primer cuadro se observa la incidencia en la prensa nacional que el discurso de las organizaciones empresariales tuvo en 1985. Aquí es significativa, primero que este actor político tuvo una presencia casi diaria en la prensa nacional (un total de 301 declaraciones), de lo cual destaca el papel de la CANACINTRA que suma 19.2 % y si consideramos la participación de su representación regional (CAINTRA, 9.9 %), su presencia llega a 29.1%.

**Presencia de las organizaciones empresariales  
en la prensa, 1985.**

Organizaciones	Declaraciones	Porcentaje
Coparmex	41	13.6%
CCE	20	6.6%
Concanaco	47	15.6%
Canaco	43	14.3%
Canacintra	58	19.2%
Caintra	30	9.9%
Concamin	35	11.6%
Otras	27	9.0%
<b>Total</b>	<b>301</b>	<b>100.0%</b>

Elaboración propia a partir del periódico *La Jornada*.

De la misma forma debemos considerar la presencia de la CONCANACO con un 15.6%, la que con la participación de sus representaciones regionales (CANACO, 14.3 %) alcanza el 29.9 %. Esto es que CANCINTRA y CONCANACO alcanzan el 59 % del total del discurso empresarial. De manera contraria, a pesar de la importancia del CCE, solo tuvo una presencia de 6.6 %, la menor incidencia comparada con el resto de las organizaciones empresariales, pues la COPARMEX duplica su presencia en relación al CCE. Mientras la CONCAMIN, casi la duplica. Esto sugiere que la estructura sectorial que los empresarios adquieren a través de la creación del CCE en 1975, no significa que el resto de las organizaciones que la componen tengan que sujetarse al liderazgo de éste en los medios de difusión masiva, pues su propio nombre lo sugiere, fue creado para coordinar al sector empresarial

En la siguiente *tabla de frecuencia* identifica las diversidad que adquiere el discurso empresarial: *Censura, Demanda, Ideológico- político, Gatt y economía* (que hoy sería TLC y economía), *Apoyo* y otros. Desde el *discurso general de las organizaciones empresariales* se puede apreciar como éstas presionaban al Estado al *censurar* las medidas adoptadas por la elite política y al demandar lo que ellas juzgaban pertinente para resolver la crisis que ya

se hacía evidente, aunque el proyecto de nación empresarial ya avanzaba bajo la propia dirección del Estado. A los empresarios no sólo les preocupaba la implementación de las medidas, sino también los tiempos necesarios para concretar las decisiones gubernamentales.

***Diversidad discursiva de las organizaciones empresariales en la prensa nacional, 1985.***

<b>Organización</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>Total</b>
Discurso empresarial	29 %	21 %	15 %	16 %	15 %	3 %	100.0%
Coparmex	32 %	18 %	29 %	4 %	18 %	4 %	100.0%
CCE	21 %	32 %	11 %	14 %	14 %	7 %	100.0%
Concancaco	32 %	11 %	25 %	11 %	19 %	4 %	100.0%
Canaco	35 %	24 %	8 %	20 %	8 %	6 %	100.0%
Canacintra	20 %	14 %	10 %	29 %	22 %	4 %	100.0%
Caintra	35 %	30 %	13 %	10 %	12 %	-	100.0%
Concamin	23 %	27 %	11 %	20 %	16 %	3 %	100.0%
Otras	37 %	29 %	8 %	21 %	5 %	-	100.0%

Elaboración propia con información extraída del periódico *La Jornada*. Los porcentajes no necesariamente cuadran al 100 %, por la cuestión de los ajustes decimales.

- Variables**
- A) Censura**
  - B) Demandas**
  - C) Ideológico- Político**
  - D) Gatt y Economía**
  - E) Apoyo**
  - F) Otros**

Otro comentario importante a la *tabla de variables del discurso empresarial* es lo concerniente a la presencia de la CANACO y CAINTRA, como dos discursos independientes a la CONCANACO y CANACINTRA. Es decir, de la representación regional de las cámaras nacionales. Esto se debe a que en la coyuntura de 1985, las cámaras regionales del norte del país se esforzaron por tener una presencia a nivel nacional. Ello refleja tres cuestiones: 1) las contradicciones al interior de las organizaciones, donde la representación nacional no necesariamente representa los intereses de ese sector empresarial, de igual forma para todas las regiones; 2) que las representaciones regionales CAINTRA (35% de su discurso dirigido a la *censura*) y CANACO (32 % de su discurso

dirigido a la *censura*) se muestran más radicalizadas que las representaciones nacionales, como es el ejemplo de tradicionalmente consideradas como radicales como es el caso de COPARMEX (32 % de su discurso dirigido a la *censura*), organización que a partir de su evidente vinculación con los empresarios del estado de Nuevo León fue identificada como representativa del *ala radical empresarial*; 3) que no es posible definir las posiciones empresariales, solamente a partir de la referencia "radical" y "moderada", pues la definición con que se quiere ubicar a una facción u organización empresarial se tendría que definir con base en su posición adoptada en cada coyuntura política. Esto es que las posiciones político-ideológicas que adoptan las organizaciones en el trayecto sociohistórico, particularmente en el periodo de la transición, demuestran que no son estáticas, sino que se adaptan a las condiciones que les brinda la coyuntura.

Pero es fundamental contemplar que en el *discurso total de las organizaciones empresariales*, la *censura* alcanza un 29 %, lo que marca su distancia hacia una posición no radicalizada o moderada del CCE (21 %) y CONCAMIN (23% dirigidos a la *censura*).

En las siguientes líneas pasamos a explicar brevemente cómo se descompone cada una de las variables en *subvariables*, para conocer de manera más específica lo que se *Censura, Demanda, Apoya* etc.

Respecto a la variable *Censura*, encontramos que en el discurso general de las organizaciones empresariales la crítica privilegió la crisis económica y las medidas económicas y/o fiscales inadecuadas, así como también el control de precios, el proceso electoral, la expropiación de los predios urbanos, la intervención estatal en la economía y otras (centralización, declaraciones de funcionarios, etc.). Cabe destacar como el discurso de COPARMEX dio mayor importancia a la cuestión de la crisis económica y al proceso electoral, lo mismo que el discurso de CAINTRA y CANACO incidió más en la crítica del proceso electoral dada la coyuntura electoral en el norte del país. Además de encontrar coincidencia en esa *subvariable* es importante identificar el predominio de los empresarios regiomontanos en esas organizaciones. El CCE centró su crítica en el problema de la expropiación de los predios en el Distrito Federal, retomando la oportunidad para censurar la expropiación de la banca.

*Aspectos que Censuran las organizaciones empresariales, prensa nacional 1985.*

<b>Organización</b>	<b>a.1</b>	<b>a.2</b>	<b>a.3</b>	<b>a.4</b>	<b>a.5</b>	<b>a.6</b>	<b>a.7</b>
Discurso empresarial	30 %	28 %	9 %	13 %	11 %	9 %	12 %
Coparmex	22 %	22 %	6 %	22 %	11 %	22 %	-
CCE	33 %	17 %	-	-	50 %	-	-
Concancaco	28 %	18 %	17 %	-	11 %	22 %	6 %
Canaco	- %	28 %	17 %	39 %	22 %	11 %	11 %
Canacintra	57 %	29 %	-	7 %	7 %	-	7 %
Caintra	21 %	21 %	-	36 %	14 %	-	21 %
Concamin	50 %	40 %	10 %	-	-	10 %	10 %
Otras	36 %	36 %	14 %	14 %	7 %	7 %	7 %

\* Elaboración propia con información de *La Jornada*. Los porcentajes de las subvariables pueden exceder el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más subvariables.

- Subvariables**
- a.1) La crisis económica**
  - a.2) Medidas económicas y fiscales**
  - a.3) Control de precios**
  - a.4) Proceso electoral**
  - a.5) Expropiación de los predios urbanos**
  - a.6) La intervención estatal en la economía**
  - a.7) Otros (centralismo, declaraciones, etc.)**

Respecto a la variable *Demanda* cabe destacar que las organizaciones empresariales delimitan aquí el campo del modelo económico que demandaban a la elite política para definir un proyecto de nación más solvente que el “populista”. Las demandas empresariales dibujaron los rasgos del proyecto neoliberal que terminaría de aplicarse a profundidad en el sexenio de Salinas de Gortari. Esto demuestra, entonces, a partir de sus diferentes instrumentos de presión donde evidentemente cuenta el económico, que los empresarios tuvieron la capacidad política de hacer coincidir su proyecto de clase con el nuevo modelo económico que implementó la *tecnocracia*, específicamente en el plano económico. En términos generales los empresarios nacionales demandaron en el año de 1985 *austeridad y ajuste presupuestario, liberación de precios y el comercio, apoyo financiero y/o fiscal, reprivatización de la economía, salarios moderados e implementación de medidas económicas y/o fiscales*. Es importante destacar como las demandas caen fundamentalmente en el rubro de la reprivatización de la economía, puesto que como ya

habíamos visto, el recorte presupuestario y la política de tope salarial eran ya un hecho que se venía concretando, aunque no en las dimensiones y tiempos que requerían los empresarios.

***Demandas de las Organizaciones empresariales planteadas al gobierno,  
prensa nacional 1985***

<b>Organización</b>	<b>b.1</b>	<b>b.2</b>	<b>b.3</b>	<b>b.4</b>	<b>b.5</b>	<b>b.6</b>
Discurso empresarial	48 %	17 %	27 %	17 %	15 %	7 %
Coparmex	50 %	10 %	10 %	20 %	30 %	10 %
CCE	33 %	44 %	11 %	33 %	22 %	11 %
Concancaco	33 %	17 %	33 %	17 %	- %	-
Canaco	75 %	33 %	8 %	25 %	25 %	-
Canacintra	40 %	10 %	40 %	-	20 %	10 %
Caintra	75 %	8 %	35 %	25 %	-	-
Concamin	17 %	8 %	58 %	-	-	17 %
Otras	45 %	9 %	18 %	18 %	18 %	9 %

\*Elaboración propia con información de *La Jornada*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más subvariables.

- Subvariables**
- b.1) Austeridad y ajuste presupuestario**
  - b.2) Liberación de precios y comercio**
  - b.3) Apoyo financiero, fiscal y/o con infraestructura**
  - b.4) Reprivatización de la economía**
  - b.5) Salarios Moderados**
  - b.6) Implementación de medidas económicas, fiscales, etc.**

En cuanto a la variable *Ideológico-político*, el *discurso general de las organizaciones empresariales* se dirigió a externar su posición sobre el papel de los empresarios, y en llamar al consenso social, sobre la importancia de la democracia y la participación política, así como sobre lo negativo del marxismo y/o comunismo. Lo que llama la atención en esta variable del *discurso empresarial* es cómo la COPARMEX, el CCE y la CANACINTRA, la CAINTRA y la CANACO, priorizan la importancia que tiene el papel del empresario. En este año se advierte como los empresarios además de tener una unidad ideológica van tomando conciencia de la importancia social que tiene su participación económica y política. También destaca la necesidad de CONCANACO y

CONCAMIN en hacer llamados al consenso social. La tijera se cerraba, las organizaciones empresariales generaban *corrientes de opinión* a partir de su presencia en la prensa, su presencia en la sociedad a partir de asociaciones civiles y su abierta participación en el PAN, que ya era muy importante.

***Perspectivas ideológico-políticas de las organizaciones empresariales, prensa nacional 1985***

<b>Organización</b>	<b>c.1</b>	<b>c.2</b>	<b>c.3</b>	<b>c.4</b>	<b>c.5</b>
Discurso empresarial	42 %	32 %	11 %	12 %	5 %
Coparmex	50 %	19 %	12 %	19 %	6 %
CCE	34 %	-	33 %	33 %	-
Concancaco	43 %	50 %	7 %	-	-
Canaco	57 %	43 %	14 %	-	-
Canacindra	57 %	43 %	14 %	-	-
Caintra	40 %	20 %	20 %	20 %	-
Concamin	20 %	80 %	-	-	-
Otras	-	-	-	67 %	33 %

Elaboración propia con información de La Jornada. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues una declaración puede hacer alusión a una o más subvariables.

- Subvariables:**
- c.1) Sobre el papel del empresario**
  - c.2) Llamado al consenso social**
  - c.3) Democracia y participación política**
  - c.4) Sobre lo negativo del marxismo y/o comunismo/socialismo**
  - c.5) Otros**

En la siguiente tabla, se observa cómo en la variable *Gatt y economía*, el discurso empresarial apunta a la *conveniencia de ingresar al Gatt, la negativa al ingreso, lo riesgoso del ingreso, opiniones sobre la deuda externa, el pronóstico de mayor crisis, información sobre la economía nacional e internacional*. Lo curioso es ver como en este año las organizaciones empresariales todavía no se podían poner de acuerdo acerca de la conveniencia de incorporarse al Gatt. Para la COPARMEX el tema ni siquiera fue blanco de atención; para el CCE no había la menor duda de la conveniencia de firmar el convenio, la CONCANACO y la CAINTRA variaron su posición entre la conveniencia y lo riesgoso

del convenio, la CANACO y la CONCAMIN la variaron en las tres alternativas mientras que la CANACINTRA se pronunció por el no ingreso y lo riesgoso que éste podría resultar.

**Evaluación de las organizaciones empresariales sobre el GATT y la economía,  
prensa nacional, 1985.**

<b>Organización</b>	<b>d.1</b>	<b>d.2</b>	<b>d.3</b>	<b>d.4</b>	<b>d.5</b>	<b>d.6</b>	<b>d.7</b>	<b>d.8</b>
Discurso empresarial	10 %	17 %	19 %	16 %	14 %	19 %	5 %	8 %
Coparmex	-	-	-	100 %	-	-	-	-
CCE	25 %	-	-	25 %	-	50 %	-	-
Concancaco	33 %	-	17 %	-	17 %	17 %	17 %	17 %
Canaco	10 %	10 %	10 %	20 %	10 %	-	-	30 %
Canacintra	-	40 %	20 %	15 %	5 %	25 %	-	5 %
Caintra	25 %	-	25 %	25 %	25 %	-	-	-
Concamin	11 %	11 %	56 %	11 %	22 %	11 %	-	-
Otras	-	13 %	-	-	37 %	37 %	13 %	-

Elaboración propia con información de *La Jornada*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más subvariables.

**Subvariables:**

- d.1) Conviene ingresar al GATT**
- d.2) No al ingreso al GATT**
- d.3) Riesgoso entrar al GATT**
- d.4) Opinión sobre la deuda externa**
- d.5) Se pronostica mayor crisis**
- d.6) Información sobre la situación económica**
- d.7) Se opina sobre la economía internacional**
- d.8) Otros.**

Tal diferencia, sobre todo el contraste entre COPARMEX y CANACINTRA, obedece a que se trata de un tema muy sensible para la segunda, dado que el sector empresarial al cual representa está constituido por los sectores industriales más afectados por la apertura económica: medianos, pequeños y micro empresarios.

En la siguiente tabla se observa el papel que juega la variable *Apoyo* como elemento del discurso político de las organizaciones empresariales. Destaca aquí, los aspectos de las decisiones gubernamentales que ellos apoyan: *la incorporación de medidas que*

constantemente estaban demandando, se trata de la austeridad y ajuste presupuestario, la reprivatización de la economía y medidas económicas.

***Apoyo de las organizaciones empresariales al gobierno,  
prensa nacional, 1985.***

<b>Organización</b>	<b>e.1</b>	<b>e.2</b>	<b>e.3</b>
Discurso empresarial	41 %	18 %	41 %
Coparmex	40 %	20 %	40 %
CCE	25 %	-	75 %
Concancaco	31 %	16 %	53 %
Canaco	60 %	-	40 %
Canacindra	38 %	19 %	43 %
Caintra	50 %	16 %	34 %
Concamin	45 %	22 %	33 %
Otras	67 %	33 %	-

Elaboración propia con información de *La Jornada*.

- Subvariables.**
- e.1) Austeridad y ajuste presupuestario**
  - e.2) Reprivatización de la economía**
  - e.3) Medidas económicas, políticas y sociales**

Es muy importante observar en la tabla que muestra los *apoyos* que las organizaciones empresariales brindan a la gestión gubernamental, pues es evidente que expresa el beneplácito de los empresarios por medidas adoptadas por el primer gobierno tecnocrático, el de De la Madrid (1982-1988). Se trata del *apoyo* que públicamente brinda el sector empresarial a la instauración progresiva del modelo neoliberal que coincide, casi totalmente, con el tipo de proyecto económico que demandan los empresarios a través del discurso político de sus organizaciones.

En nuestra opinión se trata de una acción política que marca el inicio de una estrategia empresarial para legitimar el proyecto económico que la tecnocracia impulsa, por lo tanto, de legitimar a esa clase política que coincide con la ideología empresarial. No obstante, cabe destacar que se trata de la coyuntura de 1985, a mediados del gobierno de De la Madrid, y que el apoyo que brindan a ese gobierno solo representa en el discurso de las organizaciones empresariales el 15% del total. Situación que contrasta con la crítica que

hacen a esa misma gestión gubernamental (29 %), lo que refleja que la recuperación de la confianza empresarial en el gobierno mexicano, no se dio mecánicamente al tiempo que el ejecutivo expresaba la nueva racionalidad del Estado, que explicarán la implementación de un nuevo modelo económico que colmaba prácticamente todas las demandas que la clase empresarial hacía a las elites gobernantes.

En las siguientes tablas se intenta mostrar la composición regional de las organizaciones que resultaron con posiciones más radicales en contra del gobierno mexicano, como es el caso de CANACO, CAINTRA y OTRAS ORGANIZACIONES. Pues en la tabla referente a las variables que adquiere el discurso de las organizaciones empresariales, las dos primeras aparecen ocupando el 35 % de su espacio en la prensa nacional, para criticar las decisiones gubernamentales, mientras las OTRAS ORGANIZACIONES, ocuparon el 37 % de su discurso político para manifestar su crítica al gobierno mexicano.

Visto así, cabe destacar que en los tres casos, predomina la representación regional del estado de Nuevo León, donde se encuentra en esos momentos los empresarios más importantes del país. Mismos que entablaron fuertes confrontaciones con diferentes gobiernos posrevolucionarios. Ello solo comprueba que la radicalidad empresarial en contra del estado, en esos momentos, claramente proviene de las organizaciones afines a los intereses e influencias de estos empresarios.

***Organizaciones empresariales más radicales,  
el caso de la CANACO.***

<b><i>CANACO</i></b>	Declaraciones	Porcentaje
Nuevo León	22	52 %
Cd. de México	13	30 %
Acapulco	3	7 %
Chiapas	1	2 %
Tamaulipas	1	2 %
Jalisco	3	7 %
<b>Total</b>	43	100.0%

Elaboración propia con información de *La Jornada*.

***Organizaciones empresariales más radicales,  
el caso de la CAINTRA.***

<b>CAINTRA</b>	Declaraciones	Porcentaje
Nuevo León	29	97 %
Jalisco	1	3 %
<b>Total</b>	30	100.0%

Elaboración propia con información de *La Jornada*.

***Organizaciones empresariales más radicales.***

<b>OTRAS ORGANIZACIONES</b>	Declaraciones	Porcentaje
CPNL*	13	48 %
CEESP**	7	26 %
CONACEX	2	7 %
CPS	2	8 %
CEMAI	3	11 %
<b>Total</b>	27	100 %

Elaboración propia con información de *La Jornada*.

\* Centro Patronal de Nuevo León, representación patronal de COPARMEX.

\*\* Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, del CCE.

Como se ha observado, la utilización del discurso de las organizaciones empresariales tiene que ser vista en el contexto del período histórico de la transición mexicana. En éste se plasman las aspiraciones de la burguesía nacional, las cuales reflejan el quehacer político concreto del actor que la personifica: el empresario. En ese sentido, el discurso empresarial en 1985 funge como parteaguas en el cual se distingue una maduración política del sector empresarial en virtud del actuar global de sus organizaciones, y no sólo por el hecho de converger en el CCE (organismo en el cual la

CANACINTRA tiene voz, pero no voto). Por otra parte, sugiere, cuando menos, que *el Estado incorporó las demandas empresariales en el proyecto económico de la nación, sino se quiere aceptar que los empresarios lograron imponer su proyecto al resto de la sociedad*. El objetivo de esta investigación fue analizar el discurso político de las organizaciones empresariales (el discurso de la clase dominante) como práctica de una clase que compite los principales actores políticos en el proceso de la transición mexicana, como expresión de la cultura política que los empresarios van redefiniendo a lo largo del tiempo, después de definido el sistema político que privó desde finales de los años treinta.

#### *4.1.2 La reconstrucción del discurso empresarial de 1985.*

Dado que el primer ensayo sobre el tratamiento metodológico del discurso político de las organizaciones empresariales que proponemos para probar la pertinencia de un modelo sistémico que explique la naturaleza del proceso de transición mexicana, es el discurso de 1985. Y que por cuestiones de espacio es imposible hacer lo mismo con todos los años que posteriormente se presentarán, a continuación realizamos un ejercicio de reconstrucción de las comunicaciones explícitas que sustentan la presentación estadística del discurso empresarial, que en esta investigación constituye el objetivo central dado que sin este instrumento sería prácticamente imposible generar una interpretación de carácter sistémica-energética. Los ejemplos a lo que vamos a recurrir para reforzar la pertinencia de nuestro modelo interpretativo y el papel que en éste juega la comunicación política, son el discurso de COPARMEX, CCE y CANACO. Se trata de considerar las especificidades del discurso de las organizaciones empresariales, que si bien revelan aspectos de la identidad ideológica de los actores que construyen colectivamente su discurso para insertarlo en el nuevo espacio público, también expresan cuestiones específicas del sector al que representan o a la coyuntura en la que fueron fundadas.

*El discurso de la COPARMEX, 1985.*

Ahora se trata de presentar ejemplos significativos de las variables y subvariables del discurso que la COPARMEX, con el afán de mostrar la complejidad que encierra los datos estadísticos que presentamos al analizar las tablas generales que recogen el discurso de las principales organizaciones empresariales. En el caso de la Variable “Censura”, según la tabla correspondiente, la COPARMEX se manifestó de la siguiente manera:

a.1	22%	a.5	6%
a.2	22%	a.6	11%
a.3	6%	a.7	22%
a.4	22%		

Los aspectos más censurados por la COPARMEX en esta variable, y que hecho es la que adquiere mayor relevancia para esta organización, son:

a.1 *La crisis económica.*

“Es de todos conocido que nuestro país se encuentra en plena crisis y que sus causas obedecen a las desacertadas decisiones tomadas por las administraciones públicas especialmente las dos anteriores (1979-1976; 1976-1982).

Sinteticemos los rubros principales de la crisis:

- 1.- Estancamiento de la economía y cuellos de botella en materia de infraestructura.
- 2.- Disminución de la importancia relativa del empresario en la actividad económica del país.
- 3.- Desequilibrio entre el incremento demográfico y la creación de empleos.
- 4.- Contaminación marxista en sindicatos y universidades.
- 5.- Peligroso desequilibrio de la relación entre sociedad y gobierno.
- 6.- Burocratismo “asfixiante”, consecuencia de la creciente estatificación.

México solo podrá superar la crisis por la que atraviesa si se crean las condiciones propicias para que los particulares recobren su erosionada confianza y, como consecuencia de ello, realicen inversiones masivas a lo largo y ancho de nuestro país (Coparmex, 1985).

a.2 *Medidas económicas y/o Fiscales.*

“La descapitalización de las empresas por sistemas fiscales equivocados o por impuestos excesivos, atenta contra el empleo a mediano plazo. La inversión, la generación de riqueza y la creación de fuentes de trabajo tienen como condición indispensable la confianza en políticas económicas estables y un marco jurídico y político que estimule la libertad de emprender” dijo ante empresarios de Quintana Roo el presidente de la COPARMEX, Alfredo Sandoval González (*La Jornada*, 19 de noviembre de 1985).

a.4 *Proceso electoral.*

“La expresión presidencial de que hay minorías confusas y reaccionarias externadas en un discurso el día 9 de julio ha dejado una gran intranquilidad en todo el sector empresarial, afirmó el presidente de la COPARMEX, Alfredo Sandoval González, quien dijo que las elecciones federales, por sus resultados, en nada ayudaron a la recuperación de la confianza hacia las instituciones.

Sandoval González hizo comentarios en torno a los comicios del 7 de julio pasado. Calificó el abultamiento del padrón como un agravio en contra de la sociedad mexicana” (*La Jornada*, 20 de julio de 1985).

a.7 *Otros (centralismo, declaraciones, etc...).*

“La COPARMEX aseguró ayer que tiene datos suficientes para demostrar que altos funcionarios federales conminaron a empresarios para que coparticipen en política, pero ha decidido abstenerse de difundirlos a la opinión pública, pues el organismo patronal considera haber logrado su objetivo de preservar la libertad y no involucrará a las personas que fueron sujetas a presiones en una polémica pública” (*La Jornada*, 15 de noviembre, 1985).

a.6 *La intervención estatal en la economía.*

“En cuanto a la intervención privada, el dirigente de COPARMEX comentó que en el primer bimestre del año no ha sido lo suficientemente satisfactoria porque aún no están dadas las condiciones para estimularla. Básicamente el problema es la disponibilidad del capital, pues por un lado el crédito bancario es caro y escaso y, por otro, no hay suficiente demanda de los consumidores.

Se hace labor en el gobierno para reconocer algunos puntos, por ejemplo, coartar el intervencionismo del Estado y reconocer que no se necesitan actitudes dogmáticas” (*La Jornada*, 3 de mayo de 1985).

### a.3 *Control de precios.*

“En otro punto, Sandoval González manifestó que después de 12 años de distorsiones el actual gobierno ha reconocido muchos aspectos económicos que se desconocieron por decreto: uno de ellos, el juego de la oferta y la demanda. Debe aceptarse que la economía de mercado es la única que permitirá salir al país” (*La Jornada*, 3 de mayo de 1985).

En el discurso de la COPARMEX la variable “Demanda” se estructuró, según la tabla correspondiente, de la siguiente manera:

b.1	50%	b.4	20%
b.2	10%	b.5	30%
b.3	10%	b.6	10%

### b.1 *Austeridad y ajuste presupuestario.*

“El ahorro estatal logrado con el despido de trabajadores gubernamentales de confianza no es tan grande como parecía a primera vista, y por ello es necesario el despido de otros 400 mil empleados, que representan de 15 a 20% de personal de base, estimó el presidente de la COPARMEX” (*La Jornada*, 7 de mayo de 1985)

“Nos guste o no nos guste la austeridad es la medicina que hay que seguir tomando. Declaró el presidente de la COPARMEX” (*La Jornada*, 3 de mayo de 1985).

### b.5 *Salarios moderados.*

“El presidente de la COPARMEX rechazó que deban incrementarse los salarios porque estos deben estar basados en términos de posibilidad e imposibilidad, y no en términos de justicia o injusticia. Ahora no pueden otorgarse y ese es el dolor que hay que pagar por la locura histórica del sexenio pasado llamada 10, 20, 30, y que fue fundamental para la crisis actual” (*La Jornada*, 7 de mayo de 1985).

“La situación económica del país ha mejorado levemente en el renglón de las finanzas públicas por el acierto en la renegociación de la deuda externa, porque se está controlando mejor el gasto público y porque los aumentos salariales fueron bajos” (Coparmex, 1985).

b.4 *Reprivatización de lo economía.*

“El presidente de la COPARMEX, por su lado, dijo que para redimensionar el gasto corriente que está desproporcionado respecto a la realidad económica nacional, es necesario poner en venta las empresas del Estado” (*La Jornada*, 26 de julio de 1985).

b.2 *Liberación de precios y el comercio.*

“La eliminación de los permisos previos de importación, dijo en conferencia de prensa el presidente de la COPARMEX, por si sola es negativa porque podría producir el cierre de muchas empresas que no están en condiciones de competir con productos manufacturados procedentes del exterior; por esto una manera de enfrentar esta competencia sería la liberación de precios” (*La Jornada*, 26 de julio de 1985).

b.3 *Apoyo financiero, fiscal y/o con infraestructura.*

“Si es verdad que se quiere que todos participemos, si es verdad que se requiere restablecer la credibilidad y la confianza en el gobierno, debe revocarse la resolución que obliga a incluir el IVA en el precio final, pues esta disposición va en deterioro de los buenos propósitos” (*La Jornada*, 24 de julio de 1985).

b.6 *Implementación de medidas económicas, fiscales, etc....*

“La cúpula empresarial recibió con frialdad las medidas adoptadas por el gobierno federal para enfrentar el recrudecimiento de la crisis. El presidente de la COPARMEX afirmó que estas fueron adoptadas tardíamente en demandar liberación de precios ante la apertura del mercado nacional a los productos extranjeros, en solicitar la venta masiva de paraestatales y en pedir la reducción de los impuestos fiscales” (*La Jornada*, 26 de julio de 1985).

En el discurso de COPARMEX la variable “Ideológica-política” se manifestó, según la tabla correspondiente, de la siguiente manera:

c.1	50%	c.4	19%
c.2	19%	c.5	6%
c.3	12%		

c.1 *Sobre el papel del empresario.*

“Ante los hechos consumados de la estatización bancaria, el despojo de los mex-dólares, y de los cambios constitucionales sobre rectoría económica y del estado –la división de los mexicanos sector social y privado- no tenemos más alternativa que establecer el equilibrio, fortalecer y dignificar a la sociedad, es decir, que la acción de los particulares recobre la pujanza que la caracterizaba y que aún estamos a tiempo de hacer renacer....” (Coparmex, 1985).

c.4 *Llamado al consenso social.*

“Es el momento de formar una genuina solidaridad nacional fundada en el trabajo armónico de trabajadores, gobierno y empresario, que tienda a desarraigar el concepto esterilizante y destructor de la lucha de clases” (Coparmex, 1985).

c.4 *Sobre lo negativo del marxismo y/o comunismo, socialismo.*

“Si hoy vivimos la amenaza del socialismo en el país, esto es consecuencia de décadas de una presencia socializante en el sistema educativo que, por lo demás, no debe sorprendernos cuando hemos hecho todo lo necesario para impedirlo” (Coparmex, 1985).

c.3 *Democracia y participación política.*

“Categorícamente este sindicato no tiene como función propia actuar en la política de partidos. Pero en cambio, si le corresponde influir en el ámbito de la política económica, empresarial, de la sociedad y, sobre todo, en la política del bien común. Los ámbitos político, económico y social están tan íntimamente ligados, que nuestra presencia y acción en lo socio-económico necesariamente tiene una repercusión política” (Coparmex, 1985).

c.5 *Otros.*

“En su discurso, la COPARMEX manifestó que la centralización en la vida sindical es otro factor que está dificultando la descentralización que todo el país requiere, y por ello expresó que la modernización en México requiere cambios en el ámbito laboral y por ende en los sindicatos y en las empresas” (*La Jornada*, 5 de agosto de 1985).

El en discurso de la COPARMEX, la variable “GATT y economía” se manifestó, según tabla correspondiente, de la siguiente manera:

d.1	-	d.5	-
d.2	-	d.6	-
d.3	-	d.7	-
d.4	100%	d.8	-

Donde se permite apreciar que el único aspecto de interés para esta organización empresarial por esta variable, fue lo referente al problema de la deuda externa, que según el conjunto de esas organizaciones habría de pagarse.

d.4 *Opinión sobre la deuda externa.*

“La COPARMEX también acordó el tema de la deuda externa, al señalar que aún cuando se hubiera hecho mal uso o aplicación de los recursos obtenidos en préstamo, México debe pagar esa deuda.

Quienes se beneficiaron del endeudamiento son unas cuantas familias que andan viajando por Europa o viven en cárceles en los Estados Unidos. Si repudiamos el pago de la deuda, estamos repudiando nuestra capacidad de generar riqueza” (*La Jornada*, 7 de septiembre de 1985).

El discurso de la COPARMEX en la variable “Apoyo”, se expresó, según tabla correspondiente, de la siguiente manera:

e.1	50%	e.2	25%	e.3	50%
-----	-----	-----	-----	-----	-----

e.1 *Austeridad y ajuste presupuestario.*

“La COPARMEX hizo comentarios acerca del recorte presupuestario y manifestó que no fue de la proporción que se hubiera deseado, aunque el hecho en si es positivo. De la apertura comercial hacia el exterior, reiteró que debía ser no solo

para productos terminados sino para materias primas también, tanto de particulares como del gobierno” (*La Jornada*, 22 de junio de 1985).

e.3 *Medidas económicas, políticas y sociales.*

“Las reacciones en torno al proyecto del programa Integral al Comercio Exterior continúan. Alfredo Sandoval González, presidente de la COPARMEX, estimó que hay aspectos positivos y negativos del programa; entre los últimos están los casos de los derechos de importación, exportación y el otorgamiento del 40% de divisas a los exportadores. Lo positivo es que tengamos conciencia plena de que México debe exportar o no sale, porque el país requiere de divisas” (*La Jornada*, 30 de marzo de 1985).

e.2 *La reprivatización de la economía.*

“Luis Enrique Grajeda Alvarado, uno de los dirigentes más importante de la COPARMEX, manifestó que es positivo que las paraestatales y nuestra entidad se pongan en venta a la inversión extranjera porque se fomentará la creación de empleos (*La Jornada*, 16 de agosto de 1985).

*El discurso del Consejo Coordinador Empresarial, 1985.*

Ahora toca presentar ejemplos significativos de las variables y subvariables del discurso que el CCE, con el afán de mostrar la complejidad que encierra los datos estadísticos que presentamos al analizar las tablas generales que recogen el discurso de las principales organizaciones empresariales. En el caso de la Variable “Censura”, según la tabla correspondiente, el CCE se manifestó de la siguiente manera:

a.1	33%	a.4	-
a.2	17%	a.5	-
a.3	-	a.6	-
a.4	-		

a.5 *Expropiación de los predios urbanos.*

“En el caso de la expropiación de 7000 predios no hubo consulta, se cayó en errores y no quedó definida la utilización que se hará con los terrenos. La iniciativa privada está de acuerdo en que algo se tenía que hacer ante la situación de emergencia, pero tuvo que ser con base en estudios certeros y rápidos y con un proceso legal correcto” (*La Jornada*, 22 de octubre de 1985).

a.1 *La crisis económica.*

“No obstante, Claudio González, presidente del CCE, tras señalar que el poder adquisitivo de los salarios ha descendido y que las empresas están descapitalizadas y sin liquidez. Aseguró que los elevados costos sociales de estos factores no han sido provocados por la reordenación económica, sino muy por el contrario, por la erróneas políticas adoptadas en el pasado y que causaron la presente crisis” (*La Jornada*, 13 de septiembre de 1985).

a.2 *Medidas económicas y/o fiscales inadecuadas.*

“Al comentar el aumento del encaje legal a depósitos bancarios en proporción de 93 centavos por cada peso, advirtió que ello dejará sin posibilidad de crédito a la industria y al comercio privados, pues la banca carecerá de recursos para hacer frente a la demanda de empréstitos” (*La Jornada*, 16 de julio de 1985).

La composición de la variable “demanda” en el discurso del CCE, según la tabla correspondiente, se expresa de la siguiente forma:

b.1	33%	b.4	33%
b.2	44%	b.5	22%
b.3	11%	b.6	11%

b.2 *Liberación de precios y el comercio.*

“El CCE considera indispensable la liberación del comercio externo de la economía, para la readecuación del desarrollo económico que se ha basado en una política de sustitución de importaciones” (*La Jornada*, 7 de agosto de 1985).

b.1 *Austeridad y ajuste presupuestario.*

“La comisión ejecutiva del CCE dijo al jefe del ejecutivo que los ajustes económicos no solamente son la opción más viable para superar la crisis por la que atraviesa el país, sino que reviste gran importancia y trascendencia para dinamizar nuestra economía” (*La Jornada*, 7 de agosto de 1985).

b.4 *Reprivatización de la economía.*

“Sobre el cumplimiento del presupuesto para el gasto público, el CCE declaró que para lograrlo se requiere avanzar en el realismo de los precios y tarifas públicas, así como en la reducción de los subsidios a las empresas paraestatales, para lo cual se requiere de mayor esfuerzo de concretarse la venta de un número importante de esos organismos” (*La Jornada*, 28 de noviembre de 1985).

b.5 *Salarios moderados.*

“Los empresarios del país todavía no tienen un porcentaje ni una decisión concreta sobre el monto de los nuevos salarios mínimos que deberían regir en el país, señaló el presidente del CCE, pero advirtió que la cifra habrá de ser moderada, resultado de un acuerdo sensato” (*La Jornada*, 22 de mayo de 1985).

b.3 *Apoyo financiero, fiscal y/o infraestructura.*

“En la presentación de su programa de los 11 puntos del CCE ante el presidente de la república, el organismo empresarial demandó la canalización de la inversión pública a la construcción de infraestructura para que México aspire a convertirse en un país exportador” (*La Jornada*, 15 de agosto de 1985).

b.6 *Implementación de medidas económicas, fiscales, etc...*

“El CCE se manifestó por un tipo de cambio monetario “realista” y por que la liberación del sector externo de la economía vaya acompañada de un paquete integral de medidas económicas, así como por decisiones claras respecto a los niveles de protección arancelaria y de los mecanismo de negociación bilateral multilateral; liberación interna, modernización de la información aduanera y calendarización de las medidas” (*La Jornada*, 13 de septiembre de 1985).

La variable “Ideológico-política” en el discurso del CCE, según la tabla correspondiente, se estructuró de la siguiente manera:

c.1	34%	c.4	33%
c.2	-	c.5	-
c.3	33%		

c.1 *Sobre el papel del empresariado.*

“El CCE expresó que en el momento actual del país quizá existen conveniencias, mala información o miedos entre gente del sector empresarial, pero advirtió que por la responsabilidad social del empresariado se deben tomar decisiones firmes. Debemos actuar con más energía para seamos escuchados y respetados” (*La Jornada*, 23 de octubre de 1985).

c.3 *Democracia y participación política.*

“Además, no solo puede haber desarrollo en un ambiente de confianza, sino también de libertad política. Imponerse y atacar a quien tiene diferencias en el quehacer político, desemboque en intolerancia, totalitarismo y afectación selectiva. Manifestó el CCE” (*La Jornada*, 28 de octubre de 1985).

c.4 *Sobre lo negativo del marxismo y/o comunismo-socialismo.*

“El CCE precisó que la iniciativa privada de Nicaragua está embargada hace 4 años y afirmó que uno de los problemas fundamentales de este país es que hay un gobierno marxista-leninista que a lo largo de la historia ha probado no ser el adecuado para promover la igualdad y la libertad de las personas” (*La Jornada*, 16 de mayo de 1985).

En el discurso del CCE, respecto de la variable “Gatt y economía”, según la tabla correspondiente, se estructuró de la siguiente manera:

d.1	25%	d.5	-
d.2	-	d.6	50%
d.3	-	d.7	-
d.4	25%	d.8	-

d.6 *Información sobre la situación económica.*

“Van 3 años de tasas de crecimiento económico insuficiente para aumentar el empleo permanente: la inflación parece no ceder; se tiene un tipo de cambio fuertemente subvaluado e insuficiencia de ahorro interno. Todo ello obedece en gran parte al abandono del Programa Inmediato de Reorganización Económica” (*La Jornada*, 29 de noviembre de 1985).

d.1 *Conviene ingresar al Gatt.*

“El presidente del CCE, luego de argumentar a favor de la adhesión de México al Gatt, dijo que se requiere de una política gradual de apertura, para proteger a corto plazo a la pequeña y mediana industria y propuesto una consulta continua con las empresas involucradas para que se respeten las cadenas productivas” (*La Jornada*, 27 de noviembre de 1985).

d.4 *Opinión sobre la deuda externa.*

“La negativa a la moratoria no quiere decir que creamos que deben mantenerse los términos de pago contratados. Es imperativa la renegociación para alargar lo posible, posplazos de amortización y reducir las tasas de interés, lo cual es conveniente par los acreedores por que mejores condiciones permitirán crecer a la economía nacional y asegurar los pagos comprometidos” (*La Jornada*, 31 de octubre de 1985).

En el discurso del CCE, la variable “Apoyo”, según la tabla correspondiente, se expresó de la siguiente manera:

e.1	100%	e.2	-	e.3	-
-----	------	-----	---	-----	---

e.1 *Austeridad y ajuste presupuestario.*

“Luego de indicar de la política económica que ha asumido el gobierno es “correcta”, el presidente del CCE señaló que es evidente que el malestar que todos experimentamos se debe a la enfermedad y no a la medicina, por lo que nos permitimos alentarlos a no aflojar el paso en el camino que acertadamente ha elegido en estas materias” (*La Jornada*, 13 de septiembre de 1985).

*El discurso de la Canaco, 1985.*

Para visualizar la expresión del discurso de la CANACO –Cámaras Nacionales de Comercio a nivel estatal- pasaremos a precisar los diversos aspectos de la variable “Censura” que, según la tabla correspondiente, se estructura así:

a.1	-	a.5	22%
a.2	28%	a.6	11%
a.3	17%	a.7	11%
a.4	39%		

a.4 *Proceso electoral.*

“El presidente de la CANACO de Monterrey declaró ¡que me llamen, yo ya dije lo que tenía que decir y lo sostengo, ante la procuraduría de justicia volveré a repetir lo mismo! Los integrantes pristas del congreso son unos ineptos, inmorales y míopes políticos.

En primer lugar, agregó “son unos levanta-dedos” por que algunos pristas no pudieron desligarse de su ideología partidista y en una forma acelerada y sin profundizar en las impugnaciones que hizo el Partido Acción Nacional rechazaron

la posibilidad de nulificar las elecciones del 10 de noviembre” (*La Jornada*, 27 de noviembre de 1985).

a.2 *Medidas económicas y/o fiscales inadecuadas.*

“El director jurídico de la CANACO de Monterrey, Gerardo Gamez Valdés, criticó la Ley Federal de Protección al Consumidor por considerarla aberrante y como un medio de represión a la actividad comercial, al depender del criterio de los inspectores porque la voluntad del estado debe estar supeditada al marco legal y no al revés” (*La Jornada*, 9 de mayo de 1985).

a.5 *Expropiación de predios urbanos.*

“Sadaña Dávalos de la CANACO-Monterrey simplemente dijo: mantenemos nuestra posición de rechazar la expropiación por considerar que es una medida estatizante” (*La Jornada*, 17 de octubre de 1985).

a.3 *Control de precios.*

“Ricardo Saldaña Dávalos, director de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey (CANACO), manifestó: con el control de precios estamos maniatados por el gobierno. Insistió el funcionario privado, quien señaló que el aparato distributivo se ha quedado estancado, lo que impide al particular desarrollarse más libremente” (*La Jornada*, 27 de agosto de 1985).

a.6 *La intervención estatal en la economía.*

“El presidente de la Cámara Nacional de la Ciudad de México, José González Bailó, afirmó ayer que la Conasupo deforma la economía, que no se ha restringido a su labor de acopio para regularizar al mercado y que su actividad comercializadora también contribuye a la crisis” (*La Jornada*, 23 de marzo de 1985).

a.7 *Otros (centralismo, declaraciones, etc..).*

“Ernesto Martínez Orozco de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, censuró las declaraciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog, en el sentido de que México será más pobre en 1985; por que

eso es pura demagogia. Señaló lo anterior y atribuyó los resultados a que el gasto corriente del sector público aumento en 5%” (*La Jornada*, 12 de junio de 1985).

La composición de la variable “Demanda” en el discurso de la CANACO, según la tabla correspondiente, se manifiesta de la siguiente manera:

b.1	75%	b.4	25%
b.2	33%	b.5	25%
b.3	8%	b.6	-

b.1 *Austeridad y ajuste presupuestario.*

“Garza Sada de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey señaló que más que pedir préstamos, el gobierno federal deber ser más austero, porque el problema económico se pasa de sexenio en sexenio, y en el futuro puede tornarse incontrolable” (*La Jornada*, 8 de octubre de 1985).

b.2 *Liberación de precios y el comercio.*

“El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey (CANACO) agregó que no quitarán el dedo del renglón hasta lograr la liberación de precios a los productos controlados” (*La Jornada*, 10 de abril de 1985).

b.4 *Reprivatización de la economía.*

“La Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara insistió en que el inversionista privado tenga la facilidad para ocurrir directamente al campo a comprar los productos a los campesinos para eliminar la intermediación de la Conasupo” (*La Jornada*, 15 de mayo de 1985).

b.5 *Salarios moderados.*

“El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, José González Bailó, manifestó que la determinación del porcentaje deberá prever la reposición del poder de compra de los trabajadores, pero cuidando al mismo tiempo que no se afecte a las empresas. De antemano manifestó que el 60% que ahora propone el sector obrero es muy exagerado. Comentó, además, que en la

actual situación económica los constantes cambios de precios y salarios no podrán detenerse” (*La Jornada*, 19 de diciembre de 1985).

b.3 *Apoyo financiero, fiscal y/o con infraestructura.*

“La CANACO de Monterrey afirmó respecto a la rectoría económica del estado, que se requiere la intervención del gobierno con apoyos financieros, y manifestó que a pesar de todas las medidas que se han anunciado, apenas se logrará tener un panorama similar al del año pasado, con una inflación que alcanzará 60%” (*La Jornada*, 27 de agosto de 1985).

La variable “ideológico-política” en el discurso de la CANACO, según la tabla correspondiente, se expresó de la siguiente manera:

c.1	50%	c.4	25%
c.2	-	c.5	25%
c.3	-		

c.1 *Sobre el papel del empresario.*

“El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio de Acapulco, Ceferino Torreblanca, indicó que los empresarios ya se cansaron de que les vean la cara, pues saben que si no actúan como partido político haciendo marchas o mítines no los atienden. Por ello optaron por hacer lo mismo que cualquier partido, nada más que sin mantas y sin escándalo, pero si con un fuerte contingente exigiendo la solución inmediata al problema del comercio ambulante en Acapulco” (*La Jornada*, 10 de abril de 1985).

c.4 *Sobre lo negativo del marxismo y/o comunismo-socialismo.*

“Gerardo Garza Sada, presidente de la CANACO de Monterrey, consideró que la expropiación de predios es violatoria al artículo 27 constitucional, pues no justifica la utilidad social que argumentan. Calificó la medida como populachera y socializante al pretender congraciarse con algunos sectores afectados, pero provocará la desconfianza de la mayoría de los mexicanos” (*La Jornada*, 16 de octubre de 1985).

c.5 *Otros.*

“Gerardo Garza Sada, presidente de la CANACO de Monterrey, organismo que agrupa a más de quince mil comerciantes de la entidad, dijo que a la vista de los representantes de la iniciativa privada a los empresarios nicaragüenses, es simplemente un gesto de solidaridad y apoyo moral” (*La Jornada*, 16 de mayo de 1985).

La variable “Gatt y economía” en el discurso de la CANACO, según la tabla correspondiente, se expresó de la siguiente manera:

d.1	10%	d.5	10%
d.2	10%	d.6	-
d.3	10%	d.7	10%
d.4	20%	d.8	30%

d.4 *Opinión sobre la deuda externa.*

“La Cámara Nacional de Comercio de Monterrey se manifestó hoy por una moratoria negociada, censuró la incapacidad del gobierno para organizar la ayuda a los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre y vía libre para los particulares que deseen llevar ayuda a los afectados, por sus propios canales” (*La Jornada*, 4 de octubre de 1985).

d.8 *Opinión sobre la economía internacional.*

“Una devaluación del dólar que está relativamente próxima, de acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio local daría a México grandes beneficios, dado que haría más atractivas las exportaciones a países europeos, Japón y Estados Unidos” (*La Jornada*, 7 de mayo de 1985).

d.1 *Conviene ingresar al Gatt.*

“González Biló, rechazó que la incorporación mexicana al Gatt implique la hipoteca de la libertad y negó que el acceso de mercancía extranjera al país vaya a convertir a los comerciantes en meras fachadas de transnacionales” (*La Jornada*, 13 de agosto de 1985).

d.2 *No al ingreso al Gatt.*

“México no debe hacer caso a la presión que está ejerciendo el Fondo Monetario Internacional para que ingrese al Gatt, ya que la falta de capital de la banca nacionalizada para otorgar créditos suficientes a pequeñas y medianas empresas.... Agudizará las difíciles condiciones del país. Afirmó hoy el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Acapulco, Ceferino Torreblanca Galindo” (*La Jornada*, 4 de noviembre de 1985).

d.3 *Riesgoso entrar al Gatt.*

“A su vez González Bailó, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, manifestó que la apertura comercial dentro del acuerdo general sobre aranceles y comercio deber ser gradual y selectiva, para evitar un shock en la economía nacional, que en todo caso, agravaría la situación que hoy se pretende corregir” (*La Jornada*, 26 de noviembre de 1985).

d.5 *Se pronostica mayor crisis.*

“El índice inflacionario llegó en agosto a 34.1 por ciento, y si bien representó una disminución de 7.1 puntos porcentuales respecto a los ocho primeros meses de 1984, podría suceder que al término de 1985 la inflación llegue a 55.1 por ciento, informó la CANACO de la Ciudad de México” (*La Jornada*, 11 de septiembre de 1985).

La variable “Apoyo” en el discurso de la CANACO, según la tabla correspondiente, se estructuró de la siguiente manera:

e.1	75%	e.2	-	e.3	50%
-----	-----	-----	---	-----	-----

e.1 *Austeridad y ajuste presupuestario.*

“El director de comunicación de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, Ernesto Martínez Orozco, declaró que hasta ahora el presidente De la Madrid solo ha quedado en buenas intenciones, y agregó que es necesario se

continúe la supresión de estructuras burocráticas y cancelación de plaza innecesarias” (*La Jornada*, 24 de julio de 1985).

e.3 *Medidas económicas, políticas y sociales.*

“Por su parte, el presidente de la CANACO de la Ciudad de México, José González Bailó, manifestó su rechazo a cualquier nueva negociación de la deuda, a su juicio fu adecuada la reestructuración que llevó a cabo el gobierno mexicano en meses pasados” (*La Jornada*, 30 de septiembre de 1985).

La importancia de presentar un ejercicio como éste no solo radica en el hecho que 1985 sea el año de referencia sobre el cual se ensayó la metodología propuesta en esta investigación, sino porque en el significado socio-histórico que le corresponde al discurso empresarial en ese año, nos permite advertir el radicalismo con el cual se caracterizaba la participación política de las organizaciones empresariales que paradójicamente en ese año, no sopesaban los esfuerzos que la tecnocracia hacía para dar forma a un modelo económico que colmaba sus más añejas demandas. Es decir, que a pesar que el proyecto neoliberal avanzaba a grandes pasos, la desconfianza del sector empresarial los conducía a adoptar una posición de confrontación abierta con el primer gobierno tecnocrático que colocó las bases para impulsar un modelo de desarrollo que abandonara el modelo posrevolucionario cifrado en un nacionalismo revolucionario que legitimaba una economía protegida así como el intervencionismo estatal en la reproducción del mercado.

Por otra parte, 1985 se sitúa a ocho años de la serie 1993-1997, lo que supone no solo el avance del proyecto neoliberal y la consolidación de una nueva racionalidad del Estado cifrada en los valores del mercado, sino del proceso de aprendizaje que explica la maduración política de la clase empresarial, dada la experiencia de confrontaciones con la burocracia política y la convergencia ideológica con la tecnocracia instalada en el poder desde 1982. En ese sentido, se hace necesario reconocer la gran diferencia existente entre la forma que tiene el discurso de 1985 y la de la serie 1993-1997, misma que se expresa a partir del abandono del radicalismo mostrado hasta 1985 y una posición de vidente alianza con la tecnocracia que en mucho explica la legitimidad del proyecto neoliberal que permite la llegada al poder del PAN en el año 2000.

Por último, es necesario subrayar que lo más importante de esos cambios son, considerando el abandono del radicalismo empresarial, las demandas de 1985 que se resumen en aspectos que dan forma general del proyecto neoliberal (austeridad y ajuste presupuestario; liberación de precios y comercio; apoyo financiero, fiscal y/o con infraestructura; reprivatización de la economía; salarios moderados) quedan resumidas en las demandas del discurso de la serie 1993-1997, en la subvariable *b.1 continuidad del proyecto económico*, que en 1993 alcanza todavía un 21.3% en el discurso general, y alcanza un 29.1% en 1997.

Precisamente, con el objetivo de mostrar cual era la cobertura que hacían las principales organizaciones empresariales como referente legitimador del proyecto económico, en las siguientes líneas se analizan sucintamente los discursos de 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997.

#### *4. 1. 3 El discurso empresarial, 1993.*

En la medida en que esta investigación también hace referencia a la estructura del *discurso empresarial de 1985* (primer análisis en su género), los aspectos que se destacarán aquí son: 1) mostrar una comparación entre la estructura del discurso de 1985 y 1993; 2) destacar lo más significativo del discurso de 1993 seleccionando los aspectos que permitan comprobar que las *organizaciones empresariales* legitimaban el proyecto neoliberal de Salinas de Gortari; y 3) cómo los empresarios mexicanos habían madurado como *sujetos políticos* y van escalando las estructuras del poder.

En ese sentido, salta a la vista la tabla donde se muestra el total de declaraciones que realizaron las organizaciones empresariales en 1993, cuando alcanzan un total de 654, algo más del doble que en 1985, donde tuvieron 301 declaraciones en los medios de comunicación. Esto explica la importancia que va adquiriendo para ellos hacer política a partir de garantizar su presencia en los medios de difusión, y desde luego, su maduración como sujetos políticos, pues poco a poco van haciendo mayor uso del recurso discursivo como estrategia para consolidar su posición en las diferentes coyunturas que va generando la transición. Sobre todo, también, porque se advierte que el ideario político delineado por los empresarios en 1975, cuando crearon el CCE, sugería el *deber ser* del proyecto que

guiaría a la nación. Lo cual se hecho cada vez más evidente a partir que el proceso de transición también ha propiciado la expansión del espacio público. De ahí la importancia que adquiere la presencia del discurso en el espacio público de todo aquel actor social que pretenda hacer política, luchar por el poder.

***Presencia de las organizaciones empresariales en la prensa nacional, 1993.***

<b>Organización</b>	<b>Declaraciones</b>	<b>Porcentaje</b>
CCE	122	23.8%
Coparmex	165	21.8%
Concamín	84	15.7%
Canacintra	133	22.5%
Concanaco	150	16.2%
Discurso empresarial	654	100.0%

Elaboración propia a partir del periódico *El Financiero*

En esta tabla se observa mayor presencia del CCE, con 23.8% de las participaciones en la prensa, seguida muy de cerca por CANACINTRA, con 22.5%, lo cual llama la atención sobre el repunte del CCE. Donde éste alcanzó solo el 6.6%, del total del discurso empresarial. Esto obedece, en general, a la superación del radicalismo de los empresarios en contra del gobierno, dada la coincidencia entre el proyecto tecnocrático de Salinas de Gortari (1988-1994) y el proyecto de nación que ya se advertía en el discurso de las organizaciones empresariales. Se trata de una distensión en las relaciones gobierno-empresarios, lo cual permite al CCE posicionarse como líder del sector; mientras en el caso de CANACINTRA se observa que mantiene su participación pues en 1985 llegó a ocupar el 19.2% del discurso empresarial, y en 1993 reporta un incremento de 3.3%, con la ausencia de sus representaciones regionales denominadas CAINTRA, que en 1985 aportaron el 9.9% del total del discurso empresarial. De tal manera que la participación tan visible de CANACINTRA, obedece a que representa a uno de sectores empresariales más afectados por los cambios del modelo económico cuya esencia comparten las cúpulas reunidas en el CCE.

De hecho, esta situación nos permite subrayar que para 1993 la tecnocracia a recuperado totalmente la “confianza de los empresarios”, lo cual explica cómo sus

ideologías convergen, prácticamente, en todos los rasgos que definen la esencia del proyecto neoliberal.

Por otra parte, el discurso empresarial de 1993 abre un conjunto de variables que confirman el cambio de las relaciones empresarios-gobierno, situación que va a permanecer en los años subsecuentes, hasta el gobierno de Fox, como lo demostrará más adelante la estructura discursiva de los empresarios mexicanos en 1994, 1995, 1996 y 1997. Independientemente de las variables coyunturales que cada uno de ellos presente. Para lo que ahora nos importa, es fundamental ubicar la transformación radical del discurso empresarial, pues si en 1985 concentraba el 29 % de sus declaraciones a la prensa en *censurar* al gobierno mexicano y 21% para hacer las *demandas* que correspondían a sus intereses de clase (condición que sugería la radicalidad de los empresarios mexicanos contra de la burocracia política). En 1993 dirigen 8 % de su discurso a la *censura* de las acciones gubernamentales y 28.5 % de la estructura discursiva para plantear sus *demandas*.

La evidente caída de la variable *Censura* del 29 % al 8%, demuestra la transformación de las relaciones de poder entre las elites económicas y las políticas, permitiéndonos demostrar afirmaciones que hacemos a lo largo de esta investigación respecto a una situación de conflicto, en la etapa del proyecto “populista” y la reconciliación política que se establece a la luz de la implementación del proyecto neoliberal. Lo que permite deducir fácilmente el nuevo papel político que jugaron los empresarios mexicanos, a través de sus organizaciones de clase: *elemento legitimador del proyecto neoliberal*.

***Diversidad discursiva de las organizaciones empresariales en la prensa nacional, 1993.***

<b>Organización</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>Total</b>
CCE	8.5%	28.5%	31.5%	21.8%	7.3%	2.4%	100.0%
Coparmex	7.7%	39.4%	16.2%	29.7%	6.2%	0.8%	100.0%
Concamin	5.9%	29.4%	29.4%	26.9%	5.0%	3.4%	100.0%
Canacindra	6.8%	29.6%	32.4%	26.7%	2.8%	1.7%	100.0%
Concanaco	10.5%	30.5%	29.1%	25.2%	3.3%	1.4%	100.0%
Discurso empresarial	8.0%	32.3%	26.6%	26.4%	5.0%	1.7%	100.0%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Si el porcentaje no ajusta exactamente a 100%, es por cuestión del redondeo

<b>Variables</b>	<b>A) Censura</b>
	<b>B) Demandas</b>
	<b>C) Economía</b>
	<b>D) Ideológico-político</b>
	<b>E) Apoyo</b>
	<b>F) Otras</b>

Tal es el cambio en la estructura discursiva que consideramos obviar la composición de las críticas que las organizaciones empresariales planteaban al gobierno mexicano, y concentrar la atención en la relevancia que adquieren las demandas empresariales en la reproducción del discurso general de los empresarios, que en 1993 alcanza un 32.3%. Ello explica el por qué la variable demanda en el discurso de todas las organizaciones ocupan el mayor espacio, seguidas, también en todos los casos de la variable economía e ideológica-política. La variable apoyo también pierde significación, pues en todo caso los diagnósticos que las organizaciones hacen sobre la economía y el hecho que sus demandas se incorporen cada vez más en el proyecto tecnocrático, determina que el apoyo político que los empresarios brindan subyace en la misma lógica de las demandas, la economía y sus posiciones político-ideológico.

El incremento registrado en la tabla de demandas empresariales pasa del 21 % en 1985 al 32 % en 1993, lo cual sugiere un evidente efecto de la nueva estrategia discursiva, pero también de la ampliación de esa variable para 1993. Concentrémonos en el segundo aspecto, pues éste sugiere que como ya han sido resueltas las demandas que los empresarios plantean en 1985 (austeridad y ajuste presupuestario; liberación de precios y comercio; apoyo financiero, fiscal y/o administrativo; reprivatización de la economía; salarios moderados; implementación de medidas económicas, fiscales, etc.). Las expresiones del discurso empresarial de la variable demanda adquieren *nuevas significaciones* que obedecen tanto a su madurez política como a la complejidad política-económica que vive el país. Esto se refleja a partir de la ampliación del discurso empresarial dado que en 1985 contempla solo 6 subvariables de sus demandas, mientras que en 1993 llega a 10.

***Demandas de las Organizaciones empresariales planteadas al gobierno,  
prensa nacional 1993.***

<b>Organización</b>	<b>b.1</b>	<b>b.2</b>	<b>b.3</b>	<b>b.4</b>	<b>b.5</b>	<b>b.6</b>	<b>b.7</b>	<b>b.8</b>	<b>b.9</b>	<b>b.10</b>
CCE	31.9	10.6	6.4	8.5	31.9	2.1	23.4	12.8	2.1	2.1
Coparmex	16.7	9.8	32.6	11.8	22.5	8.8	33.3	14.7	2.9	1.0
Concamín	20.0	8.6	11.4	14.3	5.7	2.9	22.9	28.6	5.7	5.7
Canacintra	15.4	7.7	9.6	1.9	11.5	0.0	21.2	40.4	3.8	13.5
Concanaco	26.6	4.7	10.9	6.3	23.4	1.6	31.3	17.2	6.3	4.7
Discurso empresarial	21.3	8.3	17.3	8.7	20.3	0.4	21.3	21.0	4.0	4.7

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más subvariables.

<b>Demandas:</b>	<b>b.1 continuidad del proyecto económico</b> <b>b.2 control inflacionario</b> <b>b.3 reforma de la Ley Federal del Trabajo</b> <b>b.4 tope salarial o salarios sujetos a productividad</b> <b>b.5 reforma al IMSS</b> <b>b.6 modernizar la educación</b> <b>b.7 nuevo marco fiscal y/o administrativo</b> <b>b.8 crédito, financiamiento y/o infraestructura</b> <b>b.9 acción eficaz del gobierno</b> <b>b.10 otros</b>
------------------	--

Además, es necesario considerar que en la demanda por la continuidad del proyecto económico, están contempladas, en esa sola subvariable, todas las demandas que las organizaciones empresariales hacían en 1985. Por lo tanto, el conjunto las *demandas* de 1985, aparece, por su propio significado en la lógica de la nueva coyuntura, agrupadas dentro de la subvariable *b.1 continuidad del proyecto económico*, que por sí misma muestra la importancia adquirida en las demandas empresariales, al representar el 21.3 % del total de ellas, mismo porcentaje que ocupa la subvariable *b.7 nuevo marco fiscal y/o administrativo*, y *b.8 crédito, financiamiento y/o infraestructura*. Seguidos con un 20.3% que tiene la subvariable *b.5 reforma al IMSS*, y del 17.3 % de la *b.3 reforma a la Ley Federal del Trabajo*.

Lo anterior puede sugerir la insistencia de las organizaciones empresariales respecto a la implementación del proyecto neoliberal, en el caso de la b.1, y los aspectos que preocupan en ese momento a ese sector, como es el caso de *las reformas a la LFT y al IMSS*, así como los requerimientos que tienen sobre la cuestión fiscal y las necesidades de

los créditos. Cabe destacar, por lo que toca a la reforma de la LFT, que es la COPARMEX la que más insiste en *demandar* esa subvariable, confirmando su *razón de ser* como principal defensora de los intereses empresariales en las relaciones capital-trabajo. Al tiempo que, por ejemplo, al CCE le tocó hacer punta en la subvariable *b.1 continuidad del proyecto económico*, el instaurado desde 1982 con su apoyo.

Cabe destacar que las subvariables a las que más recurrieron las organizaciones empresariales en su discurso, además de la continuidad del proyecto económico, fueron la reforma del IMSS (20.3 %), el nuevo marco fiscal y/o administrativo (21.3%) y crédito, financiamiento e infraestructura (21%). En el primer caso destaca que fue el CCE la organización que más recurrió a esa subvariable (31.9) y que de hecho, aunque se iguala en el caso de ésta a la subvariable de continuidad del proyecto económico, la correspondiente a la reforma del IMSS es a la que más recurrió el CCE. En el segundo caso, que COPARMEX y CONCANACO se preocuparon más por la cuestión del marco fiscal y administrativo (en el caso de la cámara de comercio, demanda sustentada en su crítica al negativo efecto que provoca la economía informal); mientras que en el tercero, la CANACINTRA incidió de una manera muy significativa en demandar crédito, financiamiento e infraestructura (40.4%) dado que esta organización representa a las medianas y pequeñas empresas, que en todo caso, son las que más requieren de una política de apoyo a este sector de la economía. Y por último, vale destacar en cuanto a la variable demanda, que en el caso de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, fue la COPARMEX la que más recurrió a esta variable (32.6%), contrastando con la atención que le brindó el CCE (6.4%).

En la siguiente tabla presentamos la variable *Economía*, radica en su nueva estructura definida por la propia coyuntura, es decir, mientras en 1985 interesaba a los empresarios mexicanos manifestarse respecto a la cuestión del GATT, es evidente que superado el problema de una economía protegida (cerrada) la preocupación de las *organizaciones empresariales* para 1993 se centra en la víspera del TLC, sobre la cual se manifiestan, predominantemente, con una expectativa favorable hacia su firma y su puesta en marcha para el siguiente año, 1994.

Por otra parte, cabe destacar que mientras en 1985 del total de declaraciones que las *organizaciones empresariales* hicieron respecto a la variable *GATT y Economía*, 10% de

ellas manifestaron que era d.1) *Conveniente ingresar al GATT*; 17 % expresaban su rechazo al acuerdo d.2) *No al ingreso al GATT*, y 19% sus dudas al respecto d.3) *Riesgoso entrar al GATT*. Es decir, que del discurso dirigido a la variable *economía*, el 42.6 % fue destinado al tema del GATT. Y de ese total, solo en el 23.5 % de las declaraciones consideró la conveniencia de que México se incorporara a ese acuerdo.

***Evaluación de las organizaciones empresariales sobre el TLC y la economía, prensa nacional, 1993.***

<b>Organización</b>	<b>c.1</b>	<b>c.2</b>	<b>c.3</b>	<b>c.4</b>	<b>c.5</b>	<b>c.6</b>	<b>c.7</b>
CCE	11.5%	42.3%	25.0%	1.9%	28.8%	5.8%	1.9%
Coparmex	0.0%	54.8%	21.4%	2.4%	11.9%	11.9%	16.7%
Concamin	5.7%	51.4%	28.6%	0.0%	14.3%	20.0%	2.9%
Canacintra	5.3%	50.9%	26.3%	7.0%	19.3%	10.5%	5.3%
Concanaco	9.8%	47.5%	11.5%	1.6%	18.0%	13.1%	21.3%
Discurso empresarial	6.9%	49.0%	21.9%	2.8%	19.0%	11.7%	10.1%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más subvariables.

- Economía:**
- c.1 balance positivo de la economía**
  - c.2 balance negativo de la economía**
  - c.3 expectativas positivas por el TLC**
  - c.4 expectativas negativas por el TLC**
  - c.5 perspectivas positivas de la economía**
  - c.6 perspectivas negativas de la economía**
  - c.7 economía informal**

En el mismo rubro de la variable *Economía*, pero en la perspectiva del TLCAN que las *organizaciones empresariales* dieron en 1993, tenemos que del total de las referencias económicas el 24.7 % fueron dirigidas a la cuestión de ese acuerdo comercial, mientras que en 1985 el 42.6% fue destinado a la discusión del GATT. Lo cual hace obvio por que en 1985 adquirió mayor relevancia en la variable *Economía*, puesto que los empresarios van presionando para que el gobierno acepte la *apertura económica*.

Sin embargo, llama la atención que en 1993, el tema TLCAN fuera significativo para todas las *organizaciones empresariales*, mientras que en 1985, COPARMEX no se interesó en el tema del GATT y que CONCANACO, CANACO (Norte y Occidente),

CANACINTRA (con sus diferentes representaciones regionales), y CONCAMIN, consideraran riesgosa la incorporación de México a ese Acuerdo. Y que CANACINTRA y CANACO, consideraran, en ocasiones, que no debíamos incorporarnos al GATT. Para 1993, prácticamente todas las organizaciones empresariales tenían *c.3) expectativas positivas por el TLCAN*, incluyendo a la COPARMEX.

Es significativo en la variable Gatt y economía, observar el espacio brindado en el discurso empresarial al balance negativo de la economía (49%), y que en ella misma COPARMEX destine el 54.8% de sus intervenciones en ese rubro. Ello sugiere que aún a pesar de la clara coincidencia de proyectos entre la tecnocracia y el empresariado, su crítica a la situación económica en 1993 cuando la idea de modernidad de Salinas de Gortari había convencido a una parte importante de la sociedad mexicana y existían tan buenas expectativas del inicio del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, la crítica a la economía en esos momentos representa la posibilidad de ejercer presión para garantizar que el modelo económico continuara perfilándose a partir de las necesidades de los empresarios mexicanos.

También es importante observar que en las apreciaciones negativas sobre la incorporación de México al TLCAN la CANACINTRA sea la que se muestra más preocupada (7%) cuando la media en el discurso empresarial se mantiene en 2,8%. Del mismo modo cabe destacar que la CONCANACO sea la organización que menos expectativas positivas sobre el TLCAN pues obvio que la radical apertura de la economía afectará a las empresas mexicanas ubicadas en el sector de los servicios y comercio. En ese mismo sentido se entiende su crítica a la economía informal (21.3%) cuando la media del discurso empresarial fue de 10.1%.

Respecto a la variable *Ideológico-Político*, cabe destacar que si las organizaciones empresariales destinaban en 1985, el 15 % de su discurso para referirse a cuestiones de dicha índole; para 1993 alcanza un 26.4 % del total, lo que nos hace preguntarnos por el incremento significativo en el uso de esta variable. Tal situación se explica por la posición protagónica del sector empresarial en el espacio público, su *empoderamiento*, y el calentamiento político de un año anterior al de las elecciones de 1994. Se trata de una coyuntura precedida por la experiencia del anterior periodo electoral, 1988, en el cual la *izquierda institucionalizada* avanzó más de lo previsto, provocando la caída del “sistema”.

***Perspectivas ideológico-políticas de las organizaciones empresariales,  
prensa nacional 1993.***

<b>Organización</b>	<b>d.1</b>	<b>d.2</b>	<b>d.3</b>	<b>d.4</b>	<b>d.5</b>	<b>d.6</b>
CCE	19.4%	16.7%	13.9%	22.2%	38.9%	11.1%
Coparmex	23.4%	14.3%	22.1%	11.7%	27.3%	28.6%
Concamin	37.5%	6.3%	6.3%	21.9%	43.8%	12.5%
Canacindra	27.7%	6.4%	6.4%	10.6%	48.9%	10.6%
Concanaco	41.5%	15.1%	11.3%	13.2%	43.4%	7.5%
Discurso empresarial	29.4%	12.2%	13.5%	14.7%	38.8%	15.9%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más de ellas.

**Ideológico-político:**

**d.1 sobre el papel de los actores sociales**

**d.2 sobre la sucesión presidencial**

**d.3 sobre sistema y partidos políticos**

**d.4 exhorta a elevar la productividad y competitividad**

**d.5 propone estrategias para enfrentar la crisis económica**

**d.6 promoción de nuevos valores sociales**

La ampliación del discurso empresarial a partir de 1993 consolida la identidad al sector, y le da la consistencia para presentar a las organizaciones empresariales en el espacio público, como instancias políticas representativas del conjunto de la sociedad mexicana, como parte de la opinión pública que se expresa a través de los medios de comunicación masiva, sobre todo en el caso de la prensa con cobertura nacional. No es gratuito que la subvariable más atendida en el discurso empresarial sea la *d.6 promoción de nuevos valores sociales*; evidentemente, valores que convienen a su concepción del *deber ser de la nación* y de todos los actores de nuestra sociedad.

En cuanto a este mismo tema, cabe destacar la evidente cercanía que el CCE muestra con el gobierno a partir de demandar la continuidad del proyecto económico (31.9% cuando la media del discurso general de las organizaciones es de 21.3%), lo que sugiere la cercanía de este organismo con el gobierno tecnocrático de Salinas de Gortari. También se puede observar en el discurso general de las organizaciones empresariales que las variables ideológico-políticas que ocupan la mayor parte de su participación en los medios impresos, son sus posiciones respecto de los diferentes actores sociales (29.4%) y las estrategias que

según el empresariado resolvería la crisis económica (38.8%). Esto obedece a la evidente preocupación del CCE, la CONCAMIN, la CANACINTRA y la CONCANACO, a diferencia de COPARMEX, que sólo dedicó en la cuestión ideológico político el 27.3 % en proponer estrategias para enfrentar la crisis económica. No obstante, es pertinente considerar que la subvariable que propone esta propuesta empresarial, está íntimamente ligada al papel que juega la política en la coyuntura, por lo cual destacan los aspectos de la sucesión presidencial, así como el papel que juegan los diferentes actores sociales y los partidos políticos que se deben ceñir a los valores que ellos proponen en su lógica discursiva.

Estas manifestaciones del *discurso empresarial* demuestran cómo la ideología de los actores se debate en el escenario nacional, intentando proyectarse como la *ideología dominante*. Eso refleja su *intención de presentar un conjunto de ideas e interpretaciones sobre la realidad nacional correspondiente a sus intereses de clase*, con la suficiente capacidad de vencer a sus adversarios y de convencer a la *opinión pública*, de sus cualidades para guiar la política económica.

Los planteamientos que el conjunto de las *organizaciones empresariales* insertan en el *espacio público*, tienen el claro objetivo de hacer valer sus expectativas de lo que *deber ser el ciudadano, el papel de los partidos políticos, de los sindicatos, de las autoridades gubernamentales, y evidentemente, de papel que ha de jugar la empresa en este proceso de transición*.

#### 4. 1. 4 El discurso empresarial, 1994.

El primer comentario al respecto se ubica en la composición del *discurso empresarial* que en 1985 ocupa el 51% en *censurar* las acciones y decisiones del gobierno, así como en establecer las *demandas* que expresan sus intereses de clase; mientras en 1993 esas dos variables ocupan el 40.3% del total y en 1994 el 36%. Lo interesante es advertir que la crítica al gobierno persistente en 1985, disminuye gradualmente para 1994. Como es el caso de la *variable censura* que pasa del 29% en 1985, al 8% en 1993 y 7.9% en 1994. Eso significa, y por tanto revela, la consolidación de la alianza empresarios-gobierno, la

compatibilidad entre el proyecto de nación que promueve la *tecnocracia* y el proyecto de nación propuesto por la clase empresarial.

Se trata de reconocer un breve proceso en el terreno de la transición mexicana que, primero, se sitúa a mediados del sexenio de Miguel de la Madrid, cuando ya se ha echado a andar la reforma silenciosa del Estado, a partir de la cual se legaliza el nuevo papel económico del gobierno que promueve el *proceso de privatización y liberación de la economía*. Esta política económica, si bien coincide con el proyecto económico del sector empresarial, en esos momentos no termina por convencerse que la *tecnocracia* está realmente decidida a consolidar el proyecto neoliberal que prevalece obstinadamente hasta nuestros días. Por esa razón y con el antecedente de la expropiación bancaria del 1°. De septiembre de 1982, el empresariado mexicano mantenía una actitud política de ofensiva ante la *tecnocracia* que ascendió al poder en ese año.

En 1994, quizá uno de los años más críticos de la transición mexicana, llama la atención el la presencia sobresaliente de la CONCANACO (26.5%) y la CANACINTRA (23.4%), pues como ya se ha dicho al analizar el discurso empresarial de 1985 y 1993, se trata de las organizaciones empresariales que representan a los sectores más golpeado por el modelo económico que se instaura en 1982 y la crisis económica que de ello deriva. Por otra parte destaca la presencia de COPARMEX (20.6%), presencia que refrenda la actitud politizada respecto del sistema así como su liderazgo político-ideológico que desempeña dentro del sector empresarial. En sentido contrario, también llama la atención el bajo perfil que el CCE mantiene (18.5%), y la bajísima presencia de la CONCAMIN (11%) del total de las participaciones empresariales en los medios impresos.

***Presencia de las organizaciones empresariales  
en la prensa, 1994.***

<i>Organización</i>	<b>Declaraciones</b>	<b>Porcentaje</b>
CCE	125	18.5%
Coparmex	139	20.6%
Concamin	74	11.0%
Canacintra	158	23.4%
Concanaco	179	26.5%
Discurso empresarial	675	100.0%

Elaboración propia a partir del periódico *El Financiero*

Sin embargo, en el conjunto de participaciones del discurso de estas organizaciones empresariales se mantiene guardando un promedio de casi dos declaraciones al día, a lo largo de 1994. Lo permite comprender la importancia que tiene el sector empresarial en la conformación de la opinión pública, así como en la reproducción del poder en la medida que se constituye en un referente obligado para legitimar a los gobiernos tecnocráticos.

En la siguiente tabla presentamos la diversidad de variables que presenta el discurso de las organizaciones empresariales en 1994. Aquí llama la atención que tanto las variables censura y apoyo han disminuido sensiblemente, pues entre éstas dos solo alcanzan un 13.4% en el discurso general de ese sector. No obstante llama la atención que COPARMEX, mantenga la actitud más crítica hacia el gobierno salinista 11.9%, puesto que en 1993 expresó su decidido apoyo a dicha gestión.

***Diversidad discursiva de las organizaciones empresariales en la prensa nacional, 1994.***

<b>Organización</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>Total</b>
CCE	5.8%	40.4%	26.6%	19,2%	8.0%	100.0%
Coparmex	11.9%	34.1%	21.2%	27,6%	5.0%	100.0%
Concamin	6.3%	42.9%	28.0%	18,0%	4.8%	100.0%
Canacindra	7.4%	41.9%	25.7%	20,4%	4.6%	100.0%
Concanaco	7.5%	35.8%	33.2%	19,3%	4.3%	100.0%
Discurso empresarial	7.9%	39.0%	26.3%	21,3%	5.5%	100.0%

Elaboración propia con información de *El Financiero*.

- Variables**
- A) Censura**
  - B) Demandas**
  - C) Economía**
  - D) Ideológico-político**
  - E) Apoyo**

También destaca el amplio espacio dedicado por el discurso empresarial a la variable de demandas que ocupó el 39%, de toda su participación en los medios de difusión masiva. En la cual destacan las participaciones del CCE (40.4%), la CONCAMIN (42.9%) y la CANACINTRA (41.9), organizaciones que se encontraron un poco arriba de la media de ese sector. De la misma manera, es notable la participación de COPARMEX (27.6%) lo

que confirma su liderazgo político, y del mismo modo el bajo perfil de la CONCAMIN (18%).

En la siguiente tabla nos referiremos a algunos aspectos de la variable *censura*, destacando el drástico cambio que la variable *censura* registra para el año de 1993 representa la conciliación entre las elites políticas y las económicas, lo cual produce el total respaldo al programa económico de Salinas de Gortari, a pesar que las estadísticas en ese año muestran un escenario económico marcadamente crítico, particularmente por lo que toca al desempleo, la quiebra de empresas y la cartera vencida que comenzaba a ser un lastre para la estabilidad de medianas, pequeñas y micro empresas. Eso hace pensar que mientras los grandes capitales se beneficiaban de la política económica *salinista*, los pequeños capitales sufrían la carga de la crisis económica.

***Aspectos que Censuran las organizaciones empresariales,  
prensa nacional 1994.***

<b>Organización</b>	<b>Política económica</b>	<b>Política-Política</b>
CCE	61.1%	38.9%
Coparmex	51.4%	42.9%
Concamin	58.3%	50.0%
Canacintra	52.4%	57.1%
Concanaco	57.1%	42.9%
Discurso empresarial	55.0%	46.0%

Elaboración propia con información de *El Financiero*.

En el caso del *discurso empresarial de 1994* se ha de considerar que se trata de una coyuntura muy compleja, donde el régimen que protegió los intereses de la elite económicamente poderosa se hunde en una crisis política, de ingobernabilidad y falta de credibilidad, lo cual comienza a hacer peligrar el proyecto social que comparten las elites: tanto la *tecnocracia* como los propietarios de los grandes capitales. En ese año, a pesar del *mito neoliberal* que Salinas promovió, las elites económicas utilizaron a sus organizaciones cúpula para mantener una corriente de opinión, en general, favorable a la política económica, situación por la cual *la censura* al sistema se muestra mesurada, alcanzando en el discurso empresarial general, el 7.9%. Los empresarios saben que no pueden abusar del

discurso político pues provocarían la crítica generalizada al proyecto económico que ellos promueven desde 1975, a partir de la creación del CCE.

En seguida, analizamos en términos generales el caso de las *demandas* empresariales que las organizaciones empresariales planteaban al gobierno mexicano. Lo interesante es considerar que el paso de la variable demanda en 1985 ocupaba el 21%, en 1993 el 32%, mientras que en 1994 el 33.4%, refleja que mientras los empresarios mantenían una posición beligerante ante el gobierno mexicano, como es el caso de 1985, predominaba la crítica sobre la variable demanda, a diferencia de los dos años siguientes en los que predomina la demanda sobre la censura. En todo caso lo que resulta interesante es ver cómo la variable demanda se amplía pasando de un total de 6 subvariables en 1985: 1) *austeridad, ajuste presupuestario*; 2) *liberación de precios y del comercio*; 3) *apoyo financiero, fiscal y/o infraestructura*; 4) *reprivatización de la economía*; 5) *salarios moderados*, y 6) *implementación de medidas económicas, fiscales, etc.*, mientras que en 1993 llegan a 10 subvariables y en 1994 a 13.

***Demandas de las Organizaciones empresariales planteadas al gobierno,  
prensa nacional 1994.***

Organización	b.1	b.2	b.3	b.4	b.5	b.6	b.7	b.8	b.9	b.10	b.11	b.12	b.13	b.14	b.15	b.16	b.17
CCE	11.9	1.6	1.6	7.9	1.6	1.6	30.2	15.1	26.2	9.5	16.7	4.8	7.9	0.8	0.0	0.0	4.0
Coparmex	23.0	3.0	2.0	5.0	4.0	3.0	37.0	17.0	30.0	7.0	15.0	4.0	5.0	2.0	0.0	1.0	2.0
Concamin	11.1	1.2	0.0	3.7	1.2	2.5	27.2	18.5	30.9	17.3	16.0	1.2	8.6	0.0	0.0	2.5	2.5
Canacintra	11.8	2.5	0.0	1.7	2.5	0.0	40.3	16.0	29.4	19.3	5.0	1.7	6.7	0.0	3.4	1.7	6.7
Concanaco	13.4	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	28.4	23.9	34.3	10.4	14.9	6.0	0.0	0.0	3.0	3.0	6.0
Discurso empresarial	14.2	2.2	0.8	4.5	2.0	1.4	33.3	17.4	29.6	12.8	13.2	3.4	6.1	0.6	1.2	1.4	4.3

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más subvariables.

**Demandas:**

- b.1** continuidad del proyecto económico
- b.2** control inflacionario
- b.3** reforma de la LFT
- b.4** tope salarial o salarios sujetos a productividad
- b.5** reforma al IMSS
- b.6** modernizar la educación
- b.7** nuevo marco fiscal y/o administrativo

- b.8 crédito, financiamiento y/o infraestructura**
- b.9 acción eficaz del gobierno**
- b.10 apoyo a la micro y pequeña empresa**
- b.11 empleo y combate a la pobreza**
- b.12 seguridad pública**
- b.13 estabilidad**
- b.14 reforma del Estado**
- b.15 política monetaria**
- b.16 redefinir el modelo**
- b.17 Reestructuración crediticia y de la Banca**

Como se puede observar, los empresarios mantienen sus *demandas básicas* que exigen, en general, la *continuidad del proyecto neoliberal*, al mismo tiempo que incorporan *demandas coyunturales*, como es el caso de las *subvariables: generación de empleo y combate a la pobreza, seguridad pública y estabilidad*. Estas *demandas* no se entenderían si no se sitúa la coyuntura de 1994, que se caracterizó por el incremento de la violencia, primero con el levantamiento indígena de Chiapas, los secuestros de grandes empresarios y los asesinatos políticos. Lo que en todo caso explica por qué se le denomina a 1994, electoralmente hablando, el año del “*voto del miedo*”. Mientras la gran constante de las subvariables de la *demanda empresarial*, es *reformular la Ley Federal del Trabajo*.

Las *demandas* de un actor político o de cierto sector de la sociedad adquieren un matiz de profunda importancia pues, en este caso, se advierte el poder empresarial para imponer el rumbo de la nación, el influir en la configuración del proyecto de nación en la medida que la *tecnocracia* considera los intereses empresariales en las decisiones que dan forma a los programas gubernamentales. O bien sugiere una coincidencia ideológica donde el programa del gobierno de los sexenios neoliberales (1982-2006), y desde luego el de Fox, se aproximan como calca al proyecto económico empresarial. En cualquiera de las dos posibilidades, la situación hace esperar el apoyo de ese sector a la gestión de la *tecnocracia*, de tal manera que aparece en el escenario político como un binomio que intenta dar legitimidad al proyecto neoliberal. Así, la *tecnocracia* se ve beneficiada por los consensos que pueda generar el discurso empresarial, y ellos garantizan la defensa de sus intereses.

A manera de ejemplo, se analiza sintéticamente la variable de *Gatt y economía*. Lo primero es destacar que la coyuntura económica de 1985 estaba marcada por la víspera de la incorporación de México al GATT, lo que consolidaría la apertura y liberación de la economía. De tal forma que en 1985, destacan las variables que registran la aceptación,

dudas o rechazo de las organizaciones empresariales para ingresar a ese organismo internacional. De estas tres opciones se entiende la diferente posición de las organizaciones: la COPARMEX no expresa posición, las manifestaciones del CCE son de total apoyo al ingreso, mientras que la CANACINTRA (representante de medianos, pequeños y micro empresarios) manifiesta su rechazo o incertidumbre al respecto. Obviamente, para 1993, la *subvariable GATT y economía*, en cualquiera de sus *variables*, no aparece ese año, pues lo que entonces estaba en discusión era la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Además, adquieren relevancia los *balances, positivos o negativos*, que las *organizaciones empresariales* hacen sobre la economía, como también las perspectivas, positivas y negativas de la misma. Un aspecto que aparece desde 1993 es la *subvariable economía informal*, sostenida fundamentalmente por la CONCANACO, a la cual se adscribe la CANACO de la Ciudad de México, organización que ha combatido de manera constante, y en ocasiones enconadamente, la presencia de la *economía informal* en el centro histórico de la ciudad de México. La cual se desarrolló anárquicamente en el último año del gobierno de Miguel de la Madrid, ante las vísperas de las elecciones de 1988, lo que obligó al entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre, a garantizar el apoyo del sector informal permitiéndoles ocupar el centro histórico, pero asegurando el reforzamiento de la estructura corporativa del partido oficial.

***Evaluación de las organizaciones empresariales sobre el TLC y la economía, prensa nacional, 1994.***

<b>Organización</b>	<b>c.1</b>	<b>c.2</b>	<b>c.3</b>	<b>c.4</b>	<b>c.5</b>	<b>c.6</b>	<b>c.7</b>
CCE	22.9%	49.4%	1.2%	2.4%	8.4%	26.5%	1.2%
Coparmex	14.5%	53.2%	4.8%	0.0%	14.5%	17.7%	3.2%
Concamin	15.1%	58.5%	3.8%	1.9%	9.4%	20.8%	1.9%
Canacintra	30.1%	54.8%	5.5%	1.4%	5.5%	9.6%	5.5%
Concanaco	8.1%	59.7%	0.0%	3.2%	12.9%	16.1%	17.7%
Discurso empresarial	18.9%	54.7%	3.0%	1.8%	9.9%	18.3%	5.7%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más subvariables.

**Economía:**

- c.1 balance positivo de la economía**
- c.2 balance negativo de la economía**
- c.3 expectativas negativas por el TLC**
- c.4 expectativas positivas por el TLC**

- c.5 perspectivas negativas de la economía
- c.6 perspectivas positivas de la economía
- c.7 economía informal

Es interesante observar que en 1993 las referencias sobre el TLC ocupan 24.7% del total del discurso en la variable economía, mientras que en 1994, tan sólo el 7.6%. Más interesante aún resulta que en 1993, el *discurso empresarial* en la *variable economía* ocupaba un 49% en hacer balances negativos de la economía, situación que hace aparecer contradictorio el apoyo que, en general, las organizaciones empresariales daban al gobierno *salinista*, pues la situación económica afectaba visiblemente los intereses de medianos, pequeños y micro empresarios. Para 1994, el balance negativo también alcanza un alto porcentaje: 44.4%.

En todo caso, lo que cabría reconocer es que existen tres tipos de empresarios (no se hace referencia a la estratificación del sector que se proyectaría a través del gran capital, medianos, pequeños y micro empresarios), por tanto, diferentes posiciones ante el sistema de toma de decisiones: 1) las *organizaciones empresariales* que aparentemente representan los intereses generales del sector y, que en todo caso, constituyen uno de los principales instrumentos a través de los cuales los empresarios presionaban a los tomadores de decisiones; 2) los grandes empresarios que manipulan a las organizaciones del sector para garantizar sus intereses particulares, y 3) los medianos, pequeños y micro empresarios que se ven afectados por la crisis económica y que no pueden utilizar a las organizaciones para presionar a la *tecnocracia* para que tome las medidas inmediatas para resolver su situación.

Vista así, la contradicción entre una maltrecha realidad económica y una posición empresarial, a partir de sus organizaciones, de apoyo irrestricto al gobierno mexicano, aparece disminuida pues se entiende que, en última instancia, la estructura corporativa de las organizaciones empresariales sirve más a las elites económicas que a la clase empresarial en general. Por esa razón, desde los años ochenta, ha adquirido forma una *crisis de representatividad* que pone en tela de juicio el papel que juegan las organizaciones empresariales como representantes formales del sector: la derogación de la Ley de Cámaras Empresariales estaba en puerta. De derogarse la obligatoriedad de afiliación en cámaras como CONCAMIN, CANCANACO y CANACINTRA, se pondría la puntilla a buena parte de la estructura organizativa empresarial, lo que haría esperar el fortalecimiento de

organizaciones como COPARMEX y CCE, que finalmente se sostienen financieramente por la afiliación voluntaria de sus miembros.

Otro ejemplo que se puede desprender del análisis del *discurso empresarial* es un breve comentario respecto a la *variable ideológico-político*, donde se aprecian las manifestaciones de las diferentes organizaciones empresariales sobre la sucesión presidencial y el sistema de partidos políticos, ya que se trata de un año electoral, 1994. Aquí, en general, los empresarios aparecen dando su apoyo al presidente de la nación en turno, Salinas de Gortari, y al partido oficial (indirectamente), aunque vale la pena destacar que hubo declaraciones, tanto del CCE como de COPARMEX, respecto a que había condiciones para que gobernara la oposición. En el caso del CCE, su apreciación obedeció al ambiente que prevaleció entre los primeros cuatro meses del año, donde a grandes rasgos se podía pensar en un escenario favorable al PRD. Mientras que COPARMEX se volcó en esta posición a partir del éxito obtenido por Diego Fernández de Cevallos, candidato presidencial del PAN, en el debate sostenido con los candidatos del PRI y PRD, el 12 de mayo de 1994.

***Perspectivas ideológico-políticas de las organizaciones empresariales,  
prensa nacional 1994.***

Organización	d.1	d.2	d.3	d.4	d.5	d.6
CCE	11.7%	23.3%	21.7%	33.3%	26.7%	15.0%
Coparmex	18.5%	27.2%	12.3%	18.5%	53.1%	7.4%
Concamin	17.6%	17.6%	14.7%	47.1%	41.2%	11.8%
Canacintra	19.0%	10.3%	12.1%	41.4%	25.9%	6.9%
Concanaco	27.8%	11.1%	5.6%	38.9%	19.4%	11.1%
Discurso empresarial	18.2%	19.3%	13.8%	33.1%	35.3%	10.0%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más de ellas.

**Ideológico-político:**

- d.1 sobre el papel de los actores sociales**
- d.2 sobre el sistema y partidos políticos**
- d.3 exhorta a elevar la productividad y competitividad**
- d.4 propone estrategias para enfrentar la crisis económica**
- d.5 promueve nuevos valores sociales**
- d.6 repudian la violencia**

Por otra parte, llama la atención que las variables del discurso empresarial que tuvieron mayor presencia en el manejo político-ideológico en la prensa nacional, fue el proponer “nuevos valores sociales” (35.3%) para resolver tanto cuestiones de índole política como de carácter económico. Desde el apego a una democracia que nuestra sociedad debe construir como a valores que hoy predominan en el mercado, es el caso de la productividad, la eficacia, la eficiencia, la competitividad, la solidaridad económica y el compromiso de la sociedad con el mercado. También se registro mucho interés de las organizaciones empresariales el proponer estrategias y soluciones a la crisis económica (33.1%), lo cual coloca a ese sector social como un actor que conoce la situación que vive el país, además de “tener en su mano” las soluciones de índole política y económica.

En el primer caso, el de la promoción de nuevos valores sociales, destaca el papel de la COPARMEX (53.1%), y en el segundo, el destaca el papel de la CONCAMIN (47.1%) y CANACINTRA (41.4%); quizá porque se trate de la representación del sector industrial, la actividad más afectada con la apertura comercial y cambio del modelo de acumulación.

En el caso del apoyo de las organizaciones empresariales, solo vale considerar que representa solo el 5.5% del total de su discurso en la prensa nacional, y que en su mayor parte se hace visible su aprobación respecto de la política económica tomada por el estado mexicano.

***Apoyo de las organizaciones empresariales al gobierno,  
prensa nacional, 1994.***

<b>Organización</b>	<b>Política económica</b>	<b>Política-Política</b>
CCE	84.0%	16.0%
Coparmex	60.0%	46.7%
Concamin	100.0%	--
Canacintra	92.3%	7.7%
Concanaco	75.0%	25.0%
Discurso empresarial	81.4%	20.0%

#### 4. 1. 5 *El discurso empresarial, 1995.*

El año de 1995 representa el primer año de un gobierno elegido a través de una importante participación ciudadana que, sin dejar fuera al *gran elector*, expresó una situación inédita en la vida política de nuestra nación: la emergencia de una *oposición real* que compite por el poder. En todo caso, lo que más llama la atención es cómo un gobierno que goza de la legalidad para ejercer el poder, sufrió los efectos de la *deslegitimidad* en el momento que la sociedad regateaba la *credibilidad* que requiere todo régimen democrático. La razón era muy simple: el gobierno de Zedillo mantenía una obstinada decisión de mantener excluidas a las clases subalternas, así como a medianos, pequeños y micro empresarios. Se trataba de una situación inversa al proceso de legitimación que vimos en el sexenio de Salinas de Gortari, pues al provenir de un proceso electoral inusualmente cuestionado, rápidamente logró legitimarse mediante una serie de decisiones que iban de lo político a lo económico. Sin duda el mejor mérito político de Salinas de Gortari fue el ofrecerle a la sociedad mexicana el boleto sin retorno de un futuro promisorio, esto es, lograr la credibilidad en el sistema y, por tanto, resarcir la crisis política en que se encontraban las estructuras políticas oficiales. En esa lógica, el sexenio 1988-1994 estaba marcado por un proceso que iba de la deslegitimación a la legitimación, mientras el sexenio de Zedillo (1994-2000) parecía transitar en un proceso que *va de la legalidad a la deslegitimación*.

Se trataba de los esfuerzos que realizó Salinas a lo largo de su sexenio para contener los desequilibrios de la balanza comercial, la deuda externa, la incapacidad del mercado nacional provocado por la política de tope salarial y la presión sobre el peso; medidas que no evitaron que finalmente se hiciera evidente la crisis económica a pesar de las renegociaciones de la deuda externa que realizó ese gobierno. El error de diciembre, con el que se conoce la crisis financiera de diciembre de 1994 fue el preámbulo del primer año de gobierno de Zedillo.

Es en este contexto que resulta interesante analizar el discurso empresarial pues no cabe duda que las elites empresariales jugaron un papel preponderante en la legitimación del proyecto neoliberal en el sexenio de Salinas de Gortari y Zedillo, de tal manera que el discurso de sus organizaciones de sector (CCE, COPARMEX, CONCAMIN, CANACINTRA y CONCANACO) establece, primero, la posición de estas organizaciones

ante los cambios que registra la coyuntura; segundo, las diferencias existentes entre la posición de cada una de ellas, y tercero, la posible distancia entre lo que hace el gobierno y el proyecto de nación empresarial.

En la primera tabla sobre el discurso de las organizaciones empresariales de 1995, se observa nuevamente una mayor presencia del discurso de la CANACINTRA (25.2%), seguida del CCE (22.8%) y por la COPARMEX (20.5%), después por la CONCANACO (16.9%) y la CONCAMIN (14.6%). No obstante, cabe recordar que la reiterada presencia de CANACINTRA obedece a que se trata de la representación del sector empresarial más golpeado por el avance del proyecto neoliberal; en el caso del CCE de la organización cúpula de cúpula al que le correspondería ocupar normalmente la posición en los medios de comunicación más visible y la COPARMEX, organización más polítizada y que inevitablemente está siempre de frente a los medios de comunicación masiva.

***Presencia de las organizaciones empresariales  
en la prensa nacional, 1995.***

<b>Organización</b>	<b>declaraciones</b>	<b>%</b>
CCE	139	22.8%
Coparmex	125	20.5%
Concamin	89	14.6%
Canacindra	154	25.2%
Concanaco	103	16.9%
Discurso empresarial	610	100.0%

Elaboración propia a partir del periódico  
*El Financiero*.

En la siguiente tabla presentamos la diversidad del discurso de las organizaciones empresariales para 1995. Aquí advertimos una cuasi desaparición de la variable *censura* por lo que no habrá necesidad de hacer el análisis de esa variable; como también es el caso de la variable *apoyo* empresarial al gobierno, a la cual se le aplicará el mismo criterio que a la *censura*.

De esa forma nos concentraremos en las principales preocupaciones de las organizaciones empresariales, como sucede con la variable de las *demandas* (42.1%) lo que

la aproxima, a casi la mitad de las referencias del discurso y que comparten, prácticamente, el conjunto de las organizaciones empresariales que contemplamos en esta investigación.

***Diversidad discursiva de las organizaciones empresariales en la prensa nacional, 1995.***

<b>Organización</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>Total</b>
CCE	0.8%	38.7%	26.9%	27.3%	6.3%	100.0%
Coparmex	4.9%	44.0%	17.8%	29.8%	3.6%	100.0%
Concamin	1.9%	44.1%	26.1%	23.0%	5.0%	100.0%
Canacintra	4.0%	44.8%	23.1%	23.5%	4.7%	100.0%
Concanaco	1.6%	39.1%	30.2%	24.5%	4.7%	100.0%
Discurso empresarial	2.7%	42.1%	24.5%	25.7%	4.9%	100.0%

Elaboración propia con información de *El Financiero*.

- Variables**
- A) Censura**
  - B) Demandas**
  - C) Economía**
  - D) Ideológico-político**
  - E) Apoyo**

No obstante, un comentario obligado es que la variable *censura* alcanza en 1995, el 2.7%, a diferencia de 1994 que alcanzó el 1.5%, aunque se trata de un porcentaje demasiado bajo (recordemos que la censura en el discurso de 1985, alcanzaba el 29%), el hecho de que prácticamente se duplique el porcentaje, refleja un cambio a considerar en la relación de las organizaciones empresariales y el gobierno mexicano. Por otra parte es importante destacar la beligerancia que COPARMEX expresa al destinar 4.9% de su discurso a la *censura*; así como el 4% en el caso de la CANACINTRA. Se trata de dos casos muy importantes pues antes de 1993, COPARMEX mantuvo una posición muy crítica ante el gobierno mexicano, aunque después volcó buena parte de su quehacer político a apoyar la gestión de Salinas de Gortari. En todo caso es importante destacar que desde principios de 1994, reformuló su posición y se vio muy próxima a las posturas del Partido Acción Nacional, como es el caso de la *Propuesta del Proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo*. Por otra parte, el caso de CANACINTRA expresa el sentir del sector empresarial más golpeado por la crisis y las políticas económicas instrumentadas en el neoliberalismo, lo cual explica más la desazón empresarial frente a la insensibilidad gubernamental que un posicionamiento partidista.

En ese mismo sentido tenemos que para 1995 predominó en el discurso empresarial la variable *demandas* con un 42%, cuando en 1994 obtuvo el 33.4%. Eso refleja la consolidación del sector empresarial como un actor político capaz de representar a la sociedad mexicana, sus demandas recorren un espectro de *16 subvariables*, las cuales representan un excelente punteo de los principales problemas que aquejan al país en ese año (véase Tabla *demandas*, 1995). De tal manera que la idea de nación que los empresarios mexicanos tienen queda plasmada en esta variable; lo que llama la atención es que mientras la subvariable *continuidad del proyecto económico* ocupa el 19.3% del total de las *demandas empresariales* en 1994, en 1995 apenas logra el 1.7%, situación que se complementa con la aparición de la subvariable *redefinir el modelo*, la cual alcanza 10.5%. Es decir, que tales cambios expresan una evidente proximidad del sector empresarial con el proyecto neoliberal definido en la administración de Zedillo. A pesar de ello, va adquiriendo relevancia la demanda de *una acción eficaz del gobierno*, misma que alcanzó un 66.6% del total de esa variable. Otro elemento que destaca en la composición de la variable *demanda* es que el porcentaje alcanzado por la subvariable *nuevo marco fiscal y/o administrativo*, planteamiento añejo que proveniente desde 1975, y cuya presencia refleja la búsqueda del apoyo gubernamental que tanto favoreció al sector empresarial en el pasado. Esto sugiere que mientras los empresarios *demandan acciones de apoyo* que favorezcan sus intereses, *censuran el paternalismo* tendiente a satisfacer las necesidades de las clases subalternas. Piden proteccionismo fiscal y niegan la pertinencia de un proteccionismo social.

***Demandas de las Organizaciones empresariales planteadas al gobierno, prensa nacional 1995.***

Organización	b.1	b.2	b.3	b.4	b.5	b.6	b.7	b.8	b.9	b.10	b.11	b.12	b.13	b.14	b.15	b.16
CCE	2.0	7.1	9.2	3.1	2.0	2.0	50.0	15.3	57.1	17.3	19.4	-	5.1	7.1	7.1	6.1
Coparmex	2.0	1.0	13.1	4.0	1.0	6.1	46.5	20.2	74.7	15.2	16.2	2.0	4.0	22.2	7.1	11.1
Concamin	1.4	8.5	9.9	2.8	1.4	1.4	57.7	22.5	69.0	22.5	11.3	1.4	7.0	2.8	2.8	16.9
Canacintra	1.6	7.3	4.0	1.6	3.2	0.8	43.5	29.0	70.2	24.2	15.3	0.8	0.8	3.2	4.8	14.5
Concanaco	1.3	5.3	5.3	2.7	1.3	0.0	50.7	16.0	60.0	16.0	10.7	4.0	1.3	8.0	6.7	2.7
Discurso empresarial	1.7	5.8	8.1	2.8	1.9	2.1	48.8	21.2	66.6	19.3	15.0	1.5	3.4	8.8	5.8	10.5

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más de ellas.

#### Demandas:

- |  |  |
|--|--|
| <b>b.1</b> continuidad del proyecto económico    | <b>b.9</b> acción eficaz del gobierno          |
| <b>b.2</b> control inflacionario                 | <b>b.10</b> apoyo a la micro y pequeña empresa |
| <b>b.3</b> reforma de la LFT                     | <b>b.11</b> empleo y combate a la pobreza      |
| <b>b.4</b> salarios sujetos a productividad      | <b>b.12</b> seguridad pública                  |
| <b>b.5</b> reforma al IMSS                       | <b>b.13</b> estabilidad                        |
| <b>b.6</b> modernizar la educación               | <b>b.14</b> reforma del Estado                 |
| <b>b.7</b> nuevo marco fiscal y/o administrativo | <b>b.15</b> política monetaria                 |
| <b>b.8</b> financiamiento y/o infraestructura    | <b>b.16</b> redefinir el modelo                |

Otro ejemplo que se ha de destacar se sitúa en el caso de la variable *Gatt y economía* pues es realmente sorprendente que la evaluación de esta variable sea predominantemente negativa, en la medida que la subvariable *balance negativo de la economía* hubiera alcanzado en 1995 un 60.7%, a diferencia de 1994, cuando alcanzó un 44.4%. Esto aparece como la mejor *censura* del proyecto neoliberal, situación que confirma una tendencia hacia el alejamiento de las *organizaciones empresariales* de las estrategias del gobierno. Al parecer, las estructuras corporativas empresariales no representarían el sustento político que en otros momentos electorales tuvo el partido oficial y la gestión presidencial. Obviamente, en la lectura de Zedillo y la de sus principales asesores, esto no constituía la erosión del poder presidencial sino de la decisión política del presidente.<sup>3</sup> Por lo tanto, este proceso no es efecto de una crisis política que alcance expresión en el deterioro de la imagen presidencial y la falta de credibilidad, en general, sino a la intención y compromiso político del presidente Zedillo para promover la transición democrática.

Por otra parte, si Salinas de Gortari logró convencer a la sociedad en general, y en particular a los empresarios mexicanos, que la solución a la crisis económica iba por buen rumbo, el hecho que las *perspectivas negativas de la economía* en el discurso empresarial de 1995 alcanzaran el 31.3% del total de esa variable, reflejan la falta de credibilidad de este sector en el gobierno de Zedillo, pero lo que era peor, reflejaba la situación real de una economía maltrecha que difícilmente repuntaría en el futuro inmediato. En todo caso los

---

<sup>3</sup> Véase entrevista de Esteban Moctezuma Barragán, *Reforma*, 20 de noviembre de 1996.

resultados económicos de 1996 y las posibilidades de 1997, no hacen otra cosa que confirmar la complejidad de la crisis económica mexicana.

**Evaluación de las organizaciones empresariales sobre  
el TLC y la economía, prensa nacional, 1995.**

<b>Organización</b>	<b>c.1</b>	<b>c.2</b>	<b>c.3</b>	<b>c.4</b>	<b>c.5</b>	<b>c.6</b>	<b>c.7</b>
CCE	4.4%	57.4%	1.5%	1.5%	38.2%	25.0%	2.9%
Coparmex	0.0%	65.0%	0.0%	2.5%	17.5%	15.0%	7.5%
Concamin	7.1%	50.0%	2.4%	0.0%	28.6%	28.6%	9.5%
Canacintra	4.7%	71.9%	3.1%	0.0%	32.8%	12.5%	3.1%
Concanaco	3.4%	56.9%	3.4%	1.7%	32.8%	13.8%	12.1%
Discurso empresarial	4.0%	60.7%	2.2%	1.1%	31.3%	18.8%	6.6%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más de ellas.

- Economía:**
- c.1 balance positivo de la economía**
  - c.2 balance negativo de la economía**
  - c.3 expectativas negativas por el TLC**
  - c.4 expectativas positivas por el TLC**
  - c.5 perspectivas negativas de la economía**
  - c.6 perspectivas positivas de la economía**
  - c.7 economía informal**

En la siguiente tabla tenemos las manifestaciones del discurso empresarial en 1995, sobre aspectos que develan sus posiciones ideológico-políticas. De ello destaca, su preocupación por plantear estrategias para resolver la crisis económica, donde no es de extrañar que CANACINTRA hubiese ocupado en ese sentido el 66.2% del espacio asignado a esa variable. Con tales posiciones le sigue la CONCANACO (63.8%), la CONCAMIN (56.8%) y el CCE (52.2%). Luego tenemos la subvariable donde las organizaciones empresariales expresan sus expectativas y concepciones sobre las responsabilidades de los diferentes actores sociales (29.8%), donde destaca la importancia que a ello concede la COPARMEX (38.8%), la CONCAMIN (37.8%) y el CCE (33.3%). Situación que comprueba nuevamente el liderazgo del sindicato empresarial: COPARMEX.

***Perspectivas ideológico-políticas de las organizaciones empresariales, prensa nacional 1995.***

<b>Organización</b>	<b>d.1</b>	<b>d.2</b>	<b>d.3</b>	<b>d.4</b>	<b>d.5</b>	<b>d.6</b>
CCE	33.3%	23.2%	10.1%	52.2%	1.4%	7.2%
Coparmex	38.8%	26.9%	7.5%	40.3%	4.5%	3.0%
Concamin	37.8%	0.0%	21.6%	56.8%	0.0%	0.0%
Canacintra	20.0%	15.4%	9.2%	66.2%	1.5%	4.6%
Concanaco	19.1%	10.6%	6.4%	63.8%	0.0%	10.6%
Discurso empresarial	29.8%	17.2%	10.2%	55.1%	1.8%	5.3%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más subvariables.

**Ideológico-político:**

- d.1 sobre el papel de los actores sociales**
- d.2 sobre el sistema y partidos políticos**
- d.3 exhorta a elevar la productividad y competitividad**
- d.4 propone estrategias para enfrentar la crisis económica**
- d.5 promueve nuevos valores sociales**
- d.6 repudian la violencia**

Se trata de una coyuntura, 1995, en la cual el discurso empresarial no muestra resquicios respecto a constituirse en el principal referente legitimador de un modelo económico que tiene su continuidad desde 1982, con el ascenso de la tecnocracia a la presidencia de la república.

#### *4. 1. 6 El discurso empresarial, 1996.*

Sin duda alguna los eventos políticos más importantes de los noventa están marcados, primero, por la legitimación del gobierno de Salinas de Gortari, quien en los tres primeros años de su gestión gozaba del respaldo de importantes sectores sociales, donde destaca el sector empresarial, después de las marcadas sospechas del fraude electoral de 1988. Segundo, la ausencia en el escenario político de algún actor social realmente representativo de las clases subalternas. Tercero, la emergencia del EZLN el primero de enero de 1994, seguida por la ola de violencia que inició con el secuestro de importantes empresarios, el

asesinato del candidato oficial, Luis Donald Colosio, y más tarde, en ese mismo año, con el asesinato del Secretario General del PRI, José Francisco Ruíz Massieu, cuando se descubrieron algunas redes de corrupción detrás del gobierno *salinista*. Cuarto, el repunte del sistema político con el predominio del partido oficial; y quinto, una crisis económica que atraviesa toda la década, de la que sacan provecho las elites empresariales y empeora la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos, situación que se cubre con un discurso moderno que exalta la necesidad de concretar la *reforma del Estado*.

El primer punto está relacionado con el predominio ideológico que se articula a nivel internacional, sin embargo, es fundamental establecer si el discurso de los actores permite definir el peso de los contendientes en el escenario político. En el caso particular de los empresarios mexicanos, se detecta en el año de 1996 una disminución de la actividad política que, normalmente, se reactiva en las coyunturas electorales de mayor importancia.

Nos referimos a la tendencia detectada a lo largo de la década, donde la referencia inmediata es el tipo de discurso prevaleciente desde mediados de los ochentas. Esto es, un *discurso ideológico-político* que comienza a adquirir forma, sobre todo, en el plano económico, y que define rudimentariamente lo que ese sector social espera del proyecto de nación. Se plantean sus demandas económicas que se reducen a los puntos básicos del modelo neoliberal ya descritos a lo largo de este trabajo, así como también se ofrece una perspectiva de los problemas más urgentes en el terreno de la política y, se expresa el balance que hace este sector de la economía.

Esa forma del *discurso empresarial* denota una parte importante del proceso de maduración política de este importante actor social. Es decir, un proceso de transformación de un *discurso* que todavía se mostraba incrédulo hacia la vocación neoliberal de la tecnocracia priísta, a mediados de los ochenta, a otro de virtual apoyo a la ratificación de política económica guiada por el libre mercado. Pero el *discurso* que se observa en los noventa, nos habla de un actor político maduro, con una experiencia que le permite manejar su presencia en el escenario político como el mejor instrumento para presionar al gobierno mexicano, apoyarlo cuando la coyuntura es favorable a la oposición, y cuestionarlo cuando las decisiones gubernamentales, y sobre todo las económicas, no responden a la totalidad de las *demandas empresariales*.

De tal manera que pasaremos a comentar brevemente algunas implicaciones del discurso empresarial de 1996, para identificar los puntos de interés para este actor político y la variedad de aspectos que toma su *proyecto de nación*, lo que sugiere el protagonismo de un sector social que ha salido triunfante en la confrontación política del proceso de transición.

Si observamos el *total de las declaraciones detectadas* en 1996 en los medios impresos, sorprende observar que éstas alcanzaron la cifra de 884, un promedio de 240 declaraciones más que en 1994 y 1995. Esto sugiere una participación creciente en el escenario nacional, contrastando con el prácticamente desaparecido movimiento sindical que se queda sin *discurso político* y que, por tanto, cede su cuota de poder a los actores prevalecientes.

***Presencia de las organizaciones empresariales  
en la prensa nacional, 1996.***

<b>Organización</b>	<b>Declaraciones</b>	<b>Porcentaje</b>
CCE	210	23.8%
Coparmex	193	21.8%
Concamin	139	15.7%
Canacinfra	199	22.5%
Concanaco	143	16.2%
Discurso empresarial	884	100.0%

Elaboración propia a partir del periódico *El Financiero*.

En esta tabla se observa nuevamente la significativa participación del CCE (23.8%), la CANACINTRA (22.5%) y la COPARMEX (21.8%); lo cual confirma que comparativamente la CONCANACO (16.2%) y la CONCAMIN (15.7%) tengan un papel de bajo perfil en los medios de comunicación. No obstante, cabe destacar que si bien es importante establecer las diferencias entre las organizaciones empresariales, también es muy significativo que éstas dos últimas se suman y hacen unidad en la lógica de la presencia del sector en opinión pública.

***Diversidad discursiva de las organizaciones empresariales  
en la prensa nacional, 1996.***

<b>Organización</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>Total</b>
CCE	5.8%	40.4%	26.6%	19,2%	8.0%	100.0%
Coparmex	11.9%	34.1%	21.2%	27,6%	5.0%	100.0%
Concamin	6.3%	42.9%	28.0%	18,0%	4.8%	100.0%
Canacindra	7.4%	41.9%	25.7%	20,4%	4.6%	100.0%
Concanaco	7.5%	35.8%	33.2%	19,3%	4.3%	100.0%
Discurso empresarial	7.9%	39.0%	26.3%	21,3%	5.5%	100.0%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más subvariables.

- Variables:**
- A) Censura**
  - B) Demandas**
  - C) Economía**
  - D) Ideológico-político**
  - E) Apoyo**

La siguiente tabla nos muestra la diversidad discursiva del discurso de las organizaciones empresariales en 1996. Se trata de reconocer las variables que los empresarios manejan en el discurso que inscriben en el espacio público. En esta estructura del discurso de las organizaciones empresariales, donde vuelve a aparecer la variable *Censura* y *Apoyo*, lo cual refleja un reposicionamiento en el escenario político, pues después de pasar claros momentos conflictivos con el estado mexicano, particularmente los relativos a la expropiación de la banca el 1º de septiembre de 1982, se adopta una actitud de conciliación que habla del respaldo político que los empresarios le brindaron a Salinas de Gortari. De tal manera que la reaparición de esas variables en el *discurso empresarial*, no necesariamente tendrían que interpretarse como una actitud beligerante contra el gobierno mexicano, sino como un indicador que sugiere la maduración de un actor político que poco a poco se va apropiando del escenario nacional, la contienda política y la confrontación ideológica.

***Aspectos que Censuran las organizaciones empresariales,  
prensa nacional 1996.***

Organización	Política económica	Política-Política
CCE	61.1%	38.9%
Coparmex	51.4%	42.9%
Concamin	58.3 %	50.0 %
Canacintra	52.4%	57.1%
Concanaco	57.1%	42.9%
Discurso empresarial	55.0%	46.0%

Elaboración propia con información de *El Financiero*.

Como se puede observar, la censura que las organizaciones empresariales hacían al gobierno de Zedillo, variaba entre el tipo de decisiones gubernamentales tomadas y la forma de recrear la política. No obstante, es importante que esta variable va en claro declive en el espectro del discurso empresarial (7.9%), lo cual también refleja la clara coincidencia ideológica con este gobierno.

La siguiente tabla muestra la composición de la variable *demandas* que alcanzan el 39% del total del discurso empresarial. En ellas es importante destacar la relevancia que tiene la *demanda de un nuevo marco fiscal*, desde luego favorable a los intereses sectoriales. Sin embargo, se observó que dentro del manejo ideológico de las organizaciones empresariales, en varias ocasiones se intentó demandar al gobierno que adoptara un modelo fiscal favorable a la empresa, mismo que también beneficiaría, según ellos, a los trabajadores. Ello refleja las *aspiraciones de liderazgo social* que las organizaciones empresariales pretenden, sobre todo, la COPARMEX. También es de destacar la presencia de la subvariable *b.8 Crédito, financiamiento y/o infraestructura* que refleja cómo a pesar de los reclamos y críticas contra el populismo, pretextando la profundidad de la crisis económica, demandan permanentemente mejores créditos para los empresarios, financiamientos u otro tipo de apoyos económicos que hagan más llevadera la crisis. Desde luego están en contra de cualquier tipo de subsidio para las clases trabajadoras. Y por último, habría de destacarse la presencia de la subvariable *b. 17 Reestructuración crediticia y de la banca*, donde se aprovecha para criticar el manejo del

circuito financiero que quedó en manos de los nuevos banqueros beneficiados por la política económica del gobierno salinista.

***Demandas de las Organizaciones empresariales planteadas al gobierno, prensa nacional 1996.***

Organización	b.1	b.2	b.3	b.4	b.5	b.6	b.7	b.8	b.9	b.10	b.11	b.12	b.13	b.14	b.15	b.16	b.17
CCE	11.9	1.6	1.6	7.9	1.6	1.6	30.2	15.1	26.2	9.5	16.7	4.8	7.9	0.8	0.0	0.0	4.0
Coparmex	23.0	3.0	2.0	5.0	4.0	3.0	37.0	17.0	30.0	7.0	15.0	4.0	5.0	2.0	0.0	1.0	2.0
Concamin	11.1	1.2	0.0	3.7	1.2	2.5	27.2	18.5	30.9	17.3	16.0	1.2	8.6	0.0	0.0	2.5	2.5
Canacintra	11.8	2.5	0.0	1.7	2.5	0.0	40.3	16.0	29.4	19.3	5.0	1.7	6.7	0.0	3.4	1.7	6.7
Concanaco	13.4	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	28.4	23.9	34.3	10.4	14.9	6.0	0.0	0.0	3.0	3.0	6.0
Discurso empresarial	14.2	2.2	0.8	4.5	2.0	1.4	33.3	17.4	29.6	12.8	13.2	3.4	6.1	0.6	1.2	1.4	4.3

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más subvariables.

**Demandas:**

- b.1** continuidad del proyecto económico
- b.2** control inflacionario
- b.3** reforma de la LFT
- b.4** tope salarial o salarios sujetos a productividad
- b.5** reforma al IMSS
- b.6** modernizar la educación
- b.7** nuevo marco fiscal y/o administrativo
- b.8** crédito, financiamiento y/o infraestructura
- b.9** acción eficaz del gobierno
- b.10** apoyo a la micro y pequeña empresa
- b.11** empleo y combate a la pobreza
- b.12** seguridad pública
- b.13** estabilidad
- b.14** reforma del Estado
- b.15** política monetaria
- b.16** redefinir el modelo
- b.17** Reestructuración crediticia y de la Banca

En la siguiente tabla observamos el comportamiento de la variable *Gatt y economía* que ocupa el 26.3% del total del discurso empresarial de 1996. En ésta es de destacar la poca frecuencia con que el empresario mexicano se refirió a los aspectos del TLCAN, lo gravoso del asunto era que en el terreno económico no se daban los cambios sustanciales entre el antes y el ahora, sobre todo si consideramos que la dependencia hacia los Estados Unidos se ha incrementado un tanto más. Lo que explica en mucho, el cambio de la política

económica del gobierno mexicano respecto a abrir las puertas al intercambio con la Comunidad Económica Europea. Pero lo que no deja de ser una constante, son los balances negativos sobre la economía nacional por parte de las organizaciones empresariales, lo que ha de explicarse como un elemento más de presión política para fortalecer el tipo de propuestas que ese sector social hace para resolver la situación de crisis que se vive desde los años ochenta.

***Evaluación de las organizaciones empresariales sobre el TLC y la economía, prensa nacional, 1996.***

<b>Organización</b>	<b>c.1</b>	<b>c.2</b>	<b>c.3</b>	<b>c.4</b>	<b>c.5</b>	<b>c.6</b>	<b>c.7</b>
CCE	22.9%	49.4%	1.2%	2.4%	8.4%	26.5%	1.2%
Coparmex	14.5%	53.2%	4.8%	0.0%	14.5%	17.7%	3.2%
Concamin	15.1%	58.5%	3.8%	1.9%	9.4%	20.8%	1.9%
Canacintra	30.1%	54.8%	5.5%	1.4%	5.5%	9.6%	5.5%
Concanaco	8.1%	59.7%	0.0%	3.2%	12.9%	16.1%	17.7%
Discurso empresarial	18.9%	54.7%	3.0%	1.8%	9.9%	18.3%	5.7%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más subvariables.

- Economía:**
- c.1 balance positivo de la economía**
  - c.2 balance negativo de la economía**
  - c.3 expectativas negativas por el TLC**
  - c.4 expectativas positivas por el TLC**
  - c.5 perspectivas negativas de la economía**
  - c.6 perspectivas positivas de la economía**
  - c.7 economía informal**

Se trata de observar la casi nula referencia de los empresarios sobre los aspectos del TLC, esto revela, en nuestra opinión, que los empresarios mexicanos a través de sus organizaciones demostraban el desencanto sobre las posibilidades de ese tratado comercial. Ya se había hecho tan evidente, sobre todo a partir de las estadísticas sobre el quiebre de empresas, que la pregonada apertura de la economía y su inserción, primero, en el GATT, luego en el TLCAN, solo había favorecido a los grandes empresarios y ampliado los espacios del mercado internacional donde el grueso de las empresas mexicanas no tienen oportunidades de competir eficientemente.

En la siguiente tabla presentamos lo referente a la posición *política-ideológica* del empresariado nacional que ocupó el 21.3% del total de su *discurso* en el año de 1996.

Destaca sobre todo, el perfil de un actor político que anteriormente rehuía discutir públicamente lo referente al modelo económico. En la década de los noventa aparece cuestionando, opinando, tirando línea sobre cuestiones como la democracia, el sistema político, los actores sociales (trabajadores y empresarios). Esto es reflejo de un actor político que está en condiciones de exhortar a la sociedad mexicana a promover una *nueva cultura social* en la que se destaque el compromiso social, desde luego privilegiando el compromiso de los actores con la producción, y en general nuevos valores sociales que combatan el deterioro político de nuestra sociedad. Por ello, no es gratuito que se trabaje para promover como valor el compromiso de los trabajadores con la *productividad*, o en el plano político, el combate a la corrupción del cual los empresarios nunca se sienten parte.

***Perspectivas ideológico-políticas de las organizaciones empresariales, prensa nacional 1996.***

<b>Organización</b>	<b>d.1</b>	<b>d.2</b>	<b>d.3</b>	<b>d.4</b>	<b>d.5</b>	<b>d.6</b>
CCE	11.7%	23.3%	21.7%	33.3%	26.7%	15.0%
Coparmex	18.5%	27.2%	12.3%	18.5%	53.1%	7.4%
Concamin	17.6%	17.6%	14.7%	47.1%	41.2%	11.8%
Canacintra	19.0%	10.3%	12.1%	41.4%	25.9%	6.9%
Concanaco	27.8%	11.1%	5.6%	38.9%	19.4%	11.1%
Discurso empresarial	18.2%	19.3%	13.8%	33.1%	35.3%	10.0%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más de ellas.

**Ideológico-político:**

- d.1 sobre el papel de los actores sociales**
- d.2 sobre el sistema y partidos políticos**
- d.3 exhorta a elevar la productividad y competitividad**
- d.4 propone estrategias para enfrentar la crisis económica**
- d.5 promueve nuevos valores sociales**
- d.6 repudian la violencia**

En la variable ideológico-política llama la atención cómo las organizaciones empresariales conceden mayor importancia a expresar en los medios de comunicación los valores sociales (35.3%) que, según ellos, reforzaría el potencial del país para enfrentar la competencia internacional, así como sus propuestas para enfrentar la crisis económica (33.1%). Todo ello constituye en la lógica del espacio público, un referente para legitimar la continuidad del modelo tecnocrático. En el primer caso, destaca el papel de la COPARMEX (53.1%) y

que explica el por que esta organización ha sido la punta de lanza en la confrontación empresarios-gobierno; y como en el segundo caso, CONCAMIN (47.1%) refrenda la sensibilidad del sector industrial respecto a los efectos de la economía.

De hecho, en la siguiente tabla se observa cómo de manera generalizada en el conjunto de las organizaciones empresariales, las decisiones gubernamentales en materia de política económica (81.4%) constituye uno de los aspectos más sensibles para este sector.

***Apoyo de las organizaciones empresariales al gobierno,  
prensa nacional, 1996.***

<b>Organización</b>	<b>Política económica</b>	<b>Política-Política</b>
CCE	84.0%	16.0%
Coparmex	60.0%	46.7%
Concamin	100.0 %	-
Canacindra	92.3%	7.7%
Concanaco	75.0%	25.0%
Discurso empresarial	81.4%	20.0%

Elaboración propia con información de *El Financiero*.

En este apretadísimo resumen del *discurso de las organizaciones empresariales* en 1996, es posible sostener que se trata de un actor político que cada vez tiene mayor presencia en el escenario nacional, que *es una fuerza social capaz de generar corrientes de opinión favorables o negativas hacia el sistema imperante*, lo cual lo proyecta como un elemento político capaz de legitimar un modelo social desfavorable a las mayorías, como sucedió a lo largo de los años ochenta y noventa. Sin embargo, es importante destacar que en los siguientes años, su presencia disminuye considerablemente, lo que proyecta al discurso empresarial con menos recursos retóricos, lo cual sugiere la confianza total en el régimen y el desplazamiento a otro punto del escenario político, de los principales puntos de negociación de las elites. Aunque es obvio que en las elecciones del 2000 las principales *organizaciones empresariales* volverían a ser los mejores reflectores para los candidatos presidenciales, así como de todos los candidatos a gobernadores de los estados y de la misma capital de la república. El neoliberalismo aparece en México en el contexto de una

transición estancada en una profunda crisis que impidió rectificar el rumbo del modelo de desarrollo *populista*. En los espacios que abrió la crisis para luchar por cuotas de poder, fueron aprovechados por la *tecnocracia* que ascendió en 1982 con la llegada de De la Madrid a la presidencia de la república. El proyecto instaurado con el consenso de los grandes empresarios mexicanos dio rápidamente pruebas que se trataba de un proyecto excluyente para la clase trabajadora y benéfico para los intereses de las elites.

El proyecto neoliberal mantuvo una fe absoluta en los efectos positivos de una *economía de libre mercado*, por lo que adquirió forma en lo económico a partir de: 1) apertura y liberación de la economía, 2) privatización, 3) adelgazamiento del Estado, y 4) política de tope salarial. Esto provocó el deterioro del mercado nacional repercutiendo en la quiebra de medianos, pequeños y micro empresarios, y por tanto, en el incremento del desempleo, y en general, al dismantelar los subsidios estatales, desgastar los niveles de vida de la mayor parte de los mexicanos.

En el ámbito político los cambios se registraron a partir del cambio de actores sociales que ahora resultaron favorecidos por la *nueva racionalidad gubernamental*. Así, los grandes empresarios vieron concretar sus demandas sectoriales en el proyecto de nación que promovió la *tecnocracia*. La derecha se consolidó en el poder y así logró imponer los valores de la economía sobre los de la política y, por tanto, los de la sociedad. La democracia fue postergada en beneficio de la modernización económica que subordinó las necesidades de las mayorías.

Sin embargo, el costo social del neoliberalismo ha propiciado que la transición política modifique la estructura de poder formal pues la oposición real, y sobre todo la presencia de la izquierda organizada entorno al PRD, prometía imponer el equilibrio político entre el poder ejecutivo y el legislativo que abriría las puertas a la democracia y, por tanto, a la construcción de un proyecto de nación incluyente, fundado en los principios de pluralismo político y en un deseable estado de derecho que pusiera fin a la violencia material y simbólica que aqueja a nuestra sociedad.

#### 4. 1. 7 El discurso empresarial de 1997.

Como en los casos anteriores, el *discurso empresarial* de 1997, nos permite observar cuál es la presencia de cada una de las organizaciones en el *escenario público* que priva en ese año. Esto es, la presencia concreta del CCE, la COPARMEX, la CONCAMIN, la CANACINTRA y la CONCANACO, así como el *discurso general* que por este conducto presenta el sector empresarial. De esa forma, es factible reconocer en la siguiente tabla que la organización que tuvo mayor presencia en los medios de difusión masiva, sobre todo en la prensa con cobertura nacional, es el CCE, el cual alcanzó una presencia del 31.6%, al tiempo que las demás organizaciones oscilaron entre el 18.7 % y el 14.6 %, reflejando la jerarquía de la primera y la homogeneidad de las segundas.

#### ***Presencia de las organizaciones empresariales en la prensa nacional, 1997.***

<b>Organización</b>	<b>Declaraciones</b>	<b>%</b>
CCE	187	31.6%
Coparmex	111	18.7%
Concamin	99	16.7%
Canacindra	86	14.6%
Concanaco	109	18.4%
Discurso empresarial	592	100.0%

Elaboración propia a partir del periódico *El Financiero*.

En la siguiente tabla se observan los detalles respecto a las variables del *discurso empresarial*, tenemos: A. *Censura*; B. *Demandas*; C. *Economía*; D. *Ideológico-político*; E. *Apoyo*. La diferencia en la composición del discurso refleja, al menos, una transformación radical que explica el cambio de la posición empresarial respecto al Estado. Como se pudo observar en 1985, en términos generales, *el discurso empresarial* dirigió el 29% de sus declaraciones a la variable *Censura*, mientras que en 1997, tan sólo el 5.2 %. Esta situación responde, evidentemente, a que en 1985 la figura de un Estado que intervenía directamente en la economía, provocaba una actitud empresarial beligerante contra de la *burocracia política*; mientras que en los noventa, las reformas económicas y, en general, el modelo

neoliberal que promovió la *tecnocracia* posibilitó el respaldo total en las cuestiones básicas de las *decisiones gubernamentales*.

***Diversidad discursiva de las organizaciones empresariales en la prensa nacional, 1997.***

<b>Organización</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>Total</b>
CCE	2.7%	42.9%	29.1%	24.7%	0.5%	100.0%
Coparmex	4.1%	48.8%	14.9%	31.4%	0.8%	100.0%
Concamin	8.9%	47.5%	19.8%	22.8%	1.0%	100.0%
Canacintra	8.9%	44.4%	20.0%	23.3%	3.3%	100.0%
Concanaco	3.9%	41.7%	22.3%	32.0%	0.0%	100.0%
Discurso empresarial	5.2%	44.9%	22.1%	26.8%	1.0%	100.0%

Elaboración propia con información de *El Financiero*.

- Variables:**
- A) **Censura**
  - B) **Demandas**
  - C) **Economía**
  - D) **Ideológico-político**
  - E) **Apoyo**

En todo caso, es de llamar la atención que sea precisamente el CCE, la *organización empresarial* “cúpula de cúpulas”, la que hubiese mantenido el perfil más bajo en la variable *Censura* (2.7 %). En esa misma lógica, se observa cómo esta disminución en la composición del discurso, tiene su desplazamiento a la variable *Demandas*, la cual alcanza el 44.9 % en el discurso general. Esto es fundamental, pues en una lógica sistémica, las *demandas* de los actores sociales representan la parte de las *entradas (inputs)*, además de dibujar una parte sustancial del proyecto de nación que promueven, así como el sentido de su poder que se encamina de manera muy concreta a demandas de carácter económico. La pregunta básica es ¿hasta que grado el rumbo que toma el proyecto de nación responde a las demandas de los actores políticos? o ¿Hasta que grado el gobierno considera las demandas del sector empresarial en la toma de decisiones?

Después de analizar las variables del discurso empresarial, es necesario analizar las *subvariables*, es decir, reconocer los matices adquiridos por cada una de las variables con el objeto de definir la especificidad del discurso. El primer aspecto que habrá de observar es que si bien la variable *Censura* había disminuido tanto, provocando que perdiera sentido analizar los matices de sus *subvariables* (en el discurso de 1985, se detectaron 6

subvariables), poco a poco llamaba la atención que ese aspecto del discurso empresarial fuera dirigido hacia una crítica hacia la *corrupción* y la *ineficiencia gubernamental*. Lo que sugiere cómo las organizaciones van desarrollando capacidad para diversificar su discurso, de tal manera que se adapten a la coyuntura y alcancen cubrir todos los posibles aspectos que intervienen en la política, la economía y la cultura.

***Aspectos que Censuran las organizaciones empresariales,  
prensa nacional 1997.***

<b>Organización</b>	<b>Corrupción</b>	<b>Ineficacia Gubernamental</b>
CCE	0.0%	100.0%
Coparmex	40.0%	60.0%
Concamin	10.0%	90.0%
Canacindra	12.5%	87.5%
Concanaco	33.3%	66.7%
Discurso empresarial	16.1%	83.9%

Elaboración propia con información de *El Financiero*.

Así, tanto en lo relativo a la corrupción como a la ineficiencia, los empresarios siempre apuntan hacia la gestión gubernamental como fuente de estos problemas sociales que impiden avanzar en la construcción de una sociedad moderna y realmente democrática. Se trata de un viejo recurso al que han recurrido los empresarios, con el cual han venido mermando la credibilidad en el sistema, desgastando los símbolos que permitieron al PRI mantenerse en el poder y proyectar la necesidad política de renovar esas prácticas solo atribuibles, en su perspectiva, a la práctica gubernamental. Más tarde esta representación grabada en la opinión pública fue aprovechada para proyectar la candidatura de Vicente Fox en el año 2000, como posibilidad del cambio.

En la misma lógica del cambio, de la madurez política de los empresarios y de la alianza política establecida con la tecnocracia, sobresale el hecho que la diversidad del discurso en la variable *Demandas* adquiera una significativa expansión, de 6 subvariables detectadas en el discurso empresarial de 1985, a 16 subvariables en 1997. Además del aprendizaje en el quehacer político, del manejo discursivo para construir consensos, esto refleja cómo los *discursos realmente significativos en el escenario político*, siempre reflejarán la coyuntura por la cual atraviesa el país.

***Demandas de las Organizaciones empresariales planteadas al gobierno,  
prensa nacional 1997.***

Organización	b.1	b.2	b.3	b.4	b.5	b.6	b.7	b.8	b.9	b.10	b.11	b.12	b.13	b.14	b.15	b.16	b.17
CCE	32.1%	2.6%	1.3%	5.1%	0.0%	1.3%	43.6%	2.6%	10.3%	9.0%	12.8%	2.6%	15.4%	0.0%	12.8%	2.6%	0.0%
Coparmex	42.4%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	1.7%	33.9%	1.7%	18.6%	1.7%	10.2%	10.2%	8.5%	1.7%	6.8%	1.7%	0.0%
Concamin	20.8%	6.3%	0.0%	8.3%	2.1%	0.0%	33.3%	4.2%	14.6%	10.4%	14.6%	6.3%	8.3%	0.0%	16.7%	0.0%	2.1%
Canacintra	17.5%	2.5%	0.0%	2.5%	0.0%	27.5%	27.5%	12.5%	10.0%	22.5%	10.0%	2.5%	15.0%	2.5%	10.0%	5.0%	2.5%
Concanaco	25.6%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	30.2%	7.0%	11.6%	18.6%	14.0%	7.0%	14.0%	0.0%	4.7%	4.7%	0.0%
Discurso empresarial	29.1%	2.6%	0.4%	4.1%	0.4%	5.2%	35.1%	4.9%	13.1%	11.2%	12.3%	5.6%	12.3%	0.7%	10.4%	2.6%	0.0%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más de ellas.

**Demandas:**

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>b.1</b> continuidad del proyecto económico<br/> <b>b.2</b> control inflacionario<br/> <b>b.3</b> reforma de la LFT<br/> <b>b.4</b> salarios sujetos a productividad<br/> <b>b.5</b> reforma al IMSS<br/> <b>b.6</b> modernizar la educación<br/> <b>b.7</b> nuevo marco fiscal y/o administrativo<br/> <b>b.8</b> financiamiento y/o infraestructura</p> | <p><b>b.9</b> acción eficaz del gobierno<br/> <b>b.10</b> apoyo a la micro y pequeña empresa<br/> <b>b.11</b> empleo y combate a la pobreza<br/> <b>b.12</b> seguridad pública<br/> <b>b.13</b> estabilidad<br/> <b>b.14</b> reforma del Estado<br/> <b>b.15</b> política monetaria<br/> <b>b.16</b> redefinir el modelo<br/> <b>b.17</b> banca eficiente</p> |
|--|---|

Salta a la vista en el discurso general de los empresarios mexicanos que la demanda más socorrida de este actor político sea, primero, la implementación de un *nuevo marco fiscal y/o administrativo*, subvariable que atrae el 35.1 % de esta variable. Es decir, que en la medida que constituye la *subvariable* a la que más recurre el discurso empresarial, de la variable más importante del mismo, no deja duda que se trata de un objetivo cuyo esfuerzo político buscará resolver en lo fundamental. Este tipo de demanda aparece desde 1985, se mantiene en todo ese tramo de la transición hasta el inicio de siglo XXI, hasta constituirse en la demanda central que los empresarios plantean al Congreso –hecho muy importante y novedoso- y a la administración de Vicente Fox. Lo que ya confirmaba la preocupación de las organizaciones empresariales por hacer avanzar las reformas de los sectores estratégico desde el gobierno de Zedillo (1994-2000).

Otro aspecto relevante es la presencia de la subvariable *b.1 continuidad del proyecto económico* (29.1 %) que refrenda el beneplácito del sector empresarial con el modelo económico adoptado desde 1982. Se trata, en el terreno político, de construir corrientes de opinión que generen consensos, de legitimar el modelo neoliberal, y por ello de combatir

políticamente a las fuerzas de la oposición de este régimen. Destaca también, no por la presencia porcentual en el discurso, sino por su contenido simbólico, la demanda *b.11 empleo y combate a la pobreza* (12.3 %). Esto es, una *demandas* que favorece a los sectores sociales de bajos ingresos, quienes en todo caso, se ven mayormente afectados por la instauración del modelo neoliberal. Entonces, la madurez política del empresariado mexicano se va proyectando con una *dimensión multclasista*, lo cual hace aparecer a su proyecto de clase como un *proyecto nacional*, realmente representativo del conjunto de nuestra sociedad. Y ello le concede mucha mayor fuerza política para legitimar o deslegitimar al partido en el poder en turno.

Pero sobre todo, por lo que toca a la variable *Demandas*, destaca la disminuida presencia de la subvariable *b.3 Reforma de la Ley Federal del Trabajo*, que por cuestiones históricas constituye una demanda empresarial fundamental en la formación de su identidad política, y que fue la razón de ser en la creación de la COPARMEX. De hecho, está demanda que se ubicaba como una de las principales desde 1993 (17.3 % en general, y 32.6% en el caso de la COPARMEX) comenzó a declinar poco a poco: en 1994, 10.5% en general, y 23% como demanda de COPARMEX; 1995 (8.1 % en el discurso general y 13.1% para COPARMEX); 1996 (0.8% del discurso empresarial general, y 2.0% de las *demandas* de COPARMEX); hasta 1997 (0.4% en general y 0% para COPARMEX). Esto se debe, justamente, a que en la opinión de presidente de COPARMEX en ese entonces, Carlos Abascal Carranza, no existían condiciones para demandar una reforma a la Ley Federal del Trabajo. La pregunta obligada es ¿existen hoy las condiciones políticas para plantear dicha reforma? Evidentemente sí, sobre todo si consideramos que el mismo Abascal, al formar parte del gabinete de Fox, en el cual se desempeñó como secretario de Trabajo y Previsión Social durante los primeros cuatro años y medio del sexenio y después como secretario de gobernación, era el responsable gubernamental para determinar la viabilidad de tal reforma. No obstante, ni la reforma laboral ni la de los hidrocarburos o la hacendaria, se llevaron a cabo a pesar de ser algunos de los principales objetivos del programa de Fox.<sup>4</sup> La resistencia que opuso la oposición, particularmente la del PRD, fue

---

<sup>4</sup> En noviembre del 2000, Fox anunciaba un diálogo para reformar la LFT (*La Jornada*, 2 de noviembre de 2000); después señalaba que el proyecto de la nueva LFT se consensaría para recoger las propuestas de las partes (*Reforma*, jueves 9 de noviembre del 2000); y en enero del 2001, el secretario de la Trabajo y Previsión Social anunciaba que en febrero se realizarían las consultas para reformar la LFT (*La Jornada*, 3 de enero de

uno de los principales motivos para que estas reformas no avanzaran en el sexenio (2000-2006). Una vez más un aspecto fundamental del proyecto de nación incorpora claramente los intereses de clase del empresariado mexicano, aunque en este caso Abascal señalara que "no se procederá con criterios de la iniciativa privada" (*La Jornada*, 14 de enero de 2001).

En la siguiente tabla se presenta la situación de la variable *Gatt y economía*. Ahí se observa una recomposición del discurso que corre de 1985 a 1997, donde esta variable pasa de un 16 % a 22.1 %. Aunque lo realmente significativo es la contradicción entre un *balance positivo de la economía* (47 %) y un *balance negativo* (27 %) por parte de los empresarios mexicanos. Pero en todo caso, llama la atención que sea la CONCAMIN la organización empresarial que más recurre en su discurso a un *balance negativo de la economía*. Nuevamente es el caso del sector que más ha resentido la apertura del mercado y la crisis económica. Por otra parte, ya ha sido evidente la desaparición en el *discurso empresarial* de las subvariables que se refieren a los balances o expectativas dirigidas al Tratado de Libre Comercio, donde, entre las dos posibilidades no alcanzan siquiera un punto porcentual. Se trata de un desencanto empresarial respecto de este tratado, pues la competencia internacional a repercutido negativamente en la planta industrial que se muestra incapacitada para competir con el capital extranjero y los productos provenientes del exterior.

***Evaluación de las organizaciones empresariales sobre el TLC y la economía, prensa nacional, 1997.***

<b>Organización</b>	<b>c.1</b>	<b>c.2</b>	<b>c.3</b>	<b>c.4</b>	<b>c.5</b>	<b>c.6</b>	<b>c.7</b>
CCE	43.4%	24.5%	0.0%	0.0%	13.2%	39.6%	3.8%
Coparmex	44.4%	22.2%	0.0%	0.0%	5.6%	22.2%	16.7%
Concamin	45.0%	40.0%	0.0%	0.0%	15.0%	15.0%	0.0%
Canacintra	55.6%	27.8%	5.6%	0.0%	5.6%	16.7%	5.6%
Concanaco	56.5%	26.1%	0.0%	0.0%	4.3%	39.1%	17.4%
Discurso empresarial	47.7%	27.3%	0.8%	0.0%	9.8%	30.3%	7.6%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más de ellas.

---

2000); lo que siguió a una interpretación humanista de las relaciones laborales y que habría de incorporarse en una reforma que concluirá en dos años, nada ajeno a los planteamientos que la Coparmex ha venido reformulando (*La Jornada*, 14 de enero de 2001)

<b>Economía:</b>	<b>c.1 balance positivo de la economía</b>
	<b>c.2 balance negativo de la economía</b>
	<b>c.3 expectativas negativas por el TLC</b>
	<b>c.4 expectativas positivas por el TLC</b>
	<b>c.5 perspectivas negativas de la economía</b>
	<b>c.6 perspectivas positivas de la economía</b>
	<b>c.7 economía informal</b>

En todo caso, es visible la contradicción entre un balance positivo de la economía (47.7%) y el balance negativo (27.3%) que hacen las organizaciones empresariales. Esto obedece básicamente a que, por un lado, reconocen los avances del modelo neoliberal en la medida que cumple con las demandas que este sector plantea desde 1975; y por otro, a que existen indicadores que no pueden ocultarse, como es el caso de cierre de empresas en el sexenio de Zedillo, la tendencia creciente del desempleo y la permanente amenaza que implica tener “la economía más abierta del mundo”.

Pero es en la contradicción entre la perspectiva negativa (9.8%) y la perspectiva positiva de la economía (30.3%), lo que demuestra el compromiso que tienen los empresarios mexicanos con los gobiernos tecnocráticos. Saben perfectamente que de no proyectar en la opinión pública su confianza en el modelo económico, los gobiernos tecnocráticos perderían una parte sustancial de la credibilidad que requieren. Así que aunque sientan los efectos negativos de la economía, mantienen el compromiso político de respaldar las decisiones gubernamentales, sobre todo a aquellas dirigidas a garantizar la continuidad de los criterios del libre mercado.

Respecto a la variable *Ideológico-político*, se observa en la siguiente tabla, que pasa de un 15% en 1985, a un 26.8% en 1997. Lo cual confirma el proceso de madurez político de este actor social, quien en las tensiones generadas por el proceso de la transición, ha desarrollado una gran capacidad para hacer aparecer a su discurso como un gran transmisor de valores ideológicos que, poco a poco, van influyendo en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Un clásico ejemplo, es el tema de la *productividad y competitividad* que se inscribe en el espacio de las relaciones laborales: en el espacio concreto de las empresas.

También es el caso de las referencias dirigidas sobre las formas que deben seguir el sistema de partidos, sobre todo en los momentos más álgidos de las coyunturas electorales. En dichas contiendas, los empresarios siempre juegan un papel muy importante, sobre todo a partir del declive de la representación política "formal" de las clases trabajadoras.

***Perspectivas ideológico-políticas de las organizaciones empresariales, prensa nacional 1997.***

<b>Organización</b>	<b>d.1</b>	<b>d.2</b>	<b>d.3</b>	<b>d.4</b>	<b>d.5</b>	<b>d.6</b>
CCE	20.0%	37.8%	8.9%	28.9%	13.3%	17.8%
Coparmex	31.6%	36.8%	7.9%	23.7%	10.5%	10.5%
Concamin	21.7%	34.8%	4.3%	13.0%	4.3%	30.4%
Canacintra	38.1%	33.3%	9.5%	14.3%	0.0%	19.0%
Concanaco	39.4%	18.2%	0.0%	9.1%	0.0%	42.4%
Discurso empresarial	29.4%	32.5%	6.3%	19.4%	6.9%	23.1%

Elaboración propia con información de *El Financiero*. Es posible que las subvariables excedan el 100 %, pues en una declaración pueden hacer alusión a una o más de ellas.

- Ideológico-político:**
- d.1 sobre el papel de los actores sociales**
  - d.2 sobre el sistema y partidos políticos**
  - d.3 exhorta a elevar la productividad y competitividad**
  - d.4 propone estrategias para enfrentar la crisis económica**
  - d.5 promueve nuevos valores sociales**
  - d.6 situación y ley de cámaras**

Cabe destacar la posición tan significativa que tiene en el discurso de las organizaciones empresariales de 1997, las referencias sobre el sistema y los partidos políticos en la variable ideológico-política, pues se trata de un año electoral. Es en ese año que Cuahutémoc Cárdenas gana las elecciones del Distrito Federal y queda como jefe de ese gobierno. De tal manera que la visible presencia de la subvariable sobre el *deber ser* de los actores sociales y los partidos políticos, obedezca a la naturaleza de esta coyuntura electoral.

Por último, cabe aclarar que la variable *Apoyo* se ha desdibujado de una manera muy visible, 1% en 1997, cuando en 1985 alcanzaba un 15 %, razón por la cual pierde sentido generar una tabla para analizar las *subvariables*. Sin embargo, es pertinente señalar que el apoyo de este actor político se deduce sin problema, a partir de cierto tipo de demandas, como es el caso por ejemplo, de *la continuidad del proyecto económico* y los *balances sobre la economía*.

#### **4.4 Conclusiones**

El aspecto más significativo del material que en este capítulo se presenta es el papel que juega el discurso de las organizaciones empresariales en la reproducción del sistema político mexicano. Además, ese discurso permite comprobar la función que la comunicación política tiene en la toma de decisiones. Explica gráficamente, y por tanto, de manera puntual, la lógica sistémica que hace posible la reproducción del poder, sea atacándolo mediante la contraposición simbólica o legitimándolo por medio de su apoyo para generar la credibilidad que todo orden social requiere para su subsistencia. En ese mismo sentido, la comunicación política que adquiere forma a partir de los discursos que se vierten en el espacio mediático, en el nuevo espacio público, constituyen la materialización de las demandas que la sociedad emite para que los gobernantes den forma al proyecto de nación que ellos intentan impulsar. Por lo tanto, también se constituyen en un referente para la opinión pública, y por tanto emergen como instrumentos del poder.

Como se puede observar en las tablas estadísticas del discurso de las organizaciones empresariales que tienen presencia en los medios de difusión masiva, particularmente en los periódicos, se puede observar cómo en una breve distancia temporal de ocho años, 1985-1993, el discurso empresarial se desarrolla y transforma de una manera sustancial. Primero, porque en 1985, las principales organizaciones empresariales aparecen en la prensa nacional 301 veces, incluyendo la participación de las representaciones regionales de Nuevo León y Jalisco, fundamentalmente; mientras que en 1993 aparecen 654, algo más del doble y sin la participación de las representaciones regionales. Ello confirma la estrategia de difusión mediática que permitiera la proyección de una ideología propia del sector empresarial, estrategia que se hizo explícita con el Documento Codwell que dio origen al CCE. Después, en 1994 alcanzó 675; en 1995, 610; en 1996, 884; y en 1997, 592. Lo cual explica la politización del sector empresarial, la importancia de su discurso como parte fundamental del espacio público donde se reproduce la política, así como una suerte de repliegue (1997) en la medida que el empresariado ya no requiere presionar tanto a los gobiernos tecnocráticos que están en el poder desde 1982.

El análisis que aquí se presenta, refleja tanto la particularidad como la unidad de las principales organizaciones empresariales que tienen presencia en los medios de

comunicación. Es el caso, por ejemplo, de la CONCANACO, cuyo discurso en el ámbito de la problemática económica, incorpora de manera visible la variable de economía informal y que en su momento sirve como punta de lanza para criticar lo inadecuado de las decisiones gubernamentales para resolver dicho problema. También permite explicar las causas del papel que jugó esta organización en contra del plantón del PRD en el 2006, que organizó Andrés Manuel López Obrador en el centro de la ciudad de México, como protesta de las irregularidades de las campañas electorales, pues era precisamente el comercio el sector económico que se vio más afectado en ese tiempo.

A partir de las tendencias de los discursos de estas organizaciones empresariales (CCE, COPARMEX, CANCEMIN, CANACINTRA y CONCANACO), se demuestra cómo el sector empresarial pasó de ser un enemigo político de los gobiernos posrevolucionarios, sobre todo de los de Echeverría y López Portillo, a un aliado de la tecnocracia que ascendió al poder a partir de 1982. Lo que supone la legitimación de un modelo de desarrollo económico que confrontaba los símbolos de la herencia revolucionaria, el nacionalismo que caracterizó el periodo posrevolucionario hasta 1982, y un tipo de política asistencialista que llegó a su fin junto con el modelo de sustitución de importaciones. Lo cual sugiere que el sector empresarial, a partir de sus principales organizaciones, emergió como el principal defensor de la economía de mercado. Esto nos permite observar que una organización empresarial que en el pasado fue considerada por los estudiosos del tema como una organización radical en contra de los gobiernos posrevolucionarios, al convertirse en aliada de la tecnocracia, se desplazó del extremo radical a una posición conciliadora con el estado. Es particularmente el caso de la COPARMEX, que prácticamente se volvió una organización defensora del nuevo proyecto de nación que se instauró en 1982.

La diversificación del discurso de estas organizaciones empresariales supone la madurez política de este sector, que primero lucha en contra del modelo populista (discurso de 1985), y luego legitima el nuevo proyecto, planteando un conjunto de demandas que reflejan el abandono de las prácticas y valores gubernamentales “del pasado”. De tal manera que el uso de la prensa para manifestar sus posiciones respecto a la agenda política nacional, refleja que la comunicación política es uno de los mejores instrumentos para participar en el poder, influyendo en la toma de decisiones, y por tanto, que esta práctica

constituye uno de los principales aspectos de su cultura política, ya sea tomando posición en contra o a favor de los gobiernos en turno.

Más adelante, en el “Anexo” incorporamos otro tipo de discurso empresarial que enriquece el panorama abierto con la propuesta de nuestro modelo que se sustenta en el análisis del discurso político en la perspectiva sistémica. Estos discursos corresponden a reconocidos líderes empresariales y a propietarios de medianas, pequeñas y micro empresas, y con sus testimonios se aclaran algunos detalles que muy sintéticamente presentamos en nuestras consideraciones sobre el sistema político mexicano posrevolucionario.

Respecto al discurso de empresarios con un obvio liderazgo político y/o económico, tenemos, dos casos: empresarios que por su posición económica tienen presencia en el espacio público, en los medios de difusión masiva; y los empresarios que dirigen a las organizaciones empresariales que tienen mayor presencia en los medios de comunicación, principalmente en la prensa con cobertura nacional.

De los primeros habremos de decir que hay una clara diferencia que gira en torno al liderazgo ideológico de Juan Sánchez Navarro, quien casi de manera independiente a su capacidad económica, tuvo un espacio muy peculiar en los medios de comunicación. Desde luego, se trata de una personalidad cuya biografía corre de la mano a la historia moderna del México contemporáneo, y por tanto permite comprender otro tipo de aspectos contemplados por la historia oficial. Es el caso, por ejemplo, de la vinculación entre el sector empresarial y el Partido Acción Nacional, particularmente con la COPARMEX, fundada en 1929 y ese partido, fundado en 1939. De la capacidad violenta a la que puede recurrir la derecha si así lo requiere el caso, de sus vínculos con el poder político, mismo que se explica con el término utilizado por Tirado sobre el “derecho de picaporte” que poseen los hombres del dinero. Así como explicar las circunstancias en las que se creó, el CMHN, el CNP (Consejo Nacional de la Publicidad) y el CCE, actos de los cuales don Juan Sánchez Navarro jugó un papel protagónico.

Por otro lado, tenemos a empresarios que sin tener la gran presencia ideológica de Sánchez Navarro, juegan un papel muy importante en el sector empresarial por la riqueza económica que en su momento poseyó Manuel Espinosa Iglesias y Carlos Slim. Del primero llama la atención la confrontación entre la fracción más importante de la clase

económicamente dominante y los gobiernos de Echeverría y López Portillo. Conflicto que terminó con la decisión del gobierno mexicano de expropiar la banca, lo cual puso fin a una de las fortunas más grandes de nuestro país. Espinosa Iglesias fue el propietario del banco más importante de toda América Latina, y desde luego, formaba parte del CMHN. No obstante, este personaje se encuentra a años luz del papel ideológico que jugó Sánchez Navarro. En ese mismo sentido, la figura de Carlos Slim, símbolo nacional del poder económico, y desde luego político, no muestra la misma intelectual para llenar el vacío que dejó la muerte del ideólogo empresarial. De hecho, llama la atención la miseria ideológica de este poderoso hombre de negocio, pues su “filosofía” de negocios, se reduce a “enseñar” que la clave de su éxito es el comprar barato, por lo que habrá de elegirse el mejor momento para invertir. Fuera de ello, y considerando como una obviedad que lo que diga el hombre del dinero es importante, dista demasiado de tener la presencia de la organización más modesta de las que se ha considerado en esta investigación, como podría ser el caso de la CONCANACO.

En el segundo grupo, tenemos a los empresarios que por el solo hecho de dirigir a una organización empresarial, tienen presencia en los medios de comunicación. Es el caso de Jorge Ocejo, quien a través de sus testimonios nos permite comprobar la importancia que tiene la estructura nacional de las organizaciones empresariales, La vinculación del sector empresarial, particularmente de la COPARMEX y el Partido Acción Nacional. Pues su trayectoria empresarial y política nos explica desde la práctica, qué es el *neopanismo*, y cómo éste permite comprender que esos empresarios utilizaron a Acción Nacional para llegar al poder, del mismo modo que nos muestra el despliegue de ese partido utilizando la estructura y el poder de esa organización empresarial.

Por su parte, los testimonios del Ingeniero Picard, arrojan luz sobre la peculiaridad de la CANACINTRA, dadas las características de su representación, y por tanto, de los impactos que la crisis económica y la apertura han tenido para los diferentes sectores empresariales, sobre todo para la pequeña industria. También podemos observar las diferencias políticas entre una organización que se asume como “nacionalista” en un contexto sectorial donde predominan los intereses del gran capital que se pone a favor de la apertura indiscriminada de la economía. Evidentemente, este testimonio nos permite reforzar la interpretación que se ha intentado en esta investigación, sobre la posibilidad de

que los gobiernos posrevolucionarios hubiesen enarbolado símbolos que proyectaban la unidad nacional, mientras el resto de los empresarios simbolizaban lo contrario. Una modernidad que rechaza el pasado, y por tanto la herencia e influencia de la Revolución Mexicana.

Por último, tenemos las trayectorias empresariales de cinco empresarios que no tienen los recursos institucionales ni económicos para asegurarse un espacio en los medios de comunicación. Sin embargo, sus biografías empresariales nos permiten comprender cómo viven el proceso de transición y la crisis económica los hombres de negocios que no poseen mayor poder que el conferido por el solo hecho de ser propietarios de una empresa. Es el caso de Ramón, quien a partir de su experiencia nos muestra las peripecias a las que se expone quien incursiona en los negocios, sin contar con los recursos económicos que garantizan que una empresa sea lo suficientemente competitiva para superar los embates de la crisis. De tal manera que sus necesidades como empresario nos permitan comprender algunas demandas planteadas a través del discurso de las organizaciones empresariales estudiadas, que igual critican la ineptitud gubernamental, como solicitan el apoyo financiero y fiscal por parte del Estado. Al mismo tiempo que expone la ineficiencia de instituciones como Nacional Financiera, instrumentos gubernamentales que en los años cuarenta y sobre todo cincuenta jugaron un papel fundamental en el desarrollo del mercado nacional y en la industrialización del país. O el caso de Yolanda, quien también nos permite comprender los desafíos que enfrentan las pequeñas empresas, así como la estrategia que una profesionista puede utilizar para construirse un lugar en el mercado. A partir de su experiencia pudimos apreciar el alto costo que paga la economía a causa de la corrupción que prevalece en los negocios, tanto en el sector privado como en el público, y en todo caso la importancia que tiene el ahorro, la disciplina, así como una actitud combativa para incursionar en nuevos nichos del mercado. Por su parte, Aquiles nos condujo al interior de empresas transnacionales y grandes empresas mexicanas, permitiéndonos observar también cómo éstas actúan a partir de conceptos de negocios que justifican fácilmente los recortes de personal. Así como los vínculos y contradicciones entre el sector privado y el público, las mismas percepciones empresariales de las taras del sistema político mexicano, y la misma dinámica que ha de enfrentar quien incursione en los negocios, sorteando los problemas que impone la crisis económica. En su caso fue significativo el menosprecio que

siente por las organizaciones empresariales al considerarlas instrumentos de poder de los grandes capitales y, por tanto, el olvido al que someten a los micro, pequeños y medianos empresarios.

A partir de la experiencia de Armando fue posible observar cual era la lógica del desarrollo industrial en un mercado poco competitivo, las implicaciones del proceso de aprendizaje organizacional que permite la independencia económica de los cuadros directivos, lo mismo que los avatares de la crisis económica y, particularmente, los impactos de la apertura económica y el proceso de globalización que impactaron negativamente a algunos sectores económicos, como fueron los casos de las industrias del juguete y los textiles. Esto hizo evidente la falta de competitividad de las empresas mexicanas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas, y la negligencia con que las autoridades gubernamentales tratan la introducción de productos provenientes de los *Cuatro Tigres Asiáticos*. Esta situaciones contrastan con la figura excepcional de don Luis, quien haciendo uso de la creatividad y la innovación, incursionó en nichos del mercado claramente diferenciados, con un éxito que llama la atención al potencial que algunos hombres de negocios tienen aún en contextos económicos tan críticos como los que vive nuestro país desde 1982. Es notable, también como en este caso, existe una clara visión respecto del papel social del empresariado, lo que se observa con una abierta crítica a empresarios como Carlos Slim, quien en este testimonio no es valorado por el gran capital que posee.

El testimonio de estos empresarios comunes y económicamente poco significativos, sugiere diferentes posiciones respecto de la política. Desde aquellos que no se interesan en ella, los que la desprecian, y los que mantienen su atención con una parte significativa de su tiempo a través de lo que ofrecen los medios de comunicación masiva.

Lejos de haber agotado todos los posibles matices de interpretación que ofrecen los materiales aquí presentados, cabe considerar, al menos, que se trata de materiales que se complementan, y que en su conjunto hablan de la gran diversidad de las percepciones empresariales de la realidad social que vivimos en las tres últimas décadas.

## CONCLUSIONES.

La transición democrática en México, igual a cualquier transición “pacífica” de otra sociedad, representa un cambio en la dinámica de los procesos sociales que provoca la transformación de las estructuras sociales. Por ello, es necesario considerar que las sociedades contemporáneas, igual que las “no complejas”, se sustentan, al menos, en tres grandes estructuras en permanente interacción: la política, la economía y la cultura. Tal relación ha sido tratada en esta investigación a partir de una *interpretación energética de la teoría de los sistemas*, lo cual nos obligó a identificar las relaciones más significativas para comprender tres cuestiones: ¿qué sucedió con las relaciones de poder en este complejo proceso de cambio? ¿cómo se transforman las estructuras de la sociedad mexicana y cómo se manifiesta la cultura política del empresariado mexicano? ¿qué ocurrió con las estructuras simbólicas del sistema político mexicano y cómo adquieren nueva forma al paso de la transición?

El problema radicó, entonces, en identificar, primero, las especificidades de las estructuras que permiten determinar que un sistema social perduró en un periodo determinado con ciertos rasgos que, en el contexto de la transición, se someten a un proceso de cambio. Segundo, definir los rasgos estructurales que nos permiten confirmar que efectivamente esa sociedad estuvo sujeta a un proceso de cambio. El reto metodológico dependió, entonces, de la capacidad para distinguir el pasado del presente, sobre todo si se considera a la transición como un tiempo socialmente nuevo que nos permita distinguir el cambio. Sin embargo, habrá que hacer un esfuerzo, como lo sugiere Lévi-Strauss respecto a la interpretación del pasado (Lévi-Strauss, 1979: 76), pues no basta referirnos a éste en su calidad histórica, esto es, como una continuidad que marca la secuencia evolutiva del proceso social, sino de descubrir su carácter mítico. Lo que a nuestro entender corresponde a los símbolos compartidos por la sociedad mexicana, o que sustentan, al menos, a la ideología dominante y la forma como se enfrentan los conflictos en el campo de la política,

la economía y la cultura, dando paso a la configuración de una nueva relación estado-sociedad. Así, la transición representa el proceso mediante el cual nuestra sociedad creó o reinterpretó los referentes simbólicos que explican el triunfo del PAN el 2 de julio de 2000. Evidentemente, no se trata de un proceso acabado, pero al menos, el evento proyecta la emergencia de nuevos símbolos que explican sintéticamente una práctica política de la sociedad mexicana que termina por sacar de palacio nacional al PRI que se sostuvo en el poder por setenta años.

La propuesta de un modelo que permitiera la interpretación antropológica de la transición mexicana a partir de la perspectiva sistémica, nos llevó a considerar al sistema político mexicano como un sistema de decisiones expuesto a la complejidad de significados del discurso de las organizaciones empresariales que más presencia tienen en los medios de difusión masiva. Además, se intentó dar cuenta de los intercambios entre los tres principales subsistemas societales, a través de la trayectoria política, económica y cultural del empresariado mexicano, y a partir de ello identificar el desarrollo temporal del proceso de transición y, por tanto, del cambio estructural. Esto permitió reconocer el proceso energético mediante el cual se crea, reproduce y comparte el poder.

La elección de un modelo interpretativo cifrado en la teoría de los sistemas obedeció a la importancia de la comunicación política como forma objetivada de los intercambios, y de ello la significación del discurso de los actores políticos que permitió descifrar las estrategias ideológicas para luchar por el poder. Además, la misma interpretación energética a partir del modelo sistémico, obligó a considerar la dinámica del cambio inherente al objeto de estudio. A la vez, la perspectiva del riesgo y los desafíos de la persistencia en el tiempo representó un magnífico rasgo del modelo para comprender y manejar expositivamente la crisis a la que se sujeta la sociedad mexicana en su proceso de transición.

La crisis que marca a nuestra transición en el ámbito político, en todo caso, está determinado por: 1) las nuevas condiciones políticas que se generan al iniciarse la *erosión del presidencialismo*; 2) el *desgaste de las estructuras corporativas* que legitimaron a la elite gobernante en el poder durante tantos años; 3) el ascenso de la *oposición real*, y 4) la politización de la sociedad, y 5) el *predominio de una clase empresarial* que ha logrado imprimir el sentido que toma el rumbo de la nación.

Al tratarse de un proceso societal marcado por la crisis, la situación nacional muchas veces se asemejaba a la imagen del caos que evoca las experiencias vividas por muchas sociedades latinoamericanas. En ese sentido, adquiere relevancia la definición de crisis que Calderón y dos Santos, consideran para referirse a los procesos latinoamericanos:

*...un momento de eclosión de múltiples realidades. En ese sentido, la creciente descomposición del ciclo estatal iniciado en la posguerra también implica la gestión de nuevos campos de conflicto y de acción en estas sociedades, procesos más vinculados a las transformaciones en las sociedades y las culturas de los países centrales (Calderón y dos Santos, 1995: 35).*

A partir de tal espectro social es factible comprender, en el caso específico de México, que *la transición, en su sentido más amplio, alude a una situación general de cambio obligado por el agotamiento del modelo de desarrollo que supone cierta coherencia entre la economía, la política y la cultura. La crisis ha de ser entendida como la emergencia de un fenómeno que rebasa la capacidad de respuesta del sistema, de una alteración en la dinámica social que provoca la pérdida de la consistencia requerida por la sociedad para mantenerse estable en el tiempo. La crisis se presenta como un cambio social acelerado que torna ineficientes a las estructuras que reprodujeron anteriormente al sistema.*

También es sugerente la idea de Touraine respecto a que la crisis de las sociedades occidentales representa la fractura entre la política, el mercado y el espacio privado. (Touraine, 1994). Así, la manifestación de la crisis en el curso de la transición impone situaciones inéditas en las cuales se advierte la apertura de nuevos espacios en los que se lucha por el poder. Si bien la crisis afecta a todos los sectores sociales, es evidente que pese políticamente, más, sobre las elites dominantes, económicas y gobernantes, en la medida que permanentemente luchan por ocupar el lugar hegemónico dentro del bloque en el poder. Lo cual sugiere que el dilema cotidiano en la esfera política radica en cómo resolver el problema de la credibilidad, y por tanto, de legitimar un modelo económico que hace evidente las limitaciones de la ideología liberal bajo el presupuesto simbólico de la modernidad, como etapa de la civilización donde se hace cada vez más contradictoria un discurso que evoca un amplio margen de oportunidades y un mercado cada vez más restringido (Touraine, 1999).

La necesidad de reconocer lo mejor posible el cambio concreto de la transición mexicana, si bien era del todo viable al identificar el momento en que era obvio el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el modelo económico que surgía en su lugar, lo político y la transformación de la cultura que está implícito planteaba un desafío metodológico diferente. La dinámica de la cultura política seguía un ritmo diferente al de las estructuras económicas. Se trata de un proceso que exigía arriesgar interpretaciones capaces de destacar cuestiones realmente significativas en la reproducción de las estructuras emergentes, que en ocasiones no son del todo claras como el analista quisiera. Además, la misma disposición energética de las relaciones entre los actores políticos esconde aspectos de las relaciones de poder con lo que se dificulta la construcción de interpretaciones definitivas.

Ante tal escenario se decidió trazar una línea interpretativa que nos permitiera explicar coherentemente el papel que jugaron los empresarios en la génesis y desarrollo del sistema político mexicano y, por tanto, en la misma reproducción del poder. Sin un trazo definitivo que nos permitiera comprender por qué la fracción hegemónica del bloque en el poder perdió su posición, abriendo paso a un nuevo actor político, sería prácticamente imposible, por ejemplo, superar interpretaciones instrumentalistas del Estado y entender cómo los empresarios ascienden al poder, desplazando a la burocracia política y a la tecnocracia.

Se requería distinguir entre el pasado y un presente renovado que adquiriría objetivación a través de nuevos rasgos estructurales. Era necesario interpretar el significado que tenía la presencia de un partido hegemónico vinculado al estado (con una relación corporativa hacia las clases trabajadoras), un liderazgo incuestionable del presidente de la república y una economía mixta (con una clara participación directa del estado) sustentado en una ideología nacionalista que exalta el compromiso del estado con las mayorías (principalmente con las clases trabajadoras). Se trata de los precedentes del Estado benefactor a “la mexicana” cuya política social se fue diluyendo poco a poco. Esta estructura simbólica es el espacio imaginario donde convergen y adquieren coherencia la política-ideología, la economía y la cultura que confieren a nuestra sociedad la unidad necesaria para superar el uso indiscriminado de la violencia. La compleja relación partido-estado, partido-clases trabajadoras, presidente-masas, nacionalismo-modelo de desarrollo,

papel económico del estado y la política social, proyectan un escenario político donde las fronteras entre los actores sociales y las instituciones son muy frágiles. De esa manera, para la derecha mexicana, este proyecto representa la antítesis de un proyecto de nación favorable a sus intereses: 1) donde el nacionalismo de los gobiernos posrevolucionarios se aproxima peligrosamente a los proyectos del “socialismo realmente existente” ; 2) donde la presencia de un partido que aglutina a los caudillos de la revolución, contrapone la reproducción de la democracia, manipulando a las clases trabajadoras las cuales son alentadas por la propia burocracia política para mantener una actitud hostil en contra de los propietarios de las empresas; 3) donde la política social que asegura la prestación de servicios públicos en el rubro de la educación, la salud y la recreación, son consideradas como pruebas del paternalismo de un estado autoritario; y 4) donde la participación directa del estado en la economía que garantizó el desarrollo industrial y la modernización económica, es considerada como una práctica desleal que atenta contra las leyes del mercado y, por tanto, contra la propiedad privada.

Estas estructuras políticas, económicas y culturales, definen la forma y dinámica del ritual político que rige las prácticas de cada actor, desde el presidente, el líder del partido oficial, las clases trabajadoras, los empresarios y la oposición, de derecha y de izquierda. Se trata de un ritual que legitima el uso del poder por parte de la “familia revolucionaria”, a pesar de las contradicciones entre las elites políticas y económicas que en la génesis de este sistema político, y por las causas lógicas del movimiento armado, se relacionan a partir de una suerte de división social de las actividades políticas-económicas. Pero independientemente del predominio de la cultura política que adquiere forma a partir de esos referentes simbólicos, los conflictos al interior del bloque dominante estuvieron marcados por los intereses contrapuestos entre un proyecto de nación fundado en esa estructura simbólica y los crecientes intereses empresariales que van desde lo económico hasta lo político. Lo que explica la evolución y erosión de uno y otro actor social. Los empresarios van generando las condiciones económicas, políticas y culturales para no permanecer excluidos del poder formal, mientras que la “familia revolucionaria” se obstina en mantener una actitud autoritaria, refractaria y antagónica al cambio que permita la participación ascendente del conjunto de la sociedad mexicana.

La estructura simbólica que legitima al sistema político posrevolucionario se somete a cambios sustanciales en el periodo de la transición, donde nos interesó destacar el papel político que jugaron los empresarios en la redefinición de las relaciones sociedad-gobierno, y en particular, para legitimar la instauración del proyecto neoliberal a partir de 1982, y coadyuvar en la derrota política de la “familia revolucionaria” que tuvo efecto en el año 2000. En esa lógica se trató de explicar, como sugiere Abner Cohen: ... *el análisis de la interacción dialéctica entre dos variables principales: las relaciones de poder y el simbolismo* (Cohen, 1979: 77-78).

De esa forma, cuando nos referimos a la transición aludimos al periodo que corre desde el gobierno del presidente Echeverría (1970), hasta el arribo de la oposición (2000-2006) cuando la “familia revolucionaria”, en su versión tecnocrática, sufrió la debacle electoral que llevó al poder a Vicente Fox Quezada, empresario y miembro del Partido Acción Nacional. Ya que los gobiernos de Echeverría y López Portillo significan los últimos intentos de la burocracia política por generar un flujo energético que fortaleciera a un sistema social amenazado por un entorno económico, nacional e internacional, con serias consecuencias en el plano político-ideológico. De tal manera que se intenta destacar cómo Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982) recurrieron al simbolismo que la “familia revolucionaria” creó alrededor del proyecto nacionalista que emergió desde finales de los años treinta.

La práctica política al interior del propio partido oficial, representa la deslegitimación de un ritual y sus estructuras simbólicas que aludía en el imaginario colectivo a una unidad nacional que reivindicaba el proyecto de la revolución mexicana, lo que hacía de las clases subalternas el referente fundamental para legitimar el monopolio del poder que ejerció la burocracia política. Y al mismo tiempo propiciaba la cohesión del bloque dominante pues independientemente de los conflictos entre las elites, los empresarios obtuvieron permanentemente los beneficios de un desarrollo que alcanzó su mejor expresión en los años cincuenta y principios de los sesenta, cuando tuvo efecto el *milagro mexicano*. Expresión que significaba en esa etapa del “desarrollo estabilizador”, altas tasas de crecimiento económico y baja inflación.

De esa forma, estos dos últimos gobiernos constituyen un esfuerzo de la “familia revolucionaria” por revitalizar un modelo de desarrollo que amenazaba al sistema social.

En ese contexto hemos analizado a la transición mexicana como un complejo proceso social donde sus estructuras se transforman a partir de interacciones dinámicas claramente diferentes. En esa tesitura, por ejemplo, el movimiento del 68 y su consabida represión, crea un nuevo símbolo que emula una nueva relación entre el Estado y la sociedad mexicana; lo que hace de este fenómeno un parteaguas en la transformación de las estructuras políticas a diferencia del ámbito económico, donde el parteaguas se ubica en 1982, cuando el ascenso de la tecnocracia y la presión de los acreedores externos posibilitan la instauración de un modelo económico que representa una *nueva racionalidad del Estado*, a partir de la cual se anteponen los intereses del mercado sobre lo político-social. Ello se expresa a partir de un desplazamiento de los trabajadores como actores sociales determinantes en la reproducción de los rituales de la política moderna mexicana y el ascenso paulatinos de los empresarios al poder.

En ese sentido, se trata de observar cómo los empresarios mexicanos van insertándose en las estructuras del poder, luchando por incorporar sus intereses de clase en los proyectos del Estado desde una posición como actor económico, más que político. Sin contar con una posición definida en el partido hegemónico, ni con una opción partidista que les permitiera participar en las tomas de decisiones que definían el rumbo del país. Luego, conforme se fortalecían económicamente a la luz del proceso de industrialización encabezada por el Estado mexicano, observar su evolución política que le permitió a la clase empresarial tener una presencia mínima en el escenario nacional, a través del papel que representaban las organizaciones empresariales como instrumentos de presión sobre los tomadores de decisiones que se legitimaron en el poder a partir de la ausencia de una oposición real. De tal manera que iniciada la transición, tanto la fortaleza económica adquirida por el empresariado mexicano como la madurez política adquirida hasta los años sesenta, les permitió emerger poco a poco, primero, como un actor antagónico al proyecto posrevolucionario, luego, como un actor protagónico del modelo neoliberal instaurado a partir de 1982.

Por ello es vital en la interpretación sobre la transición que aquí se presenta, observar la participación política de los empresarios y la transformación de las estructuras de poder que provoca el desplazamiento de la “familia revolucionaria”. Fenómeno que obedece a un complejo proceso social, producto de las prácticas políticas al interior del

partido oficial, burocracia política vs. tecnocracia, la erosión de las estructuras corporativas que vinculan a las clases trabajadoras con el proyecto del estado, el deterioro de las condiciones económicas nacionales e internacionales, y, sobre todo, la acción política de los empresarios mexicanos que terminó por desgastar a una elite política obstinada en manejar monopólicamente el poder, así como en general, un proceso de maduración política de la sociedad que se refleja en las coyunturas electorales a partir del *voto de castigo*, 1988, el *voto del miedo*, 1994, y el *voto útil*, 2000.

Por otra parte, no se trata solamente de reconocer que el empresariado mexicano es parte del bloque dominante, sino que en esa lógica y en la medida que la burocracia política representaba a la fracción hegemónica, la lucha por esa posición se da desde la definición del sistema político mexicano contemporáneo, aunque de manera mucho más nítida en el proceso de transición. Visto así, el proyecto de nación que los empresarios poco a poco definen, representa también un símbolo que, desde la derecha, lucha contra el autoritarismo de la “familia revolucionaria” que erosiona, junto con otros elementos simbólicos, la legitimidad de la cual gozaron por más de 50 años. Se trata de un proceso en el cual la transformación de la cultura política de la sociedad mexicana se expresa a partir de un simbolismo cifrado en estructuras políticas, económicas y culturales, que dejan de ser compartidas (que pasan de ser dominantes a una relación de equilibrio y luego de desventaja) con nuevos símbolos que se reproducen en el *imaginario colectivo*, por los flujos e intercambios entre las diferentes esferas del sistema social y los intercambios con el entorno.

La crisis del modelo populista que heredó la revolución mexicana, explica la erosión de una estructura simbólica representativa del pasado y el surgimiento de una nueva simbología que emula la certidumbre sobre un futuro mejor. Así, habrá de cuestionarse hasta que grado el proceso de transición, que por sí solo significa cambio, se expresa no solo a partir de estructuras inéditas, sino de su calidad como *estructuras estructurantes* que reflejan, también, la transformación de las prácticas políticas, de las relaciones de poder entre los principales actores sociales. Pues es evidente que el ascenso del neoliberalismo en la personificación de una familia revolucionaria renovada, la tecnocracia, continuó ejerciendo autoritariamente el poder, hasta donde lo permitió la sociedad civil.

Desde nuestra perspectiva, el reto era descubrir los procesos sociales más significativos para comprender cómo las elites empresariales se constituyen en la fracción hegemónica del bloque dominante en este periodo que corre de los años setenta al 2000. Por ello, el primer punto de atención está dirigido a identificar cómo se forma la derecha mexicana, a partir de las coincidencias ideológicas entre empresarios, el clero y el PAN; luego identificar cómo los empresarios, a través del discurso de sus organizaciones empresariales, definen un proyecto de nación alternativo al dominante, y en el contexto de la contienda política que no se reduce a lo estrictamente electoral, proyectan su propuesta como una alternativa viable para sacar al país de la crisis política y económica en la que se encuentra.

El segundo aspecto, era destacar cómo el discurso político de las organizaciones empresariales (CCE, COPARMEX, CONCAMIN, CANACINTRA y CONCANACO) da forma no solo a un proyecto de nación alternativo al “populista”, cómo van definiendo el rumbo de la transición en la medida que se observa una clara coincidencia entre el proyecto de la *tecnocracia* y el proyecto empresarial. En ese sentido, representa una de las causas más importantes de la erosión ideológica de la burocracia política, así como de la legitimación del proyecto de la tecnocracia que asciende al poder en 1982. Por ello, se presta atención a los discursos empresariales de 1985, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, que constituyen, tal vez, el principal aporte de esta investigación al tema de los empresarios mexicanos. Se trata de sugerir cómo las relaciones de poder entre las elites se expresan a través de una lucha simbólica.

Por otra parte, también consideramos importante brindar un espacio al discurso de importantes empresarios que por su riqueza o su posición de liderazgo, eran muy significativos en la interpretación sobre la política, la economía y la sociedad mexicana. Del mismo modo, se dio voz en este trabajo a empresarios comunes que también enriquecen el contexto de esta investigación. Los testimonios de los dos casos los incorporamos en el Anexo, aunque es un considerable aporte para contemplar otra perspectiva de los aspectos aquí tratados, así como incorporar sus experiencias para reconocer la complejidad del mundo empresarial.

El discurso de las organizaciones empresariales en los años señalados, sirvió para dar cuenta de la ideología de ese sector social, por lo tanto de su concepto de nación y de

las soluciones que desde su perspectivas resuelven la crisis económica que vive el país desde la década de los setenta, década en el que se hizo evidente el agotamiento del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones. De tal manera que permite observar la forma en que este sector confrontó políticamente a una burocracia política que intentaba mantenerse en el poder con base a la exaltación del nacionalismo y el compromiso de los gobiernos posrevolucionarios con las clases trabajadoras. Lo cual hizo evidente que si bien la deslegitimación que sufrió esta elite política responde a múltiples causas, uno de los factores determinantes fue el papel político de los empresarios a través del lugar que ocupa el discurso de sus principales organizaciones en el espacio creado por los medios de comunicación masiva, en el cual se construyen las corrientes de opinión que legitima a cualquier sistema político. Así, fue posible comprobar que estas organizaciones se constituyeron en uno de los principales instrumentos de presión en contra de los gobiernos populistas que se mantuvieron en el poder hasta 1982.

De la misma forma, el discurso de las organizaciones empresariales demostró la coincidencia ideológica con la tecnocracia que arribó al poder desde entonces. Lo cual, también, explica cómo este sector social fue fundamental en la legitimación de un nuevo proyecto de nación que privilegiaba las condiciones de un mercado que no dejaba espacio a la política social de los gobiernos anteriores. En esa lógica, el discurso empresarial dio la cobertura política que hizo posible la derrota de una ideología nacionalista y popular, hasta imponer como dominante a la ideología empresarial.

Por otra parte, el tratamiento del discurso de las organizaciones empresariales no solamente da cuenta de uno de los aspectos más importantes de la cultura política de este sector social, sino que es indispensable para probar el modelo interpretativo de la transición mexicana que aquí se propone. Pues desde la perspectiva energética de la teoría de los sistemas se requiere definir el elemento que permita comprobar la interacción entre las partes sistémicas; que el sistema de toma de decisiones se pone a prueba estableciendo la relación entre demandas de algún sector social o actor político, y las decisiones gubernamentales que generalmente se hace visible con la definición de políticas públicas, la política económica o los acuerdos políticos que definen la solución a los problemas más apremiantes de la nación.

Evidentemente, no es posible dar forma a un modelo sustentado en la teoría de los sistemas pasando por alto el papel que juega la información y la comunicación política. Ello hace patente la necesidad insoslayable de recurrir al análisis de un discurso político que tenga una presencia significativa en los medios de comunicación masiva, y por tanto, que influya en la conformación de la opinión pública. En el caso de México, difícilmente se encontrará un discurso político con la cobertura que ofrece el discurso de las organizaciones empresariales, lo que no solo comprueba el poder de este sector social, sino el significado que tienen los medios de comunicación en la reproducción de la política. Lo que permite comprobar en el caso mexicano que los rituales de la política moderna quedan subordinados al papel que juegan los medios de comunicación, que por cierto, están en poder de grandes empresarios, y que por tanto son utilizados a su favor en la reproducción simbólica del poder.

En el caso de los testimonios de empresarios que por su poder económico o su posición como dirigentes de alguna organización empresarial y que fueron incorporados en la parte del Anexo, lo cual permite comprobar dos formas del poder empresarial: una, la de facto, el derecho de picaporte que tienen los propietarios del gran capital, siempre vinculados con las elites gubernamentales; otra, que la posición de liderazgo en alguna de las principales organizaciones empresariales permite momentáneamente que los directivos en turno accedan al poder, sobre todo por el acceso a los medios de comunicación que los coloca como líderes de opinión.

Del mismo modo, el discurso de los empresarios comunes (también incluidos en el Anexo) permite observar que su precario poder económico, como propietarios de medianas, pequeñas y micro empresas, los excluye de participar del poder político, lo que casi los coloca en una situación de un ciudadano común y corriente. Esta situación permite observar, como quedó demostrado en los testimonios de estos empresarios, la distancia entre las organizaciones empresariales y esos empresarios que enfrentan las condiciones del mercado carentes de los recursos o instituciones que el gobierno aparentemente pone a su disposición.

Es pertinente insistir en que la metodología desarrollada en esta investigación, si bien se abocó a un análisis de un periodo muy delimitado, 1993-1997, también descubre tendencias del poder que permiten comprender, interpretar y deducir las grandes líneas

sobre las que se mueven los gobiernos neoliberales, sean priistas o panistas, y por tanto, las relaciones del nuevo gobierno con las elites empresariales. Esto alude, según la lógica de lo expuesto a lo largo de nuestro trabajo, que la convergencia ideológica de los gobiernos neoliberales y el sector empresarial representa la alianza entre la tecnocracia y este sector social; y que por tanto, la defensa de esta nueva racionalidad del Estado mexicano es un compromiso que los reúne en contra de cualquier posibilidad de restablecer el proyecto posrevolucionario u otro de índole social.

Por último, es importante reiterar las principales limitantes que presenta esta investigación pues es evidente que se trata de proponer un modelo interpretativo sobre la transición mexicana, lo cual obliga de definir tanto su lógica como sus partes, así como ensayar su pertinencia a partir de ponerlo a prueba a partir del papel que juega un actor político en un determinado contexto socio-histórico. Se trató entonces de utilizar la trayectoria de un actor político como eje expositivo de un proceso social, lo que provoca un evidente sesgo en la perspectiva adoptada y, por tanto, una reducción de la complejidad histórica que supone todo proceso social. Situación implícita en la aplicación de la teoría de los sistemas ya que presupone la esquematización de la complejidad. En la medida que se toma como eje expositor la acción política de los empresarios mexicanos, específicamente el papel que juegan las organizaciones empresariales en la creación y desarrollo del sistema político mexicano y el proceso de la transición, se omiten detalles que corresponden a la trayectoria personal de los principales propietarios de capital en nuestro país, cuestiones del desarrollo y la reordenación de los grupos económicos. No obstante, la perspectiva que esta investigación ofrece abre otras incógnitas de marcado interés para el análisis político y que evidentemente quedan como compromiso para trabajos futuros. Principalmente, ¿Cuál es la relación de los grandes empresarios con las principales organizaciones empresariales? ¿Cómo han influido los grandes capitales para determinar quien queda a cargo de las principales organizaciones? Y por tanto, ¿A qué intereses específicos obedece la gestión de estas organizaciones? Así como ¿Qué posiciones han ocupado los líderes empresariales en las Cámaras de Legisladores y Senadores? Lo cual permitiría precisar su vinculación con los partidos políticos así como las cuotas de poder a las que ellos han accedido. Que no es otra cosa que una dimensión más del poder empresarial.

## ANEXO

### Los otros discursos empresariales

#### 1. *El discurso de líderes empresariales.*

Si dentro de algún sistema social alguien detenta la posesión de los recursos que se requieren para garantizar su reproducción y persistencia en el tiempo, invariablemente, ese actor, individual o colectivo, ostentará una cuota importante del poder que todo sistema político requiere para su reproducción. De hecho, tanto en el pasado como en el presente, todo poder económico es la representación más visible del poder político (Turner, 1988, 1980, 1974; Cohen, 1979; Varela, 2005; Bartra, 1996; Castaingts, 1995,1994).

En ese sentido, los empresarios, los propietarios del capital, siempre están vinculados al poder, sea que lo ejerzan directa o indirectamente, que se coloquen como líderes formales o naturales de la sociedad, su presencia siempre está asociada al poder. Sin embargo, su presencia no necesariamente deberá ser una parte visible de los escenarios donde acontecen los rituales de la política moderna, como en el caso del sistema político mexicano, pues su especificidad y el propio significado de la revolución de 1910, ocultó su presencia en la medida que se privilegió la participación de las clases trabajadoras.

A pesar del poder que poseían los grandes empresarios mexicanos, se mantuvieron distantes del escenario político, ejerciendo su poder a través de sus “derechos de picaporte”, como sugiere Tirado (1994), y utilizando a las organizaciones empresariales como instrumentos de expresión de sus intereses particulares, y están formalmente reconocidas como parte del sistema político que emergió a partir de los años treinta (Valdés, 1997,1990; Hernández, 1992, 1988).

No obstante, la evolución de su experiencia política ha permitido observar que poco a poco, cómo los empresarios más importantes del país han recurrido a los medios masivos de comunicación, como es la Televisión, la Radio y la Prensa Nacional. Además, que últimamente se observa una mayor presencia de sus discursos en los medios y la publicación de su biografías, en los cuales es posible captar tanto su trayectoria empresarial

como su visión del mundo. En este apartado damos cuenta de ello, a partir de la biografía de tres grandes empresarios, ya sea en calidad de autobiografía o de un levantamiento testimonial, y de entrevistas que realizamos a dos líderes que dirigían o dirigieron organizaciones empresariales, fundamentales en la interpretación antropológica de esta investigación.

En este apartado se incluye la bibliografía de don Juan Sánchez Navarro, por tratarse del único personaje que pudiera considerarse como un ideólogo del sector empresarial, además de ser uno de los fundadores del CMHN, el Consejo Nacional de la Publicidad y el CCE. A Manuel Espinosa Iglesias, por haber sido uno de los banqueros más prominentes de México y América Latina, testigo y afectado por la expropiación bancaria en 1982, y desafortunadamente afectado por la entrada de nuevos banqueros a quienes el gobierno vendió los bancos. A Carlos Slim por ser el cuarto empresario más importante del mundo, beneficiario del proceso de privatización de la economía y por tanto, la voz individual más representativa del sector empresarial. También se incluyen las entrevistas de Jorge Ocejo, por haber sido presidente de la COPARMEX, secretario general del PAN y coordinador de asesores del secretario del trabajo en el sexenio de Fox. Así como la del ingeniero Picard, en su calidad de presidente de la CANACINTRA.

Después de ese apartado, presentamos una etnografía realizada a cinco empresarios que no tienen posiciones de liderazgo y que su capital no se traduce en el acceder al poder, por lo cual nos referimos a ellos como “empresarios comunes”. Ello aparecen con otros nombres con el fin de proteger su anonimato.

### *1.1 Juan Sánchez Navarro: el ideólogo empresarial.*

A Don Juan Sánchez Navarro se le atribuye una cuna de añejo abolengo. Su familia fue propietaria de un gran latifundio en el estado de Coahuila, uno de los más grandes de América Latina en el siglo XIX. Su historia familiar data del siglo XVIII en el lugar de origen: España, y pasa por una importante parte de la historia del México independiente. De hecho, uno de los primeros objetivos que se puso Don Juan y su hermano Carlos, en los años cuarenta, fue recuperar la propiedad familiar con el fin de crear una compañía de

explotación de la candelilla. El proceso fue largo y tortuoso, sin embargo, a pesar de no recuperar algo de la fortuna familiar, las diferentes empresas estadounidenses y luego mexicanas que se asentaron en las tierras donde estaba asentado el latifundio, terminaron abrigando al *Grupo Minera México*, propiedad de Jorge Larrea, del cual Juan Sánchez Navarro y Peón, fue consejero en la década de los noventa.

Don Juan nació el 24 de abril de 1913, en la ciudad de México. Su padre participó en el movimiento revolucionario, incorporándose con el grado de coronel que personalmente le entregó Emiliano Zapata. En ese mismo año que nació Don Juan, el ejército revolucionario hizo un reconocimiento a su padre, Carlos Sánchez Navarro y Martínez de la Torre, por la fiereza con que combatió a las fuerzas huertistas. También tuvo el honor de acompañar al general Álvaro Obregón en su entrada triunfal a la capital de la república, el 15 de agosto de 1914 (Ortiz Rivera, 1997).

En lo personal, la primera experiencia que Don Juan tuvo en los revueltos tiempos del inicio del siglo XX en México, tuvo que ver con su fe religiosa (estudio en un colegio marista) y las persecuciones religiosas que desencadenó la guerra cristera, misma que provocó su decidido activismo a favor de los cristeros. Al respecto Don Juan señala:

*Viví una vida muy intensa en ese tiempo. Había la famosa Liga Defensora de la Libertad Religiosa...yo me metí en esos grupos y participé. Teníamos la sensación de ser cristianos de catacumbas y lo hacíamos con esa idea de ser perseguidos, pero al mismo tiempo, de heroísmo interno, de quien estaba defendiendo una cosa muy valiosa (Ortiz Rivera, 1997: 62).*

Miembro de familia acomodada, sus relaciones desde la infancia como de su trayectoria, siempre recuerdan nombres cotidianos en la historia de México, como es el caso de la profunda amistad de su hermano José con José López Portillo, con quien mantuvo una relación de respeto y estima a pesar de los conflictos vividos en su sexenio, con los empresarios, sector del cual Don Juan era un reconocido ideólogo. El hecho que su hermana Teresa se casara con Luis de Yturbe Limantour. Él mismo se casó con María Teresa Redo, hija de una de las familias más adineradas de la capital, a pesar que su situación personal distaba de ser lo que podría calificarse como “rico”. Pero también, Don Juan fue un hombre consecuente con sus principios que desde siempre defendió con mucho carácter, como lo muestra el conflicto jurídico que tuvo con Alberto de la Vega y Miguel

Palacios Macedo, ilustres abogados, con quienes llegó a los golpes y hasta el amagamiento con pistola. Don Juan señala:

*Cuando el derecho es violado, como era violado sistemáticamente por colusión de los jueces, y por normas prácticas que están subyacentes en el mismo derecho, no hay otro camino que poner de relieve los principios por la fuerza, hay que hacerlo.... Yo no tenía confianza el Poder Judicial, y sabía que por ahí podía entrar al círculo de la corrupción y ahí no hay vuelta... (Ortiz Rivera, 1997: 94).*

Juan Sánchez Navarro ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1930, estudió la licenciatura en derecho y la maestría en Filosofía, a la que le dedicó la mayor parte de su vida. A él le tocó el momento en que Portes Gil entregaba la dirección de la Institución a profesores y alumnos, lo que dio inicio a la autonomía de esa universidad. En su calidad de presidente de la Sociedad de Alumnos, le tocó participar en los debates que sostuvieron Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso, entre otros prestigiados personajes, como Pablo González Casanova. Antes de la huelga de 1933, Manuel Gómez Morín quien dejó una profunda huella en Don Juan, fue uno de los personajes centrales de esos debates. Y del futuro que tomó el tratamiento de la autonomía de la máxima casa de estudios. Si Lombardo Toledano, quien además había sido profesor de Don Juan, representaba a la izquierda, Gómez Morín, se movía exactamente en sentido contrario. Así, mientras unos proponían que los planes de estudio se basaran en el *materialismo histórico*, otros tenían ideas radicalmente opuestas a éstas. En ese año, Don Juan encabezaba a un grupo de estudiantes que propugnaban por una enseñanza cifrada en la libertad de una cátedra libre de dogmatismos, posición orientado por Gómez Morín, quien ya fungía como rector de la universidad.

Se trataba de años de revuelo político que aunque distante de la violencia que significa una guerra, no quedaba exenta de enfrentamientos estudiantiles que peleaban la posición y el predominio en el terreno universitario: *“Nos dábamos con las manos, con palos y con todo lo que se podía, a ver quien ganaba las urnas”*. Así, Don Juan fue electo como líder estudiantil, con el apoyo del grupo de estudiantes identificados por su antimarxismo, y por su oposición a las tendencias socialistas, entre ellos se encontraba, Bernardo Sepúlveda (padre de Bernardo Sepúlveda Amor) y Octavio Paz, quien no participaba activamente en el movimiento. Al respecto señala Don Juan:

*Los jóvenes no nos planteábamos el tema de la Revolución (de 1910). Éramos vasconcelistas y, por consiguiente, espiritualistas, y si se veía a la Revolución como el proceso que llevó a caudillos como Obregón y Calles al poder. Entonces no éramos gobiernistas porque estábamos con Vasconcelos.... quien tenía una visión de lo que debía ser la educación en México, un enfoque maravilloso de lo que era el mundo espiritual, del sentido de la América, opuesto siempre a la Doctrina Monroe.... (Ortiz Rivera, 1997: 102).*

Tal nivel alcanzó el conflicto universitario y tal fue la decidida participación de Don Juan, que en septiembre de 1934, ante el enfrentamiento de estudiantes en varias ciudades de la República Mexicana, el alcalde de Monterrey, Elías Calles, hijo de Plutarco Elías Calles, giró órdenes de aprensión en contra de varios estudiantes, entre los que se encontraba Don Juan, quien participaba en los “debates” de esa ciudad.

En la Universidad Nacional, en su papel de Rector, Gómez Morín solicitaba a los profesores de la institución que renunciaran a sus sueldos, para poder pagar los gastos mínimos de la universidad, que se había quedado sin presupuesto en la lucha por ganar la autonomía de la institución. Sin embargo, las relaciones de Gómez Morín con el sector empresarial le permitieron contar con donativos que hicieron posible mantener, aunque fuera precariamente, el mínimo funcionamiento de la universidad.

Luego de ganar el reconocimiento gubernamental a la *libertad de cátedra*, el presidente Cárdenas creó el Instituto Politécnico Nacional en 1936, “*con la intención malévola de hundir a la libertad de cátedra...lo cual representaba el avance del socialismo*”. Opinión de Don Juan que cambió con el tiempo, al valorar los aportes del IPN (Ortiz Rivera, 1997).

Por otro lado, tanto su descendencia española como su presencia entre 1936 y 1937 en la *madre patria*, en momentos culminantes de la guerra, propiciaron que Don Juan siempre tuviera presente la relación con España, misma que jugará un papel importante para mantener la unidad de la comunidad peninsular en México. Un poco más tarde se incorporó como alto funcionario de la *Modelo*, propiedad de españoles, lo que le permitió fundar y presidir el *Comité Bilateral de Hombres de Negocios México-España*. Esta posición honoraria le facilitó mantenerse muy atento del proceso político de México, y proponerle personalmente al presidente Díaz Ordaz, después de la caída de Franco, el

restablecimiento de las relaciones con España. En agosto de 1977, formó parte de la comitiva de José López Portillo en su visita a la *madre patria*, después de proponer la lista de hombres de negocios que integrarían la delegación empresarial, dentro de la cual se encontraban: José María Basagoiti (quien años después dirigiría a la COPARMEX, y formaría parte de lo que se conoció como *neopanismo*) José Pintado (su yerno y entonces presidente de la *Asociación de Banqueros de México*, organización empresarial que confrontó ideológicamente a López Portillo, difundiendo rumores sobre un posible golpe de Estado), Alberto Bailleres y Rómulo O'Farril, entre otros.

Don Juan recuerda sin algún recato, de ser desde joven, de derecha o conservador, como lo sugiere el siguiente pasaje: *No nos veían con buenos ojos ni a mi hermano ni a mí porque éramos muy conservadores. Éramos buenos estudiantes, ya graduados pero reaccionarios, y había en la universidad un espíritu digamos liberal* (Ortiz Rivera, 1997: 155). Lo cual se confirma a través de sus inquietudes filosóficas y su decidida convicción religiosa que se observa en el título de su tesis de filosofía: *El concepto cristiano de la propiedad*, misma que dedicó a sus maestros Antonio Caso y Manuel Gómez Morín. De hecho, a pesar de haberse desempeñado como asistente en un prestigiado despacho de abogados, su declarado interés intelectual lo llevó a contratarse como profesor, primero en el Colegio Motolinía, y posteriormente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tal pasión tenía por la cátedra, que a pesar de su gran responsabilidad empresarial se mantuvo por largo tiempo como catedrático de varias universidades, entre las que destaca la Universidad Iberoamericana. De manera análoga, también se interesó por el periodismo, actividad que no solo le ofreció un espacio de reflexión que diera rienda suelta a sus críticas filosóficas, sino, además, le permitió acercarse ideológicamente al Partido Acción Nacional.

*Juan Sánchez Navarro entró a trabajar en Novedades como editorialista y escritor de artículos de fondo en 1938, al regresar de España; después fundó, a instancias de don Manuel Gómez Morín, una agencia de publicidad, al tiempo que se sumó a la fundación del Partido Acción Nacional y participó activamente en su primer órgano de difusión, Voz Nacional* (Ortiz Rivera, 1997: 171).

De hecho, las habilidades intelectuales de Don Juan fueron el motivo por el cual Manuel Gómez Morín lo tuvo siempre presente, no solo en el plano de los negocios, sino en la perspectiva política del PAN. Su gran trayectoria como publicista, primero, en una

agencia en la que se asoció con Gómez Morín, luego como periodista y académico, hicieron de él uno de los jóvenes valores en la fundación del PAN, como lo comprueban el registro 106 y la credencial 310 que son el testimonio de la participación de Juan Sánchez Navarro en la fundación de ese instituto político en 1939. Constituido el partido que retomaba los postulados ideológicos y filosóficos de Gómez Morín, los primeros militantes se dieron a la tarea de discutir el ideario panista, además de Don Juan y sus dos hermanos, Carlos y Alfonso, se encontraba Enrique Loaeza (padre de la politóloga, Soledad Loaeza y la escritora Guadalupe Loaeza), José Fernández de Ceballos, Pedro Zuloaga, Francisco Fernández del Cueto, Luis Quijano Legarreta, Daniel Kuri Breña y Carlos Ramírez Zetina, entre otros.

Particularmente, Don Juan atribuye a movimiento universitario por la libertad de cátedra, la fundación de Acción Nacional, pues Gómez Morín convocó a todos aquellos que participaron en el movimiento para conformar ese instituto político. Sin embargo, a los pocos años de su participación en el nuevo partido, don Juan decidió dedicarse de lleno a la actividad empresarial que había descuidado con su participación política. Sin querer decir que abandonara el trabajo intelectual, pues tal habilidad le permitió en los años subsiguientes desempeñar un activo papel en el desarrollo de la ideología empresarial, que obviamente comparte muchos de los preceptos del ideario panista. No obstante, Juan Sánchez Navarro consideraba que: *los empresarios no debían participar en política, entre otras cosas porque no lograrían el voto del pueblo y porque no debe sumarse el poder político al poder económico* (Ortiz Rivera, 1997: 193).

En 1959, don Juan participó en la fundación del *Consejo Nacional de la Publicidad*, órgano que expresa el pensar y sentir de la iniciativa privada. Y también participo en la fundación del *Consejo Mexicano de Hombres de Negocios*, a principios de los sesenta, producto de su desempeño como coordinador de *Consejo de Hombres de Negocios México-España*.

Mucho más tarde, como accionista de la Cervecería Modelo, consolidado como el principal ideólogo del sector empresarial, y muy vinculado a los medios de comunicación masiva, por lo que tocaba a su oficio como publicista, le tocó vivir el conflicto de *Excélsior* que descubrió la forma tan peculiar del presidente Echeverría de hacer política. Es de recordar que la importante presencia política de don Juan respondía a su destacada

actividad empresarial y a un visible papel como ideólogo de ese sector. Ello permitía aproximarse a lo más selecto de la clase política y le permitió tener un contacto directo con el presidente de la república y el gabinete en turno.

Esta nueva situación que vivió en el año de 1972, a partir del conflicto de *Excélsior*, derivaba una posición protagónica por su papel como presidente del *Comité Empresarial*, que más tarde dio origen al *Consejo Coordinador Empresarial* en 1975, lo cual lo posibilitó a convocar, junto con Alberto Bailleres, presidente de la Cervecería Moctezuma, a un boicot en contra de la nueva dirección de *Excélsior*. Así, empresas como Palacio de Hierro, Aurrerá, Comercial Mexicana, París-Londres, Liverpool, Sears, Viana, Hermanos Vázquez, Bancomer, Gigante, General Motors, Cervecería Cuahutémoc, H. Steel y Cía., decidieron retirar su publicidad de aquél periódico, lo cual afectó económica y políticamente a la administración del mismo, pero sobre todo a la posición política-ideológica gubernamental. La justificación de una iniciativa de tal tipo obedeció a que según ese grupo de empresarios dirigidos por don Juan, la nueva línea editorial obedecía a las directrices planteadas por el gobierno de Echeverría, de clara tendencia comunista y socializante, y por tanto, en contra de los preceptos de la libre empresa y la iniciativa privada (Ortiz Rivera, 1997: 198)

El primer trabajo de don Juan, después de su retorno a México, en 1938, fue en la Cervecería Central, subsidiaria de la Cervecería Cuahutémoc. Enrique Sada, alto funcionario de esa empresa, le dio la oportunidad de incorporarse, dados los lazos de amistad que antaño sostuvieron sus familias a partir de la expropiación que hizo Juárez al bisabuelo de Juan Sánchez Navarro. Sin embargo, a pesar de sus títulos y su experiencia como periodista, solo le ofrecieron un trabajo como mensajero, actividad que además contemplaba el pegar carteles en las calles, misma que requería cargar una escalera y cubeta de engrudo, que transportaba en una desvencijada camioneta. Tal como se lo había advertido Enrique Sada: “Es usted profesor y le gusta la filosofía, pero aquí eso no sirve. Aquí son sus propios méritos los que valen, se trata de una actividad totalmente distinta. Si usted quiere entrar tiene que ser desde abajo”.

Sin embargo, dos meses más tarde le dieron oportunidad de redactar unos anuncios, lo que le valió que lo reubicaran como jefe en el departamento de publicidad. Eso le dio la oportunidad para conocer a Eugenio Garza Sada. Su trabajo en la Cervecería Central

duro tres años, después trabajó dos años en Publicistas Mexicanos, donde tuvo la suerte de participar en un balance de ventas que reflejaba que la Cervecería Modelo había vendido el doble que la Cervecería Cuahutémoc. En esa oportunidad conoció a don Pablo Díez Fernández, fundador de Modelo, quien se interesó en la forma y pasión que Juan Sánchez Navarro tenía por su profesión; a partir de entonces, 1942, fue invitado a colaborar en esa empresa con un puesto de gerente.

Su primera sorpresa la tuvo cuando se percató que el ambiente de trabajo era demasiado hostil (los trabajadores aprovechaban cualquier oportunidad para lanzar botellas a los ejecutivos de la empresa), situación provocada por la radicalización inducida por Vicente Lombardo Toledano, quien dirigía al Partido Popular Socialista. La lucha de clases se proyectaba nuevamente como la principal fuente de conflicto, y en muchas ocasiones permitía advertir ideologías que luchaban por apoderarse de un espacio político que posibilitara influir en la gente. Son llamativas algunas ideas de don Juan, al respecto:

*Si hubiera habido una libertad total y no hubiera intervenido el gobierno apoyando a estos grupos colaboracionistas del sistema corporativo fascista, que ha sido el mexicano, hubieran surgido muchísimos líderes y organizaciones de izquierda que se hubieran apoderado del movimiento sindical y hubiera sido para el país un gran retroceso. Hay que pensar que en esos momentos el comunismo tenía un exponente impresionante, que parecía ser el modelo a seguir. La Unión Soviética parecía ser la fase final de la evolución del mundo... (Ortiz Rivera, 1997: 228).*

Juan Sánchez Navarro consideraba que las tendencias socializantes de Cárdenas, solo eran “expresiones emotivas”, pero que en realidad comprendía que los patrones necesitaban controlar a los trabajadores, lo que se logró con el intervencionismo estatal y la estructura corporativa que disciplinó a la clase trabajadora, medida que curiosamente impulsó y tomó Cárdenas.

El propietario de la Cervecería Modelo, Don Pablo Díez Fernández, con quien don Juan había entablado una relación afectuosa, casi de carácter familiar, tenía un sentido del trato muy particular con los trabajadores de la empresa. De mucho era conocida su generosidad que permitió la construcción del Hospital Español, la Universidad Iberoamericana, así como la constante ayuda a la Cruz Roja Mexicana, pero algo que llamaba muchísimo la atención de don Juan era el tipo de interacción que tenía con sus trabajadores. Es el caso de las diferentes negociaciones con el sindicato de la empresa, en los cuales se mantenía en una postura firme en la negociación salarial, pero ya acordado

el monto era común que a la hora de firmarse el convenio, se incorporara la propuesta de un incremento adicional y un agregado en el rubro de prestaciones. O el significativo hecho que el propietario de la Cervecería Modelo, y accionista de Banco Nacional de México, Celanese Mexicana y Condumex, considera inapropiado para los trabajadores, la conducta ostentosa de los propietarios o directivos de la empresa. Esta benévola actitud determinó que la decisión de don Pablo Díez respecto a que su fortuna quedara en tierras mexicanas, se tradujera en el beneficio directo de los sus trabajadores, pues el 3 de marzo de 1970, en el evento organizado por la *Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México* para otorgarle la Medalla al Mérito Empresarial, anunciara que el 50 % de las acciones de la *Modelo*, pasarían a manos de mexicanos que en diferentes puestos habían servido a la empresa. Tal decisión fue apoyada por una política de caja de ahorros, gratificaciones, bonos y créditos a empleados para hacerse de mayor número de acciones. Y a los 57 años de edad, y con cerca de 30 años de servicio a la empresa, Don Juan pasó a ser accionista de la empresa, y en noviembre de 1971, fue nombrado como vicepresidente del consorcio (Ortiz Rivera, 1997: 235-241).

Para don Juan, la relación entre política y actividad empresarial inevitablemente provocan corrupción, como lo demostró el amiguismo en el sexenio de Miguel Alemán y Carlos Salinas de Gortari; a diferencia de Adolfo Ruiz Cortines, quien con un gabinete de personas muy honorables, combatió decididamente la corrupción.

Respecto a su opinión de *cámaras empresariales*, su primera experiencia fue a partir del contacto con la CANACINTRA, dado que la Cervecería Modelo pertenecía a ella. En su opinión: “A la Canacindra el gobierno la ocupó para dividir a los empresarios, esa cámara tenía un perfil ideológico oficialista.” No obstante, a mediados de los cincuenta, José Domingo Lavín, presidente de esa *organización empresarial*, le invitó a incorporarse como *vicepresidente*, cuyo cargo desempeño durante el tiempo establecido reglamentariamente. En CANACINTRA conocería a Jesús Reyes Heróles, pues se desempeñaba como secretario de José D. Lavín, de él recuerda algunas cosas:

*Reyes Heróles era el que le escribía los artículos de tinte izquierdista, dentro de lo que es la empresa, y nos violentaba mucho, precisamente porque iba en contra de las ideas de la libre empresa. Mis relaciones fueron tensas por un buen tiempo; sin embargo, años después coincidimos en el Consejo de Altos Hornos (cuando ya era secretario de Estado) de México, yo representando a los empresarios y él al*

*Estado, y cada vez que había reunión de consejeros nos colocaban a él y a mí juntos, y con ese motivo entablamos algún contacto y una relación en la que se fueron limando asperezas (Ortiz Rivera, 1997: 256).*

También fue vicepresidente de la CANACO de la Ciudad de México, y presidente de CONCANACO (1956-1958) y de la CONCAMIN (1962-1964); fundador del *Consejo Mexicano de Hombres de Negocios* (CMHN), creado en 1962, y el *Consejo Coordinador Empresarial* (CCE), creado en 1975, de los cuales fue presidente y coordinador.

La elección en julio de 1958, causó una buena impresión en el sector empresarial. Fue a Juan Sánchez Navarro, como presidente de CONCANACO, a quien correspondió coordinar los trabajos del sector para entregarle al presidente electo las sugerencias correspondientes. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a observarse acciones gubernamentales que iban inquietando al sector empresarial, como es el caso del aumento de presupuesto a las universidades, la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto gratuito, obligatoriedad que comenzó a partir de 1962. Pero no fue hasta que se hizo evidente el aumento de la *intervención del Estado en la economía*, acción que tenía como precedente la nacionalización de la industria eléctrica y la estatización de la Compañía Operadora de Teatros, propiedad de Manuel Espinosa Iglesias, que el malestar empresarial ya no se pudo contener.

De hecho, ya electo presidente López Mateos, en una comida que le ofrecían los líderes empresariales, el entonces presidente de la CONCANACO, Adolfo Riveroll, le espetó: “*Señor presidente, ahora y aquí, delante de todos, díganos: ¿es usted comunista?*.” A lo que el presidente electo, contestó: “*Mi gobierno es, dentro de la Constitución, de extrema izquierda?* De ahí, hasta las diferentes acciones que hacían avanzar al Estado en su intervencionismo económico, se explica el famoso despliegado que CONCANACO, CONCAMIN y COPARMEX, publicaron el 24 de noviembre de 1960 y que se conoce con el nombre de *¿Por cuál camino, señor presidente?* Donde expresan su intranquilidad por el aumento de la inversión estatal en la economía, misma que alcanzaba, según ellos, alrededor de cuarenta mil millones de pesos y que sumaban un total de 380 empresas de participación mayoritaria o total del Estado mexicano. Tal situación explicaba la razón de la *demanda empresarial* para que se pusieran en venta estas empresas paraestatales. Evidentemente, la respuesta del gobierno no se hizo esperar, y al otro día a ocho columnas,

el gobierno justificaba la intervención estatal: *“El estado no desplazará a la empresa privada; sólo la encauza”*. A partir de ahí, López Mateos comenzó a modificar su discurso en el ámbito de la política económica, ya que el sector empresarial estaba conforme con la “mano dura” mostrada con el movimiento sindical, particularmente con el de maestros y ferrocarrileros (Ortiz Rivera, 1997: 293-296).

En 1962, Juan Sánchez Navarro (a quien tocó la redacción de los estatutos), Jorge Larrea, Agustín Legorreta, Rómulo O’Farril, Carlos Prieto, Bernardo Quintana, Antonio Ruiz Galindo, Camilo Garza Sada, Cesar Balsa, Ánibal de Iturbide y Carlos Trouyet, fundaron el *Consejo Mexicano de Hombres de Negocios* (CMHN) en el contexto de la Guerra Fría y el apoyo que brindó López Mateos a la Revolución cubana. Las relaciones entre el gobierno mexicano y los empresarios aparecían contrapuestos en la perspectiva del futuro del país: *“.... Ya estaba claro que la del gobierno y la de los hombres de negocios eran dos visiones distintas de la forma en que se debía conducir la política económica del país; que eran distintos los actores que, según cada quién, debían orientar el desarrollo”* (Ortiz Rivera, 1997: 298).

El consejo se formó en sus inicios por una docena de grandes empresarios que después se amplió a cerca de treinta. Don Juan consideraba que el CMHN, era una organización “discreta pero no secreta”, por lo que se estableció en los estatutos que: *“Por principio, las actividades del Consejo no serán motivo de publicidad exterior y se llevarán a cabo en forma estrictamente privada”* y *“sin negar su afiliación con el sector privado, el CMHN no actuará como vocero de él”* (Ortiz Rivera, 1997: 302).

El CMHN, del cual don Juan fue su primer presidente, siempre tuvo contacto con el presidente de la nación, e invariablemente seguía acuciosamente los procesos de sucesión presidencial. Como fue el caso de la entrevista con Gustavo Díaz Ordaz el 11 de noviembre de 1963, en la casa de uno de los miembros del consejo, donde se le presentó la posición del sector empresarial.

No obstante la buena relación con Díaz Ordaz, a partir del evento organizado por la CONCAMIN en noviembre de 1965, donde Juan Sánchez Navarro presentó un documento sobre seguridad jurídica, el periódico *La Prensa* publicaba al día siguiente que los empresarios atacaba al régimen de la Revolución, aunque otros medios como *Excélsior* y *El Día*, presentaban la nota de una manera visiblemente moderada. Sin embargo, es

fundamental, reconocer la importancia que adquiere el solo hecho de tener presencia en la prensa, pues esto permite debatir públicamente las cuestiones del interés de “toda la sociedad”. Pero pese a la diversidad con que habían aparecido las declaraciones de don Juan, hubo necesidad de que los empresarios, por conducto de la CONCAMIN, expresaran en los medios de comunicación masiva que las declaraciones de Juan Sánchez Navarro habían sido mal interpretadas. Por otra parte, el eco generado por las declaraciones provocó cierta tensión, al grado que don Juan recibió telegramas de felicitación por parte del *Movimiento Universitario de Renovadora Orientación* (MURO) y del presidente de COPARMEX, Roberto Guajardo Suárez.

Juan Sánchez Navarro siempre mantuvo un contacto muy cercano con el presidente de la República, y con una parte muy selecta del gabinete, como lo muestra su testimonio sobre el conflicto de la crisis de los misiles, ya que en México se daban muchas demostraciones de apoyo a la Revolución Cubana, lo cual provocó que “*el gobierno de los Estados Unidos hiciera un llamada de atención al López Mateos previniéndolo de la presencia comunista en México*”. De tal forma que en el punto más álgido del conflicto, López Mateos se encontraba en una gira diplomática acompañado de una delegación de empresarios de la cual formaba parte don Juan; el presidente llamó a su secretario de gobernación para encargarle el problema. Gustavo Díaz Ordaz actuó con la eficacia que esperaba el momento, encarceló a 500 jóvenes quienes eran identificados como dirigentes de izquierda, y por tanto, aliados de Fidel Castro, reteniéndolos hasta que pasó el conflicto. Era la “mano dura” que valoraban los hombres de negocios, como señalaba don Juan.

También le tocó presenciar los conflictos existenciales que, según él, tenía Díaz Ordaz a causa de Luis Echeverría. Narra que “el día que Luis Echeverría entregó el poder a López Portillo, Emilio Azcárraga organizó una comida en un restaurante, a la que asistieron los ex-presidentes Miguel Alemán y Díaz Ordaz con quien don Juan tuvo la oportunidad de platicar. En ese momento escuchó la rabia con que Díaz Ordaz se expresaba de Luis Echeverría, pues consideraba que sus políticas y su forma de hacer política era “totalmente contraria a la suya”. Por ello Díaz Ordaz, señala don Juan, decía frecuentemente: “Fui un buen presidente, pero un mal elector” (Ortiz Rivera, 1997).

Una tarde de junio de 1968, en el auditorio de la CONCAMIN, ubicado en la Colonia San Rafael, don Juan, en su calidad de presidente del CMHN, participaba como

conferencista junto con su amigo y ex-compañero de la universidad, Hugo B. Margáin, con quien, en uno de los descansos, le tocó presenciar el desplazamiento de contingentes de médicos que anticipaban la tragedia del 2 de octubre. A don Juan le tocó estar, desde tres días antes, junto a Díaz Ordaz cuando tomó la decisión y comunicó al secretario de defensa, que “había de controlarse la situación”. Ese valor y “compromiso histórico” es lo que valió a Díaz Ordaz, según señala don Juan, el reconocimiento por parte de los hombres de negocios.

Para don Juan, el conflicto con Echeverría inició a finales de enero de 1971, cuando COPARMEX entregó un documento al presidente de la República donde los empresarios planteaban demandas y algunas críticas a su gobierno. Echeverría contestó con marcado encono: *“No es posible hacer convivir, en el seno de una organización como la Coparmex, intereses contradictorios, algunos de los cuales realmente afectan al porvenir económico del gobierno, sino en la que sea un sano nacionalismo”* (Ortiz Rivera, 1997: 324).

En octubre de 1973, se dio otro altercado en el que participó don Juan. Fue en relación con las posiciones que los actores políticos adoptaban respecto al papel que debería de jugar la inversión extranjera. Tema sensible en el sexenio, pues en la lógica de Echeverría, el gobierno había de avanzar en el fortalecimiento de la posición económica del Estado, restringiendo, además, la inversión extranjera. Estrategia que se legitimaba exaltando el compromiso nacionalista y la necesidad de continuar fortaleciendo el mercado nacional.

No obstante, las posiciones del sector empresarial variaban en función de los escenarios, y en ocasiones salían a relucir los buenos oficios de los “hombres del presidente”, quienes en privado intentaban explicar los beneficios que dejarían las decisiones del gobierno, subrayando que la política económica también beneficiaría al sector empresarial. Sin embargo, la *ideología nacionalista revolucionaria*, así como las movilizaciones del *sindicalismo independiente*, metían demasiada presión en las relaciones empresarios-gobierno, coyunturas donde don Juan trataba de mediar, intentando hacer una sana crítica y reconociendo los aciertos de la burocracia política. En un foro de la CONCAMIN en noviembre de 1973, expresó su acuerdo con algunas medidas de expropiación de tierra, que por cierto habían afectado a su familia política, no obstante, manifestó su comprensión por aquél hecho y planteó algunas propuestas respecto del

campo mexicano. La primera, reformar el artículo 27 constitucional; segunda, crear un Tribunal Agrario; tercera, fraccionar los latifundios en beneficio de los ejidatarios y pequeños propietarios, y cuarta, crear un organismo para representar los intereses de los pequeños propietarios. Como se puede observar, esta propuesta que estaba en consonancia con la reforma al artículo 27, impulsada por el PAN, tomó forma en el sexenio de Salinas de Gortari al calor de la reforma del Estado y los cambios a la Constitución mexicana.

Las decisiones gubernamentales, así como el *discurso nacionalista revolucionario* provocó una abierta preocupación en los empresarios mexicanos, mismo que, según una carta que envió a don Juan en agosto de 1974, Eustaquio Escandón, lo prevenía de:

*“Una virulenta campaña de bromas, chistes, cuentos, etc., todo ello con el propósito de hacer aparecer a la figura del presidente como un inepto, un tonto, un desequilibrado. Evidentemente, esta marejada de ataques con propósitos de desprestigio tiende a debilitar y eventualmente destruir la autoridad del presidente.... Para reducir o esquivar su responsabilidad, el gobierno viene de tiempo atrás lanzando ataques y acusaciones al sector privado, a la banca, a la industria y el comercio, calificándolos de verdaderos responsables de deficiencias y fracasos en la operación económica del país”* (Ortiz Rivera, 1997: 333).

Esta situación empeoró, cuando en ese mismo mes, la CTM amenazó con una huelga general por aumento salarial, lo que provocó que tanto el CMHN como el resto de las *organizaciones empresariales*, cerraran filas para enfrentar políticamente la situación, pues consideraban que se trataba de una amenaza directa para el sector. Es así como a partir de el Primer Coloquio Atalaya 74, organizado por don Juan y otros 11 miembros del CMHN, nació la idea de formar un Consejo Coordinador Empresarial que se crearía en mayo de 1975, en un contexto de fuga de capitales y una precaria situación del peso frente el dólar, pero sobre todo al inicio del proceso de sucesión presidencial. En este proceso intervinieron junto a don Juan, Manuel Espinosa Iglesias, Agustín Legorreta, Eustaquio Escandón, Isidro López, Prudencia López, Justo Fernández, Abelardo García Arce, Enrique Rojas, José Represas, Antonio Ruiz Galindo, Alberto Bailleres, Fernando Casas y Armando Fernández.

Don Juan afirmaba que el “destape” de López Portillo fue recibido con un abierto beneplácito. Sin embargo, el desenlace del sexenio, la crisis económica que probaba el agotamiento del modelo económico posrevolucionario, la fuga de capitales, la dolarización de la economía, fue escenario de una marcada polarización entre el gobierno de López

Portillo y los empresarios mexicanos. De tal forma que con la expropiación de la banca el 1º de septiembre de 1982, el CCE jugó como el instrumento fundamental para hacer las negociaciones con el gobierno mexicano.

La llegada de Miguel de La Madrid Hurtado (1982-1988) aconteció ante una clara posición empresarial en contra de la política económica de los dos gobiernos anteriores, los de Luis Echeverría y José López Portillo. De hecho el 23 de agosto de 1982, el CMHN ofreció una comida al presidente electo, a quien le presentaron directa y claramente sus demandas: política de precios reales (liberación de la economía), atacar a la inflación (disminuir la masa de dinero), contener el endeudamiento externo e interno, equilibrar el presupuesto (disminuir el déficit presupuestario), combatir la corrupción, ineficiencia y baja productividad del sindicalismo. Evidentemente las demandas fueron escuchadas y colocadas en el proyecto de gobierno, razón por la cual, al finalizar el sexenio, en 1988, don Juan expresó al presidente que él: *“encabezó el cambio revolucionario más importante en los últimos 50 años, tanto en lo económico como en lo político, más allá de la crisis”* (Ortiz Rivera, 1997: 364).

El sexenio terminó con una cuestionable situación económica, pero con una relación restablecida entre los empresarios y el gobierno mexicano, como lo demostró el hecho que Juan Sánchez Navarro, nuevamente nombrado coordinador del CMHN, organizara la “pasarela” en que los candidatos presidenciales del partido oficial presentarían su proyecto económico, político y social, a los grandes empresarios de México.

A Carlos Salinas de Gortari lo conoció desde niño, pues en su calidad de presidente de la CONCANACO y luego de la CONCAMIN, tuvo un estrecho contacto, y amistad, con Raúl Salinas Lozano, en su calidad de secretario de Comercio en los años sesenta. La relación familiar era tan fraterna, que don Juan invitaba a Carlos Salinas a montar a su rancho de San Juan Tlacateopan, o a hacer visitas a la Cervecería Modelo, a la que en alguna ocasión fue acompañado de Pedro Aspe. De tal manera que cuando Carlos Salinas fue Secretario de Programación, acostumbraron desayunar cuando menos una vez al mes. Esta relación sirvió para que desde el primer año de su gestión, Carlos Salinas de Gortari, contara con el apoyo irrestricto de los hombres de negocios más importantes del país. Amén de su trayectoria como tecnócrata y por tanto, de probar la *convergencia entre el pensamiento empresarial y la nueva ideología del gobierno mexicano*. Ello explica la

contundente idea que Juan Sánchez Navarro expresaba respecto de este presidente: *Salinas desmanteló el aparato ideológico de la iniciativa privada. Actuó conforme a las ideas y principios de este sector* (Ortiz Rivera, 1997: 360).

Don Juan recuerda cómo en vísperas del próximo proceso de sucesión presidencial, Salinas de Gortari, por conducto “del partido” pasó la “charola” a los principales empresarios mexicanos beneficiados por la política económica de su gobierno y el anterior, para que aportara, cada uno, la cantidad de 25 millones de dólares. En esa lista se encontraban: Carlos Slim, Alberto Bailleres, Antonio del Valle Ruiz, Claudio X. González, Bernardo Garza Sada, Roberto Hernández, Raymundo Flores, Adrián Sada, Eloy Vallina, José Madariaga, Lorenzo Zambrana, y Emilio Azcárraga, entre otros. Don Juan nunca abrigó duda respecto a que ese gobierno fue el mejor de la historia.

Quizás otro elemento que se sumó a la cercanía de don Juan y el gobierno salinista fue su relación con Manuel Camacho Solís, quien terminó casándose con su sobrina, Mónica van der Vliet Campero. No obstante, cuando en el momento de la sucesión presidencial, siempre expresó su simpatía por que Pedro Aspe fuera el agraciado con la decisión del “gran elector”. Aunque finalmente se decidió a favor de Luis Donaldo Colosio, aceptó con agrado la postulación por quien ya mantenía una respetuosa relación, puesto que don Juan lo comenzó a relacionar con los hombres más prestigiados y poderosos del sector privado.

El asesinato de Colosio el 23 de marzo de 1994, abrió nuevamente una apretada coyuntura que finalmente favoreció a Ernesto Zedillo como nuevo candidato del partido oficial, en una inevitable reunión de los empresarios con él para intercambiar puntos de vista, don Juan ofreció un discurso en el que, dirigiéndose al nuevo candidato” distinguía el “nuevo PRI” del “viejo PRI”:

*Ustedes que pertenecen al nuevo PRI tienen la obligación de hacer los grandes cambios económicos y políticos. El nuevo PRI ha tomado algunas directrices y principios de Acción Nacional como propios, y los están poniendo en práctica. La transformación salinista está fundada precisamente en los mismos principios de Acción Nacional. Por eso mi ejemplo, como ex fundador del PAN, es válido en este caso ¡Yo voy a votar por el PRI!* (Ortiz Rivera, 1997: 404).

Como se puede observar, la muerte de Juan Sánchez Navarro dejó al sector empresarial sin uno de los ideólogos más importantes del siglo XX, puesto que su

trayectoria de vida acompaña a la historia del México posrevolucionario.

## 1.2 *Manuel Espinosa Yglesias: la tradición empresarial.*

Manuel Espinosa Yglesias nació en Puebla el 9 de mayo de 1909. Su familia desde 1542, fecha en que Rodrigo de Espinosa creó la primera fábrica de vidrio en América. Su familia paterna es de origen español, dado que su abuelo, Tomás Yglesias, llega a México desde muy joven y contrae nupcias con una hija de españoles nacida en Puebla.

Su padre, Ernesto Espinosa Bravo, nacido en 1865, tuvo como primera carrera profesional la medicina, y luego, la carrera de leyes. Hombre profundamente emprendedor, entra a la política y en 1904, es elegido presidente municipal de la ciudad de Puebla. Ocupó ese puesto durante un año, y después regresó a ejercer su profesión de médico legista. Su pasión por la ópera propició que dedicara un tiempo significativo a realizar los contactos y trámites necesarios para llevar la ópera a la ciudad de Puebla. Luego, mediante ahorros y préstamos, se dio a la tarea de construir el *Teatro Variedades* en 1908, mismo que por conflictos políticos, el gobernador del estado, Marcos de Obregón, mandó quemar. Lo que puso a prueba el carácter de Don Ernesto, quien con un gran esfuerzo económico reconstruyó el teatro para continuar con la promoción artística, además de contar con otras actividades donde destacaba su compañía telefónica, misma que vendió para crear un circuito cinematográfico que incluía otras ciudades como Tehuacán, Teziutlán y Apizaco.

De hecho, el primer trabajo de don Manuel Espinosa Yglesias, fue en la compañía telefónica, para después irse a trabajar a la hacienda de don José Veramendi, donde lo alcanzó una carta de su padre en la que le pedía que regresara a la ciudad de Puebla para que se hiciera cargo de sus negocios, pues su muerte estaba muy próxima, dado el avance del cáncer que padecía desde unos años atrás. En esos momentos su padre había invertido su dinero en los cines, por lo que la parte sustancial del negocio estaba determinada por el contacto que tuvieran con las distribuidoras de películas.

La pujante competencia que vivía la exhibición de películas, en los momentos en que irrumpía el cine sonoro, obligó a la familia Espinosa Yglesias a asociarse con un industrial de origen estadounidense, Guillermo Jenkins. La sociedad fue creciendo hasta 1940 cuando, la familia de don Manuel decidió vender sus acciones, por lo que, según el

interés del señor Jenkins, compró las acciones a sus hermanos y mantuvo una sociedad de solo dos propietarios. De hecho, el desarrollo de esa sociedad los llevó a adquirir la Compañía Operadora de Teatros, S.A., de la cual el estado era propietario del 25% de las acciones, a partir del Banco Cinematográfico. Al paso de unos pocos años, don Manuel adquirió acciones de ese banco, y cuando el gobierno decidió obtener todas las acciones del mismo, junto con el señor Jenkins, negociaron para cambiarlas por las acciones de Compañía Operadora de Teatros. Años más tarde, y con una estrategia semejante, don Manuel llegó a adquirir el control de Banco de Comercio (Bancomer). Razón por la cual, más tarde, abandonaría el negocio de los cines para dedicarse exclusivamente a la actividad bancaria, hasta ejercer el control total de esa institución bancaria. Con el tiempo, don Manuel afinaba cada vez más su olfato empresarial:

*A partir de 1950, y pensando siempre en poder llegar a tener el control del Banco, empecé a reorganizar el negocio de la exhibición a fin de que la Operadora de Teatros se ocupara de la administración de las salas cinematográficas. Y otra empresa que constituí con ese fin, la Compañía Constructora y Operadora de Inmuebles, S.A., permitió fuese la propietaria de los edificios en que estaban los cines y se encargara de construirlos. En 1955, o poco antes, la separación entre una y otra había quedado completa (Espinosa Yglesias, 2000: 27).*

Más adelante, con el enroque en otros negocios que compartía con Guillermo Jenkins, plantearon una renegociación y reparto de las propiedades adquiridas hasta entonces, y de ello resultó don Manuel como único propietario de Banco de Comercio, a los 46 años de edad. El 23 de abril de 1955 fue nombrado director de la institución por aprobación de su Consejo de Administración. Para ese entonces, Banco de Comercio se encontraba en segundo lugar de los bancos privados, después de Banco Nacional de México, propiedad de Agustín Legorreta. Acumulaba el 18.5 % de los depósitos del país y empleaba a 4800 empleados en toda la República mexicana.

Las principales dificultades que don Manuel encontró como director general del banco, radicaban fundamentalmente en la presencia de consejeros disidentes que no simpatizaban con él. Por otro lado, la incapacidad para dar créditos a largo plazo, por lo que tenían que recurrir a los servicios de Financiera Crédito Minero y Mercantil, S.A., propiedad de Raúl Bailleres, institución que más tarde intentó comprar y que provocó, finalmente, que los consejeros disidentes renunciaran a Banco de Comercio y se fueran al

Banco Comercial Mexicano, propiedad de Eloy Ballina. Esta situación obligó a don Manuel a buscar otros miembros del Consejo de Administración al que se integraron Juan Sánchez Navarro y Eduardo Bustamante.

En poco tiempo, don Manuel adquirió una financiera que permitió a Banco de Comercio realizar todo tipo de actividades financieras, y a finales de los años cincuenta todavía se hacía cargo de la dirección de Operadora de Teatros, S.A., actividad económica que podía verse beneficiada por su actividad bancaria. Sin embargo, don Manuel opinaba: *Yo podía tener, como persona, fuertes intereses en la Operadora de Teatros, pero como funcionario de una institución bancaria debía separar claramente una y otra actividad: hubiera sido injusto e indebido que empleara yo mi posición en el Banco para fortalecer mis intereses ajenos a él* (Espinosa Yglesia, 2000: 60).

Banco de Comercio fue creciendo, al grado que en 1957 poseía además de la financiera, una aseguradora y una hipotecaria, lo que produjo que se incrementaran las utilidades en un 66.6 % en un lapso de dos años. Esto le creó la inquietud de realizar reinversiones que la ley no contemplaba en las circunstancias que él requería, por lo que habló *“con don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, para intentar convencerlo que promoviera una reforma de ley. Hasta ese entonces los dividendos que recibían los accionistas que quedaran exentos de impuestos, cuando menos en el caso de que reinvirtieran sus dividendos en la compra de nuevas acciones antes de que hubiera transcurrido un mes. Como el licenciado Ortiz Mena poseía una inteligencia excepcional, no necesité decirle gran cosa para que entendiera los beneficios que tendría para México una reforma semejante y unos meses después, gracias a su apoyo, el Congreso aprobó las modificaciones a la ley”* (Espinosa Yglesias, 2000: 63).

El prestigio y su gran capacidad y necesidad empresarial de ejercer eficientemente las relaciones públicas colocaron a don Manuel como uno de los personajes centrales a partir de los cuales interaccionaba la clase económica y políticamente pudiente. Como bien señala: *Tan pronto como el Banco tuvo un comedor, todos los días comía con uno o varios clientes. Muy a menudo hacía cenas en mi casa con embajadores, empresarios, industriales, representantes de bancos extranjeros y funcionarios importantes. Además, y también en mi casa, ofrecí algunas grandes recepciones* (Espinosa Yglesias, 2000: 70).

Para don Manuel, en los años sesenta México contaba con el sistema bancario más

evolucionado de América Latina. Una de las principales funciones sociales con la que debía de cumplir el capital era la creación de empleos. De hecho, consideraba como un futileza amasar fortunas y lapidarlas en lujos y placeres mientras al país le hacían tanta falta empleos. En ese sentido, el desarrollo de Banco de Comercio significaría el empleo de 20 mil empleados, llegando a ser la empresa privada que generaría más empleos, al menos en la década de los años ochenta.

El orgullo de don Manuel no era solamente el nivel de empleados generados como una cuestión inherente al desarrollo de la empresa que rápidamente alcanzó una cobertura nacional, sino la capacidad y eficiencia del personal que colaboraba en Banco de Comercio. Esto era posible gracias a la agresiva política de capacitación de personal que permitió a la institución ofrecer una atención de alta calidad a los clientes, característica que llegó a constituir el emblema del banco y distintivo respecto de la competencia. Se contaba con un personal altamente calificado que evitaba el uso irracional de los recursos humanos, así como una remuneración al personal que mucho hablaba del prestigio de esa institución.

La fortaleza de Banco de Comercio iba en franco aumento, y la misma experiencia que tuvo don Manuel en la empresa de las salas de exhibición cinematográficas, la aplicó a la actividad bancaria. Así que normalmente, los edificios donde se ubicaban las sucursales de la institución fueron adquiridos como propiedades del banco. No obstante, si bien esto significó la diversificación de la actividad de Banco de Comercio, la oficina matriz donde se ubicaba originalmente el banco cada vez fue menos funcional, lo que obligó a la construcción de modernos edificios que nuevamente permitían proyectar la imagen de Banco de Comercio. Lo cual, nuevamente, propició aumentar la diversidad de la institución, pues la construcción de los nuevos edificios no solamente representaba un gran reto sino una importante inversión, lo cual explica la decisión de don Manuel para crear la Inmobiliaria Bancomer, misma que se encargaría de la construcción de los edificios y de las futuras sucursales. Tal creación representó, según la apreciación de don Manuel, el ahorro del 20 % de la inversión proyectada inicialmente. El 28 de abril de 1964, el periódico *Excélsior* anunciaba la construcción de un edificio de 110 millones, que albergaría a 1750 empleados y funcionarios. Cuatro días antes, el presidente López Mateos había visitado las instalaciones, y ese día, 28 de abril, el secretario de Hacienda, Lic. Ortiz Mena, inauguró las instalaciones.

De 1966 a 1977 fue el periodo de la consolidación de Banco de Comercio, y de ese año a 1980, el periodo de auge y evidente triunfo de la institución, a pesar de las dificultades que se enfrentaron en los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y el de López Portillo (1976-1982).

En el caso del primero, se trataba, considera don Manuel, de un presidente y un grupo de asesores que desconocían los aspectos más fundamentales de la economía, lo que provocó la crisis del modelo económico. Al respecto señala:

*... El nivel de endeudamiento empezó a rebasar nuestra capacidad de pago y parte importante de nuestros recursos quedó comprometida a futuro. Por si no fuera suficiente, el desorden de las políticas adoptadas por el presidente Echeverría, lo contradictorio de sus decisiones y la ausencia de un programa coherente y realista, resultó en que la deuda contratada se dilapidó, de tal manera que no se consiguió resolver ninguno de los problemas que pretendieron atenderse (Espinosa Yglesias, 2000: 120).*

No obstante, el crecimiento de Bancomer no cedió, y en 1977 se consolidaba la internacionalización de la institución. Se abrieron sucursales en la ciudad de Los Ángeles, Londres, Tokio, Sao Paulo e Islas Caimán. En septiembre de ese año, aprovechando la asistencia del presidente López Portillo a una reunión del Fondo Monetario Internacional celebrada en Washington, don Manuel lo invitó a inaugurar la oficina de Bancomer en New York, a la que desde luego asistió, en compañía del secretario de Hacienda, David Ibarra, y uno de sus subsecretarios, Miguel de la Madrid.

Para entonces, Bancomer había superado la supremacía de Banamex:

*Las cifras correspondientes al año de 1980 son reveladoras: frente a las 561 sucursales que tenía Banamex en el país, nosotros disponíamos de 669. Si su participación en el financiamiento representaba el 32.7 % del concedido por todas las instituciones bancarias, los créditos otorgados por Bancomer ascendían al 35.6 % del total. Si del capital y ahorros captados por la banca comercial llegaban a Banamex 241 mil 619 millones –el 21.1 por ciento-, Bancomer recibía 262 mil 663 millones –el 34.9 por ciento-. Frente a los 3 mil 12 millones de pesos de utilidades que registró Banamex ese año, nosotros llegamos a 3 mil 35 millones (Espinosa Yglesias, 2000: 123).*

Si en 1964, se había construido un edificio en el centro de la ciudad donde se encontraría la oficina matriz de Bancomer, que albergaba a 1750 empleados, ahora había de construirse un edificio para 8 mil 500 empleados, con un costo de 87 millones de dólares, a

diferencia de los 110 millones de pesos que costó el edificio del centro. El terreno del sur de la ciudad donde sería construido el nuevo edificio fue comprado a Alberto Bailleres, y la construcción la realizó el grupo ICA, dirigida por Bernardo Quintana.

De hecho, uno de los incidentes que más recuerda don Manuel del periodo de construcción, fue una de las visitas en que don Manuel invitaba a funcionarios públicos. En esa ocasión, a principios de 1979, el grupo que atendía don Manuel estaba formado por Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Mario Ramón Beteta y Ernesto Fernández Hurtado, quienes junto con directores del banco hacían una visita a la construcción. En algún momento, Fernández Hurtado comentó, un tanto asombrado y quizás molesto, que era imposible que una obra así *fuera propiedad de un solo hombre, que el gobierno terminaría expropiándolo*. Palabras proféticas que con el tiempo se harían realidad.

Don Manuel considera que su relación con López Portillo, no era tan cercana como la que mantuvo con López Mateos y Díaz Ordaz, sin embargo, que giraba en torno a la cordialidad y la franqueza, como exige el trato a un mandatario de la importancia de un presidente de la República. Evidentemente, el presidente inauguró las instalaciones, el 13 de agosto de 1980 en compañía del secretario de Hacienda, David Ibarra, el de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, el del Trabajo, Pedro Ojeda, y el director del Banco de México, Gustavo Romero Kolbeck.

Las palabras del presidente en la inauguración fueron muy parcas. Después de la ceremonia se realizó una visita que duró dos horas, visitó las cocinas, bóvedas, consultorios, centro de cómputo, etc., parecía complacido. Sin embargo, señala don Manuel:

*Es posible también, y lo he pensado muchas veces, que ese día fuera también el principio del fin y al recorrer el nuevo centro el presidente López Portillo pensara que la banca había crecido demasiado. Para un hombre como él, poseído por el narcisismo, era excesivo que una obra semejante fuera resultado del esfuerzo de un particular y, como nos lo había anunciado Fernández Hurtado meses atrás, quizá ese día López Portillo decidió expropiar la banca (Espinosa Yglesias, 2000: 133).*

En agosto de 1982, don Manuel recibió una invitación para asistir al último informe del presidente López Portillo, el primero de septiembre de 1982. Recordaba que días antes ya había rumores muy inquietantes. Simplemente, el lunes de esa semana, su hija Amparo fue urgentemente a visitarlo para comunicarle que sabía que la banca iba a ser

expropiada, pidiéndole que fuera junto con Agustín Legorreta, propietario de Banamex, a visitar al presidente y que acallara los rumores. Don Juan no le hizo caso, pues se le hacía imposible que la banca fuera a ser estatizada. Al respecto señala lo siguiente:

*Uno de los motivos de mi incredulidad era que apenas dos semanas antes, a mediados de agosto, López Portillo se reunió con un grupo de banqueros en el que yo me encontraba. En ese entonces, el país estaba ya en plena crisis. La inflación era abrumadora y aunque había reglas estrictas para la compra y venta de dólares, la fuga de capitales seguía de manera muy acelerada. No obstante, López Portillo nos mostró aprecio y respeto y dijo que tenía plena confianza en los banqueros mexicanos y la banca privada (Espinosa Yglesias, 2000: 136).*

Sin embargo, a las 8 de la mañana del 1º de septiembre de 1982, uno de sus más cercanos colaboradores le comunicó que acababa de hablar con Miguel Mancera Aguayo, quien le dijo que había dejado de ser director del Banco de México. A los pocos minutos recibió la llamada de López Cerda quien había quedado de entregarle una documentación bancaria, señalándole que no había podido acceder a las oficinas del banco porque estaban custodiadas por patrullas y elementos del ejército mexicano. Inmediatamente salió rumbo a las oficinas del Centro Bancomer para asegurarse personalmente del asunto, y con toda sorpresa vio que el edificio estaba rodeado por tropas militares. Volvió a su casa y junto a su familia y sus más próximos colaboradores, vio por televisión el informe presidencial. Con sorpresa escuchó: .... *He expedido en consecuencia dos decretos: uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios.... Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear.* Cuando escuchó estas palabras se quedó sin reacción alguna, parecía que no sentía nada. A los ojos de los que lo rodeaban, quedó como si nada hubiera pasado.

Don Manuel no podía creer que un presidente de la República insultara a tantos mexicanos que habían trabajado honradamente, que se les hubiera llamado “traidores a la patria”. Para él López Portillo se había ganado a la gente a partir de su primer discurso como presidente, pero no fue capaz de controlar sus defectos de carácter lo que provocó el desastre económico que estalló en 1982. Don Manuel consideraba que la principal causa de la crisis económica que se vivió a finales de ese sexenio fue la *deuda externa*, pues la tomó con 19 mil 600 millones de dólares y la llevó hasta 59 mil. Además de los excesos del gasto público, provocado por las ilusiones del petróleo, la fuga de capitales (entre julio y agosto

de 1981, salieron alrededor de 8 mil millones de dólares), la inflación y la devaluación del peso que pasó de 24.50 a 57.20 por dólar. *En resumen: para descargar la frustración por el fracaso de su gobierno sólo le quedaba un posible chivo expiatorio: la banca mexicana* (Espinosa Yglesias, 2000: 151).

El viernes 3 de septiembre recibió una buena noticia. Antonio Carrillo Flores había sido nombrado director general del Bancomer estatizado, petición que don Manuel había planteado a López Portillo. Esto propició que fuera invitado a la ceremonia con que Carrillo Flores tomaba el cargo, y con gusto recibió el aplauso y las palabras de apoyo de miles de empleados de esa institución. No obstante lo incómodo de la situación, el evento pasó sin mayores incidentes, solo que narra:

*Al salir del edificio, me subí al automóvil y el chofer dio vuelta para regresar a avenida Universidad. Habíamos casi llegado a la esquina cuando de pronto, del techo del Centro Bancomer, dejaron caer una gigantesca bandera nacional que cubrió dos o tres pisos del edificio.*

*Entendí que era una manera de simbolizar la “nacionalización” de la banca, pero aun así el hecho me irritó. ¿Cuándo no había sido Bancomer un banco mexicano, creado por mexicanos y con capital mexicano? ¿O qué, acaso, nuestra enseña patria no nos pertenecía ya a todos o era sólo un símbolo gubernamental?* (Espinosa Yglesias, 2000: 159).

También se decía que existían dos grupos de banqueros, los que buscaban una solución legal y los que se inclinaban por la negociación, la queja o incluso la protesta. Por su parte, gracias a los oficios de la secretaria de Turismo, Rosa Luz Alegría, don Manuel tuvo la oportunidad de entrevistarse con López Portillo, tres meses después de la “nacionalización”, cuando solo le quedaba un mes de su gestión. A él le planteó que una posible solución al conflicto era que se entregara al gobierno todo lo bancario, sin costo alguno, y que los accionistas retuvieran los activos no bancarios. Solución que no fue aceptada, y peor aún, sólo se indemnizó a los grandes accionistas dejando en el olvido a los pequeños accionistas.

La solución por él planteada hubiera posibilitado que los accionistas bancarios quedaran como empresarios de muy diversos ramos industriales y de servicios, como es el caso de la construcción, química, electrónica, minería, hotelería, inmobiliaria, seguros, finanzas, etc. Se hubiera impulsado de una manera muy significativa la actividad

empresarial, lo que en realidad se impidió. El mismo De la Madrid, pensó que don Manuel estaba saltando su autoridad y él concreto una indemnización inequitativa, pues partió de indemnizar sólo a los grandes accionistas. Ello evidenciaba el poder imperial que poseían los presidentes, pues el manejo jurídico que el Estado ofreció al caso de los amparos presentados por los banqueros afectados, quedó en el olvido porque simplemente pesó más el *Decreto* del primero de septiembre de 1982, que el derecho de de los propietarios expropiados.

*La indemnización, no fue en el fondo más que un simple trueque: se nos regresó una mínima parte de lo que se nos había quitado a cambio de que lo consideráramos como el pago total. En la práctica no fue ni siquiera eso, ya que en la venta de las empresas hubo tanto claros favoritismos como discriminaciones evidentes. Como es de suponerse yo me encontré en el segundo caso.*

*De las 467 empresas en las que la banca tenía participación, poco menos de tres cuartas partes, 339, regresaron a manos de la iniciativa privada. Las 128 restantes quedaron en manos del Ejecutivo, sobre todo porque nadie tenía el capital o los bonos necesarios para comprarlas (Espinosa Yglesias, 2000: 180).*

Don Manuel se quedó con la firme convicción que las autoridades hacendarias hicieron todo lo posible por impedir su participación empresarial en muchas de las empresas que se pusieron a la venta preferencial de los banqueros expropiados. Sobre todo por lo que toca a la venta de las empresas que fueron propiedad de Bancomer.

Sin embargo, con la sociedad de la familia Cosío, empujaron por que les fueran asignadas esas empresas, de las cuales, ante las presiones ejercidas por el gobierno, decidió vender parte de ellas a Carlos Slim y a Roberto Hernández, resguardándose para sí la Minera FRISCO que, finalmente, terminó vendiendo a Slim.

Don Manuel asegura, con base en comentarios de personas de su total confianza, que de De la Madrid siempre le tuvo cierto rencor por haber recurrido a López Portillo cuando él ya era presidente electo. Esto provocó que nunca tuviera contacto con él y en parte, le atribuye la suerte que corrió después del daño sufrido por la “nacionalización” de la banca.

La llegada de Salinas de Gortari fue algo más alentadora para él, pues se impuso al funesto sindicato de los petroleros, al encarcelar a su líder, lo mismo que a Eduardo Legorreta, a quien culparon por el *crack financiero de 1987*; así como por medidas tomadas que el país requería urgentemente, como el reconocer a las iglesias y concertar el Tratado

de Libre Comercio. No obstante, condujo al país al desastre de 1994-1995.

Para don Manuel, el error más grave de ese gobierno fue el proceso de reprivatización de los bancos, cuya decisión nada tiene que ver con un acto de justicia sino de un gran negocio a favor del gobierno. Pues después de apropiarse de los bancos y de administrarlos pésimamente, se dedicó a favorecer a las casas de bolsa mediante lo que se llama “mesa de dinero”, que son los Cetes, Tesobonos, los pagarés bancarios y otros instrumentos semejantes.

Así que la reprivatización bancaria no tenía el propósito de regresarla a sus legítimos dueños, sino de sacar el mayor provecho posible, como lo demostraron las especificaciones de las licitaciones que se publicaron para la venta. De hecho, don Manuel se entrevistó con el principal asesor de Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, para manifestarle su interés por recuperar Bancomer, pero éste le informó que ninguno de los antiguos dueños regresaría a la institución que en el pasado hubiera sido de su propiedad. Decisión que, asegura don Manuel, solo había sido diseñada para él.

*El defecto de fondo del régimen salinista no difiere del que puede advertirse en las administraciones anteriores: mientras nuestros presidentes sigan sin estar sujetos a la ley y el Congreso y los tribunales sigan creyendo que su deber fundamental es convalidar los caprichos del jefe del Ejecutivo, nuestro país sólo conseguirá seguir avanzando de crisis en crisis y de tragedia en tragedia (Espinosa Yglesias, 2000: 209).*

Los daños causados por los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, a juicio de don Manuel, cancelaron el futuro de una generación, y la de algunas que todavía están por nacer.

*.... Los empresarios que el país necesita de aquí en adelante deberán estar, además, seriamente comprometidos en la lucha en contra de la marginación y la pobreza; tendrán que admitir que el desarrollo de la empresa corre paralelo al desenvolvimiento de la educación, sobre todo la superior; deberán entender que sólo ayudando al desvalido, promoviendo la salud y favoreciendo la cultura; sólo sirviendo al bienestar humano, tiene sentido la riqueza.*

Como se puede observar, la muerte de don Manuel Espinosa Yglesias, dejó al país sin uno de los más grandes empresarios con que cuenta la historia contemporánea. Su

pragmatismo empresarial combinaba elementos del humanismo y el compromiso con la nación.

### 1.3 Carlos Slim: el gran empresario.

Nace el 28 de enero de 1940, hijo de una familia de origen libanés: de todos ellos Carlos fue quién heredó la habilidad empresarial de su padre:

*Mi padre nos dio una educación basada en valores bien definidos. Era una persona de un carácter de mucha determinación y de valores muy sólidos que le brindó siempre a la unión familiar un lugar prioritario en su vida, logrando establecer en ella una grata armonía, principios de honradez, sinceridad y una honda preocupación por México (Martínez, 2002: 67).*

Su padre murió cuando él tenía 13 años, pero desde que tenía 12, le inculcó el ahorro como una forma de aprendizaje para administrar los negocios familiares. Cuando contaba con 19 años se matriculó en la UNAM para cursar la carrera de ingeniería. A los 26 años, Carlos Slim contaba con un capital personal de 5 millones de pesos, independientes del capital familiar. A esa edad contrajo matrimonio con Soumaya Domit Gemayel, evento por el cual su madre le obsequió un millón de pesos. Ya casado, Carlos se dedicó a trabajar en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, donde convivía con un grupo de amigos *casabolseros*, como Ignacio Cobo, Enésimo Cepeda, Roberto Hernández, su primo Alfredo Harp Helú, entre otros.

Respecto de las características personales de Slim, José Martínez comenta lo siguiente:

*El secreto de Slim es muy sencillo: es alérgico a la publicidad y lleva una vida frugal que raya más en la modestia que en la sobriedad. Su existencia gira alrededor de los negocios –aparece en los consejos de administración de las empresas más importantes del país- y tiene una forma muy paraca de concebirse como el gran gurú: “No puedo estar en todas partes. Mi trabajo consiste en pensar”, afirma cuando le preguntan cuál es el secreto para los negocios. Sin embargo, tiene un estilo propio de trabajo: por las mañanas alejado de las llamadas, juntas y distracciones de rutina, se dedica a analizar documentos para irse al fondo de los asuntos y no perderse en los detalles (Martínez, 2002: 85).*

Slim considera que existen tres tipos de actores en la actividad empresarial: el empresario, el ejecutivo y el inversionista. El primero, concibe y emprende; el segundo, opera las empresas, y el tercero, el que aporta los medios. Por otra parte, se define como un

*empresario nacionalista*, como ha quedado plasmado en su discurso: *Difiero de aquellos que piensan que los empresarios mexicanos no pueden manejar sus propios negocios, y que muchas autoridades piensan que es mejor favorecer la inversión extranjera sobre la nacional* (Martínez, 2002: 86).

Para él, la economía de mercado es la que ofrece las mejores oportunidades a la sociedad, a partir de la generación de más empleos, con la cración de una gran variedad de productos a un precio más baratos que el de la competencia, y en general, por la generación de mayor riqueza para la sociedad. En cuanto al Estado, considera que la mejor manera de beneficiar a la sociedad es por la vía fiscal, único camino para beneficiar a toda la población mediante la inversión pública que tenga como fin la redistribución de la riqueza. Por otra parte, considera que el empresario tiene la responsabilidad de reinvertir sus utilidades, optimizar los recursos de la empresa con el objeto de hacerla más eficiente y competitiva, capacitar y remunerar a su personal, para que motivado, haga su mejor esfuerzo.

La filosofía de Slim, desde siempre, fue que sus empresas trabajen con principios básicos y estructuras simples, buscando que *el equipo humano que con él participa tanga vocación, preparación y un trabajo estimulante que conduzca a la autoestima, y que haga de la responsabilidad una satisfacción. Trabajar sistemáticamente para mejorar los procesos productivos, optimizar inversiones e instalaciones, aumentar la productividad, mejorando la calidad, reducir las mermas y tratar de producir con la mejor calidad y al menor costo, condición indispensable para ampliar los mercados, reducir los precios y competir internacionalmente* (Martínez, 2001: 89).

La primera vez que apareció el nombre de Slim en las famosas listas de *Forbes*, con lo cual quedaba perfectamente claro que era el hombre más rico de América Latina, en 1991, todavía conducía personalmente un *Thunderbird* 1989. Ello habla de una personalidad que rechaza la excentricidad de muchos hombres de negocios en el mundo, y aunque inevitablemente prefiera recreaciones a las que no cualquier mortal tiene acceso, es destacable su gusto por la comida mexicana y el marcado interés por adquirir importantes obras de arte, y a codearse con los más selecto de la clase intelectual y artística de nuestro

país y del mundo.<sup>1</sup> No obstante, las mismas circunstancias del ambiente, y después de las amenazas que significó la lista de 150 hombres de negocios que la ETA pensaba secuestrar, y después de los plagios de Fernando Senderos, Juan Bosco Gutiérrez Cortina, Juan Robinson Bours, Ángel Lozada Moreno y Alfredo Harp Helú entre 1993 y 1994, no le quedó mas remedio que reforzar su seguridad privada.

Las empresas de Carlos Slim son las más importantes de México, después de los ingresos que tiene PEMEX, su imperio comienza a extenderse por todo el mundo, y es conocido por su mentalidad de ajedrecista, su capacidad calculadora que le permite “*siempre aprovechar el mejor momento para comprar, para comprar barato*”. Para Slim un inversionista debe imponerse un límite cuando va a pagar el precio por una propiedad, para él es mucho más importante saber cuándo no comprar, que cuándo comprar o cuando vender. Con esa filosofía a los 50 años de edad, ya era el hombre más rico de toda América Latina

Slim vino escalando, junto con su amigo y socio Bill Gates, la posición de los hombres más importantes de los negocios en la lista de la revista estadounidense de negocios *Forbes*, trayectoria empresarial que se cimenta desde la década de los ochenta. A pesar que se tratara de un contexto de crisis de la economía mexicana, como el mismo escribió en el periódico *Novedades*, sobre los graves problemas que afectaba al país: inflación de tres dígitos, déficit fiscal de 17.6 %, deuda externa de 88 mil millones de dólares, déficit en la cuenta corriente, endeudamiento del aparato productivo, ausencia de las reservas internacionales, la dependencia hacia los ingresos petroleros, y suponemos nosotros, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo que restringe las posibilidades del mercado nacional.

---

<sup>1</sup> Por ejemplo, como señala José Martínez: “Poseedor de una personalidad multifacética, Carlos Slim ha deslumbrado a los hombres del poder, lo mismo a presidentes y líderes políticos, como el mítico comandante Fidel Castro, que a intelectuales de altos vuelos como Carlos Fuentes y Octavio Paz; a periodistas como Julio Scherer García, del que se hizo socio en Proceso, S.A de C.V. Seductor innato, trabó amistad con Carlos Trouyet y Manuel Espinosa Iglesias. Se codea con Rockefeller y Bill Gates, es amigo de personalidades como Felipe González y ha tenido puentes de amistad con William Clinton y otros como el príncipe Carlos de Inglaterra, y está en la lista de los cien hombres más ricos del Mundo.

Coleccionista, filántropo y mecenas, es amigo de políticos de izquierda y derecha, de curas y ateos, promotor de cineastas y amante del béisbol.... Benítez lo presentó con Carlos Fuentes, Héctor Aguilar Camín, Carlos Monsiváis y Carlos Payán, a todos ellos Slim los sedujo como también los hizo con el premio Nobel de Literatura Octavio Paz, el historiador Enrique Krauze y el cronista Guillermo Tovar y de Teresa.” (Martínez, 2001: 106).

Durante el despegue de su emporio empresarial, los medios de difusión lo comenzaron a asociar a la figura de Carlos Salinas de Gortari, lo que les valió el mote de *Carlos and Carlie's*, y la acusación misma de que Slim es el prestanombres del expresidente. No obstante, los medios olvidan que él nació rico. Su padre tenía un prospero negocio atrás de Palacio Nacional, que el Grupo Carso se inicia en 1965. En 1967 fundó Inversora Bursátil, a donde se llevó a trabajar a Alfredo Harp Helú, y más tarde a Roberto Hernández Ramírez y a Roberto Olivieri. En 1976 ya había adquirido Galas, la empresa de publicidad más importante del país. En 1981, adquirió Cigarrera La Tabacalera Mexicana (CIGATAM) que produce Malboro, Delicados, Faros, Benson, Baronet, Commander. A partir de la expropiación de la banca, fue importante su participación en la creación de una casa de Bolsa: Inbursa. Luego, en 1984, compró a Espinosa Iglesias sus activos financieros que incluían el 100% de los Seguros México, que solos valían 55 millones de dólares. Con la consolidación de esta etapa, su consorcio avanzó exitosamente. Durante el gobierno de Salinas de Gortari adquirió Teléfonos de México, una de las empresas paraestatales más exitosas que, evidentemente, operaba con números negros, y posteriormente se orientó como uno de los cinco empresarios más ricos del mundo. Para el año dos mil entre Telmex y Carso Global Telecom representaban el 40 % de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que sugiere el poder que Carlos Slim tiene, no solo en el mundo de los negocios, sino políticamente (Martínez, 2001: 102-109).

Su actividad filantrópica es muy considerable y cubre todas las posibilidades de este servicio: desde contar con un equipo médico que atiende a pobres, 12 mil becas que concede a estudiantes universitarios, hasta su participación en la creación por parte de los archimillonarios mexicanos, del *Centro Mexicano de Filantropía*, también en la fundación *Vamos México* fundada por Martha Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox, en la que participan también Roberto González Barrera, Fernando Senderos, Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú, Ricardo Salinas, Emilio Azcárraga, Lorenzo Zambrano, Manuel Arango y María Arumburuzavala. Del mismo modo forma parte del patronato de la UNAM, junto a Gilberto Borja Navarrete y Bernardo Quintanilla, entre otros. Así también, ha sido un actor protagónico en el consejo consultivo creado por López Obrador para el rescate del Centro Histórico, en el que también participan el cardenal Norberto Rivera, Jacobo Zabłudovsky y Guillermo Tovar y de Teresa. No obstante el visible poder de Carlos

Slim, se trata, dice José Martínez, *de esos personajes que sólo aparece en los medios cuando quiere dejarse escuchar o neutralizar algún asunto* (Martínez, 2001: 143).

Slim siempre ha rechazado sus vínculos empresariales o políticos con Salinas de Gortari, pero también se ha deslindado del vínculo con políticos y funcionarios, pues atribuye el hecho de haber duplicado su fortuna en los años noventa, al boom del mercado de valores en los ochenta, sus habilidades empresariales y sus contactos comerciales. Estas condiciones y su talento empresarial le han permitido consolidar un imperio económico que tiene intereses en las telecomunicaciones, la industria minera, hulera, tabacalera, alimenticia, eléctrica, petroquímica, ferrocarriles, en el sector financiero y en el de servicios. A partir de ello, es evidente que Slim y la elite empresarial a la que pertenece, participan junto con los funcionarios públicos y políticos para definir la política económica que guía al país. Por lo que podido acceder a importantes programas gubernamentales de apoyo al empresariado nacional, como señala José Martínez: *Una de las claves en la proyección de los negocios de Carlos Slim fue recurrir, como la gran mayoría de los empresarios, a los apoyos del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca) creado durante el gobierno de Miguel De la Madrid* (Martínez, 2001: 159). Al mismo tiempo que ha quedado inmune de algunas cuestiones que el gobierno investiga para fincar responsabilidades, como es el caso de la investigación de la Procuraduría General de la República por el fraude bursátil de 1987, del cual el que “pago los platos rotos” fue Eduardo Legorreta Chauvet. Pero en todo caso, lo único que no puede negar es su participación en la Comisión de Financiamiento del PRI, que se formó a finales de 1987 en apoyo a la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, junto a otros grandes empresarios que también se aprestaron a participar en esta comisión.

En el mismo sentido, se encuentran diferentes formas de participación de Slim en actos empresariales que tienen un evidente impacto político, como es el caso del “error de diciembre”, que provocó que el gobierno de Zedillo solicitara a los Estados Unidos un préstamo de 50 mil millones de dólares. En esa ocasión, en una reunión con inversionistas de Nueva York, Slim declaró: *“Gracias a Dios, todavía estamos vivos.”* O su abierta participación política en la campaña presidencial del año 2000, en la cual apoyó a todos los candidatos. Destinando 18 millones de pesos para el grupo *Amigos de Fox*, a través del Fideicomiso para el Desarrollo de la Democracia que coordinaba Carlos Rojas Magaña. O

participando como consejero en Petróleos Mexicanos, junto con Alfonso Romo, Lorenzo Zambrano y Rogelio Rebolledo, a petición y nombramiento del nuevo presidente de la República, Vicente Fox (Martínez, 2001: 184).

No obstante, Slim manifestó en muchas ocasiones su desacuerdo respecto a las decisiones en el terreno de la política económica del sexenio de Fox, como es el caso de la reforma fiscal que ese gobierno proponía, o en contra de los criterios que beneficiaron a la inversión extranjera que se interesó en la compra de las líneas aéreas. O en el caso de la coyuntura electoral del año 2006, cuando Salinas de Gortari declara que el país correría demasiados riesgos si la izquierda ganara las elecciones, lo cual provocó que Slim decidiera declarar a los medios de difusión que el país habría de respetar el triunfo del ganador, independientemente si se tratase de la izquierda (*Milenio*, 14 de marzo de 2006). Según él, el *Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho y el Desarrollo, la Inversión y el Empleo*, al que convocó a grandes empresarios, funcionarios, líderes políticos, intelectuales, artistas, personalidades de la vida artística y del deporte, contempla el respeto a las instituciones y a las decisiones del voto (*Milenio*, 30 de septiembre de 2005). Ello demuestra el gran poder político que alberga el hombre más rico de América Latina que tuvo la habilidad empresarial de ver crecer su fortuna en un 71% en un lapso de un año, pasando de casi 14 mil millones de dólares a casi 24 mil (*La Jornada*, 11 de marzo de 2005).

No parece caber la menor duda, respecto del poder que tiene el cuarto empresario más importante del mundo, sus decisiones o necesidades definitivamente son reconocidas como cuestiones fundamentales para los tomadores de decisiones. Carlos Slim, mejor conocido en el mundo de los negocios como el Rey Midas.

#### 1.4 Jorge Ocejo, expresidente de COPARMEX.

Aquí presentamos el resultado de tres entrevistas realizadas en el mes de septiembre del año 2002. Hasta donde fue posible, se intentó respetar los testimonios que gentilmente nos ofreció el Ing. Jorge Ocejo, quien dirigió a la COPARMEX en un momento de lo que en esta investigación denominamos como *transición*. El ingeniero Jorge Ocejo es un

empresario que fue presidente de COPARMEX, Secretario General del Partido de Acción Nacional y jefe de asesores del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal, también expresidente de la misma organización empresarial.

“Yo estude Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de México, y después me dedique a administrar negocios de la sociedad en la que participé. Eran negocios relacionados con el embotellado de refrescos en los estados de Oaxaca y Chiapas. En este ámbito estuve incorporado empresarialmente durante un poco más de veinticinco años, llevando la administración de empresas embotelladoras en las que también participaba como accionista.”

“Por esa razón viví un tiempo en el Sur de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, y de que en mi calidad de empresario participé en las organizaciones empresariales. Es por ello que fui presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Durante dos ocasiones diferentes fungí como tal: 1972-1973 y 1976-1977.”

“Siempre me ha interesado participar en lo que estoy, igual que en la Universidad, donde participaba en la sociedad de alumnos. También participe en la parte empresarial. Posteriormente, a partir de mis inversiones y de hacerme cargo de esas empresas, fui invitado en Puebla a ser consejero de la Cámara de Comercio en el año de 1982. Luego fui invitado y propuesto para ser presidente del Centro Empresarial de Puebla, en la COPARMEX regional. En ese cargo estuve en el periodo 1984-1986. Mi actividad empresarial era mayor, pues ya tenía otros negocios, una fábrica refresquera y una refaccionaria, que me permitieron estar en la representación empresarial de Puebla. Posteriormente fui presidente del Centro Patronal Centro Sur, de la COPARMEX, que agrupa varios estados. Finalmente fui presidente nacional de esa misma organización empresarial en el periodo 1988-1991. Estuve como presidente de COPARMEX no solo dos, sino tres años, cosa que permite el estatuto de la propia confederación y que se aprovechó por el tipo de liderazgo que había mostrado.”

“Yo defiende cualquier organización de carácter empresarial, pues estoy convencido de que las cámaras deben de existir. Es más, ya como diputado federal del PAN, defendí la posición empresarial ante la *nueva ley de cámaras* que se aprobó en ese tiempo. Los empresarios deben tener una representación política, y las cámaras y organizaciones empresariales son organismos de interés público. Es decir, forman parte de lo que es el

Estado mexicano. El Estado mexicano no es el gobierno, somos el gobierno, las instituciones, los ciudadanos, las instituciones públicas y privadas... somos todos. Y una de esas instituciones, sobre todo conociendo el interés público, son las cámaras, cuya función principal, aunque se ha desvirtuado un tanto, es la prestación de servicios. Las organizaciones están para ayudar al empresario a cumplir bien su función, a profesionalizar, a formar a los empresarios, pero, sobre todo, deben de ser órganos de representación dentro del sistema político mexicano. Las cámaras deben ser órganos de representación no de personas, sino de los sectores, como el comercio, la industria. Es decir, son instrumentos para discutir los temas de ese sector de la economía que tienen que ver con muchos otros empresarios.”

“Las asociaciones, que no cámaras, que son del derecho privado y no del derecho público. Esas sí son para la representación de personas físicas o morales. Yo me meto en una asociación que no ayuda en cuestiones de la defensa de mis intereses particulares, o sea, de mi empresa. En cambio, las cámaras están para la defensa pero también para la promoción, la representación, la propuesta del sector que está participando bajo esta filosofía. Yo soy un absoluto y total defensor de las cámaras, sin embargo, existe otro tipo de organizaciones como COPARMEX que es la figura sindical de acuerdo al Artículo 123 constitucional, fracción XVI, y la Ley Federal del Trabajo en sus Artículos 356 en adelante, donde se dice cómo se establecen los sindicatos de obreros y los sindicatos de patrones. De donde se desprende que la COPARMEX y sus Centros regionales son sindicatos confederados. La confederación es una confederación como en el caso de los trabajadores; tiene por tanto, la figura de un sindicato: hace asambleas semestrales, cambian su dirigencia de acuerdo a su propio estatuto, toman nota de su asamblea. Por ejemplo, un centro empresarial, una confederación, no se registra ante un notario, se registra ante la autoridad laboral, pues corresponde a un ámbito diferente. Primero, porque no es solo de una industria o de un comercio, como las cámaras. Aquella agrupa a los empresarios que quieran estar allí y que sean de las diferentes ramas económicas. Entonces, una organización que ha desarrollado un trabajo mucho más amplio que el de una simple representación empresarial, tiene la posibilidad de participar en muchos asuntos de la vida de este país, no necesariamente políticos. Tiene el poder de opinar sobre temas como: educación, infraestructura, política, por lo tanto su espacio es mucho más amplio que el de

la función concreta de las cámaras, cuyo objetivo es garantizar la representación sectorial.”

“La COPARMEX es un órgano de consulta, de afiliación voluntaria. Las cámaras de 1936 a 1996 fueron de afiliación obligatoria, por lo que el empresario era forzado a estar registrado, aunque no quisiera participar en las acciones de la cámara. La dimensión de una confederación puede ser de más de cuatrocientas mil empresas en todas las diversas cámaras que agrupa, mientras la confederación patronal llega a tener treinta y tantas mil empresas asociadas, porque aquí se afilian voluntariamente. Los empresarios sienten que la COPARMEX los representa más ampliamente, en una mayor parte de los asuntos que interesan a las empresas. Por esa razón estoy aquí, con Abascal, porque conocemos la problemática empresarial (se refiere a su puesto de coordinador de asesores que desempeñaba cuando Abascal, también expresidente de COPARMEX, fungía como Secretario del Trabajo y Previsión Social).”

“Para nosotros las relaciones dentro de la empresa no pueden ser de conflicto, sino que tiene que ser una relación de colaboración. Si lo que nosotros vamos a mantener permanentemente es el conflicto entre las partes, la empresa no prospera. Debemos impulsar términos de colaboración que coadyuven al desarrollo de la empresa y sus trabajadores. Esta es una filosofía que siempre ha tenido la COPARMEX. Esta confederación no está metida en la parte política pública y partidista, está metida en el esquema amplio de la política, el hacer política es el preocuparse por lo que uno está haciendo con su propia nación. La COPARMEX tuvo una presencia, nace en un momento muy crítico, 1929, cuando quien gobernaba, desafortunadamente, llevaba al país por un camino contrario a la libre empresa y a la libertad de asociación. En consecuencia nace la COPARMEX y dice, soy libre asociada, soy sindicato y voy por la libre empresa, por el respeto a la propiedad privada, por una economía de mercado con responsabilidad social, que son los valores de la COPARMEX. Nace así, y poco a poco va ganando autoridad moral y una influencia muy importante en el ámbito nacional.”

Por ejemplo, la COPARMEX habré el asunto del INFONAVIT en los años setenta, cuando solamente participaban CONCAMIN y CONCANACO. La COPARMEX dijo si se trata de los trabajadores y nosotros somos sindicato patronal, vamos a ver quienes tienen la representación. Entonces nos tuvieron que dar asientos también en INFONAVIT, porque teníamos también una representación empresarial sólida, consistente y con mucha

autoridad moral, porque ha sido una organización que ha sido total y absolutamente independiente. Desafortunadamente, no quiero decir las causas, en algún momento algún dirigente de algunas cámaras se apegaron mucho a intereses específicos de un determinado gobierno.”

“COPARMEX se ganó la representación a pulso, es decir, dirigentes serios, responsables, con una gran capacidad de gestión y de representación, trabajando sobre asuntos que interesaban a los miembros del sector empresarial, de proyectarlos en el escenario de la vida política de México. Ello permitió decir, estas son las partes de la política pública que nosotros requerimos para el desarrollo empresarial. Estas son algunas de las reglas del juego: libre empresa, economía de mercado con responsabilidad social, posibilidades de respeto absoluto a la propiedad privada de las personas. Esos valores son los que la COPARMEX y sus dirigentes fueron promoviendo en una forma muy importante, para que fuesen respetados. Y cuando no se consideraba al sector empresarial, la Confederación Patronal reclamó en forma importante. A mi me tocó estar en la defensa de esos interés cuando estuve como presidente de esa organización empresarial.”

“Por ejemplo, con la avalancha de una nuevas corrientes de carácter populista en la época del presidente Echeverría, otra vez golpeando al sector privado, poniéndole trabas, muchas reglamentaciones absurdas, controles de precios, muchas cuestiones que fueron limitando e impidiendo el crecimiento de la empresa privada, entonces hubo ahí que responder con una organización de coordinación más amplia. Fue cuando todas las coordinaciones de carácter nacional se reunieron y formaron en 1975, el *Consejo Coordinador Empresarial*, con un carácter exclusivo de coordinación, no de representación, respetando por tanto el papel que cada organización jugaba en el área que le correspondía. Desde ese momento contamos con un instrumento que permitiera definir lo que conjuntamente debemos de hacer. Se trataba de vincular intereses de grandes y medianos empresarios. Convergen en el consejo empresarial diferentes intereses que se reúnen en un solo cuerpo, una coordinación de intereses, no de representación. Por lo tanto, el Consejo Coordinador Empresarial habla a nombre de todos los empresarios.”

“Lo importante es que todos aportamos a la filosofía empresarial, y por ello todos esos valores son comunes a todos nosotros: el respeto a las leyes, la democracia como forma de gobierno. Eso nosotros no lo plateamos, nosotros como empresarios lo que

tenemos que ver es la democracia y punto. Quiénes la van a manejar, ese ya es otro problema, ya en lo personal que cada quien que vea como le hace, si se quiere meter como yo en la vida política. Lo importante es que exista una vida democrática, plena y respetuosa en términos de tener elecciones limpias, transparentes; que los ciudadanos puedan elegir a quien ellos quieran. Ese también es un postulado de las organizaciones empresariales, si queremos un país en el que exista una democracia.”

“Respecto a la capacidad de gobernar de los presidentes del México actual, quizás destaca el de López Portillo, quien toma una decisión terrible después verse incapacitado para sacar al país adelante. Me refiero a la expropiación de los bancos. Fue una medida totalmente absurda para querer justificar una medida de gobierno y querer echar la culpa a otros de las situaciones que no pudo manejar. Entonces, la COPARMEX fue la que inmediatamente empezó a organizar los llamados foros *México en Libertad*, bajo la presidencia de José María Basagoiti. Solo duraron mes y medio, se suspendieron para no seguir presionando, porque hubo una reacción del partido de gobierno en el sentido de no dañar al país. Eran foros muy importantes, muy concurridos, donde se hablaba de que no se podía seguir pisando las libertades, se nos dieron ciertas garantías de que no se seguiría por ese camino.”

“La reacción no solo era de los empresarios; la sociedad consideraba que no podría seguirse por un camino de mayor autoritarismo, aún más exacerbado del que ya teníamos. Entonces la sociedad empezó a ser más reclamante. Muchos líderes empresariales que habían dirigido las organizaciones decían que no pararíamos, que entraríamos a tomar las decisiones políticas, independientemente de que siempre hubiera habido empresarios vinculados con el partido oficial. Ahí, junto con muchos otros, académicos y otras gentes interesados en la situación, se tomó la decisión de participar políticamente. Por ejemplo, en mi gestión, muchos participantes en la COPARMEX decidieron participar en los partidos políticos, y yo fui muy respetuoso de esa decisión en la medida que obedecía a sus derechos ciudadanos. Finalmente, la participación partidista de los empresarios fue muy exitosa, como es el caso de Rufo en Baja California y Barrio en Chihuahua, por solo señalar a los primeros que lograron una posición política de real peso. Sin duda, la COPARMEX fue la organización empresarial más importante, la que dijo: *a mi no me dejan afuera de las decisiones políticas importantes. Teníamos que participar, tomar al partido político pero*

*sin imponer nuestras propias reglas.”*

“En mi caso, decidí meterme a la vida política. Me inscribí al Partido Acción Nacional y a partir de allí, adelante y hasta donde dé, pues antes me ceñía a las recomendaciones de la COPARMEX, que como en las demás organizaciones empresariales, se tiene que respetar totalmente creencias, convicciones y decisiones políticas, sin querer estar usarlas corporativamente, como se ha hecho en otras instituciones de nuestro país. En la COPARMEX está clarísimo que nosotros hacemos política, por que el hombre es un animal político, que tiene que hablar de sus intereses, de su vida y de sus cosas. En mi caso, soy miembro de honor del Consejo Directivo de la COPARMEX. Como ex presidente soy miembro por todo el resto de la vida, por lo que cuando fui diputado federal por parte del PAN, asistía a las juntas del consejo, sin ningún problema. Alguna vez se me pidió alguna opinión, de cómo estaba yo viendo las funciones de la cámara y todas esas cosas.”

“Como presidente de COPARMEX, a mí me tocaron las elecciones presidenciales de 1988, la caída del sistema. Los políticos hicieron lo que quisieron y la verdad es que fue un fuerte golpe en contra de la democracia en México. En esa época Maquío hizo su movimiento de resistencia y la COPARMEX le dio todo su apoyo, el apoyo plural que debía dársele a un ex presidente de nuestra organización para luchar porque se restableciera ese orden. Estaba roto un proceso electoral tan complicado, tan de vergüenza. Finalmente el marketing, hicieron su ruta política; y nosotros seguimos estableciendo las reglas del juego que eran claras para nosotros.”

“En la campaña electoral también me tocó presentar en la confederación, a los seis candidatos, entre ellos Carlos Salinas, Manuel Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas, a quienes les presentamos nuestras "*Propuestas del Sector Privado*". Era nuestra perspectiva respecto de lo que debía hacerse en la economía, en el campo, en esto y en lo otro, desde nuestra perspectiva como empresarios. Eso se empezó a preparar con todo el *Consejo Coordinador Empresarial*, pero después su presidente, Agustín Legorreta, pensó que no. Entonces hubo tres organizaciones que decidimos suscribirlo y publicarlo: La CONCANACO, presidido por García Suárez de Puebla, COPARMEX, conmigo, y las Casas de Bolsa, con Alfredo Jarma. Estas tres organizaciones elaboramos el documento; ya se había gastado dinero en especialistas, en análisis, en reuniones. Después presenté a los otros tres ese documento

antes de las elecciones y la Confederación, bajo mi mando, hizo una gran campaña de promoción al voto. No había partidos políticos, como ciudadano tu eres responsable; has todo lo que se tenga que hacer. Hicimos muchísimas cartulinas que se pegaron en todos los comercios de todo el país, en ellos decíamos "México es nuestro compromiso". Esa era la campaña y nuestro compromiso. Luego llegan las elecciones, sucede todo el desastre. Después de esto, el presidente Salinas quiso limpiar un poco la figura, y entonces fuimos convocados para platicar. A partir de ese momento estuvo en todas y cada una de nuestras asambleas. Lo que en todo caso confirma que se existe diálogo es porque el presidente de la República así lo desea.”

“En 1989, cuando yo llevaba un año, después de que lo autorizó el Consejo Nacional de COPARMEX se invitó nuevamente al presidente de la República a la Asamblea Nacional de la Confederación Patronal. Ahí entre otros, estuve presente en la primera fila, junto con todos los ex presidentes, incluyendo a Maquío. Cuando termina el evento se baja Salinas del presidio y se va hasta el lugar donde estaba el Maquío, a decirle ¿Cómo le va Ingeniero? lo saludó con un “mucho gusto en verlo”... había una tensión muy fuerte. Había más de setecientos empresarios ahí en la Asamblea y con una limpieza extraordinaria, se dejó hablar a Salinas. Habló leyendo un discurso. Nosotros le expusimos cómo veíamos las cosas y contestó en términos prudentes. Obviamente, al terminar, la gente se paró a aplaudir y se acabó. Estaba presente Maquío, era una atención muy grande, ya que era imposible pensar que se podrían originar expresiones contrarias al presidente. Ahí respetábamos la investidura presidencial, pero así rigurosamente, todo paso en orden y de ahí en adelante seguimos en esa misma línea, ya sin la presencia de Maquío.”

“Sin embargo, la COPARMEX tenía varias coincidencias con el gobierno de Salinas de Gortari. Por ejemplo, las modificaciones al artículo 27, sobre asuntos de ejidos, pues se trataba de que la tierra fuese de quien la trabaja, pero que él también pudiera decidir que carambas hacer con ella. También hubo ciertas acciones que estaban en las líneas que nosotras buscábamos, como era la cuestión de dar a nuestro país el mayor desarrollo de empresas y la generación de empleos. Salinas de Gortari presentó correctamente esas propuestas y las llevó a la práctica. Ese es el tipo de correcciones políticas que se hacen porque los sectores y la sociedad está reclamando, y no solo porque los empresarios lo deseamos. Como es el caso del surgimiento del PRD, en el año 1989. Se trata de reclamos

sociales que hacen rectificar el rumbo, lo que demuestra la disponibilidad para solucionar las cosas que no van bien; de ir rectificando ciertos asuntos que han sido tensados excesivamente por los anteriores presidentes, y poner ciertas cosas en el escenario en forma diferente. Las cosas se deben decir de una manera totalmente clara, lo cual hoy ya no se ve mal, pero fuimos los que abrimos ese espacio. Decir las cosas con todo, con objetividad y claridad. Esto se puede, esto no se puede; por aquí no transitamos como sector empresarial, etc. Porque hablábamos claro. Se nos calificó de duros porque hablábamos claro. Los dos discursos que dije ante el Presidente Salinas, a mi me tocaron dos, el tercero ya no me tocó a mí, le tocó a Larios.”

“Otro aspecto en el que concordábamos, era la cuestión de la apertura del mercado. COPARMEX siempre dijo que no podíamos abrir el mercado indiscriminadamente, y en el año de 1985 y 1986, cuando entramos al GATT, ahí De la Madrid nos puso en la torre, porque abrimos sin pedir algo a cambio. Y la industria del zapato, la industria electrónica, la industria de vestido y la del juguete, la del vestido allí en Puebla ¿cuántas fábricas sufrieron las consecuencias? Más de cien...., pero eso sí, bajamos al 35% de arancel sin pedir algo a cambio. Aunque ellos sí ponían el arancel que les daba la gana, razón por la cual se plantea la posibilidad de ir al Tratado de Libre Comercio se formó un equipo que se llamó Coordinadora Empresarial de Comercio Exterior (COECE). Estábamos de acuerdo en que se fuese negociado cuáles son las desgravaciones, en dos economías diferentes. A mi ya no me tocó prácticamente, yo salí en 1991 cuando apenas empezaba el Tratado de Libre Comercio. Poco después fue cuando se constituyó la Coordinadora Empresarial de Comercio Exterior que es la que estuvo, por así decirlo, en el cuarto de junto en las negociaciones. Se convocaron a muchas reuniones de empresarios de diversas ramas para que dijeran cómo la ven, qué se puede y qué no se puede. Luego el gobierno convino en algunas cosas en las cuales no hubo un total acuerdo de algún sector. Esto no quiere decir que tengamos que andar todos igual, y yo creo que negociado así es cien veces mejor que lo otro. Sin embargo, la apertura con el GATT fue un verdadero desastre para muchas industrias.”

“Hay que destacar que la COPARMEX está muy comprometido con el empresariado mexicano. Mucho más comprometida con la formación empresarial, como una de sus grandes tareas; es decir, que se vayan capacitando el pequeño y el mediano

empresario para poder manejar mejor las empresas; hacer más competentes a los directores o presidentes de sus propias empresas.”

“En 1994 hay una descomposición del sistema político imperante, porque es una descomposición entre ellos. Se quieren cobrar cuentas y se las cobran, haciéndole mucho daño al país. Por ejemplo, el estallamiento del asunto zapatista es algo que habían encubierto de tiempo atrás, porque hay quienes estuvieron metidos allí: Gómez Araujo y otras gentes, desde los años setenta. Estas cuestiones no contribuyen al desarrollo sano del país, sino tensan las posibilidades de desarrollo del país, al establecerse un conflicto como el de Chiapas, hablando de las reivindicaciones de los indígenas, no, el conflicto de Chiapas habla de la guerra. Aquí tengo el texto de la declaración de guerra del “Señor Marquitos”. Reflejo de una descomposición política muy fuerte. Esta declaración de la Selva Lacandona, hoy decimos basta, somos tales, hoy decimos basta, declaración de guerra pero hablan de otras cosas como avanzar a la capital venciendo al ejército, respetar la vida de los prisioneros, iniciar juicios sumarios a los soldados del ejército mexicano, forma nuevas filas, con todos aquellos que dijeron que se suman a nuestra lucha justa, porque somos herederos de la nacionalidad, los desposeídos somos millones, llamamos a nuestros hermanos que se sumen como el único camino para no morir de hambre de los grupos mas conservadores y vende patria y después para evitar como una ultima esperanza después de haber intentado todo el poder de la legalidad basada en nuestra carta magna recurrimos a ella para aplicar el 39 constitucional que dice: “La soberanía reside esencialmente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo y se estima para su beneficio, el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno.”

“No cabe la menor duda que los gobiernos de la República fueron responsables de esto. Tuvieron dinero y no lo hicieron; sin embargo, esa zona en condiciones de comparación de pobreza, son ricos comparados con nuestros indígenas de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán y de la Tarahumara. Esos son riquísimos, tienen todo y viven bien, ellos viven, cierto, no tienen desarrollo, pero después se les quiere integrar al desarrollo y no quieren, ese es el problema también. Es el caso de la discusión sobre si la Ley COCOPA o no a la COCOPA. Nuestros hermanos indígenas entienden muy poco de eso, que cuál es la discusión, que nos estamos muriendo de hambre, que necesitamos no sé cuanto. Pongámoslos en el desarrollo, hagamos carreteras, acerquemosles las posibilidades de

desarrollo para que produzcan, en fin.... Hagamos escuelas, hagamos hospitales, invitemos al desarrollo respetando su cultura, ¡Claro que sí! como yo le dije una vez a la gente, y a uno de los sacerdotes que había andado en aquella tierra, es que tenemos que reivindicar a los indígenas y que sigan viviendo, pero hay que integrarlos al desarrollo. Eso lo manejaba yo mucho cuando fui Secretario General del Partido Acción Nacional.”

“Debemos enseñarle a Fox, por ejemplo, que un maestro de escuela en la Ciudad de México gana 6 mil pesos, cuando debíamos de pagarle 12 mil; que un médico de los que están en el ISSSTE ganando 10 mil pesos, se vaya a Tuxtla a vivir con 20 mil pesos, y que haga su ruta diariamente por diferentes pueblos un día, en los lugares que queramos hacer hospitales. Eso es políticas públicas. Eso es lo que necesita esa gente, no discutamos si es un pedacito más o un pedacito menos de ley, mandémosle a esos, a los suyos que salieron de allí, no que se regresan allá si a una persona, en lugar de pagarle a un médico de aquí del hospital del ISSSTE, en lugar de pagarle 12 mil pesos, se le pagara 20 mil pesos en Tuxtla, viviría como rey, o sea, tiene un estatus de vida superior al que tiene aquí. Porque aquí no alcanza para nada, allá tiene un estatus de vida superior.”

“Respecto a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, valdrá la pena decir que cualquier propuesta debe salir de la mesa de quienes son los que van a estar regulados por esa ley, no de los sectores privados. La Secretaría del Trabajo no está imponiendo ninguna reforma; es un absurdo que ponga esto a análisis del “Proyecto Abascal”. Es un absurdo, y el PRD lo quiere desvirtuar. No pueden decir que esto es una propuesta de Abascal, no es cierto. Aquí se ha estado sentando durante más de un año la *Mesa Central de Decisión*, formada por representantes empresariales, todos los representantes de los trabajadores, ocho de los que tienen que ver con sindicatos del la Congreso del Trabajo, y cuatro de los que tienen que ver con la UNT. Lo que se está buscando es un acuerdo. Ya han llegado a ciertos acuerdos, que en los próximos días seguramente, podrán expresar cuando ellos indiquen, no cuando diga esta Secretaria. Cuando los participantes de esa mesa convocada digan: *Estamos listos en esto, llegamos a acuerdos y queremos que ésta sea la reforma*. Desde luego, las cosas que se están tratando de discutir por parte de los sectores productivos son, precisamente, las condiciones requeridas para dar mayores posibilidades de generar empleo, la incorporación de más trabajadores. Por otro lado, el respeto absoluto a todas las que ya han sido llamadas las conquistas laborales. Por el otro lado, metiendo una

enorme y gran preocupación sobre el asunto de capacitación, sobre la productividad; ¿cómo medirla? que se forme una Comisión Nacional de Productividad. Se trata de que esta secretaria facilite que los empresarios y trabajadores tengan un instrumento que les sirva para desarrollar, lo más posible, programas de capacitación. Esta es una parte normativa, una parte que apoye, que dé las posibilidades. Esta Secretaría no genera empleo, la Secretaría necesita de una ley que facilite la generación de empleo, que facilite e impulse estos mecanismos de capacitación.”

#### *1.5 El Ingeniero Picard, Presidente de CANACINTRA.*

El testimonio que aquí se ofrece es producto de tres entrevistas que se hicieron en el mes de julio de 2001. Se hizo el mayor esfuerzo para respetar tanto la esencia como la forma del discurso que a continuación se presenta. El Ing. Picard, es propietario de una fábrica de caramelos y chocolates, y al momento de las entrevistas, fungía como presidente de CANACINTRA.

Para el Ing. Picard, en 1941 cuando se crea la CANACINTRA, prácticamente en México no existían empresas. Evidentemente, PEMEX era una gran industria en la medida que representaba a un conjunto de empresas extranjeras que fueron nacionalizadas, pero en realidad cuesta mucho trabajo afirmar la presencia de una industria a principios de los años cuarenta.

“De tal manera que a partir del 5 de diciembre de 1941, cuando comienza a operar la CANACINTRA, se le da un especial énfasis a la industria de la transformación, que es genérica. Solamente existen tres cámaras genéricas en toda la República Mexicana: Nuevo León, Jalisco y CANACINTRA. El resto son cámaras específicas. En esa época se crean los modelos de política industrial que realmente empiezan a evolucionar. Es el momento en que se comienzan a cerrar las fronteras, lo que hizo posible la consolidación del mercado nacional. El gobierno comienza a dar facilidades para que los industriales comiencen a trabajar, para que fuera posible fabricar lo que no se fabricaba en el país.”

“A partir de los años cuarenta comienza a haber muchos tipos de protección a los productos nacionales. Aunque esto significaba un gran apoyo para la industria mexicana,

hay que recordar que en los años sesenta y setenta, el presidencialismo se traducían en la relación con los empresarios, en una serie de controles que el gobierno imponía. Las organizaciones empresariales podían reunirse con el presidente en turno, pero si así lo juzgaba conveniente simplemente te callaba y te decía lo que los empresarios tenían que hacer.”

Para Picard, uno de los problemas que siempre estuvieron presentes en las perspectivas de CANACINTRA, fue la cuestión del comercio exterior: las exportaciones y las importaciones. Por ejemplo, señala que: “En el gobierno de López Portillo (1976-1982) hubo el primer intento de incorporar a México al GATT, objetivo que no se alcanzó porque precisamente la CANACINTRA lo impidió. Evidentemente, no se confrontaba políticamente con el gobierno, pero nunca quitó el dedo del renglón y su negativa al respecto siempre fue negativa. Dicho esto, de muchas formas, las declaraciones que se hacían a la prensa, hasta las oportunidades que se tenían para expresarle personalmente al Señor Presidente que para nosotros sería desastroso la apertura de las fronteras.”

“Con el gobierno siempre era lo mismo, el problema de los precios. Si tú tenías interés de venderle al gobierno, tenías que ir a registrar tus precios. El gobierno les daba el visto bueno, y entrabas a un padrón de proveedores. Luego vino la cuestión de los pactos en el gobierno de De la Madrid: mayor control de los precios, aunque, contradictoriamente, este gobierno fue el que terminó por incorporar a México al GATT. De cualquier manera, sobre todo antes de incorporarnos a ese tratado, el problema era que el control de los precios, bajo el criterio que fuera, no te permitía modernizarte, que como empresario independiente adquirieras tecnología para que fueras competitivo. Además de la amenaza ya constante de que se abriría el mercado y que las cosas se pusieran mucho más difíciles con la entrada de los productos extranjeros.”

“La CANACINTRA -señalaba Picard- es un órgano de consulta; independientemente de los altibajos en cuanto a la relación con otras organizaciones empresariales y con el gobierno, siempre tuvo una participación visible en la proyección de los problemas que enfrentaba el mediano y pequeño empresario. Sin embargo, vivimos situaciones muy complicadas. Por ejemplo, señala Picard, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, en 1994, viene acompañado del conflicto indígena de Chiapas, el asesinato de Colosio, los secuestros de empresarios, el asesinato de Ruiz Massieu. Es decir,

un contexto político muy comprometedor y una apertura económica todavía más dinámica que la implícita en el GATT.”

“Luego, con la llegada de Zedillo a la Presidencia, viene el “error de diciembre” (1994), y de golpe la entrada a la crisis de la que hasta la fecha todavía no podemos salir. En esos contextos de cambios radicales y de crisis es que el papel de la CANACINTRA ha tenido que jugar un papel central en la protección de la micro, pequeña y mediana empresa. Y ahí es conveniente considerar que unos presidentes de la cámara han sido más activos, otros han sido más pasivos; unos han sido más controlados o han buscado una posición conciliatoria con el estado para evitar ver perjudicado al sector, para no ser blanco de represalias. Como por ejemplo, las (SIC) persecuciones de Hacienda o la falta de apoyo financiero, etc. Y -comenta Picard- a ti como empresarios te rascan hasta el fondo para saber cómo andas en cuanto a tus declaraciones; es decir, buscan la manera de “agarrarte” fuera de lugar. Así que es mejor tener una posición conciliadora. Como decía don Porfirio Díaz: *a los amigos tolerancia y a los enemigos la ley.*”

“Después del 24 de diciembre de 1994, el papel de la CANACINTRA ha cambiado radicalmente. Pues todo lo que se había logrado con el transcurso del tiempo, como es la capacitación que dábamos a pequeños y medianos empresarios que tenían que modernizarse, que necesitaban equiparse, que requerían hacer cambios en las estructuras de la organización para comenzar a funcionar eficientemente, propició un ambiente de credibilidad en nuestro trabajo. De tal forma que muchos industriales empezaron a comprar maquinaria nueva, hacían sus inversiones, en fin, se intentaba avanzar.... Hasta el golpe de diciembre, cuya crisis provocó el embargo de la maquinaria adquirida, de los equipos y mobiliarios comprados, de los medios de transporte adquirido para hacer más eficiente las entregas. Evidentemente, todo esto adquirido con los financiamientos bancarios. Así que la estocada del “error de diciembre” fue muy fuerte, casi mortal, pues esto se da en un contexto de apertura radical de las fronteras y la competencia contra los productos extranjeros es demasiado desigual.”

“Sin embargo, -insiste Picard- siempre hemos tenido el problema de cómo tratar el impacto de las devaluaciones, pues el gobierno siempre argumenta que las tragedias de esas crisis deberían aprovecharse para posicionarse mejor en el mercado internacional. El hecho es que hasta ahora la industria, micro, pequeña y mediana empresa, no se ha podido

modernizar, hoy se encuentra dando gritos pidiendo auxilio. Y en realidad se observa que los gobiernos, sobre todo los de los años ochenta hasta hoy día, le apuestan al éxito de un modelo exportador. Esto ha provocado que cuiden las grandes inversiones extranjeras y que olviden el mercado interno. En el caso del gobierno de Fox, nos volvemos a encontrar con un nuevo discurso hacia la micro, pequeña y mediana empresa donde se reconoce la importancia de este segmento. Su papel sería darle fortaleza al país, pero coincide también con la desaceleración americana, la cual les pega a los europeos y le pega a los japoneses. Así, economías como las nuestras se vieron seriamente afectadas.”

“El papel que juega la CANACINTRA –señala Picard- ha sido siempre el mismo: velar por los intereses de las micro, pequeñas y medianas industrias. Lo que resulta sorprendente es que, prácticamente, siempre hayamos pedido lo mismo, como se puede observar en los encabezados en la prensa nacional de 1941 a la fecha, y que se recogen en el libro de *El águila rumbo al sol. Crónicas histórico-periodística de CANACINTRA desde sus orígenes hasta la época actual*, de Garza Mouriño.”

“A partir de esos testimonios se puede ver que CANACINTRA es el organismo más nacionalista, no chauvinista, sino nacionalista que promueve la mexicanidad, busca la integración de las cadenas productivas. Consciente de la importancia del mercado interno a veces defiende a la empresa nacional de las posturas antinacionalistas de muchos gobernantes.”

“Habría muchas cosas que hacer –explica Picard- por ejemplo, le pedimos al presidente de la República que el 35% de las compras del gobierno se hicieran con la micro, pequeña y mediana empresa. La desgracia es que se tenga una visión de corto plazo que no prevé resolver la situación de rezago tecnológico en la que se encuentran tantas empresas nacionales desde hace 20 años, mismas que no cuentan con los elementos para competir en el contexto del Tratado de Libre Comercio, ya que no tienen la cultura de la planeación. Por otro lado, tenemos que hay una costumbre del empresariado mexicano de no hacer la reinversión de las utilidades, no se pagan impuestos, las empresas tienen el criterio de “comerse a la empresa”.”

“Además, fuera de México, D. F., y sus alrededores, Jalisco y Nuevo León, en realidad cuesta trabajo pensar que existe una infraestructura mínima para impulsar la actividad industrial. Y por parte del gobierno tenemos decisiones como las que ha tomado

el día de hoy el Presidente, donde de plano ya dice que ya quiere otro recorte de 1,500 millones de pesos. Nosotros estamos seguros que no le va a pegar, ya que ese recorte se debe a que el consumo ha caído y por tanto cae el IVA. Nosotros simplemente anticipamos que si esto sigue así, lo que viene es un peso por un dólar; un peso fortalecido donde otra vez estás estimulando las exportaciones de bienes consumo. Cuando de pronto te dicen los analistas del gobierno que han bajado las exportaciones, y bien podrían haber caído también las importaciones, el problema es que por cada 100 pesos que exporta, tienes que importar 70. Las tendencias no son nada agradables, por ello la voz de la CANACINTRA siempre se escucha defendiendo a la industria mexicana, fortaleciendo el mercado interno; buscando la mejor forma para modernizar la planta industrial mexicana; promoviendo la capacitación, el conocimiento de los radicales cambios del mercado. Pero también hemos hecho énfasis en la necesidad de un mayor compromiso por parte de los industriales mexicanos que se registren en CANACINTRA, ya que ésta recibió un golpe muy fuerte cuando se quitó la obligatoriedad a partir de 1995. Se quedó muy endeudada, de hecho, es la cámara más endeudada, pero también es la cámara más grande de México y de toda América Latina. Fue la que le apostó a todas las normas cuando compró Laboratorios LANFI en 1995 y de ahí parte su gran deuda, fue la que lanzó todo el sistema de comunicación satelital desde 1991. Es también parte del origen de su deuda. Es la que ha estado siempre a la punta, buscando como dar la capacitación y ofrecer una comunicación a nivel masivo.”

“En estos momentos estamos por cerrar –señala Picard-, estamos apostando todo por la capacitación. México es un país que necesita capacitar a sus empresarios. Primero, sensibilizarlos de que ya no hay empresarios competitivos en nuestro país. Los realmente competitivos son muy pocos; los que habían se acabaron, y los que quedan ya no encuentran la hora para volverse empleados de empresas transnacionales. Y ni que decir, todos los empresarios que se mantuvieron como ejecutivos en grandes empresas, hoy tienen mejores ingresos que cuando eran empresarios. Han acumulado, han ahorrado, tienen mejores casas, tienen mucho más que muchos empresarios. El empresario ha ganado y ha perdido, cuando ha perdido ha perdido mucho. En todo caso, si tu pretendes medir el éxito, éste se encuentra en la economía informal, ahí se encuentran dos terceras partes del empleo, de una población económicamente activa de 38 millones de mexicanos.”

“¿De qué modelo económico se trata? ¿Realmente tenemos condiciones para

competir en el mercado internacional? O hablamos de empresarios que están en la Central de Abastos, que están en las esquinas, que están en todas las misceláneas. Eso es lo que México ha creado, y tan lo ha creado que lo ha fortalecido, y no quiero verme fatalista. Al contrario –enfatisa Picard- soy realista, esa es la fotografía de la que se queja hoy amargamente el gobierno, porque tiene una percepción del 12% del PIB, 13 entre todos sus todos sus impuestos, pero tiene más de 9% del PIB de la economía informal. Por lo cual es muy fácil observar que tiene una gran fuga que no puede controlar. Por otra parte, el gobierno no da facilidades para establecerte. Como muestra un estudio que acabamos de realizar, donde se observa que el costo para establecerse es del 57.7% de los ingresos anuales del primer año. Este costo obliga al empresario a buscar la informalidad, no hay de otra, tienes que nacer informal, crear una gran red para después ponerte formal. Y el problema es que cuando empiezas como informal y no tienes ningún compromiso con el gobierno en cuanto al pago de impuestos, después ya no quieres regresar, porque sientes que demasiado oneroso ponerte en regla.”

“Esa es la fotografía. Quien quiera verla esa es la realidad. Somos 100 millones de mexicanos, 12 estamos registrados solamente en el Seguro Social y la población económicamente activa es de 38%. Lo ideal sería que esos 38 millones estuvieran registrados, estuvieran todos pagando impuestos. De hecho, uno de los cómoos que mencionas, van dirigidos hacia ese sector. Por ejemplo, de la población ocupada, el 50% se encuentra en empresas que tienen de 1 a 5 trabajadores, son microempresas.”

“Otro de los grandes problemas que enfrenta el micro, pequeño y mediano empresario es la “tramitología” que se ha de enfrentar cuando se quiere establecer. Pongo un ejemplo: el gobierno exige un permiso para hacer un centro comercial; voy hacer un “Perisur” con 500 locales para comercio. Termino, me da mi licencia de funcionamiento, cumplo con los cajones, las salidas de emergencias, con todo lo necesario. Cómo es posible que si alguien quiera rentar un local en ese lugar, tiene que volver a presentar su solicitud para uso de suelo, tiene que volver a hacer el papeleo como si antes no existiera algo. Son demasiados trámites, cuesta muchísimo dinero, y luego si le sumas lo que te cuesta el “gestor” o “coyote” que te ayuda a hacer los trámites, pues te encuentras en la calle. Ahí es donde está intentado entrar CANACINTRA. Nuestro objetivo sería llegar a los niveles de Estados Unidos. Ahí el tiempo de apertura de una empresa es de dos horas, en Cánada se

tarda mucho 1.4 días. Y de atrás para adelante tenemos el décimo lugar en competitividad, en trámites. Pero tenemos que romper también el discurso de quién es el culpable de la competitividad, que no necesariamente es el empresario. El empresario ayuda a la competitividad, pero es el Estado el que te ayuda con las tasas de interés, la infraestructura, con la energía eléctrica, la seguridad, todo eso te ayuda a ser competitivo. Tampoco se trata de responsabilizar al trabajador de la falta de competitividad, como se puede observar en las declaraciones de COPARMEX, en la prensa, donde además se culpa de la falta de competitividad empresarial al Estado.”

“En realidad habrá de ponderar muy bien a quien corresponde la responsabilidad de la situación que vivimos. Por ejemplo, se les dice a los trabajadores vayanse dos meses, tres meses, váyanse de vacaciones porque vamos a remodelar la planta. Se fueron todos de vacaciones y al regresar se encontraron con que su liquidación estaba en Conciliación y Arbitraje. Habrá que ponderar el efecto de la globalización, y del peso que tienen todavía los contratos colectivos. En todo caso, los trabajadores tienen que entender que las cosas no son como antes. Ahora parece que la intención del IMSS es ahogarte. Nadie comprende que hoy la producción está determinada por las “fortalezas” de otras economías que han emergido con un carácter más competitivo que el nuestro. Por ejemplo, el chocolate *Carlos V*, ya no es mexicano, un *Carlos V* es chocolate blanco, está hecho en Ecuador. Lo mismo puede decirse de muchos paletones que están hechos en Colombia. Hemos perdido demasiado, basta analizar lo que sucede con marcas que por tradición fueron expresión de mexicanidad, como *Peñafiel* y *Garci-crespo*. O revisar quines son ahora los dueños de la Banca, porque ya no es de mexicanos, y se trata de un sector estratégico. En ese sector se dieron todas las facilidades a los inversionistas extranjeros: tenemos la fusión de *City Bank-Banamex*, antes estuvo la de *Bancomer* con capital español. Ya nada más queda *BANOBRAS*. En ese sentido, comparto la crítica que hizo Carlos Slim, quien hizo pública su opinión respecto al exceso de facilidades que se le dio para que los extranjeros prácticamente se apropiaran de la banca mexicana.”

“Es interesante –abunda Picard- que al despertarse observemos el origen de las marcas de los productos que consumimos en la vida cotidiana; la marca de tu despertador, un *Sony*, un *Samsung*; tu shampoo, el jabón que utilizas es un *Camay*; el rastrillo con que te rasuras es *Gillette*; la ropa, lo que desayunas ¿dónde están los productos mexicanos? ¿Esto

era lo que debíamos esperar de la globalización? Una presencia arrebatadora de las transnacionales y unas cuantas empresas nacionales que salen beneficiadas de la apertura económica. Y para terminar tendríamos que ver los países con los que competimos, Canadá y Estados Unidos, que son los países que tienen los programas de desarrollo para la micro y la pequeña más grandes del mundo. Simplemente Estados Unidos destina 40 mil millones de dólares anuales para el desarrollo de la micro y pequeña empresa. En cambio aquí no hay absolutamente nada, y cada vez es peor. No tenemos ni siquiera programas para modernizar la estructura organizacional de las industrias, no se diga transferencia de tecnología y financiamientos. Ya ven, por ejemplo, el papelucho que hacen instituciones públicas como Nafinsa, por solo mencionar a alguna.”

“La verdad es que el gobierno debería garantizar o dar una ventaja mínima a las empresas mexicanas, pues sólo las grandes empresas son las beneficiarias de la situación. Ya lo ven, los grandes fraudes y tranzas, los tips e información privilegiada sobre lo que se iba a vender, fueron perpetradas por los grandes empresarios, no por los micro, pequeños o medianos empresarios. Es el caso del FOBAPROA, son 80 mil millones de dólares, si, pero el 80% son 2,100 empresarios. Cuidado, no somos los 100 millones de mexicanos, ni el resto de los empresarios, y sin embargo, no se abre la lista.”

“Por lo que toca al CCE donde nosotros tenemos voz pero no voto, mejor ni entrar en detalles. Nada más te digo que Claudio X. González, como presidente de ese organismo, dice que yo, presidente de CANACINTRA, soy un “empresario guerrillero”. Todo porque no paro de declarar ante los medios de difusión nuestra crítica al modelo neoliberal que tan bien le ha caído a los grandes empresarios y que tanto defienden, sea con un presidente u otro, sin importar el partido del que se trate.”

## 2. El discurso del empresario propietario de medianas y pequeñas empresas.

Al considerar la gran heterogeneidad del perfil empresarial, es decir, las diferentes magnitudes de los capitales y el poder que de ello deriva, en esta parte resulta importante dar cabida al discurso de un tipo de empresario que no tiene lugar en lo que venimos denominando *nuevo espacio público*. Se trata de un actor que siendo parte de la escenografía política, no tiene un papel protagónico para reproducir y proyectar las imágenes del poder. De hecho, si bajo alguna circunstancia representa alguna forma de poder económico, simplemente porque es propietario de capital y desempeña el papel de patrón, y que por ende supone cierto tipo de ejercicio del poder, no tiene la autoridad para aparecer en el espacio público y queda reducido a un papel tan secundario como el de la opinión pública. Su discurso es reflejo de una experiencia empresarial que no aspira a formar parte del escenario político, sino solamente a expresar una forma de ver el mundo a partir de una *trayectoria empresarial* que adquiere forma a través de los vaivenes de la economía y la vida política de nuestro país.

A continuación se presentan cinco trayectorias empresariales recogidas a partir de un trabajo etnográfico que se realizó con un grupo informal o *cuasi-grupo* (Mayer, 1968), que ha tejido su interacción social a través de década y media, en la que su propia actividad económica tendió los puentes para mantener en ese tiempo una relación no limitada exclusivamente a lo empresarial, sino a relaciones de otro tipo, que si bien pueden enriquecer la vida económica de cada uno de ellos, también ha servido para recrear otro tipo de actividades adyacentes, de índole formativo o inclusive, amistoso.

Aquí se presenta el testimonio recogido a través de la técnica etnográfica, de cinco miembros de un *grupo informal* de pequeños empresarios que en su momento ha llegado a cohesionar hasta 25 participantes, cantidad que varía a lo largo de los años. Los miembros aquí presentados se han mantenido de una manera constante y activa recreando la idea de “grupo”.

### 2.1 Ramón: construyendo caminos para sortear la crisis.

Nació en la ciudad de México, es arquitecto de profesión, carrera que estudio en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en la década de los ochenta. Su primer trabajo

profesional después de obtener el título, fue como *supervisor de obra* en una constructora privada. Después de tres años de experiencia en esa empresa, se incorporó como *supervisor de conservación y mantenimiento de inmuebles* en Nacional Financiera, trabajo que dejó en 1991, ya con el puesto de *Gerente de la misma área* a la que inicialmente había entrado.

Salió para formar su propia empresa de construcción y mantenimiento de inmuebles, producto de su experiencia como supervisor. Las características de esta actividad dependen de la cantidad de contratos que se consigan, lo que determina el nivel de ventas y el personal ocupado.

Como en todo inicio de una empresa, Ramón enfrentó la falta de experiencia empresarial y una cartera de clientes, lo cual dificultó los primeros años de actividades, haciendo evidente la diferencia entre ser un empleado, por profesionista que fuera, a ser empresario. Para él no era lo mismo: *“Esperar tu quincena para cobrar. Que llegar a la quincena y pagar la nómina, lo que en muchas ocasiones te quita el sueño”*. El mismo desenvolvimiento de la actividad y lo lastimoso del aprendizaje, la condición de sobrevivencia de la empresa, provocó en Ramón la conciencia de dejar de ser empleado, pues en los empleos, la posibilidad de ascender en el trabajo no depende de la calidad del desempeño, sino de la relación con los superiores. Por eso, *“acceder a un puesto mejor depende más de la disposición para servir de “lame-suelas”, que de tu calidad profesional”*.

La idea de formar su propia empresa significó la posibilidad de librarse de *“ser empleado para toda la vida”* y quedar de antemano supeditado a la voluntad del jefe en turno.

Lo curioso de la situación es que, dice, existían todas las ganas para crear mi propia empresa e independizarme, pero desconocía todo lo referente a la normatividad para iniciar actividades. Por ejemplo, como en ese momento la ley exigía un mínimo de personas físicas para constituir una empresa, los primeros a los que recurrió fue a amigos y familiares, quienes no tenían la misma idea respecto de la necesidad de formar una empresa. No se compartían el mismo fin, a pesar que estaban formalmente constituidos, lo que condujo al deterioro de las relaciones amistosas, y a tener la necesidad de modificar el acta constitutiva de la empresa. Y ésta era demasiado engorrosa porque son trámites tras trámites.

La creación de su empresa se lleva a cabo a mediados del sexenio de Salinas de Gortari, las primeras dificultades que enfrentó le enseñaron que en los negocios la mejor estrategia es liberarte de cualquier tipo de relación de negocio o laboral con familiares o amigos. Desde el primer año, independientemente de la *razón de ser* de la empresa creada, Ramón comienza a darse cuenta que desconoce los vaivenes del mercado, ni maneja de manera eficiente criterios empresariales para definir el tipo de proveedores con los que va a contar, ni sabe cómo introducirse en el nicho de mercado en el que se sitúa su empresa.

Su siguiente “shock” fue el enfrentarse al sistema hacendario, puesto que independientemente de generar ingresos, se tiene que considerar el pago de impuesto, IMSS, SAR, INFONAVIT, y desde luego, todos los gastos de administración que requiere el funcionamiento de una empresa: renta, luz, papelería, contabilidad, nómina, etc. Por lo que a veces sentía que la “tramitología” era su principal enemigo, lejos de encontrar algún tipo de apoyo por parte del gobierno.

Dando la batalla en el mercado, la empresa de Ramón subsistía conforme avanzaba la segunda mitad del sexenio de Salinas de Gortari, en esos años de intensa lucha fue aprendiendo a seleccionar con que empresas relacionarse, contaba ya con la experiencia suficiente para saber, al menos, cuales eran todas las obligaciones con que debería cumplir un patrón. Sin embargo, siempre estaba presente la presión de las quincenas, pues ahora en una posición de patrón, lo primero, aunque no se tuvieran contratos, era garantizar que saliera la nómina. Y a pesar que la situación era difícil, un fantasma que aparecía recurrentemente en las pesadillas de Ramón, era verse nuevamente como empleado. El resultado de los primeros años de experiencia era haber depurado la sociedad y tener la certidumbre que se había sobrevivido. A un altísimo costo, pero ya sabía manejar la empresa: la elección de los mejores proveedores, el manejo del personal, pero sobre todo, cómo cobrar por los servicios que se prestan.

Este tipo de trabajo tiene dos tipos de personal: el personal de campo, que no tiene algún compromiso con la empresa, puesto que están sujetos a la demanda de trabajo. Se trata de personal eventual contratado por obra determinada. Por su parte, ese tipo de trabajadores de la construcción son muy conscientes de las características de su trabajo, pues saben que van de empresa en empresa, según las condiciones del mercado.

El perfil de este tipo de empleado es de bajo nivel educativo y una condición

cultural que provoca muchos problemas para cumplir con los contratos, puesto que es frecuente el *ausentismo*, la falta de responsabilidad (no son conscientes que se trata de un trabajo donde lo primero que salta a la vista es la calidad del trabajo; una resistencia a utilizar el equipo de seguridad, como son cascos, mascarillas, guantes, zapatos de trabajo, etc), *“falta de compromiso y de identidad con la empresa”* puesto que no se ven hacia el futuro con la empresa, ya que es muy claro que su relación laboral termina cuando acaban las obras para las cuales se les contrató. Ramón no ofrece un juicio valorativo, simplemente describe, según su experiencia, las características del “trabajador de campo”, como él lo denomina.

En ese sentido, abona que la mano de obra calificada para el sector de la industria de la construcción es la mejor de toda la república mexicana. El “maestro de obra” es un trabajador con habilidades para crear, para adaptarse a los recursos materiales disponibles por los que su versatilidad en las diferentes actividades del sector se hace obvia, pues en México la especialización, como puede ser el caso de colocador de tablaroca, no existe. Además, se trata de trabajadores que tienen un alto rendimiento, mismo que es alentado por la “remuneración a destajo”. Las reglas del juego están perfectamente definidas y son parte de la *cultura* del sector: *“los trabajadores saben que cuando terminan su chamba, uno les tiene que pagar... y a la que sigue”*.

Respecto del *personal de oficina* (secretarias, arquitectos, dibujantes, asistentes) las reglas también siguen siendo claras pues están expuestas a las especificaciones de la Ley Federal del Trabajo, pero también dependen de su disposición para responder a las especificaciones de la demanda. Por ejemplo, en el caso de las licitaciones, se sabe que hay una reglamentación, un formato que elaborar, un horario y una fecha de entrega, lo que obliga a entregar en tiempo y forma: *“un minuto tarde representa el perder la oportunidad”*. Razón por la cual el equipo de trabajo debe considerar que dependiendo de las circunstancias se deberá ser flexible con el manejo de los horarios, y que obviamente no hay pago de horas extras.

*“El posible conflicto que pudiera derivar de esto, se resuelve aclarando desde un principio de la relación laboral, que el trabajo tiene objetivos muy claros, que las prioridades de la empresa están definidas por los contratos, y que una parte significativa de éstos se ubica en las instituciones públicas o empresas paraestatales”*. Esta situación

exige que el personal contratado sea competitivo y altamente especializado, lo que *“normalmente se logra cuando los trabajadores están bien identificados con la empresa”*.

La diferencia entre los “trabajadores de campo” y el “personal administrativo” es precisamente el tipo de compromiso entre la empresa y el personal, entre “personal fijo” y los trabajadores eventuales.

A partir de 1994, la empresa entra en un *“periodo de estabilización”*, pues ya se cuenta con la experiencia *“y ya se pagó un derecho de piso”*, por lo que se supera esa situación de sobrevivencia donde apenas se saca para los gastos. A estas alturas ya se cuenta con la experiencia mínima para trabajar con una cartera de clientes, de manejar simultáneamente el desarrollo de los proyectos, con las acciones administrativas y operativas, pues se ha tenido suficiente contacto con el personal que sabes *“no te dejará colgado”*. *“Comienza a verse reflejado que se está haciendo un patrimonio”*.

La empresa comienza a crecer, se cuenta con un “pool” de personal especializado para cada una de las áreas de trabajo que requiere la empresa, *“y aunque el sexenio de Zedillo comienza con una fuerte devaluación (el error de diciembre, 1994) y una recesión económica, las cosas no marcharon tan mal”*. Se siente una fuerte inversión en el sector de la construcción y la empresa tiene mucho trabajo con la iniciativa privada. El 100 % de la actividad está dirigido a satisfacer los contratos que en esos años se levantaron con el sector privado y *“era inimaginable hacer contratos con las empresas del estado”*. Ello por dos razones: *“una, por las dificultades que impone la asignación de los contratos aunados a la alta corrupción para la asignación de los mismos, y dos, porque el gobierno castiga los contratos, lo que provoca la poca calidad en la ejecución de lo mismos”*.

Para Ramón, la relación con clientes de la iniciativa privada propicia relaciones menos desgastantes, pues la utilidad obtenida es más alta debido a que la competencia es más restringida y/o el cliente elige al proveedor según la calidad y profesionalismo del trabajo.

Con base en la trayectoria de la empresa de Ramón, mientras en el sexenio de Zedillo alcanza un buen desarrollo y las expectativas de crecimiento son alentadoras, la certidumbre y estabilidad se pierde con la *llegada de la oposición al poder*. El *gobierno del cambio*, encabezado por Vicente Fox Quezada a partir del año 2000.

Para él, se sintió *“la falta de inversión, cero crecimiento en el sector de la*

*construcción” y “un nulo apoyo del gobierno a las microempresas”, la cual le orilló a reducir su empresa y a hacerla “altamente competitiva”. Se tuvo que sacar el mejor de los provechos del personal calificado para incursionar en el nicho de mercado que ocupa el sector público, el cual se volvió la única posibilidad de desarrollo por “el cero crecimiento”.*

La necesidad de establecer relaciones con el sector público, *“representó enfrentar un nuevo reto debido a la complejidad que significaba participar en las licitaciones públicas”*. La realidad que se encontró, a diferencia del sector privado, era el desconocimiento de los procedimientos a seguir en las licitaciones y la altísima competencia que existe en esos concursos, puesto que en algunos casos acuden hasta 30 participantes, a los que se debe vencer tanto en la “propuesta técnica” como en la “propuesta económica”. *“Lo que deja en tercer término la calidad de trabajo a ejecutar”,* puesto que *“a los demás participantes les interesa solo la obtención del contrato, sin importar la calidad de los materiales contemplados y la ejecución de los trabajos”*.

Para Ramón, esta situación obliga a ser más eficiente, eficaz y competitivo, ya que lo que anteriormente hacía con tres personas, hoy se tienen que realizar con una. Sin que ello sea una garantía de que obtendrás el contrato, pues existen otros factores que a veces son más decisivos que los contemplados por la reglamentación. Es la corrupción presente en las instancias encargadas de convocar y asignar contratos.

Lo que ha dejado el sexenio de Fox en la industria de la construcción, y particularmente para la constructora de Ramón, es crisis e inestabilidad, provocadas por el cero crecimiento, lo cual explican sus expectativas a futuro: *“mientras no se tenga un desarrollo económico y un apoyo decidido a las micro y pequeñas empresas, éstas están destinadas a su desaparición”*.

La empresa constructora a la que hacemos referencia, debería formar parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, pues *“para pertenecer a ella prácticamente tienes que cederle tu patrimonio. Si fuera socio de esa cámara, según su normatividad, tendría que aportarles un alto porcentaje de mi facturación. Las cámaras empresariales son sinónimos de los sindicatos charros”*. Y por tanto, no se espera ningún tipo de apoyo de las mismas.

Por otra parte, Ramón es una persona que está enterada de los principales sucesos

del país y del mundo, gusta de seguir minuciosamente las noticias, así como los análisis políticos que presentan los *medios de comunicación*. Es lector asiduo de los periódicos *La Jornada* y *Milenio*, mismo que lee diariamente; escucha de las 7 de la mañana a las 9:00 hrs., el noticiero *Hoy por Hoy*, de Carmen Aristeguí; de 13:00 a 15:00 hrs., el noticiero conducido por Dennise Maerker; de 17:00 a 19:00, el noticiero financiero *Poder y Dinero*, conducido por Ezra Shabot; así como el noticiero cómico-informativo *El Wueso*. Por las noches ve el noticiero de Joaquín López Dóriga, de 22:30 a 23:30 hrs.

Respecto al *escenario político* de los últimos años, Ramón considera que “*los partidos políticos son reflejo de nuestro desarrollo cultural, de una democracia incipiente*”. Toda su vida ciudadana ha votado por los partidos de izquierda, y hoy, ante la coyuntura electoral del 2 de julio votará por el PRD. Sin embargo, considera que su voto lo dirigirá en ese sentido, más por Andrés Manuel López Obrador, candidato de ese partido, que por el partido mismo.

Los principales atributos que Ramón encuentra en López Obrador son: “*su congruencia entre su pensar y su actuar, y la visión de su proyecto de nación en el que es necesario atender primero a los pobres*”. El PRI significa más de lo mismo, principalmente corrupción, y lo que engendra esto. Madrazo representa para él lo más nefasto que existe en la historia del país. Al PAN lo considera como una excelente representación de la intolerancia, los intereses de la gente de poder, del oscurantismo. Para él, Felipe Calderón Hinojosa, candidato a la presidencia por ese partido, es un ignorante y peléle. Mientras Fox y su gabinete representan el fracaso total, y ni modo, estuvimos representados por un “*pueblerino ignorante, al que solo le interesó su matrimonio y viajar en el mundo lo más posible. Es una de la peores vergüenzas que ha tenido que pasar el país*”.

## 2.2 Yolanda: la alquimia de la vida.

Yolanda nace en el año de 1956. Hija de una familia de escasos recursos en uno de los barrios más viejos de Azcapotzalco, realiza estudios de *ingeniería química* en la Universidad Autónoma Metropolitana y antes de terminar con sus estudios, su padre queda

sin empleo lo que la obliga a buscar trabajo a pesar que se encontraba cursando el último año de su carrera universitaria.

El primer problema que encuentra en su búsqueda, es que el mercado de trabajo para profesionistas de la rama industrial se encontraba cerrado para las mujeres. Después de mucho batallar, en una empresa que producía frenos para automóviles, le dieron la oportunidad, no sin antes plantearle su responsabilidad, pues era la primera mujer que la empresa contrataba como ingeniera. Y que de ella dependía la contratación de otras mujeres. La explicación era muy sencilla: no daban trabajo a mujeres porque siempre existía el riesgo del embarazo, y por tanto del abandono o de la falta de productividad, dado la exigencia del cuidado de los niños. Por lo que ella tuvo que insistir y explicar que todavía faltaba mucho tiempo para casarse, y su actitud fue la que le valió para obtener el trabajo.

De tal manera que su primer empleo fue como *supervisora de control de calidad*, trabajo que le costó muchísimo esfuerzo puesto que tuvo que aprender cada parte del proceso de producción. Su dificultad radicaba en que, simplemente, la metalurgia no era su campo, por lo que tuvo que recurrir al apoyo de compañeros de la UAM, la cual se encontraba muy próxima a la empresa. Así, terminando su jornada de trabajo, inmediatamente salía rumbo allá, para recibir consejos y asesorías de sus compañeros y maestros. Ello junto al tiempo que le dedicó al trabajo, más que el requerido por un ingeniero industrial, salió adelante hasta controlar a la perfección su trabajo. Tal calidad tenía su trabajo, que a los 10 meses de su incorporación se desocupó el puesto de *jefe de control de calidad*, mismo que obtuvo como reconocimiento a su trabajo. Situación que coincidió con la terminación de sus estudios y la obtención de su título profesional.

Dos años después, con la crisis de 1982, la empresa planteó trasladarse a San Luis Potosí, y como Yolanda sentía que había mucha discriminación en la empresa, prefirió que le dieran su liquidación. Misma que usó para poner un negocio de compra-venta de naranjas. Ella compraba en la central de abastos camiones de 10 toneladas del producto, y después la vendía en los tianguis. Para ello había rentado puestos en varios tianguis y contratado a personas para que los atendieran, mientras ella se dedicaba a surtirlos de naranjas. Posteriormente abrió un local en la casa de sus padres donde vendía al menudeo y mayoreo. Y aunque se trataba de un trabajo muy duro, pues había que estar diariamente en la central de abastos de la ciudad de México a las cuatro de la mañana (para revisar la

calidad del producto y encontrar el mejor precio), después de un año de trabajo pensó en la posibilidad de cambiar de giro, aunque semanalmente movía 20 toneladas de naranja, obteniendo una ganancia del 60 % de su inversión. Lo que, más tarde, le permitió poner una cremería en el mismo local en el que anteriormente vendía naranja.

El éxito de ese trabajo fue que traía la mercancía de provincia (queso, chorizo, cecina, cajeta, etc.) donde anteriormente había establecido contacto con productores que estuvieron de acuerdo en enviarle los productos por tren, no sin antes recibir el depósito del total de la compra. Ella misma se encargaba de recoger la mercancía en la estación de Buenavista, y de atender la cremería. En este negocio duró tres años, de los cuales, en el último de ellos, se dedicó, junto con compañeros de la universidad que se encontraban trabajando en diferentes empresas industriales, a recoger desechos industriales que fueran de utilidad para otras empresas. Por ejemplo, es el caso del polímero –cierto tipo de plástico que se utiliza para la fabricación de múltiples productos. El negocio era relativamente fácil, pues los desechos no les significaban costo alguno y la venta representaba el monto total de la utilidad.

Ese dinero lo fue invirtiendo en la producción de pegamentos para la producción de cocinas integrales, como su producto estaba muy por debajo del precio del producto de Industrias Resistol, el negocio marchó bastante bien. El lugar en que se realizaban las mezclas era el patio de la casa de sus padres, quienes invariablemente la apoyaron para que saliera adelante en los negocios a los que iba dando forma. Evidentemente tuvo que cerrar la cremería. Para 1988 la producción de pegamento ya dejaba una significativa utilidad a los socios de ese negocio.

Ese año vio la oportunidad de incorporarse nuevamente al mercado de trabajo, como *laboratorista* para el *departamento de control de calidad* de una empresa que producía *detergentes industriales*. En ese puesto duró dos años, pues después se desempeñó como responsable del *servicio técnico*, trabajo que consistía en brindar apoyo a los vendedores y asegurarse que el producto funcionara lo mejor posible. Lo que supone conocer el producto y explotarlo de la manera más eficiente para que rindiera en los diferentes procesos productivos para los que se les empleaba.

Por ese puesto tuvo que viajar mucho. Tenía contacto con los clientes que compraban el producto, ya fuera desde una plataforma petrolera, hasta dar el servicio para

compañías de aviación, que bien podían demandar detergentes para lavar los interiores de los aviones o el lavado de los turborreactores. Se trataba siempre de elegir el producto que rindiera mejor conforme a la especificidad de cada proceso de trabajo, y los reactivos químicos que estaban implicados en cada uno de ellos. En ese puesto duró dos años.

En ese tiempo Yolanda se percató que las empresas de gobierno, como hoy día, se manejaban con mucha corrupción, pues siempre se tenía que competir con el “proveedor recomendado”, quien normalmente obtenía los contratos sin importar la calidad de su producto. Lo que importaba era cómo “se llevaba” al responsable de las compras. A diferencia de la iniciativa privada que siempre está pendiente de los costos.

Más tarde, en 1992, habiendo acumulado algo de capital, Yolanda se asoció con compañeros de ese trabajo, para producir detergentes industriales. Los miembros de la sociedad eran tan solo tres: una química, un vendedor y uno de producción. Y a partir de esto fue aprendiendo muchísimas cosas que la universidad no le enseñó, como es el caso de vender, administrar un negocio, planear las ventas y las compras al corto, mediano y largo plazo. En ese tiempo tomó muchos cursos, pues sus socios se dedicaban exclusivamente a lo acordado al inicio, además de que carecían de una formación profesional que les permitiera interesarse en las actividades de administración del negocio.

A los dos años de echar a andar la empresa, ya contaban con un terreno donde construirían una nave industrial, con camioneta de reparto, con auto para el vendedor, con una importante cartera de clientes que reflejaba su esfuerzo por penetrar al mercado.

El negocio estaba controlado y Yolanda comenzó a vender, con el objeto que se expandiera su presencia en el mercado, ahí se dio cuenta que la iniciativa privada también estaba viciada, pues para vender se requería tener “previo acuerdo” con el comprador que abiertamente decía “tengo ya negocio con mi proveedor”. U otro tipo de empresas donde el de compras te pedía que facturaras con un 10 o 20 % más, diferencia que evidentemente iba a sus manos.

También observó que como mujer era mucho más fácil vender, pues normalmente los compradores son varones. A partir esta situación a Yolanda le resultaba fácil introducirse en las empresas y contactaba a los ingenieros, quienes eran los que en realidad decidían que tipo de producto se compraba. Por otra parte, también observó que en esa época se daba mucha entrada como responsables de las áreas de producción a muchos

jóvenes, favoreciendo el cambio de criterios y por tanto, ofreciendo mayores oportunidades para vender nuevos productos. Los viejos, dice Yolanda, están casados con esquemas antiguos, lo cual provoca que incurran en la “ceguera de taller”, pues les resulta imposible ver las cosas de diferente manera a la que están acostumbrados, mientras a los jóvenes les gustaba experimentar, arriesgar, probar los productos ofrecidos.

Con el tiempo, Yolanda comenzó a vender más que el socio encargado de esa actividad, lo cual provocó el “celo profesional”, dado que en las plantas donde se compraba su producto le hacían mucho más caso a ella que a él, por el solo hecho de compartir los códigos profesionales implicados en los procesos productivos. Sus socios comenzaron a pensar que ella podía quedarse sola con el negocio. En diciembre de 1990, ya casada, les informó a sus socios que estaba embarazada y que por ello dejaría las ventas, dedicándose a lo que estaba contemplado originalmente: el diseño de las fórmulas y el control de la calidad. Sin embargo, ellos le dijeron que ya no estaría capacitada para seguir desempeñando el trabajo que requería la empresa, por lo que debía separarse del negocio y mantenerse exclusivamente como socia. Pues cada uno de ellos tenía asignado un sueldo.

Al poco tiempo, Yolanda se percató que sus dos socios se habían puesto de acuerdo para declararse en quiebra y dejarla sin nada. Inició un juicio para recuperar siquiera una parte de la inversión y de los bienes que la empresa había adquirido, pero las cosas no parecía que se desarrollarían a la velocidad que ella requería.

Le comunicó a su esposo lo que estaba pasando, por lo que acordaron que él abandonaría la maestría que se encontraba estudiando, y ella comenzó a vender por su cuenta. Aprovechando su experiencia y el contacto que tenía con proveedores y clientes, a la semana ya contaba con los primeros pedidos de clientes que informados de lo que había pasado, estuvieron dispuestos a comprarle a ella. Al poco tiempo se dio cuenta que el juicio en contra de los socios que la habían despojado no iba a fructificar, por lo cual dedicó todo su esfuerzo a levantar el negocio. Unos ahorros de su marido y su incorporación a la producción de detergentes industriales, permitieron estabilizar el negocio.

Concluido el primer periodo de cinco años, Yolanda y Santiago contaban con un terreno donde construir la nave industrial, una camioneta de transporte, importantes créditos por parte de sus proveedores, lo que les permitía financiar el negocio. La empresa se fue asentando, a partir de una administración racional de los recursos, el ahorro y la

permanente búsqueda de nuevos nichos de mercado.

En el segundo periodo de cinco años, de 1995 al 2000, amplían la cobertura de su empresa, incursionando en la industria textil, sobre todo en aquellos pueblos aledaños a la ciudad de Toluca que se dedicaban a la producción de mezclilla. Se trató de un buen momento para la empresa, pues la evidente actividad económica de esos pueblos les permitió entrar en una nueva etapa del negocio. Construyeron una parte muy importante de la nave industrial (con todos los espacios requeridos por los diferentes procesos químicos) e iniciaron la construcción de sus oficinas.

El problema de esa actividad vino junto a la llegada de la mezclilla china, que poco a poco fue desplazando a la mezclilla local. Los pueblos que anteriormente se veían en pleno desarrollo económico, se fueron convirtiendo en pueblos fantasma. Si anteriormente veían incrementar los pedidos de sus productos químicos, sobre todo los que hacen el deslavado de la mezclilla, ahora apenas había ventas, y cada vez era más difícil cobrar a sus clientes. Evidentemente, los precios de los productos chinos, 50 % más baratos que los mexicanos, provocaron la quiebra de esa industria textil y nos cerraron un nicho de mercado que había dejado considerables utilidades.

El periodo que corre de 2000 al 2006, es un periodo bastante estable porque las utilidades fueron aumentando significativamente, y porque Yolanda buscó nuevos nichos de mercado. Ese fue el caso de las lavanderías que trabajaban para hospitales, hoteles y restaurantes, o directamente con esas empresas. Poco a poco fueron penetrando ese mercado, y conforme pasaba el tiempo, comenzaron a presentarse en licitaciones, que muchas veces eran pantallas, pues todo estaba decidido antes de los concursos. Es el caso de las dificultades observadas para entrar al IMSS, al Hospital Juárez, a la UNAM, donde todo, desde su perspectiva, está decidido con anterioridad. En muchas ocasiones les tocó que les avisaran un día antes de cerrar la convocatoria, solo para jugar como relleno. También hay casos de compradores que al conocer el precio de tu producto, por ejemplo de \$ 12.00, te piden que les factures al precio de \$ 32.00.

No obstante, en este último periodo avanzaron bastante bien en el campo de las licitaciones públicas, lo que se ha reflejado en la mejoría de las utilidades. Mismas que bajo la filosofía del ahorro, les permitió la construcción definitiva tanto de la nave industrial como de las oficinas, la compra de los vehículos que les permite atender eficientemente la

demanda de sus clientes, así como el ahorro personal que se va traduciendo en mejores niveles de confort.

Yolanda mantiene relaciones con la CANACINTRA, a pesar no ser parte formal de esa organización empresarial. No obstante, relaciones que cultivan desde años atrás, le han permitido estar informada de lo que sucede ahí, lo mismo que le permite ser invitada a los *círculos de empresarios*, donde ellos pueden ofrecer sus productos.

Para ella, al gobierno no le importan los pequeños y medianos empresarios, pues como se ha demostrado, solo le importan los grandes empresarios. Desprecian a CANACINTRA pero se desvive por su relación con el CCE. Considera que si el gobierno concediera a los pequeños y medianos empresarios tan solo el 1% de sus compras, la economía marcharía mucho mejor.

A los pequeños y medianos empresarios no les queda otra alternativa que mantenerse unidos, como en el caso de CANACINTRA, puesto que sólo así pueden superar el olvido del gobierno. Organizados y dirigidos por esa organización, a veces logran el apoyo técnico de instituciones de educación superior, como en el caso del IPN, la UNAM y la UAM.

Yolanda es una asidua lectora del periódico *La Jornada*, escucha indistintamente los noticieros de Gutiérrez Vivó, Carmen Aristegui, Granados Chapa o Ricardo Rocha, y normalmente ve el programa *Primer Plano*. Procura estar bien informada y siempre tiene una opinión respecto de lo que pasa en el escenario político nacional.

Respecto del PRI, considera que se trata de un partido que le hizo muchísimo daño al país, pues dejó una cultura de corrupción, por lo que el pueblo aprendió que “el que no tranza no avanza”, y por desgracia cambiar eso va a llevar mucho tiempo. Para ella, el PAN es lo mismo que el PRI, pero, en su opinión, son más voraces. El gobierno de Fox está marcado por la corrupción, el no hacer nada por la economía y el pueblo, y la vergüenza de tener un presidente que no guarda el menor respeto por la sociedad a la que representa.

En cuanto al PRD, lo considera un partido que hace honor a su lema de la esperanza. Para ella, al menos en el gobierno del Distrito Federal, se ha avanzado en el combate a la corrupción, pues los policías ya no son tan atracadores como en el tiempo en que ella se dedicaba a la compra-venta de naranja, cuando le entrabas o le entrabas.

### 2.3 *Aquiles: la historia de un guerrero.*

Nace en Uruapan, Michoacán, en 1942. Sus padres, oriundos del estado, deciden trasladarse a la Ciudad de México por las inquietudes que provocaba en la población la erupción del volcán Parícutín y el desconocimiento de las posibles causas. La numerosa familia busca formas para garantizar el sustento y, educados a partir de los principios del trabajo, *Aquiles* comienza a trabajar desde muy temprana edad. Vivía en una de las colonias populares del centro de la ciudad, y a los 12 años lavaba autos a las afueras de la fábrica de aparatos eléctricos *Philco Internacional*.

Con el tiempo fue ganándose las simpatías de los empleados que utilizaban su trabajo y veían con agrado el esfuerzo, la dedicación y la disciplina del adolescente, hasta que el jefe de personal le ofreció un trabajo de “office boy”. Además le dio un horario de 8:00 a 13:00 con la condición de estudiar por las tardes. Ello le permitió terminar la secundaria e inscribirse en un bachillerato técnico donde realizó estudios de contador privado. Al término del primer año de esa etapa, el director general de la empresa le ofreció un puesto como ayudante de costos en el departamento de contabilidad, lo que marcó el inicio de una larga carrera ejecutiva. Posteriormente, inicia los estudios superiores de contabilidad, actividad que combina con el trabajo. Sin embargo, a pesar de las cargas de trabajo que tenía, *Aquiles* gustaba de presenciar los exámenes profesionales que presentaban aquellos estudiantes que habían concluido sus estudios. Ahí observaba cómo los sinodales de los exámenes de titulación, profesores que daban clases en la institución en la que estudiaba, humillaban a los aspirantes de contador público. No podía evitar sentir pena ajena por aquellos compañeros que más que presentar un examen profesional, parecía que la prueba era aceptar las actitudes despóticas de los sinodales.

*Aquiles* sentía que sabía más contabilidad que esos soberbios sinodales, realizados con el solo hecho de humillar públicamente a los aspirantes al título de contadores públicos. Tal situación y las nuevas responsabilidades que asumió en la empresa trasnacional en la que trabajaba, le dieron la pauta para abandonar sus estudios y dedicarse de lleno a la carrera ejecutiva. Entre 1961 y 1964, se desempeñó como *Gerente de Costos*; de 1965 a 1968, como *Gerente de Análisis Financiero*; y a partir de 1969 solicitó al director general

de esa empresa el apoyo necesario para incursionar en la actividad de las ventas, dado que la contabilidad había dejado de llenar sus expectativas.

Las ventas no solo representaban un reto profesional en su carrera ejecutiva, sino también la posibilidad de incrementar significativamente sus ingresos. Se trataba de la actividad más importante de la industria, pues según sus propias palabras: *para cualquier empresa, independientemente de su giro, sin ventas, está destinada a la quiebra.*

En dicha actividad se desempeñó como supervisor de ventas; luego como gerente de ventas y finalmente como director comercial a partir de 1970. De tal manera que en un lapso de 6 años, logró que a la Philco, tuviera una presencia en el 25% del mercado de la electrónica. En 1976, *Philco Internacional* decidió vender la empresa en México, al *Grupo Alfa*, uno de los cuatro grupos en que se dividió el grupo empresarial de la familia Garza Sada a la muerte de éste.

Aquiles encontró un mundo empresarial completamente nuevo al quedar momentáneamente inmerso en una cultura empresarial muy diferente a la que se acostumbraba en Philco. En el *Grupo Alfa* los altos ejecutivos rendían pleitesía a los jóvenes egresados de Instituto Tecnológico de Monterrey, de tal manera que ni su experiencia ni su buen manejo del inglés le sirvieron para mantenerse en la empresa. Sin embargo, corrió con “la suerte” de que Vázquez Raña lo invitó a incorporarse a la *Compañía Hermanos Vázquez* como *director comercial*, en ese mismo año de 1976.

Al poco tiempo de hacer este cambio, recuerda, el 31 de agosto de 1976, Mario Ramón Beteta, Secretario de Hacienda, anunció la devaluación del peso. De \$ 12.49 por dólar, pasó a \$ 25.00 M.N. Situación que aprovechó para beneficios de las ventas, pues se había prevenido comprando mercancía que equivaldría el día de hoy a 200 millones de pesos. Además, había propuesto una nueva política de remuneraciones para los vendedores, donde se tenía previsto, incentivos, bonos, comisiones y reparto de utilidades. Política que se reforzó a través del éxito de la empresa al vender al precio más bajo del mercado, situación que permitió proyectar la imagen de la empresa e incrementar en un 20% el precio de venta. Esto fue posible por la agresiva campaña publicitaria que a la fecha mucha gente recuerda.

Para 1978, Diego Sada, director general de *Alfa Industrias*, lo llama para explorar la posibilidad de que se incorporara nuevamente al grupo. Su posición dentro de *Hermanos*

Vázquez le permitió negociar una buena contratación, misma que se concretó en junio de ese año, como director comercial de Philco, en el momento que el *Grupo Alfa* estaba comprando las empresas de la competencia: *Admiral*, *Magnavox* y *Radson*. En ese nuevo puesto, Aquiles se mantiene hasta 1981, momento en que la dirección general de la corporación le propone que se haga cargo de la dirección general de la empresa regiomontana *Transporte López e Hijos*. Se trataba de una empresa que poseía camiones “pipa”, dedicadas al transporte de Diesel. A mediados de 1982 el *Grupo Alfa* entra en una fuerte crisis (recibe crédito de Banobras por 5 000 millones de dólares) por lo cual le piden que venda la empresa.

En 1983, Hank Rhon lo contrata como *director general* de su compañía de transportes (“pipas” transportadoras de Diesel y gasolina). Se trataba de una empresa muy complicada, pues los chóferes, principalmente, tenían un sindicato muy fuerte, el cual usaban constantemente para negociar su situación personal, normalmente ensombrecida por sus adicciones, y en general por “una cultura mexicana” a partir de la que justificaban “sus compromisos emocionales” a lo largo de las rutas que normalmente recorrían. Se recreaba un círculo a partir de los retrasos que provocaba sus relaciones, y la necesidad de recuperar el tiempo viajando innecesariamente de noche, lo cual podían hacer porque tomaban drogas para aguantar las desveladas. El cúmulo de cansancio provocaba un alto índice de accidentes que sólo el sindicato y los abogados de la empresa podían resolver.

Fueron tiempos muy duros. A Aquiles le tocó resolver el conflicto derivado de un intento de despido de trabajadores que constantemente se veían implicados en accidentes, y que por tanto, costaban mucho a la empresa. El sindicato se movilizó y con el apoyo del PSUM (Partido Socialista Unificado Mexicano) y estudiantes de la Universidad de Puebla, secuestraron 20 “pipas” en el *Estadio Cuahutémoc*. Las negociaciones fueron demasiado tensas y aunque Aquiles pudo resolver finalmente el conflicto, comenzó a pensar que lo mejor era independizarse y, por tanto, poner su propia empresa.

A finales de 1984 creó una empresa comercializadora dedicada a la venta por mayoreo de productos ferreteros. Su clientela se encontraba principalmente en el sector privado. Esta actividad lo llevó a una escalada que le permitió crear una comercializadora de aceros importados, la cual mantuvo junto a una nueva empresa de abasto alimenticio que atendía las necesidades de comedores industriales. Ya fuera el caso del comedor

ejecutivo de PEMEX, el comedor de empleados de GAMESA, ECO, así como los restaurantes de la colonia Condesa. A finales de 1989, el incumplimiento de un fuerte contrato con el gobierno, provocó el cierre de la comercializadora de acero.

A pesar de que mantenía su negocio de abasto alimenticio, la invitación de Abel Vázquez Raña para que Aquiles se incorporara como *vicepresidente comercial* del Grupo K2, representó la oportunidad de reincorporarse nuevamente a la actividad ejecutiva. Evidentemente, se retira de los negocios y reinicia su carrera ejecutiva a finales de 1990. Sus responsabilidades giraban, fundamentalmente, entorno a realizar compras en Estados Unidos, Europa y Asia, y mantener una campaña publicitaria que reposicionara a la compañía en el mercado, actividades que desempeñó hasta 1994. En ese momento viene el fraude bancario de Cabal Peniche, con quien Vázquez Raña se había asociado, lo que provoca un ambiente demasiado tenso e incierto. Razón por la cual se va replanteando la posibilidad de volverse a independizar.

A partir de 1995, reabre la empresa de abastecimiento alimenticio. En 1999, un viejo amigo, compañero de trabajo, era director general de *Topp* (empresa que remanufacturaba teléfonos inalámbricos, propiedad de un norteamericano) y lo invita a que abra un comedor en la fábrica donde trabajaban 280 obreros. Posteriormente, consciente de la experiencia que Aquiles tenía, le ofrece incorporarse como *director comercial*, puesto que desempeña de 2001 hasta 2003.

En 2004, cansado y con la certeza que su mejor opción se encuentra en manjar su propia empresa, se asocia con otro inversionista para abrir una comercializadora, actividad a la que se dedica hasta ahora. Desde entonces, su trato cotidiano es con profesionistas, ejecutivos o empresarios, muy jóvenes, preparados y con una nueva ética de negocios. A ellos atribuye que la corrupción haya disminuido. Sin embargo, considera que a pesar de su preparación, se trata de jóvenes que rápidamente serán sustituidos por otros más jóvenes y mejor preparados. Mientras el futuro de profesionistas de 40, 50 y 60, es de total incertidumbre, sin la menor estabilidad en el trabajo. Para Aquiles, anteriormente no te daban el trabajo por ser muy joven, ahora no te lo dan porque estás viejo.

Aquiles se considera un ciudadano bien informado que sabe de política, y procura mantener disciplina para ello. Lee diariamente el periódico *Reforma*, “*de pe a pa*” y escucha el noticiero de *Hoy por Hoy*, que conduce Carmen Aristégui en las mañanas, a

pesar que, según él, sea tan tendenciosa. Sin embargo, evita escuchar a Pedro Ferriz de Con, ya que piensa igual que él y se siente un claro enemigo de AMLO. Además lee el semanario *Proceso y Poder*, revista empresarial. Por las noches procura evitar ver noticieros, por lo que solo busca relajarse y pasar el tiempo.

Para Aquiles, López Mateos podría ser considerado como un buen presidente, lo mismo que Gustavo Díaz Ordaz, a pesar de lo del 68'. Sin embargo, el PRI es el causante número uno de la crisis, y a pesar que el PAN ha hecho un pésimo papel, considera, los mexicanos nos hubiéramos sentido muy frustrados si en el 2000 no se hubiera sacado de *Los Pinos* al partido oficial. Pero la experiencia ha mostrado que *“tanto son corruptos unos como otros”*.

Para Aquiles, *“la política es una mierda y los políticos en vez de servir a la sociedad se sirven ellos mismos”*. Antes de las elecciones de 2006, se vislumbraba, dice, un triunfo del PRD, pero en realidad los líderes de los cinco partidos que competían por la presidencia, eran unos vividores de la política: *“lo único que les importa es el dinero y contar con el fuero para defenderse por alguna fechoría”*. Para mi, dice, el PRD es un partido compra-votos, pues ofrece un aumento de 20% en efectivo, lo que creará inflación al soltar tanto dinero. *“Estoy convencido que AMLO es un peligro, es un abusador de la ignorancia y la pobreza. Y es de llamar la atención que a la gente le guste que López Obrador ataque al presidente de la república”*. También considera que nuestra sociedad vive en pleno desorden, producto de la ineficiencia de nuestro gobierno: *“A los macheteros de Atenco no los meten a la cárcel a pesar que hacen desorden, provocan y atacan a la policía. Ni siquiera los deberían de encarcelar, en su lugar yo los mandaría matar”*.

Respecto a las *cámaras empresariales*, considera que solo *“son instrumentos para los grandes empresarios, que utilizan a esa organización para mejorar su posición, pues todos los directivos son competidores y luchan unos contra otros en el mercado. Si yo puedo evitar pertenecer a una organización empresarial, seguro que lo hago, nunca he sentido que me representen o que hagan algo positivo por los empresarios pequeños como yo”*. En cuanto a los *spots* que el CCE tuvo en la última etapa de la campaña electoral de 2000, consideró que deberían ser honestos y decir abiertamente con cuál partido político están. Es obvio que están en contra de AMLO.

## 2. 4 Armando: sobreviviente del tsunami globalizador.

Nació en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en 1947, hijo de una familia de clase media con acendrados valores morales que exaltan la disciplina y la responsabilidad del trabajo. Armando realizó estudios de *contador público* y todavía dos años antes de terminar la licenciatura, se incorporó como *contador de costos* en Selmec, una empresa que se dedicaba a la producción de subestaciones eléctricas. En ese trabajo consolidó su formación contable y sintió la grata experiencia de ser autosuficiente; sin embargo, justo al terminar sus estudios universitarios, se incorporó como *administrador regional*, en el Plan Nacional Cañero (INDECO), en la ciudad de Cardel, Veracruz. En ese instituto se mantuvo tan solo 5 meses, pues no le gustó el ambiente de trabajo. Según narra, había demasiada “política”; la gente siempre andaba quedando bien con los jefes. El dinero se tiraba de la manera más fácil, sobre todo a fin de año, con eso del presupuesto, el dinero se tenía que emplear en cualquier cosa, para que al siguiente año no se viera afectado el presupuesto asignado. Además, había demasiado dispendio, chofer y vehículo “oficial” para todos aquellos que teníamos un cargo de autoridad, gente que todo mundo sabía que no hacía absolutamente nada, y que su trabajo se consagraba con el solo hecho de asistir al instituto.

En 1972, se casa y decide trasladarse al Distrito Federal con el objeto de buscar trabajo, mismo que rápidamente encuentra en una de las empresas textiles más pujantes del momento, una empresa textil que se dedica a la producción de ropa interior y ropa de vestir, fundamentalmente para hombres. En esa empresa inicia su trabajo como *contador de costos* y con el transcurso de los años alcanza el puesto de *contador general*. Más tarde, le ofrecen la posición jerárquica más importante de la empresa que era la de *administrador*.

Se trataba de una empresa familiar, propiedad de dos judíos, que poco a poco iban incorporando a sus hijos en las diferentes áreas de la empresa, al frente de las fábricas de hilados (producción de tela), corte y confección (producción de prendas de vestir) y la venta. Ya con la posición de administrador general tuvo la oportunidad de conocer a fondo el proceso productivo de la industria textil, además de aprender las peculiaridades del mercado, donde prácticamente no existía competencia, pues apenas se escuchaban otras marcas en la producción de prendas de vestido interior, como era *Rimbros* y *Trueno*.

No obstante las excelentes condiciones que presentaba el mercado, los problemas

familiares comenzaron a provocar conflictos en el manejo de Zaga. Todos se querían meter en todo; se adoptaban malas políticas de desarrollo, producción y comercialización. Vale recordar que la empresa tenía una amplia y compleja red de distribución y venta, misma que se consolidaba por las franquicias de las tiendas lo que permitía lograr una presencia muy significativa a nivel nacional. Por otra parte, se tenían cinco plantas de producción como eran los casos de las fábricas de Jilotepec, Lerma, Naucalpan, Iztapalapa y Nativitas. La empresa albergaba a 2500 empleados aproximadamente, quienes se abocaban a la tarea de la producción y la venta por mayoreo y menudeo.

Después de 25 años de trabajo, en 1997, Armando enfermó de cáncer y su situación de salud fue demasiado delicada a lo largo del primer año. Los dueños de Zaga estaban muy desconfiados de que se pudiera incorporar y cumplir con las responsabilidades que el tenía a su cargo, y fue despedido con una negociación que le permitió obtener una liquidación un poco mayor a la establecida por Ley. El pago de la liquidación fue hecho a plazos, no sin forzar el cumplimiento de la negociación, pues los judíos *“son muy buenos para cobrar, pero difíciles para pagar”*.

Sin embargo, un año antes de enfermarse había iniciado un negocio de fabricación de playeras que prácticamente compraba, en su totalidad, Zaga. Y a pesar de conocer perfectamente el proceso de producción textil, Armando se apoyaba con maquiladores que le entregaban el producto de cada una de las etapas de la producción. Compraba la tela, la daba a una fábrica que maquilaba el corte y la confección de las prendas. Con su enfermedad enfrentó un problema: uno de sus maquiladores le robó 12 000 playeras, que ya no pudo recuperar. No obstante la pérdida, y ya en franca recuperación de su salud, comenzó a buscar entre los mismos clientes que conocía cuando trabajaba en Zaga y entre ellos comenzó a crearse su espacio en ese nicho de mercado. También tuvo el cuidado de ir comprando maquinaria usada, que fue acumulando mientras puso un punto de venta en la calle de Isabel La Católica, lo que permitió a partir de un traspaso poner una tienda que hasta la fecha tiene.

El paso siguiente fue poner un taller de confección en la colonia Portales, con las máquinas compradas y apoyado en los maquiladores en varias etapas del proceso de producción. La suerte no le sonrió y un lunes, al inicio de sus actividades, se encontró con el taller totalmente vacío: nada de maquinaria, materia prima, productos terminados, nada.

Y después de la depresión, prácticamente tuvo que iniciar de nuevo, basado otra vez en el trabajo de la maquila. A pesar de las circunstancias que no le eran muy favorables, no se doblegó y continuó comprando maquinaria usada para levantar nuevamente una fabriquita de acabados, apoyándose en la buena venta que tenía la tienda del centro de la Ciudad de México. De hecho, el negocio continuó desarrollándose; los clientes seguían aumentando, hasta que se incorporó a la empresa su hijo, quien había estudiado la carrera de Ingeniero químico en la UNAM, en el año 2000. Fernando se hizo cargo de la tienda de la calle de Isabel La Católica, la que rápidamente registró un aumento en las ventas, situación que se unió al hecho que como años atrás, Armando contara nuevamente con la maquinaria requerida para levantar una fábrica de acabado y teñido, misma que creció paralelamente a una de hilado y teñido, de la que Fernando se hizo cargo, y para lo cual rentaron una nave industrial donde fueron instalando poco a poco la planta. El problema radicaba fundamentalmente en que se trataba de maquinaria usada que compraron en los Estados Unidos, que normalmente venía sin planos, sin cables, y que muchas veces había que adaptar a las condiciones de la planta que estaban levantando. Esto fue la prueba de oro, dice, Armando, para la creatividad mexicana.

Fue hasta el 2003, cuando se dio inicio a otra actividad. El taller de tejido que tenía en la colonia Portales, la pasó a los Reyes La Paz, en los alrededores de Texcoco. Esto permitió incrementar considerablemente su capacidad productiva, pero además fue posible diversificar más la actividad. Ahora podían teñir tela, venderla, diseñar y confeccionar prendas terminadas. Es decir, cubrir todas sus necesidades de producción y venta, hasta maquilar cualquier parte del proceso textil.

En ese mismo año, se incorporó su hija Erika, quien había estudiado la licenciatura en psicología en la Universidad intercontinental. Ella se hizo cargo de la administración, y de la producción de prendas, el control de los proveedores, los clientes, el manejo de personal, etc. La empresa continuó creciendo y en 2006, se encuentra con el proyecto de abrir otros puntos de venta en Querétaro y Monterrey, a lo que seguirán otras importantes plazas de la República mexicana. Desde dos años atrás han ido comprando maquinaria nueva. De hecho, la más moderna de la industria textil. Además, desde el año 2005, adquirieron un terreno en Chicoloapan, mucho más grande que la fábrica de acabado de telas, proceso que tiene un claro fundamento químico, y que exige una planta más grande y

mejor planeada que la que tenían hasta entonces. Sin embargo, la renta de una nave sirvió para concretar el desarrollo que tuvieron hasta 2005. Hoy cuentan con 42 empleados que trabajan los tres turnos: matutino, vespertino y nocturno.

Para Armando, el Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia a partir de 1994, permitió el desarrollo de los pequeños empresarios como él, pues las grandes empresas textiles que manejan marcas como Óptima, Yazbeck y MO, se dedicaron a atender el mercado norteamericano, lo que propició que descuidaran el mercado nacional, situación que fue aprovechada por las “marcas Chicas”. De hecho, ahora que regresan los grandes empresarios textiles al mercado nacional, ellos constituyen la principal competencia para los empresarios menores, y no los productos chinos, como normalmente se piensa. Sin embargo, hay que considerar, dice Armando, que los chinos desplazaron a los grandes empresarios textiles mexicanos del mercado norteamericano. Para él, la crisis de la industria textil comienza en 2002, cuando se introducen las playeras chinas; después, cuando llegan prendas de Pakistán. No obstante, la empresa de Armando es lo suficientemente competente como para defender el nicho de mercado que viene explotando desde 1998, y más aún, aspira a abrir cuando menos una gran tienda en los Estados Unidos. Sus esfuerzos no cesarán hasta ver colmadas esas fantasías que recrea desde el inicio de este siglo.

Para Armando, su principal aprendizaje fue la experiencia que vivió en *Zaga*, sobre todo por que tuvo oportunidad de conocer el proceso productivo de la industria textil, la cantidad de clientes con los que tuvo contacto, y en general, la experiencia de haber conocido minuciosamente el mercado de esa rama industrial. Por otra parte, también, considerando los antecedentes de la empresa familiar que era *Zaga*, le ofreció una clara idea del tipo de manejo que tendrían al momento de incorporarse sus hijos a la empresa. Evidentemente, dejarles perfectamente definido el tipo de actividad y responsabilidad que desempeñaría cada uno de ellos, de hecho, considera fundamental la incorporación de ellos como elemento determinante para elevar la capacidad productiva de la empresa, a partir de un desempeño cifrado en la eficacia y la eficiencia, misma que se consolidó por la capacidad profesional de ellos dos. Su proceso de aprendizaje empresarial se enriqueció más a partir de los retos que sus hijos han ido proponiendo y resolviendo en la práctica.

Armando lee diariamente el periódico *Reforma*, entre semana escucha

indistintamente los programas radiofónicos de Gutiérrez Vivó, Carmen Aristegui, José Cárdenas, Gilly.... Y procura ver CNN en español. A él no lo interesa la política, pues le da mucha pena el papel que desempeñan los políticos, así como los juegos del poder en el que entran los partidos. Tampoco le interesa lo que hagan o dejen de hacer las *cámaras empresariales*, las cuales, junto con otras instituciones gubernamentales como es el caso del Banco de Comercio Exterior, no sirven para nada. Solo representan un estorbo y un gasto suntuario innecesario. No obstante, siempre ha ejercido su derecho ciudadano del voto y procura estar lo mínimamente informado sobre lo que sucede en el país y el mundo, sobre todo lo que pudiera afectar su actividad empresarial.

## 2. 5 *Luis: tejiendo con los hilos del arte, la ciencia y los negocios.*

Nació en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en los años 30. La ciudad no contaba con desarrollo alguno; no había industria. La vida era fácil pues la gente sólo tenía que caminar un poco, y encontraba con que alimentarse. Se podría decir que la vida era pobre pero feliz.

Hijo de una familia que poseía una finca cafetalera, aprovechó el impacto que tuvo la presencia de la Universidad Veracruzana, pues ello permitió la concentración de una gran variedad de veracruzanos, que acudían desde las proximidades de la región a realizar estudios superiores, así como una compleja vida cultural que caracterizó a la sociedad jalapeña desde ese entonces. Además, la migración española a raíz de la guerra civil, alentó la reproducción de una gran riqueza intelectual que coadyuvó a ofrecer oportunidades a los talentos nacionales, artísticos, intelectuales o científicos. En los años cuarenta, comienzan a emerger diversas organizaciones estudiantiles, se comienza a conocer al estado no solamente a través del turismo, sino a través del trabajo universitario, lo cual permite levantar un inventario físico, socioeconómico y cultural. El desarrollo de la universidad adquiere una dinámica *cuasi* revolucionaria.

En los años cincuenta, la universidad estatal sufre una profunda transformación. La figura departamental pasaba a tomar forma a partir de facultades universitarias, la modernización de las estructuras permite convertir a las escuelas en facultades. Surgen la Facultad de Ingeniería, Arquitectura, Economía, Pedagogía, Medicina, Música, sociología,

Filosofía, Derecho, Ciencias Químicas, siempre dirigidas por directores que fueron egresados muy brillantes y, que por tanto, gozaban de un prestigio social que ayudó a las diferentes gestiones universitarias.

Por otra parte, no todo se centraliza en Jalapa, sino que se crea una red regional a partir de las escuelas preparatorias que funcionan como apéndices de la universidad, lo cual garantiza y promueve la incorporación a las diferentes facultades. Eso garantiza una explotación racional del potencial intelectual del estado. La Facultad de Arquitectura comienza a obtener premios nacionales e internacionales, y favorece al apogeo del que comenzó a gozar la universidad, y en general la vida cultural de Jalapa.

Por su parte, él recibe clases particulares de música con excelentes maestros. Además de una compleja educación sobre la historia del arte que en la interpretación de Carlos Pellicer, quien fue su profesor durante mucho tiempo, establecía siempre una vinculación con la historia universal. En ese tiempo existía la vieja sinfónica de Jalapa, que normalmente daba entre tres y cuatro conciertos al año, lo que motivó a don Luis a iniciar un movimiento cultural que impulsó la renovación de la sinfónica. A partir de ello, él quedó como *subdirector de la Orquesta*, mientras José Limantour ocupa la dirección de la misma, más por su prestigio social que por sus cualidades artísticas.

En ese proceso sociocultural, lo que más interesa a Don Luis es transformar en el imaginario social el concepto de bohemio, sustituyéndolo por el de artista, de tal manera que su vida cultural no se restringe necesariamente a su actividad como subdirector de la orquesta sino que forma parte sustancial de la generación de intelectuales más representativos de la sociedad jalapeña. De hecho, sus inquietudes intelectuales lo llevan a estudiar la carrera de *Ingeniero Químico*, título que obtiene en 1954. Dicha formación la adquiere siguiendo los programas de estudios y presentando los exámenes extraordinarios correspondientes, puesto que la parte más importante de su tiempo la dedicaba a la música y a la administración de la finca cafetalera de la familia. Esta actividad le permitió observar las condiciones de vida de los campesinos, e hizo lo que estuvo de su parte para mejorar sus condiciones, como fue el comprometerse a dar gratuitamente funciones diarias de cine en el pueblo de San Marcos, donde se vivía la mayor parte de los trabajadores que él contrataba, y que en todo caso beneficiaba a la comunidad de ese poblado y los alrededores. Esta actividad cultural que ofrecía a sus trabajadores, era solo una prueba del compromiso que

desde joven tuvo con sus trabajadores, pues siempre se preocupó porque tuvieran una subsistencia que resolviera las angustias en la época del año que no había trabajo. Don Luis tenía la política de prestarles dinero a sus trabajadores, para que resolvieran sus problemas más inmediatos, pero lo entregaba a las señoras, a pesar de la protesta de ellos, pues le discutían que así los ponía a disposición de lo que quisieran las mujeres.

Esa actitud patronal en cuanto a la relación con sus trabajadores, también se reflejaba en el compromiso probado con los músicos de la orquesta de la cual primero fue subdirector, pues con la producción de la finca financiaba, cuando menos el 30 % de la nómina. La orquesta contaba con un número aproximado de sesenta músicos. Esto le daba cierta autoridad moral, pues la gente sabía perfectamente que se trataba de un dinero producto de un trabajo honesto, de dinero bien habido. *No como en el caso de Slim, señala don Luis, que apoya el Teatro pero tienen que ser propiedad de él, ayuda al centro de la ciudad de México, pero en la medida que ahí tiene una importante inversión.*

Don Luis también se da a la tarea de recolectar el dinero necesario para construir el Teatro estatal de la ciudad de Jalapa, a lo que siguió su viaje a Europa, para realizar estudios de música. En la ciudad de Lucerna realiza estudios de instrumentista de violín, lo que le permite obtener la licenciatura en música. En 1956, en la ciudad de Salzburgo, inicia estudios de maestría y luego de doctorado en dirección de orquesta, al mismo tiempo que realiza estudios de doctorado en química en la Universidad de Tel Aviv, actividad que tuvo que financiar con los recursos que ofrecía la finca familiar.

A su regreso a la ciudad de Jalapa, la orquesta comienza a constituirse en un icono del estado de Veracruz, pues comienzan a ofrecerse conciertos gratuitos en escuelas, hospitales, cárceles, mercados, iglesias, lo que posibilita trasladar a la universidad en algo cercano a la sociedad donde se inscribe. La influencia de la Orquesta de la Universidad de Jalapa comienza a ser un ejemplo a nivel nacional. Se crean la orquesta de Guadalajara, la de la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Guanajuato y Saltillo, entre 1949 y 1950. Todos los músicos de la Sinfónica de Jalapa, son músicos de tiempo completo, con salarios decorosos, condiciones que las demás sinfónicas comienzan a imitar.

Desde finales de los años sesenta funge como director de la Sinfónica, y para 1973 la orquesta era la única en el mundo que era autosuficiente. La estrategia que don Luis encontró para alcanzar tal objetivo, fue el organizar una cooperativa que adquirió una

fábrica de bolsas de polietileno, misma que él se encargó de modernizar hasta hacerla totalmente rentable. Al grado de subsidiar tanto la nómina como todo tipo de gastos de la orquesta, lo cual les permitió aumentar la oferta de conciertos gratuitos que siempre estaban dispuestos a cumplir. Ello les permitió tener una relación muy fluida con el gobierno del estado de Veracruz, pues los gobernadores en turno sabían perfectamente que cuando la sinfónica tocaba a su puerta, no era para pedir, sino para ofrecer, proponer, promover la vida cultural del estado, así como del país mismo.

Esa experiencia ampliada que adquiría la sinfónica, es decir, del arte a los negocios, a la administración de la fábrica de bolsas de polietileno, le permitió, entre otras cosas, observar que las cualidades de los músicos nos solamente se materializaban en el manejo de su instrumento, sino también en la capacidad para administrar los negocios, considera don Luis, una capacidad mucho mayor que un contador público o un administrador.

En 1974, Don Luis llevó la Sinfónica a Cuba, donde en su estancia tuvieron la oportunidad de entrevistarse con Fidel Castro, en un encuentro considerado para 15 minutos, entrevista que finalmente duró 3 horas, pues cuando el comandante se entera de las formas que han experimentado para mantenerse financieramente, se interesa en que le narren los matices de su experiencia. Su sorpresa fue mayor cuando don Luis le reseñaba los pormenores de cómo perdieron la oportunidad de crear una ciudad obrera en el centro de la ciudad de Guadalajara donde se encontraba la fábrica de polietileno. Pues a pesar de contar con un terreno de 25 000 metros cuadrados en el centro de esa ciudad, con un crédito de 100 millones de pesos, con la participación de pedagogos, trabajadores sociales y psicólogos, además de ampliar la cooperativa pues ya habían incorporado al sastre que hacía el vestuario de la sinfónica, el proyecto se cayó por las intrigas de la CTM y los conflictos de las esposas de los músicos.

No obstante el éxito de la orquesta, don Luis deja la música en 1980, un tanto desencantado por las formas políticas como se reproducía el poder desde entonces, para dar un giro a la principal actividad que le consumía los días. Y ello tiene que ver con la otra de sus grandes pasiones: la química. Su pasión siempre fueron los diamantes, por lo que en los años cincuenta, cuando realizaba estudios de maestría y doctorado en química, aprendió a hacerlos crecer, descubriendo “accidentalmente” un plasma químico que resolvía el problema de cubrir una superficie metálica, silicio sobre aluminio, fórmula que dio origen

para que después se produjeran los *chips*. En ese tiempo se hizo muy amigo del Dr. Frank Mc. Milan, Vicepresidente de Motorola Internacional, quien en esos momentos estaba inventando un *fotomasking*, con lo cual se divide una superficie de un *wafare* (división de memorias).

De hecho, el gran conocimiento que tiene Don Luis en el manejo del silicio y los diamantes, le permitió encontrar la forma de hacer crecer la estructura del diamante a través del manejo de un plasma químico. Fórmula que patenta en 1992 y que tiene la utilidad general de controlar el problema de la corrosividad en un contexto internacional de fuerte deterioro ecológico. Por otra parte, don Luis considera que en los años noventa terminó la era del acero, pero que sin embargo, la ciencia todavía no encontraba la forma de protegerlo del efecto de la corrosividad. En ese año, Don Luis proclama en la Universidad de Phoenix, Arizona, el descubrimiento de su fórmula, una combinación de níquel, cobalto y boro, serie de propiedades similares a la de los metales preciosos, y a través de los cuales, después de realizar muchas pruebas de alta conductividad, mucho más alta que la de la plata, se obtiene una reflectividad extraordinaria, de mayor capacidad catalítica que el platino, a un precio razonable y competitivo. Éxito de su descubrimiento que le permitió patentar la fórmula en 1992, en Estados Unidos, Japón, Unión Europea, Australia y México.

A partir de esa patente, creó desde ese año una empresa dedicada a recubrir de un material anticorrosivo las piezas de acero de uso industrial. Desde el inicio de sus operaciones, la empresa se dedicó a realizar pruebas para PEMEX. Primero, y durante un año, contrario a la práctica usual, se ensayaron pruebas técnicas con los trabajadores, no con los responsables de las compras. Y conforme se dieron cuenta que se trataba de un material mucho más fácil de usar, que no ensuciaba, el producto fue teniendo cada vez más aceptación. Curiosamente, a pesar que el producto sería de considerable utilidad para otras industrias, por ejemplo, en las fábricas de hidrógeno, en la industria automotriz se podrían fabricar cilindros que ya no requerirían el uso de aceite en los motores; en la industria eléctrica en la fabricación de transformadores, etc. Pero el único cliente de la empresa de don Luis ha sido PEMEX.

Como sugiere la trayectoria de don Luis, está latente que el deber del quehacer científico se traduce en ingenio y creatividad tiene que traducirse en la producción de bienes o servicios que tengan aceptación en el mercado, que tengan una utilidad asequible.

Pues de nada sirve que los científicos posean cosas increíbles, pero sin ningún tipo de utilidad que ayude a la sociedad.

Para él, Luis Echeverría fue un excelente presidente por el gran sentido de lo social que lo caracterizó; mientras en López Portillo su gran capacidad intelectual rápidamente mostró grosera superficialidad ya que no logró hacer algo realmente positivo por el proyecto nacionalista que llegó en su sexenio a su fin. Por otra parte, y claramente diferenciado de los dos presidentes anteriores, el gobierno de De la Madrid dio puerta a la apertura del mercado. El problema que realmente enfrentamos, según don Luis, no fueron los nuevos escenarios de competitividad que enfrentó el país, sino “*la hipocresía de los pactos sociales donde solo los trabajadores soportan la carga de la crisis*”. Esto, agregado a un gravoso cierre de empresas y las devaluaciones, demostró la verdadera cara de un proyecto desnacionalizador. Y por desgracia para todos, esa misma racionalidad ha imperado hasta hoy día en el gobierno de Fox, que no parece que varía sustancialmente con la llegada de Felipe Calderon.

Para don Luis, las cuestiones que más han afectado a su empresa, son: el IMSS, el SAR, el INFONAVIT “*que en realidad son unos perros corruptos*”. Por otra parte, considera que NAFINSA actúa de “*una manera extraña*” con el sector al que aparentemente debe servir. En 2004 y 2005, estuvo a punto de quebrar porque esa institución no le concedió un crédito de 2 millones de pesos que estaba respaldado con un contrato de 25 millones de pesos. Es una mentira que apoyan a las pequeñas y medianas empresas. Para él, el gobierno de Fox es un vergonzoso fraude donde el famoso *cambio* no es más que un cambio de manos cada vez más ineptas.

Don Luis dedica entre 4 y 5 horas a los medios masivos de comunicación, donde destaca su atención a la lectura del periódico *Excelsior*, al noticiero de López Doriga en el canal 2 y el noticiero de canal 11, además del noticiero de radio fórmula que se pasa en televisión privada, y también acostumbra seguir atentamente el canal 10 de la Cámara de Diputados.

Respecto al futuro de su empresa, y sobre todo de las condiciones y futuro de sus trabajadores, don Luis señala que ellos tienen un ingreso fijo, además de premios por asistencia y disciplina, así como reconocimientos económicos de productividad. Además, vales de despensa, y en lugar del 10% de las utilidades, les otorga el 1% de las ventas, para

que ellos hagan conciencia de lo importante que es la calidad de la producción. La utopía que actualmente ronda su cabeza, gira entorno a la idea de crear un fideicomiso, creado con base en un manejo más racional del pago de impuestos, que le permita becar a sus trabajadores, para sus hijos vayan a la universidad y salgan adelante, y se conviertan rápidamente en egresados universitarios con empleo.

## Bibliografía

- Achache, Gilles (1997) “El marketing político”, en *El nuevo espacio público*, Gedisa, Barcelona.
- Abbagnano, Nicola (1961) *Diccionario de filosofía*, FCE, México.
- Abascal Carranza, Carlos (2002) “Visión humanista de la transición democrática en México” en Raúl Corral y Alfredo Rojas Díaz-Durán (coords.) *México en la aldea global*, UAM-I, México.
- Abélès, Marc (1990) *Anthropologie de l'État*, Clin, Paris.
- Adams, Richard N. (2001) *El Octavo día. La evolución social como autoorganización de la energía*, UAM-I, México.
- (1995) *Etnias en evolución social*, UAM-I, México.
- (1983) *Energía y Estructura. Una teoría del poder social*, FCE, México.
- (1978) *La red de la expansión Humana*, La Casa Chata, México.
- Adler-Lomnitz, Larissa, Rodrigo Salazar e Ilya Adler (2004) *Simbolismo y ritual en la política mexicana*, Siglo XXI-UNAM, México.
- Adler-Lomnitz, Larissa y Pérez Lizaur, Marisol (1993) *Una familia de la elite mexicana, 1820-1980. Parentesco, clase y cultura*, Alianza Editorial, México.
- Adler-Lomnitz, Larissa (1994) *Redes sociales, cultura y poder. Ensayos de antropología latinoamericana*, M.A. Porrúa/FLACSO, México.
- (1975) *Cómo sobreviven los marginados*, S. XXI, México.
- Aguilar, Alonso (1983) *Estado, capitalismo y clase en el poder en México*, Nuestro Tiempo, México.
- Aguilar Camín, Héctor (1988) *Después del milagro*, Cal y Arena, México.
- Aguilar Camín, Héctor y Lorenzo Meyer (1989) *A la sombra de la Revolución Mexicana*, Cal y Arena, México.
- Aguilar Camín, et. al. (1982) *Cuando los banqueros se van*, Océano-Nexos, México.
- Alarcón O., Víctor (1999) “Teoría de partidos y sistema de partidos: ¿por qué leer a los clásicos contemporáneos”, *Revista Conmemorativa del Colegio*, CNCP y AP, A.C., México.
- (1996) “La reforma gubernamental en los Estados Unidos”, *Propuesta*, núm. 3, agosto, México.
- Alba, Carlos (2005) “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 10 años después. Balance y perspectivas para México” en Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso (coordinadores) *El Estado Mexicano. Herencias y cambios, T. I Globalización, poderes y seguridad nacional*, Ciesas/M. A. Porrúa.
- (1994) “Problemas de la reforma macroeconómica en las empresas industriales mexicanas” en Ricardo Tirado (coordinador) *Los empresarios ante la globalización*, IIL-IIS/UNAM, México.
- (1992) “Las regiones industriales y los empresarios de México” en Cristina Puga y Ricardo Tirado (coord.) *Los empresarios mexicanos, ayer y hoy*, UNAM/Comesco/El Caballito, México.
- Alba, Carlos y Kruijt, Dirk (1988) *Los empresarios y la industria de Guadalajara*, Colegio

- de Jalisco, Guadalajara.
- -Coords- (1988) *Historia y desarrollo industrial en México*, CONCAMIN, México.
- (1991) “La burguesía industrial de Guadalajara” en Ricardo Pozas y Matilde Luna (coords.) en *Las empresas y los empresarios en el México contemporáneo*, Grijalbo, México.
- Alcázar, Marco Antonio (1970) *Las agrupaciones patronales en México*, Colmex, México.
- Alonso, Jorge (2005) “Los partidos y el Estado” en Jorge Alonso y Alberto Aziz Nassif –coords.- *El Estado Mexicano. Herencias y cambios, T. II Economía y política*, Ciesas/M. A. Porrúa.
- (1996). “La reforma democrática del Estado mexicano”, *Revista Propuesta*, núm. 3, agosto, México.
- (1992) “Introducción. Cuestionar al Estado”, en Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime Tamayo -coords.- *El nuevo estado mexicano. I. Estado y economía*, Nueva Imagen, México.
- (1982) *El estado mexicano*, Nueva Imagen, México.
- Alonso, Jorge y Alberto Aziz Nassif -coordinadores.- (2005) *El Estado Mexicano. Herencias y cambios, T. I Globalización, poderes y seguridad nacional*, Ciesas/M. A. Porrúa.
- (2005) *El Estado Mexicano. Herencias y cambios, T. II Economía y política*, Ciesas/M. A. Porrúa.
- (2005) *El Estado Mexicano. Herencias y cambios, T. II Sociedad civil y diversidad*, Ciesas/M. A. Porrúa.
- Alonso, Jorge, Alberto Aziz y Jaime Tamayo -coords.- (1992) *El nuevo estado mexicano. I. Estado y economía*, Nueva Imagen, México.
- (1992) *El nuevo estado mexicano. II. Estado y política*, Nueva Imagen, México.
- (1992) *El nuevo estado mexicano. III. Estado, actores y movimientos sociales*, Nueva Imagen, México.
- (1992) *El nuevo estado mexicano. IV. Estado y sociedad*, Nueva Imagen, México.
- Alonso, Jorge y Manuel Rodríguez (1990) “La cultura política y el poder en México” en Hugo Zemelman (coordinador) *Cultura y política en América Latina*, S.XXI, México.
- Alonso, Jorge y Tamayo, Jaime –coords.- (1994) *Elecciones con alternativas. Algunas experiencias en la república mexicana*, La Jornada-UNAM, México.
- Alvar, Manuel (1987) *El lenguaje político*, FFE, Madrid.
- Amin, Samir (1997) *Los desafíos de la mundialización*, S. XXI, México.
- Anguiano, Arturo (1990) *La modernización en México*, UAM-X, México.
- Armijo, E., Biersteker, T. J. y Lowenthal, A. (1995) “Los problemas de las transiciones simultáneas”, *Este país*, Núm. 47, febrero, México.
- Arredondo R., Pablo (1992) “El estado y la comunicación. Dilemas frente a un proyecto modernizador” en Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime Tamayo (coords.) *El nuevo estado mexicano. IV Estado y sociedad*, Nueva Imagen, México.
- Arriola, Carlos (1991) *Los empresarios y la modernización económica de México*, Porrúa, México.
- (1988). *Los empresarios y el estado 1970-1982*, UNAM-Porrúa, México.

- (1981) "Las organizaciones empresariales contemporáneas", en *Lecturas de política mexicana*, Colegio de México, México.
- Augé, Marc (1994) *Pour une anthropologie des mondes contemporains*, Flammarion, France.
- Aziz Nassif, Alberto (2005) "Elecciones, abstención y dinero partidista en México" en Jorge Alonso y Alberto Aziz Nassif –coords.- *El Estado Mexicano. Herencias y cambios, T. II Economía y política*, Ciesas/M. A. Porrúa.
- (2003) "La construcción de la democracia electoral" en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer (coord.) *Una historia contemporánea de México: transformaciones y permanencias*, Tomo I, Océano, México.
- (1996) –coord.- *México: una agenda para fin de siglo*, La Jornada/CIICH/UNAM, México.
- (1994) –coord.- *Chihuahua: historia de una alternativa*, CIESAS/La Jornada, México.
- (1992) "México 1988: entre la herencia y la transición" en Carlos Martínez Assad –coord.- *La sucesión presidencial en México, 1928-1988*, Nueva Imagen, México.
- Bailey, F.G. (1970) *Las reglas del juego político*, Tiempo Nuevo, México.
- Balandier, Georges (1994) *El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación*, Paidós, Barcelona.
- (1994<sup>a</sup>) *El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales*, Gedisa, Barcelona.
- (1988) *Modernidad y poder. El desvío antropológico*, Jucar Universidad, Barcelona.
- (1975) *Antropo-lógicas*, Península, Barcelona.
- (1969) *Antropología política*, Península, Barcelona.
- Banton, Michael (1965) -éd- *Political systems and the distribution of power*, Tavistock, London.
- Bartra, Roger (1996) *Las redes imaginarias del poder político*, Océano, México.
- (1994) "La venganza de la Malinche" en Monsiváis, Del Val Piñon, *et., al., México: identidad y cultura nacional*, UAM-X.
- (1987) *La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano*, Grijalbo, México.
- (1982) "Adiós al nacionalismo" en Arturo Warman, Guillermo Bonfil Batalla, Enrique Florescano, *et., al., El desafío mexicano*, Océano/Nexos, México.
- Basáñez, Miguel (1992) "Encuestas de opinión en México" en Carlos Bazdresch, Nisso Bucay, Nora Lustig y Soledad Loaeza (compiladores) *México: auge, crisis y ajuste*, FCE, México.
- (1990) *El pulso de los sexenios. 20 años de crisis en México*, S. XXI, México.
- (1981) *La lucha por la hegemonía en México, 1968-1980*, S. XXI, México.
- Baudouin, Jean (1998) *Introduction à la sociologie politique*, Éditions du Seuil, Paris.
- Baudrillard, Jean (1992) *El sistema de los objetos*, S. XXI, México.
- (1980) *El espejo de la producción*, Gedisa, Barcelona.
- Bailey, F.G. (1971) *Les règles du jeu politique*, PUF, Paris.
- Bayrou, François (1996) *Le droit au sens*, Flammarion, Paris.

- Bazdresch, Carlos, Nisso Bucay, Nora Lustig y Soledad Loaeza –Comps.- (1992) *México, auge, crisis y ajuste*, FCE, México.
- Beck, Ulrich (2002) *La sociedad del riesgo global*, S. XXI. Madrid.  
 --- (1999) *Los hijos de la libertad*, FCE, Argentina.
- Bell, Daniel (1989) *El advenimiento de la sociedad post-industrial*, Alianza Universidad, Madrid.  
 --- (1987) *Las contradicciones culturales del capitalismo*, Alianza Universidad, Madrid.
- Benjamín, Roger (1991) *Los límites de la política*, Alianza Editorial, México.
- Bizberg, Ilán (2003) "Auge y decadencia del corporativismo" en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer (coord.) *Una historia contemporánea de México: transformaciones y permanencias*, Tomo I, Océano, México.
- Bohmann, Karin (1989) *Medios de comunicación y sistemas informativos en México*, Alianza Editorial, México.
- Bobbio, Norberto. (1995) *Derecha e izquierda*, Taurus, España.  
 --- (1989) *Estado, gobierno y sociedad*, FCE, México.  
 --- (1988) "Política" en Norberto Bobbio y Nicola Matteucci (coordinadores) *Diccionario de política*, S. XXI, 5ª. Ed., México.  
 --- (1987) *Teorías de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político*, FCE, México.
- Bolívar, Augusto (1990). "El período de la transición a la modernidad" en Augusto Bolívar y Rosalbina Garavito en *México en la década de los ochenta. La modernización en cifras*, UAM-A, México.
- Bonfil Batalla, Guillermo (1990) *México profundo. Una civilización negada*, Conaculta-Grijalbo, México.
- Bourdieu, Pierre (2000) *Intelectuales, política y poder*, Eudeba, Buenos Aires.  
 --- (1998) *Contre-feux. Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale*, Raisons d'agir, Paris.  
 --- (1995) *Respuestas por una antropología reflexiva*, Grijalbo, México.  
 --- (1994) *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Éditions du Seuil, Paris.  
 --- (1993) *Cosas dichas*, Gedisa, Barcelona.  
 --- (1991) *El sentido práctico*, Taurus, Madrid.  
 --- (1990) *Sociología y cultura*, CONACULTA-Grijalbo, México.
- Buendía, Manuel (1986) *Los empresarios*, Océano, México.
- Calderón, Fernando y Mario R. Dos Santos (1995) *Cultura, política y reestructuración económica en América Latina*, Paidós, Argentina.  
 --- (1991) *Hacia un nuevo orden estatal en América Latina*, FCE/FLACSO, Chile.
- Camp, Roderic A. (1996) *Reclutamiento político*, S. XXI, México.  
 --- (1990). *Los empresarios y la política en México: una visión contemporánea*, FCE, México.
- Cantú, Guillermo H. (2001) *Asalto a palacio. Las entrañas de una guerra*, Grijalbo, México.
- Cardoso, Fernando H. (1991) "Diversos caminos, distintos países" en Fernando Calderón y Mario R. Dos Santos (Coordinadores) *Hacia un nuevo Orden estatal en América Latina. Veinte Tesis sociopolíticas y un corolario*, Clacso-FCE, Chile.  
 --- (1988). "Los empresarios y el proceso de transición: el caso brasileño" en Guillermo O'Donell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (Comps.)

- Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas*. 3, Paidós, Argentina.
- (1985). "Los partidos políticos y la participación popular en un régimen de excepción" en Julio Labastida Martín del Campo (Coord.) *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*, IIS-UNAM Siglo XXI, México.
- (1971) *Ideologías de la burguesía industrial en sociedades dependientes*, S. XXI, México.
- Carpizo, Jorge (2002) *El presidencialismo mexicano*, S. XXI, México.
- Carrillo, M. Alejandro, Ernesto Soto R., y Juan Reyes del Campillo –coord.- (1995) *Neoliberalismo y transformaciones del estado contemporáneo*, UAM-X, México.
- Carrión, Jorge y Alonso Aguilar (1972) *la burguesía, la oligarquía y el estado*, Nuestro Tiempo, México.
- Casar, María Amparo (1988) "Movimiento obrero, estabilidad y democracia" en Octavio Rodríguez Araujo (coordinador) *México: estabilidad y luchas por la democracia, 1900-1992*, Cide/El Caballito, México.
- (1992) "Empresarios y Estado en el Gobierno de Miguel de la Madrid: en busca de un nuevo acuerdo" en Bazdresch, Bucay, Lustig y Loaeza (compiladores) *México, auge, crisis y ajuste*, FCE, México.
- Casar, María Amparo y Wilson Péres (1988) *El estado empresario en México: ¿agotamiento o renovación?*, S. XXI, México.
- Castaingts, Juan (1995) *Sociedad y economía en la vida cotidiana de México*, ICA, México.
- (1994) *México: economía, mito y poder*, UAM-I, México.
- Castañeda, Jorge (1999) *La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México*, Alfaguara, México.
- (1995) *Sorpresas te da la vida. México, fin de siglo*, Aguilar, México.
- Castells, Manuel (2001) "Tecnología de la información y capitalismo global" en Anthony Giddens y Will Hutton (eds.) *En el límite. La vida en el capitalismo global*, Tusquets, Barcelona.
- (2000) *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red*, S. XXI, Vol. I, México.
- (2000a) *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad*, S. XXI, Vol. II, México.
- (2000b) *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Fin de milenio*, S. XXI, Vol. III, México.
- Castells, Manuel
- (1999) *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red*, Vol. I, Siglo, XXI. México.
- Castillo Esparcia, Antonio (2005) *Los grupos de presión ante la sociedad de la comunicación*, U. de Málaga/Debates, España.
- Castoriadis, Cornelius (1988) *Los dominios del hombre: las encrucijadas del laberinto*, Gedisa, Barcelona.
- (1983) *La institución imaginaria de la sociedad 1*, Tusquets, Barcelona.
- Castro, Pedro (2002) *Soto y Gama: genio y figura*, UAM, México.
- (2000) *Ciudad Cuahtémoc, Chihuahua. Crónica de su fundación*, Conaculta/UAM-I, México.
- (1998) *Adolfo de la Huerta. La integridad como arma de la revolución*, S. XXI/UAM-I, México.

- Castro Domingo, Pedro (2005) *Cultura política, participación y relaciones de poder*, CONACYT/UAM-I, México.
- Castro, Regis De (1985). "Política social y normalización institucional en el Brasil" en Julio Labastida Martín del Campo (Coord.) *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*, IIS-UNAM, Siglo XXI, México.
- Cerruti, Mario (1986) "Producción capitalista y articulación del empresariado en Monterrey (1890-1910) en Julio Labastida (compilador) *Grupos económicos y organizaciones empresariales en México*, Alianza Editorial-UNAM, México.
- Chanlat, Jean-François (1998) *Sciences sociales et management. Plaidoyer pour une anthropologie générale*, Éditions Eska, Québec.
- Chomsky, Noam (2002) *El bien común*, S. XXI, México.  
 --- (2001) *Cómo mantener a raya a la plebe*, S. XXI, México.
- Cinta, Ricardo (1973) "Burguesía nacional y desarrollo" en *El perfil del México en 1980*, Vol. 3, S. XXI, México.
- Cisneros, Isidro (1991) "El proyecto empresarial" en Ricardo Pozas y Matilde Luna (coords.) en *Las empresas y los empresarios en el México contemporáneo*, Grijalbo, México.
- Clastres, Pierre (1996) *Investigaciones en antropología política*, Gedisa, Barcelona.
- Clifford, James (1995) *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*, Gedisa, Barcelona.
- Cohen, Abner (1979) "Antropología política: el análisis del simbolismo en las relaciones de poder" en José R. Llobera (comp.) *Antropología política*, Anagrama, Barcelona.
- Collado, María del Carmen (1996) *Empresarios y políticos, entre la restauración y la revolución 1920-1924*, INEHRM, México.
- Concheiro, Elvira (1996) *El gran acuerdo. Gobierno y empresarios en la modernización salinista*, Era, México.  
 --- (1993) "Los ganadores de la privatización manipulada", *Coyuntura*, núm. 40, septiembre, México.
- Concheiro, Elvira, J. Manuel Frago y Antonio Gutiérrez (1979) *El poder de la gran burguesía*, Cultura Popular, México.
- Cordera, Rolando (2006) "La mesa de tres patas: sobre la reforma social del Estado" en Antonella Attili (coord.) *Treinta años de cambios políticos en México*, M.A. Porrúa/UAM-I, México.  
 --- (1992) "La reforma del estado como necesidad" en Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime Tamayo -coords.- *El nuevo estado mexicano. I. Estado y economía*, Nueva Imagen, México.
- Cordera, Rolando y Tello, Carlos (1981) *México, la disputa por la nación*, S. XXI, México.
- Contreras, Ariel José (1980). *México 1940: industrialización y crisis política*, México, Siglo XXI, México.
- Coparmex (1996) *Plan estratégico*, Coparmex, México.  
 --- (1993) "¿Ha valido la pena mi participación?", *Entorno*, núm. 57, febrero, México.  
 --- Coparmex (1989) *Propuesta que la Confederación Patronal de la República Mexicana presenta para la discusión del anteproyecto de una nueva Ley Federal del Trabajo*, junio, México.  
 --- (1979) *Su origen y desarrollo. Hacia los próximos 50 años*, Coparmex, México.

- Cordero, Salvador, Rafael Santín y Ricardo Tirado (1983) *El poder empresarial en México*, Terra Nova, México.
- Córdova, Arnoldo (2006) "La reforma política y la transformación del Estado" en Antonella Attili (coord.) *Treinta años de cambios políticos en México*, M.A. Porrúa/UAM-I, México.
- (2001) "La mitología de la revolución mexicana" en Enrique Florescano (coordinador) *Mitos mexicanos*, Taurus, México.
- (1976) *Sociedad y Estado en el mundo moderno*, Grijalbo, México.
- (1973) *La ideología de la revolución mexicana*, Era-IIS/UNAM, México.
- (1972) *La formación del poder político en México*, Era, México.
- Córdoba, José (1991) "Diez lecciones de la reforma económica", *Nexos*, febrero, México.
- Coriat, Benjamín (1992) *Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa japonesa*, S. XXI, México.
- Cordero, Salvador (1983). "Concentración industrial, grupos económicos y capital financiero del capital privado nacional", en *El poder empresarial en México*, Terranova, México.
- (1982). "Estado y burguesía en México en la década de 1970" en Jorge Alonso (Coordinador) *El estado mexicano*, CIESAS-Nueva Imagen, México.
- Coseriu, Eugenio (1995) "Lenguaje y política" en Manuel Alvar (coordinador) *El lenguaje político*, FFE, Madrid.
- Crozier, Michel (1994) "Le problème de l'action collective. L'éducation du regard", en Francis Pavé (direction) *L'analyse strategique. Sa genèse, ses applications et ses problèmes actuels*, Éditions du Seuil, France.
- Crozier, Michel y Friedberg, Erhard (1977) *L'acteur et le système. Les contraintes de l'action collective*, Seuil, Paris.
- Cueva, Agustín (1990) *El desarrollo del capitalismo en América Latina*, S. XXI, México, Décimo tercera edición.
- Cremoux, Raúl (2002) *Nada como el poder. Crónicas de un testigo circunstancial*, Océano, México.
- (1999) *Una transición interminable. 21 testigos de la encrucijada*, Océano, México.
- Dagognet, François (1998) *Une nouvelle morale. Famille, travail, nation*, Institut Synthélabo, Paris.
- Dahl, Robert A. (1993) *La democracia y sus críticos*, Paidós, Barcelona.
- D'Artigues, Katia (2002) *El gabineteazo*, Grijalbo, México.
- Dayan, Daniel (1997) -compilador- *En busca del público*, Gedisa, Barcelona.
- De Fleur, M. L. y Ball-Rokeach, S. J. (1999) *Teorías de la comunicación de masas*, Paidós, México.
- De la Garza Toledo, Enrique (1993) Reestructuración productiva y respuesta sindical en México, UAM-I/IIIE-UNAM, México.
- (1989) *Un paradigma para el análisis de la clase obrera*, UAM-I, México.
- (1988) *Ascenso y crisis del estado social autoritario*, Colegio de México, México.
- (1984) *Contribución al estudio del estado social autoritario. Acumulación del capital en el Estado en México*, UAM-I, México.
- De la Peña, Guillermo (1992) "¿Una nueva cultura política?", en Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime Tamayo -coords.- *El nuevo estado mexicano. IV. Estado y sociedad*,

- Nueva Imagen, México.
- De la Peña, Sergio (1975) *La formación del capitalismo en México*, S. XXI, México.
- Derossi, Flavia (1971) *El empresario mexicano*, IIS/UNAM.
- Deutsch, K. W. (1985) *Los nervios del gobierno. Modelos de comunicación y control político*, Paidós, México.
- (1976) *Política y gobierno*, FCE, Madrid.
- Diamond, Stanley y Belasco, Bernard (1982) *De la cultura primitiva a la cultura moderna*, Anagrama, Barcelona.
- Diniz, Eli y Boschi, Renato R. (1988). "Empresarios y Constituyentes: continuidad y rupturas en el modelo de desarrollo capitalista en el Brasil" en Celso Garrido (coord.) *Empresarios y estado en América Latina*, CIDE-FFE-UNAM-UAM (A), México.
- Easton, David (1989) *Esquema para el análisis político*, Amorrortu, Argentina.
- et. al. (1982) *Enfoques sobre teoría política*, Amorrortu, Argentina.
- (1968) *Política moderna. Un estudio sobre la situación de la ciencia política*, Editorial Letras, México.
- Eco, Humberto (1980) *Tratado de semiótica*, Nueva Imagen, México.
- Echeverría, Bolívar (2001) *Definición de la cultura*, Itaca/UNAM, México.
- Elster, Jon (2001) –compilador- *La democracia deliberativa*, Gedisa, Barcelona.
- Eliás, Norbert (1994) *Teoría del símbolo. Un ensayo de antropología cultural*, Península, Barcelona.
- (1990) *La sociedad de los individuos*, Península, Barcelona.
- (1988) *Humana conditio. Consideraciones en torno a la evolución de la humanidad*, Península, Barcelona.
- (1987) *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, FCE, Madrid.
- Espinosa Iglesias, Manuel (2000) *Bancomer. Logro y destrucción de un ideal*, Planeta, México.
- Fajnzylber, Fernando y Trinidad Martínez Tarragó (1982) *Las empresas transnacionales. Expansión a nivel mundial y la proyección en la industria mexicana*, FCE, México.
- Fariás Hernández, José Antonio (1997) "La fuga de capitales en México de 1989 a 1995", *Revista Este país*, 1º. de enero de 1997, México.
- Fearon, James D. (2001) "La deliberación como discusión" en Jon Elster (compilador) *La democracia deliberativa*, Gedisa, España.
- Fernández, Claudia y Paxman, Andrew (2000) *El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa*, Grijalbo, México.
- Fernández Cristlieb, Fátima (1988) *Los medios de difusión masiva en México*, JP, México.
- (1980) "El derecho a la información y los medios de comunicación masiva" en Pablo González Casanova y Enrique Florescano (coords.) *México, hoy*, S.XXI., México.
- Fernández Santillán, José F. (2003) *El despertar de la sociedad civil. Una perspectiva histórica*, Océano, México.
- (2001) *La democracia como forma de gobierno*, IFE, México.
- Fiori, José Luis (1992). "Poder e credibilidade: o paradoxo político da reforma liberal", *Lua Nova*, Núm 25, Brasil.
- Firth, Raymond (1971) *Elementos de antropología social*, Amorrortu, Argentina.
- Florescano, Enrique (2001) *Mitos mexicanos*, Taurus, México.

- (1980) "De la memoria del poder a la historia como explicación" en Pereyra, Villoro Córdova, et., al., *Historia ¿Para qué?*, Siglo XXI, México.
- Fox, Vicente (1999) *A Los Pinos. Recuento autobiográfico y político*, Océano, México.
- Foxley, Alejandro (1988) *Experimentos neoliberales en América Latina*, FCE, México.
- Friedman, Milton y Rose (1993) *Libertad de elegir*, Planeta-Agostini, España.
- Fukuyama, Francis (1999) *La gran ruptura. La naturaleza humana y la reconstrucción del orden social*, Atlántida, Madrid.
- (1992) *La fin de l'histoire et le dernier homme*, Flammarion. Francia.
- García Alba, Pascual y Serra Puche, Jaime (1984) *Causas y efectos de la crisis económica en México*, Colmex, México.
- García Canclini, Néstor (1999) *La globalización imaginada*, Paidós, Buenos Aires.
- (1989) *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Conaculta-Grijalbo, México.
- García Cantú, Gastón (1989) *Las invasiones norteamericanas en México*, Era, México.
- Garcíadiego, Javier (1991) "El Estado moderno y la Revolución mexicana" en Javier Garcíadiego et. al. *Evolución del estado mexicano. Reestructuración 1910-1940*, El Caballito, México.
- Garza Mouriño, R. M. (1993) *El águila rumbo al sol. Crónica histórico-periodística de CANACINTRA, desde sus orígenes hasta la época actual*, Canacindra, México.
- Garretón, Manuel Antonio (1994) "El desafío democrático en América Latina", *Revista Internacional de Filosofía*, UAM-UNED, México-España.
- Garrido, Celso (1992) *La evolución del actor empresarial mexicano en los ochentas*, IIS-UNAM, México.
- -coord.- (1988) *Empresarios y estado en América Latina*, Cide-FFE-UNAM-UAM, México.
- Garrido C., Edmundo Jacobo y Enrique Quintana (1987). "Crisis y poder en México: un ensayo de interpretación", *Estudios Sociológicos*, núm. 15, sept-dic. México.
- Geertz, Clifford (2000) *Negara. El Estado-teatro en el Bali del siglo XIX*, Paidós, Barcelona.
- (1995) *La interpretación de las culturas*, Gedisa, Barcelona.
- (1994) *Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas*, Paidós, Barcelona.
- et. al. (1991) *El surgimiento de la antropología posmoderna*, Gedisa, México.
- Gellner, Ernest (1998) *Cultura, identidad y política*, Gedisa, Barcelona.
- (1997) *Antropología y política*, Gedisa, Barcelona.
- (1996) *Condiciones de la libertad*, Paidós, Barcelona.
- (1988) *Naciones y nacionalismo*, CONACULTA-Alianza Editorial, México.
- Giddens, Anthony (2000) *Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas*, Taurus, Buenos Aires.
- (1996) *Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales*, Cátedra, Madrid.
- (1994) *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*, Amorrortu, Argentina.
- (1994) *Consecuencias de la modernidad*, Alianza Editorial, Madrid.
- Guillén Romo, Héctor (1997) *La contrarrevolución neoliberal*, Era, México.
- (1984) *Orígenes de la crisis en México, 1940-1982*, Era, México.

- Gledhill, John (1994) *Power and disguises. Anthropological perspectives on politics*, Pluto Press, Colorado.
- Glucksmann, André (2004) *Occidente contra Occidente*, Taurus, México.  
 --- (1988) *La estupidez: ideologías del posmodernismo*, Península, Madrid.
- Gluckman, Max (1964) *Closed systems and open minds: The limits of Naiveté in social anthropology*, Aldine, Chicago.
- Godelier, Maurice (1998) *El enigma del Don*, Paidós, Barcelona.  
 --- (1990) *Lo ideal y lo material*, Taurus, Madrid.  
 --- (1981) *Instituciones económicas*, Anagrama, Barcelona.
- Gollás, Manuel (2003) "Breve relato de cincuenta años de política económica" en Ilán Bizber y Lorenzo Meyer (coord.) *Una historia contemporánea de México: transformaciones y permanencias*, Tomo I, Océano, México.
- Gómez Tagle, Silvia (1990). "Los votos de la transición democrática de México" en *México en el umbral del milenio*, Colmex, México.
- González Casanova, Pablo (1981) *El estado y los partidos políticos en México*, Era, México.
- González Casanova, Pablo y Florescano, Enrique (1983) *México, hoy*, S. XXI, México.
- González Casanova, Pablo y Aguilar Camín, Héctor -coords.- (1985) *México ante la crisis. 1. El contexto internacional y la crisis económica*, S. XXI, México.  
 --- (1983) *México ante la crisis. 2. El impacto social y cultural. Las alternativas*, S. XXI, México.
- González, Fernando y Alba, Carlos (1989) *Cúpulas empresariales y poderes regionales en Jalisco*, Universidad de Guadalajara, Guadalajara.
- Granados Chapa, Miguel Ángel (2000) *Fox & Co. Biografía no autorizada*, Grijalbo, México.  
 --- (1980) "El estado y los medios de comunicación" en Jorge Alonso (coordinador) *El estado mexicano*, Ciesas/Nueva Imagen, México.
- Guadarrama, Rocío (2001) *Los empresarios norteros en la sociedad y la política del México moderno. Sonora (1929-1988)*, Colmex-UAM, México.  
 --- (1986) "Los inicios de la estabilización" en Peschard, Puga, Tirado *et. al.*, *Evolución del estado mexicano. T. III. Consolidación, 1940-1983*, El Caballito, México.
- Habermas, Jürgen (1998) *Conciencia moral y acción comunicativa*, Península, Barcelona  
 --- (1996) *Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos*, Rei, México.  
 --- (1989) *Identidades nacionales y posnacionales*, Tecnos, Madrid.  
 --- (1988) *Ensayos políticos*, Península, Madrid.  
 --- (1987) *Teoría de la acción comunicativa*, Taurus, Buenos Aires.  
 --- (1986) *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Amorrortu, Argentina.
- Hall, Edward (1990) *El lenguaje silencioso*, Conaculta-Grijalbo, México.
- Hamilton, Nora (1986) "El estado y la formación de la clase capitalista en el estado posrevolucionario" en Julio Labastida (compilador) *Grupos económicos y organizaciones empresariales en México*, Alianza Editorial, México.  
 --- (1983) *México: los límites de la autonomía del estado*, Era, México.
- Harris, Marvin (2000) *Teorías sobre cultura en la era posmoderna*, Crítica, Barcelona.  
 --- (1995) *Antropología Cultural*, Alianza Editorial, Madrid.

- (1992) *Nuestra especie*, Alianza Editorial, Madrid.
- (1984) *La cultura norteamericana contemporánea. Una visión antropológica*, Alianza Editorial, Madrid.
- (1983) *El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la cultura*, S. XXI, México.
- Held, David (1997) *La democracia y el orden global*, Paidós, Barcelona.
- (1992) *Modelos de democracia*, Alianza Editorial, Madrid.
- Héller, Ágnes y Fehér, Ferenc (2000) *El péndulo de la modernidad*, Península, Barcelona.
- (1989) *Políticas de la postmodernidad. Ensayos de crítica cultural*, Península, Barcelona.
- Hernández, Rogelio (1992) "Problemas de representación en los organismos empresariales" en Cristina Puga y Ricardo Tirado (coord.) *Los empresarios mexicanos, ayer y hoy*, UNAM/Comesco/El Caballito, México.
- (1990). "La conducta empresarial en el gobierno de Miguel de la Madrid", *Foro Internacional*, núm. 120, abril-junio.
- (1988) *Empresarios, Banca y Estado. El conflicto durante el gobierno de José López Portillo, 1976-1982*, FLACSO/M. A. Porrúa, México.
- Hirschman, Albert O. (1996) *Tendencias autosubversivas*, FCE, México.
- (1994) "L'analyse du changement", en Francis Pavé (direction) *L'analyse strategique. Sa genèse, ses applications et ses problèmes actuels*, Seuil, France.
- (1990) "Opiniones obstinadas y democracia", *Breviario Político*, Núm. 6, CIDE, A. C., verano-invierno, México.
- (1986) *Interés privado y acción pública*, FCE, México.
- (1986<sup>a</sup>) *El avance de en colectividad. Experimentos populares en la América Latina*, FCE, México.
- (1978) *Las pasiones y los intereses*, FCE, México
- Huneus, Carlos (1986). "Autoritarismo, cuestión sucesoria y transición a la democracia: España, Brasil y Chile", *Opciones*, Núm. 8, enero-abril, Santiago de Chile.
- Ianni, Octavio (1997) *Teorías de la globalización*, S. XXI, México.
- Jacobo, Edmundo y Quintana, Enrique (1990) "La reestructuración del poder económico y sus condicionantes" en Arturo Anguiano (coordinador) *La modernización de México*, UAM-X, México.
- Jacobo, Luna y Tirado (1989). "Empresarios, pacto político y coyuntura actual en México" *Estudios Políticos*, núm. 1. Nueva Época, Vol. 8.
- Jarquín, Uriel y Cisneros, Isidro H. (1987). "Los empresarios, la crisis y la sucesión presidencial" en Abraham Nuncio (coord..) *La sucesión presidencial en 1988*, Grijalbo, México.
- Juárez, Leticia (1984) "El proyecto económico cardenista y la posición empresarial (1934-1938)", en *Clases dominantes y Estado en México*, UNAM, México.
- Kant, Emmanuel (1991) *Antropología*, Alianza Editorial, Madrid.
- Kaplan, Marcos (1968) *Formación del Estado Nacional en América Latina*, Amorrortu, Argentina.
- Katz, Friedrich (1982) *La guerra secreta en México. I. Europa, Estados Unidos y la revolución mexicana*, Era, México.
- Krauze, Enrique (1997) *La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996)*, Tusquets, México.
- (1992) *Textos heréticos*, Grijalbo, México.

- (1987) *Álvaro Obregón. El vértigo de la victoria*, Biografía del poder, Núm. 6, FCE, México.
- (1987a) *Francisco I. Madero. Místico de la libertad*, Biografía del poder, Núm. 2, FCE, México.
- (1987b) *Venustiano Carranza. Puente entre siglos*, Biografía del poder, Núm. 5, FCE, México.
- (1987c) *Lázaro Cárdenas. General misionero*, Biografía del poder, Núm. 8, FCE, México.
- Krotz, Esteban –comp.- (1993) *La cultura adjetivada*, UAM-I, México.
- (1993) “Antropología, elecciones y cultura política”, *Nueva Antropología*, núm. 38, octubre, México.
- (1991) “Poder, símbolos y movilizaciones: sobre algunos problemas y perspectivas de la antropología política”, *Nueva Antropología*, núm. 31, diciembre, México.
- (1984) “Cultura y análisis político”, *Nueva Antropología*, marzo, México.
- Labastida del Campo, Julio –coordinador- (1986) *Grupos económicos y organizaciones empresariales en México*, Alianza Editorial-UNAM, México.
- (1972) “Los grupos dominantes frente a las alternativas de cambio” en *El perfil de México en 1980*, Siglo XXI, México.
- Lamounier, Bolívar (1988). "Apertura a través de elecciones: ¿será Brasil un caso paradigmático", *Opciones*, Núm. 14, mayo-agosto, Santiago de Chile.
- Laplantine, François (1995) *L'anthropologie*, Payot, Paris.
- (1974) *Les trois voix de l'imaginaire*, Editions universitaires, Paris.
- Lardellier, Pascal (2003) *Théorie du lien rituel. Anthropologie et communication*, L'Harmattan, Paris.
- Leach, Edmund (1985) *Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos*, S. XXI, México.
- (1988) *Sistemas políticos de la Alta Birmania*, Anagrama, Barcelona.
- Leal, Juan Felipe (1991) “La crisis política de 1928 y el movimiento sindical” en Garciadiego, Matute *et. al.*, *Evolución del estado mexicano. T. II Reestructuración 1910-1940*, El Caballito, México.
- (1972) *La burguesía y el estado mexicano*, El Caballito, México.
- Lewellen, Ted C. (1985) *Introducción a la antropología política*, Bellaterra, España.
- Lévi-Strauss, Claude (1993) *Las estructuras elementales del parentesco*, Planeta-Agostini, España.
- (1989) *Mito y significado*, Alianza Editorial, México.
- (1979) *Antropología estructural. Mito, sociedad y humanidades*, S. XXI, México.
- Loaeza, Soledad (2001) “El mito de la derecha en México” en Enrique Florescano (coordinador) *Mitos mexicanos*, Taurus, México.
- (1999) *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta*, FCE, México.
- (1992) “Delamadridismo: la segunda modernización mexicana” en Bazdresch, Bucay, Lustig y Loaeza (Compliadores) *México, auge, crisis y ajuste*, FCE, México.
- López Obrador, Andrés Manuel (1999) *Fobrapoa: expediente abierto*, Grijalbo, México.
- Loyola, Rafael –coordinador- (1990) *Entre la Guerra y la estabilidad política. El México de los 40*, Conaculta-Grijalbo, México.

- Lugan, Jean-Claude (1995) *Elementos para el análisis de los sistemas sociales*, FCE, México.
- Luhmann, Niklas (1998) *Complejidad y modernidad*, Trotta, Madrid.
- (1995) *Poder*, Anthropos, Barcelona.
- (1992) *Sociología del riesgo*, UIA/Universidad de Guadalajara, México.
- (1991) *Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general*, UIA/Alianza Editorial, México.
- (1991a) *Complejidad y significado*, revista Breviario Político, núm. 7-8, primavera, México.
- Luna, Matilde (1992) *Los empresarios y el cambio político*, Era, México.
- (1992a) "La estructura de representación empresarial en México. La década de los noventa y los cambios en las estrategias corporativas" en Cristina Puga y Ricardo Tirado (coord.) *Los empresarios mexicanos, ayer y hoy*, UNAM/Comesco/El Caballito, México.
- (1990) "Modernización y representación empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial en los setenta y en los albores de los noventa" en Arturo Anguiano (coordinador) *La modernización de México*, UAM-X, México.
- (1990a) "Relaciones Estado-IP en los 90: ¿Hacia la consolidación?", *Meridiano 99*, Vol. II, Num. 19.
- Luna, Matilde y De Gortari, Rebeca (1997) "Las asociaciones empresariales ante la tecnología", *El Cotidiano*, núm. 81, UAM-A, México.
- Luna, M., Tirado, R., y Valdés, F. (1991) "Los empresarios y la política en México, 1982-1986" en Ricardo Pozas y Matilde Luna (coords.) en *Las empresas y los empresarios en el México contemporáneo*, Grijalbo, México.
- Maira L., Curzio L, et.,al. (2004) *Democracia y medios de comunicación*, IFE, México.
- Mackey, Edgar (1991) "El concepto de productividad", *Boletín Técnico de Coparmex*, núm. 5, febrero.
- Mc Quail, Denis (2000) *Introducción a la teoría de la comunicación de masas*, Paidós, Barcelona.
- (1998) *La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público*, Amorrortu, Buenos Aires.
- Martín-Barbero, Jesús (1987) *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
- Martínez, José (2002) *Carlos Slim. Retrato inédito*, Océano, México.
- Martínez Assad, Carlos –coord.- (1992) *La sucesión presidencial en México, 1928-1988*, Nueva Imagen, México.
- Martínez V., Griselda (1995) "La micro, pequeña y mediana empresa ante la crisis económica en México", *El Cotidiano*, núm. 72, septiembre, UAM-A, México.
- Martins, Luciano (1988). "La liberación del gobierno autoritario en Brasil" en Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (comp) *Transiciones desde un Gobierno autoritario. América Latina*, Paidós, Argentina.
- Mayer, Adrian (1968) "The significance of quasi-groups in the study of complex societies" en Michael Banton (ed.) *The social anthropology of complex societies*, Tavistock, Londres.
- Melgoza, Javier y Rafael Montesinos (2002) *Representatividad, democracia y legitimidad en el Sindicato Mexicano de Electricistas*, UAM/AFL-CIO/P y V, México.

- Méndez B., Luis H. (2005) *Ritos de paso truncos: el territorio de lo simbólico maquilador fronterizo*, Eón/UAM-A, México.
- Méndez , Luis y José O. Quiroz (1994) *Modernización estatal y respuesta obrera: historia de una derrota*, UAM-A, México.
- Mentz, B. Von, V. Radkau, D. Spencer y R. Pérez Montfort (1988) *Los empresarios alemanes, el tercer reich y la oposición de derecha a Cárdenas*, Tomo I, Tomo II, Casa Chata, México.
- Meyer, Jean (1997) *La Cristiada*, Clío, México.
- Meyer, J., Krauze, E. y Reyes, C. (1977) *Historia de la revolución mexicana, 1924-1928*. Tomo 11, Colmex, México.
- Meyer, Lorenzo (2003) “La visión general” en Ilán Bizber y Lorenzo Meyer (coord.) *Una historia contemporánea de México: transformaciones y permanencias*, Tomo I, Océano, México.
- (2001) “El mito del PRI” en Enrique Florescano (coordinador) *Mitos mexicanos*, Taurus, México.
- (1995) *Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano*, Océano, México.
- Mier, Raymundo (1990) “Las condiciones culturales de la modernización y los medios de comunicación masiva” en Arturo Anguiano (coordinador) *La modernización de México*, UAM-X, México.
- Millán, René (1988) *Los empresarios ante el estado y la sociedad*, S.XXI, México.
- Millon, Charles (1998) *La paix civile*, Editions Odile Jacob, Paris.
- Mills, C. Wright (1987) *La elite del poder*, FCE, México.
- Montesinos, Rafael (2006) “Propuesta teórica para el análisis de la comunicación política” en Teresa Páramo (coordinadora) *Sociedad y Comunicación. Una mirada al siglo XXI*, UAM/PyV, México.
- (2005) “Los empresarios y la política: los dilemas del poder” en Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso Sánchez (coord.) *El Estado mexicano: herencias y cambios. III Sociedad civil y diversidad*, Ciesas/M. A. Porrúa/Cámara de Diputados, México.
- (2003) “Fox: el costo de la democracia”, Revista *El Cotidiano*, núm. 119, mayo-junio, UAM-A, México.
- (1999) “Un modelo para armar. La política desde la teoría de los sistemas”, Revista *Estudios Sociológicos*, núm. 49, enero-abril, Colegio de México, México.
- (1997) “Empresarios, sistema político y corrupción en México”, *El Cotidiano*, núm. 81, enero-febrero, UAM-A, México.
- (1996) “El poder empresarial y la transición en México” en Héctor Tejera Gaona (coordinador) *Antropología política. Enfoques Contemporáneos*, INAH-PyV, México.
- (1995) “Mitos y miserias de la cultura empresarial”, Revista *El Cotidiano*, núm. 73, UAM-A, Noviembre.
- (1995) “México-Estados Unidos: Las asimetrías empresariales”, Revista *El Cotidiano*, núm. 69, UAM-A, Mayo-Junio.
- (1993) “El proyecto laboral de los empresarios”, Revista *Memoria*, núm. 56, Julio.
- (1992) “El discurso empresarial en 1985” en Cristina Puga y Ricardo Tirado (coord.) *Los empresarios mexicanos, ayer y hoy*, UNAM/UAM/COMECSO/El Caballito, México.

- (1992) "Empresarios en Brasil y México. Un ensayo sobre el neoliberalismo en América Latina", Revista *Sociológica*, núm. 19, UAM-A, Mayo-Agosto.
- (1992) "Empresarios en el nuevo orden estatal", *El Cotidiano*, núm. 50, septiembre-octubre, UAM-A, México.
- (1991) "La cultura política del empresariado en México", Revista *Sociológica*, núm. 17, Septiembre-Diciembre, UAM-A, México.
- Montesinos, Rafael y Griselda Martínez (2000) "Empresarios, neoliberalismo y las miserias de la transición", Revista *El Cotidiano*, núm. 100, marzo-abril, UAM-A, México.
- (1998) "Límites y alcances de la cultura empresarial en la dimensión laboral" en Rocío Guadarrama (coord.) *Cultura y trabajo. Estereotipos, prácticas y representaciones*, JP/UAM/FES, México.
- Monsiváis, Carlos (1995) *los rituales del caos*, Era, México.
- (1994) *Identidad nacional. Lo sagrado y lo profano*, en Bartra, Piñon, Del Val, et., al., *México: Identidad y cultura nacional*, UAM-X, México.
- (1982) "Nacionalismo. La democratización bárbara" en Arturo Warman, Guillermo Bonfil Batalla, Enrique Florescano, et., al., *El desafío mexicano*, Océano/Nexos, México.
- (1979) "La ofensiva ideológica de la derecha" en Pablo González Casanova y Enrique Florescano (coords.) *México, hoy*, S. XXI, México.
- (1970) *Días de guardar*, Era, México.
- Moscovici, Serge (1985) *La era de las multitudes. Un tratado histórico de psicología de las masas*, FCE, México.
- Muñoz, Blanca (2005) *Modelos culturales. Teoría sociopolítica de la cultura*, Anthropos/UAM-I, Barcelona
- Muñoz, Víctor M. (1989). "Los empresarios y la sucesión presidencial de 1988: la posición frente al PRI", *Estudios Políticos*, núm. 1, Nueva Época, Vol.8.
- Murdock, George P. (1987) *Cultura y sociedad*, FCE, México.
- Nanti, Enrique (1998) *El Maquío Clouthier*, Planeta, México.
- Nuncio, Abraham (1987) "Advertencia, opinión y noticia" en Abraham Nuncio –coordinador- *La sucesión presidencial en 1988*, Grijalbo, México.
- (1986) *El PAN. Alternativa de poder o instrumento de la oligarquía empresarial*, Nueva Imagen, México.
- O'Donnell, G., Schmitter, P. C., Whitehead, L. (1988) –compiladores- *Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina 2*, Paidós, Argentina.
- (1988a) *Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas 3*, Paidós, Argentina.
- Ortega, Silvia (1986) "La CAMCO-México: historia y evolución" en Julio Labastida (compilador) *Grupos económicos y organizaciones empresariales en México*, Alianza Editorial, México.
- Ortiz, Francisco (2002) *Comprender a la gente. Por qué ganó Fox*, Aguilar, México.
- Ortiz Rivera, Alicia (2005) *Empresarios y acción política-partidista en el cambio democrático: México 1982-2000*, Tesis Doctoral, FCPyS/UNAM, México.
- (1997) *Juan Sánchez Navarro. Biografía de un testigo del México del siglo XX*, Grijalbo, México.
- Panbianco, Angelo (1988) "Comunicación política" en Norberto Bobbio y Incola Matteucci –directores- *Diccionario de política*, S. XXI, México.
- Parsons, Talcott (1988) *El sistema social*, Alianza Universidad, Madrid.

- (1982) *El aspecto político de la estructura y el proceso sociales*,  
 --- en David Easton (compilador) *Enfoques sobre teoría política*, Amorrortu,  
 Argentina.
- Pasquino, Gianfranco (1981) "Corrupción" en Norberto Bobbio y Nicola Matteucci  
 (directores) *Diccionario de Política*, S. XXI, México.
- Pasquino, Gianfranco, A. Panebianco, et. al. (1991) *Manual de ciencia política*, Alianza  
 Universidad, España.
- Paz, Octavio (1990) *Pequeña crónica de grandes días*, FCE, México.  
 --- (1981) *El laberinto de la soledad. Posdata. Vuelta a El laberinto de la soledad*,  
 FCE, México.  
 --- (1979) *El ogro filantrópico*, Joaquín Mortiz, México.
- Pereyra, Carlos (1990) *Sobre la democracia*, Cal y Arena, México.
- Pérez Rayón, Nora; Carrillo, Alejandro; De la Torre, Virginia y Loyo, Martha, (1991) "La  
 derecha en México (1982-1990). Continuidades y rupturas", *Sociológica*, núm. 15,  
 enero-abril.
- Peschard, J., Puga, C., y Tirado, R. (1986) "De Ávila Camacho a Miguel Alemán" en et.,  
 al., *Evolución del estado mexicano. T. III. Consolidación, 1940-1983*, El Caballito,  
 México.
- Plattner, Stuart (1991) *Antropología económica*, Conaculta-Alianza Editorial, México.
- Poulantzas, Nicos (1984) *Poder Político y clases sociales en el estado capitalista*, S. XXI,  
 México.
- Poper, Karl (1994) "la opinión pública y los principios liberales", en *En busca de un  
 mundo mejor*, Paidós, Barcelona.
- Pozas, Ricardo y Luna Matilde –coords.- (1989) *Las empresas y los empresarios en el  
 México contemporáneo*, Grijalbo, México.
- Przeworski, Adam (2001) "La deliberación como discusión" en Jon Elster (compilador) *La  
 democracia deliberativa*, Gedisa, España.  
 --- (1988) "Algunos problemas en el estudio de la transición a la democracia", en  
 Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (compiladores)  
*Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas*, 3.  
 Argentina, Paidós, Argentina.
- Puga, Cristina (2004) *Los empresarios organizados y el Tratado de Libre Comercio de  
 América del Norte*, FCPyS-UNAM/M. A. Porrúa, México.  
 --- (1991) "La lucha política en México. El caso de los industriales, 1982-1985" en  
 Ricardo Pozas y Matilde Luna (coords.) en *Las empresas y los empresarios en el  
 México contemporáneo*, Grijalbo, México.  
 --- (1990) "Nacionalismo y pensamiento empresarial" en Arturo Anguiano  
 (coordinador) *La modernización de México*, UAM-X, México.
- Puga, Cristina y Tirado, Ricardo –coords.- (1992) *Los empresarios mexicanos, ayer y hoy*,  
 Caballito-UNAM, México.
- Quijano, José Manuel (1983) "La banca nacionalizada: antecedentes y consecuencias" en  
 José Manuel Quijano (coordinador) *La banca. Pasado y presente: problemas  
 financieros mexicanos*, CIDE, México.  
 --- (1981) *México: Estado y banca privada*, CIDE, México.
- Ramírez, Carlos (1992). "El conflicto por la democracia", *Topodrilo*, núm. 22, enero  
 -febrero, México.
- Ramírez Rancaño, Mario (1986) "El primer congreso de industriales y la constitución

- política" en Julio Labastida (compilador) *Grupos económicos y organizaciones empresariales en México*, Alianza Editorial-UNAM, México, 1986.
- (1982) "Los políticos empresarios" en *Revolucionarios fueron todos*, SEP/80-FCE, México, 1982
- Rey Romay, Benito (1984). *La ofensiva empresarial contra la intervención del estado*, Siglo XXI, México.
- Ricci, Pio E. Y Zani, Bruna (1990) *La comunicación como proceso social*, CONACULTA-Grijalbo, México.
- Ricoeur, Paul (1994) *Ideología y utopía*, Gedisa, Barcelona.
- Rivera Ríos, Miguel A. (1986) *Crisis y organización del capitalismo mexicano, 1960/1985*, Era, México.
- Rivière, Claude (2005) *Anthropologie politique*, Armand Colin, Paris.
- (1988) *Les liturgies politiques*, PUF, Paris.
- Rodríguez Araujo, Octavio (1987) *La reforma política y los partidos en México*, S. XXI, México.
- (1988) –coord.- *México: estabilidad y luchas por la democracia*, Cide-El Caballito, México.
- Romero, Miguel Angel y Méndez, Luis (1990) "La reestructuración de la industria paraestatal" en Rosa Albina Garabito y Augusto Bolívar (coordinadores) *México en la década de los ochenta. La modernización en cifras*, UAM-A.
- Rosaldo, Renato (1989) *Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social*, Conaculta-Grijalbo, México.
- Rossi, Ino y O'Higgins, Edward (1981) *Teorías de la cultura y métodos antropológicos*, Anagrama, Barcelona.
- Rousseau, Isabelle (1995) *Modernidad con pies de barro, 1988-1994*, Misceláneas, México.
- Rubio, Luis (1992) "Las dificultades de un sexenio" en Bazdresch, Bucay, Lustig y Loeza (Compiadores) *México, auge, crisis y ajuste*, FCE, México.
- Sahlins, Marshall (1997) *Cultura y razón práctica. Contra el utilitarismo en la teoría antropológica*, Gedisa, Barcelona.
- (1979) "hombre pobre, hombre rico, gran hombre, jefe: tipos políticos de Melanesia y Polinesia" en J. R Llobera (comp.) *Antropología política*, Anagrama, Barcelona.
- Saldívar, Américo (1992) "El México de Carlos Salinas", Suplemento Política, 2 de julio de 1992.
- (1989) *Fin de Siglo*, en Enrique Semo –Coord.- *México un pueblo en la historia. Tomo 7*, S. XXI, México.
- (1980) *Ideología y política del estado mexicano (1970-1976)*, Siglo XXI, México.
- Salinas, Carlos (1990). "Reformando al Estado", *Nexos*, Núm. 148, abril.
- Scherer García, Julio (1986) *Los presidentes*, Grijalbo, México.
- Schmidt, Samuel (1997) *Amenaza y oportunidad. Los retos de la democracia mexicana*, Aguilar, México.
- Schwanitz, Dietrich (2005) *La cultura. Todo lo que hay que saber*, Taurus, México.
- Sánchez Baylón, Tomás (1991) "La flexibilidad de las normas y los vicios de la cultura del trabajo", *Boletín Técnico de Coparmex*, núm. 19, junio, México.
- Sartori, Giovanni (1997) *Homo videns. La sociedad teledirigida*, Taurus, Madrid.

- Semo, Enrique (1988) *Entre crisis te veas*, Nueva Imagen, México.
- –Coord.- (1989) *México un pueblo en la historia*, Alianza Editorial, México.
- Sonntag, Heinz R. (1988) *Duda/certeza/crisis. La evolución de las ciencias sociales de América Latina*, Unesco-Nueva Sociedad, Venezuela.
- Story, Dale (1990) *Industria, estado y política en México. Los empresarios y el poder*, Conaculta-Grijalbo, México.
- Swatz, M., Turner, V., Tuden, A. (1966) –éds.- *Political anthropology*, Aldine, Chicago.
- Tamames, Ramón (1991) *Un nuevo orden mundial*, Espasa, Madrid.
- Tejera Gaona, Héctor (2003) “No se olvide de nosotros cuando esté allá arriba”. *Cultura, ciudadanos y campañas políticas en la ciudad de México*, M.A. Porrúa/UAM-I/UIA México.
- (1996) –coordinador-, *Antropología política. Enfoques contemporáneos*, INAH -PyV, México.
- Tirado, Ricardo (1997) “El futuro del corporativismo empresarial”, *El Cotidiano*, UAM-A, núm. 81, enero-febrero, México.
- (1994) “La visión del cambio de los grandes empresarios” en Ricardo Tirado (coordinador) *Los empresarios ante la globalización*, IIL-IIS/UNAM, México.
- (1990) “La Alianza con los empresarios” en Rafael Loyola (coordinador) *Entre la guerra y la estabilidad política. El México de los 40*, Conaculta-Grijalbo, México.
- Tirado, Ricardo (1990) “Los empresarios y la política. Presente y perspectivas”, *El Cotidiano*, núm. 35, UAM-A, México.
- (1986) “Semblanza de las organizaciones empresariales mexicanas” en Julio Labastida (compilador) *Grupos económicos y organizaciones empresariales en México*, Alianza Editorial, México.
- Tirado, Ricardo y Luna, Matilde (1992) “El estado y los empresarios. De la activación al repliegue político relativo” en Jorge Alonso, Jorge, Alberto Aziz y Jaime Tamayo (coords.) *El nuevo estado mexicano. III. Estado, actores y movimientos sociales*, Nueva Imagen, México.
- Thurrow, Lester (1992) *La guerra del siglo XXI. La batalla que se avecina entre Japón, Europa y Estados Unidos*, Vergara, Argentina.
- Thompson, John B. (1998) *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*, UAM-I, México.
- Touraine, Alain (1999) “La communication interculturelle” en *Comment sortir du libéralisme?*, Fayard, Paris.
- (1998) *Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia*, FCE, México.
- (1997) *¿Podremos vivir juntos?*, FCE, México.
- (1988) *La parole et le sang*, Odile Jacob, Paris.
- (1994) *Crítica a la modernidad*, FCE, Argentina.
- (1994a) *¿Qué es la democracia?*, FCE, México.
- Trejo Delarbre, Raúl (2001) “Cómo deslindar la responsabilidad de los medios de comunicación en los procesos electorales” en Yolanda Meyenberg (coordinadora) *El dos de julio: reflexiones posteriores*, FLACSO/IIS-UNAM/UAM-I, México.
- Turner, Victor (1988) *El proceso ritual: estructura y antiestructura*, Taurus, Madrid.
- (1980) *La selva de los símbolos*, S. XXI, España.
- (1974) *Dramas, fields, and metaphors. Symbolic action in human society*,

- Cornell University Press, EUA.
- Valdés, Francisco (1997) *Autonomía y legitimidad. Los empresarios, la política y el estado en México*, siglo XXI-UNAM, México.
- (1990) "La acción política empresarial y la transición estatal en México" en Arturo Anguiano (coordinador) *La modernización de México*, UAM-X, México.
- (1988) "Empresarios, estabilidad y democracia en México: 1880-1992. Una ensayo de interpretación" en Octavio Rodríguez Araujo (coordinador) *México: estabilidad y luchas por la democracia, 1900-1982*, El Caballito/CIDE, México, pp. 185.
- Valenzuela, José (1995) –coord.- *México: ¿fin de un régimen?*, UAM-I, México.
- (1994) *El mundo de hoy. Mercado, razón y utopía*, UAM-I/Anthropos, Colombia.
- (1986) *El capitalismo mexicano en los ochenta*, Era, México.
- (1984) *La industria mexicana: tendencias y problemas*, UAM-I, México.
- Van Dijk, Teun A. (2001) *El discurso como interacción social*, Gedisa, Barcelona.
- Varela, Roberto (2005) *Cultura y Poder. Una visión antropológica para el análisis de la cultura política*, Anthropos-UAM-I, Barcelona.
- (1984) *Expansión de sistemas y relaciones de poder*, UAM-I, México.
- et. al. (1994) *De lo local a lo global. Perspectivas desde la antropología*, UAM-I, México.
- (1993) *El concepto de cultura política en la antropología social mexicana contemporánea*, Documento de trabajo, UAM-I, México.
- Velasco, Sebastiao C. (1988). "Doce años después: el antiestatismo en el discurso del empresariado brasileño" en Celso Garrido (coord.). *Empresarios y estado en América Latina*, CIDE-FFE- UAM-UAM-(A), México.
- Vernon, Raymond (1992) –compilador- *La promesa de la privatización*, FCE, México.
- Villa, Manuel (1990) "Cambios en las relaciones sociedad-Estado y sus tendencias futuras", *México en el umbral del milenio*, Colmex, México.
- Villarreal, René (1988) *Mitos y realidades de la empresa pública ¿racionalización o privatización?*, Diana, México.
- (1986) *La contrarrevolución monetarista. Teoría, política económica e ideología del neoliberalismo*, FCE, México.
- Villoro, Luis (1985) *El concepto de ideología y otros ensayos*, FCE, México.
- Warman, Arturo (1980) "El problema del campo" en Pablo González Casanova y Enrique Florescano (coord.) *México, hoy*, Siglo XXI, México.
- Wallerstein, Emmanuel (2001) *Conocer el mundo , saber el mundo. El fin de lo aprendido*, S.XXI/UNAM, México
- (1996) *Después del liberalismo*, S. XXI, México.
- (1995) "¿El fin de qué modernidad?", *Sociológica*, núm. 27, enero-abril, UAM-A.
- Weber, Max (1994) *Sobre la teoría de las ciencias sociales*, Planeta-Agostini, España.
- (1984) *Economía y sociedad*, FCE, México.
- (1986) *El político y el científico*, Alianza Editorial, Madrid.
- (1982) *Ensayos sobre metodología sociológica*, Amorrortu, Argentina.
- (1979) *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Premià, México.
- Winkin, Yves (2001) *Anthropologie de la communication*, Éditions du Seuil, Paris.
- Woldenberg, José (2006) "El cambio electoral. Casi 30 años" en Antonella Attili (coord.) *Treinta años de cambios políticos en México*, M. A. Porrúa/UAM-I, México.

- Wolf, Eric R. *Et. Al.* (1990) *Antropología social de las sociedades complejas*, Alianza Editorial, Madrid.
- Wolton, Dominique (2005) *Il faut sauver la communication*, Flammarion, Paris.
- (1999) *Penser la communication*, Flammarion, Paris.
- (1997) "La comunicación política: construcción de un modelo" en *El nuevo espacio público*, Gedisa, Barcelona.
- (1997a) "Los medios: eslabón débil de la comunicación política" en *El nuevo espacio público*, Gedisa, Barcelona.
- Zaid, Gabriel (1995) *Hacen falta empresarios creadores de empresarios*, Océano, México.
- Zárate, Alfonso (1995) *Los usos del poder*, Raya en el Agua, México.
- Zemelman, Hugo. (1990) "La cultura y el poder" en González Casanova (coord.) *América latina, Hoy*, S.XXI. México.
- (1989) *De la historia a la política. La experiencia de América Latina*, S. XXI, México.
- Zermeño, Sergio (1978) *México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68*, S. XXI, México.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
IZTAPALAPA**

**POSGRADO EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS**

Tesis Doctoral:

**EL DISCURSO POLÍTICO DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES.  
UNA INTERPRETACIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA TRANSICIÓN.**

Candidato:

***Rafael Montesinos Carrera***

Director:

**Dr. Carlos Alba**



Lectores:

**Dr. Luis Reygadas**

**Dr. Pablo Castro Domínguez**

México, D.F., 21 de marzo de 2007